**PODER LEGISLATIVO. SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SESIÓN ORDINARIA. PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO PERIODO. PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZALÉZ SÁNCHEZ. 23 DE JUNIO DE 2022. [1]**

* Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
* Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada 16 de junio del año en curso.
* **Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas.**
* **Protesta de la ciudadana Brenda Paulina Hernández González como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y de la ciudadana Ma de Lourdes López Ramírez, como titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.**
* **Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.**
* **Presentación de la iniciativa de Ley para Fomentar el Acceso al Financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado de Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.**
* **Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar la fracción XXI al artículo 28 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.**
* **Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, por la que se reforma el último párrafo y se adiciona la fracción XI recorriéndose las subsecuentes al artículo 124 y se adiciona el inciso o, a la fracción V del artículo 76, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.**
* **Presentación de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, suscrita por la diputada Irma Leticia González Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.**
* **Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.**
* **Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia a efecto de exhortar al Congreso de la Unión para que en los términos del artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se expida la legislación única en materia procesal civil y familiar y, en su caso, aprobación de la misma.**
* **Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de exhortar a los ayuntamientos de Manuel Doblado, Comonfort, Cortazar, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, a efecto, de que expidan su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial y, en su caso, aprobación de la misma.**
* **Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de exhortar a los ayuntamientos de Atarjea, Ocampo, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Xichú y Villagrán, para que elijan a su cronista municipal con las formalidades establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato y, en su caso, aprobación de la misma.**
* **Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulada por la diputada Yulma Rocha Aguilar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el que se efectúa un respetuoso exhorto al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, para que, en función de lo que enuncia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, incluya a GTO Leasing Services S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R Empresa Equiparada de Participación Estatal Mayoritaria, en el Padrón de Sujetos Obligados para efectos de cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y, en su caso, aprobación de la misma.**
* **Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que implemente las estrategias necesarias y establezca las políticas públicas sociales y de salud, que atiendan de manera urgente y prioritaria a la población guanajuatense que tenga alguna adicción a drogas ilícitas y, en su caso, aprobación de la misma.**
* **Presentación de la propuesta formulada por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la modificación de la integración de la Comisión para la Igualdad de Género y, en su caso, aprobación de la misma.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Fomento Agropecuario relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor verifique los instrumentos de medición que sirven de base en transacciones comerciales del sector agroalimentario en el Estado de Guanajuato y se realicen verificaciones rigurosas en los centros de acopio durante el ciclo agrícola otoño-invierno, una vez lo cual informe a esta soberanía los resultados encontrados.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de reformar el artículo 30 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y adicionar una fracción VI al artículo 11, recorriéndose la subsecuente, dos párrafos al artículo 15 y una fracción V al artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, *en la parte correspondiente al primer ordenamiento,* ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.**

**Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Fiscal General de Guanajuato Carlos Zamarripa para que la Fiscalía a su cargo obre bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente los datos del mapa que aparecen en su página oficial.**

* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a los ayuntamientos que faltan de discutir y, en su caso, aprobar las reformas y adiciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, contenidas en el proyecto de decreto de fecha 13 de septiembre de 2021 que ya les ha sido notificado con anterioridad, para que a la brevedad lleven a cabo el proceso de discusión.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, *en la parte correspondiente al primero de los ordenamientos.***
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas, la primera formulada por el ayuntamiento de León, Gto, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en lo que corresponde al primer ordenamiento y, la segunda suscrita por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de reformar el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2022.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar el artículo 139 del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a 13 proyectos de inversión pública productiva.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el ciudadano Javier Pérez Salazar, para que lleve a cabo una auditoría específica de desempeño que evalúe las políticas públicas de desarrollo social y humano llevadas a cabo por el Gobierno del Estado.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato informe sobre presuntas irregularidades y violación a las Reglas de Operación del Programa Vale Grandeza – Compra Local para el ejercicio fiscal de 2021 y hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado para que investigue y audite la falta de información de beneficiarios de diversos municipios en el Padrón Estatal de Beneficiarios de dicho Programa.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la realización de una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a dos propuestas de puntos de acuerdo formuladas, la primera, por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y la segunda, por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, ambas a efecto de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato lleve a cabo una auditoría integral a la administración pública municipal de León, Gto., la primera, por el periodo comprendido de octubre de 2018 a octubre de 2021; y la segunda, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Guanajuato, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y concomitante a 2022.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Guanajuato, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y concomitante a 2022.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de San Miguel de Allende, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la totalidad de los recursos ejercidos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que incorpore al Programa General de Fiscalización 2022 la evaluación a las intervenciones públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres en la cual el sujeto de fiscalización será el Poder Ejecutivo del Estado y la materia los proyectos *Q3189 Acciones para reducir las manifestaciones de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres y Q3128 Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia*.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por el ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., a efecto de que se lleve a cabo una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021 de dicho Municipio.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Silao, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; y realice las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría del municipio de Silao inició proceso alguno contra quien resultara responsable por las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Cortazar, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; y realice las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría Municipal inició algún proceso derivado de las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Cortazar, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; y realice las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría Municipal inició algún proceso derivado de las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de instruir al Auditor Superior del Estado a incluir en el Programa General de Fiscalización del año 2022, la realización de una auditoría específica al municipio de San Miguel de Allende, Gto., a la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento puro con las empresas *Bercale Services, S.A. de C. V.,* y *Lumo Financiera del Centro, S..A. de C.V., número SSP-001-07-2019 y su modificatorio.***
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de Guanajuato para que realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales de 2019 y, en su caso, subsiguientes; y la segunda, a fin de revisar que los recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021, se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por el ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., a efecto de que se ordene una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por el ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., a efecto de que se ordene una auditoría a la administración municipal 2018-2021.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Estado de Guanajuato formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al segundo de los ordenamientos.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al segundo de los ordenamientos.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el primer párrafo del artículo 62 y adicionar un cuarto párrafo al artículo 61 ter 1 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y derogar la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a dos iniciativas formuladas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice, previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación mediante la figura de donación de una fracción de un bien inmueble en favor del municipio de Cortazar, Gto., para destinarlo a la Casa de la Cultura.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice previa desafectación del dominio público del Estado la enajenación de tres bienes inmuebles de propiedad estatal en favor de la persona moral denominada *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V*.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.**
* **Asuntos generales.**

**PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**(Se instruye a la Secretaria dar lectura a la orden del día)**

* LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

- La Secretaria.- Orden del día de este 23 de junio del 2022.

**«SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO PERIODO. 23 DE JUNIO DE 2022.**

**-Orden del día-**

I.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. II.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada 16 de junio del año en curso. III.- Dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibidas. IV.- Protesta de la ciudadana Brenda Paulina Hernández González como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y de la ciudadana Ma de Lourdes López Ramírez, como titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. V.- Presentación de la iniciativa formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. VI.- Presentación de la iniciativa de Ley para Fomentar el Acceso al Financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado de Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. VII.- Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar la fracción XXI al artículo 28 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, formulada por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. VIII.- Presentación de la iniciativa suscrita por la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, por la que se reforma el último párrafo y se adiciona la fracción XI recorriéndose las subsecuentes al artículo 124 y se adiciona el inciso o, a la fracción V del artículo 76, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. IX.- Presentación de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, suscrita por la diputada Irma Leticia González Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. X. Presentación de la iniciativa a efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. XI.- Presentación de la iniciativa suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, por la que se adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. XII.- Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución suscrita por las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia a efecto de exhortar al Congreso de la Unión para que en los términos del artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se expida la legislación única en materia procesal civil y familiar y, en su caso, aprobación de la misma. XIII. Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de exhortar a los ayuntamientos de Manuel Doblado, Comonfort, Cortazar, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, a efecto, de que expidan su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial y, en su caso, aprobación de la misma. XIV.- Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de exhortar a los ayuntamientos de Atarjea, Ocampo, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Xichú y Villagrán, para que elijan a su cronista municipal con las formalidades establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato y, en su caso, aprobación de la misma. XV.- Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulada por la diputada Yulma Rocha Aguilar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el que se efectúa un respetuoso exhorto al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, para que, en función de lo que enuncia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, incluya a GTO Leasing Services S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R Empresa Equiparada de Participación Estatal Mayoritaria, en el Padrón de Sujetos Obligados para efectos de cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y, en su caso, aprobación de la misma. XVI.- Presentación de la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que implemente las estrategias necesarias y establezca las políticas públicas sociales y de salud, que atiendan de manera urgente y prioritaria a la población guanajuatense que tenga alguna adicción a drogas ilícitas y, en su caso, aprobación de la misma. XVII.- Presentación de la propuesta formulada por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la modificación de la integración de la Comisión para la Igualdad de Género y, en su caso, aprobación de la misma. XVIII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Fomento Agropecuario relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor verifique los instrumentos de medición que sirven de base en transacciones comerciales del sector agroalimentario en el Estado de Guanajuato y se realicen verificaciones rigurosas en los centros de acopio durante el ciclo agrícola otoño-invierno, una vez lo cual informe a esta soberanía los resultados encontrados. XIX.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de reformar el artículo 30 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y adicionar una fracción VI al artículo 11, recorriéndose la subsecuente, dos párrafos al artículo 15 y una fracción V al artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, *en la parte correspondiente al primer ordenamiento,* ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. XX. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Fiscal General de Guanajuato Carlos Zamarripa para que la Fiscalía a su cargo obre bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente los datos del mapa que aparecen en su página oficial. XXI.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a los ayuntamientos que faltan de discutir y, en su caso, aprobar las reformas y adiciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, contenidas en el proyecto de decreto de fecha 13 de septiembre de 2021 que ya les ha sido notificado con anterioridad, para que a la brevedad lleven a cabo el proceso de discusión. XXII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. XXIII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. XXIV.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, *en la parte correspondiente al primero de los ordenamientos.* XXV.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas, la primera formulada por el ayuntamiento de León, Gto, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en lo que corresponde al primer ordenamiento y, la segunda suscrita por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. XXVI.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de reformar el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2022. XXVII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar el artículo 139 del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. XXVIII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a 13 proyectos de inversión pública productiva. XXIX.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el ciudadano Javier Pérez Salazar, para que lleve a cabo una auditoría específica de desempeño que evalúe las políticas públicas de desarrollo social y humano llevadas a cabo por el Gobierno del Estado. XXX.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato informe sobre presuntas irregularidades y violación a las Reglas de Operación del Programa Vale Grandeza – Compra Local para el ejercicio fiscal de 2021 y hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado para que investigue y audite la falta de información de beneficiarios de diversos municipios en el Padrón Estatal de Beneficiarios de dicho Programa. XXXI.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la realización de una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020. XXXII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a dos propuestas de puntos de acuerdo formuladas, la primera, por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y la segunda, por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, ambas a efecto de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato lleve a cabo una auditoría integral a la administración pública municipal de León, Gto., la primera, por el periodo comprendido de octubre de 2018 a octubre de 2021; y la segunda, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021. XXXIII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Guanajuato, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y concomitante a 2022. XXXIV.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de San Miguel de Allende, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021. XXXV.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la totalidad de los recursos ejercidos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022. XXXVI.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que incorpore al Programa General de Fiscalización 2022 la evaluación a las intervenciones públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres en la cual el sujeto de fiscalización será el Poder Ejecutivo del Estado y la materia los proyectos *Q3189 Acciones para reducir las manifestaciones de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres y Q3128 Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia*. XXXVII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por el ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., a efecto de que se lleve a cabo una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021 de dicho Municipio. XXXVIII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Silao, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; y realice las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría del municipio de Silao inició proceso alguno contra quien resultara responsable por las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio. XXXIX.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Cortazar, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; y realice las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría Municipal inició algún proceso derivado de las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio. XL- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de instruir al Auditor Superior del Estado a incluir en el Programa General de Fiscalización del año 2022, la realización de una auditoría específica al municipio de San Miguel de Allende, Gto., a la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento puro con las empresas *Bercale Services, S.A. de C. V.,* y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C. V.,* número SSP-001-07-2019 y su modificatorio. XLI.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de Guanajuato para que realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales de 2019 y, en su caso, subsiguientes; y la segunda, a fin de revisar que los recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021, se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro. XLII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por el ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., a efecto de que se ordene una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021. XLIII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la propuesta formulada por el ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., a efecto de que se ordene una auditoría a la administración municipal 2018-2021. XLIV.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Estado de Guanajuato formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. XLV.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al segundo de los ordenamientos. XLVI.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el primer párrafo del artículo 62 y adicionar un cuarto párrafo al artículo 61 ter 1 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y derogar la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. XLVII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a dos iniciativas formuladas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. XLVIII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice, previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación mediante la figura de donación de una fracción de un bien inmueble en favor del municipio de Cortazar, Gto., para destinarlo a la Casa de la Cultura. XLIX.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice previa desafectación del dominio público del Estado la enajenación de tres bienes inmuebles de propiedad estatal en favor de la persona moral denominada *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V*. L.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. LI.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. LII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. LIIII.-Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LIV.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LV.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LVI.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LVII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LVIII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LIX.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LX.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LXI.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LXII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LXIII.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LXIV.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen signado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo al informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020. LXV.- Asuntos generales.

**- La Presidencia.-** Muchas gracias diputada

**- La Presidencia.-** La propuesta de orden del día, está a consideración de la Asamblea si desean hacer uso de la palabra indíquenlo a esta Presidencia.

* **LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO**

**[[1]](#footnote-1)ACTA NÚMERO 34**

**SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SESIÓN CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2022**

**PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

En la ciudad de Guanajuato, capital del Estado del mismo nombre, se reunieron las diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato a efecto de llevar a cabo la sesión ordinaria, en los términos de la convocatoria, la cual tuvo el siguiente desarrollo: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La presidencia solicitó a la secretaría certificar el cuórum conforme al registro de asistencia del sistema electrónico. - - - - - - - - - -

Se registró la presencia de veintisiete diputadas y diputados a través del sistema electrónico. Las diputadas Martha Edith Moreno Valencia y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, así como el diputado Gerardo Fernández González se incorporaron a la sesión durante el desahogo del punto uno del orden del día. La diputada Angélica Casillas Martínez se incorporó durante el desarrollo del punto cuatro del orden del día; las diputadas Martha Lourdes Ortega Roque, Dessire Angel Rocha y Yulma Rocha Aguilar durante el punto cinco del orden del día; la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo se incorporaron durante el desahogo de los puntos seis y nueve del orden del día, respectivamente. - - - - - - - - -

Comprobado el cuórum legal, la presidencia declaró abierta la sesión a las diez horas con veintitrés minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La secretaría por instrucción de la presidencia dio lectura al orden del día; mismo que, en la modalidad electrónica, resultó aprobado por unanimidad en votación económica, sin discusión, con veintiocho votos.

En votación económica, en la modalidad electrónica, se aprobó por unanimidad, con veintiocho votos, sin discusión, la propuesta de dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el nueve de junio del año en curso. En la misma modalidad se aprobó por unanimidad, sin discusión, el acta de referencia con veintinueve votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La presidencia dio la bienvenida a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad de León, invitados por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá. - - - - - - - - - - - -

En votación económica, en la modalidad electrónica, se aprobó por unanimidad, con veintinueve votos, la propuesta de dispensa de lectura de las comunicaciones y correspondencia recibidas, en razón de encontrarse en la Gaceta Parlamentaria. Una vez lo cual, la presidencia ordenó ejecutar los acuerdos dictados a las comunicaciones y correspondencia recibidas. - - -

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, a petición de la presidencia, dio lectura a la exposición de motivos de la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Concluida la lectura, con fundamento en el artículo ciento once -fracción segunda- de la Ley Orgánica Poder Legislativo del Estado, la presidencia turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La presidencia dio la bienvenida a los alumnos de la Universidad Continente Americano y de la Universidad Centro de Estudios de México, invitados por el diputado César Larrondo Díaz; así como a los alumnos de la escuela primaria urbana Librado Acevedo, invitados por la diputada Lilia Margarita Rionda Salas. - - - - - - -

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a petición de la presidencia, dio lectura a la exposición de motivos de su iniciativa a fin de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato. Concluida la lectura, con fundamento en el artículo ciento seis -fracción primera- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la presidencia la turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen.

El diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a solicitud de la presidencia, dio lectura a la exposición de motivos de su iniciativa a efecto de derogar el cuarto párrafo del artículo cinco de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Una vez lo cual, con fundamento en el artículo ciento cuatro -fracción primera- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la presidencia la turnó a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio y dictamen. - - - - - -

La presidencia dio la bienvenida a los alumnos, a la maestra Juanita García y al profesor Luis Zamora de la escuela telesecundaria número doscientos veintisiete *Eulalia Guzmán*, invitados por el diputado Miguel Ángel Salim Alle. - - - - - -

El diputado David Martínez Mendizábal, a petición de la presidencia, dio lectura a la exposición de motivos de la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, del Código Civil para el Estado de Guanajuato y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, formulada por él y por la diputada Martha Edith Moreno Valencia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Concluida la lectura, la presidencia turnó la parte correspondiente a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato a la Comisión para la Igualdad de Género, con fundamento en el artículo ciento dieciséis -fracción tercera-; la parte relativa al Código Civil para el Estado de Guanajuato, a la Comisión de Justicia, con fundamento en el artículo ciento trece -fracción segunda-; y lo referente a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en el artículo ciento seis -fracción primera- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - -

La presidencia dio la bienvenida a los alumnos de la licenciatura en derecho del Instituto Universitario del Centro de México, invitados por la diputada Martha Edith Moreno Valencia; así como a personas del municipio de Jaral del Progreso, invitados por el diputado José Alfonso Borja Pimentel. - - - - - - - - - - - - - - - - -

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a petición de la presidencia, dio lectura a la exposición de motivos de su iniciativa a fin de adicionar una fracción sexta al artículo doce y una fracción cuarta al artículo trece de la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. Concluida la lectura, con fundamento en el artículo ciento cinco -fracción primera- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la presidencia la turnó a la Comisión de Atención al Migrante, para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La diputada Dessire Angel Rocha, a solicitud de la presidencia, dio lectura a la exposición de motivos de la iniciativa suscrita por ella y por las diputadas Yulma Rocha Aguilar y Martha Lourdes Ortega Roque a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, del Código Civil para el Estado de Guanajuato y del Código Penal del Estado de Guanajuato. Agotada la lectura, la presidencia turnó la parte correspondiente a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato y a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, a la Comisión para la Igualdad de Género, con fundamento en el artículo ciento dieciséis -fracción tercera-; la parte relativa a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en el artículo ciento seis -fracción primera-; y la parte referida al Código Civil para el Estado de Guanajuato y al Código Penal del Estado de Guanajuato, a la Comisión de Justicia, con fundamento en el artículo ciento trece -fracción segunda- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En el punto diez del orden del día, la presidencia dio cuenta con la iniciativa suscrita por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de adicionar una fracción cuarta al artículo dos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en la -fracción primera- del artículo ciento seis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. - - - -

A petición de la presidencia, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA dio lectura a la exposición de motivos de su iniciativa a efecto de adicionar los párrafos quinto y sexto a la fracción décima del artículo treinta; una fracción undécima al artículo treinta y uno y una fracción decimoctava al artículo treinta y ocho de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. Concluida la lectura, la presidencia turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos ciento doce -fracción primera- y ciento once -fracción décima quinta-; así como en el último párrafo de dichos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - - - - -

La presidencia dio cuenta con la solicitud formulada por el ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, a efecto de que se le autorice la contratación de un crédito para destinarlo a diversos proyectos de inversión pública productiva y la turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, con fundamento en el artículo ciento doce -fracción sexta- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. - - - - - - - - - - - - -

La presidencia solicitó a las diputadas y a los diputados abstenerse de abandonar el salón de sesiones durante las votaciones. - - - - - - - - -

La diputada Martha Edith Moreno Valencia, a petición de la presidencia, dio lectura a la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar para que lleve a cabo una auditoría específica de cumplimiento al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá comprender la totalidad de los recursos públicos destinados a la inversión en la sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y sociedad financiera de objeto múltiple denominada *GTO Leasing Services*, así como aquellos destinados en la adjudicación y contratación de bienes y servicios de dicha sociedad por parte del Estado de Guanajuato, por los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y concomitante a dos mil veintidós. Agotada la lectura, se sometió a consideración de la asamblea declarar de obvia resolución la propuesta de punto de acuerdo, registrándose la intervención de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández quien habló a favor de la obvia resolución. Una vez lo cual, se recabó votación económica, resultando aprobada la obvia resolución por unanimidad, en la modalidad electrónica, al computarse treinta y cuatro votos a favor. Se sometió a discusión el punto de acuerdo, sin registrarse participaciones, por lo que, puesto a votación nominal, mediante la modalidad electrónica no resultó aprobado, al registrarse doce votos a favor y veinticuatro votos en contra. La diputada Yulma Rocha Aguilar razonó su voto a favor. En consecuencia, la presidencia instruyó a la Secretaría General el archivo de la propuesta de punto de acuerdo. - -

El diputado Alejandro Arias Ávila, a petición de la presidencia, dio lectura a la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, formulada por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por la que se declara como Recinto Oficial del Congreso del Estado el inmueble que ocupa el Palacio de los Poderes, ubicado en Plaza de la Paz número setenta y siete, zona centro, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a efecto de llevar a cabo la última sesión ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones, así como la instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provincial de Guanajuato, mil ochocientos veintidós - mil ochocientos veinticuatro. Concluida la lectura, se sometió a consideración de la asamblea declarar de obvia resolución la propuesta de punto de acuerdo, sin registrarse participaciones. Se recabó votación económica, resultando aprobada la obvia resolución por unanimidad, en la modalidad electrónica, computándose treinta y cuatro votos a favor. Se sometió a discusión el punto de acuerdo, registrándose la participación de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia para hablar a favor. Una vez lo cual, se sometió a votación nominal, mediante la modalidad electrónica y resultó aprobado por unanimidad, con treinta y seis votos a favor. En consecuencia, la presidencia instruyó remitir el acuerdo aprobado junto con sus consideraciones, al Gobernador del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. - -

La secretaría, por indicación de la presidencia, dio lectura a la propuesta formulada por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, relativa a la modificación de la integración de la Comisión de Fomento Agropecuario de la Sexagésima Quinta Legislatura, de conformidad con el artículo setenta y seis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Concluida la lectura y una vez puesta a consideración, al no registrarse participaciones, se recabó votación por cédula resultando aprobada por unanimidad al computarse treinta y seis votos a favor. La presidencia declaró modificada la integración de la Comisión de Fomento Agropecuario, conforme a la propuesta aprobada. - - - - - - - - - - - - - - - -

Con el objeto de agilizar el trámite parlamentario de los asuntos agendados en los puntos del dieciséis al sesenta y ocho del orden del día, y en virtud de haberse proporcionado con anticipación, así como encontrarse en la Gaceta Parlamentaria, la presidencia propuso la dispensa de lectura de estos; de igual manera, propuso que los dictámenes formulados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, contenidos en los puntos del veintisiete al sesenta y ocho del orden del día se sometieran a discusión y posterior votación en un solo acto. Puesta a consideración la propuesta, esta resultó aprobada por unanimidad, al computarse treinta y seis votos a favor, sin discusión, en votación económica en la modalidad electrónica. Por lo que se procedió a desahogar el orden del día en los términos aprobados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La presidencia dio la bienvenida a un grupo de líderes comerciantes de la ciudad de Celaya, invitados por la diputada María de la Luz Hernández Martínez. - - - - - - - - - - - - - - -

Se sometió a discusión el informe de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales y las transferencias y ajustes presupuestales, correspondiente al periodo comprendido del uno al treinta de abril del año en curso, formulado por la Comisión de Administración. No se registraron participaciones. Se recabó votación nominal, en la modalidad electrónica, resultando aprobado el informe por mayoría, al computarse treinta y cuatro votos a favor y dos votos en contra. - - - -

Se sometió a discusión el dictamen signado por la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa a fin de adicionar un segundo y tercer párrafos recorriéndose el subsecuente del artículo quince de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Se registraron las intervenciones de los diputados Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Bricio Balderas Álvarez, el primero, para hablar en contra y el segundo, para hablar a favor. Agotadas las participaciones, se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por mayoría, en la modalidad electrónica, con veintisiete votos a favor y seis votos en contra. La presidencia instruyó a la Secretaría General para que procediera al archivo definitivo de la iniciativa referida en el dictamen aprobado. - - - -

Se sometió a discusión el dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa a efecto de reformar diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en su parte correspondiente únicamente a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Se registró la intervención de la diputada Martha Guadalupe Hernández Camarena para hablar a favor. Concluida la participación, se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por unanimidad, en la modalidad electrónica, con treinta y seis votos a favor. La diputada Yulma Rocha Aguilar razonó su voto a favor. La presidencia instruyó remitir al Ejecutivo del Estado el decreto aprobado para los efectos constitucionales de su competencia. - - - - - - -

Se sometió a discusión el dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de una o un Magistrado Propietario en materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Al no registrarse participaciones, se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por unanimidad, en la modalidad electrónica, al computarse treinta y cinco votos a favor. Enseguida, se procedió a la designación de una o un Magistrado Propietario en materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante votación por cédula, en los términos del artículo ciento noventa y tres, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Una vez lo cual la secretaría declaró que el ciudadano Francisco Medina Meza obtuvo veintiséis votos; la ciudadana Ma. Cristina Cabrera Manrique obtuvo nueve votos y el ciudadano Carlos Alberto Llamas Morales obtuvo cero votos. En consecuencia, se designó al ciudadano Francisco Medina Meza, como Magistrado Propietario en materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por el término de siete años, que se contará a partir del momento en que rinda la protesta al cargo, de conformidad con los artículos ciento dieciséis, fracción tercera, noventa y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sesenta y tres, fracción vigésima primera y ochenta y cinco de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; cincuenta y ocho y sesenta y cuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La presidencia instruyó comunicar al Ejecutivo del Estado la designación del Magistrado Propietario en materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado, para los efectos conducentes; y al ciudadano Francisco Medina Meza, para que rindiera la protesta de ley. - - - - - - - - - - - - - -

Se sometió a discusión el dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de una Magistrada Propietaria en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Al no registrarse participaciones, se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por unanimidad, en la modalidad electrónica, al computarse treinta y cinco votos a favor. Enseguida, se procedió a la designación de una Magistrada Propietaria en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante votación por cédula, en los términos del artículo ciento noventa y tres, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Una vez lo cual la secretaría declaró que la ciudadana Claudia Ibet Amezcua Rodríguez obtuvo treinta y cuatro votos; la ciudadana Edna Jessica Muñoz Escoto obtuvo un voto y la ciudadana Elizabeth Amor Venegas Rodríguez obtuvo cero votos. En consecuencia, se designó a la ciudadana Claudia Ibet Amezcua Rodríguez, como Magistrada Propietaria en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por el término de siete años, que se contará a partir del momento en que rinda la protesta al cargo, de conformidad con los artículos ciento dieciséis, fracción tercera, noventa y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sesenta y tres, fracción vigésima primera y ochenta y cinco de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; cincuenta y ocho y sesenta y cuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La presidencia instruyó comunicar al Ejecutivo del Estado la designación de la Magistrada Propietaria en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado, para los efectos conducentes; y a la ciudadana Claudia Ibet Amezcua Rodríguez, para que rindiera la protesta de ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se sometió a discusión el dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de un Magistrado Propietario en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Al no registrarse participaciones, se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por mayoría de votos, en la modalidad electrónica, al computarse veintiocho votos a favor y ocho votos en contra. Enseguida, se procedió a la designación de un Magistrado Propietario en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante votación por cédula, en los términos del artículo ciento noventa y tres, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Una vez lo cual la secretaría declaró que el ciudadano Francisco Javier Zamora Rocha obtuvo veinticinco votos; el ciudadano Hugo Ernesto Hernández obtuvo once votos y el ciudadano Gabriel Morales Díaz obtuvo cero votos. En consecuencia, se designó al ciudadano Francisco Javier Zamora Rocha, como Magistrado Propietario en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por el término de siete años, que se contará a partir del momento en que rinda la protesta al cargo, de conformidad con los artículos ciento dieciséis, fracción tercera, noventa y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sesenta y tres, fracción vigésima primera y ochenta y cinco de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; cincuenta y ocho y sesenta y cuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La presidencia instruyó comunicar al Ejecutivo del Estado la designación del Magistrado Propietario en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado, para los efectos conducentes; y al ciudadano Francisco Javier Zamora Rocha, para que rindiera la protesta de ley. - - - - - - - - - - - -

Se sometió a discusión el dictamen emitido por la Comisión de Justicia relativo a la propuesta de terna para la designación de una Consejera del Poder Judicial del Estado, formulada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Al no registrarse participaciones, se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por unanimidad, en la modalidad electrónica, al computarse treinta y cinco votos a favor. Enseguida, se procedió a la designación de una Consejera del Poder Judicial del Estado, mediante votación por cédula, en los términos del artículo ciento noventa y tres, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Una vez lo cual la secretaría declaró que la ciudadana Imelda Carbajal Cervantes obtuvo treinta y cuatro votos; la ciudadana Rosa Ivonne Arrona Gómez obtuvo un voto y la ciudadana Gabriela Naranjo Guevara obtuvo cero votos. En consecuencia, se designó a la ciudadana Imelda Carbajal Cervantes, como Consejera del Poder Judicial del Estado, por el término de cuatro años, que se contará a partir del momento en que rinda la protesta al cargo, de conformidad con los artículos sesenta y tres -fracción vigésima primera-, ochenta y dos y ochenta y cinco de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y veintisiete de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La presidencia instruyó comunicar al Ejecutivo del Estado la designación de la Consejera del Poder Judicial del Estado, para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado, para los efectos conducentes; y a la ciudadana Imelda Carbajal Cervantes, para que rindiera la protesta de ley. - - - - - - - - - - - -

Se sometió a discusión el dictamen presentado por la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa a fin de adicionar una fracción cuarta al artículo ciento setenta y nueve - c del Código Penal del Estado de Guanajuato y un tercer párrafo al artículo cuarenta y ocho de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, *en su parte correspondiente al primero de los ordenamientos*, presentada por la diputada Martha Edith Moreno Valencia integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Al no registrarse participaciones se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por mayoría, en la modalidad electrónica, al computarse veintiocho votos a favor y seis votos en contra. La presidencia instruyó a la Secretaría General para que procediera al archivo definitivo de la iniciativa referida en el dictamen aprobado.

Se sometió a discusión el dictamen formulado por la Comisión de Asuntos Municipales relativo a la propuesta de punto de acuerdo suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de exhortar a los cuarenta y seis ayuntamientos para que, en caso de no haberlo efectuado, realicen los nombramientos de los delegados y subdelegados y se informe a esta soberanía sobre los resultados. Al no registrarse participaciones se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por unanimidad, en la modalidad electrónica, al computarse treinta y tres votos a favor. La presidencia instruyó comunicar el acuerdo aprobado junto con su dictamen a los ayuntamientos, para los efectos conducentes. –

Se sometió a discusión el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de terna para la designación de quien ostentará la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo General de dicho Instituto. Al no registrarse participaciones, se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por unanimidad, en la modalidad electrónica, al computarse treinta y cuatro votos a favor. Enseguida, se procedió a la elección mediante votación por cédula, en los términos del artículo ciento noventa y tres, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Una vez lo cual la secretaría declaró que el ciudadano Sergio Ojeda Cano obtuvo un voto; la ciudadana Brenda Paulina Hernández González obtuvo treinta y tres votos y la ciudadana Siboney Ortega Aviña obtuvo un voto. En consecuencia, se designó a la ciudadana Brenda Paulina Hernández González, como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el término de cinco años, que se contará a partir del momento en que rinda la protesta al cargo, de conformidad con los artículos sesenta y tres, fracción vigésima primera, último párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; cuatrocientos cuarenta y ocho bis y cuatrocientos cuarenta y nueve de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato. La presidencia instruyó comunicar al Ejecutivo del Estado la designación de la titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para los efectos conducentes; y a la ciudadana Brenda Paulina Hernández González, para que rinda la protesta de ley. - -

Se sometió a discusión el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta de terna para la designación de quien ostentará la titularidad del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, formulada por el Pleno de dicho Instituto. Al no registrarse participaciones, se recabó votación nominal, resultando aprobado el dictamen por unanimidad, en la modalidad electrónica, al computarse treinta y cinco votos a favor. Enseguida, se procedió a la elección mediante votación por cédula, en los términos del artículo ciento noventa y tres, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Una vez lo cual la secretaría declaró que la ciudadana Hilda Ruth Barba Orozco obtuvo cero votos; la ciudadana Ma de Lourdes López Ramírez obtuvo veintisiete votos y el ciudadano Alejandro Vázquez López obtuvo ocho votos. En consecuencia, se designó a la ciudadana Ma de Lourdes López Ramírez, como titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, por el término de cinco años, que se contará a partir del momento en que rinda la protesta al cargo, de conformidad con los artículos sesenta y tres, fracción vigésima primera, último párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; ciento cincuenta y nueve, y ciento cincuenta y nueve Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. La presidencia instruyó comunicar al Ejecutivo del Estado la designación de la titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; a la Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, para los efectos conducentes; y a la ciudadana Ma de Lourdes López Ramírez, para que rinda la protesta de ley. - - - - - - - - - - - - - -

Se sometieron a discusión los dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, contenidos en los puntos del veintisiete al sesenta y ocho del orden del día, relativos a los informes generales elaborados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de los procesos de entrega recepción de las administraciones públicas municipales dos mil dieciocho -dos mil veintiuno de: Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria. Se registró la intervención del diputado Víctor Manuel Zanella Huerta para hablar como autor de los dictámenes, con fundamento en el artículo setenta y ocho -fracción primera- de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Concluida la intervención, se recabó votación nominal, resultando aprobados los dictámenes por mayoría, en la modalidad electrónica, al computarse veintisiete votos a favor y ocho votos en contra, excepto en los dictámenes previstos en los puntos treinta y cinco, cuarenta y uno y cuarenta y dos, en los que se registraron veintiséis votos a favor, ocho votos en contra y una abstención de la diputada Lilia Margarita Rionda Salas y de los diputados Gustavo Adolfo Alfaro Reyes y Jorge Ortiz Ortega respectivamente, fundamentando los motivos de las mismas. La presidencia, ordenó remitir los acuerdos aprobados junto con sus dictámenes y los informes generales a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y a los ayuntamientos de Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, para los efectos conducentes. - -

La presidencia informó que, toda vez que en la presente sesión, se aprobaron las designaciones del ciudadano Francisco Medina Meza, de la ciudadana Claudia Ibet Amezcua Rodríguez, del ciudadano Francisco Javier Zamora Rocha y de la ciudadana Imelda Carbajal Cervantes como Magistrado Propietario en materia Penal, Magistrada Propietaria en materia Civil y Magistrado Propietario en materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Consejera del Poder Judicial del Estado respectivamente, estos se encontraban en disponibilidad de acudir al salón de sesiones a rendir la protesta, por lo que resultaba oportuno llamarles. Con ese motivo, se designó a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, para que fungieran como comisión de protocolo e introdujeran al salón de sesiones a las personas referidas. Una vez lo cual, la presidencia les tomó la protesta; asimismo, pidió a la comisión de protocolo acompañarlos a abandonar el salón de sesiones cuando lo estimaran pertinente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En el apartado de asuntos generales, se registraron las intervenciones de las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández con el tema *responsabilidad* y Hades Berenice Aguilar Castillo con el tema *fracaso*. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La presidencia dio la bienvenida a Paloma Robles Lacayo, regidora del ayuntamiento de Guanajuato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La secretaría informó que se habían agotado los asuntos listados en el orden del día, que la asistencia a la sesión había sido de treinta y seis diputadas y diputados. - - - - - - - - - - - - -

La presidencia expresó que, en virtud de que el cuórum de asistencia se había mantenido, no procedería a instruir a la secretaría a un nuevo pase de lista; por lo que levantó la sesión a las catorce horas con treinta y un minutos e indicó que se citaría para la siguiente sesión por conducto de la Secretaría General. - - - - - - - - - -

Todas y cada una de las intervenciones de las diputadas y de los diputados registradas durante la presente sesión se contienen íntegramente en versión mecanográfica y forman parte de la presente acta. Damos fe. - - - - - - - -

**Irma Leticia González Sánchez**

**Diputada presidenta**

**Briseida Anabel Magdaleno González**

**Diputada secretaria**

**Yulma Rocha Aguilar**

**Diputada secretaria**

**Laura Cristina Márquez Alcalá Diputada vicepresidenta**

* **DAR CUENTA CON LAS COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA RECIBIDAS [[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| **A S U N T O** | **A C U E R D O** |
| **I. Comunicados provenientes de los poderes de la Unión y Organismos Autónomos.** | |
| El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal del IMSS en Guanajuato remite respuesta a la solicitud de información referente al estatus que guarda el proyecto de construcción de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Guanajuato, así como los requisitos que deben cubrirse para la construcción de unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Salud Pública.** |
| Acuerdo emitido por la Jueza Décimo Primero de Distrito en el Estado de cumplimiento de la sentencia del juicio de amparo tramitado bajo el expediente número 328/2021. | **Enterados y se turna a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| El subsecretario de Finanzas e Inversión de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración remite copia del convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito simple celebrado con fecha 9 de marzo de 2018, entre el estado de Guanajuato y BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. | **Enterados, se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y a la Unidad de Estudio de la Finanzas Públicas, y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| El subsecretario de Finanzas e Inversión de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración remite copia del convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito simple celebrado con fecha 22 de octubre de 2020, entre el estado de Guanajuato y BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. Enterados, se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y a la Unidad de Estudio de la Finanzas Públicas, y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización. | **Enterados, se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y a la Unidad de Estudio de la Finanzas Públicas, y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| El subsecretario de Finanzas e Inversión de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración remite copia del segundo convenio modificatorio y de reestructura al contrato de apertura de crédito simple, celebrado con fecha 8 de abril de 2016, entre el estado de Guanajuato y Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. | **Enterados, se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y a la Unidad de Estudio de la Finanzas Públicas, y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| El subsecretario de Finanzas e Inversión de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración remite copia del convenio modificatorio y de reestructura al contrato de apertura de crédito simple, celebrado con fecha 4 de septiembre de 2020, entre el estado de Guanajuato y Banco Nacional de México, S. A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. | **Enterados, se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y a la Unidad de Estudio de la Finanzas Públicas, y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| El secretario del Migrante y Enlace Internacional remite respuesta a la solicitud de información referente a las principales acciones, programas y proyectos que se trabajan durante el año enero-diciembre 2022 en beneficio de los migrantes de origen, tránsito, destino y retorno. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Atención al Migrante.** |
| La coordinadora general Jurídica del Gobierno del Estado remite opinión consolidada que emiten la Secretaría de Salud y la Coordinación General Jurídica sobre la iniciativa que adiciona al Título Décimo, un capítulo IV denominado Tratamiento de las Adicciones, comprendiendo los artículos 162 Bis, 162 Ter, 162 Quater, 162 Quinquies y 162 Sexies, de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Salud Pública.** |
| La coordinadora general Jurídica del Gobierno del Estado remite opinión consolidada con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación a la consulta de la iniciativa a efecto de expedir la Ley para la Atención y Tratamiento Integral de las Adicciones para el Estado y los Municipios de Guanajuato y derogar diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Salud Pública.** |
| La coordinadora general Jurídica del Gobierno del Estado remite opinión consolidada con las secretarías de Desarrollo Social y Humano y de Finanzas, Inversión y Administración a la consulta de la iniciativa a fin de reforma y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Social.** |
| La coordinadora general Jurídica del Gobierno del Estado remite opinión consolidada con las secretarías de Desarrollo Social y Humano y de Finanzas, Inversión y Administración a la consulta de la iniciativa a efecto de expedir la Ley del Primer Empleo y Primera Empresa para Jóvenes del Estado y los Municipios de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Desarrollo Económico y Social.** |
| La coordinadora general Jurídica del Gobierno del Estado remite respuesta a la consulta de la iniciativa a efecto de reformar el artículo 139 del Código Penal del Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Justicia.** |
| La coordinadora general Jurídica del Gobierno del Estado remite respuesta a la consulta de la iniciativa a efecto de reformar la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| La coordinadora general Jurídica del Gobierno del Estado remite respuesta a la consulta de la iniciativa a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y diversos numerales de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de** **Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| La coordinadora general Jurídica del Gobierno del Estado remite respuesta a la consulta de la iniciativa a fin de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia del informe de actividades de la Fiscalía General del Estado. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| La coordinadora general Jurídica del Gobierno del Estado remite respuesta a la consulta de la iniciativa a efecto de reformar los artículos 78 y 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de Guanajuato, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita al síndico del ayuntamiento de Santa Catarina, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de Uriangato, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de Victoria, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita al síndico del ayuntamiento de Yuriria, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información a la contralora municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información al contralor municipal de Guanajuato, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información al encargado del despacho de la Contraloría Municipal de San Diego de la Unión, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información a la contralora municipal de Santa Catarina, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | Enterados. |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información al contralor municipal de Uriangato, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información a la encargada del despacho de la Contraloría Municipal de Victoria, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información al contralor municipal de Yuriria, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información al contralor municipal de Tierra Blanca, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de Tierra Blanca, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita al síndico del ayuntamiento de Acámbaro, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita al síndico del ayuntamiento de Coroneo, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de Cortazar, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de Jerécuaro, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita al síndico del ayuntamiento de Tarandacuao, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de Villagrán, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información a la encargada del despacho de la Contraloría Municipal de Acámbaro, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información al encargado del despacho de la Contraloría Municipal de Coroneo, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información a la encargada del despacho de la Contraloría Municipal de Cortazar, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información al contralor municipal de Jerécuaro, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información a la contralora municipal de Tarandacuao, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio | **Enterados.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información al contralor municipal de Tarimoro, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados**. |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita información al contralor municipal de Villagrán, Gto., del estado en que se encuentran cada una de las observaciones que determinaron presuntas responsabilidades administrativas, con motivo de la revisión practicada a dicho municipio. | **Enterados.** |
| El director de Asuntos Jurídicos de este Congreso del Estado comunica resolución recaída en el Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales, identificado bajo el número TEEG-JPDC-55/2020 y su acumulado TEEG-JPDC-56/2020. | **Enterados y se turna a la Comisión de Asuntos Electorales.** |
| Copia marcada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización de este Congreso del Estado, del oficio signado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a través del cual solicita a la síndico del ayuntamiento de Tarimoro, Gto., información sobre las acciones legales implementadas y, en su caso, el estado en que se encuentran, respecto a cada una de las observaciones con responsabilidad civil sancionadas en los respectivos informes de resultados. | **Enterados.** |
| El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato remite respuesta a la consulta de la iniciativa que adiciona el artículo 22 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato remite respuesta a la consulta de la iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato remite respuesta a la consulta de la iniciativa por la que se adiciona el artículo 22 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| **II. Comunicados provenientes de los Ayuntamientos del Estado.** | |
| El presidente municipal y el secretario del ayuntamiento de Valle de Santiago, Gto., remite copia certificada del acuerdo de ayuntamiento, relativo a la segunda modificación al presupuesto general para el ejercicio fiscal 2022. | **Enterados y se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.** |
| El presidente municipal de San Diego de la Unión, Gto., remite información adicional en alcance al oficio PMSDU/0242/21, relativo a la solicitud de contratación de un financiamiento formulada por dicho ayuntamiento. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| El presidente municipal y el secretario del ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., remiten aclaración respecto al oficio 0020/2021OFPMJP, y solicitan se retire del expediente de solicitud de la deuda, remitido mediante oficio 0019/2021OFPMJP el día 25 de enero del presente año. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| La presidenta municipal y el secretario del ayuntamiento de Moroleón, Gto., remiten información adicional en alcance al oficio PMM/118/2022 de fecha 27 de abril de 2022; referente a la solicitud de autorización de endeudamiento realizada por dicho ayuntamiento. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| La secretaria del ayuntamiento de Abasolo, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, a la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, y al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo que corresponde al primero de los ordenamientos. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones.** |
| La secretaria del ayuntamiento de Abasolo, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa que reforma el artículo 153 y adiciona el artículo 152 bis a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones.** |
| La secretaria del ayuntamiento de Abasolo, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa que adiciona la fracción VIII, recorriéndose en su orden la subsecuente, al artículo 64, de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones**. |
| La secretaria del ayuntamiento de Abasolo, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, a la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, y al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo que corresponde al tercero de los ordenamientos. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Medio Ambiente.** |
| La secretaria del ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa que adiciona el artículo 22 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| Los integrantes de la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos del ayuntamiento de Victoria, Gto., remiten respuesta a la consulta de la iniciativa que adiciona el artículo 22 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| La secretaria del ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa a efecto de reformar los artículos 1, 226 y 227 de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y los artículos 5 y 149 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Salud Pública.** |
| La secretaria del ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., remite el acuerdo recaído al informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobados por esta Legislatura, relativos a la auditoría de desempeño practicada a dicha administración municipal, con enfoque a resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. | **Enterados y se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.** |
| La secretaria del ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., remite el acuerdo recaído al informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobados por esta Legislatura, relativos a la auditoría de desempeño practicada a dicha administración municipal, con enfoque a resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. | **Enterados y se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.** |
| La secretaria del ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., remite copia certificada del cierre del presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública municipal, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Comisión Municipal del Deporte, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | **Enterados y se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.** |
| La secretaria del ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., remite copia certificada del periódico oficial, del pronóstico de ingresos, del presupuesto de egresos y de plantillas de personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Casa de la Cultura Profesor Antonio Llamas Álvarez y de la Comisión Municipal del Deporte, correspondientes al ejercicio fiscal 2022. | **Enterados y se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.** |
| La secretaria del ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., remite copia certificada del pronóstico de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de personal del comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el ejercicio fiscal 2022. | **Enterados y se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.** |
| El presidente municipal y el secretario del ayuntamiento de Cortazar, Gto., remiten información complementaria en alcance al oficio P.M./289/2022, de fecha 11 de mayo del presente año, referente a la solicitud de autorización de endeudamiento realizada por dicho ayuntamiento. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| El presidente municipal y el secretario del ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., remiten solicitud de autorización de endeudamiento, acordado por dicho ayuntamiento. | **Enterados y se turna a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| La tesorera municipal de Guanajuato, Gto., remite copia del convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito simple celebrado el 16 de mayo de 2011, entre el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y el Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple. | **Enterados, se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y a la Unidad de Estudio de la Finanzas Públicas, y se informa que se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.** |
| El secretario del ayuntamiento de Cortazar, Gto., remite respuesta a la consulta de la propuesta de punto de acuerdo en el que se exhorta a los 46 ayuntamientos que conforman el estado de Guanajuato para que coadyuven en las tareas para garantizar el libre acceso a los espacios públicos con fines recreativos mediante la promoción de nuevos proyectos, el mantenimiento de los ya existentes, y un mejor manejo de los recursos para evitar el cobro de cuotas de mantenimiento que restrinjan el acceso a estos espacios públicos. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales.** |
| El secretario del ayuntamiento de Cortazar, Gto., comunica el acuerdo recaído al punto de acuerdo aprobado por esta Legislatura en el que se exhorta a que den seguimiento a la instalación del Consejo Municipal de Adultos Mayores y se expida el reglamento correspondiente. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales** |
| La secretaria del ayuntamiento de Coroneo, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa que adiciona el artículo 22 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| El secretario del ayuntamiento de Coroneo, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa de adiciones al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de reforma a los artículos 99-b y 262 del Código Penal del Estado de Guanajuato, en su parte correspondiente al primero de los ordenamientos. | **Enterados y se informa que se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública.** |
| El secretario del Ayuntamiento de Coroneo, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa de Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura.** |
| El secretario del ayuntamiento de Coroneo, Gto., remite copia certificada del acuerdo recaído al informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobados por esta Legislatura, relativos a la auditoría de desempeño practicada a dicha administración municipal, con enfoque a resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. | **Enterados y se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.** |
| El secretario del ayuntamiento de Doctor Mora, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa de adiciones al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de reforma a los artículos 99-b y 262 del Código Penal del Estado de Guanajuato, en su parte correspondiente al primero de los ordenamientos. | **Enterados y se informa que se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública.** |
| El secretario del ayuntamiento de Doctor Mora, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa que adiciona el artículo 22 bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.** |
| El secretario del ayuntamiento de Doctor Mora, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa de Ley de Educación Superior para el Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura.** |
| El secretario del ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto., comunica el acuerdo recaído al punto de acuerdo aprobado por esta Legislatura en el que se exhorta a que den seguimiento a la instalación del Consejo Municipal de Adultos Mayores y se expida el reglamento correspondiente. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Asuntos Municipales.** |
| El secretario del ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto., remite respuesta al punto de acuerdo aprobado por esta Legislatura en el que se exhorta a los 46 ayuntamientos para que revisen y actualicen los protocolos, reglamentos y manuales de Protección Civil y Bomberos en donde incluyan apartados de análisis de riesgos preventivos, de la misma forma, reexaminar las disposiciones administrativas en la realización de espectáculos públicos masivos; a la Secretaría de Seguridad Pública para que revise los permisos y certificaciones de las empresas y personal que prestan sus servicios como seguridad privada en el Estado de Guanajuato; y a la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, para que informe detalladamente las medidas encaminadas a prevenir la violencia en eventos deportivos, así como las acciones para garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se celebran eventos públicos masivos. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones.** |
| El secretario del ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto., remite respuesta a la consulta de la iniciativa que adiciona una fracción IX al artículo 19, un párrafo tercero al artículo 20 y una fracción VI al artículo 27 Ter de la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. | **Enterados y se informa que se turnó a la Comisión de Atención al Migrante.** |
| El secretario del ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Gto., remite el acuerdo recaído al informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobados por esta Legislatura, relativos a la auditoría de desempeño practicada a dicha administración municipal, con enfoque a resultados del servicio de alumbrado público, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020. | **Enterados y se remite a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.** |
| **III. Comunicados provenientes de los poderes de otros Estados.** | |
| La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Colima comunica la elección del Presidente y Vicepresidente que fungirán durante el mes de junio del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. | **Enterados.** |

* **PROTESTA DE LA CIUDADANA BRENDA PAULINA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y DE LA CIUDADANA MA DE LOURDES LÓPEZ RAMÍREZ, COMO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**
* **PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A EFECTO DE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75, 79, 84, 168, 170, 172 Y 186 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO.**

**SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA**

**PRESENTE.**

**Diputado Alejandro Arias Ávila,** proponente y quienes suscriben, Diputada y Diputado integrantes de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional l, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 56 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en el artículo 167, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, someto a consideración del Pleno para su aprobación, la presente iniciativa con proyecto de **Decreto que reforma y adiciona los artículos 75, 79, 84, 168, 170, 172 y 186 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato,** conforme a la siguiente:

**EXPOSICION DE MOTIVOS**

El principio de división de poderes, que ya planteaba John Locke y que luego siguió Charles Louis de Secondant Barón Montesquieu, surge sin duda para hacer contrapeso al ejecutivo monárquico en Inglaterra, y para, precisamente preservar la libertad y evitar el abuso del poder. Este principio sostiene Berlín Valenzuela, es un instrumento de los gobernantes que tiene como garantía las libertades individuales.[[3]](#footnote-3)

Jeremy Bentham, sostenía que la mayor felicidad es el fundamento de la moral y la legislación. Planteó la teoría de la racionalidad de las leyes y la nomografía como el arte y ciencia mediante las cuales se puede dar expresión al contenido de la ley, de tal forma que conduzca en el máximo grado posible a la obtención de los fines, pueda tener en mente, cualesquiera que fueren, que el legislador, quien quiera que fuere pueda tener en mente. [[4]](#footnote-4)

En el estado de Guanajuato, como una entidad federativa que forma parte del pacto de la Unión, se encuentra vigente la división de funciones del poder público, pues como bien se afirma en la obra Tópicos del Derecho Parlamentario, el control del poder se asume como una de las premisas en fundamentales del estado constitucional,[[5]](#footnote-5) El Poder Legislativo enmarcado en la función del equilibrio del poder, cumple con una tarea relevante en el quehacer social y dentro del estado de derecho. Se contribuye a la estabilidad política y a la paz social. En otras palabras, genera las condiciones normativas que permiten al núcleo social, desarrollar una adecuada vida en común, gregaria y ordenada.

Bajo ese supuesto es que el poder constructor y editor de la norma jurídica no puede permanecer estático e inamovible en una sociedad que es también cambiante y demandante, es menester acudir a las fuentes del derecho, las que, siguiendo al Tratadista de derecho parlamentario Berlín Valenzuela, se manifiestan a través de realidades sociales, antecedentes históricos e ideologías, consecuentemente, son, en no pocas ocasiones, la base para la creación del cuerpo normativo, es decir, esas fuentes son medios, formas y elementos de los cuales surgen las normas jurídicas. [[6]](#footnote-6)

En el quehacer legislativo, no se debe pasar por alto, que lo funcional en un tiempo, puede estar superado por nuevas formas de interpretación o supuestos que se apoyan en criterios o teorías que los estudiosos del derecho han explorado y que, como fuentes de derecho se llegan a adoptar en un ejercicio dentro del proceso legislativo. La doctora Luisa Béjar, afirma, en ese sentido, que la elaboración de la ley en cada campo de política pública muestra dinámica distinta al responder a las características propias de cada sector. [[7]](#footnote-7)

Es por ello que quienes asumimos la responsabilidad constitucional, de generar, de forma colegiada, las condiciones legales y jurídicas que sirven al marco de derecho y social, no podemos permanecer abstraídos de las nuevas exigencias que se presentan en los momentos de trabajar en el proceso esencial, para crear una disposición normativa.

El devenir diario de nuestro trabajo, nos llama a la revisión de los instrumentos que se requieren para completar, a través del mecanismo que nuestra ley orgánica establece, un producto imperativo que rige la forma y modo de conducción para llegar al punto final, que es la ley.

En efecto, además de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es para nosotros, quien duda, el instrumento por excelencia en la función de legislar. Por ello debemos estar atentos a la funcionalidad de ésta, es decir que se vaya ajustando de forma ordenada, a perfeccionar las distintas instituciones que se desdoblan en su contenido y que permiten el desarrollo de nuestra función legislativa.

Es por ello que el propósito de la presente iniciativa va encaminado a buscar que la norma legislativa, se vaya adaptando a nuestro diario quehacer, haciéndolo más eficiente y sencillo.

Y es que como se predica en ese mensaje que se envía a la ciudadanía, en este Congreso se dialoga, se llega a acuerdos.

Y es verdad, por lo tanto, para materializarlo, fieles a esas consignas, debemos hacer adecuaciones a la ley que nos rige.

No hay mucho tiempo, en el diario recorrer legislativo, nos encontramos con obstáculos procesales parlamentarios, para poder materializar un avenimiento político, en aras de realizar una conducción parlamentaria atinente a proporcionar gobernabilidad entre fracciones diversas.

Por ello, para saltar esos obstáculos, estamos proponiendo reformas a nuestra Ley de la materia, es decir la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Fundamentalmente las reformas y adiciones atienden a tocar algunos artículos de los Títulos Cuarto y Séptimo, que regulan el funcionamiento del Congreso y el Proceso legislativo, a saber:

**1.-** El artículo 75 del cuerpo legal que es propósito de la reforma, establece: Las Comisiones Legislativas tienen como objeto la elaboración de dictámenes, opiniones o resoluciones de los asuntos que son competencia del Congreso del Estado. Éstas serán legislativas permanentes, unidas y especiales.

Atendiendo a la naturaleza y espíritu de la función de legislar y crear leyes, nos pronunciamos porque no se acote el estudio, tan sólo a la propuesta de motivos y argumentaciones, y datos de los que disponga una iniciativa, sino que precisamente durante la etapa de estudio y como resultado del mismo, atendiendo a la propuesta, la comisión pueda reconducir la misma, complementarla o adicionarla. Que esta forma de atender una iniciativa, en ocasiones en los hechos se realiza, baste con recordar por ejemplo la iniciativa que durante este periodo el Ejecutivo envió a efecto de reformar la ley de movilidad; y que como resultado de las consultas efectuadas y de las opiniones que se vertieron, al final resultó la iniciativa modificada sustancialmente.

Esta facultad y práctica no es en desdoro de nadie, es simplemente actuar en el ámbito de la ley que permite, realizar un estudio y análisis de una iniciativa. El Constitucionalista Miguel Carbonell, sostiene que: una correcta técnica legislativa puede contribuir a reforzar el peso político del Poder Legislativo dentro del Estado, pues si las Cámaras del Congreso estuvieran en condiciones reales de mejorar con argumentos técnicos los proyectos contribuirían de forma importante al diseño y puesta en práctica de las políticas públicas estatales. [[8]](#footnote-8)

Por tanto, proponemos adicionar un párrafo que establezca la posibilidad de reconducir, adicionar o complementar una propuesta. Estimamos que plasmado de manera expresa se materializa una facultad y práctica que ya se aplica en el trabajo de comisiones en el iter del proceso legislativo.

**2.-** Por su lado el artículo 79 del cuerpo legislativo, faculta a la Presidencia de la comisión a la convocatoria a las sesiones respectivas. Hasta ahora, sabemos que esa convocatoria, se debe realizar con al menos veinticuatro horas de anticipación.

Nos pronunciamos, por ampliar el marco temporal en cuanto a las horas, habida cuenta que dado el trabajo legislativo que se presenta, de acuerdo con los nuevos parámetros y formas de evaluación que se presentan por los organismos que esta misma ley ha creado, se hace necesario tener una preparación adecuada y suficiente de la sesión de comisión respectiva, lo que implica contar con mayor tiempo para ello. Es así que estamos proponiendo que la convocatoria se realice con al menos treinta y seis horas. Implicará sin duda una reorganización del trabajo de las comisiones.

**3.-** Consideramos pertinente enmarcar la facultad constitucional de los representantes populares, en cuanto a la participación material en la formulación de la norma que se pretende crear, por ello proponemos incorporar un apartado al artículo 84 de la Ley en Reforma.

Dentro del iter legislativo o etapa legislativa, las comisiones que se previenen en la Ley, resultan de singular relevancia para el trabajo de los editores o autores de la ley. Conforme a la teoría de la legislación, es en esta etapa en la que se debe analizar la institución con respecto a sus alcances extensión y nivel de detalle, afectaciones al nivel institucional, los efectos concretos sobre los ciudadanos, sobre la administración pública, etc., según apunta Reyes Rodríguez.[[9]](#footnote-9)

En esa lógica, el ámbito de los comisionados, diputados es y debe ser exclusivo en su praxis, esto es, deben ser únicamente los editores quienes participen en la discusión de la construcción de la norma. No se puede abdicar de su facultad por ello es que estimamos de manera expresa determinar que serán los diputados integrantes de la comisión quienes de manera particular y exclusiva quienes participen en ese iter del proceso.

Proponemos que, en el estudio y análisis en las comisiones legislativas, únicamente podrán participar sus integrantes y previo acuerdo de los mismos, por conducto de su Presidencia, podrán solicitar información o documentación a los poderes públicos, a los gobiernos municipales, organismos autónomos y demás dependencias, cuando se trate de un asunto de su ramo o competencia, o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les competan.

También en consonancia con lo antes ya dicho, en ningún caso la información u opiniones serán vinculantes para la Comisión.

**4.-** El artículo 168 de la ley en comento, señalan los aspectos que debe contener una iniciativa. En particular, en la fracción VII, se establece: Acompañar el dictamen de impacto presupuestal, cuando corresponda; y.

En los términos de esta disposición, sostenemos que tal condición puede, resultar inequitativa para la, el, las, o los diputados, Representaciones o Grupos Parlamentarios, y de las minorías, al imponerles cargas formales que implican la erogación de recursos para estar en condiciones de realizar, estudios, dictámenes o ensayos a efecto de anexar el dictamen de impacto presupuestal. Un supuesto así, hace nugatorio el derecho de los representantes populares a iniciar leyes.

Voces se expresan incluso para introducir otros requisitos para efecto de que una iniciativa se pueda presentar. Desde ahora se afirma qué condicionantes que pretendan coartar el derecho de iniciativa, son contrarias a la constitución.

Sobre todo, cuando este Congreso, cuenta con áreas institucionales ad-hoc que cuentan con los elementos materiales, técnico-profesionales para que realicen ese tipo de trabajos de carácter técnico.

Lo procedente en su caso sería que se cumpliera el requisito, con la solicitud en la iniciativa de que se obtenga dicho dictamen de orden presupuestal para sin ningún tipo de obvice, se realice y siga su curso el trámite parlamentario.

Consecuentemente, proponemos a los efectos de establecer el acompañamiento del impacto presupuestal, se indique que en caso de presentarse, se solicite a las dependencias del propio Congreso realice esa condición, para lo cual se le dará vista de la iniciativa respectiva.

5.- En el Grupo Parlamentario del PRI, estimamos que el artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Guanajuato, debe ser objeto de modificación a fin de ajustarlo a la naturaleza y esencia del derecho que se otorga a los representantes populares, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución para el Estado de Guanajuato.

Dispone el artículo 71, fracción II de nuestra Carta Magna, que el derecho de iniciar leyes o decretos corresponde, a los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión. Asimismo, el parágrafo 56 en su fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, establece la facultad de los diputados al Congreso del Estado, de iniciar leyes o decretos.

Como se puede apreciar, es incontestable que el derecho de iniciativa corresponde a los diputados, para el supuesto de sistema unicameral como es el caso de nuestra Entidad Federativa y Legislatura. Ahora bien, el primer párrafo del artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que nos ocupa, en correlación con el derecho a iniciar, permite el derecho a retirar una iniciativa que hubiese sido presentada ante el órgano administrativo competente. Dice la disposición: **Presentada una iniciativa o proposición de acuerdo en la Secretaría General, el iniciante tendrá la facultad de retirarla, antes de que se enliste en el orden del día de la sesión correspondiente.**

Este supuesto acota la facultad del iniciante de poder retirar la iniciativa cuando advierta que las condiciones de cualquier índole hayan cambiado, de suerte que ya no sea conveniente, o que por informaciones posteriores el tema haya sido resuelto por otras vías. Se surte así la especie de que, quien puede presentar, puede retirar.

Bajo la anterior premisa, se propone se amplíe el marco temporal para hacer efectivo el derecho de retirar iniciativas, y que en su caso la misma se pueda retirar hasta antes de que la comisión dictaminadora emita su respectivo dictamen.

Los subsecuentes párrafos quedarían intocados, como se determinará al momento de proponer la manera en que quedaría la propuesta.

**6.-** En el mismo Título, Capítulo II de los Dictámenes, de la Ley Orgánica objeto de nuestro planteamiento, estimamos en el Grupo Parlamentario, se debe modificar el artículo 172. Esta disposición establece: **Las Comisiones Legislativas podrán recabar de todas las oficinas públicas estatales la información que se estime necesaria, previa solicitud. Ésta deberá ser por escrito mediante la presencia de sus titulares, con autorización del 8 titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el recinto Oficial del Congreso del Estado, ante las Comisiones legislativas o la Asamblea.**

En esta disposición, dado que frecuentemente, se solicita la participación presencial del Poder Judicial, se hace necesario que si para que acudan servidores públicos del Poder Ejecutivo, lo hagan con su autorización; también se debe contar con la autorización del titular del Poder Judicial, para el caso de que acudan representantes ante las de mesas de trabajo de las comisiones legislativas. Precisa, además, a este numeral, incorporar un segundo párrafo a efecto de establecer el alcance de la información que las comisiones legislativas puedan acopiar a efecto de llevar a cabo la función legislativa.

En efecto, si bien resultará relevante contar con información que permita la toma de decisiones, a fin de no abdicar en el derecho de las o los diputados a decidir, para salvaguardar ese derecho, menester consideramos, establecer, que las informaciones recibidas o las que se desprendan de las participaciones, no serán en ningún caso vinculatorias.

7.- También el artículo 186, requiere de adición de un segundo párrafo.

Hemos sostenido antes que para un mejor ejercicio de la función, se requiere de instrumentos que favorezcan el dialogo y la posibilidad de los acuerdos, todo en aras de una gobernabilidad que deje satisfechos a los Grupos y Representaciones.

En ocasiones, es menester, realizar la contrapartida del derecho de iniciativa, es decir el derecho al retiro, solo que ahora ya a los integrantes de las comisiones, bajo el principio de que, si se contó con la facultad de presentar un dictamen, asimismo se pueda retirar el mismo porque así se permitan la realización de acuerdos parlamentarios.

En esta tesitura, proponemos adicionar un párrafo al artículo 186 de la Ley en reforma, en el que se exprese la posibilidad de que la Presidenta o Presidente de la Comisión legislativa pueda retirar un dictamen, si se hace hasta antes de que se discuta. 9 De ser aprobada la presente iniciativa, tendrá los siguientes impactos, de conformidad con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato:

**1. Impacto Jurídico.** Con la propuesta se permite crear mejores condiciones para la práctica parlamentaria, y hacer el marco jurídico más flexible, de suerte que permitirá a las y los diputados contar con herramientas jurídicas de mayor amplitud para cumplir con la función primordial, que es legislar en favor de la sociedad Guanajuatense.

**2. Impacto administrativo.** No se advierte impacto administrativo alguno.

**3. Impacto presupuestario.** No impacta de ninguna manera.

**4. Impacto social.** Sin duda que mejorar las leyes, en este caso la organiza al poder legislativo, traerá como beneficio social mejor resultado legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado de Guanajuato el siguiente:

**DECRETO.**

Único. **Se reforman los artículos 75, 79, 84, 168, 170, 172, 186 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:**

**Artículo 75.** Las Comisiones Legislativas…

**Las Comisiones Legislativas podrán, durante el estudio y análisis de una iniciativa o proposición, reconducir, adicionar o complementar la iniciativa puesta a su discusión.**

**Artículo 79.** La Presidencia de la Comisión legislativa convocará con al menos treinta y seis horas de anticipación, informando y acompañando las documentales de los asuntos a tratar, así como lugar, día y hora.

**Artículo 84.** En el estudio, análisis y discusión, en las comisiones legislativas, únicamente podrán participar sus integrantes y previo acuerdo de los mismos, por conducto de su Presidencia, podrán solicitar información o documentación a los poderes públicos, a los gobiernos municipales, organismos autónomos y demás dependencias, cuando se trate

de un asunto de su ramo o competencia, o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les competan.

**En ningún caso la información u opiniones serán vinculantes para la Comisión.**

**Artículo 168.** Las Iniciativas…

Las iniciativas...

I. Proemio…

II. Exposición…

III. El texto…

IV. El régimen…

V. Fecha…

VI. En caso de …

**VII. Solicitud del iniciante para que las áreas técnicas del congreso, con vista de la iniciativa, emitan dictamen presupuestal cuando corresponda.**

**Artículo 170.** Presentada una iniciativa o proposición de punto acuerdo en la Secretaría General, **el iniciante tendrá la facultad de retirarla, hasta antes de que la Comisión Dictaminadora emita el respectivo dictamen.**

A fin de…

En caso de…

**Artículo. 172.** Las Comisiones Legislativas podrán recabar de todas las oficinas públicas estatales la información que se estime necesaria, previa solicitud. Ésta deberá ser por escrito mediante la presencia de sus titulares, con autorización del titular del Poder Ejecutivo del Estado, **y del Poder Judicial, en su caso**, en el recinto Oficial del Congreso del Estado, ante las Comisiones legislativas o la Asamblea.

**Las opiniones e información obtenidas, ya sea por escrito o presencial, en ningún caso serán vinculatorias.**

**Artículo 186.** Puesto a debate …

**Mientras el dictamen no este en fase de debate, la Presidencia de la Comisión, podrá retirar el dictamen o proposición.**

**TRANSITORIOS.**

**Único.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato a los 20 días del mes de junio de 2022.

**Guanajuato, Gto., a 23 de junio de 2022**

**Diputadas y Diputados integrantes del Grupo**

**Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.**

**DIP. ALEJANDRO ARIAS ÁVILA**

**DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA**

**DIP. GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES**

* **PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY PARA FOMENTAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, SUSCRITA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.**

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO**

**DE GUANAJUATO**

**SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA**

**PRESENTE**

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato,con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 56, fracción 11, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 167, fracción II y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter por su digno conducto, a la consideración de esta Honorable Asamblea **1** la presente iniciativa para la creación de la ***Ley para Fomentar el Acceso al Financiamiento*** a ***las Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado de Guanajuato,*** en atención a la

siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La falta de profundidad del mercado financiero mexicano ha sido una de las conclusiones constantes en los diagnósticos sobre la condición que guarda el sector.

Esa problemática que se observa en el sector financiero con indicadores que reflejan los bajos índices de penetraciónen el caso específico de las pequeñas y medianas empresas, es particularmente pronunciada.

Los análisis respecto de las opciones de financiamiento para pequeñas y medianas empresas han señalado diversos limitantes del mercado para crear alternativas que permitan incrementar la viabilidad económica de empresas en este segmento.

Problemas de información asimétrica en la presentación de documentación que se evalúa por las instituciones financieras; elevado nivel de riesgo bajo los parámetros de revisión para el otorgamiento de financiamientos; falta de cobertura de productos crediticios en iniciativas en sectores innovadores; ausencia de historial crediticio en empresas de reciente creación; limitaciones en la identificación de clientes potenciales; e incluso restricciones internas en políticas de intermediarios financieros han sido elementos constantes que se reflejan en evaluaciones sobre las condiciones que guarda el financiamiento a pequeñas y medianas empresas en México.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la falta de una garantía de compromiso, la ausencia de una empresa solidaria o garante, la baja formalización de la empresa y las bajas calificaciones crediticias han sido barreras constantes para el acceso al financiamiento. Asimismo, indica el organismo, estas barreras se ven exacerbadas por la inexistencia de leyes sobre garantías móviles, la falta de un registro de garantías y la ausencia de fondos de garantía. [[10]](#footnote-10)

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señaló en su análisis *Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An Scoreboard* las condiciones que distinguen, en específico, la oferta cred iticia para pequeñas y medianas empresas en el país indicando que, si bien la oferta crediticia a ese sector ha aumentado, existen segmentos que no se encuentran atendidos.

La Comisión Económica para América Latina advierte los problemas en el funcionamiento del mercado de crédito e indica que estos obstaculizan el crecimiento económico de diversos países. [[11]](#footnote-11)

Banco de México en un análisis específico del sector indica que, en particular, las pequeñas y medianas empresas tienen pocas opciones de crédito y baja capacidad de negociación, por lo que son las que enfrentan condiciones de crédito menos favorables. La etapa de desarrollo es uno de los elementos adicionales que sobresalen en el análisis. La capacidad de apalancamiento inicial está

extraordinariamente limitada por lo que empresas de reciente creación enfrentan barreras que impiden su maduración en el mercado.

Las estadísticas recientes en el sector muestran los retos de política pública que deben enfrentarse. Las encuestas de la *Evolución trimestral del financiamiento a las empresas* presentan una imagen transparente sobre los retos que se enfrentan en el sector: [[12]](#footnote-12)

1. El medio más utilizado de financiamiento ocurre a través de los propios proveedores. El porcentaje de empresas que utilizan esta vía de financiamiento supera el 70%. Si bien es una vía que abre opciones de financiamiento, en términos de las ventajas competitivas para estimular las cadenas de suministro sus atractivos son limitados, además de las restricciones para madurar un historial crediticio el cual es determinante para alcanzar posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazos.
2. Es indicativa la cobertura de financiamiento por tamaño de la empresa. En empresas de más de 100 empleados, el 42% utiliza créditos de la banca comercial. Ese porcentaje baja hasta el 26% en empresas de menos de 100 empleados.
3. La estructura de la tasa es reveladora: en empresas de más de 100 empleados, la tasa promedio es de 33% y para empresas de menos de 100 empleados la tasa llega a 37%. Los gastos por comisiones, asimismo, hacen distinción por el tamaño de la empresa con una afectación mayor a las de menos de 100 empleados.
4. La complejidad para la obtención de crédito también revela diferenciaciones que el mercado realiza y que afectan a las pequeñas y medianas empresas. En el rubro respecto a la percepción sobre las condiciones de acceso al crédito bancario los obstáculos son mayores para empresas de menos de 100 empleados.
5. Uno de los rubros más indicativos sobre los factores limitantes para solicitar o utilizar nuevos créditos se vincula con el historial crediticio. Más del 35 % de pequeñas y medianas empresas identifican esta problemática como obstáculo para la obtención de financiamientos.
6. La participación de la banca de desarrollo sigue siendo baja, en niveles entre el 2.6% y el 5.7%, dependiendo del tamaño de la empresa.

Frente a esta problemática que identifica una falla de mercado que exige atención e intervención del sector público por las limitaciones que se observan en el sector financiero, es preciso señalar la relevancia que las pequeñas y medianas empresas tienen en la economía.

Los Censos Económicos han reconocido que las MIPyMES representan el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado. El Estudio sobre la Demografía de los Negocios del INEGI publicado en diciembre de 2021 refiere que más del 99% de los establecimientos del país son micro, pequeños o medianos.

La relevancia de las MIPyMES se sustenta tanto por factores por oferta como de demanda. Además de absorber un gran número de la oferta laboral, también son proveedoras de bienes y servicios por lo que son una pieza determinante en las cadenas de suministro.

Las estrategias de política pública impulsadas a través de programas sectoriales específicos han reconocido la relevancia de estas unidades económicas. Conforme a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que las MIPyMES generan más del 50% del PIB y contribuyen con 7 de cada 10 de los empleos formales que se crean en México, por lo que son un elemento fundamental en el desarrollo económico del país al constituir la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos;

De acuerdo con análisis realizados al Directorio Estadístico de Unidades Económicas, en la región en la región Bajío-Centro-Occidente operan 991 mil 427 empresas: 92.9% se tratan de microempresas, 5.7% tienen una plantilla de 11 a 50 empleados; 1.1 o/o registra de 21 a 250 trabajadores y 0.27% superan las 250 personas.

De acuerdo con el Reporte de Crédito de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México elaborado por KONFIO, siete de cada diez empresarios indican que la falta de financiamiento a las empresas del sector es una de las principales limitantes de crecimiento.

El programa sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2021, señala que la falta de financiamiento es uno de los elementos que explica la baja productividad y consolidación de MIPyMES nuevas.

Las cifras de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 2018, indican que 76.8% de las PYMES y 92.4% de las micro empresas no tienen acceso a alguna fuente de financiamiento.

Por otro lado, respecto de las MIPyMES que sí cuentan con financiamiento, 84.8% de las MIPYMES tienen financiamiento con recursos propios o utilidades reinvertidas, 85.1 % de las MIPyMES tienen financiamiento del sistema financiero formal proveniente de la banca comercial, 12.5% de MIPyMES tienen financiamiento del sistema financiero formal proveniente de sociedades financieras y cooperativas, Cajas de ahorro popular, Casas de empeño, Compañías de financiamiento, Microfinancieras y sólo 2.3% de MIPYMES tienen financiamiento del sistema financiero formal proveniente de la banca de desarrollo.

El Programa Institucional 2020-2024 de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable identifica una de las principales condiciones que se viven en el sector:

*"Las unidades económicas micro, pequeñas y medianas empresas viven en el día a día múltiples problemáticas que se pueden resumir en la falta de productividad y competitividad (estrategias y herramientas de apoyo) para incursionar en los mercados local, regional, nacional y extranjero".*

*( .. .)*

*Se encuentran limitados esquemas de crédito (financiamiento) a estas unidades económicas por el factor de riesgo que conllevan, esta falta de capitalización propicia que no puedan* o *estén en capacidad de optar a ser proveedores de empresas grandes, tener mayores oportunidades de negocios, modernizarse, reconvertirse y comprar tecnología. [[13]](#footnote-13)*

La presente iniciativa tiene por objeto crear un cuerpo normativo que asegure que en Guanajuato existan instrumentos de financiamiento para este segmento de empresas en la entidad. El propósito es contar con vehículos de financiamiento que fomenten el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sujeto a criterios prudenciales, el crédito ofrece herramientas efectivas para fomentar la creación, consolidación y competitividad de unidades económicas ubicadas en este segmento.

El propósito del cuerpo legal que se presenta es contar con herramientas jurídicas que garanticen la existencia de canales de financiamiento que son indispensables para el desarrollo de empresas en la entidad. El objeto es contribuir con decisiones de política pública para cerrar la brecha en las exigencias de la demanda y las condiciones de oferta de recursos crediticios.

Como se ha señalado por organismos multilaterales, la baja participación de las MIPyMEs en el sistema financiero justifica el accionar de los gobiernos para facilitar medidas orientadas a mejorar el acceso al crédito.

Los instrumentos financieros en la experiencia internacional revelan la diversidad de herramientas que se han utilizado a fin de incrementar la profundidad de las políticas crediticias. Estrategias de acceso a crédito con entidades públicas de primer y segundo piso, diversificación de opciones con la inclusión de esquemas de garantías, subsidio a tasa, factoraje e incluso oferta de recursos a través de opciones de cuasicapital, han sido instrumentos que indican la diversidad de opciones que se han impulsado desde el sector público para atender esta falla de mercado que se presenta en el sector financiero.

Eventos recientes como la crisis sanitaria han revelado la importancia de contar con vías de financiamiento alternativas en momentos de caída del ciclo económico. La literatura especializada ha subrayado el problema de ciclicidad que se observa en los sistemas financieros. El crédito se deteriora en momentos de recesión, precisamente cuando resulta más relevante tener opciones contra cíclicas para amortiguar y contrarrestar las afectaciones económicas. Este hecho ha sido confirmado en los análisis de estrés que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuyo propósito es verificar el margen que tienen las instituciones financieras ante escenarios adversos. La conclusión revela que las instituciones financieras consideran el crédito a empresas del sector muy sensible al comportamiento de la actividad económica.

Aún más, análisis académicos han subrayado la brecha financiera que existe entre mujeres y hombres. En ese alcance, se ha indicado que los requisitos de colaterales suelen ser mucho más estrictos para las mujeres, y los requerimientos reglamentarios limitan su acceso al financiamiento. Por ello, es preciso contar con vehículos de financiamiento que tengan una perspectiva de género en sus políticas de colocación a fin de atacar esa brecha. [[14]](#footnote-14)

Bajo esta propuesta, se ofrece a las pequeñas y medianas empresas del estado el acceso a productos crediticios orientados a la conservación y generación de fuentes de empleo. Asimismo, se asegura la existencia de vehículos de apoyo a empresas para favorecer su consolidación y competitividad.

La entidad cuenta con una experiencia relevante sobre la importancia de políticas crediticias enfocadas en el sector. Fondos Guanajuato ha sido una de las herramientas de mayor relevancia para acercar financiamiento a MIPyMES, contar con programas emergentes de crédito en momentos de caídas del ciclo económico, así como la oferta de productos para sectores vulnerables.

Es relevante subrayar que, si bien la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica prevé la promoción de acciones de financiamiento para fortalecer la competitividad y productividad de las empresas, es oportuno contar con un instrumento legislativo específico en razón de la relevancia de políticas crediticias para el desarrollo de empresas.

En ese alcance, la formalización de una legislación específica en esta materia subraya la importancia de contar con herramientas de política crediticia desde el sector público. Ello garantiza la existencia de vías de financiamiento para un sector determinante en la economía del Estado, provee un instrumento efectivo de inclusión financiera, además de que permite definir reglas e indicadores a fin de evaluar permanentemente la sostenibilidad financiera de la estructura administrativa, así como asegurar exista un marco de referencia que permita evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesta la administración. [[15]](#footnote-15)

En ese alcance, la presente iniciativa busca fortalecer el diseño institucional a fin de respaldar el arreglo institucional actual con un soporte legislativo con diversos propósitos:

1. La existencia de vehículos legales pretende asegurar el mantenimiento de programas de gobierno determinantes para el desarrollo económico local bajo una óptica de mediano y largo plazo;
2. El Poder Legislativo respalda las funciones de gobierno al dar sanción legislativa a una estrategia enfocada en apoyar a sectores económicos determinantes para el desarrollo económico local;
3. Un cuerpo legal establece exigencias para la implementación de la política de crecimiento; en ese alcance, la presente iniciativa establece diversos parámetros para procurar la autosostenibilidad, la exigencia por la implantación de un gobierno corporativo y la existencia de indicadores para la evaluación de las políticas en la materia.

La iniciativa se encuentra alineada al Programa de Acción Legislativa de Acción Nacional, el cual establece:

*Debemos reconocer la contribución de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas* a *la creación de empleo y la postura del gobierno del Estado para mitigar* los *efectos de la pandemia, en contrapuesta de la indiferencia y omisión por parte del gobierno federal.*

*Nuestro Programa de Acción se encuentra enfocado en el impulso de las pequeñas empresas, y el emprendimiento de los jóvenes y de* las *mujeres; también le apostamos a la mentefactura como una transformación de lo intelectual y del conocimiento.*

La iniciativa contempla la existencia de un vehículo legal y administrativo a fin de garantizar la celeridad en la administración de recursos para colocaciones de crédito, identifica los productos en atención a la demanda y exige la existencia de indicadores que permitan el monitoreo de la salud financiera de la estrategia.

En atención a lo dispuesto en el ARTÍCULO 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se indica que la iniciativa tendría el siguiente:

1. ***Impacto jurídico.*** Esta Soberanía cuenta con las facultades para la creación del presente cuerpo normativo. La nueva legislación no afecta otros cuerpos normativos.
2. ***Impacto administrativo.*** La iniciativa contempla la creación de un vehículo responsable del proceso de administración de la estrategia de financiamiento para MIPyMES.

El Ejecutivo en el uso de facultades emitirá las disposiciones aplicables.

En razón de la existencia de Fideicomisos para la promoción de políticas crediticias, la actual propuesta normativa permitirá la transición de este arreglo legal a una sociedad de capital estatal mayoritario. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado prevé los supuestos aplicables para primero, la liquidación del fideicomiso y, segundo, la constitución de empresa de participación estatal mayoritaria.

1. ***Impacto presupuestario.*** Aquellos relacionados con la constitución del vehículo legal y administrativo que habrá de ser la instancia para la implementación de las políticas objeto

de la iniciativa.

1. ***Impacto social.*** Como ha sido expuesto en la presente Exposición de Motivos, dada la relevancia del sector en el que está orientada la reforma destaca su relevancia para fortalecer MIPyMES determinantes en la absorción de oferta laboral y en la cadena de suministro en la entidad.

Por los anteriores considerandos, se somete a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

***DECRETO***

***ÚNICO.*** *Se crea* ***la Ley para Fomentar el Acceso al Financiamiento* a *las Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado de Guanajuato, para quedar* como *sigue:***

***Ley para Fomentar el Acceso al Financiamiento a las Pequeñas***

***y Medianas Empresas en el Estado de Guanajuato***

**Capítulo I**

**Del Ámbito de Aplicación y Objeto de la Ley**

***Objeto de la Ley***

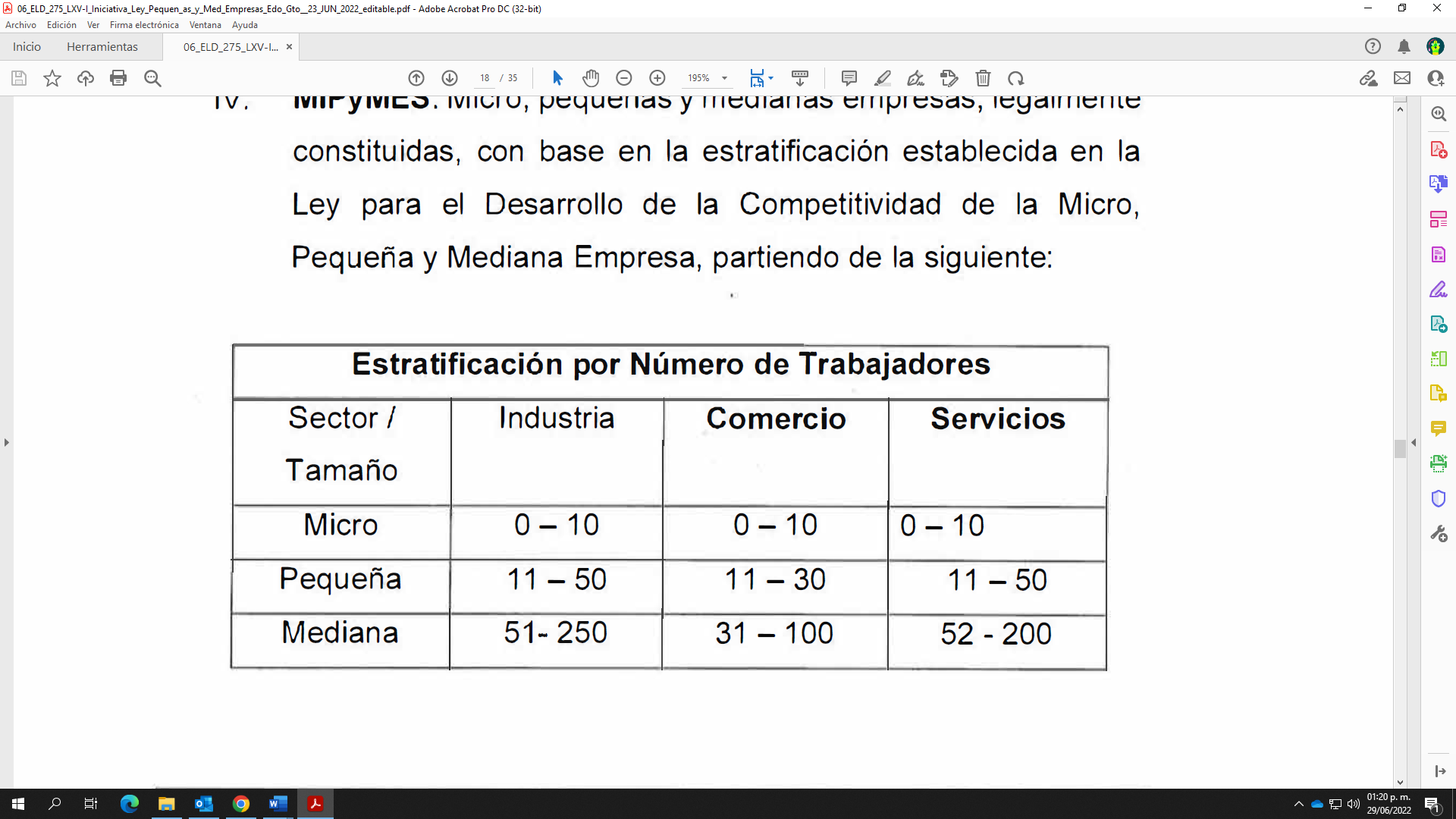
**ARTÍCULO 1.** La presente Ley tiene por objeto promover el desarrollo económico del Estado a través de facilitar y promover el acceso al financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas a fin de apoyar su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

La Ley es de observancia general en todo el Estado de Guanajuato y sus disposiciones son de orden público e interés social.

***Definiciones***

**ARTÍCULO** 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

1. **Financiamiento (s):** Cantidad de recursos líquidos que se aprueba entregar a la Persona Acreditada, conforme los parámetros, criterios y condiciones que al efecto se fijen en las Reglas de Operación.
2. **Joven Emprendedor.** Persona de los 12 hasta los 29 años de edad, que identifica una oportunidad de negocio o necesidad de un producto o servicio y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha, es decir, convertir una idea en un proyecto concreto, ya sea una empresa o una organización social, que genere algún tipo de innovación y empleos;
3. **Ley:** la Ley para Fomentar el Acceso al Financiamiento de Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado de Guanajuato.
4. **MIPyMES:** Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, partiendo de la siguiente:



1. **Perspectiva de Género:** visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades, para acceder al desarrollo social y la representación en los ámbitos de toma de decisiones.
2. **Programa:** la identificación de los productos y servicios crediticios.
3. **Reglas de Operación:** instrumentos normativos que tienen por objeto normar la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y trasparente de los Programas de financiamiento y definen las características y condiciones aplicables para acceder a ellos. Dicho instrumento se emite por la Secretaría.
4. **Secretaría:** la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

***Objetivos***

**ARTÍCULO** 3. Son objetivos de esta Ley:

1. Crear un marco normativo para desarrollar acciones a fin de fomentar, promover y proteger el desarrollo económico sustentable, así como el establecimiento, consolidación, crecimiento y mejora de empresas, empresarios y emprendedores, establecidos o por establecerse en el Estado de Guanajuato;
2. Establecer una política integral de apoyo a MIPyMES a través de estrategias de acceso a vías crediticias.
3. Contribuir al desarrollo económico del estado a través del otorgamiento de financiamientos que fomenten la creación, consolidación y competitividad de las MIPyMES.
4. Fomentar el acceso al crédito, en particular a las MIPyMES para el desarrollo de proyectos que promuevan la inversión productiva, que permitan generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, y más y mejores emprendedores.
5. Facilitar el acceso al financiamiento a través de estrategias de coordinación con la banca de desarrollo.
6. Promover el acceso a alternativas de financiamiento competitivas con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.
7. Fomentar el desarrollo de programas de financiamiento que apoyen el diseño y ejecución de proyectos productivos en el estado.
8. Impulsar el aumento de la productividad de las MIPyMES y promover el crecimiento, desarrollo y consolidación de sus servicios a través de productos crediticios.
9. Fomentar la capacidad productiva, competitiva y desarrollo económico a través de programas de asesoría y capacitación.
10. Promover la inclusión financiera y el acceso a productos crediticios bajo una perspectiva de género a fin de contribuir a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor así como la igualdad de derechos y oportunidades para acceder al desarrollo social.
11. Promover productos financieros desde lo local.
12. Fomentar la vinculación con políticas impulsadas por la Banca de Desarrollo, así como con entidades y organismos del sector privado en el cumplimiento del objeto de la presente Ley,
13. Impulsar el capital emprendedor en la entidad, con particular enfoque de apoyos a la juventud de la entidad.
14. Garantizar la existencia de indicadores que permitan evaluar las políticas crediticias orientadas a las MIPyMES, así como su procurar la sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazos.

**Capítulo II**

**Del vehículo para promover el acceso al financiamiento de las MIPyMES**

***Vehículo legal***

**ARTÍCULO 4.** El Poder Ejecutivo contará con un vehículo legal y administrativo responsable del cumplimiento del objeto de la presente Ley. En el ejercicio de sus facultades, se emitirán las disposiciones aplicables para establecer las facultades, funciones y organización correspondiente.

***Sectorización***

**ARTÍCULO** 5. La Secretaría coordinará sectorialmente las políticas derivadas de la presente Ley a efecto de armonizar y coordinar las estrategias de financiamiento en el marco de la política de crecimiento económico y atención de sectores prioritarios en el estado de Guanajuato.

***Gobierno corporativo***

**ARTÍCULO** 6. La administración deberá procurar una política de gobierno corporativo con la adopción de las mejores prácticas en la industria y los procedimientos para el otorgamiento de créditos estarán sujetos a los principios de máxima difusión.

La administración procurará el mantenimiento de cuerpos colegiados en toma de decisiones y deberá expedir los manuales correspondientes para la administración integral de riesgos y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellos instrumentos administrativos a efecto de procurar la sostenibilidad financiera de la estrategia de otorgamiento de créditos.

**Capítulo III**

**De las estrategias, políticas, programas y reglas para el impulso**

**al financiamiento a MIPyMES**

***Destinatarios***

**ARTÍCULO** 7. Las políticas de acceso al financiamiento considerarán alternativas crediticias para cualquier persona física o moral que cuente con una unidad económica y que tenga su domicilio en el estado de Guanajuato y que cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad que se deberán señalar en Reglas de Operación.

**ARTICULO** 8. Las políticas y estrategias crediticias considerarán opciones de financiamiento para personas físicas o morales cuya actividad empresarial sea artesanal, agroindustrial, industrial, comercial y/o de servicios, incluyendo empresas del ramo de la construcción y de los sectores secundario y terciario, en apego a las reglas que se emitan.

**ARTÍCULO** 9. Las políticas y estrategias se enfocarán en MIPyMES en los términos establecidos por la Ley a través de programas que consideren su diversidad de características y condiciones.

***Oferta de Productos Crediticios***

**ARTÍCULO** 10. La oferta de productos crediticios materia de la presente Ley deberá incluir:

1. Alcance geográfico: servicios que cubran a los 46 municipios de la entidad tanto en la zona rural como en la urbana.
2. Productos financieros diversificados en función de la naturaleza diferenciada de las MIPyMES y en atención a la estratificación que se indica en el ARTICULO 2 de la presente

Ley.

1. Productos financieros para la adquisición y adecuaciones físicas en bodegas, naves industriales y locales comerciales.
2. Productos que provean financiamiento para capital de trabajo incluyendo la compra de materia prima, mercancía, maquinaria, adecuaciones físicas, mobiliario y equipo.
3. Productos que permitan disminuir el costo financiero de obligaciones previamente contraídas, incluyendo la consolidación de pasivos y reestructuras a fin de disminuir cargas financieras, mejorar plazos y otorgar certeza para el cumplimiento de obligaciones.
4. Productos financieros orientados bajo una perspectiva de género a fin de contrarrestar las brechas existentes en el mercado.
5. Productos financieros orientados a promover el desarrollo de proveedores en la entidad a través de operaciones de factoraje financiero, considerando las autorizaciones necesarias para tal efecto.
6. Productos financieros que permitan el acceso a financiamientos con tasas de interés preferenciales.
7. Productos enfocados en emprendedores a fin de promover la creación de nuevas empresas, consolidar las de reciente creación y fomentar la generación y conservación de empleo.
8. Programas crediticios sectoriales para apoyo de empresas a fin de fortalecer su competitividad, así como por su relevancia económica en la entidad.
9. Programas emergentes de apoyo crediticio para contrarrestar y mitigar caídas del ciclo económico.
10. Programas de financiamiento para promover la expansión económica en el Estado.
11. Productos y servicios en materia crediticia que permitan el cumplimiento del objeto de la presente Ley.

***Instrumentación a través de Programas***

**ARTÍCULO 11.** La oferta de los productos y servicios al amparo de la Ley se realizará a través de Programas que permitan su identificación, objeto, población objetivo, diferenciación y seguimiento.

***Reglas de Operación***

**ARTÍCULO 12.** Los Programas estarán sujetos a Reglas de Operación, las cuales establecerán las condiciones aplicables en cada caso y los requerimientos que deberán cubrir los solicitantes.

Dichos instrumentos tendrán por objeto asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

**ARTÍCULO 13.** La emisión de Reglas de Operación tendrá como objeto normar la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y trasparente de los programas de financiamiento, así como establecer el procedimiento para su solicitud y otorgamiento.

Se deberá asegurar su difusión a través de medios que faciliten su acceso todo público.

***Convenios con fa Banca de Desarrollo y el sector privado***

**ARTÍCULO** 14. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, se podrán formalizar acuerdos, convenios, así como ejecutar estrategias de coordinación con instituciones de la banca de desarrollo a fin de potenciar los recursos disponibles para el financiamiento de MIPyMES.

Asimismo, al amparo de la presente Ley, podrán realizarse estrategias conjuntas entre el sector público y el sector privado para ampliar alcances, objetivos y metas en el cumplimiento del propósito de la presente Ley.

***Autosostenibilidad***

**ARTÍCULO** 15. La oferta de productos crediticios, su administración y evaluación, así como las políticas crediticias procurarán la autosostenibilidad del organismo.

**Capítulo IV**

**De la promoción a emprendedores en la entidad**

***Impulso a emprendedores***

**ARTÍCULO** 16. Se deberá tener un programa de financiamiento específico para impulsar iniciativas productivas de la juventud en la entidad. Para tal efecto, se deberán promover políticas y estrategias enfocadas en la cultura emprendedora de los jóvenes guanajuatenses a fin de fomentar la inclusión de los jóvenes en el sector empresarial.

**ARTÍCULO** 17. Serán sujetos de crédito para emprendedores en la entidad todas las personas físicas entre los 18 y los 29 años de edad, residentes del Estado de Guanajuato, que presenten proyectos

productivos, propuestas de creación de empresas, o iniciativas que generen y conserven fuentes de empleo.

**ARTÍCULO** 18. En el otorgamiento de créditos a jóvenes emprendedores se considerarán y privilegiarán los siguientes criterios:

1. Creación y conservación de fuentes de empleo para jóvenes.
2. Proyectos que tengan un enfoque de género y que promuevan la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres jóvenes.
3. Generación de valor económico en los sectores económicos prioritarios de regiones y municipios de la entidad a fin de fomentar el desarrollo local de comunidades.
4. Uso racional de los recursos naturales a fin de fomentar la protección y cuidado del medio ambiente;
5. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia;
6. Aplicación de tecnologías de vanguardia en el desarrollo de procesos productivos.
7. Proyectos que tengan enfoque a partir de la mentefactura.

**ARTÍCULO** 19. Para la promoción de emprendedores en la entidad, al amparo de la presente Ley se podrán establecer convenios con instituciones académicas, organismos empresariales y asociaciones que impulsan estrategias de capital privado a efecto de identificar proyectos innovadores y promover iniciativas de coparticipación de recursos para potenciar el capital emprendedor.

**ARTÍCULO** 20. Las políticas de emprendimiento de la juventud deberán diseñarse, ejecutarse y evaluarse bajo una perspectiva de género.

**Capítulo V**

**De los indicadores de medición**

***Indicadores***

**ARTÍCULO 21.** La administración deberá generar y mantener actualizados indicadores de medición sobre el desempeño en el otorgamiento de créditos; la solidez financiera de sus políticas; las condiciones y características de su portafolio; la condición de su cartera, incluyendo la cartera vencida; el nivel de concentración de cartera, la evolución, integración de sus activos y el nivel de morosidad; los volúmenes de operación por sector, región y municipio; los volúmenes de colocación; el impacto de las políticas crediticias a las MIPyMES; el enfoque de género en sus estrategias de colocación; la comparación de tasas aplicables frente a las existentes en el mercado; el impulso a emprendedores en la entidad y aquellos indicadores que permitan evaluar el desempeño de su gestión.

Los indicadores se desarrollarán bajo la metodología del Marco Lógico y deberán estar alienados con el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040.

Los indicadores deberán permitir evaluar la sostenibilidad financiera y, en su caso, hacer los ajustes necesarios para atender posibles contingencias.

Se incluirá el detalle de indicadores como parte de la información integrada en la Cuenta Pública.

**Capítulo VI**

***De* la auditoría y evaluación**

***Auditoria y evaluación***

**ARTÍCULO** 22. Los recursos estatales y su aplicación en el cumplimiento de los fines de esta Ley podrán ser auditados y evaluados por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o las instancias correspondientes en cuanto los faculten sus atribuciones.

**Transitorios**

**ARTÍCULO** Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

**Guanajuato, Gto., a 21 de junio de 2022**

**Diputadas y Diputados integrantes del**

**Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**

**Dip. Luis Ernesto Ayala Torres.**

**Coordinador**

**Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas**

**Dip. Bricio Balderas Álvarez**

**Dip. Susana Bermúdez Cano**

**Dip. José Alfonso Borja Pimentel**

**Dip. Angélica Casilla Martínez**

**Dip. Martha Guadalupe Hernández Camarena**

**Dip. María de la Luz Hernández Martínez**

**Dip. César Larrondo Díaz**

**Dip. Martín López Camacho**

**Dip. Briseida Anabel Magdaleno González**

**Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Dp. Aldo Iván Márquez Becerra**

**Dip Noemí Márquez Márquez**

**Dip. Janet Melanie Murillo Chávez**

**Dip. Jorge Ortiz Ortega**

**Dip. Armando Daniel Hernández**

**Dip. Lilia Margarita Rionda Salas**

**Dip. Miguel Ángel Salim Alle**

**Dip. Cristina Soto Escamilla**

**Dip. Víctor Manuel Zanella Huerta**

* **PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA A EFECTO DE ADICIONAR LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA POR DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

**NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION XXI**

**DEL ARTICULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA**

**LXV LEGISLATURA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

**P R E S E N T E.**

La suscrita proponente Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Diputada Local de la LXV Legislatura del Estado de Guanajuato y quienes con ella suscriben acompañando la presente, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Congreso Local, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 56 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en el artículo 167, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, someto a su consideración la ***iniciativa de reforma que adiciona la fracción XXI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato***, conforme a la siguiente:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Así, se caracteriza por ser un trabajo que es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; y/o interfiere con su escolarización puesto que: les priva de la posibilidad de asistir a clases; les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.[[16]](#footnote-16)

De esta manera, una actividad especifica se podrá calificar o no como trabajo infantil dependiendo de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país.[[17]](#footnote-17)

De acuerdo con la OIT, de las peores formas de trabajo infantil, tenemos la esclavitud y prácticas análogas como la trata infantil, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, los niños en conflictos armados, de lo que deriva lo siguiente:

“La **esclavitud** se da cuando una persona es propiedad de otra, para quien está obligada a trabajar, sin voz alguna en lo que le sucede. A los esclavos se les retiene contra su voluntad desde el momento de su captura, compra o nacimiento, y no se les permite abandonar ni rechazar el trabajo.

La **trata infantil** es el comercio ilegal, compra, venta, traslado, de niños para su explotación laboral o sexual. Se trafica con niños por muchas razones, incluso el trabajo forzoso, la prostitución y el reclutamiento de niños soldados y mendigos.

La **servidumbre por deudas** equivale al trabajo forzoso, cuando se ofrece mano de obra a modo de reembolso de un préstamo que no se consigue restituir en efectivo o en especie.

La **condición de siervo** ocurre cuando se obliga a una persona a vivir y trabajar en tierras que pertenecen a otra persona, contra remuneración mínima o nula.

El **trabajo forzoso** es el que se obliga a realizar a alguien contra su voluntad. Por ejemplo, se compele a los niños en conflictos armados a combatir y a servir de cocineros, cargadores y mensajeros. Son objeto de malos tratos y de explotación, y se les exige que maten o mutilen a otros seres humanos.**”[[18]](#footnote-18)**

De acuerdo con los Tratados Internacionales[[19]](#footnote-19), el artículo 4° de nuestra Ley Fundamental, así como lo establecido en los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias se encuentran obligados a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de las personas, y respecto de las niñas, niños y adolescentes, su interés superior implica:

“…que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. sí, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad.”[[20]](#footnote-20)

En el ámbito de las competencias y obligaciones legales de este Poder Legislativo, la fracción IV del artículo 22 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato establece que el Poder Legislativo deberá favorecer el trabajo legislativo con un enfoque que garantice los derechos de aquellos.[[21]](#footnote-21)

La presente iniciativa tiene como objetivo adicionar la fracción XXI al artículo 28 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ser este artículo donde de manera enunciativa, más no limitativa, se establecen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, la necesidad de que se establezca en la fracción que se adiciona que las niñas, niños y adolescentes estriba en reconocer el derecho de la niñez a ser **protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.**

Ello como una primera medida afirmativa[[22]](#footnote-22) que corrija situaciones patentes de desigualdad en el disfrute y/ ejercicio de los derechos de la niñez. Lo anterior, dado que, recientemente, se ha destacado que nuestro Estado ocupa el sexto lugar a nivel nacional de menores trabajando, lo anterior, de acuerdo con datos que, hasta el año 2019, la Procuraduría de Protección de los niños, niñas y adolescentes en el Estado de Guanajuato ha proporcionado.

A manera de ejemplo, y con el fin de evidenciar la necesidad de protección de la niñez contra el trabajo infantil, en el mes de abril de este año, se documentó un hecho que generó gran indignación en Guanajuato y a nivel nacional: quedó descubierto un grupo de padres de familia que ofrecían la renta de sus hijos por 100 pesos para que trabajaran pidiendo limosna en San Miguel de Allende.[[23]](#footnote-23)

Inclusive, el Presidente Municipal, dio a conocer la denuncia. Refirió otorgar apoyos económicos a las madres para que no tuvieran que “prestar a sus hijos”. Sin embargo, ese lamentable hecho solo retrata el grave problema de trabajo infantil que se vive en nuestro Estado.

De esta manera, es necesario que, la situación de calle, explotación y de trabajo de nuestras niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado cambie, por ello, en aras de garantizar sus derechos humanos es necesario como, una primera medida afirmativa, impactar en la ley el reconocimiento de este derecho.

Para mayor claridad véase el siguiente cuadro:

|  |  |
| --- | --- |
| **TEXTO VIGENTE.** | **PROPUESTA LEGISLATIVA.** |
| **Artículo 28.** Para efectos de la presente Ley  son derechos de niñas, niños y adolescentes,  de manera enunciativa más no limitativa, los  siguientes:  **I.** Derecho a la vida, a la  supervivencia y al desarrollo;  **II.** Derecho de prioridad;  **III.** Derecho a la identidad;  **IV.** Derecho a vivir en familia;  **V.** Derecho a la igualdad;  **VI.** Derecho a no ser discriminado;  **VII.** Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;  **VIII.** Derecho a una vida libre de  violencia y a la integridad personal;  **IX.** Derecho a la protección de Derecho a la inclusión plena de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;  **XI.** Derecho a la educación;  **XII.** Derecho al descanso y al esparcimiento;  **XIII.** Derecho al ejercicio de sus libertades de pensamiento, conciencia, religión y cultura;  **XIV.** Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;  **XV.** Derecho de participación;  **XVI.** Derecho de asociación y reunión;  **XVII.** Derecho a la protección de la intimidad;  **XVIII.** Derecho a la seguridad jurídica y al  debido proceso;  **XIX.** Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; y  **XX.** Derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la Ley  Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  Quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos.  Los derechos de niñas, niños y adolescentes se ejercerán conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y su derecho a vivir en familia, y sin menoscabo de las responsabilidades de quienes ejercen su representación.  Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin menoscabo de ningún tipo o condición; en aquellos de competencia federal, se coordinará con el ámbito que señalen las disposiciones aplicables. | **Artículo 28. …**  **I. …**  **II. …**  **III. …**  **IV. …**  **V. …**  **VI. …**  **VII. …**  **VIII. …**  **IX. …**  **X. …**  **XI. …**  **XII. …**  **XIII. …**  **XIV. …**  **XV. …**  **XVI. …**  **XVII. …**  **XVIII. …**  **XIX. …**  **XX.** Derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, así como a  los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  ***XXI. Derecho a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.***  Quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos.  …  **…** |

Conforme a todo lo anterior, se puede afirmar que a merced de los argumentos aquí expuestos, resulta incontestable la pertinencia de la propuesta de reforma que se presenta, a efecto de establecer como un derecho de las niñas, niños y adolescentes estar protegidos contra al trabajo infantil.

De ser aprobada, la presente iniciativa tendrá los siguientes impactos de conformidad con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato:

1. **Impacto jurídico:** Se adiciona la fracción XXI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.
2. **Impacto administrativo:** Tocante a este aspecto, el impacto administrativo que se observa, se traduce en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de todas las autoridades en llevar a cabo la promoción, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos fundamentales de la niñez.
3. **Impacto presupuestario:** No tiene un impacto presupuestario.
4. **Impacto social:** Se contribuye a llevar a cabo la promoción, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos fundamentales de la niñez.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado de Guanajuato el siguiente:

**DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.** - Se adiciona la fracción XXI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, para quedar de la siguiente manera:

**Artículo 28.** Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

**I. …**

**II. …**

**III. …**

**IV. …**

**V. …**

**VI. …**

**VII. …**

**VIII. …**

**IX. …**

**X. …**

**XI. …**

**XII. …**

**XIII. …**

**XIV. …**

**XV. …**

**XVI. …**

**XVII. …**

**XVIII. …**

**XIX. …**

**XX.** …

***XXI. Derecho a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.***

Quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos.

…

**…**

**TRANSITORIOS**

**ÚNICO.-**El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente, al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado.

**GUANAJUATO, GTO., A 23 DE JUNIO DE 2022.**

**ATENTAMENTE.**

**RUTH NOEMI TISCAREÑO AGOITIA.**

**DIPUTADA DE LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**ALEJANDRO ARIAS AVILA.**

**DIPUTADO DE LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES.**

**DIPUTADO DE LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.**

* **PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA EDITH MORENO VALENCIA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, POR LA QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XI RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 124 Y SE ADICIONA EL INCISO O, A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 76, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**Diputada Irma Leticia González Sánchez**

**Presidenta de la Mesa Directiva**

**Congreso del Estado de Guanajuato**

**LXV Legislatura Presente.**

La que suscribe, **Diputada Martha Edith Moreno Valencia,** integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y en el artículo 167, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito someter a la consideración de esta Asamblea para su aprobación, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona el inciso “o” a la fracción V del articulo 76 y se adiciona la fracción XII, recorriéndose la subsecuente y se reforma el último párrafo al artículo 124 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en atención a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El 24 de diciembre del 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reforman los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se reconoce el derecho de las personas jóvenes a su desarrollo integral, a través de políticas públicas que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. El decreto también otorga al Congreso de la Unión facultades para establecer la concurrencia de competencias en materia de formación y desarrollo integral de la juventud. Ambas modificaciones constituyen pasos decisivos hacia la garantía plena de derechos de las personas jóvenes.

Sumar esfuerzos para erradicar las condiciones de pobreza, discriminación, violencia y diversos rezagos sociales que afectan a los jóvenes es tarea de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno. Generar un marco normativo que empodere a los jóvenes es atender un compromiso social necesario en nuestros municipios. Hoy la realidad que vivimos en Guanajuato nos obliga a ser críticos, objetivos e imparciales en la evaluación de los resultados de las políticas públicas con perspectiva de juventud, porque hasta el día de hoy los esfuerzos han sido insuficientes.

Los jóvenes somos uno de los sectores más activos en la exigencia de hacer posible un estado, un país y un mundo más justo y próspero. Somos la fuerza más activa y vital de la sociedad. Somos los más ansiosos de aprender, y los menos conservadores en su pensamiento.

Actualmente cerca de 1,804 millones de personas en el mundo tienen entre 15 y 29 años, lo que representa casi una cuarta parte de la población mundial. En México las y los jóvenes representamos un grupo poblacional dinámico y con un crecimiento significativo. Existen más de 31 millones de personas jóvenes en todo el país, representamos el 24.8% de la población total. En Guanajuato la edad promedio es de 28 años y somos 1 millón 925 mil 310 jóvenes, es decir, representamos el 32% de la población total del estado.

El 72% de la población guanajuatense vive en zona urbana y el 28% en zona rural por ello es necesario generar políticas públicas con perspectiva de juventud que atiendan a las y los jóvenes en el campo y la ciudad, en especial a todas y todos aquellos que hoy viven en condiciones de pobreza, marginalidad, vulnerabilidad y falta de oportunidades Por otro lado, un 42.9% de los mexicanos entre 15 y 29 años tiene carencias en educación, salud, vivienda y alimentación y sus ingresos no les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas.

Durante la juventud las personas toman decisiones y enfrentan oportunidades que determinarán el rumbo del resto de su existencia: definen si comienzan su vida laboral o si siguen su trayectoria académica; comienzan a ver los frutos de muchos años de inversión en su capital humano; inician su vida sexual; tienen sus primeros acercamientos con el tabaco, el alcohol y otros tipos de drogas, legales e ilegales, y comienzan a ejercer de forma plena los derechos y obligaciones de la ciudadanía.

La administración pública municipal es el órgano gubernamental que se encarga de convertir los objetivos, planes y programas en acciones y resultados concretos que tiendan a satisfacer las expectativas de bienestar de los habitantes. Como base demográfica del municipio, el sector juvenil se convierte en un foco de atención urgente para el gobierno que aspira a ofrecerles, además de los servicios básicos para su desarrollo, las posibilidades de apoyo económico, laboral o académico a fin de contar con jóvenes capaces de contribuir con su energía y dinamismo al desarrollo de la ciudad.

La implementación de políticas de fomento, protección y desarrollo de actividades propias de la juventud debe guiarse por criterios de igualdad de oportunidades, equidad de género, atención a grupos vulnerables, prevención de adicciones e impulso de liderazgos y talentos. En este sentido, resulta de suma importancia que el Estado y los Municipios establezcan disposiciones normativas, reglamentarias y legislativas para dar acciones afirmativas.

Los jóvenes demandan más espacios de participación donde puedan ejercer plenamente sus derechos; aspiran a más oportunidades para su desarrollo. Demandan la creación en los municipios de unidades administrativas que apliquen programas focalizados a los jóvenes. Es por ello por lo que la actualización de nuestros cuerpos normativos en materia de atención a los jóvenes se hace indispensable dado el impacto que tiene actualmente ese grupo poblacional y su proyección a futuro.

Por eso la importancia de que la iniciativa que hoy sometemos a su consideración, y que implica incrementar la atención de manera integral de los jóvenes en los 46 municipios para que todos los municipios cuenten con Dependencias para la Atención a la juventud, dichas dependencias buscarán promover políticas públicas con perspectiva de juventud que garanticen sus derechos, bajo principios de inclusión social y la igualdad de oportunidades, procurando en todo momento el empoderamiento de la juventud.

Por ello, dichas dependencias deberán contar con presupuesto de manera progresiva, facultades y recursos necesarios para dicho fin. Debemos de ser congruentes y responsables con la realidad social de nuestro estado, tenemos el deber moral, social, jurídico y político de sumar esfuerzos, voluntades y capacidades para ofrecer leyes que den soporte al andamiaje jurídico de nuestro Guanajuato, de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes.

No se trata de un tema nuevo, sino que forma parte de las estrategias que la federación y las distintas entidades federativas, han planteado para tratar de mitigar los efectos adversos contra los jóvenes, dada la concurrencia de distintos efectos negativos en su persona, familias y la probable comisión de delitos contra su integridad. En ese sentido, consideramos que la existencia de unidades municipales que brinden atención a nivel local, permite fortalecer la integridad de los jóvenes que habitan en sus territorios, sobre todo considerando, que en muchas ocasiones por falta de una adecuada orientación, se ven involucrados en temas de violencia y son vulnerables a las redes de delincuencia organizada quien advierte estas debilidades en el tejido social para impactar con la comisión de delitos.

En los pasados comicios el voto de las juventudes fue relevante porque elevó su participación. Hoy están exigiendo políticas públicas, reglamentación y se están involucrando en el acontecer político de nuestro estado. Tenemos que escucharlos.

Hoy tenemos 19 municipios que NO cuentan con un Instituto de Juventud, si bien algunos municipios cuentan con un área de atención a la juventud, es de suma importancia que esta se pueda hacer un instituto para darles certeza jurídica y presupuestal.

La misión del Instituto es promover, generar y articular políticas públicas integrales de juventud, que surjan del reconocimiento de los jóvenes, como sujetos y autores de su propio destino, que responden a sus necesidades, expectativas y propuestas, proporcionando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena en el desarrollo nacional.

Tiene la finalidad de garantizar a las y los jóvenes el acceso a servicios de salud, vivienda y educación, así como al empleo digno y a canales de participación, sienta las bases para que la juventud sea un grupo productivo que participe activamente en el aumento de los niveles de bienestar, inversión y desarrollo en el país.

Su óptimo funcionamiento depende en gran medida de dotarlas de capacidad de decisión, con recursos presupuestarios y personal profesionalizado, así como oportunidades para influir en la formulación de todas las políticas gubernamentales.

De acuerdo con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos tendrá, de ser aprobada, los siguientes impactos:

**I. Impacto jurídico:** Se adiciona el inciso “o” a la fracción V del articulo 76 y se adiciona la fracción XII, recorriéndose la subsecuente y se reforma el último párrafo al artículo 124 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

**II. Impacto administrativo:** Se tendrá una dependencia municipal de la Administración Pública para la atención a los Jóvenes.

**III. Impacto presupuestario:** La presente iniciativa supone un impacto presupuestario en los municipios que deberá contemplarse a partir de sus leyes de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2023.

**IV. Impacto social:** Se beneficiará a más de 1,925,000 jóvenes que viven en los 46 municipios en el Estado, al tener una dependencia especializada en temas de políticas públicas para la juventud. Por lo anterior expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se adiciona el inciso “o” a la fracción V del articulo 76 y se adiciona la fracción XI, recorriéndose la subsecuente y se reforma el último párrafo al artículo 124 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes términos:

**Artículo 76.** Los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:

Fracciones I a IV ...

**V.** En materia de participación social, desarrollo social, asistencial y económico, salud pública, educación y cultura, científico y tecnológico:

Incisos “a” a “n” ...

***o) Promover políticas públicas con perspectiva de juventud que garanticen los derechos de las y los jóvenes, acordes a la inclusión social y la igualdad de oportunidades, procurando en todo momento el empoderamiento de la juventud.***

**Dependencias municipales**

**Artículo 124.** Para el estudio y despacho de los diversos ramos de la administración pública municipal, el Ayuntamiento establecerá́ las siguientes dependencias:

Fracciones I a X ...

**XI. Atención a los Jóvenes**

Los ayuntamientos en el reglamento correspondiente deberán señalar las atribuciones que tendrán las dependencias señaladas en las fracciones IV a XI de este artículo; asimismo, podrán otorgarles la denominación que corresponda atendiendo a su organización administrativa.

**TRANSITORIOS:**

**Primero. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**Segundo. -** Los ayuntamientos deberán actualizar los reglamentos correspondientes, a fin de señalar las atribuciones que tendrá la dependencia de Atención a los Jóvenes, en un lapso no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

**Diputada Martha Edith Moreno Valencia**

**Grupo Parlamentario de Morena**

**Guanajuato, Gto., 21 de junio de 2022.**

* **PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, DE LA LEY DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.**

**Diputada Irma Leticia González Sánchez**

Presidenta de la Mesa Directiva

Congreso del Estado de Guanajuato

LXV Legislatura

P r e s e n t e

Diputadas y Diputados del **Grupo Parlamentario de Morena** en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 56 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; la fracción II del artículo 167, así como el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito poner a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato,** con fundamento en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Las personas con discapacidad incluyen a quienes tienen alguna limitación o deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás[[24]](#footnote-24).

En este sentido, los derechos humanos de las personas con discapacidad se enfrentan con múltiples barreras para su garantía y pleno ejercicio. Estas barreras pueden acotarse de forma general, **a la inclusión efectiva de las personas con discapacidad,** pues la perspectiva de derechos humanos supone la necesidad de realizar ajustes específicos para que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos los bienes y servicios: desde asistir a la escuela, hasta trabajar y participar en la vida pública del país en igualdad de condiciones[[25]](#footnote-25).

Entre los principales obstáculos para la inclusión de las personas con discapacidad están las **barreras de acceso a la participación económica,** mismas que se traducen en una **situación de vulnerabilidad por falta de ingresos.** Según el último censo de población y vivienda, sólo 4 de cada 10 personas con discapacidad mayores de 15 años tienen participación económica.

En el estado de Guanajuato existen 285,615 **personas con discapacidad**, equivalentes al 4.63% de la población del estado[[26]](#footnote-26). Adicionalmente, 18% de la población con discapacidad en el estado de Guanajuato, equivalente a 51,694 personas, no cuenta con afiliación a servicios de salud, lo cual también les coloca en una situación de vulnerabilidad importante.

Ante esta situación, la política de inclusión efectiva de las personas con discapacidad del Gobierno Federal ha contemplado, entre otras medidas, **el reconocimiento constitucional del derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico.**

Dicha medida, aunque impulsada por la *Cuarta Transformación*, fue respaldada en 2020 por prácticamente todas las legislaturas locales, incluyendo a este Congreso del Estado de Guanajuato, en donde se aprobó la minuta de reforma constitucional por unanimidad.

El derecho al apoyo económico en mención se incorporó al texto constitucional en los siguientes términos:

El Estado **garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente** en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza[[27]](#footnote-27).

Este derecho, como parte del andamiaje institucional del nuevo régimen de bienestar que se está construyendo desde hace 4 años en México, es un piso mínimo blindado constitucionalmente para contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad. Esta contribución, se da en la medida en que este derecho permite romper barreras de acceso a los servicios sociales y al bienestar por parte de este segmento poblacional.

Por lo anterior, las y los iniciantes de esta propuesta consideramos necesario incorporar en la Constitución Local el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico. Dicha incorporación permitiría armonizar el aparato jurídico fundamental de la entidad en materia de derechos humanos y bienestar social de las personas con discapacidad.

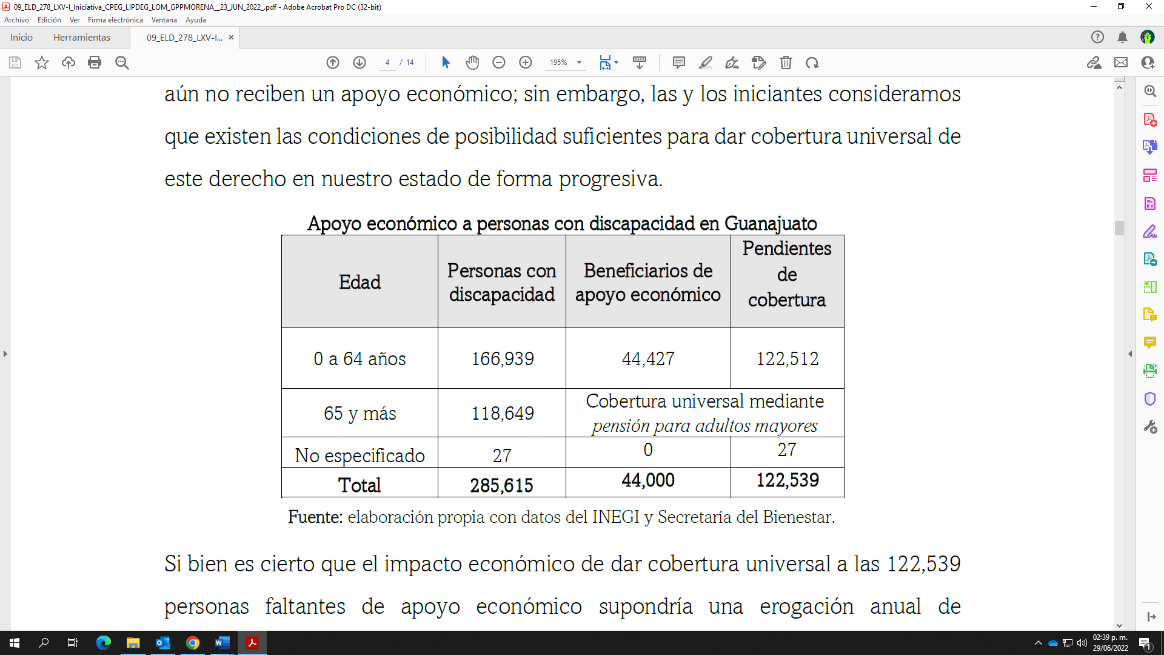
Esto, además, permitiría vincular a las autoridades de nuestra entidad para contribuir en la garantía de los derechos humanos de personas con discapacidad.

Actualmente el derecho a un apoyo económico se garantiza con $2,800 bimestrales para más de 1 millón de personas con discapacidad permanente en todo el país, de las cuales 44,427 pertenecen al estado de Guanajuato.

Pese a la focalización inicial de este derecho, legislada como piso mínimo a nivel federal, progresivamente se ha avanzado hacia la universalidad de este apoyo con la concurrencia federal y estatal. Hoy en día, 20 de las 32 entidades federativas han firmado convenios de colaboración con el Gobierno Federal para financiar de forma concurrente el acceso universal a este este derecho: mientras el gobierno federal lo financia para personas de hasta 30 años, los gobiernos locales de morena lo hacen para las personas de 31 hasta 64 años, luego de lo cual se convierten en beneficiarios de la pensión para el bienestar de los adultos mayores, misma que también tiene carácter universal.

De esta manera, el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico forma parte de un andamiaje institucional que ha venido construyendo las bases de un régimen de bienestar universalista[[28]](#footnote-28) blindado constitucionalmente, al cual nuestra entidad debe sumarse.

En nuestra entidad hay aproximadamente 122,539 personas con discapacidad que aún no reciben un apoyo económico; sin embargo, las y los iniciantes consideramos que existen las condiciones de posibilidad suficientes para dar cobertura universal de este derecho en nuestro estado de forma progresiva.

Apoyo económico a personas con discapacidad en Guanajuato

**Fuente:** elaboración propia con datos del INEG y secretaría del bienestar.

Si bien es cierto que el impacto económico de dar cobertura universal a las 122,539 personas faltantes de apoyo económico supondría una erogación anual de aproximadamente 2 mil 58 millones de pesos, también es cierto que la cobertura universal debe darse de forma progresiva y con la con currencia local y federal en su financiamiento.

En este sentido, la presente iniciativa también propone reformar la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, con la finalidad de establecer los criterios de selectividad incremental y las competencias de las autoridades para garantizar este derecho.

Entre estas propuestas se encuentra la incorporación del principio de progresividad de los derechos para las personas con discapacidad como eje rector para la inclusión social de las personas con discapacidad en el estado. Esto permitiría establecer el cumplimiento gradual de derechos como el que se propone.

De igual manera se propone establecer la facultad del Ejecutivo del Estado para otorgar el apoyo económico a que tienen derecho las personas con discapacidad permanente, al mismo tiempo que se establecen como criterios de selectividad incremental la minoría de edad, la pertenencia a comunidades indígenas y afromexicanas, así como la situación de pobreza.

Además, se propone incorporar la facultad de establecer convenios de colaboración y complementariedad con la finalidad de garantizar el derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente a recibir un apoyo económico. Esto se propone en la medida en que las y los iniciantes consideramos que la colaboración interinstitucional e intergubernamental son condiciones necesarias para garantizar todos los derechos para todas las personas, sin que el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico sea la excepción.

En el terreno de las competencias, quienes iniciamos la presente propuesta consideramos que el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS) es la instancia adecuada para proponer dentro del presupuesto de egresos los recursos necesarios para garantizar el apoyo económico de forma progresiva. Lo anterior en tanto que, al menos, dos de las atribuciones que actualmente posee son de vital importancia para la implementación estratégica del apoyo, esto es, la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación de las personas con discapacidad en el estado[[29]](#footnote-29), y el registro de personas con discapacidad en el estado[[30]](#footnote-30).

A fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, es necesario señalar que, de aprobarse la presente iniciativa, se generarían los siguientes impactos:

**I. Jurídico.** Con la aprobación de la presente iniciativa se modificaría el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; asimismo, se modificarían los artículos 2, 3, 4, 6 y 11 de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato; por último, se reformaría el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

**II. Administrativo.** La aprobación de la presente iniciativa no contempla nuevas estructuras administrativas.

**III. Presupuestario.** La aprobación de la presente iniciativa supondría un impacto presupuestario que sería absorbido por el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales de forma progresiva, con la posibilidad de establecer convenios con el Gobierno Federal.

**IV. Social.** La presente iniciativa reconoce y garantiza el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico, con lo cual se contribuye a garantizar su inclusión efectiva en condiciones de igualdad.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**Primero**. Se adiciona un párrafo dieciséis al artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, para quedar como sigue:

**Artículo 1.** En el Estado de Guanajuato…

Las normas relativas…

Todas las autoridades…

Para los efectos…

Queda prohibida toda discriminación…

Esta Constitución reconoce y protege…

Son pueblos indígenas…

Son comunidades integrantes…

Esta Constitución reconoce y garantiza…

La ley protegerá…

Las niñas, niños y adolescentes…

Toda persona tiene derecho…

Toda persona tiene derecho…

Toda persona tiene derecho…

Toda persona tiene derecho…

**Todas las personas con discapacidad permanente hasta los 64 años de edad tienen derecho a un apoyo económico en los términos que fije la ley de la materia.**

**Segundo.** Se adiciona una fracción III al artículo 2, recorriéndose en su orden los subsiguientes; se adiciona una fracción VII al artículo 3; se adiciona una fracción XVIII al artículo 4; se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 6, recorriéndose en su orden las subsiguientes; se reforman las fracciones VI y XXI del artículo 11, todo de la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:

**Artículo 2.** Para los efectos de esta Ley…

I a II…

**III. Apoyo económico: la prestación a la que tienen derecho las personas con discapacidad permanente en el marco del párrafo dieciséis del artículo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato;**

IV. Ayudas técnicas…

**V a XIII…**

**Artículo 3.** Los principios rectores…

I a IV…

V. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

VI. El respeto a la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; y

VII. **La progresividad de los derechos para las personas con discapacidad.**

**Artículo 4.** Son derechos…

Sin perjuicio…

I a XVII…

XVIII. A un apoyo económico en los términos de la presente Ley.

**Artículo 6.** El Ejecutivo del Estado y los municipios…

I a XII…

XIII. **Otorgar la prestación del apoyo económico a las personas con discapacidad permanente, priorizando a las personas menores de dieciocho años, a las personas indígenas y afromexicanas, así como a las que se encuentren en situación de pobreza, hasta los 64 años de edad;**

XIV. **Establecer convenios de colaboración y complementariedad con la finalidad de garantizar el derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente a recibir un apoyo económico;**

XV. Promover medidas…

XVI a XIX…

Artículo 11. El Instituto tendrá…

I a V…

VI. Coadyuvar con las autoridades de la administración pública estatal y municipal **para garantizar el apoyo económico para personas con discapacidad permanente, así como para la elaboración** de políticas públicas de atención a las personas con discapacidad;

VII a XX…

XXI. Proponer dentro de la elaboración del proyecto del presupuesto de egresos los recursos necesarios para impulsar los programas de adquisición y obtención de órtesis, prótesis, ayudas técnicas y medicamentos para la rehabilitación de las personas con discapacidad, **así como para garantizar el apoyo económico para personas con discapacidad permanente de forma progresiva;**

XXII a XXIII…

**Tercero.** Se adiciona un inciso ñ) a la fracción V del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:

**Artículo 76.** Los ayuntamientos…

I a IV…

V. En materia de participación social, desarrollo social, asistencial y económico…

a) a l)…

m) Establecer el Sistema Municipal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los términos de lo dispuesto por la Ley General y Local de la materia;

n) Elaborar y aprobar su programa municipal de protección de niñas, niños y adolescentes y participar en el diseño del Programa Local; y

ñ) Contribuir con las autoridades estatales para garantizar el derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO.** Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente Decreto, se estará a lo siguiente:

I. Los recursos para dar cumplimiento progresivo al derecho reconocido mediante el presente Decreto, deberán contemplarse en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2023 y subsecuentes;

II. La cobertura del apoyo económico reconocido mediante el presente decreto se implementará comenzando con las personas menores de dieciocho años, las personas indígenas, las personas afromexicanas, y las personas en situación de pobreza del estado de Guanajuato; y

III. El Poder Ejecutivo del Estado contará con 90 días hábiles para desarrollar mecanismos de colaboración que permitan la concurrencia estatal y municipal en el financiamiento del apoyo económico al que tienen derecho las personas con discapacidad.

IV. En ningún caso el presupuesto asignado podrá ser menor, en términos reales, al del ejercicio fiscal anterior.

Guanajuato, Guanajuato, 20 de junio de 2022.

Grupo Parlamentario de Morena

* **PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA A EFECTO DE ADICIONAR UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO FORMULADA POR LA DIPUTADA HADES BERENICE AGUILAR CASTILLO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. [[31]](#footnote-31)**

**Diputada Irma Leticia González Sánchez**

Presidenta de la Mesa Directiva

Congreso del Estado de Guanajuato

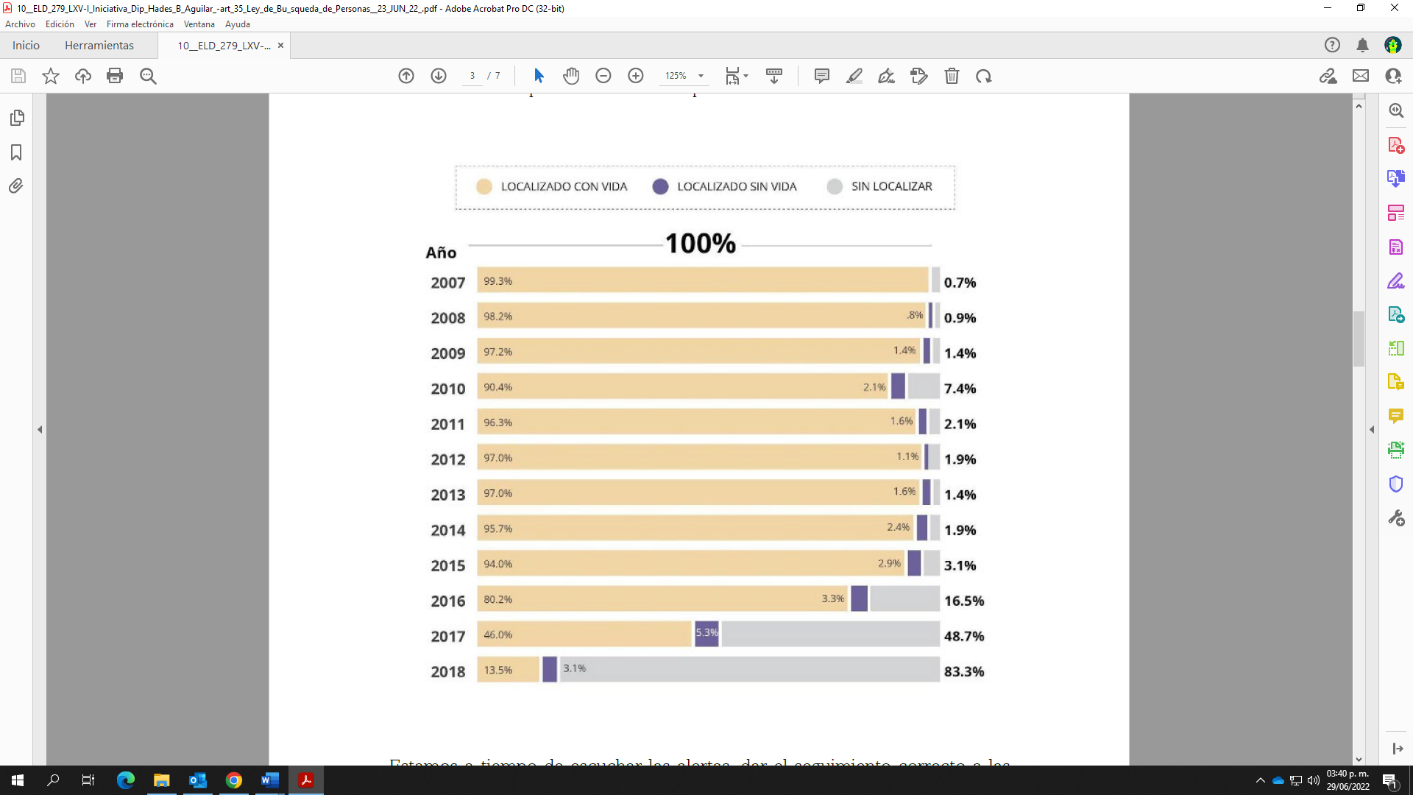
LXV Legislatura

P r e s e n t e

Diputada **Hades Berenice Aguilar Castillo**, del Grupo Parlamentario de **Morena** en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 56 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; la fracción II del artículo 167, así como el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito poner a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma la **Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato,** con fundamento en la siguiente:

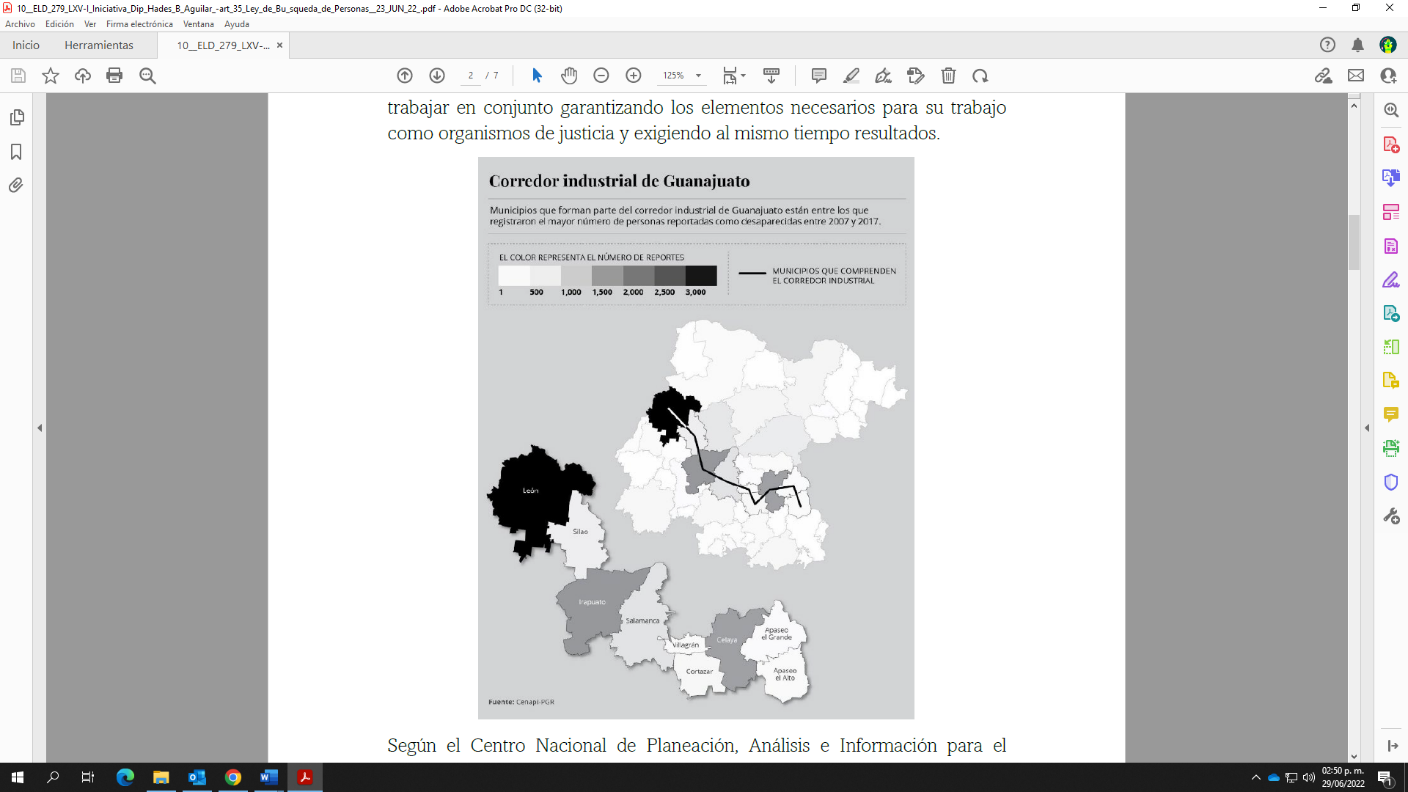
**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Los municipios con mayores números de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato son León, Irapuato, Celaya, Silao y Salamanca, localidades que conforman el corredor industrial y en las cuáles existe una alta influencia del narcotráfico Los hallazgos de fosas clandestinas, como la encontrada en Apaseo el Alto en 2009 (donde se encontraron los restos de al menos 14 personas), dejan de manifiesto que han existido irregularidades entre los números de desapariciones reportadas y la incidencia real de este delito.



Hay una evidente incapacidad actual por parte de las autoridades para la correcta gestión de las labores de búsqueda: a la poca disposición del gobierno actual se suma la falta de ingresos para lograr desarrollar las acciones pertinentes.

Las desapariciones no se han investigado con el rigor necesario. El compromiso del gobierno Federal debe permear las barreras internas y trabajar en conjunto garantizando los elementos necesarios para su trabajo como organismos de justicia y exigiendo al mismo tiempo resultados.



Según el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), la cantidad de personas desaparecidas que fueron posteriormente encontradas con vida fue del 99.3% en el 2007. Las cifras siguen presentando un inquietante porcentaje alto de personas halladas vivas hasta 2015. Inquietante, porque resulta contradictorio que las búsquedas y hallazgos sean tan fructíferas en un estado con violencia al alza y con pocos resultados de la fiscalía en otros aspectos. Sin embargo, existe para mediados del mes de mayo de 2022 una cifra de alrededor de 2600 personas que todavía se encuentran desaparecidas. Es notoria una disparidad enorme en los últimos años, evidenciando que al Estado le hace falta ejercer mecanismos más eficientes y contar con mayores recursos para las búsquedas. Se debe facilitar el recurso al Estado de Guanajuato para poder develar el destino de todos los seres humanos reportados como desaparecidos.

Estamos a tiempo de escuchar las alertas, dar el seguimiento correcto a las desapariciones conlleva realizar una estadística sin maquillaje, enunciando las causas, fechas, sitios y condiciones de las desapariciones. Para un estado con índices altos de violencia es de vital importancia tener plena conciencia de los móviles y espacios que permiten y fomentan toda la serie de delitos vinculados, como los secuestros, homicidios y la trata de personas.

La garantía de recursos con constancia y suficiencia debe enmarcarse de forma directa en la ley, pues se necesita atender de manera íntegra el trasfondo de todos los crímenes que tienen como resultado la desaparición de personas. A fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, es necesario señalar que, de aprobarse la presente iniciativa, se generarían los siguientes impactos:

I. Jurídico. La aprobación de la presente iniciativa modificaría el artículo 35 de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato.

II. Administrativo. La aprobación de la presente iniciativa no contempla nuevas estructuras administrativas.

III. Presupuestario. La aprobación de la presente iniciativa permitirá la implementación adecuada de las políticas públicas en materia de búsqueda de personas

IV. Social. La aprobación de la presente iniciativa contribuirá al reforzamiento de las acciones implementadas en la búsqueda de las personas desaparecidas, a través un presupuesto que permita la atención adecuada de cada una de las carpetas de investigación.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:

Artículo 35. La Comisión de Búsqueda contará con los recursos económicos que le asigne la Secretaría de Gobierno para cumplir con sus atribuciones y obligaciones de emprender e implementar inmediatamente las acciones necesarias de búsqueda de personas

desaparecidas.

Dicho presupuesto no podrá ser menor que el asignado el ejercicio inmediato anterior, con la finalidad de fortalecer los mecanismos implementados para la búsqueda de personas desaparecidas.

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Guanajuato, Guanajuato, 21 de junio de 2022.

**Dip. Hades Berenice Aguilar Castillo**

Grupo Parlamentario de Morena

* **PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA RESOLUCIÓN SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE EXHORTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE EXPIDA LA LEGISLACIÓN ÚNICA EN MATERIA PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.**

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**PRESENTE**

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia ante la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en los artículos 168 último párrafo y 177 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos formular la presente propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución a efecto de exhortar al Congreso de la Unión, para que en los términos del artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, en atención a las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

El 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares) en el cual se faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar.

Dicha reforma contempló en el artículo cuarto transitorio que, el Congreso de la Unión debería expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional, en un plazo que no excediera de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto.

Asimismo, se previó en el artículo quinto transitorio que la legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuaría vigente hasta en tanto entrara en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en que, si bien las legislaciones procesales en materias civil y familiar de las entidades federativas permanecerán vigentes hasta que sea emitido el código nacional de esas materias, los estados carecen de facultades para legislar sobre el tema.

Las y los integrantes de esta Comisión de Justicia, reconocemos que dar cumplimiento al mandato de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana representa un reto de grandes dimensiones, pues no solo es cumplir con la expedición de un ordenamiento procedimental uniforme, es necesario que en su construcción se cumpla con el debido proceso y que se garantice a los justiciables la certeza y celeridad procesal, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La tarea de los legisladores federales, sin duda, no es sencilla ya que, en esta legislación única, se deben contemplar todas las herramientas para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional con procedimientos sencillos, lenguaje accesible e incluyente, impulsar la oralidad y la digitalización de los procesos, privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias, como mínimo.

Sin embargo, lo anterior se presenta como un obstáculo a nivel local, pues al no contar ya con facultades para modificar la legislación procesal civil, aún vigente mientras no se expida la legislación única, no podemos como legisladores llevar a cabo las reformas necesarias que permitan tener un Código actualizado y que responda a las necesidades de la sociedad guanajuatense.

De esta forma, las iniciativas que pudieran significar un avance para mantener actualizado el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, han sido dictaminadas en sentido negativo, a efecto de evitar la expedición de normas inconstitucionales.

Se tiene conocimiento del avance en el proceso legislativo en el Congreso de la Unión derivado de iniciativas presentadas para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, por lo que nos permitimos emitir un atento y respetuoso exhorto para que se expida dicha legislación, en virtud de que ya feneció el plazo de 180 días previsto en el artículo cuarto transitorio enunciado con anterioridad. Debido a ello, acordamos formular la presente propuesta de punto de acuerdo, con trámite de obvia resolución, en los términos del artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la asamblea, la siguiente propuesta de:

**ACUERDO**

**ÚNICO.** La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato emite un atento y respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que en los términos del artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se expida la legislación única en materia procesal civil y familiar.

**ATENTAMENTE**

**Guanajuato, Gto., 21 de junio de 2022**

**Las diputadas y los diputados integrantes de**

**la Comisión de Justicia**

**Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Diputada Presidenta**

**Susana Bermudez Cano**

**Diputada Vocal**

**Bricio Balderas Álvarez**

**Diputado vocal**

**Gustavo Adolfo Alfaro Reyes**

**Diputado vocal**

**Cuauhtémoc becerra González**

**Diputado secretario**

* **PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA RESOLUCIÓN SUSCRITA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A EFECTO DE EXHORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE MANUEL DOBLADO, COMONFORT, CORTAZAR, HUANÍMARO, JARAL DEL PROGRESO, JERÉCUARO, OCAMPO, PÉNJAMO, PUEBLO NUEVO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, SAN FELIPE, SAN JOSÉ ITURBIDE, SANTA CATARINA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, SANTIAGO MARAVATÍO, VICTORIA, VILLAGRÁN, XICHÚ Y YURIRIA, A EFECTO, DE QUE EXPIDAN SU PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.**

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL** **CONGRESO DEL** **ESTADO**

**LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO**

**SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA**

**PRESENTE**

Quienes integramos el **Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional** ante la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y, por los artículos, 177 y 204, párrafo primero y fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente propuesta de **punto de acuerdo de obvia,** **mediante el cual, el Congreso del Estado Libre** y **Soberano de Guanajuato** **exhorta a los Ayuntamientos de Manuel Doblado, Comonfort, Cortázar,** **Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo,** **San Diego de la Unión, San Felipe, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa** **Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Victoria, Villagrán, Xichú** y **Yuriria, a efecto, que expidan su Programa Municipal de Desarrollo Urbano** y **Ordenamiento Ecológico Territorial,** lo anterior de conformidad a las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

Hoy en día, alrededor del 55 % de la población mundial, es decir, 4200 (cuatro mil doscientos) millones de habitantes, viven en ciudades. Se estima que dicha tendencia continuará y en 2050, la población urbana se duplicará. Si el crecimiento de las ciudades se realiza adecuadamente, se puede contribuir al crecimiento sostenible, aumentar la productividad, la innovación y el surgimiento de nuevas ideas. [[32]](#footnote-32)

Cuando hablamos del crecimiento de nuestras ciudades y municipios, nos encontramos con dos obstáculos principales que debemos enfrentar, la pobreza y la afectación al medio ambiente.

La Organización de las Naciones Unidas, estima que, en las próximas décadas, gran parte del crecimiento demográfico en México será de índole urbano.[[33]](#footnote-33)

Asimismo, se pronostica que los asentamientos humanos irregulares, se expandirán por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que las mejores localizaciones serán acaparadas por el mercado formal inmobiliario. [[34]](#footnote-34)

Ahora, la pregunta es ¿cómo lograr que Guanajuato evite caer en dichas problemáticas? La respuesta es el cumplimiento a la ley.

En nuestro estado contamos con un sistema de planeación, mismo que funciona como un mecanismo permanente de planeación integral, estratégica y participativa para establecer procesos de coordinación para lograr el desarrollo de la entidad, al final del día establece que las autoridades deben tener claro el rumbo al que quieren llevar a cada uno de sus 46 municipios de nuestra entidad.[[35]](#footnote-35)

Lo anterior, se regula en la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, mismos que marcan la pauta del desarrollo que se debe seguir de manera transversal entre los distinto órdenes de gobierno; en la Ley de Planeación para nuestro Estado, se contempla que posterior a la publicación del Plan Estatal de Desarrollo, se deben expedir el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamientos Ecológico Territorial y finalmente el Programa Metropolitano de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial. [[36]](#footnote-36)

Lo que distingue a este instrumento de los demás, es que debe ir en sintonía con el Código Territorial para el Estado y los Municipios, mismo que tiene como objeto cuidar el ordenamiento y administración sustentable, conservar y restaurar los espacios naturales del estado, la gestión, conservación y preservación de las aguas, para lograr un desarrollo sustentable, el mejoramiento, conservación y crecimiento de los centros de población y asentamientos humanos, entre otros y es el motivo por el cuál, consideramos apremiante que se cumpla con la obligación de publicar dichos instrumentos que son lo que garantizará un futuro ordenado y sustentable para las próximas generaciones. [[37]](#footnote-37)

Al final del día, nuestro marco jurídico, busca prevenir que se incurra en un desarrollo urbano que afecte y sea desordenado y contraproducente, pues, debe ser bien planeado, estudiado y diseñado ... y así se ha hecho en Guanajuato.

En el reciente informe del Gobierno del Estado, conocimos logros relevantes que demuestran que nuestra entidad cuenta con una política territorial de vanguardia, pues conservamos la riqueza natural, distribuimos de manera equilibrada y sustentable las actividades económicas para promover un desarrollo urbano sustentable a través de programas estatales y municipales.[[38]](#footnote-38)

En el Grupo Parlamentario del PAN, creemos que, a pesar, de tener avances significativos, no debemos quitar el dedo del renglón pues aún hay municipios que no han publicado su Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, si bien, entendemos que cada municipio enfrenta diversos retos, queremos retomar la conversación y el seguimiento para que, desde nuestro trabajo legislativo, sigamos avanzando en el tema.

En nuestro programa de Acciones legislativas, a través de este exhorto cumpliríamos con dos de nuestros cinco ejes:

* Medio Ambiente, energías limpias y sustentabilidad; así como con el eje de
* Economía y Desarrollo Sostenible.

Mientras el horizonte de nuestras ciudades se expande, también lo hace nuestro pensamiento ... En Guanajuato hacemos política de una manera distinta porque el trabajo que es pensado, planeado, estudiado y basado en datos duros ... nunca en ocurrencias, porque vemos más allá de lo que está frente a nosotros ... no se trata solo de ver dónde estamos ... sino hacia dónde nos dirigimos y hoy tenemos clara nuestra ruta ... la única ruta ... la ruta de seguir generando ciudades y municipios

con grandeza.

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato exhorta a los Ayuntamientos de Manuel Doblado, Comonfort, Cortázar, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, San Felipe, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, a efecto, que expidan su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.**

**Guanajuato, Gto., 23 de mayo de 2022.**

**Diputadas y Diputados integrantes del**

**Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**

* **PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA RESOLUCIÓN SUSCRITA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A FIN DE EXHORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS DE ATARJEA, OCAMPO, PUEBLO NUEVO, SANTA CATARINA, XICHÚ Y VILLAGRÁN, PARA QUE ELIJAN A SU CRONISTA MUNICIPAL CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.**

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA**

**LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

**PRESENTE**

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre *y* Soberano de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 177 y 204 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, presentamos la propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución a fin de **exhortar a los Ayuntamientos de Atarjea, Ocampo, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Xichú** y **Villagrán del Estado de Guanajuato, para que elijan a su cronista municipal con las formalidades establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato.**

**CONSIDERACIONES**

Los cronistas son de gran importancia para para el mundo, debido a que narran los acontecimientos relevantes para evitar que sean olvidados.

México, es uno de los países del mundo que tiene una gran riqueza cultural que ha transcendido a través de tiempo gracias a personajes como Josefina Estrada, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Novo o Magali Tercero, por mencionar algunos, quienes no han permitido que nuestros acontecimientos sean olvidados.

Nuestro patrimonio cultural es el legado que recibimos de nuestro pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras, pues este encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute, de la misma forma enriquece el capital social y conforma un sentido de pertenencia individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial.

La figura del cronista tiene una gran importancia al resaltar acontecimientos de cada Estado y municipios de nuestra República Mexicana. Un ejemplo de ello, son las crónicas llamadas "Ciudades históricas del Noreste Mexicano", en las que cronistas como Leopoldo Espinosa Benavides y Clemente Rendan de la Garza, narraron acontecimientos de ciudades que, por su historia, economía, tradiciones e identidad, han contribuido a definir el perfil del norestese[[39]](#footnote-39).

Otro ejemplo son las diversas publicaciones hechas por cronistas como Aurelio Conejo Rubio, Herminio Martínez, que a través de sus narraciones han dado a conocer la fundación de municipios del Estado de Guanajuato.

*El doctor lsauro Rionda Arreguín quien catalogó el acervo documental del estado y ta producción bibliográfica, compuesta por más de 15 obras sobre esta ciudad plateresca, entre la que se encuentran "La brevísima historia de la ciudad de Guanajuato" (1985), "Testimonios sobre Guanajuato" (1989) y "La ciudad de Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad" (1990)[[40]](#footnote-40).*

El cronista municipal es una figura institucional en los ayuntamientos, que reviste una importancia trascendental, y debido a ello es que su función y actividad se encuentran reconocidas en nuestra Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato.

Nuestro Estado tiene grandes riquezas en cada uno de sus Municipios, que a través de su patrimonio cultural e histórico los hace ser únicos. Es así que los cronistas, mediante sus relatos, permiten que su patrimonio perdure a través del tiempo, para que las nuevas generaciones conozcan el devenir tradicional y el acontecer diario municipal a través del registro de hechos memorables, formas y modos de vida comunitarios que generan la identidad municipal, así como también se preservan los usos y costumbres de nuestras comunidades.

Durante la administración estatal de Miguel Márquez Márquez, en el año 2014, mediante el decreto número 168 se estableció la figura del cronista en la Ley Orgánica Municipal para el Estado, que regula desde sus atribuciones hasta la forma en la cual se elegirá al cronista municipal regulando su presencia en cada uno de nuestros 46 municipios del Estado, y de esta forma se *investigue, rescate, conserve, difunda y promueva fa cultura municipal, mediante el registro cronológico de los sucesos notables de su Municipio[[41]](#footnote-41)*, con ello fortaleciendo los orígenes de cada uno de nuestros municipios.

Por otra parte, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, mediante el *decreto numero 80 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de abril del 2021, estableció el 25 de junio como día Estatal del Cronista en Guanajuato, en conmemoración de aquél 25 de junio del año de 1992, donde se dio la primera reunión de crónicas a convocatoria del Dr. lsauro Rionda Arreguín. Para luego, en abril de 1993, integrar la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato[[42]](#footnote-42)*

***.***

Asimismo, es importante señalar que el cronista municipal no es solo una posición y función administrativa, sino que es una figura depositada en una persona que se encargara de rescatar nuestro presente y pasado, es quien detallará los acontecimientos de la historia, archivos y relatos de las comunidades, para que sus usos y costumbres perduren para generaciones futuras.

Por ello, para Acción Nacional, resulta fundamental el preservar figuras institucionales como la del cronista municipal, debido a la imprescindible labor que realizan, al ser guardianes de la historia de nuestro Estado en de cada uno de sus municipios.

Por lo anteriormente expuesto y por la importancia que representa el cronista municipal en la preservación, rescate y promoción de las grandes riquezas que contiene cada uno de los 46 municipios que conforman nuestro hermoso estado de Guanajuato, es que nos permitimos poner a consideración de la Asamblea, el presente:

**ACUERDO:**

**Único. La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, formula un atento exhorto a los Ayuntamientos de Atarjea, Ocampo, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Xichú y Villagrán del Estado de Guanajuato, para que elijan a su cronista municipal con las formalidades establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato.**

PROTESTAMOS LO NECESARIO

**Guanajuato, Gto., a 21 de junio de 2022**

**Diputadas y Diputados integrantes del**

**Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional**

**Dip. Luis Ernesto Ayala Torres.**

**Coordinador**

**Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas**

**Dip. Bricio Balderas Álvarez**

**Dip. Susana Bermúdez Cano**

**Dip. José Alfonso Borja Pimentel**

**Dip. Angélica Casilla Martínez**

**Dip. Martha Guadalupe Hernández Camarena**

**Dip. María de la Luz Hernández Martínez**

**Dip. César Larrondo Díaz**

**Dip. Martín López Camacho**

**Dip. Briseida Anabel Magdaleno González**

**Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Dp. Aldo Iván Márquez Becerra**

**Dip Noemí Márquez Márquez**

**Dip. Janet Melanie Murillo Chávez**

**Dip. Jorge Ortiz Ortega**

**Dip. Armando Daniel Hernández**

**Dip. Lilia Margarita Rionda Salas**

**Dip. Miguel Ángel Salim Alle**

**Dip. Cristina Soto Escamilla**

**Dip. Víctor Manuel Zanella Huerta**

* **PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA RESOLUCIÓN FORMULADA POR LA DIPUTADA YULMA ROCHA AGUILAR INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR EL QUE SE EFECTÚA UN RESPETUOSO EXHORTO AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE, EN FUNCIÓN DE LO QUE ENUNCIA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, INCLUYA A GTO LEASING SERVICES S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R EMPRESA EQUIPARADA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, EN EL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EFECTOS DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.**

**DIP. IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA**

**CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

**LXV LEGISLATURA**

**PRESENTE**

La proponente, **Diputada Yulma Rocha Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,** con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 57, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; así como por lo establecido en los artículos 177 y 204, párrafos primero, segundo y fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente propuesta de **PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA RESOLUCIÓN**, **a fin de emitir un respetuoso exhorto al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, para que, en función de lo que enuncia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, incluya a GTO Leasing Services S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R Empresa Equiparada de Participación Estatal Mayoritaria, en el Padrón de Sujetos Obligados para efectos de cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato**, sustentado en las siguientes**:**

**CONSIDERACIONES**

La transparencia es la obligación de dar publicidad a los hechos relacionados con las atribuciones y actividades de las instituciones gubernamentales y, en consecuencia, dar acceso a esa información que se encuentra en su posesión, esto último no como una concesión sino como un derecho humano que permite conocer el quehacer gubernamental, darle seguimiento y, que incluso, es un elemento importante para la toma de decisiones de la ciudadanía.

Con la transparencia se rinde cuentas, y la rendición de cuentas es la herramienta que da credibilidad y legitimidad al actuar público y que facilita la vinculación entre ciudadanos y autoridades.

Así, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas son elementos indispensables para el fortalecimiento de la democracia.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, de Guanajuato nos señala que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información[[43]](#footnote-43). En este sentido, la información que genere obtenga, adquiera, transforme o posea cualquier autoridad, órgano u organismo gubernamental, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos debe ser pública, veraz, completa, oportuna, confiable, verificable y accesible a cualquier persona[[44]](#footnote-44).

GTO Leasing Services S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., es una empresa constituida como una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y financiera de objeto múltiple no regulada, la cual, fue creada desde el gobierno del estado, y en la que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) funge como accionista mayoritario, participando con recursos provenientes del fondo de pensiones de los trabajadores del estado; cuyo nicho de mercado va dirigido principalmente al arrendamiento de autos utilitarios para las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato y para el arrendamiento de maquinaria y equipo para fortalecer las cadenas de valor de la industria manufacturera de exportación.

Este es un modelo innovador en el país que busca aumentar los rendimientos de los fondos del ISSEG, sin embargo, debemos tener presente que es una figura jurídica considerada como una empresa equiparada de participación estatal mayoritaria, al ser el ISSEG el propietario de más del 50% de su capital social y debido a que más del 50% de sus aportaciones económicas son provenientes de recursos públicos, motivo por el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, es también un sujeto obligado a transparentar todos sus actos y permitir el acceso a su información.

En este sentido, el que sea un sujeto obligado implica que debe establecer una unidad de transparencia que facilite las solicitudes de acceso a la información pública y constituir un comité de transparencia que como parte de sus actividades, se encargue de instaurar, coordinar y supervisar, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; así como de establecer políticas para facilitar tanto la obtención de información, como el ejercicio del derecho de acceso a la información.

También, GTO Leasing debe atender una serie de obligaciones como; poner a disposición de la sociedad y mantener actualizados los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados; la información relativa a los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados; así como atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia y acceso a la información pública realice el Instituto.

De igual forma, está obligado a actualizar trimestralmente la información que posea en todos aquellos medios disponibles con los que cuente, en su sitio de internet y a través de la Plataforma Nacional.

Debe tener un vínculo de acceso directo a un portal de internet dónde se pueda encontrar la información que por Ley está obligado publicar, y para hacer accesible la información, dicha página también debe contar con un buscador que le facilite a la sociedad localizar la información, herramientas que hasta el día de hoy GTO Leasing Services no posee.

Es decir, en su actuación debe favorecer en todo momento el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en su posesión, garantizando que esta sea completa, oportuna y accesible a cualquier persona, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas, ser legítimas y estrictamente necesarias.

Ahora, para el Instituto de Acceso a la Información (IACIP) también existen ciertas obligaciones que debe cumplir pues, nuestra Constitución Local establece en su artículo 14 que el derecho a la información pública debe ser garantizado por el estado, siendo el IACIP el organismo responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, y que cuenta con la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública.

En este sentido, dentro de sus atribuciones se encuentran; el coadyuvar con los sujetos obligados en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental, evaluar su actuación, mediante la práctica de acciones de verificación o a través de los medios que considere adecuados, así como requerir, recibir, analizar y sistematizar los informes que periódicamente, deben enviar los sujetos obligado.

De igual forma, el IACIP también tiene la obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que las mismas generen[[45]](#footnote-45), motivo por el cual, el 14 de septiembre del 2021, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el Acuerdo Administrativo por el que se determina el Padrón de Sujetos Obligados para efectos de cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

En dicho padrón, se señala que a la fecha de su publicación se contaba en el estado con 72 sujetos obligados para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley antes mencionada, sin embargo, se omitió incluir a GTO Leasing Services, aun cuando en esa fecha la empresa ya se había constituido e iniciado operaciones, por lo que extraña y preocupa que no se le haya considerado en la integración de este al ser una empresa equiparada de participación estatal mayoritaria.

En este contexto, cabe mencionar que para determinar la información que debe hacer pública la empresa, el Instituto de Acceso a la Información Pública tiene la obligación de solicitarle que remita la información que considere de interés público, atendiendo los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, así como determinar las obligaciones de transparencia que debe cumplir, así como los plazos para ello.

De igual forma, el IACIP debe verificar que la información sea publicada en la Plataforma Nacional, de conformidad con lo estipulado en la Ley y en los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional.

Sobre el modelo bajo el cual opera la empresa, el mismo Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha reconocido en recientes declaraciones que “es un modelo para incrementar la generación de recursos propios que la corrupción podría echar a perder” por ello, es necesario que este modelo de arrendamiento creado desde el gobierno y operado por el ISSEG, funcione y se desempeñe con toda claridad y transparencia, pues estamos hablando de recursos provenientes de las pensiones de los trabajadores del estado, mismos que son resultado del trabajo que cada día realizan en beneficio de nuestra sociedad y de Guanajuato.

Es así que, con la finalidad de transparentar la operación de esta sociedad constituida como una empresa equiparada de participación estatal mayoritaria y garantizar a la población el pleno ejercicio del derecho a la información pública, que se hace este llamado, al Instituto de Acceso a la Información Pública para que, en función de lo que enuncia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; incluya a GTO Leasing Services S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R Empresa Equiparada de Participación Estatal Mayoritaria, en el Padrón de Sujetos Obligados para efectos de cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato Por lo anteriormente expuesto, me permito a someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de:

**ACUERDO**

**ÚNICO. -** La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, efectúa un respetuoso exhorto al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, para que, en función de lo que enuncia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, incluya a GTO Leasing Services S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R Empresa Equiparada de Participación Estatal Mayoritaria, en el Padrón de Sujetos Obligados para efectos de cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

**GUANAJUATO, GUANAJUATO**

**A 23 DE JUNIO DEL 2022.**

**DIPUTADA YULMA ROCHA AGUILAR**

**PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**

* **PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA RESOLUCIÓN SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE IMPLEMENTE LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS Y ESTABLEZCA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES Y DE SALUD, QUE ATIENDAN DE MANERA URGENTE Y PRIORITARIA A LA POBLACIÓN GUANAJUATENSE QUE TENGA ALGUNA ADICCIÓN A DROGAS ILÍCITAS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.**

**Diputada Irma Leticia González Sánchez**

Presidenta de la Mesa Directiva de la

LXV Legislatura del Estado de Guanajuato.

*P r e s e n t e*

El que suscribe, *Diputado* **ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO,** del Grupo Parlamentario de ***morena***, de esta Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en el primer párrafo del artículo 57, de la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato*; y en los artículos 177 y 204 fracción III de la *Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato*, me permito someter a la consideración de esta Asamblea para su aprobación, el siguiente **Punto de Acuerdo de obvia resolución**, de conformidad con la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:**

Recientemente el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, declaró que se estima un universo de 600 mil personas adictas a algún tipo de droga en el Estado

de Guanajuato.

Además de ser una cantidad muy considerable de personas, al representar ese número casi un 10%

de la población total del estado, sin duda alguna resulta preocupante la situación.

Con el efecto de dimensionar esta circunstancia, si se hace un ejercicio de división entre el número

de municipios del Estado, correspondería la existencia de 13,043 adictos a cada uno de los 46 municipios, lo que resulta ser un número superior al de la población total que tienen municipios como Atarjea, Coroneo, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Santa Catarina y Xichú; y representa alrededor de la mitad de los habitantes que tienen municipios como Victoria, Tierra Blanca, Ocampo, Huanímaro, Doctor Mora y Cuerámaro; y aproximadamente una cuarta parte de los habitantes de Manuel Doblado, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, San Diego de la Unión

y Tarimoro.

De igual forma el Secretario de Seguridad Pública manifestó que se calcula un gasto diario en drogas por persona adicta, de aproximadamente $100.00 cien pesos, lo que representa para ese mercado ilegal $60´000,000.00 sesenta millones de venta diaria, y elevado al año un total de poco más de $21´900´000,000.00 veintiún mil novecientos millones de pesos.

Sin duda alguna desde esta perspectiva puede dimensionarse que en las ganancias ilícitas que genera el mercado de drogas, existe un interés de las organizaciones delictivas de conservar el mercado y ampliarlo en lo posible.

Ante este panorama debe reconsiderarse la ampliación de estrategias y establecimiento de políticas públicas que a la brevedad se enfoquen en atender a la población adicta.

Sin duda alguna todo programa enfocado en la prevención como el denominado Planet Youth, deben continuarse y mantenerse permanentemente, pero la atención de las personas que ya están atrapadas con alguna adicción a las drogas, son una realidad que debe atenderse como un problema social y de salud urgente y de atención prioritaria.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de este pleno, para su

aprobación, el siguiente:

**P U N T O D E A C U E R D O:**

**Único.-** Esta Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, gira atento exhorto al titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que implemente las estrategias necesarias y establezca las políticas públicas sociales y de salud, que atiendan de manera urgente y prioritaria a la población guanajuatense que tenga alguna adicción a drogas ilícitas.

En Guanajuato, Gto., al día de su presentación.

**Lic. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo**

*Diputado*

* **PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA FORMULADA POR LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA.**

**DIPUTAD A IRMA LETICI A GON ZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S EN TE.**

La diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno Y Coordinación Política, ante esta Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. con fundamento en el artículo 72 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. formulamos la siguiente propuesta de modificación en la integración de la Comisión Para la Igualdad de Género. en los términos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO** | |
| **VOCAL** | **Martha Edith Moreno Valencia, en sustitución de la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo** |

Sin otro particular, solicitamos se le otorgue a la presente el trámite parlamentario correspondiente y aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**GUANAJUATO, GTO., 22 DE JUNIO DE 2022.**

**LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA**

**JUNTA DE GOBIERO Y COORDINACIÓN POLÍTICA**

**DIP. LUIS ERNESTO AYALA TORRES**

**DIP. ERNESTO MILLÁN SOBERANES**

**DIP. ALEJANDRO ARIAS ÁVILA**

**DIP. GERARDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ**

**DIP. DESSIRE ANGEL ROCHA**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR VERIFIQUE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SIRVEN DE BASE EN TRANSACCIONES COMERCIALES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SE REALICEN VERIFICACIONES RIGUROSAS EN LOS CENTROS DE ACOPIO DURANTE EL CICLO AGRÍCOLA OTOÑO-INVIERNO, UNA VEZ LO CUAL INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS ENCONTRADOS.**

**Diputada Irma Leticia González Sánchez**

Presidenta del Congreso del Estado

Presente.

A la Comisión de Fomento Agropecuario de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, le fue turnada la propuesta del punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor verifique los instrumentos de medición que sirven de base en transacciones comerciales del sector agroalimentario en el Estado de Guanajuato y se realicen verificaciones rigurosas en los centros de acopio durante el ciclo agrícola otoño-invierno, una vez lo cual informe a esta soberanía los resultados encontrados.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 89 fracción V, 110 fracción IV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, sometemos a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. **Antecedentes**

El 2 de diciembre del año próximo pasado la presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Fomento Agropecuario, para su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo referido en el proemio del presente dictamen, con fundamento en el artículo 110 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

1. **Proceso legislativo**

La comisión radicó la propuesta de punto de acuerdo el 13 de ·enero del año que transcurre, acordando en reunión de Comisión la siguiente metodología para su estudio y análisis:

1. Se remitió la propuesta de punto de acuerdo vía correo electrónico a las diputadas y diputados Integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura; y a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, quienes contaron con un plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación para remitir comentarios y observaciones que estimen pertinentes.
2. Se remitió el punto de acuerdo vía oficio, a la Delegación en Guanajuato de la Procuraduría Federal del Consumidor, quien contará con un plazo de 15 días hábiles a partir de su notificación para remitir comentarios y observaciones que estimen pertinentes.
3. Concluido el término de consulta, los comentarios y observaciones remitidos se enviarán por la secretaría técnica, dentro de los 5 días posteriores al término de la consulta.
4. Instalación de mesa de trabajo permanente en la que participarán diputadas y diputados integrantes de la Comisión.
5. Concluida la consulta y la reunión de trabajo, señaladas en los puntos anteriores, la secretaría técnica elaborará el proyecto de dictamen correspondiente, lo remitirá a los integrantes de la Comisión, para que formulen observaciones a la secretaría técnica.
6. La Comisión se reunirá para discutir el proyecto de dictamen del punto de acuerdo y, en su caso, dejarlo a disposición de la Mesa Directiva para que lo agencie en la sesión ordinaria que corresponda.
7. **Análisis de la propuesta.**

La diputada y los diputados que integramos esta comisión, recibimos respuesta por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor según oficio PFC/BJ/028/2022, suscrito por la Lic. Vanessa Montes de Oca Mayagoitía, directora ODECO Zona del Bajío, misma que argumenta:

*(... ) Con base en el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor para el Estado de Guanajuato existen dos Oficinas de Defensa del Consumidor, cuya jurisdicción municipal es:*

*"XX. Zona del Bajío: Con sede en el municipio de León de los Aldama, Guanajuato. Con circunscripción territorial en los siguientes municipios del estado de Guanajuato: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, León de los A/dama, Manuel Doblado, acampo, Purísima del Rincón, Romita, Santa Catarina, San José Iturbide, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, Silao, Tierra Blanca, Victoria y Xichú."*

*"XXI. Zona Miguel Hidalgo: Con sede en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Con circunscripción territorial en los siguientes municipios del estado de Guanajuato: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moro/eón, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, San Miguel de Allende, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán, Yuriria."*

*Con la total disposición de atender a lo solicitado en el documento de referencia, toda vez que consideramos pertinente llevar a cabo exhortos a los Centros de Acopio de los Municipios que su servidora atiende como Titular de la Zona del Bajío, para informarles sobre la importancia de la calibración de instrumentos de medición y el trámite a seguir ante esta Procuraduría para que cuenten con el holograma vigente de dicho servicio; mucho agradeceríamos tuvieran a bien indicarnos si por su conducto se puede proporcionar a esta ODECO un PADRÓN ACTUALIZADO DE CENTROS DE ACOPIO EN EL ESTADO, para girar los oficios que correspondan.*

*De igual manera, tenemos la total disposición de compartir su atento oficio a la ODECO Miguel Hidalgo, ubicada en el Municipio de Irapuato, cuyo Director es el Líe.*

*Daniel Nieto Martínez, para que a su vez se Entrar las instrucciones correspondientes y se dé el seguimiento en los Municipios de su Jurisdicción.*

*No omito hacer mención que los instrumentos de medición a que hace referencia su escrito que sirven de base en transacciones comerciales del sector agroalimentario en el Estado, específicamente ubicados en los centros de acopio son básculas que se denominan de ALTO ALCANCE, cuya capacidad va de los 5,001 a los más de 20,000 kilos. En este sentido esta Oficina de Defensa del Consumidor apoyaría a los Centros de Acopio a informarles el trámite de solicitud, pero una vez que ellos realizan el pago, el servicio se atendería a través de un camión tara cuya programación de atención a nivel nacional le compete a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de esta Procuraduría Federal del Consumidor en la CDMX. (. ..)*

Posteriormente, el 21 de abril del se realizamos una mesa de trabajo en la cual participaron la diputada y diputados integrantes de la comisión, personal asesor de los grupos parlamentarios representados en la comisión y el secretario técnico[[46]](#footnote-46), los proponentes expusieron las causas y motivos que fundamentan su propuesta al señalar que *la Profeco en el ámbito de sus* *atribuciones, verifica los instrumentos de medición, reiteraron la necesidad* *de brindar a los a los productores agropecuarios el apoyo para que realicen* *actividades comerciales, y se ajusten en calidad, características y sobre todo* *en precio también. La única manera de hacerlo es revisar los instrumentos* *de medición aludidos en la propuesta, es indudable que existe justificación* *para estar de acuerdo y con ello, exhortar a que se haga una revisión de esa* *naturaleza. En el ámbito de sus atribuciones, la Profeco verifica los* *instrumentos de medición que sirven de base para las transacciones* *comerciales toda vez que por su naturaleza o por su utilización tienden a* *variar sus características metrológicas y afectan con ello el patrimonio de los* *consumidores y usuarios al pagar estos injustificadamente el precio de* *bienes* o *servicios que no reciben en su totalidad.*

La Ley Federal de Protección al Consumidor señala que todo proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, así como la información de los mismos.

Coincidimos en la necesidad de realizar estas verificaciones en los diversos ciclos agrícolas, con la finalidad de evitar fraudes en contra de las personas del campo; en este sentido, estamos de acuerdo con las consideraciones de los proponentes, y que de manera directa se realice el exhorto a la PROFECO por ser esta la autoridad encargada de promover y proteger los derechos de los consumidores, teniendo la obligación de realizar las acciones necesarias para promover el respeto a los derechos de los consumidores a través de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones

legales en la materia.

Enfatizamos que, es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los instrumentos de medición que se comercialicen en el territorio nacional sean seguros y exactos, con el propósito de que no representen peligro para sus usuarios y los consumidores y que presten un servicio adecuado conforme a sus cualidades metrológicas, cuando sean utilizados en transacciones comerciales y en las determinaciones para la protección de la salud, el medio ambiente y demás actividades donde se requiera de la medición. [[47]](#footnote-47)

La calibración tiene por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas, motivo por el cual la PROFECO, en el ámbito de sus atribuciones, verifica estos instrumentos de medición que sirven de base en transacciones comerciales, toda vez que por su naturaleza o por su utilización tienden a variar sus características metrológicas y afectan con ello el patrimonio de los consumidores y usuarios al pagar éstos, injustificadamente, el precio de bienes o servicios que no reciben en su totalidad.

En apoyo a lo anterior, está lo estipulado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece la obligación de vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial; así como las normas y especificaciones industriales.

A su vez la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en su artículo 40 fracción cuarta, señala: *Las normas oficiales mexicanas tendrán como* *finalidad establecer, las características y/o especificaciones relacionadas con* *los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de* *medición, verificación, calibración y trazabilidad; los criterios, reglas,* *instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras* *disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las* *dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en* *este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas* *conforme al procedimiento establecido en esta Ley.*

Por su parte, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, se expidió la NOM-010-SCFI-1994, Instrumentos de medición-Instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-Requisitos técnicos y metrológicos, señalando que la evaluación de la conformidad y vigilancia de la presente Norma será realizada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias, y por las unidades de verificación acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Las Normas Oficiales Mexicanas como competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor son las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes.

Derivado de lo anterior, se solicita que las verificaciones se realicen en tiempo y forma, es decir, en función de la marca y modelo que se encuentre dentro del listado de aprobación del modelo o prototipo emitido por la Dirección General de Normas y del tipo de instrumento de medición del que se trate. La verificación inicial es la que se realiza, por primera ocasión y antes de su utilización para transacciones comerciales o para determinar la tarifa de un servicio.

Verificación anual (Periódica), cuando la marca, modelo o prototipo, aparece en el listado de aprobación y el mismo tiene una antigüedad menor a 10 años, situación que se acredita con factura o documento emitido por el fabricante.

Verificación semestral (Periódica), cuando la marca, modelo o prototipo no aparece en el listado de aprobación o el mismo tiene una antigüedad de 10 años o mayor.

Verificación extraordinaria, cuando no sea inicial o periódica y cuando lo soliciten los usuarios de estos y los suministradores de servicios o cuando pierdan su condición de instrumento verificado.

De esta manera, lograremos que los productores agropecuarios tengan la certeza de que en los centros de acopio de Guanajuato brindan un servicio de almacenaje eficiente y justo, con procesos de comercialización ordenados que permitan mejorar los ingresos de los productores por la venta de sus cosechas, para que el campo siga siendo uno de los grandes motores del desarrollo de Guanajuato y de todo el país.

Ponemos de manifiesto que seremos gestores de las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar el cumplimiento y las adecuaciones legislativas que sean complementarias para dar certeza jurídica y el pleno uso de los derechos de las personas que conforman el sector rural en el

Estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 171 la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos proponer a la Asamblea la aprobación del siguiente:

**ACUERDO**

**PRIMERO.** La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Guanajuato, efectúa un respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, verifique los instrumentos de medición que sirven de base en transacciones comerciales del sector agroalimentario en el Estado de Guanajuato; y en el ámbito de sus atribuciones legales, se realicen verificaciones rigurosas en los centros de acopio durante el ciclo agrícola otoño-invierno.

**SEGUNDO.** La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Guanajuato, efectúa un respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que una vez realizadas las acciones de verificación de los instrumentos de medición que sirven de base en transacciones comerciales del sector agroalimentario en el Estado de Guanajuato; y en el ámbito de sus atribuciones legales, realicen verificaciones rigurosas en los centros de acopio durante el ciclo agrícola otoño-invierno, e informe a esta soberanía sobre los resultados encontrados.

**Guanajuato, Gto., 14 de junio de 2022**

**La Comisión de Fomento Agropecuario**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR LA DIPUTADA MARÍA MAGDALENA ROSALES CRUZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE REFORMAR EL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; Y ADICIONAR UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 11, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, *EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER ORDENAMIENTO,* ANTE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA.**

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E .**

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recibimos como pendiente legislativo para efectos de estudio y dictamen la iniciativa formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de reformar el artículo 30 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y adicionar una fracción VI al artículo 11, recorriéndose la subsecuente, dos párrafos al artículo 15 y una fracción V al artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, *en la parte correspondiente al primer ordenamiento*, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Analizada la iniciativa, esta Comisión Legislativa de conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 111 fracción I y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formula a la Asamblea el siguiente:

**D I C T A M E N**

**I. Del Proceso Legislativo**

**I.1.** En sesión del 18 de marzo de 2021 ingresó la iniciativa con expediente 64598 formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de reformar el artículo 30 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y adicionar una fracción VI al artículo 11, recorriéndose la subsecuente, dos párrafos al artículo 15 y una fracción V al artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, *en la parte correspondiente al primer ordenamiento*, turnándose por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para su estudio y dictamen.

**I.2.** En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, del 19 de abril de 2021, se radicó la iniciativa y fue aprobada la metodología de trabajo en los siguientes términos:

1. *Se remitirá la iniciativa vía electrónica a las diputadas y los diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a los 46 ayuntamientos, a los colegios de profesionistas e instituciones de nivel superior en el estado quienes contarán con un término de 20 días hábiles para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes, a través de la misma vía de comunicación.*
2. *Se remitirá el Instituto de Investigaciones Legislativas para que emita un estudio y opinión sobre los alcances de la iniciativa.*
3. *Se creará un link a la página web del Congreso del Estado, para que la iniciativa pueda ser consultada y se puedan emitir observaciones.*
4. *Las observaciones remitidas a la secretaría técnica serán compiladas y además se elaborará un documento con formato de comparativo que se circulará a la Comisión.*
5. *Se establecerá una mesa de trabajo conformada por las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, asesores que conforman la misma, en su caso un representante de las autoridades consultadas y, de los diputados y diputadas de esta Legislatura que deseen asistir, para discutir y analizar las observaciones remitidas. De igual forma, si durante el desahogo* de la mesa de trabajo llegaran observaciones, estas serán tomadas en cuenta.

**II.1.** Derivado de ese ejercicio de consulta a diversas autoridades del poder ejecutivo, organismos autónomos, ayuntamientos y bajo el principio de parlamento abierto respondieron el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, así como el Instituto Electoral del Estado y la Coordinación General Jurídica del Estado; así como los ayuntamientos de Celaya, Cortazar e Irapuato.

Se manifestaron de igual forma los ayuntamientos de Coroneo, San Francisco del Rincón y Santiago Maravatío.

El Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado manifestó que:

*(…) se advierte del desarrollo del estudio, no se tiene una regulación de los mecanismos de participación ciudadana; en la constitución federal, solo refiere a la Consulta Popular y al proceso de Revocación de Mandato, no obstante en nuestra apreciación, y por así referirlo la iniciante en el cuerpo de la exposición de motivos, es ineludible apelar al texto de la Carta Magna, toda vez que se alude al principio de la Representación Política, y la forma de gobierno, en la configuración de la silla ciudadana, que estimamos se confunde con la acepción de la Participación Ciudadana, y lo que atañe al alcance de una figura jurídica de intervención en sesión de Ayuntamiento, sin tener que acreditar o justificar el interés de su intervención.*

*Finalmente concluimos:*

*1.- La Constitución Política federal como en la ley federal de consulta popular, no contemplan el tema motivo de la iniciativa, de incluir la silla ciudadana como mecanismo de participación ciudadana.*

*2. La Constitución Política estatal, hace referencia a los mecanismos de participación ciudadana, del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, mismos que se disponen en la Ley de Participación Ciudadana.*

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato manifestó que:

*(…) debe señalarse que al tratarse la iniciativa sobre un mecanismo de participación ciudadana en los asuntos públicos, el estudio de la misma se encuentra enmarcado en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar, a ser elegido y el derecho a tener acceso a la función pública.*

*Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:*

*Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;*

*(...)*

*En efecto, la dirección de los asuntos públicos mencionada en el párrafo a),"...es un concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político, que incluye el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo y abarca todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales. Así la asignación de facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos, protegido por el artículo 25, se determinarán en la constitución o en otras leyes.*

*Bajo este contexto, la silla ciudadana es un espacio que permite a la ciudadanía la participación dentro de los Ayuntamientos; de esta forma, "...la colaboración entre los representantes populares y la ciudadanía resulta en un modelo que fomenta la democracia participativa, mismo que se sustenta en la soberanía popular', donde las y los ciudadanos tengan derecho a participar en las decisiones públicas, específicamente en los Ayuntamientos.*

*Es decir, "...las y los ciudadanos pueden participar directamente en los asuntos públicos asistiendo a asambleas populares facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o sobre los asuntos de una determinada comunidad. En este sentido, el derecho a participar en condición de igualdad en la vida política y pública es indispensable para garantizar la democracia integradora". Así, "...la participación efectiva de todas las personas y grupos en los asuntos políticos y públicos es fundamental para la garantía efectiva de los derechos humano.*

*Ahora bien, la reforma al artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, busca establecer lo siguiente: "...Artículo 30. Todo Poder Público dimana del pueblo[...] Esta Constitución reconoce al menos al referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la silla ciudadana en los ayuntamientos como formas de participación ciudadana. El organismo público electoral local a que se refiere el artículo 31 de esta Constitución tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de participación ciudadana que señala esta Constitución y en los términos de la Ley de la materia, a excepción de la silla ciudadana, cuya reglamentación le corresponderá emitir a los ayuntamientos ..."*

El ayuntamiento de Celaya, Guanajuato manifestó en su momento que:

*(…) no es pertinente, ya que en los ayuntamientos existen otras mecanismos y figuras de participación ciudadana, por mencionar algunos los consejos ciudadanos, patronatos, etc. Siendo importante la garantía que se tiene sobre el derecho de audiencia.*

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, consideró en su opinión y observaciones lo siguiente:

*(…) una vez analizada la referida iniciativa a la luz del marco normativo electoral previsto en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, no se advierte que su contenido entre en conflicto con normas electorales locales.*

*Asimismo, del contenido de la iniciativa se desprende que la regulación de la silla ciudadana será emitida por los ayuntamientos y que este Instituto no tendrá competencia en relación con tal forma de participación ciudadana.*

*Al respecto, si bien en nuestra entidad se cuenta con la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, se trata de un ordenamiento legal publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato en el año 2002, cuyas reformas no han tenido por objeto la inclusión de mecanismos de participación diversos a la iniciativa popular, plebiscito, referéndum y referéndum constitucional.*

*En tal virtud, respetuosamente se somete a consideración de las y los integrantes de la legislatura, la conveniencia de incorporar a la ley en comento mecanismos de participación ciudadana que, si bien, no cuentan con una regulación que amerite el acopio de firmas y la intervención de este Instituto para la dictaminación de su procedencia, constituyen opciones diversas para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.*

*Tal es el caso de la silla ciudadana objeto de la iniciativa, la' cual podría incorporarse a la ley de participación ciudadana en comento, como acontece en legislaciones de otros estados, por citar algunos ejemplos, es el caso de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo; además, en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, se regula un mecanismo denominado cabildo en sesión abierta, con base en el cual las ciudadanas y ciudadanos pueden participar en sesiones de los ayuntamientos solo con derecho a voz.*

*La silla ciudadana y el cabildo abierto son mecanismos de participación parecidos, sin embargo, la principal diferencia es que las sesiones de cabildo abierto se celebran con base en la periodicidad determinada en ley, mientras que la posibilidad de intervenir a través de la silla ciudadana no está sujeta a temporalidad. Además, la silla ciudadana no limita la intervención de la ciudadanía a asuntos determinados y se reglamenta principalmente por los ayuntamientos. Asimismo, en la Ley de Consulta Popular del Estado de Tlaxcala se prevé un medio de participación personal de las ciudadanas y ciudadanos en sesiones de cabildo, a través de la figura de la voz ciudadana, para llevar a cabo la presentación de propuestas.*

El ayuntamiento de Cortazar, Guanajuato manifestó que:

*(…) los argumentos que presenta la iniciante en su exposición de motivos nos parecen razonables desde el punto de vista de la ciudadanía. Es cierto que la representatividad que los gobernados depositan en quienes eligen para encabezar las administraciones, de los tres órdenes de gobierno, no es precisamente la que todos pretendiéramos tener para la mejor toma de las decisiones a favor de la población, incluso cuando gana el partido por el cual votamos.*

*Sin embargo, así es como está concebido nuestro sistema de gobierno democrático, por ello la importancia que radica en nosotros como votantes de tener mayor participación y aprender a escoger mejor a nuestros representantes políticos, eligiendo personas con preparación, experiencia, actitud de servicio, disponibilidad, cercanía a la ciudadanía, objetividad y realismo para que al momento de elaborar y proponer los proyectos, estos puedan ser aterrizados en beneficio de nuestra sociedad. Estamos ciertos que promover una participación más activa de la ciudadanía en las decisiones que toman sus gobernantes vendría a ser benéfica para que las acciones de gobierno sean más cercanas a la problemática específica que vive cada comunidad.*

*Ponemos a consideración del Congreso el análisis de la necesidad de reformar de igual forma la Ley de Participación Ciudadana para incluir la figura de la Silla ciudadana propuesta en esta iniciativa a fin de que el mecanismo quede bien integrado legalmente.*

*El regidor Valentín Lerma Arriaga expone que no está de acuerdo con otorgar un lugar o silla específica para este fin, dado que no es necesario tener un sitio especial en los cabildos para poder dar el uso de la voz a la ciudadanía. En cuanto a la redacción del Decreto, se observaron los siguientes errores al describir las modificaciones que se pretenden realizar: cuando en realidad se están reformando los párrafos segundo y tercero, mismos que no deben ser identificados como fracciones ya que no están numerados; además, falta la frase: "de la" después del número 30. Si bien estos errores no se encuentran en el texto que quedaría asentando en la Ley, de ser aprobada esta iniciativa, los mencionamos porque hablan del poco cuidado o falta de revisión por parte de la iniciante o su equipo de trabajo, antes de poner su propuesta a consideración de los municipios.*

*En la presente Comisión estamos de acuerdo que la participación ciudadana es un ejercicio indispensable para el buen desarrollo de nuestra sociedad, el cual debe de ampliarse y promoverse. A su vez, encontramos que el mecanismo que la iniciativa propone es bastante interesante pero incompleto para que pueda operar de forma correcta, con una regulación base, al menos con los puntos que enlistamos en la Consideración Segunda de este dictamen, a fin de evitar que el mencionado mecanismo sea utilizado con fines dolosos hacia la administración en curso o con una preparación deficiente para su exposición, como lo deja ver la reforma a la Ley Orgánica Municipal en su artículo 15, donde deja la participación abierta y ambigua a cualquier tema, incluso cuando su atención en cabildo no siempre sea el mejor lugar para analizarlo. Es por esto que manifestamos que esta nueva figura no debe de aprobarse sino hasta que en la propia ley se encuentre ordenada, así como lo están los demás mecanismos en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, lo cual no fue considerado por la iniciante y deje a los municipios que definan en su reglamentación solamente los detalles finales para que la ciudadanía tenga voz sobre un asunto del orden del día de una sesión ordinaria de ayuntamiento, entre otras cuestiones de protocolo para que pudiera estar hasta cierto punto homologada en todos los municipios esta figura de participación ciudadana.*

El ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato manifestó que:

*(…) del análisis y revisión al documento descrito en el párrafo anterior, le manifiesto que en el artículo primero del proyecto de Decreto mediante el cual se pretende reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, establece que: "se reforman las fracciones segunda y tercera del artículo 30", sin embargo en el dispositivo legal vigente el citado numeral no cuenta con fracciones, por lo que se sugiere verificar la redacción del proyecto de Decreto.*

La Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado manifestó en su momento que:

*(…) la participación ciudadana y deliberación pública en los procesos de toma de decisiones son valores esenciales dentro de un régimen democrático, por lo que su reconocimiento y desarrollo en la normatividad fortalece la diaria construcción de los procesos e instituciones democráticas. Conforme con el artículo 40 de la CPEUM, México es una República democrática representativa. En el mismo sentido, la Carta Democrática Interamericana (CDI) establece en el artículo 2 que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.*

*Al desarrollar dicho concepto la CDI en el artículo 3 señala que los elementos esenciales de la democracia representativa son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, en el artículo 6 de la CDI se reconoce que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad, además de ser una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.*

*Como se advierte, la democracia representativa es la base del Estado de Derecho en los Estados Americanos y en el Estado Mexicano. A esta figura se han sumado formas de democracia participativa, tales como los plebiscitos o referéndums, como instituciones de democracia semidirecta.*

*(…)*

*Sobresale que en la propia iniciativa de reforma al artículo 30 de la CPEG se diferencia a la silla ciudadana del resto de los mecanismos de democracia semidirecta, pues se señala expresamente que la misma no será organizada o regulada por autoridades electorales, sino directamente por los Ayuntamientos.*

*El principio de gobierno abierto se encuentra ya reconocido a nivel constitucional local, por lo que en su caso correspondería darle contenido y regularlo a efecto de darle mayor efectividad, en concreto al subprincipio de participación ciudadana deliberativa.*

**II.2.** En fecha 14 de septiembre de 2021, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Cuarta Legislatura, determinaron dejar esta iniciativa como un pendiente legislativo para que fuera la siguiente Legislatura quien se pronunciara al respecto.

**II.3.** En fecha 11 de octubre de 2021, se instaló la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Quinta Legislatura, donde se impusieron del contenido de los pendientes legislativos, y entre ellos se encuentra la iniciativa que se dictamina.

En reunión de la comisión legislativa del 11 de mayo de 2022, se determinó a efecto de dar continuidad y seguimiento puntual a la metodología de análisis y estudio aprobada por unanimidad en su momento por la homóloga de la Sexagésima Cuarta Legislatura, la fecha para la celebración de la mesa de trabajo.

**II.4.** Se celebró una mesa de trabajo en modalidad híbrida el 1 de junio de 2022 para desahogar los comentarios y observaciones a la iniciativa, estando presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Briseida Anabel Magdaleno González, Yulma Rocha Aguilar, Alma Edwviges Alcaraz Hernández y el diputado Gerardo Fernández González integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como, servidores públicos representantes de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Estuvieron presentes también asesores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, MORENA, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y la secretaria técnica de la comisión.

**II.5.** La presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido negativo, atendiendo a lo vertido en la mesa de trabajo y, conforme con lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mismo que fue materia de revisión por los diputados y las diputadas integrantes de esta comisión dictaminadora.

**III. Contenido de la iniciativa y consideraciones generales de las y los dictaminadores sobre los objetivos perseguidos con la propuesta de reforma al artículo 30 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato *sobre la silla ciudadana***

El objeto de la iniciativa es reformar el artículo 30 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a fin de incorporar la silla ciudadana como un mecanismo de participación ciudadana más.

La iniciante expresó en su exposición de motivos lo siguiente:

*«[...] De acuerdo con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside en el pueblo mexicano y es voluntad de éste constituirse en una República representativa y democrática; sin embargo, aunque así se ha establecido, hemos recorrido un largo camino para acercarnos a las prácticas democráticas mínimas deseables. La participación ciudadana es una condición necesaria para el funcionamiento de la democracia, y hoy México se encuentra ante un nuevo panorama, una nueva forma de hacer política, estamos en el camino hacia una verdadera democracia en la que se deben ofrecer a la población más herramientas para participar en la toma de decisiones que nos afectan a todas y todos.*

*La democracia que más que ser representativa, se ha convertido en delegativa, que tiene como vicio reducir la participación política a la participación electoral, y asumir que las personalidades electas, así como las instituciones, son quienes tienen todo el poder de decidir. Así, los mecanismos de participación son sumamente limitados, por lo que, pese a que la democracia es el gobierno del pueblo, el pueblo no suele ser realmente tomado en cuenta en las decisiones públicas. Si bien es cierto que la complejidad y el tamaño de nuestras sociedades pueden significar un reto para el funcionamiento y operación de la participación política directa en todos los asuntos de la vida pública, también es cierto que esto supone la necesidad de que se construyan mecanismos democráticos e institucionales efectivos para que las y los representantes populares sean más cercanos a quienes representan, que verdaderamente escuchen y tomen en cuenta sus demandas.*

*Por esto, es competencia de todos los órganos gubernamentales incentivar el ejercicio de las libertades políticas de la ciudadanía como las de expresión, protesta o asociación, entre otras; así como crear, ampliar y reconocer mecanismos institucionales de participación política ciudadana. De esta manera, cuando los representantes populares discutan asuntos de interés para la ciudadanía, ésta debe tener la posibilidad de jugar un papel protagónico en la discusión y toma de decisiones, ejerciendo sus derechos democráticos y contribuyendo a la deliberación pública. En este tenor, se propone la creación de un mecanismo institucional de participación ciudadana en el ámbito municipal, conocido como silla ciudadana, que consiste en la existencia de un escaño especial para la ciudadanía que tenga la intención de participar en asuntos específicos de las sesiones de Ayuntamiento.*

*El objetivo de este mecanismo es que la ciudadanía tenga la posibilidad de participar activamente en sesiones del cabildo, porque precisamente el Ayuntamiento representa el ámbito de gobierno más inmediato para la ciudadanía, el que tiene la responsabilidad de escuchar a los habitantes de su demarcación que, exponiendo sus intereses, opiniones, juicios, quejas, denuncias, sugerencias, ideas y propuestas, sean atendidos por quienes han de dictaminar los asuntos que impactan directamente sus vidas cotidianas, incluyendo las leyes de ingresos y presupuestos de egresos: regidores, síndicos y presidentes municipales. Lo anterior implica reconocer el derecho que tiene la ciudadanía para presentar propuestas al Ayuntamiento e incidir en los asuntos públicos del ámbito local, incluyendo lo referido a la administración y a los servicios públicos, debiendo resultar en un acuerdo público sobre cada participación.*

*Esta propuesta es importante para la democracia participativa y para la ciudadanía de cada municipio, porque de las autoridades municipales depende la tranquilidad de los pueblos, el establecimiento y la ampliación de los servicios públicos, así como las perspectivas del mejoramiento de la vida cotidiana del vecindario, tanto en las pequeñas poblaciones como en las grandes urbes. Respecto de la participación en la figura de silla ciudadana, ésta podrá ser solicitada por habitantes del municipio, en representación personal o de alguna asociación de habitantes que tenga la intención de participar en algún punto específico de la orden del día de la sesión contemplada, sin que sea necesario se tenga que acreditar interés alguno.*

*En el ámbito internacional, este mecanismo ya se implementa en otros países de Latinoamérica, como es el caso de Ecuador, donde la llamada silla vacía tiene un funcionamiento similar al que aquí se propone, con la salvedad de que únicamente se aplica en los congresos locales3. En cuanto a las legislaturas locales, en México, dos entidades ya incorporan esta figura en sus constituciones: Quintana Roo y la Ciudad de México. Por último, la presente iniciativa únicamente contempla las bases conforme a las cuales cada Ayuntamiento deberá expedir su respectivo reglamento, de acuerdo con lo que establece el artículo 115 segundo párrafo de la fracción II de la Constitución Federal, el cual dispone que los ayuntamientos tienen la facultad de aprobar los reglamentos que aseguren la participación ciudadana y vecinal.*

*(…)»*

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, consideramos oportuno realizar un análisis general al objetivo de la propuesta, y emitir los comentarios de carácter general al respecto, a efecto de hacer una valorización con respecto a que las y los ciudadanos puedan participar en las discusiones del órgano colegiado en los municipios, impulsando de esta manera la participación política, ciudadana y democrática, y considerar la viabilidad en su caso, de la propuesta contenida en esta iniciativa.

**III.1. Análisis de adición de la figura de la silla ciudadana en la Constitución Política Local**

El tema origen de esta propuesta refiere a una institución de participación ciudadana que relaciona al ciudadano directamente con las autoridades del orden municipal, tal es el caso de la silla ciudadana, siendo este el mecanismo de participación que faculta a las y los ciudadanos que así lo soliciten, a tratar durante las sesiones ordinarias, los temas específicos de su interés, a efecto de aportar elementos de valoración para la toma de decisiones al interior del ayuntamiento.

En ese sentido, la importancia de la participación ciudadana es resultado de la *teoría democrática que se conecta con las concepciones normativas*[[48]](#footnote-48). Así, es posible ubicar principalmente a la elección pública, que requiere una opinión libre, informada y culta, la cual da impulso a la deliberación propositiva e inteligente, y por tanto no está determinada por el grado de participación de sus integrantes. Por otra parte, las teorías deliberativas sugieren el intercambio de argumentos imparciales y racionales, con tono idealista que apela a las decisiones moralmente correctas asumidas por el consenso desde una amplia participación; y, finalmente, la teoría constitucional con la carga del valor simbólico garantista, en la defensa de los derechos fundamentales que en juego con las decisiones de la comunidad política, delegan al órgano judicial el conjunto de decisiones de la participación ciudadana y vacían su contenido procesal.

Por ello, al hablar del poder de los ciudadanos, la dimensión de acceso al poder se caracteriza por normas que regulan el acceso al poder no delegado, es decir, que los ciudadanos lo no pierden, por parte de los gobernados. Nos referimos a la inclusión ciudadana que se expresa en el disfrute de los derechos de tener voz en asuntos de interés público, de elegir a los que gobernarán la entidad política o de ser elegidos para puestos de gobierno. Esto no es más que la participación electoral vía la inclusión ciudadana sustentada en los derechos políticos.

Al referirnos al ejercicio del poder no delegado de parte de los ciudadanos, la cuestión se presenta en cómo las personas participan en la vida pública y esgrimen sus derechos frente a los gobernantes y gobernados. Es ejemplo de ello la participación ciudadana expresada en la participación en la gobernanza, en la deliberación, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como en los distintos mecanismos de democracia directa. Se trata también de la participación cívica en el debate y la deliberación pública y, la colaboración en la cocreación de decisiones y valores públicos.

Así entonces la participación ciudadana como expresión del poder no delegado se puede identificar de varias maneras, como forma de controlar y moderar el poder inevitablemente otorgado a los representantes políticos; como el puente entre la representación y la decisión pública; como decisión vinculante ciudadana; y, más recientemente, como participación colaborativa donde los ciudadanos, al utilizar las tecnologías digitales, logran cocrear las decisiones y políticas públicas para construir instituciones públicas abiertas donde las nuevas habilidades para participar, colaborar y comprender sean fundamentales para que la calidad de la transparencia se vincule con la rendición de cuentas[[49]](#footnote-49).

En ese tenor, es menester manifestar que la democracia es, por definición, el sistema político donde la voz de los ciudadanos influye en la toma de decisiones a través de canales organizados de representación y participación. Y la visión transparencia implica gobiernos de acuerdo con reglas fijas y publicadas sobre la base de información y procedimientos que sean accesibles al público y en algunos usos dentro de campos de actividad claramente delimitados.[[50]](#footnote-50) Ambos elementos desde nuestro punto de vista presuponen un conjunto de derechos de los que gozan los ciudadanos, como el derecho a la libre asociación, libre expresión, representación, acceso a la información y participación en la vida cívica y política, los cuales son difíciles de conceptualizar fuera de los sistemas democráticos.

Derivado de estos argumentos, quienes dictaminamos podemos afirmar que sin participación la democracia no existiría, por lo que se requiere siempre del voto y de acciones más allá del voto. Ello implica poseer una serie de derechos y obligaciones ya que ser ciudadano en una sociedad democrática significa, además, haber ganado la prerrogativa de participar en la selección de los gobernantes y de influir en sus decisiones. En consecuencia, la participación ciudadana exige al mismo tiempo la aceptación previa de las reglas de juego democrático y la voluntad libre de los individuos que deciden participar.

Tenemos claro que el estado de derecho y la libertad de los individuos, son elementos clave de la participación. Es por ello que la mejor participación ciudadana en la democracia no es la que se manifiesta siempre y en todas partes, sino la que se mantiene alerta, la que se propicia cuando es necesario impedir las desviaciones de quienes tienen la responsabilidad del gobierno, o encauzar las demandas justas que no son atendidas con la debida profundidad por los gobernantes.

Desde este punto de vista las figuras de iniciativa popular, consulta popular y revocación de mandato, reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para el caso de Guanajuato, el plebiscito, referéndum, consulta popular y referéndum constitucional, son las instituciones de democracia semidirecta reconocidas en nuestro marco normativo.

Es decir, las instituciones referidas implican la posibilidad que la ciudadanía de nuestro Estado tenga injerencia directa en las decisiones, para lo que es necesario cumplir con un espectro mínimo de participación establecido en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato. Como se advierte, la totalidad de los mecanismos de democracia participativa implica la participación de un segmento de la ciudadanía, ya sea para su activación o aprobación.

Ahora, en el caso de la figura denominada *silla ciudadana*, en los términos que fue proyectada en la reforma, consideramos que el alcance sería que la participación sería otorgada a una sola persona quien tendría la posibilidad de participar en cada sesión del ayuntamiento, sin que ello garantice que esa participación en las sesiones del órgano colegiado cuente con la representación social o popular del grupo de personas que presentó la propuesta o sobre el tema sobre el cual tendrá que tomarse alguna decisión.

Por ello, consideramos que más allá de la institución que se pretende incorporar en el texto constitucional, bajo este parámetro ha de entenderse que el Ayuntamiento al ser un órgano colegiado, cuenta ya con una representación plural *que fue elegida*, lo que garantiza que en las discusiones y toma de decisiones exista un debate democrático y abierto.

Este tipo de esquemas de participación ciudadana en *Latinoamérica* demuestra que la silla ciudadana contempla no solo la posibilidad de que la persona sea escuchada sino de contar con derecho a voto, lo que implica una participación directa por parte de la ciudadanía en la toma de decisiones, que hacen de esa institución un mecanismo de participación directa.

En el caso propuesto para Guanajuato, la persona que ocupe la silla vacía únicamente cuenta con derecho a voz, por lo que al carecer de voto no podría incidir directamente en la toma de decisiones, como sí ocurre con el resto de los mecanismos de participación de otras entidades federativas, como lo es Ciudad de México y de Quintana Roo. Para el caso ecuatoriano, al referirnos a un ejemplo en América Latina y al existir la figura desde el año 2008 ya se tenemos conocimiento de las fortalezas e inconvenientes del sistema. Para el caso de Ecuador en el que se dota de derecho a voto a la persona ciudadana ocupante de la silla, es una desestimación de la voluntad popular, que eligió previamente a sus representantes en elecciones universales y, segundo, una violación a la igualdad democrática, principio que busca la exclusión de las diferencias arbitrarias o irrazonables de los sistemas políticos.

Estamos conscientes que la solución a la silla vacía debería ser un espacio estructurado dentro de un sistema de participación ciudadana nacional y local, que permita a todos los sectores, sin exclusión, expresar sus posiciones y participar en los debates públicos sin voto. Solo de esta manera se logrará una verdadera deliberación que no dependa de estrategias políticas previas, sino que articule a los diversos actores de un sistema de gobierno. Por ello, el diseño de la participación unipersonal no permite la representación proporcional de la ciudanía, por lo que conforme al sistema político y normativo nacional y estatal, corresponde diseñar mecanismos que sean acordes con el diseño institucional mexicano y guanajuatense.

Sin embargo, del análisis a esta propuesta consideramos que la Constitución Política para el Estado de Guanajuato contempla en el artículo 117 que los Ayuntamientos se regirán por el principio de *Gobierno Abierto*, en términos de su Ley Orgánica. Así, la normatividad estatal contempla ya un principio rector para los órganos colegiados de gobierno de los municipios que implica la necesidad de establecer la participación ciudadana como parte del gobierno abierto, que en el actual estado de cosas corresponde a cada Ayuntamiento reglamentar y aplicar en su ámbito de atribuciones, con lo cual coincidimos.

Consideramos necesario analizar la pertinencia de implementar figuras de participación ciudadana dentro del contexto de gobierno abierto, que permita no solo a una persona, sino a las personas o grupos interesados en participar del proceso deliberativo de la toma de decisiones de los ayuntamientos. En razón de ello, la propuesta que se dictamina pretende adicionar al artículo 30 de nuestro Código Político Local una nueva forma de participación ciudadana semidirecta, consistente en la figura de silla ciudadana, misma de la cual revisamos su alcance. Sin embargo, dada la naturaleza que se pretende con la reforma, creemos que se encuentra inmersa en el principio de gobierno abierto, pues no se trata de una herramienta que tenga injerencia directa y vinculante en la toma de decisiones, sino como un elemento de democracia deliberativa, situación que se cumpliría dando pauta a ese principio constitucional.

Aunado a lo anterior, es fundamental saber que partimos de lo ya regulado en nuestra Constitución Política Local, en el artículo 30, que dice: todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y en su segundo párrafo manifiesta que: *Esta Constitución reconoce al menos al referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular como formas de participación ciudadana.*

En ese sentido, podemos manifestar que esa porción normativa vigente en la Constitución estableció de manera enunciativa y no limitativa las formas de participación ciudadana, al señalar que *reconoce al menos*, las ya referidas esto es, que generó un sistema normativo que permite que sea la ley donde se incorpore en su caso, otras formas de participación ciudadana sin necesidad de generar una reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Desde nuestro análisis consideramos que la iniciativa trastoca el principio de la representación Política, y la forma de gobierno, que son la esencia en el enunciado normativo que se pretende reformar. En la configuración de *esta institución*, que se confunde con la acepción de la participación ciudadana, y que atañe al alcance de una figura jurídica de intervención directa en las decisiones del Ayuntamiento, sin tener que acreditar o justificar el interés de su intervención, con lo que no se coincide.

Al respecto, si se tratase de una figura de participación directa en asuntos públicos, ya contamos con una norma jurídica vigente que regula y que como ya aludimos puede reformarse para en su caso, incluir mecanismos de participación diversos a la iniciativa popular, plebiscito, referéndum y referéndum Constitucional.

En razón de los argumentos expresados se determina la no viabilidad de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato con los alcances propuestos, pues lo expuesto en las motivaciones de quien propone no justifica su reforma al artículo 30, siendo que en los términos vigentes, la propia porción normativa deja abierto la regulación a la apertura de más mecanismos de participación, pero que deberá ser en el orden legal.

Con todo lo expuesto estimamos pertinente el archivo de la iniciativa de referencia, toda vez que el objeto que persigue ya encuentra regulado desde la óptica constitucional.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

**ACUERDO**

**Único.** Se ordena el archivo definitivo de la iniciativa formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a efecto de reformar el artículo 30 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y adicionar una fracción VI al artículo 11, recorriéndose la subsecuente, dos párrafos al artículo 15 y una fracción V al artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, *en la parte correspondiente al primer ordenamiento*, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Se instruye al Secretario General del Congreso archive de manera definitiva la iniciativa de referencia.

**GUANAJUATO, GTO., A 15 DE JUNIO DE 2022**

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

**Dip. Susana Bermúdez Cano**

**Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Dip. Briseida Anabel Magdaleno González**

**Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

**Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas**

**Dip. Yulma Rocha Aguilar**

**Dip Gerardo Fernández González**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE EXHORTAR AL FISCAL GENERAL DE GUANAJUATO CARLOS ZAMARRIPA PARA QUE LA FISCALÍA A SU CARGO OBRE BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD CON RESPECTO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS CONTEXTOS DE HALLAZGO, INCLUYENDO EN PARTICULAR LAS FOSAS CLANDESTINAS DE LOS QUE TIENE CONOCIMIENTO Y HOMOLOGUE CONSECUENTEMENTE LOS DATOS DEL MAPA QUE APARECEN EN SU PÁGINA OFICIAL.**

**C. DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E**

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Quinta Legislatura, recibimos para efecto de estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Fiscal General de Guanajuato Carlos Zamarripa para que la Fiscalía a su cargo obre bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente los datos del mapa que aparecen en su página oficial.

Con fundamento en los artículos 111, fracción XIX y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, formulamos a la Asamblea el siguiente:

**D I C T A M E N**

**I. Del Proceso Legislativo**

**I.1.** En sesión del 19 de mayo de 2022 ingresó la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Fiscal General de Guanajuato Carlos Zamarripa para que la Fiscalía a su cargo obre bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente los datos del mapa que aparecen en su página oficial, turnándose en su momento por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Guanajuato.

**I.2.** En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de fecha 27 de mayo de 2022, se radicó la propuesta de punto de acuerdo.

**I.3.** Posteriormente, en reunión de la comisión legislativa del 15 de junio de 2022, se realizó el análisis de la propuesta de punto de acuerdo entre las diputadas y los diputados visualizando los alcances y viabilidad de la misma.

**I.4.** La presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido negativo, atendiendo al análisis realizado en comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, mismo que fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora.

**II. Valoración de la propuesta y consideraciones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales**

Quienes integramos la comisión dictaminadora, referenciamos los puntos sobre los cuales versa la propuesta que tienen como objeto exhortar al titular de la Fiscalía para que obre *esa Institución* bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente los datos del mapa que aparecen en la página oficial.

Las y los proponentes expusieron en sus consideraciones lo siguiente:

*«(…) El 13 de mayo el grupo de buscadoras Madres Guerreras de León informó que se encontraron restos de personas en una fosa clandestina por el rumbo de Hacienda Arriba en León, Guanajuato. Las indagaciones iniciaron desde fines del mes de abril. Siguen apareciendo nuevos hallazgos de los viejos y graves problemas de seguridad en nuestra entidad, que habían sido negados, hasta que la presión social llevó a reconocer su penosa existencia.*

*Las instituciones creadas para brindar justicia y acompañar a las víctimas deben reacomodarse para suplir las omisiones en la información -principalmente la Fiscalía Estatal de Guanajuato- y requieren fortalecerse en su organización y en el respaldo financiero, lo hemos dicho muchas veces, para cumplir a cabalidad sus objetivos. De eso trata este Punto de Acuerdo.*

*En la reciente mesa de trabajo con este Congreso y a pregunta expresa por parte del Grupo Parlamentario de Morena el Fiscal Zamarripa respondió que nunca había negado la existencia de fosas clandestinas en la entidad. Se le respondió que si hasta antes del 2020 lo que existían eran “hoyos con cuerpos” y el Fiscal lo aceptó. Es como si antes de haber acuñado el término feminicidio en la Ciudad de México a fines de la primera década de este siglo, no hubiese habido asesinatos de mujeres en razón de género o no se reconociera la desigualdad de las personas con discapacidad porque antes se les llamaba “inválidas”. El viejo dilema del problema y cómo se le nombra.[[51]](#footnote-51)*

*Es conveniente acudir a la historia para contextualizar esta respuesta del Fiscal Zamarripa, ahora que en este Congreso se tiene un formato más adecuado para discutirla y proponer un punto de acuerdo sobre la materia. La narrativa histórica oficial no reconoce su tardía postura en el reconocimiento y en las acciones sobre la desaparición de personas en Guanajuato, por eso es importante desmontar esta versión.*

*Lo dice mejor el planteamiento atribuido a Milán Kundera: Para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia. Alguien escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otra historia; después, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron.*

*El término de fosa clandestina, junto con o como sinónimo de sitio de inhumación clandestina, ya existía en el protocolo homologado de identificación (2015) y el protocolo de investigación en delitos de desaparición de 2019, así como en definiciones, cuando menos indicativas, emitidas públicamente por la Secretaría de Gobernación (2019) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016).*

*Además, ya era de uso común en muchos estados, por parte de las autoridades también, y claro por parte de decenas de colectivos de familiares en el país. Cuando se habla de "negación" oficial en Guanajuato, es porque antes del octubre de 2020, cuando salió otro protocolo, el Homologado de Búsqueda, contenía la definición de fosa clandestina; tanto la Unidad de Transparencia de FGE, como las y los funcionarios y el poder ejecutivo, no admitían su existencia en el territorio de Guanajuato, o bien utilizaban eufemismos que, en los hechos, negaban su presencia.*

*La Comisión Estatal de Búsqueda es la responsable legal de mantener el registro de fosas clandestinas y comunes; sin embargo, antes de junio de 2020 y de la ley estatal, esto era tarea de la Fiscalía; además, es una tarea compartida porque el registro contiene el listado y datos de fosas, o debería contenerlo, fosas que, por ley, la Fiscalía procesa y registra. Así que la FGE debió de contar con la información completa, misma que es ocultada hasta esa fecha en sus respuestas de transparencia.*

*Los informes de la Secretaría de Gobernación hasta octubre de 2020 no documentaron presencia de fosas clandestinas en Guanajuato, pues se basaban entre otras cosas en la información enviada por las fiscalías estatales, y entonces quiere decir que la de nuestro estado seguía enviando información de "cero fosas".*

*Las palabras literales del fiscal sobre fosas indican que la institución ha tenido un patrón de invisibilización, no-prioridad y desinterés, que se traduce una negación de facto del fenómeno; como antes de 2019-2020 lo había tenido, con el problema y las altas cifras de personas desaparecidas.*

*Para fortalecer este señalamiento, leeré algunos párrafos del Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato.[[52]](#footnote-52)*

*“El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México de 2016 destacó, con base en fuentes hemerográficas, el hallazgo entre*

*2007 y septiembre de 2016 de 18 fosas clandestinas con 22 cuerpos en la*

*entidad”.*

*“Por otro lado, el 13 de mayo de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) presentaron un Informe sobre Fosas Clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), en el cual se documentó únicamente la localización por parte de la Federación de tan solo una fosa clandestina en Guanajuato en los primeros cinco meses del gobierno en turno…en cambio, el mismo Informe actualizado al 6 de enero de 2020 no documentó la existencia de fosas clandestinas en el estado. Asimismo, en julio 13 de 2020, en la última presentación del*

*RNPDNO y de datos de fosas clandestinas con las que cuenta la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el estado de Guanajuato fue señalado entre las seis entidades que no habían entregado datos actualizados sobre personas desaparecidas y tampoco aparece entre las entidades con hallazgos de fosas clandestinas”. “En contraste con lo difundido en 2019 por autoridades federales y con lo que han estado reportando los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) no indican la presencia de fosas clandestinas en Guanajuato ni de registros adecuados según lo prevé la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.*

*“Respecto de la petición contestada por la FGE el 21 de octubre de 2019, solicitud 02686819 en la que se preguntaba por el número de fosas clandestinas y de cuerpos exhumados, la Unidad reiteró que no se contaba con casos o registros bajo dichos parámetros en el estado, es decir que no había registro de fosas clandestinas, aunque reiteró la presencia entre 2015 y septiembre de 2019 de 20 cuerpos de personas enterrados en la entidad, sin dar a conocer su ubicación, misma que no está asentada en una base de datos, sino solamente en las carpetas de investigación de cada caso.”[[53]](#footnote-53)*

*“Ante congresistas locales y medios, en noviembre de 2019, la fiscal especializada en desapariciones, Yolanda Ramírez, sostenía que sólo había 11 denuncias por desaparición de personas en el estado, y esta información es confirmada dentro de la respuesta a solicitud de información pública que se acaba de citar. En ese momento, según datos recabados de peticiones ciudadanas, la cifra real era de por lo menos 1,443 personas desaparecidas.[[54]](#footnote-54)*

*“Además, los testimonios de familias y grupos de buscadores en el estado (con uno o más casos de desaparición) se estaban multiplicando y para finales de año ya tenían mayor visibilización. Los datos de la FGE obtenidos por transparencia, señalaban que había por lo menos 1,040 casos de personas desaparecidas y que en el rango máximo podría llegar hasta 2,100 personas, al corte del 31/12/2019 (folio 00052820 del 20/01/2020). El problema es que casi todos se clasificaban como “indagatorias por no localización de personas”, o sea no se investigaban por los delitos tipificados en la Ley General en Materia de Desaparición”.*

*“El 20 de enero de 2020, ante la solicitud 00052820, que pedía información sobre el número y la ubicación de las fosas clandestinas o entierros clandestinos (superficiales o profundos) de cualquier tipo, así como de los restos humanos o cuerpos de personas encontrados desde que se tuviera registro, la Unidad de Transparencia contestó que no se contaba con registros de fosas en el Estado Respuesta similar se obtuvo el 13 de febrero de 2020, en respuesta a las solicitudes con folios 00345020 y 00349020”,*

*Actualmente en la página de la Fiscalía de Guanajuato se publica un "mapa"[[55]](#footnote-55) que según FGE vale como "registro", en sustitución del registro de fosas o como listado de hallazgos que procesó la fiscalía, siendo que estos últimos son muchos más y no están en el mapa; este mapa además no tiene información suficiente sobre periodos de procesamiento y descubrimiento y fechas. Dada la inconsistencia histórica en los reportes, porque no se ajustan a definiciones propias y a la tendencia sistemática a la elusión de la información proporcionada por la FEG, relacionada con personas desaparecidas, fosas clandestinas y contextos de*

*hallazgo -como es el caso de la zona cerril de Juventino Rosas pues técnicamente un pozo puede no ser una fosa clandestina-, se propone a esta Soberanía el siguiente punto de: ACUERDO*

*ÚNICO. - Esta LXV Legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar un respetuoso EXHORTO al Fiscal General de Guanajuato Carlos Zamarripa para que la Fiscalía a su cargo obre bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente los datos del “mapa” que aparecen en su página oficial.»*

Del análisis de la propuesta podemos manifestar que su objetivo consiste en exhortar al Fiscal General de Guanajuato Carlos Zamarripa para que ese organismo autónomo bajo el principio de máxima publicidad realice acciones con respecto al derecho a la información sobre los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue en consecuencia los datos del mapa que aparecen en su página oficial.

En ese sentido, es importante referir que como punto de partida debemos hablar de nuestra Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato, donde los contenidos y el objeto de la Ley son acorde a los alcances de los artículos 1 y 2 de la Ley General, de esta forma, se estableció que la Ley tiene por objeto, la prevención, investigación y sanción de los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos vinculados con la desaparición de personas; así como, establecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para buscar a las personas desaparecidas y esclarecer los hechos.

Lo anterior, partiendo de lo establecido en el artículo 73 constitucional, fracción XXI, inciso a, que alude a que el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sanciones en las materias de (…) desaparición forzada, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, así como expedir normas que contemplen la distribución de competencias y formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. En uso de esa facultad fue que se legisló los tipos penales relativos a la desaparición forzada, desaparición por parte de particulares y delitos vinculados, y que se encuentran regulados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Consideramos que lo anterior, no implica que estos delitos se persigan exclusivamente por autoridades federales, sino que existe un sistema que determina las competencias para prevenir, investigar y sancionar esos delitos entre la Federación y las entidades federativas, tales son los supuestos que nos avocamos, pues el propio diseño de la Ley General en los artículos 24 y 25 refiere ese sistema de competencias, quedando ahí determinadas por exclusión la competencia a los estados.

De igual forma, nuestra Ley de la materia contiene conceptos que integran de manera puntual la norma de una forma global, es decir, esos conceptos debían ser incluidos, definiendo sus alcances jurídicos, tales como Registro Estatal de Personas Desaparecidas, Banco Nacional de Datos Forenses; Comisión Nacional de Búsqueda; Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación; Registro Estatal de Datos Forenses; Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; Reporte; Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Estos mecanismos referidos en la norma marcan de manera objetiva que toda la información con respecto a las personas desparecidas o que son víctimas de algún delito previsto en esa norma, deberá esa información ser institucionalizada mediante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra la información de los registros de personas desaparecidas y no localizadas, tanto de la Federación como de las entidades federativas, como lo es el caso que nos ocupa.

Por otro lado, en nuestra misma norma de manera congruente no se consideró una definición de análisis de contexto, a efecto de no limitar o contravenir todas aquellas acciones derivadas de las atribuciones que otorga la Ley General a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, siendo acordes a la armonización que se previó cuando se legisló en la materia.

Cabe señalar sobre el asunto que nos ocupa que, en el portal web de la Fiscalía General del Estado, está disponible y consultable para público en general un sitio en el que se publica diversa información actualizada y relacionada con contextos de hallazgos[[56]](#footnote-56), dentro de la cual se contienen datos respecto del municipio en el que se ubica el contexto, cuerpos identificados, indicios, individuos, estudios realizados, entre otros incluso se observa el contexto de hallazgo ubicado en Hacienda de Arriba en León, al que hace referencia las y los proponentes en las consideraciones de esta propuesta.

En ese mismo orden de ideas de la página web que tiene el organismo autónomo denominado *Fiscalía General del Estado*,[[57]](#footnote-57) en su apartado de transparencia, se puede acceder a un espacio dedicado a la difusión de las peticiones planteadas a dicha Representación Social y la respuesta que se brinda a cada una.

Por otro lado y no menos importante es que, del análisis a las consideraciones que aluden los proponentes, se desprende de información oficial y *reiterada de viva voz por el titular de ese organismo autónomo* sobre *fosas clandestinas* no se contaba con casos o registros bajo dichos parámetros en el Estado, no obstante en relación a cuerpos o restos humanos o cadáveres o partes de cuerpos exhumados de entierros precisó que observaba lo dispuesto por el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, y otorgó información con especificaciones técnicas–arqueológicas en las que se concluía que se puede enterrar algo o alguien en una fosa, pero no toda fosa constituye un entierro, ni todo entierro se traduce o representa una fosa, de ahí que de manera clara y tomando en consideración el marco normativo, así como cuestiones de carácter técnico y científico se afirmara que no se contaba con registro de fosas clandestinas.

Importante manifestar que de las solicitudes que en su momento se presentaban para conocer registros de *fosas clandestinas* y diversos rubros relacionados con ello, debe considerarse que, en la metodología y terminología de la arqueología y antropologías forenses, en lo que a excavación o recuperación de restos humanos se refiere, el término fosa no se vincula a un entierro, sino a uno de los diversos rasgos clasificatorios. De ahí que el órgano procurador de justicia debe avocarse siempre a conceptos jurídicos contemplados en normas legales y principios constitucionales para otorgar la información con un carácter técnico y objetivo.

En este rubro es menester clarificar que a la fecha se encuentra pendiente de dictaminar por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa que aprobó su suscripción este Congreso del Estado de Guanajuato en marzo de 2021, por la que se adicionan las fracciones XI y XII, con lo que se recorren las subsecuentes, al artículo 4 de la *Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,*a efecto de incorporar los conceptos de *Fosas Clandestinas y Fosas Comunes*. Dicha iniciativa se encuentra turnada a la Comisión de Justicia, es decir, es fundamental que se legisle sobre este apartado, que la Ley General no contempla tales conceptos, que al final darían orden y una regulación homogénea y sistemática ante las autoridades del orden federal y estatal, evitando problemas de coordinación, de información, e interpretación de carácter técnico.

En consecuencia, y tomando en consideración los antecedentes, referencias normativas, técnicas y científicas en materia de *fosas clandestinas*, se estima que existe confusión en cuanto a los parámetros y precisiones que se hacen por parte de quien propone, y en las que la Fiscalía General del Estado ha otorgado información realizando las puntualizaciones correspondientes. Es decir, la información sobre este tema emitida por una instancia gubernamental de orden federal y por el ombudsman nacional, sin embargo, no necesariamente resultaría vinculante en el ámbito de la investigación científica en sede penal, ni, por ende, en la clasificación técnica pericial y científica de los diversos contextos de hallazgo, así como para la integración de los registros institucionales de la Fiscalía General del Estado, pues podrían obedecer a metodologías y parámetros distintos

En cuanto al principio de máxima publicidad, se advierte que en la materia que nos ocupa referente a los contextos de hallazgo, existen condiciones para sostener que se cumple por parte de la Fiscalía General del Estado, pues los datos son públicos en la página web de ese organismo autónomo reconocido por la constitución, además se identifican diversas respuestas en el rubro, así como datos objetivos otorgados en los *Informes Anuales del Fiscal General del Estado* y manifestaciones diversas en las reuniones de trabajo ante quienes integramos este Poder Legislativo y su *Congreso del Estado de Guanajuato*.

La desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, son tipos penales previstos en la Ley General de la materia, en tanto que la desaparición de personas no implica necesariamente la comisión de un delito, ni precisamente de los ilícitos referidos. Por ello, la información disponible en el mapa consignado en la página web de la Fiscalía General del Estado, no sustituye ni por un momento información oficial contenida en los registros oficiales previstos en la normativa aplicable en materia de fosas, tal como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que concentra la información de los registros de personas desaparecidas y no localizadas, tanto de la Federación como de las entidades federativas, así como del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

De tal suerte, que del análisis de la propuesta no se identifica de manera objetiva contra que se debe establecer la relación de igualdad o equivalencia del mapa referido en la propuesta, haciendo esta comisión legislativa una interpretación de las consideraciones y la propuesta de exhorto con relación a lo establecido en la Ley Generalen materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y nuestra ley de búsqueda para generar este argumento de carácter técnico y objetivo.

De igual forma, consideramos que no existen elementos o condiciones para sostener objetiva o válidamente que no se atiende al principio de máxima publicidad y respeto al derecho a la información por parte de la Fiscalía General del Estado con respecto a lo aludido en la propuesta.

En consecuencia, y en atención a las consideraciones expuestas, se determina la no viabilidad de la propuesta por querer ejercer una acción vía exhorto sobre un mecanismo de información del propio organismo autónomo, es decir, el mapa aludido es meramente informativo para quienes ingresan al portal, sin ser por ello la información oficial contenida en los registros oficiales previstos en la normativa aplicable en materia de fosas, motivo por el cual estimamos pertinente proponer el archivo de la misma.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

**Acuerdo**

**Único.** Se ordena el archivo definitivo de la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Fiscal General de Guanajuato Carlos Zamarripa para que la Fiscalía a su cargo obre bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente los datos del mapa que aparecen en su página oficial.

Se instruye al Secretario General del Congreso archive de manera definitiva la propuesta de referencia.

**GUANAJUATO, GTO., A 21 DE JUNIO DE 2022**

**LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

**Dip. Susana Bermúdez Cano**

**Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Dip. Briseida Anabel Magdaleno González**

**Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

**Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas**

**Dip. Yulma Rocha Aguilar**

**Dip Gerardo Fernández González**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE EXHORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS QUE FALTAN DE DISCUTIR Y, EN SU CASO, APROBAR LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE DECRETO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 QUE YA LES HA SIDO NOTIFICADO CON ANTERIORIDAD, PARA QUE A LA BREVEDAD LLEVEN A CABO EL PROCESO DE DISCUSIÓN.**

**C. DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E**

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Quinta Legislatura, recibimos para efecto de estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a los ayuntamientos que faltan de discutir y, en su caso, aprobar las reformas y adiciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, contenidas en el proyecto de decreto de fecha 13 de septiembre de 2021 que ya les ha sido notificado con anterioridad, para que a la brevedad lleven a cabo el proceso de discusión.

Con fundamento en los artículos 111, fracción XIX y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, formulamos a la Asamblea el siguiente:

**D I C T A M E N**

**I. Del Proceso Legislativo**

**I.1.** En sesión del 7 de abril de 2022 ingresó la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar a los ayuntamientos que faltan de discutir y, en su caso, aprobar las reformas y adiciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, contenidas en el proyecto de decreto de fecha 13 de septiembre de 2021 que ya les ha sido notificado con anterioridad, para que a la brevedad lleven a cabo el proceso de discusión, turnándose en su momento por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de Guanajuato.

**I.2.** En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de fecha 26 de abril de 2022, se radicó la propuesta de punto de acuerdo.

**I.3.** En reunión de la comisión legislativa del 15 de junio de 2022, se realizó el análisis de la propuesta de punto de acuerdo entre las diputadas y los diputados visualizando los alcances y viabilidad de la misma.

**I.4.** La presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido positivo, en atención al análisis realizado al interior de la comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, mismo que fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora.

**II. Valoración de la propuesta y consideraciones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales**

Quienes integramos la comisión dictaminadora, referenciamos los puntos sobre los cuales versa la propuesta que tienen como objeto exhortar a los ayuntamientos que faltan de discutir y, en su caso, aprobar las reformas y adiciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, contenidas en el proyecto de decreto de fecha 13 de septiembre de 2021 que ya les ha sido notificado con anterioridad, para que a la brevedad lleven a cabo el proceso de discusión, *en materia de revocación de mandato*.

La proponente expuso en sus consideraciones lo siguiente:

*«(…) Por muchos años el régimen que imperaba en México limitó la participación del pueblo en temas políticos, con lo que se indujo una falta de interés ciudadano que lo limitó a ser un espectador en la elección de representantes realizada esporádicamente. Se les impusieron*

*mecanismos restrictivos de delegación del poder, que se tradujeron en problemas sistemáticos de organización y acción colectiva, que impiden la participación activa y directa en la vida pública.*

*A pesar de estos problemas o limitantes que el pueblo ha vivido, la sociedad mexicana ha ido cambiando paulatinamente, de forma que hoy se está exigiendo que los procesos públicos sean más transparentes, solicitando además que se les consulte en la toma de decisiones. En el actual contexto político, económico y social de México la figura de la revocación de mandato asume particular relevancia porque permite reafirmar la soberanía popular y dar cauce legítimo al desacato de la voluntad general, como ha sucedido tantas veces en la historia de nuestro país.*

*Por ello, en el Estado de Guanajuato, durante la legislatura pasada se presentó una iniciativa con la intensión de incorporar la figura de revocación de mandato, a fin de que se pudiera revocar el mandato al gobernador del Estado. Iniciativa que se dictaminó en sentido positivo y posteriormente se les hizo llegar a todos los ayuntamientos del Estado para su discusión y en su caso aprobación, de los cuales hasta finales de septiembre del 2021 únicamente nueve ayuntamientos la habían discutido. Ante la falta de atención por parte de la mayoría de los ayuntamientos, al inicio de esta sexagésima quinta legislatura se consideró prudente exhortar a los municipios faltantes para que llevarán a cabo la discusión y votación del dictamen; de nueva cuenta, solo fue atendido por ocho municipios más, lo que nos da un total de diecisiete municipios que hasta la fecha lo han discutido.*

*Así, son 29 ayuntamientos los que faltan de discutir y en su caso aprobar lo relativo al dictamen: Acámbaro, San Miguel de Allende, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Manuel Doblado, Comonfort, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, León, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, San Diego de la Unión, San José Iturbide, Santa Catarina, Juventino Rosas, Santiago Maravatio, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.*

*En este sentido, al ser la revocación de mandato un mecanismo que se establece en beneficio del pueblo, y cuya activación requiere de este, es necesario generar una cultura de interés en los asuntos políticos de nuestro estado, y para ello se requiere reformar en favor de la democracia, del pueblo y de la participación ciudadana. Es por ello que, desde el grupo parlamentario de Morena, consideramos urgente y necesario utilizar las herramientas que como Poder Legislativo tenemos para acelerar este proceso, pues la posibilidad de una revocación de mandato en nuestro Estado permitiría a la ciudadanía guanajuatense contar con una defensa importante para evitar los abusos de poder en su contra, de forma que cuando el pueblo lo considere necesario, pueda emprender un proceso democrático, de participación ciudadana para en su caso revocarle el mandato al titular del Poder Ejecutivo del Estado y así afianzar la democracia en nuestra entidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta Asamblea someto a su consideración el siguiente punto de: A C U E R D O*

*UNICO. La LXV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, acuerda girar un atento exhorto a los Ayuntamientos que faltan de discutir y en su caso aprobar las Reformas y Adiciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, contenidas en el proyecto de Decreto de fecha 13 de septiembre de 2021 que ya les ha sido notificado con anterioridad, para que a la brevedad lleven a cabo el proceso de discusión y en su caso aprobación correspondiente.»*

Del análisis de la propuesta podemos manifestar que su objetivo consiste en exhortar a los ayuntamientos que faltan de discutir y aprobar las reformas y adiciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, contenidas en el proyecto de decreto de fecha 13 de septiembre de 2021, para que a la brevedad lleven a cabo el proceso de discusión y aprobación, en su caso.

En ese sentido, es importante referir que la revocación de mandato es un genuino instrumento político, por medio del cual, la mayoría ciudadana ejerce el voto cuando el gobernante no colma las expectativas que generó en el momento de la elección.

Con respecto a la institución de la revocación de mandato y para evitar vaguedades y confusiones, el artículo tercero transitorio de la reforma que a nivel federal reguló esta institución de origen expresó que, para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

La reforma que crea la revocación del mandato, mediante el artículo 35 Constitucional, establece como prerrogativa de los ciudadanos la de participar en los procesos de revocación de mandato; y de manera respectiva en los artículos 41 y 116, dispone que pueden ser sujetos de los mismos, tanto el Presidente de la República, como los Gobernadores de los estados; y que, en cada caso, serán los organismos electorales los encargados de la implementación de dichos procesos.

Por su parte, en esa reforma federal se dispuso en su artículo sexto transitorio que las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local.

Es decir, la revocación de mandato es el mecanismo constitucional mediante el que los ciudadanos determinan que algún funcionario de elección popular debe de interrumpir el ejercicio de su mandato y reducir el periodo para el cual fue electo, por incurrir en causas por las cuales debe ser retirado de el, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales, con lo cual coincidimos.

En ese sentido, ya este Poder Legislativo se pronunció mediante el dictamen correspondiente a través de la comisión homóloga que en su momento dictaminó dos iniciativas que armonizaban la institución de la revocación de mandato a la reforma a nivel federal dando por resultado una Minuta con Proyecto de Decreto que el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura avaló por unanimidad el pasado septiembre de 2021.

Con estos alcances fue que como parte del Constituyente Permanente se remitió la minuta de referencia a los 46 ayuntamientos con la circular número 345 en fecha 13 de septiembre de 2021, a efecto de que se pronunciaran aprobando la misma, con fundamento en el artículo 145 de nuestro Código Político Local que refiere que en todo tiempo puede ser reformada o adicionada la Constitución. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, es indispensable que el Congreso las apruebe por el voto de cuando menos el setenta por ciento de sus miembros *y, además, sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos*.

A la fecha se han emitido 17 acuerdos por parte de los ayuntamientos, de esos 16 son aprobatorios y 1 en contra. De ahí la necesidad de generar esa comunicación institucional con las autoridades municipales que aun no se han pronunciado con respecto a esta minuta proyecto de decreto que aludimos, por eso consideramos importante realizarlo mediante este mecanismo.

**III. Modificaciones a la propuesta de punto de acuerdo**

No omitimos comentar que, dados los trabajos de análisis al interior de la Comisión, quienes participamos, consideramos oportuno hacer ajustes al mismo a efecto de hacerlo congruente con lo que realmente se busca al exhortar a las autoridades municipales.

Es decir, las y los diputados de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ratificamos el convencimiento de que la comunicación y coordinación institucional en estas esferas es fundamental para que los resultados perseguidos por las autoridades involucradas se vean redituados en beneficio de las y los ciudadanos, de ahí la necesidad de identificar los ayuntamientos que realmente no se han pronunciado y de esta manera ser acordes a los objetivos que dieron origen a esta propuesta.

En consecuencia, y en atención a las consideraciones expuestas, se determina la viabilidad de la propuesta al encontrarse dentro del campo de acción de este Poder Legislativo por ser quien dio origen a tales acciones a través de su principal función de legislar, motivo por el cual estimamos pertinente el exhorto con los alcances previstos en el presente dictamen.

Resaltamos el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo impacta e incide respecto al Objetivo 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas con sus metas 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades, y 16.10. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

**Acuerdo**

**Único.** La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, exhorta atentamente y en respeto a la autonomía municipal a los ayuntamientos de Acámbaro, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria para que a la brevedad lleven a cabo el proceso de discusión y aprobación, en su caso de la Minuta Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman las fracciones IV y V del artículo 24; el segundo párrafo del artículo 30; y que adicionan los párrafos quinto y sexto, este último con los apartados A y B al artículo 30 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, *en materia de revocación de mandato*.

**GUANAJUATO, GTO., A 21 DE JUNIO DE 2022**

**LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

**Dip. Susana Bermúdez Cano**

**Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Dip. Briseida Anabel Magdaleno González**

**Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

**Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas**

**Dip. Yulma Rocha Aguilar**

**Dip Gerardo Fernández González**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR EL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.**

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E .**

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recibimos para efectos de estudio y dictamen la iniciativa a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

Analizada la iniciativa, esta Comisión Legislativa de conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 111 fracción I y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formula a la Asamblea el siguiente:

**D I C T A M E N**

**I. Del Proceso Legislativo**

**I.1.** En sesión del 28 de octubre de 2021 ingresó la iniciativa a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con el expediente 34/LXV-I turnándose en su momento por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para su estudio y dictamen.

**I.2.** En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 2 de noviembre de 2021 se radicó la iniciativa y fue aprobada la metodología de estudio y dictamen en los siguientes términos:

1. *Remitir vía electrónica para opinión a los 36 diputados y diputadas que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, al Poder Judicial, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a las instituciones de educación superior en el estado, quienes contarán con un término de 20 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes.*
2. *Se habilitará un vínculo (link) en la página web del Congreso del Estado, a efecto de que se consulte la iniciativa y se puedan recibir observaciones a la misma.*
3. *Se remitirá al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado para su estudio y opinión.*
4. *Se integrará un documento que consolidará todas las propuestas emitidas en la consulta por escrito o vía electrónica que se hayan remitido previamente a la Comisión para el análisis de la iniciativa. Dicho documento será con formato de comparativo.*
5. *Se celebrará una mesa de trabajo con carácter permanente para analizar las observaciones remitidas, a través del documento comparativo.*
6. *Una vez lo cual, se presentará un proyecto de dictamen para que sea analizado en reunión de la Comisión.*

**II.1.** Derivado de ese ejercicio de consulta a diversas autoridades de los poderes Ejecutivo, a través de la Coordinación General Jurídica y Judicial, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato e instituciones de educación superior y bajo el principio de parlamento abierto respondieron el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, el Poder Judicial, y la Universidad de Guanajuato.

El Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado manifestó que:

*(…) En ese sentido, se considera que la propuesta del iniciante, no resulta viable en cuanto al dispositivo normativo que se pretende reformar, ya que siguiendo la estructura conceptual que hemos venido refiriendo, la Constitución exclusivamente ha de establecer las facultades específicas a cada uno de los poderes del Estado, favoreciendo con ello la estabilidad política y democrática, y, por otra parte, debe contemplar los derechos fundamentales de los ciudadanos y habitantes de un territorio, y por el contrario, serán las leyes orgánicas o reglamentarias el medio útil para ejercer cambios significativos o de vital importancia en el modo de operar de las Instituciones del Estado, sin tener que alterar o modificar de manera constante el marco constitucional.*

El Poder Judicial del Estado de Guanajuato manifestó que:

*(…) La obligación de informar se establece incluso para el titular del Poder Ejecutivo, tanto federal como local, lo cual debe hacerse ante el Poder Legislativo. En el caso concreto de la iniciativa que nos ocupa, tal obligación de informar está igualmente prevista para el Fiscal General de la República como para el Fiscal General del Estado, y en su diseño vigente se guarda congruencia entre ambas normas. Sirva como basamento a lo anterior, el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su parte conducente. Si bien es cierto que las reglas de la técnica legislativa no constituyen un límite formal o material a la discrecionalidad política de los legisladores, también lo es que sí la racionalizan y le dan coherencia y congruencia a todo el sistema normativo nacional y subnacional.*

*En ese sentido, la Fiscalía General del Estado es un organismo constitucionalmente autónomo, por lo que cuenta con capacidad de gestión, de manera que el mandato de éste y de otros entes de esa naturaleza consiste, entre otros, en cumplir con sus deberes de transparencia y rendición de cuentas, de ahí que esté obligado a rendir periódicamente el informe que la propia constitución establece. La Fiscalía General del Estado, en tanto órgano independiente del poder público, goza de las condiciones inherentes a su naturaleza, por lo que está obligado a la rendición de cuentas y transparencia de manera oportuna, fidedigna y clara sobre sus resultados, quedando en su esfera de facultades la determinación de destacar aquellos puntos que cumplan con aquellos principios elementales.*

*Bien pudiera estimarse que la voluntad del constituyente permanente nacional y local fue no reglar el formato para el cumplimiento del mandato de rendir o presentar informes por los diversos obligados, sino precisamente dejarlos en libertad de formato o criterio de los responsables de ello, sin menoscabo de las facultades de los poderes para solicitar de éstos mayor información o incluso su comparecencia*

Durante el desahogo de la metodología se pronunció la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a través de sus comentarios de inviabilidad.

**II.2.** Se celebró una mesa de trabajo en modalidad híbrida el 15 de junio de 2022 para desahogar los comentarios y observaciones a la iniciativa, estando presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Laura Cristina Márquez Alcalá, Yulma Rocha Aguilar y Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como, servidores públicos representantes de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Estuvieron presentes también asesores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, MORENA, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y la secretaria técnica de la comisión.

**II.3.** La presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido negativo, atendiendo a lo vertido en la mesa de trabajo y, conforme con lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mismo que fue materia de revisión por los diputados y las diputadas integrantes de esta comisión dictaminadora.

**III. Contenido de la iniciativa y consideraciones generales de las y los dictaminadores sobre los objetivos perseguidos con la propuesta de reforma al artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato *sobre el contenido del informe anual del titular de la Fiscalía General***

El objeto de la iniciativa de manera individual radica en reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a fin de que el Fiscal General del Estado presente anualmente a los poderes del Estado un informe de actividades, *que comprenderá en todo caso, tanto las estadísticas generales como las especiales por tipo de delitos, además de las estadísticas e información que la ley le obligue a presentar*.

El iniciante expresó en su exposición de motivos lo siguiente:

*«[...] El 14 de julio del 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el Decreto 202 que fue aprobado por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Guanajuato.*

*Mediante el Decreto 202 se reformaron en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato los artículos 6, párrafo octavo; 8, párrafos tercero y noveno; 46, fracción I; 63, fracción XXI, párrafo séptimo; 69, fracción I; 77, fracción XI párrafo segundo; 78, párrafo tercero; 94, párrafo primero; 132, fracción I; y se adicionó al Título Quinto el Capítulo Cuarto, con el artículo 81 antes 82 recorriéndose el Capítulo Cuarto para quedar como Capítulo Quinto y los artículos en ese momento 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95, pasaron a ser 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94, respectivamente; y un Capítulo Sexto, compuesto por una Sección Única que contiene el artículo 95.El capítulo sexto adicionado se titula “De la Fiscalía General del Estado”, y su sección única “Fiscalía General del Estado”, el cual contiene únicamente el artículo 95, quedando en su redacción final y vigente, compuesto por 18 párrafos. Es así que la presente iniciativa, se centra en el penúltimo párrafo del artículo 95 citado, que a la letra indica:*

*“El Fiscal General del Estado presentará anualmente a los Poderes del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante el Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.”*

*Consideramos que el cumplimiento de informar que se diseñó mediante esta disposición normativa de nuestra Constitución Local, no permite el desarrollo de una evaluación objetiva, que tenga como materia esencial el universo o totalidad de hechos delictivos atendidos en una anualidad, por la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de su actividad principal, que es la procuración de justicia. Lo anterior se afirma porque del análisis de los informes que ha presentado en el año 2019 y 2020 la Fiscalía General del Estado, se advierte que están desarrollados bajo un criterio libre, informando aspectos que si bien son parte de sus actividades administrativas, como inversiones para mejoramiento de instalaciones o capacitación, se omite en su mayor parte lo que se conoce como datos duros, que en el caso específico de la procuración de justicia, consisten en precisar el número de denuncias recibidas para cada tipo de delito que está tipificado en el Código Penal del Estado de Guanajuato.*

*(…)*

*(…) En el caso del informe 2019 es un apartado que ofrece parcialmente información sobre hechos delictivos. Merece especial atención que en la página 82 se informa que se tramitaron 164,503 carpetas de investigación, de las que un 9% de alguna forma llegaron a*

*sede jurisdiccional, y por otra parte, 78% se resolvieron por determinaciones o decisiones en sede ministerial, lo que significa que 128,296 delitos denunciados no prosperaron en aras de la procuración de justicia, para igual número de víctimas.*

*Así mismo, del total de 164,503 carpetas de investigación, en las páginas 84 y 85 se lee que solo llegaron a la etapa final del procedimiento penal, conocida como juicio, un total de 276 asuntos, lo que significa el 0.16% del total de denuncias. No se precisan en forma alguna por tipo de delitos las 164,503 carpetas de investigación, por lo que no se puede conocer en forma pormenorizada un análisis que permita identificar y comparar datos, entre años, para visualizar la dinámica de hechos delictivos en el Estado de Guanajuato.*

*En el informe 2020, es un apartado que ofrece parcialmente información sobre hechos delictivos. En la página 102 se informa que 119,417 (75%) carpetas de investigación se resolvieron por determinaciones o decisiones en sede ministerial, que 16,335 (10%) tuvieron de alguna forma un tratamiento en sede jurisdiccional, sin precisar la forma en que concluyeron, lo que sumado a 24,018 que se señalan en proceso de investigación, hace una suma de 159,770 carpetas de investigación iniciadas.*

*Al no precisarse en este informe los delitos a los que corresponden respectivamente las 159,770 carpetas de investigación, no puede generarse información cualitativa y cuantitativa respecto al informe 2019. En la página 107 se informa que 230 asuntos llegaron a la etapa final del procedimiento penal, conocida como juicio, lo que significa el 0.14% del total de carpetas de investigación, cantidad que se ve reducida en su comparativo con el 2019, destacando de esta forma que la procuración de justicia en Guanajuato, podría afirmarse, tuvo un retroceso. Su eficacia en la tarea sustantiva de investigación, sigue drásticamente comprometida, porque fueron 119,417 carpetas de investigación (75% del total) las que se quedaron en sede ministerial.*

*En un apartado de “Resultados derivados de los procedimientos de mecanismos alternativos”, en la página 123, se informa que se derivaron a esos mecanismos, un total de 26,790 asuntos, y 54% se resolvieron, esto significa, apenas poco más de la mitad, dejando un 46 % de esta totalidad, que representan 12,323 carpetas de investigación, también sin una solución judicial, porque apenas fueron solo 230 asuntos los que llegaron a juicio. En el informe 2019 abarca las páginas 79 a 133 (de un total de 140 páginas), siendo únicamente 4 páginas en las que se informan datos propiamente de delitos, que se limitan a la generalidad de la cantidad de carpetas de investigación; en el informe 2020 comprende las páginas 93 a 124 (de un total de 197), y apenas en 6 páginas se informa genéricamente sobre las carpetas de investigación, sin precisión alguna de los delitos a los que corresponden.*

*(…)*

*En el informe 2020 comprende las páginas 125 a 164 (de un total de 197). De esta forma, los comparativos de informes presentados por la Fiscalía General del Estado durante los años 2019 y 2020, ante este Congreso del Estado de Guanajuato, que son los dos primeros años en que ha funcionado como un ente autónomo, y de esta manera su titular ha considerado que cumple con su obligación constitucional contenida en el penúltimo párrafo del artículo 95 de la Constitución Local, se constata primeramente que son informes elaborados con un criterio libre, y que de esta forma, los datos proporcionados en lo que concierne a la función sustantiva y fundamental de esta institución, que es la procuración de justicia, respecto a los delitos tipificados en el Código Penal del Estado de Guanajuato, se puede afirmar, son escasos e insuficientes.*

*Por otra parte, debe considerarse que la Organización de Naciones Unidas (ONU), desde la década de 1980, a través de la División de Estadística de las Naciones Unidas, en cumplimiento de las orientaciones de la Asamblea General y de los Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, publicó la primera edición del MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE JUSTICIA PENAL. En esta línea, como respuesta a la resolución 1997/27 del Consejo Económico y Social, de fecha 21 de julio de 1997, que se tituló “Reforzamiento del Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal en lo relativo a la elaboración de estadísticas de la delincuencia y al funcionamiento de los sistemas de justicia penal” se elaboró también la Guía para la elaboración y el análisis de las estadísticas de justicia penal.*

*Así mismo, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se publicó el Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal, en el año 2010. En este último documento, se señala en su página 6, que “el hecho delictivo es la categoría más elemental de todo sistema de estadísticas sobre justicia penal. Incluye datos sobre el delito, el delincuente y la víctima”. Establece en su página 7, como “Datos sobre los casos tramitados por la fiscalía”, los siguientes:*

*A. Número de personas acusadas o causas abiertas*

*B. Número de casos por tipos de asunto, tipos de delito o tipos de proceso*

*C. Número de imputaciones formuladas*

*D. Número de recursos de apelación interpuestos*

*E. Número de comparecencias ante los tribunales*

*F. Número de casos remitidos a otras instancias*

*G. Número de sentencias condenatorias*

*H. Número de casos resueltos en determinado período de tiempo*

*Existen muy pocas jurisdicciones que hayan adoptado indicadores para medir sistemáticamente la eficacia del ministerio público. Los indicadores más habituales a ese respecto son los siguientes:*

*El número medio de casos por fiscales; El número medio de casos apelados por fiscales; Número anual de casos resueltos por fiscales; Número de casos en que se han iniciado procedimientos que luego se han abandonado o interrumpido; La proporción anual de casos en los que los imputados se declaran culpables; La proporción anual de casos llevados a los tribunales; La proporción anual de casos en que se dictó una sentencia condenatoria; La proporción de casos llevados a los tribunales en los que el imputado resultó absuelto; El número anual de casos en que la sentencia condenatoria dictada resultó errónea; La proporción de casos que quedaron excluidos del proceso de justicia penal formal (y los mismos indicadores referidos específicamente a los delincuentes menores de edad); El costo medio por proceso judicial durante determinado período de tiempo, normalmente un año.*

*Quizás también podrían resultar interesantes los indicadores relativos a aspectos menos tangibles del trabajo de los fiscales. Raras veces los servicios de la fiscalía se ocupan de ese tipo de indicadores y es probable que se requiera un estudio especial basado en el análisis de datos administrativos. Entre esos indicadores se encuentran:*

*• El carácter oportuno de las decisiones y acciones de la fiscalía; por ejemplo, el plazo*

*medio que las víctimas o testigos deben esperar para poder entrevistarse por primera*

*vez con un fiscal;*

*• Los cambios registrados en las tasas de remisión de casos y de no procesamiento;*

*• Los cambios registrados en la tasa de órdenes de protección de testigos obtenidas por*

*la fiscalía, etc.*

*(…)*

*Finalmente, a efecto de satisfacer lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estrado de Guanajuato, por lo que hace a: IMPACTO JURÍDICO: se reforma el penúltimo párrafo del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; para establecer el contenido mínimo del informe de la Fiscalía General del Estado, en lo que respecta a información de los delitos. IMPACTO ADMINISTRATIVO: dada la naturaleza de la presente iniciativa, no existe impacto administrativo, porque la Fiscalía General del Estado, procesa ordinariamente la información que se establece en esta reforma. IMPACTO PRESUPUESTARIO: no existe impacto presupuestal con esta iniciativa. IMPACTO SOCIAL: se fortalece la evaluación objetiva de la procuración de justicia, como parte del sistema penal.»*

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, consideramos oportuno realizar un análisis general del objetivo de la presente iniciativa *al establecer el parámetro mínimo que debe observar el informe que rinda la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con su función sustantiva, que es la procuración de justicia, en específico en relación a los hechos delictivos de los cuales tiene conocimiento y participa en su investigación y procesamiento ante la autoridad jurisdiccional penal.*

Es decir, el iniciante se propone reformar el párrafo penúltimo del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, *estableciendo el contenido esencial del informe de la Fiscalía General del Estado*.

**III.1. Análisis de la propuesta de reforma al artículo 95 constitucional para incluir parámetros mínimos al informe anual de la Fiscalía General del Estado**

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales partimos este análisis al manifestar que el Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal[[58]](#footnote-58)

Por ello el Estado de Derecho giraba en torno a individuos y a concepciones individualistas. Por lo mismo, las posibilidades de transparentar estuvieron relacionadas con ellos, y más específicamente, con el ejercicio que los individuos hicieran de sus derechos.

Bajo este parámetro y retomando lo manifestado por Montesquieu[[59]](#footnote-59) en su momento que dijo, cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad, falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.

Esto así se vio la imperiosa necesidad de crear un órgano exclusivo y autónomo, encargado de producir aquellas normas jurídicas que expresen, de la mejor manera posible, la voluntad de una comunidad a través de un proceso legislativo perfectamente definido y contemplado en un ordenamiento jurídico. A este órgano del Estado se le denomina: *Poder Legislativo*, quien es el encargado de emitir, en razón de su origen y procedimiento de elaboración, las normas jurídicas encargadas de direccionar y reglar las conductas sociales y gubernamentales de sus miembros, ya sea a través de una ley o de la misma Constitución.[[60]](#footnote-60)

Así, las funciones de un Poder Legislativo son legislar, fiscalizar y representar, pero dentro de las parlamentarias más comunes pueden llegar a ser: representativas, deliberativas, financieras, presupuestarias, de control-fiscalización, orientación política, legislativas, y jurisdiccionales. Estas funciones no siempre son ejercidas en el orden enunciado y algunas de las acciones que sirven para una de ellas pueden también ser aplicadas en otras, de tal manera que se entretejen en la realidad de los fenómenos políticos inherentes al ejercicio de la representación del electorado y de las distintas fuerzas sociales y económicas que cada realidad social genera, mismas que han de ser evaluadas, controladas, conciliadas y coordinadas con el fin de que formen un todo coherente.

Por otro lado y aunado al análisis de esta propuesta es importante referir que el derecho a la información tiene su origen específico en 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, al prever en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. En nuestro país, el derecho de acceso a la información se incorporó mediante la reforma al artículo sexto constitucional de diciembre de 1977.

En esa misma línea argumentativa, la transparencia debe entenderse como la obligación de quienes detentan una responsabilidad en cualquiera de los Poderes del Estado y sus instituciones que lleva aparejado un derecho específico: el de acceso a la información. Por su parte, la rendición de cuentas es un elemento fundamental para contribuir a la consolidación de la vida democrática del país y tiene que ver con el deber que tienen las instituciones públicas que administran recursos públicos, de informar, justificar y explicar, ante la autoridad y la ciudadanía, sus decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos.[[61]](#footnote-61)

En cualquier relación de rendición de cuentas se deben poder especificar por lo menos seis cuestiones importantes: quién es el responsable o debe rendir cuentas y ante quien; de qué son responsables cuando son llamados a dar cuentas, mediante qué procesos se puede asegurar que rindan cuentas; qué criterios se utilizan para juzgar el comportamiento putativo y, cuáles son los efectos potenciales para saber que esos estándares han sido violados.

En ese sentido, quienes dictaminamos consideramos que de una revisión de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las correspondientes en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato se aprecia que diversos organismos o los titulares de los mismos, son los responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales; el encargado de proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro; el encargado de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social; la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones; el presidente del órgano defensor y protector de los Derechos Humanos, entre otros, tienen la obligación de rendir o presentar a los poderes de la unión o a los poderes del Estado, un informe anual de actividades, lo cual es acorde a los principios que deben regir a la transparencia y rendición de cuentas a las que estan sujetos dichas autoridades.

De igual forma, nuestro Código Político Local prevé en su artículo 95, penúltimo párrafo que el Fiscal General del Estado presentará anualmente a los Poderes del Estado un informe de actividades y que comparecerá ante el Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. Y, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 34, Tercera Parte, de fecha 15 de febrero de 2019, tiene por objeto regular la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para el despacho de los asuntos que tienen a su cargo la Institución del Ministerio Público del Estado, y sus órganos auxiliares, así como las demás facultades que le atribuye el marco constitucional y legal.

La obligación de informar establecida en la Constitución Política Local se reglamenta en el artículo 16, fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato al contemplar como atribución para el titular de la Fiscalía General presentar anualmente por escrito, durante el último jueves del mes de febrero, a los Poderes del Estado un informe de actividades, y comparecer ante el Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. Por su parte, el artículo 17 prevé que el precitado informe debe contener lo siguiente:

***«Artículo 17****. El informe anual sobre las actividades de la Fiscalía General que envíe el Fiscal General a los Poderes del Estado deberá contener:*

***I.*** *Acciones relevantes realizadas por la Fiscalía General;*

***II.*** *Las acciones de capacitación, promoción y prevención en materia de derechos humanos;*

***III.*** *Las recomendaciones hechas por organismos protectores de los derechos humanos, así como las atenciones que se dieron a éstas;*

***IV.*** *La información financiera; y*

***V.*** *Las demás acciones relacionadas con las atribuciones de la Fiscalía General.*

*El informe una vez que se haya entregado será público, y será difundido para conocimiento de la sociedad, conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. La difusión estará a cargo de la propia Fiscalía General.»*

Quienes dictaminamos estamos ciertos que el informe que rinde la Fiscalía General del Estado constituye un mecanismo de colaboración entre Poderes Públicos, por medio del cual el Poder Legislativo a través de su Asamblea denominada *Congreso* obtiene información y datos que nos permiten evaluar objetivamente el desempeño de ese órgano autónomo constitucional. Esta información dota de mayores elementos objetivos y datos para desarrollar nuestra función legislativa *principalmente la relativa al proceso presupuestario y a su actividad fiscalizadora.*

Coincidimos en que el informe es un ejercicio de rendición de cuentas, la cual se traduce en un pilar esencial de las democracias modernas, por lo que resulta adecuado propiciar mejores canales de comunicación que clarifiquen el ejercicio de la actividad pública, a fin de que la sociedad conozca de forma más sencilla y objetiva el quehacer gubernamental, al contar las y los legisladores con un mejor esquema para el análisis de los diversos elementos que conforman esa obligación constitucional.

De esa manera, consideramos quienes dictaminamos que no es indispensable que desde el texto constitucional se detalle el contenido de la información que deben rendir los órganos constitucionales autónomos por referir un ejemplo al caso que nos ocupa *Fiscalía General del Estado*, cuando es a ellos a quienes compete destacar el alcance de sus acciones y objetivos. Lo anterior es acorde a lo establecido a nivel nacional, pues diversos estados de la República mantienen la misma concordancia, al establecer la obligación de rendir su informe, sin especificar los parámetros o lineamientos dentro de su máxima ley.

Al respecto, estamos convencidos de lo innecesario que es establecer de manera taxativa los elementos o aspectos específicos que deben cubrir los ejercicios de rendición de cuentas, lo cual resulta natural, pues de hacerlo, seguramente deberían mencionarse casuísticamente otros rubros a desarrollarse en los informes, lo cual no es idóneo puesto que la valoración, el funcionamiento y conocimiento de los indicadores de los organismos, precisamente debe corresponder al ejercicio de su autonomía constitucional.

No omitimos referir la no procedencia por técnica legislativa de la acción incluida en la exposición de motivos del iniciante al manifestar que, *en posterior iniciativa a promover las reformas necesarias en la legislación secundaria, para el establecimiento de un sistema de evaluación de la justicia penal, que sea integral, incluyendo la procuración de justicia, que corresponde a la fiscalía, con sistemas de estadística adecuados, que permitan evaluar y medir objetivamente los avances de esta*.

Las diputadas y los diputados de esta comisión que dictamina consideramos que de conformidad con el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, es en la ley específica, no así en la propia Constitución, en la que se deberá establecer bases mínimas de contenidos del informe anual de la Fiscalía General, en su caso y de ser necesario.

Bajo ese contexto, coincidimos también en que el sistema de derecho positivo mexicano está arreglado a un orden, en el que el contenido de las normas aparece determinado en gran parte conforme a relaciones de fundamentación y congruencia de las propias normas entre sí. La relación escalonada implica que toda norma desempeñe un doble rol: en relación con aquellas otras que le están subordinadas, tiene carácter normativo, las determina formal y materialmente; respecto a las que están supra ordinadas, es un acto de aplicación y debe ser congruente con ellas.

Por ello, cuando se producen leyes ordinarias, la Constitución es aplicada y desarrollada; de ella derivan su fundamento de validez y dependen de ella formal y materialmente. En otras palabras, estas normas tienen validez porque y en tanto han sido creadas de acuerdo con el contenido dado por la norma constitucional y con el procedimiento establecido por ella.

En ese sentido, las reformas a la Constitución se deben llevar a cabo de manera excepcional, y únicamente cuando se dé el reconocimiento de derechos y la adopción de valores, ideales y principios fundamentales. Asimismo, se debe respetar que la misma es Ley Suprema, por lo que únicamente debe contener aquellos derechos trascendentales y superiores para el Estado. De ser así, nuestra Constitución Política para el Estado de Guanajuato, es un documento que debe estipular principios, previendo de manera general los derechos y limitaciones tanto de los individuos como de la autoridad.

Con esos argumentos se determina la no pertinencia de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para incluir especificaciones de contenidos del informe anual del titular de la Fiscalía General del Estado, pues por técnica legislativa, la propuesta en todo caso, tendría que incluirse en la legislación ordinaria toda vez que el contenido de las disposiciones constitucionales no debe estar desarrollado ampliamente, más allá de que aquello consista en principios fundamentales, a fin de que el desarrollo de ese contenido quede a la legislación.

Por ello, estimamos pertinente el archivo de la iniciativa de referencia, toda vez que el objeto que persigue no encuentra su viabilidad al incluirse como texto normativo en la Constitución Política Local como ya lo expresamos en el presente dictamen.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

**ACUERDO**

**Único.** Se ordena el archivo definitivo de la iniciativa a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

Se instruye al Secretario General del Congreso archive de manera definitiva la iniciativa de referencia.

**GUANAJUATO, GTO., A 21 DE JUNIO DE 2022**

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

**Dip. Susana Bermúdez Cano**

**Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Dip. Briseida Anabel Magdaleno González**

**Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

**Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas**

**Dip. Yulma Rocha Aguilar**

**Dip Gerardo Fernández González**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR LA DIPUTADA HADES BERENICE AGUILAR CASTILLO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE REFORMAR LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO**

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E .**

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recibimos para efectos de estudio y dictamen la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Analizada la iniciativa, esta Comisión Legislativa de conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 111 fracción I y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formula a la Asamblea el siguiente:

**D I C T A M E N**

**I. Del Proceso Legislativo**

**I.1.** En sesión del 7 de octubre de 2021 ingresó la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con el expediente 7/LXV-I turnándose en su momento por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para su estudio y dictamen.

**I.2.** En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, del 11 de noviembre de 2021 se radicó la iniciativa y fue aprobada la metodología de estudio y dictamen en los siguientes términos:

1. *Remitir vía electrónica para opinión a los 36 diputados y diputadas que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, al Poder Judicial, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a las instituciones de educación superior en el estado, quienes contarán con un término de 20 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes.*
2. *Se habilitará un vínculo (link) en la página web del Congreso del Estado, a efecto de que se consulte la iniciativa y se puedan recibir observaciones a las mismas.*
3. *Se remitirán al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado para su estudio y opinión.*
4. *Se integrará un documento que consolidará todas las propuestas emitidas en las consultas por escrito o vía electrónica que se hayan remitido previamente a la Comisión para el análisis de las iniciativas. Dicho documento será con formato de comparativo.*
5. *Se celebrará una mesa de trabajo con carácter permanente para analizar las observaciones remitidas, a través del documento comparativo.*
6. *Una vez lo cual, se presentará un proyecto de dictamen para que sea analizado en reunión de la Comisión.*

**II.1.** Derivado de ese ejercicio de consulta a diversas autoridades de los poderes Ejecutivo, a través de la Coordinación General Jurídica y Judicial, e instituciones de educación superior y bajo el principio de parlamento abierto respondieron el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, el Poder Judicial, y la Universidad de Guanajuato.

Durante el desahogo de la metodología emitieron sus comentarios de inviabilidad la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado.

El Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado manifestó que:

*(…) una vez analizadas las iniciativas, a la luz del orden jurídico Constitucional Federal y Local, así como el análisis de la legislación secundaria, relacionada con la materia de estudio, se puede concluir que: En el sistema Constitucional Democrático de Derecho, ha de prevalecer estrictamente la división de poderes, tal y como lo refiere el artículo 49 de la Constitución Federal y que consecuentemente recoge la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en su artículo 36; en ese sentido, se considera que cada uno de los Poderes cuenta con atribuciones y responsabilidades específicas con las cuales se garantiza un Estado de equilibrio entre ellos. Derivado del estudio conjunto de las iniciativas, se puede observar que se propone la posibilidad de que sea el Congreso del Estado quien asuma la responsabilidad de realizar de manera exclusiva todo el proceso de designación del Fiscal General del Estado, argumentando la necesidad de garantizar la autonomía de dicho encargo, y por otra parte se propone garantizar la participación del Congreso del Estado en el proceso de remoción del mismo Fiscal General del Estado.*

*Cabe recordar que, derivado de la entrada en vigor de la reforma constitucional local publicada el 14 de julio de 2017, mediante la cual se creó la Fiscalía General del Estado a través del decreto 202, se estableció en el párrafo tercero del artículo primero transitorio que: El procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, asumirá las funciones de Fiscal General del Estado, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV del artículo 95, por lo que no se desahogó el procedimiento de designación establecido en el artículo en mención.*

*(…) en atención a la iniciativa presentada por la Diputada Hades Berenice Castillo Aguilar, se considera viable dejar vigente el contenido de la fracción IV, con la adición del Congreso del Estado como instancia que podrá en su caso dar trámite al proceso de remoción, tal y como propone la Diputada Castillo. En cuanto a la propuesta realizada en el segundo párrafo de la fracción, se considera inviable por la razón expuesta en el párrafo que antecede, respecto a la representación popular que ostenta el Poder Legislativo.*

El Poder Judicial del Estado de Guanajuato manifestó que:

*(…) el 14 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 112, Segunda Parte, el Decreto Legislativo 202, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Parte de esa reforma versó sobre el procedimiento para la designación del Fiscal General del Estado. En las Consideraciones del dictamen elaborado· por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que fue aprobado en la Sesión de Pleno del Congreso del Estado en fecha 22 de junio de 2017, se puede observar que el legislador local se decantó por incorporar en la reforma constitucional el mismo modelo que a nivel nacional contempla en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, homologó la Constitución Local con lo que dispone la Norma Suprema.*

*En el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se retomaron los argumentos que llevaron a legislador federal a optar por un modelo de designación y remoción del Fiscal General del Estado, en el que intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, por considerar que "la intervención del Poder Legislativo, a través del Senado de la República, en la designación y remoción del titular del Ministerio Público de la Federación, conlleva un esquema no sólo democrático, sino también transparente y equilibrado, lo que demuestra una clara voluntad de coordinación entre los poderes públicos". Motivación que llevó al legislador local por decantarse por este modelo seguido a nivel federal, sin que existan elementos sabidos, tanto a nivel federal como estatal que hagan suponer su falta de operatividad o resultados de este modelo implementado. De ahí, que se considere que el haber dispuesto en la Constitución local un modelo que guarda estrecha sintonía con el modelo federal permite tener un sistema de normas que dan igual tratamiento a asuntos de la misma naturaleza, por lo que se sugiere ponderar su permanencia. En todo caso, se sugiere considerar oportuna la reforma planteada el atender cuestiones relacionadas con la técnica legislativa.*

*El legislador local, hizo como propios la argumentación utilizada por el legislador federal para que, en el diseño de la remoción del Fiscal, participaran tanto el Poder Ejecutivo, con la facultad de removerlo, como el Legislativo, con la facultad de objetar la remoción que aquél formulara. Así se dijo al manifestar que: "la intervención del Poder Legislativo, a través del Senado de la República, en la designación y remoción del titular del Ministerio Público de la Federación, conlleva un esquema no sólo democrático, sino también transparente y equilibrado, lo que demuestra una clara voluntad de coordinación entre los poderes públicos".*

La Universidad de Guanajuato manifestó en su momento que:

*(…) las iniciativas pretenden reformar el artículo 95 constitucional, con la finalidad de que el Congreso pueda remover al Fiscal General del Estado, instrumentar un nuevo procedimiento para designarlo y removerlo, y establecer el contenido esencial del informe que debe rendir anualmente a los Poderes del Estado.*

*Al respecto, se advierte que son varios los motivos que justifican las propuestas; únicamente se sugiere que, al tratarse de un organismo constitucional autónomo, se realice el estudio a la luz del marco jurídico a nivel federal, para garantizar el estado de derecho y se eviten mecanismos de remoción contrarios al sistema de pesos y contrapesos que dan equilibrio a la democracia.*

**II.2.** Se celebró una mesa de trabajo en modalidad híbrida el 15 de junio de 2022 para desahogar los comentarios y observaciones a la iniciativa estando presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como, servidores públicos representantes de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado. Estuvieron presentes también asesores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, MORENA, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y la secretaria técnica de la comisión.

**II.3.** La presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido negativo, atendiendo a lo vertido en la mesa de trabajo y, conforme con lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mismo que fue materia de revisión por los diputados y las diputadas integrantes de esta comisión dictaminadora.

**III. Contenido de la iniciativa y consideraciones generales de las y los dictaminadores sobre los objetivos perseguidos con la propuesta de reforma al artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato *sobre la remoción del titular de la Fiscalía General***

El objeto de la iniciativa de manera individual radica, en reformar la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a fin de modificar el acto de remoción del Fiscal General del Estado.

La iniciante expresó en su exposición de motivos lo siguiente:

*«[...] Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 y 145 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a presentar ante la Honorable Asamblea una Iniciativa de Decreto a fin de reformar la fracción cuarta del artículo 95 de la Constitución Local, a efecto de establecer las instancias que pueden solicitar la remoción del Fiscal General de Justicia del Estado, además de la que actualmente establece.*

*En lo que interesa, la actual disposición de la citada fracción del artículo 95, dispone:*

*ARTÍCULO 95.*

*IV. El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Gobernador del Estado por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General del Estado será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.*

*Lo anterior, de conformidad con la siguiente. El actual titular de la Fiscalía General de Justicia, rindió protesta ante la anterior Legislatura, el día miércoles 20 de febrero de 2019, entre las protestas de diversos grupos de ciudadanos. Es necesario recordar que, para ese tiempo, el Fiscal General tenía ya casi diez años siendo titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, los que sumados a los nueve años que contempla la Constitución como duración en el cargo de Fiscal General, sumarían casi 19 años de la misma persona, desempeñando el cargo como Titular de la Institución del Ministerio Público.*

*En ningún estado con instituciones democráticas en formación, como lo es el Estado de Guanajuato, es recomendable que los titulares de las nacientes instituciones, permanezcan tanto tiempo al frente de ellas, por el serio riesgo que se corre de que se vayan formando cacicazgos en esas instituciones. México tiene una larga historia de lamentables consecuencias por la proliferación de caciques que han sometido a pueblos e instituciones a la sola ley de sus caprichos y de su voluntad. Cuando una persona permanece por un largo tiempo al frente de una institución, termina no por aplicar la ley, sino su propio y personal criterio.*

*Ese riesgo se potencializa, cuando a una institución se le dota de un marco normativo que impide o dificulta la rendición de cuentas y la transparencia en su actuar. La situación se torna peor, cuando la atribución de remover a aquella persona, la ostenta una sola persona en todo el Estado. La ciudadanía se siente impotente cuando observa que las instituciones creadas para su servicio se vuelven ineficaces en el cumplimiento de sus objetivos, pero no existe una instancia a donde acudir para exigir el cumplimiento de los objetivos legales de aquella ineficiente institución. La impotencia se convierte en coraje e indignación cuando esa instancia permanece insensible al clamor ciudadano. Las anteriores afirmaciones, son perfectamente aplicables a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y al titular del Ejecutivo Local.*

*Se afirma que el marco normativo es un obstáculo para la exigencia de resultados a la Fiscalía, porque desde el diseño Constitucional, se creo un blindaje jurídico que protege al titular, poniéndolo a salvo de una posible destitución, toda vez que conforme a esa disposición constitucional, única y exclusivamente el gobernador del Estado es el facultado para remover al Fiscal. Nadie más posee esa atribución. Nadie: ni siquiera esta Asamblea, representante de la Soberanía Popular. Y Aún en el improbable caso de que el Gobernador del Estado, algún día, en un arranque de valor y de responsabilidad, decidiera remover al Fiscal, la norma constitucional diseñada para protegerlo podría salvarlo, al disponer que, con una votación de apenas diez representantes populares si hubiera el quorum mínimo, podría dejarse sin efecto aquella remoción. No cabe duda que el blindaje constitucional y legal para el titular de la Fiscalía, fue diseñado para proteger su actuación, en beneficio de la clase gobernante.*

*Se esperaría que un funcionario así de protegido tanto por la Constitución como por la Ley se esmerara en el cumplimiento de su función y ofreciese al pueblo de Guanajuato los mejores resultados de su gestión. Desgraciadamente no es así, y los habitantes de Guanajuato sufren día a día la ineficiencia y la ineficacia de la actividad de la Fiscalía. Ineficiencia e ineficacia que son denunciados día a día, ante el silencio y la indiferencia del Gobierno del Estado. Así, y solo como referencia, en su Reporte sobre Delitos de Alto Impacto de abril de 2021, el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, reporta para Guanajuato, en la introducción a su reporte, cita para Guanajuato, textualmente lo siguiente:*

*"La nueva edición de la sección "Observar desde Jo local" aborda las condiciones de seguridad de Guanajuato centrándose en el examen de la incidencia delictiva y de aspectos cualitativos relevantes derivados de las metodologías de observación delictiva. La edición de abril centra su interés en la problemática de los recurrentes asesinatos de policías y en las acciones implementadas para protegerlos. 11 Lo que denota el interés particular que la inseguridad que se vive en Guanajuato ha despertado a nivel nacional e internacional. Luego, en su reporte, continua resaltando la violencia de Guanajuato citando lo siguiente: "Considerando la victimización de hombres, la tasa de homicidio doloso fue superior al valor nacional en los siguientes estados: Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, More/os, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.*

*Observaciones las anteriores que se repiten en el Reporte de julio de éste año, lo que demuestra que no han disminuido los homicidios en Guanajuato, de abril a julio del presente año, como tampoco han disminuido en los últimos años. En el capítulo referente al asesinato de policías, el mismo reporte, citando como fuente los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirma que del primero de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020 han sido asesinados en Guanajuato 213 policías. Cifra altamente preocupante.*

*Desde luego que no es imputable totalmente a la Fiscalía las cifras y las conductas delictivas mencionadas. Sería un despropósito hacerlo; Pero si le es imputable el porcentaje de impunidad existente en el Estado, que para el 2019, fue del 74% según la Organización México Evalúa, en su Reporte de Hallazgos 2019, que si bien se encuentra lejos del promedio nacional de un escandaloso 92.4 por ciento, no significa ningún consuelo para quienes vivimos a diario la violencia en el Estado. Ese índice de impunidad se disparó exponencialmente a un altamente preocupante 85.4 por ciento para el año siguiente, el 2020, según la misma organización en su reporte de Hallazgos correspondiente al año pasado, cercano ya al 94.8 por ciento de impunidad que es la media nacional.*

*El mismo reporte destaca que Guanajuato es de los pocos estados que empeoró su nivel de impunidad respecto al año anterior habiendo ascendido el mencionado índice un 11.2 por ciento. Francamente preocupante. Y todo ello, ante la desesperación ciudadana que ve como la inseguridad y la impunidad se van adueñando de la vida de los guanajuatenses. Son las anteriores razones, entre muchas otras que son del dominio público, lo que respalda la iniciativa de reforma presentada a consideración de ésta Asamblea, la que carecería de un impacto presupuesta! directo, dada la naturaleza de la misma. La presente iniciativa tendrá impacto jurídico en la modificación constitucional planteada, no significa ningún impacto administrativo ni presupuestal, sin embargo, su impacto social es significativo pues permite que la ciudadanía de manera indirecta por la representación de los diputados pueda ejercer un control político para la remoción del fiscal como se ha planteado.»*

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, consideramos oportuno realizar un análisis general sobre la propuesta de reforma a la fracción cuarta del artículo noventa y cinco, donde se dispone que el Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Gobernador del Estado o por el Congreso del Estado, por las causas que limitativamente establezca la ley y mediante el procedimiento establecido en la misma.

**III.1. Análisis de la reforma al artículo 95 de la Constitución Política Local, sobre la remoción del Fiscal General del Estado**

La iniciativa que se analiza refiere la necesidad de que el Poder Legislativo a través de su Asamblea cuente la atribución de remover a la persona titular de la Fiscalía estatal por: el actual Fiscal sumaría aproximadamente 19 años al frente de la institución, ya sea como Procurador y Fiscal, y considera que en instituciones nacientes el titular no debe permanecer por tiempo prolongado; se obstaculiza la rendición de cuentas a la Fiscalía, pues únicamente el Gobernador tiene la atribución de remoción del titular de dicho organismo autónomo y, considera que el actual estado de cosas en materia de seguridad pública hace necesario el relevo en el titular de la Fiscalía.

Quienes dictaminamos sabemos que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que se incluyó la reforma al apartado A del artículo 102, lo anterior a efecto de reestructurar el Ministerio Público Federal al establecerse como un órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de perseguir los delitos del orden federal, labor que correspondía a la Procuraduría General de la República como dependencia del Poder Ejecutivo Federal.

En congruencia con la acción legislativa anterior, en el ámbito local, el 14 de julio de 2017 se publicó la reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, entre otras al artículo 95, por medio de la cual se estableció como un organismo autónomo a la Fiscalía General del Estado. De esta forma, la Fiscalía General del Estado forma parte de los seis órganos autónomos constitucionales locales vigentes, pues en el caso de la Universidad de Guanajuato, lo es por ley.

Los órganos constitucionales autónomos, tanto nacionales, federales y locales, son aquéllos establecidos de forma directa y concreta en la Constitución sin adscripción a los poderes tradicionales del Estado, por lo que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con una independencia del resto de los poderes.

En ese sentido, si bien los organismos autónomos cuentan con denominadores comunes, también es cierto que debido a la diversidad de acciones que realizan y objetos jurídicos que tutelan, su configuración es diversa tanto en su integración -colegiada o unipersonal-, la forma de elección, la duración y remoción de sus titulares.

En Guanajuato existen como ya lo dijimos seis organismos autónomos constitucionales, entre los que se encuentra la Fiscalía General del Estado. Como sabemos de acuerdo al origen de su creación y reforma en su caso, no existe identidad en cuanto a las causas y procesos de remoción.

En secuencia al análisis, sabemos que el proceso de remoción del titular de la Fiscalía estatal es homólogo al de la Fiscalía General de la República, mismos que deben analizarse de forma conforme y conjunta con el resto de las normas que los regulan, es decir, de manera armónica y sistemática. Por un lado, la temporalidad de la duración en el encargo establecida por los poderes revisores de la Constitución, tanto federal como local. Para el caso de la Fiscalía de la República, el artículo 102 de la Carta Magna indica que la duración del cargo será de 9 años, misma temporalidad que la señalada para el Fiscal estatal en el artículo 95 de nuestro Código Político Local.

Con este contexto los poderes revisores establecieron plazos que exceden a los mandatos constitucionales de los titulares de los Poderes Ejecutivos, así como de las legislaturas, lo anterior a efecto de dotar de mayor libertad y autonomía a dichas instituciones, pues de esta forma se puede garantizar que el mandato sea cumplido, y con ello su plan de trabajo, con la menor presión política posible ante el cambio de corrientes partidistas en los poderes legislativos y ejecutivos, con lo cual coincidimos y refrendamos las consideraciones que de manera similar realizó la comisión legislativa que dictaminó esta reforma constitucional al generar una armonización en este proceso de remoción, siendo congruentes con esa necesidad de autonomía señalada por diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos.

En cuanto a la independencia de los Poderes Ejecutivos, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas, apunta la necesidad de garantizar la autonomía de las fiscalías con relación a dicho poder, pues considera que dicha dependencia constituye un factor que socava la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos de forma objetiva.[[62]](#footnote-62)

De igual forma, diversos organismos internacionales apuntan la necesidad de que los ministerios públicos gocen de autonomía respecto del Poder Legislativo, y del Poder Judicial. La Declaración de Burdeos,[[63]](#footnote-63) entre otras establece que el ministerio público debe ser una autoridad independiente al más alto nivel, por lo que idealmente en un Estado democrático, ni el Parlamento, ni ninguna instancia gubernamental pueden intentar influenciar indebidamente en las decisiones del ministerio público relativas a un asunto concreto, para determinar el modo de actuar en un determinado caso, u obligar al ministerio público a modificar su decisión.

Por otro lado, las normas federales y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, garantizan un proceso calificado de nombramiento y remoción extraordinaria de los titulares de las fiscalías, así como una temporalidad diversa a los de los Poderes Ejecutivos y Legislativos, a efecto de dotar de estabilidad en el cargo a las y los titulares, como garantía de autonomía funcional. En el caso de Guanajuato sabemos que se dispuso en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato las causas graves por las cuales el Gobernador podrá separarle de su cargo y que son: cuando incumpla de manera reiterada con los fines institucionales previstos en la Ley, y participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a las leyes que le rigen su función.

El artículo 18 de ese ordenamiento señala que corresponde al titular del Poder Ejecutivo acreditar la causa grave que motivó la remoción del Fiscal General e informar al Congreso del Estado, quien decidirá si objeta o no la remoción, en términos del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Por su parte, el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República refiere que existen tres causas graves por las que el titular de dicha institución podrá ser removido por el Presidente de la República. Dentro del mismo artículo se establece que la persona titular del Ejecutivo Federal deberá acreditar ante el Senado de la República la causa grave que motivó la remoción de la persona titular de la Fiscalía General, e informar al Senado de la República, quien decidirá si objeta por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles.

En ese sentido, afirmamos que la norma federal como la local establecen, en la ley, las causas graves de remoción de los respectivos titulares, además de contemplar un proceso agravado para la restitución de los mismos, pues en dicho sistema de remoción participa tanto el Poder Ejecutivo cuando existan las causales concretas establecidas por la Ley, decisión que debe ser confirmada por el Poder Legislativo, quien cuenta con facultad de veto respecto de dicha remoción.

Todo lo argumentado con respecto al análisis de esta propuesta tiene como objeto dar contenido a la garantía de estabilidad al titular del organismo autónomo constitucional, ésta no es absoluta, pues además del proceso extraordinario de remoción, en el caso de Guanajuato el titular de la Fiscalía estatal también se encuentra sujeto al régimen de responsabilidad política del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de responsabilidades administrativas del artículo 109 de dicha Constitución, y regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. En el artículo 124 fracción II de la Constitución Política Local, las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o por los Órganos Internos de Control y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Los estatutos constitucionales pretenden de esta forma contar con organismos autónomos dotados de independencia y autonomía respecto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, pues conforme al actual diseño, no es suficiente que una persona o un grupo colegiado determinen de manera unilateral la separación extraordinaria del titular de la Fiscalía General del Estado, sino que en un sistema de contrapesos dicha decisión debe ser ejercida por un poder y revisada por otro poder.

En razón de todo lo anterior, quienes dictaminamos que el diseño legal y constitucional de la Fiscalía General del Estado es acorde al parámetro de regularidad constitucional, así como a los estándares internacionales en la materia, pues los titulares de los organismos autónomos deben gozar de una garantía de estabilidad a efecto de dotar a los citados organismos de una real autonomía funcional.

En el caso que nos ocupa, la separación contemplada por la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato es un proceso extraordinario, por lo cual es acorde a los estándares y necesario que contenga elementos de calificación al igual que el proceso de nombramiento. Es necesario que para remover al titular de la Fiscalía General del Estado por cuestiones diversas a los regímenes de responsabilidades políticas y administrativas, sean dos poderes los que participen activamente del mismo, a efecto de evitar la injerencia unilateral de algún poder en el desarrollo de la labor del órgano autónomo.

Por otro lado, es importante manifestar que en relación a la supresión de las *causas graves* la iniciante, nada refiere en su exposición de motivos a este cambio, pues, modifica del enunciado las causas graves para la remoción, por el concepto de causas que limitativamente establezca la ley. De tal suerte que, la inviabilidad de esta propuesta deviene de la imposibilidad de saber que razones tuvo la iniciante para proponer la modificación. En los mismos alcances la parte considerativa debido a la propuesta dispositiva, pues de una cuidadosa y completa lectura de la exposición de motivos, no refiere ningún argumento, estudios técnicos o documentación que justifique tal propuesta.

Finalmente consideramos que el proceso con la reforma a la fracción IV del artículo 95 Constitucional no guarda simetría con el proceso de nombramiento, en el que dos Poderes se conjugan a efecto de dotar de mayor legitimidad y calidad en el nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado.

Debido a los argumentos expresados se determina la no viabilidad de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato con los alcances propuestos, en razón de ser contraria a la armonización que se dispuso desde la reforma vigente en el Código Político Local y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, volviéndose inarmónica con los objetivos que se persiguieron cuando dieron origen a dicha reforma constitucional, texto vigente hoy.

En cuanto al proceso calificado de nombramiento, es necesario contar con un proceso calificado para la remoción extraordinaria, tal y como se contempla actualmente en el estado de Guanajuato.

Con todo lo expuesto estimamos pertinente el archivo de la iniciativa de referencia.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

**ACUERDO**

**Único.** Se ordena el archivo definitivo de la iniciativa formulada por la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Se instruye al Secretario General del Congreso archive de manera definitiva las iniciativas de referencia.

**GUANAJUATO, GTO., A 21 DE JUNIO DE 2022**

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

**Dip. Susana Bermúdez Cano**

**Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Dip. Briseida Anabel Magdaleno González**

**Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

**Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas**

**Dip. Yulma Rocha Aguilar**

**Dip Gerardo Fernández González**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA INICIATIVA SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE REFORMAR EL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, *EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE LOS ORDENAMIENTOS.***

**DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**P R E S E N T E .**

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recibimos para efectos de estudio y dictamen la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Analizada la iniciativa, esta Comisión Legislativa de conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 111 fracciones I y II y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formula a la Asamblea el siguiente:

**D I C T A M E N**

**I. Del Proceso Legislativo**

**I.1.** En sesión del 7 de octubre de 2021 ingresó la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, con el expediente 8/LXV-I turnándose en su momento por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para su estudio y dictamen.

**I.2.** En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, del 11 de octubre de 2021, se radicó la iniciativa y fue aprobada la metodología de estudio y dictamen en los siguientes términos:

1. *Remitir vía electrónica para opinión a los 36 diputados y diputadas que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, al Poder Judicial, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a las instituciones de educación superior en el estado, quienes contarán con un término de 20 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes.*
2. *Se habilitará un vínculo (link) en la página web del Congreso del Estado, a efecto de que se consulte la iniciativa y se puedan recibir observaciones a las mismas.*
3. *Se remitirán al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado para su estudio y opinión.*
4. *Se integrará un documento que consolidará todas las propuestas emitidas en las consultas por escrito o vía electrónica que se hayan remitido previamente a la Comisión para el análisis de las iniciativas. Dicho documento será con formato de comparativo.*
5. *Se celebrará una mesa de trabajo con carácter permanente para analizar las observaciones remitidas, a través del documento comparativo.*
6. *Una vez lo cual, se presentará un proyecto de dictamen para que sea analizado en reunión de la Comisión.*

**II.1.** Derivado de ese ejercicio de consulta a diversas autoridades de los poderes Ejecutivo, a través de la Coordinación General Jurídica y Judicial, e instituciones de educación superior y bajo el principio de parlamento abierto respondieron el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, el Poder Judicial, y la Universidad de Guanajuato.

Durante el desahogo de la metodología emitieron sus comentarios de inviabilidad constitucional la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado.

El Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado manifestó que:

*(…) una vez analizadas las iniciativas, a la luz del orden jurídico Constitucional Federal y Local, así como el análisis de la legislación secundaria, relacionada con la materia de estudio, se puede concluir que: En el sistema Constitucional Democrático de Derecho, ha de prevalecer estrictamente la división de poderes, tal y como lo refiere el artículo 49 de la Constitución Federal y que consecuentemente recoge la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en su artículo 36; en ese sentido, se considera que cada uno de los Poderes cuenta con atribuciones y responsabilidades específicas con las cuales se garantiza un Estado de equilibrio entre ellos. Derivado del estudio conjunto de las iniciativas, se puede observar que se propone la posibilidad de que sea el Congreso del Estado quien asuma la responsabilidad de realizar de manera exclusiva todo el proceso de designación del Fiscal General del Estado, argumentando la necesidad de garantizar la autonomía de dicho encargo, y por otra parte se propone garantizar la participación del Congreso del Estado en el proceso de remoción del mismo Fiscal General del Estado.*

*En cuanto a la propuesta de reforma de la fracción I del artículo 95, en donde se propone la emisión de una convocatoria pública a efecto de recibir las solicitudes de postulantes a ocupar el encargo de Fiscal General del Estado, se considera viable toda vez que actualmente la fracción que se pretende reformar, establece la elaboración de un listado por parte del Congreso del Estado, sin que se mencione el procedimiento a seguir para lograr tal cometido, a pesar de requerir la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes; la iniciativa propone además, establecer una temporalidad considerable (6 meses) de anticipación a la ausencia definitiva del fiscal, con la intención de comenzar con el procedimiento de sustitución, a través de la publicación de una convocatoria pública. Se considera que, con la publicación de la convocatoria, se transparenta la etapa de registro de aspirantes al encargo.*

*Respecto a la propuesta de reforma de la fracción II, específicamente en cuanto al párrafo primero de la propuesta, se considera viable la participación de las Comisiones mencionadas en el proceso de recepción y análisis de la idoneidad de los postulantes, así como el cumplimiento de los requisitos que se establezcan en la convocatoria, en atención a las atribuciones que actualmente ha conferido la Ley Orgánica del Poder Legislativo a cada una de las Comisiones Legislativas. De igual forma se considera necesario realizar una reestructura de la propuesta a efecto de que guarde una secuencia sistémica con el desarrollo propuesto en la fracción I del artículo 95 de la constitución local, mismo que propone el tema de la convocatoria, su publicación y el proceso para la recepción de las solicitudes de los aspirantes al encargo de Fiscal General del Estado. En cuanto a la propuesta de reforma a la fracción III, se somete a consideración de la Comisión, el término de días naturales ya que prácticamente para el desarrollo del proceso se contemplan en la propuesta de reforma que sean naturales en contraposición a días hábiles. Siguiendo con las conclusiones y dando paso al análisis de la fracción IV, se considera viable.*

*En relación con la propuesta de reforma a la fracción V, se considera que una vez aprobada la lista de 5 candidatos por parte del Pleno del Congreso, debiera darse paso, al contenido del primer párrafo de la fracción I del artículo 95 Constitucional actual, a efecto de que dicho listado, sea remitido al Gobernador del Estado a efecto de que realice el procedimiento señalado en las actuales fracciones II y III del mismo numeral, es decir, que dentro de los diez días siguientes formule una terna que enviará a la consideración del Congreso del Estado, por lo que se considera inviable la propuesta en los términos en que se expresa, lo anterior con la finalidad de que se guarde el equilibrio constitucional democrático contando con la participación del poder Ejecutivo y Legislativo. Se considera que, en base al comentario anterior, resultaría inviable la propuesta de redacción de las fracciones VI y VII de la propuesta.*

*Relativo a la propuesta de reforma a la fracción VIII, en la que se propone la realización de una consulta popular para el caso de que el Congreso no hubiese designado fiscal, se considera inviable a pesar de la propuesta realizada en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto respecto a reforma a diversas disposiciones normativas a efecto de incluir dicha figura, toda vez que se entiende que el Poder Legislativo: Es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno, por lo que se considera que es uno de los órganos facultados para participar del proceso de designación del Fiscal General del Estado, en representación de la ciudadanía del Estado.*

El Poder Judicial del Estado de Guanajuato manifestó que:

*(…) el 14 de julio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 112, Segunda Parte, el Decreto Legislativo 202, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Parte de esa reforma versó sobre el procedimiento para la designación del Fiscal General del Estado. En las Consideraciones del dictamen elaborado· por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y que fue aprobado en la Sesión de Pleno del Congreso del Estado en fecha 22 de junio de 2017, se puede observar que el legislador local se decantó por incorporar en la reforma constitucional el mismo modelo que a nivel nacional contempla en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, homologó la Constitución Local con lo que dispone la Norma Suprema.*

*En el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se retomaron los argumentos que llevaron a legislador federal a optar por un modelo de designación y remoción del Fiscal General del Estado, en el que intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, por considerar que "la intervención del Poder Legislativo, a través del Senado de la República, en la designación y remoción del titular del Ministerio Público de la Federación, conlleva un esquema no sólo democrático, sino también transparente y equilibrado, lo que demuestra una clara voluntad de coordinación entre los poderes públicos". Motivación que llevó al legislador local por decantarse por este modelo seguido a nivel federal, sin que existan elementos sabidos, tanto a nivel federal como estatal que hagan suponer su falta de operatividad o resultados de este modelo implementado. De ahí, que se considere que el haber dispuesto en la Constitución local un modelo que guarda estrecha sintonía con el modelo federal permite tener un sistema de normas que dan igual tratamiento a asuntos de la misma naturaleza, por lo que se sugiere ponderar su permanencia. En todo caso, se sugiere considerar oportuna la reforma planteada el atender cuestiones relacionadas con la técnica legislativa.*

*El legislador local., hizo como propios la argumentación utilizada por el legislador federal para que, en el diseño de la remoción del Fiscal, participaran tanto el Poder Ejecutivo, con la facultad de removerlo, como el Legislativo, con la facultad de objetar la remoción que aquél formulara. Así se dijo al manifestar que: "la intervención del Poder Legislativo, a través del Senado de la República, en la designación y remoción del titular del Ministerio Público de la Federación, conlleva un esquema no sólo democrático, sino también transparente y equilibrado, lo que demuestra una clara voluntad de coordinación entre los poderes públicos".*

La Universidad de Guanajuato manifestó en su momento que:

*(…) las iniciativas pretenden reformar el artículo 95 constitucional, con la finalidad de que el Congreso pueda remover al Fiscal General del Estado, instrumentar un nuevo procedimiento para designarlo y removerlo, y establecer el contenido esencial del informe que debe rendir anualmente a los Poderes del Estado. Al respecto, se advierte que son varios los motivos que justifican las propuestas; únicamente se sugiere que, al tratarse de un organismo constitucional autónomo, se realice el estudio a la luz del marco jurídico a nivel federal, para garantizar el estado de derecho y se eviten mecanismos de remoción contrarios al sistema de pesos y contrapesos que dan equilibrio a la democracia.*

**II.2.** Se celebró una mesa de trabajo en modalidad híbrida el 15 de junio de 2022 para desahogar los comentarios y observaciones a la iniciativa estando presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como, servidores públicos representantes de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado. Estuvieron presentes también asesores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, MORENA, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y la secretaria técnica de la comisión.

**II.3.** La presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido negativo, atendiendo a lo vertido en la mesa de trabajo y, conforme con lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mismo que fue materia de revisión por los diputados y las diputadas integrantes de esta comisión dictaminadora.

**III. Contenido de la iniciativa y consideraciones generales de las y los dictaminadores sobre los objetivos perseguidos con la propuesta de reforma al artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato *sobre la designación y remoción de quien ostentará la titularidad de la Fiscalía General***

El objeto de la iniciativa de manera individual radica, en reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a fin de que el Fiscal General del Estado tenga un proceso de designación y de remoción diverso al dispuesto hasta ahora.

La iniciante expresó en su exposición de motivos lo siguiente:

*«[...] El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política -electoral1, entre dichas reformas fueron realizadas modificaciones al artículo 102, a fin de crear la Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios en el que se organizaría el Ministerio Público. Dentro del contenido de dicho artículo también se establecieron los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal General de la República, así como el proceso para su designación y remoción.*

*El propósito de esta reforma fue reemplazar al Procurador General de la República por un Fiscal General para que tuviera mayor autonomía del titular del ejecutivo federal, al incluir un procedimiento específico para la ratificación de su nombramiento con la participación de la Cámara de Senadores. En el caso de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el 14 de julio de 2017 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 202, de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado2. Entre dichas reformas se encuentra la realizada al artículo 95 en el que se creó la Fiscalía General del Estado como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios y se establecieron los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal General, junto con el proceso para su selección y nombramiento con la participación de los poderes ejecutivo y legislativo. Si bien es cierto que, dicha reforma dotó de cierto grado de autonomía a la ahora fiscalía general, el hecho de que la remoción del titular sea realizada libremente por el Gobernador del Estado y que sea él quien decida las personas que integrarán la terna, hace que exista un control de facto por parte del Ejecutivo, así como que la función de control político del Legislativo se vea reducida.*

*Asimismo, es necesario señalar que en el tercer párrafo del Artículo Primero Transitorio del citado Decreto número 202, se estableció que "El Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, asumirá las funciones de Fiscal General del Estado, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV del artículo 95". Derivado del contenido de dicho transitorio, en la designación del actual Fiscal General no se llevó a cabo el procedimiento establecido en el artículo 95; con lo cual el procedimiento establecido para la selección y nombramiento de quien debió ser titular de la nueva Fiscalía General del Estado, se subordinó a la continuidad de Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la procuración de justicia en la entidad. Por esto, con fecha 18 de octubre de 2018, el Gobernador del Estado hizo del conocimiento del Congreso, su decisión de ratificar al entonces Procurador General de Justicia como el primer Fiscal General de Guanajuato.*

*Es importante destacar que dotar de autonomía al ministerio público le ha permitido dejar de ser, al menos administrativamente, un órgano dependiente del poder ejecutivo; con lo cual se esperaban generar mejores condiciones de imparcialidad en la tarea de procuración de justicia y mejorar su eficiencia en la persecución de los delitos, al evitar las injerencias que pudieran existir cuando las investigaciones incidieran en las esferas de poder o involucraran a algún servidor público.*

*Sin embargo, la autonomía que se le dio a la institución de procuración de justicia en el estado ha quedado reducida al ámbito administrativo, sin que se haya logrado evitar la intromisión del poder político. Por esto, las reformas que dieron luz a la Fiscalía no se han traducido en mejoras a la eficacia en la persecución de delitos, o en el combate a la impunidad en el Estado. La necesidad de contar con una fiscalía efectivamente autónoma para hacer frente a la delincuencia e inseguridad que existen en el país y en el Estado, debe ser atendida prioritariamente a fin de disminuir los niveles de impunidad que se viven diariamente y permitir que las y los guanajuatenses tengamos acceso a la justicia. Para lograr tan deseables e importantes fines, es necesario establecer un mecanismo de nombramiento que quede sólo en manos del Congreso, evitando con ello cualquier injerencia del poder ejecutivo e incluir mecanismos que permitan a los ciudadanos participar en la evaluación de los resultados de procuración de justicia y manifestar su voluntad sobre la pertinencia de que el titular de la fiscalía continúe en el cargo.*

*Tanto el derecho nacional como el internacional, han buscado abordar la importancia que tiene el contar con operadores de justicia (magistrados, jueces y fiscales) independientes, destacando principalmente la adopción de mecanismos para reconocer los logros obtenidos y para establecer procesos transparentes y públicos de selección; fomentando con ello la participación y observación de parte de los ciudadanos y generando con ello un equilibrio que impida los abusos del poder e incentive a los funcionarios a llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y eficaz.*

*En este sentido, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en el Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas incluyó un capítulo sobre la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, en el que establece "El rol de los operadores de justicia -jueces y juezas, fiscales, procuradores, procuradoras, defensoras y defensores públicos y agentes de la administración de justicia- es fundamental para el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que través del aseguramiento del desempeño adecuado de las funciones jurisdiccionales, se garantiza que las condiciones de sustanciación del proceso, desde que inicia hasta que concluye, sean conformes a los estándares internacionales de derechos humanos"4. Al respecto destaca que, independientemente del cargo de cada uno de los servidores públicos, todos ellos intervienen en las distintas etapas del proceso y por lo tanto la profesionalización e independencia de cada uno de ellos es necesaria a fin de lograr que los hechos denunciados se esclarezcan y en su caso se sancionen efectiva e imparcialmente a los responsables.*

*En el mismo sentido, la Relatoría especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas establece que "la falta de autonomía del Ministerio Público frente al Poder Ejecutivo, [ ... ] puede minar la* *confianza y credibilidad de la autoridad a la que se le encomienda investigar los delitos de forma objetiva", asimismo, "para garantizar el principio de igualdad de armas en materia penal se debería de alcanzar la independencia de las defensorías de los poderes Ejecutivos". La Comisión insta a los Estados a garantizar la independencia institucional de las entidades participantes en la administración de Justicia del Poder Judicial, Fiscalías y Defensorías Públicas respecto del poder ejecutivo del Estado.*

*La autonomía a que se hace referencia en dichos documentos internacionales no se limita exclusivamente a los aspectos técnico, operativo y presupuestal; pues una verdadera separación de los poderes del estado requiere de una fiscalía que cuente con un titular que cumpla con el perfil técnico y la experiencia para llevar a cabo tan importante función, así como con un servicio profesional de carrera que asegure la capacidad y pertinencia de cada uno de los servidores públicos. Se trata pues de garantizar que no existirán injerencias o presiones directas o indirectas que puedan intervenir en la investigación de las conductas presumiblemente constitutivas de un delito. En este escenario la participación ciudadana cobra vital importancia pues la rendición de cuentas ante la sociedad es un elemento clave de los mecanismos de control y por lo tanto de generación de credibilidad y legitimidad de las acciones que llevan a cabo en el cumplimiento de sus funciones. Desafortunadamente los niveles de impunidad que se viven en países como el nuestro han generado un ambiente de desconfianza e incredulidad sobre las tareas que realizan las instituciones encargadas de la procuración de justicia; ante ello "la actuación independiente de la judicatura es una garantía de la vigencia del ordenamiento jurídico, especialmente de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, que se encuentran en la base de todo Estado Democrático de Derecho, permitiendo hacer efectivo el control del poder y el cumplimiento de la ley mediante mecanismos jurisdiccionales.*

*Actualmente en el estado se viven niveles alarmantes de inseguridad; en lo que va de enero a julio de este año, en Guanajuato se registraron un total de 2,350 delitos de fuero federal y 76,628 del fuero común7, entre los cuales se encuentran 2,221 homicidios; 20 feminicidios; 27,713 robos a casa habitación y robo de vehículos; 7,883 delitos contra la familia y 13,024 que se refieren a narcomenudeo. Tan sólo en los meses que ha durado la pandemia por COVID-19 (abril de 2020 a agosto de 2021) León y Celaya, se situaron entre los 5 municipios más violentos a nivel nacional con 837 y 554 homicidios dolosos respectivamente; al respecto es necesario mencionar que la tasa de homicidios dolosos de hombres en el estado se sitúa en de 7.92 hombres por cada 100 mil habitantes; sólo debajo de Morelos, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua y Baja California.*

*Este escenario es de los peores del país, incluso cuando la calidad de la información delictiva generada por la Fiscalía General del Estado es muy poco confiable. Para muestra, basta con señalar que la edición 2020 del Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal, elaborado por México Evalúa, posiciona a Guanajuato como una de las entidades peor evaluadas, es decir, las cifras delictivas registradas no son precisas ni confiables: entre 2015 y 2019, por ejemplo, Guanajuato fue una de las entidades que presentaron más deficiencias en su contabilidad de homicidios debido a que la Fiscalía ha reportado sistemáticamente menos homicidios dolosos que el INEGl8. En el mismo sentido, debe señalarse que, según el informe anual de* *actividades de la Fiscalía, durante 2020 existieron 340 casos de mujeres víctimas de muertes violentas, de los cuales la Fiscalía del Estado apenas tipificó 18 como feminicidios (poco más de 5%), con lo cual se confirma que muchos de los datos de los hechos delictivos que no favorecen a las autoridades que llevan gobernando la entidad durante décadas, se están traduciendo sistemáticamente en cifra negra.*

*Este evidente aumento en la comisión de delitos en el estado nos lleva a preguntarnos si la falta de profesionalización y de autonomía de la Fiscalía General para investigar y perseguir los delitos ha contribuido a que la incidencia delictiva se mantenga a la alza. Por lo tanto, es necesario que las y los integrantes del Poder Legislativo llevemos a cabo una revisión del marco jurídico que rige la actuación de la Fiscalía General del Estado a fin de asegurar su independencia del poder ejecutivo o de cualquier otro poder e introducir mecanismos que aumenten la confianza de la ciudadanía en las acciones que lleva a cabo y los resultados que genera; pues en el marco de corrupción y debilidad institucional que enfrenta nuestro país no es posible continuar con un marco normativo que no garantiza una Fiscalía con verdadera autonomía. La autonomía del fiscal estatal y de la institución es una pieza fundamental para que la investigación y persecución de los delitos sea realizada de forma integral y oportuna, sin importan si en su comisión estuvieron involucrados algunos funcionarios públicos; por ello, tal autonomía se convierte en una pieza clave para:*

*(…)*

*Tomando en consideración los argumentos vertidos en las líneas anteriores, las modificaciones que se proponen pretenden establecer un mecanismo de selección del Fiscal General del Estado que asegure su autonomía e independencia institucionales, evitando la posibilidad de que el titular de esta dependencia se encuentre subordinado o pueda ser influenciado por el titular del Poder Ejecutivo o algún otro funcionario de alto nivel. Asimismo, la participación de la pluralidad representada en el Congreso del Estado permite asegurar que la designación no sea afectada por preferencias, predilecciones, presiones o afinidades políticas. Además, el mecanismo propuesto consta de diferentes fases a fin de asegurar que el nombramiento lo obtenga el perfil mejor evaluado y que por lo tanto se trate de una persona idónea para ocupar el cargo y establece un mecanismo de participación ciudadana que permite a los guanajuatenses participar de la toma de decisiones de acuerdo con su valoración sobre el avance o retroceso en la persecución, investigación y sanción de los delitos.*

*(…)*

*Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; de aprobarse la presente iniciativa se generarían los siguientes impactos:*

*I. Jurídico. De aprobarse la presente iniciativa se crearía un nuevo marco jurídico que regulará el proceso de selección del Fiscal General y por lo tanto se crea una nueva atribución para el Congreso del Estado, quien será el encargado de realizar dicho procedimiento.*

*II. Administrativo. No prevé este rubro.*

*III. Presupuestario. De la presente iniciativa se advierte que habrá un impacto presupuestal por la previsión económica que deberá realizarse a la mitad del periodo del encargo del Fiscal General para llevar a cabo la consulta popular sobre la permanencia o no del funcionario en el cargo, misma que deberá realizarse en la jornada electoral que corresponda. Asimismo, en caso de que ningún funcionario resultare electro para el cargo por el Congreso del Estado, se deberá contar con la suficiencia presupuestal para llevar cabo la consulta ciudadana mediante la cual resulte electo el próximo titular de la fiscalía.*

*IV. Social. Modificar el procedimiento de selección del Fiscal General del Estado permitirá asegurar su independencia y autonomía de cualquier tipo de injerencia que pudiera existir por parte del Poder Ejecutivo o de cualquier otra autoridad; asimismo, permitirá establecer un mecanismo de control que permita a las y los ciudadanos evaluar el actuar y los resultados de dicho servidor público y por lo tanto habrá un aumento en la confianza ciudadana respecto de las investigaciones y persecución del delito que lleva a cabo la fiscalía.»*

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, consideramos oportuno realizar un análisis general de los alcances constitucionales y legales sobre la propuesta para la designación y remoción de quien ostenta la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, contemplada en el apartado del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

**III.1. Análisis de la reforma al artículo 95 de la Constitución Política Local, respecto a la designación y remoción del Fiscal General del Estado**

La iniciativa propone reformar el artículo 95 de nuestro Código Político Local, así como los artículos 106, 111, 113 y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Respecto de la reforma al texto constitucional local, se pretende una modificación al proceso de designación del titular de la Fiscalía estatal, en el que tenga una mayor participación el Poder Legislativo a través de su Asamblea denominada Congreso del Estado, con la posibilidad incluso de recurrir a consulta popular para la designación del mismo. De igual forma busca establecer que la remoción del titular de este organismo autónomo constitucional sea a través de causa grave establecida por la Ley por medio de proceso sustanciado por el la Asamblea del Poder Legislativo, o bien, que a la mitad del periodo para el cual fue designado, se realice un ejercicio de revocación de mandato a efecto de la ciudadanía determine o no su permanencia.

Al respecto, dentro de la exposición de motivos, la iniciante refiere la necesidad de que este Congreso cuente con la atribución de remover al titular de la Fiscalía estatal porque se obstaculiza la rendición de cuentas a la Fiscalía, pues únicamente el Gobernador tiene la atribución de remoción del titular de dicho organismo autónomo y considera que el actual estado de cosas en materia de seguridad pública hace necesario el relevo del titular de la Fiscalía.

Quienes dictaminamos queremos resaltar en este análisis la acción legislativa reflejada en la publicación del 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral; mismo que contiene la reforma al artículo 102 constitucional, la cual, medularmente proyectó que el Ministerio Público Federal se organizara en una Fiscalía General de la República como un órgano constitucionalmente autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en dicha Ley Fundamental se contempló la base normativa para que el Ministerio Público dejara de ser una institución adscrita al Poder Ejecutivo, para convertirse en un organismo independiente.

En concordancia con esa reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente Permanente en Guanajuato, mediante el Decreto Legislativo 202, reformó y adicionó diversos dispositivos de la Constitución Política para el Estado, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 112, Segunda Parte, del 14 de julio de 2017, estableciendo a rango constitucional la organización del Ministerio Público en una Fiscalía General del Estado, con la naturaleza jurídica de órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, especificando en su artículo 95 que *«corresponde al Ministerio Público la investigación, persecución ante los tribunales, de todos los delitos de su competencia; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los inculpados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine».*

En el artículo 95 de esa reforma a nuestro Código Político Local se establecieron los requisitos que debe reunir el Fiscal General, el tiempo que durará en su encargo, el procedimiento para su designación, la obligación de presentación anualmente ante los Poderes del Estado de un informe de actividades, entre otras cuestiones.

De esta manera como punto fundamental y razón de ser del actual contenido e hipótesis normativas del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, es de señalar que el texto regulatorio vinculado a la naturaleza jurídica de la Fiscalía General del Estado, y las particularidades que en tal numeral se describen, se desprende y es armónica con la llamada *«Reforma Político-Electoral»* del 10 de febrero del 2014, siendo en ese sentido un texto homologado al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo anterior, debe considerarse que el texto constitucional local que se encuentra vigente en el artículo 95 y que se pretende reformar, resulta armónico en lo general, así como en lo particular con el proceso de selección y remoción del Titular de la Fiscalía General de la República, *y a nivel nacional con el esquema operado en las Fiscalías de las Entidades Federativas*, razón por la cual se considera no se desprende argumento jurídico válido que justifique en una primera instancia la reforma sugerida.

Ahora bien, con respecto al nombramiento de quien ostenta la titularidad de la Fiscalía General del Estado, podemos manifestar que el Poder Revisor de la Constitución Política local o *Constituyente Permanente*, estableció los procesos y diseños especiales para cada organismo autónomo a efecto de dotar de mayor libertad y autonomía a dichas instituciones. Esta necesidad de autonomía ha sido señalada por diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos, con lo cual coincidimos plenamente.

Por lo que hace a la independencia de los Poderes Ejecutivos, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al igual que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han destacado la importancia de la autonomía de las instituciones y el funcionariado de procuración de justicia con el fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado de que se trate. Conforme a los estándares internacionales, la independencia de los operadores se divide en dos dimensiones: i) la institucional o de sistema; y, ii) funcional o del ejercicio individual de las y los operadores de justicia.[[64]](#footnote-64)

La independencia institucional se entiende como la relación que guardan las instituciones de procuración de justicia dentro del sistema del Estado respecto de otras esferas de poder e instituciones estatales[[65]](#footnote-65). La afectación o anulación de dicha independencia implica la subordinación o dependencia de la actuación de los ministerios públicos a otros poderes, lo que deriva en un detrimento de su actuación.[[66]](#footnote-66)

Mientras que la autonomía funcional [[67]](#footnote-67)se define como la garantía para ejercer de manera libre sus labores en el conocimiento de los casos en el ejercicio de sus atribuciones. Para la eficacia de esta garantía es necesario que se cuente con procedimientos y cualificaciones para el nombramiento de las personas titulares de las fiscalías, la estabilidad de su encargo, así como la certeza en la carrera ministerial.[[68]](#footnote-68)

Ahora, por lo que respecta a la autonomía institucional que deben gozar las fiscalías con relación a los poderes, las Directrices sobre la Función de los Fiscales estipulan expresamente que:

*«el cargo de fiscal [debe] estar... estrictamente separado de las funciones judiciales [...]»[[69]](#footnote-69)*

Bajo esa línea argumentativa podemos decir que las normas federales y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, garantizan un proceso calificado de nombramiento y remoción extraordinaria de las personas titulares de las fiscalías, así como una temporalidad diversa a los de los Poderes Ejecutivos y Legislativos, a efecto de dotar de estabilidad en el cargo a las y los titulares, todo como garantía de autonomía funcional.

De ahí que, en el caso del diseño constitucional local, similar al sistema federal, implica un ejercicio en el que tanto el Poder Ejecutivo como *nosotros* el Poder Legislativo sustanciemos un proceso que garantiza la participación deliberativa de ambos Poderes a efecto de garantizar legitimidad y autonomía al titular electo para dicho cargo. Además, quien ocupe la titularidad de la Fiscalía será titular del Ministerio Público local, conforme al artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Esta cuestión tiene trascendencia, pues el Ministerio Público es una autoridad en materia de seguridad pública, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La trascendencia de la materia de seguridad pública, y las facultades que tiene el titular del Ejecutivo local en la materia, es importante que dicho Poder tenga participación directa en la elección de quien ostente la titularidad de la Fiscalía estatal, con la coparticipación de este Poder Legislativo como ya se tiene en el actual diseño. Es de señalar que este proceso deliberativo entre dos Poderes es una garantía institucional de la propia autonomía, la cual no es extraña al sistema democrático mexicano o estatal, pues varios son los ejemplos en que el Ejecutivo coparticipa con el Legislativo para nombrar a personas funcionarias que deben contar con un alto grado de autonomía respecto de los tres poderes.

Con respecto a establecer procesos de consulta popular tanto para el planteamiento de propuestas de candidatos(as) a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General, así como para evaluar la continuidad a mitad del periodo respectivo de quien ostente el cargo, ello, con el fin de otorgar participación directa a la ciudadanía en dicho proceso, en tal circunstancia, cabe mencionar que la manifestación de voluntad de las y los ciudadanos, actualmente en el proceso establecido en nuestra Constitución Política para el Estado de Guanajuato para tal proceso, se ve colmado, en razón del involucramiento de este Poder Legislativo en tal esquema de selección y determinación de quien habrá de ocupar el señalado cargo de Fiscal General, ya que, al ser cada uno de nosotros representantes populares, al momento de emitir nuestro voto y con el involucramiento, se colma la manifestación de voluntad de sus representados. Teniendo en ese sentido, el multireferido proceso de análisis, ponderación, selección y designación de la persona que sería la titular de la Fiscalía General del Estado, el matiz de la voluntad popular ciudadana por conducto del ejercicio parlamentario de las y los Diputados.

Siguiendo con el análisis de la propuesta de reforma al artículo 95, destaca la relativa a la pretensión de que en el proceso de selección y remoción de Fiscal General, sea únicamente por conducto de este Poder Legislativo *bajo los esquema de participación ciudadana que sugiere, de los cuales hemos comentado ya*, en ese sentido, tal planteamiento resultaría incluso contrario a lo comentado y expresado por la iniciante en su exposición de motivos, en tanto que se aducen cuestiones de apertura y participación de diversos entes públicos y sectores sociales en aras de una adecuada selección, no obstante, es de vislumbrar tal monopolización del proceso desde este Poder Legislativo a través del Congreso del Estado y la supresión de diversos equilibrios y contrapesos entre poderes, contrariaría tal ánimo, incluso, correría el riesgo de generar una politización de la selección de un puesto eminentemente técnico y operativo que en razón, incluso, de la naturaleza jurídica que posee la Fiscalía General como organismo constitucional autónomo, trastocaría su esencia un fines de independencia.

De igual manera, no podemos dejar de mencionar la naturaleza jurídica de los organismos constitucionales autónomos para ser consistentes y homologados en lo conducente en cuanto a lo pretendido a la luz del régimen que impera respecto a los mismos acordes a sus atribuciones y competencias, en este caso, además, como ente encargado del desempeño de una atribución originalmente de tal alto rango y sensibilidad como es la investigación y persecución de delitos.

De igual forma, como justificación de la reforma al numeral 95, *se habla en la exposición de motivos de avanzar y sugerir adecuados esquemas de servicios de carrera*, cuestión ante la cual, el Servicio de Carrera del Ministerio Público, de los Peritos Forenses, de Analistas de Información y del desarrollo del personal de investigación criminal o policial de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, son mecanismos *que la norma regula* para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en los méritos tendientes a impulsar el crecimiento, capacidades, habilidades, aptitudes, principios y valores de quienes integran el servicio de procuración de justicia, para beneficio de la sociedad.

Es decir dicho componente desde nuestra perspectiva y desde su regulación debe ser de servicio, desarrollo y formación del personal sustantivo de la Fiscalía General, desde su etapa de reclutamiento, que se erige como medio articulante para la formación de servidoras y servidores públicos aptos para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar sus libertades, así como el respeto al orden y la paz públicos a través de la investigación y la persecución de los delitos, ello, en términos de las competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal contexto, las acciones implementadas por esa Institución en materia de servicio profesional, de conformidad con la normativa, debe obligadamente contemplar instancias específicas, que para el caso que nos ocupa son las particulares Comisiones del Servicio de Carrera Ministerial y de Investigación Criminal y Pericial, así como procesos concretos que deben colmarse, en ese orden de ideas, el argumento o justificación para la sugerida reforma, carecería de contextualización y vinculación directa con lo que se busca regular con la iniciativa, relativo a la propuesta, selección y proceso de remoción del titular de la Fiscalía General del Estado, debiendo incluso señalar, que con base en el marco regulatorio de tal servicio de carrera *entre ellos los artículos 8o., 20, 21 y 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 10 y 11 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 13, 75, 76, 77 y 78 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y reglamentación interna de la Fiscalía General*, el titular del órgano constitucional autónomo, no forma parte del multicitado servicio de carrera.

Desde nuestro análisis a la luz de la constitucionalidad con respecto al proceso de remoción del titular de la Fiscalía Estatal este es análogo al de la Fiscalía General de la República, mismos que deben analizarse de forma conforme y conjunta con el resto de las normas que los regulan.

En este apartado es importante referirnos a la temporalidad de la duración en el encargo establecida por los poderes revisores de la Constitución, tanto federal como local. Para el caso de la Fiscalía de la República, el artículo 102 de la Carta Magna indica que la duración del cargo será de 9 años, misma temporalidad que la señalada para el Fiscal estatal en el artículo 95 de la Constitución local. Por su parte, en nuestra entidad, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato establece cuáles son las causas graves por las cuales el Gobernador podrá separarle de su cargo: i) cuando incumpla de manera reiterada con los fines institucionales previstos en la Ley, y ii) participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución General, a la Constitución Local y a las leyes. Por ello, ahí mismo se señala que corresponde al titular del Poder Ejecutivo local acreditar la causa grave que motivó la remoción del Fiscal General e informar al Congreso del Estado, quien decidirá si objeta o no la remoción, en términos del artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Este diseño local es homólogo a nivel federal, interviniendo los poderes Ejecutivo y Legislativo a través del Presidente de la República y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Así, las normas a nivel federal y local establecen, en la ley las reglas y, las causas graves de remoción de las respectivas titularidades, además de contemplar un proceso agravado para la restitución de los mismos, pues en dicho sistema de remoción participa tanto el Poder Ejecutivo cuando existan las causales concretas establecidas por la Ley, decisión que debe ser confirmada por el Poder Legislativo, quien cuenta con facultad de veto respecto de dicha remoción.

Coincidimos en que la garantía de estabilidad del titular del organismo autónomo constitucional no es absoluta, pues además del proceso extraordinario de remoción, en el caso de Guanajuato el titular de la Fiscalía General del Estado también se encuentra sujeto al régimen de responsabilidad política contemplada en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de responsabilidades administrativas establecido dentro del artículo 109 de dicha Constitución, y regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Dentro del catálogo de sanciones administrativas del artículo 109 constitucional se encuentran amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación y sanciones económicas. Conforme al artículo 124 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato o por los Órganos Internos de Control y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Nuestro argumento constitucional reviste en que se tiene que considerar que la tarea de los Poderes Públicos no se puede entender aislada, en tanto que nuestro sistema de división de poderes, consagrado en el artículo 116 de la Constitución Política Federal, exige la interrelación de los órganos de gobierno en el ejercicio de sus funciones, como una forma de colaboración y coordinación.

En la misma situación ha de entenderse esta autonomía frente a la propuesta de que quien ostente la titularidad sea sujeta a un proceso de revocación de mandato, además que no contempla cuál debe ser el umbral de participación ni el porcentaje de votación para que este sea vinculante, es un ejercicio inédito que no encuentra similar en el ámbito federal, lo cual nos dejaría ante una posible inconstitucionalidad.

Por el contrario, establecer que la permanencia o no del titular de un organismo autónomo constitucional sea decidida a través de sufragio directo, además de no tener relación con su método de nombramiento, implica una afectación directa a su autonomía, pues en un primer plano se trastocaría el diseño de su temporalidad y estabilidad.

Al mismo tiempo advertimos quienes dictaminamos que la reforma constitucional propuesta implica cuestiones que deben ser reglamentadas en la legislación orgánica del Poder Legislativo, tal y como qué comisiones legislativas son las encargadas de seguir el proceso, pues se estima que dichas normas no corresponden a rango constitucional sino reglamentario, situación que por técnica legislativa por supuesto no estamos de acuerdo, pues rompe con la estructura constitucional diseñada para tal efecto.

En razón de los argumentos expresados se determina la no viabilidad de reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato con los alcances propuestos, en razón de considerar que el diseño legal y constitucional de la Fiscalía General del Estado es acorde al parámetro de regularidad constitucional, así como a los estándares internacionales en la materia, pues los titulares de los organismos autónomos deben gozar de una garantía de estabilidad a efecto de dotar a los citados organismos de una real autonomía funcional.

El nombramiento y remoción contemplada por el artículo 95 de la Constitución local es un proceso extraordinario, por lo cual es acorde a los estándares y necesario que contenga elementos de calificación y coparticipación deliberativa entre Poderes estatales.

Por ende, es necesario que para nombrar y remover al titular de la Fiscalía General del Estado sean dos poderes los que participen activamente del mismo, a efecto de evitar la injerencia unilateral de algún poder en el desarrollo de la labor del órgano autónomo.

Quienes dictaminamos consideramos que el sistema normativo establece controles políticos y administrativos para una eventual destitución de la persona titular, en caso de que incurra en alguno de los supuestos que la Constitución o la normatividad en materia de responsabilidades administrativas contemplan, ello a través de procesos sustanciados por instancias especializadas como los órganos internos de control, designados por el Congreso, o el Tribunal de Justicia Administrativa, en el que se respeten las garantías del debido proceso.

Con todo lo expuesto estimamos pertinente el archivo de la iniciativa de referencia.

No omitimos referir que dado el ejercicio de agenda común que tiene la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta Sexagésima Quinta Legislatura como atribución con respecto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, este dictamen sólo se ocupa del apartado correspondiente al artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

**ACUERDO**

**Único.** Se ordena el archivo definitivo de la iniciativa suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de reformar el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, *en la parte correspondiente al primero de los ordenamientos.*

Se instruye al Secretario General del Congreso archive de manera definitiva el apartado de la iniciativa de referencia.

**GUANAJUATO, GTO., A 21 DE JUNIO DE 2022**

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

**Dip. Susana Bermúdez Cano**

**Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Dip. Briseida Anabel Magdaleno González**

**Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

**Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas**

**Dip. Yulma Rocha Aguilar**

**Dip Gerardo Fernández González**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A LAS INICIATIVAS, LA PRIMERA FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GTO, A EFECTO DE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN LO QUE CORRESPONDE AL PRIMER ORDENAMIENTO Y, LA SEGUNDA SUSCRITA POR DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E .

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales recibimos para efectos de estudio y dictamen las iniciativas, la primera formulada por el ayuntamiento de León, Gto, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, *en lo que corresponde al primer ordenamiento* y, la segunda suscrita por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Analizadas las iniciativas, esta Comisión Legislativa de conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 111 fracción I y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, formula a la Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

**I. Del Proceso Legislativo**

**I.1.** En sesión del 15 de febrero de 2022 ingresó la iniciativa *con el* *Expediente 143A/LXV-I* formulada por el ayuntamiento de León, Gto, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, *en lo que corresponde al primer ordenamiento*, turnándose por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para su estudio y dictamen.

**I.2.** Posteriormente, en sesión del 24 de febrero de 2022 ingresó la iniciativa *con el Expediente 156/LXV-I* suscrita por diputada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por la que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato turnándose por la presidencia del Congreso a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para su estudio y dictamen.

**I.3.** En reuniones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, del 21 de febrero y del 1 de marzo de 2022, se radicaron respectivamente las iniciativas y fueron aprobadas las metodologías de trabajo en los siguientes términos:

*Con respecto a la primera iniciativa:*

1. *Remitir vía electrónica para opinión a los 36 diputados y diputadas que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, al Poder Judicial, a la Coordinación General Jurídica, y los 46 ayuntamientos quienes contarán con un término de 20 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes.*
2. *Se habilitará un vínculo (link) en la página web del Congreso del Estado, a efecto de que se consulte la iniciativa y se puedan recibir observaciones a la misma.*
3. *Se integrará un documento que consolidará todas las propuestas emitidas en las consultas por escrito o vía electrónica que se hayan remitido previamente a la Comisión para el análisis de la iniciativa. Dicho documento será con formato de comparativo.*
4. *Se celebrará una mesa de trabajo para analizar las observaciones remitidas, a través del documento comparativo.*
5. *Una vez lo cual, se presentará un proyecto de dictamen para que sea analizado en reunión de la Comisión.*

*Con respecto a la primera iniciativa:*

1. *Remitir vía electrónica para opinión a los 36 diputados y diputadas que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, al Poder Judicial, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a las instituciones de educación superior en la entidad quienes contarán con un término de 20 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes.*
2. *Se habilitará un vínculo (link) en la página web del Congreso del Estado, a efecto de que se consulte la iniciativa y se puedan recibir observaciones a la misma.*
3. *Se integrará un documento que consolidará todas las propuestas emitidas en las consultas por escrito o vía electrónica que se hayan remitido previamente a la Comisión para el análisis de la iniciativa. Dicho documento será con formato de comparativo.*
4. *Se celebrará una mesa de trabajo para analizar las observaciones remitidas, a través del documento comparativo.*
5. *Una vez lo cual, se presentará un proyecto de dictamen para que sea analizado en reunión de la Comisión.*

**II.1.** Derivado de esos ejercicios de consulta a diversas autoridades del poder ejecutivo, organismos autónomos, ayuntamientos y bajo el principio de parlamento abierto respondieron respecto a la primera propuesta: Poder Judicial del Estado; así como el ayuntamiento de León, Celaya.

De igual forma, se pronunciaron los ayuntamientos de San Diego de la Unión, Coroneo, Doctor Mora, Juventino Rosas y Abasolo.

Durante el desahogo de la metodología se pronunció la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado.

El Poder Judicial del Estado de Guanajuato manifestó que:

*(…) la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que las sociedades del conocimiento "deben apoyarse en cuatro pilares: la libertad de expresión, el acceso universal a la información y al conocimiento, el respeto a la diversidad cultural y lingüística, y una educación de calidad para todos" (UNESCO, 2021, pág. 1). En consecuencia -señala Alberto Enríquez Carlos Sáenz, en su Libro Gobierno digital Pieza clave para la consolidación de Estados democráticos en los países del SICA, página 13- Y "en relación con la construcción y consolidación de Estados democráticos, la ruta debe pasar por dar el salto a gobiernos que sean digitales, abiertos e inteligentes".*

*Actualmente, los conceptos de gobierno abierto, gobierno digital y gobierno inteligente y su interrelación se encuentran en pleno proceso de debate y construcción, no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo.*

*El gobierno abierto tiene como objetivos principales: i) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control social sobre los gobiernos y demandar rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico); ii) facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones); y iii) favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para codiseñar o coproducir valor público, social y cívico (Ramírez-Alujas y Güemes, 2012).*

*El paradigma de gobierno abierto constituye en eje fundamental para cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que permitan promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas (Naser, Ramírez-Alujas y Rosales, eds., 2017).*

*Ahora bien, en esta era de la cuarta revolución industrial en la que internet como herramienta tecnológica, cultural y económica ha transformado casi todas las prácticas humanas y ha impactado en las formas de comunicación, organización y accionar de la ciudadanía, el gobierno abierto no puede alcanzar sus objetivos sin un pleno uso de las TIC. Por eso, desde el principio se estableció una relación directa con el gobierno electrónico, entendido este como aquel gobierno al que concierne "la utilización de las TIC, y en particular internet, como una herramienta para lograr una mejor gobernanza" (OCDE/BID, 2016, pág. 391}.*

*Continúa señalando la OCDE, que para el impulso del gobierno digital y de las transformaciones que implica, no solo en la administración pública sino en la economía y la sociedad, es indispensable un adecuado marco normativo.*

*"para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los desafíos de la transformación digital en las economías, en las sociedades y en los gobiernos, el marco jurídico y reglamentario debe responder positivamente al ritmo del rápido cambio tecnológico. Este requisito es particularmente relevante en el contexto del sector público, donde las acciones y actividades tienden a estar enmarcadas por leyes y reglamentos" {OCDE, 2019a, pág. 11).*

*De ahí que se comparta, en principio, la intención de fortalecer nuestro marco normativo estatal incorporando un nuevo paradigma que como bien señala la OCDE, requiere del marco jurídico y reglamentario debe responder positivamente al ritmo del rápido cambio tecnológico.*

*No se omite señalar que desde 2018, en Guanajuato cobro vigencia la reforma constitucional por la que se incorporó el concepto de gobierno abierto en nuestro sistema jurídico local, como un eje rector de la transparencia y rendición de cuentas en un estado democrático, y que hoy se busca fortalecer, mediante la incorporación del concepto de gobierno digital, que como se ha dicho supralíneas permite que a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en particular internet, contemplar la incorporación de herramientas para lograr una mejor gobernanza.*

El ayuntamiento de León, Guanajuato manifestó que:

(…) *refrenda su compromiso para contribuir a la reducción de la brecha digital, consideramos que, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, consolidaremos la mejora regulatoria en la administración pública municipal, mediante una oferta mayor de trámites digitales y simplificados, para la atención de ciudadanos.*

*Debemos hacer referencia que el "Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro. Visión al 2045", establece como una de sus piedras angulares la de "Nuevo Modelo de Gobernanza" la cual cuenta con el pilar "Tecnología y conectividad digital" que tiene como mayor eficiencia de servicios públicos."*

*Asimismo, el "Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 2018-2024" en el eje "Desarrollo ordenado y sostenible" estipula como objetivo 5.2.3 "Detonar la cobertura e inclusión digital en Guanajuato".*

*Con base en lo anterior, buscamos no solo coadyuvar en el logro de los objetivos señalados en el "Plan Municipal de Desarrollo, León hacia el futuro, Visión al 2045" y con estipulado en el "Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 2018-2024", pues somos conscientes de la gran importancia que es incorporar el Gobierno Digital por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación a los trámites y servicios gubernamentales, para procurar que aquellos que tengan mayor demanda sean accesibles para la población a través de la plataforma que desarrollen para su gestión.*

*Reafirmamos y estamos convencidos que con esta propuesta, se logrará que los Ayuntamientos lograrán un mayor acercamiento con la ciudadanía por medio de los trámites y servicios brindados a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.*

El ayuntamiento de Celaya manifestó que:

*(…) procurar que, una vez definidos los ejes del Gobierno Digital los ayuntamientos cuenten con las facultades para implementar el Gobierno Digital en trámites gubernamentales por medio de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).*

**II.2.** Respecto a la segunda propuesta respondieron: la Universidad de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y el Poder Judicial del Estado.

La Universidad de Guanajuato manifestó que:

*(…) Con motivo de la reforma al artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera particular en su párrafo tercero se reconoció el derecho humano a la internet, como derecho subjetivo público que posibilita a toda persona acceder y conectarse a la red y que, al tratarse de un derecho fundamental que permite habilitar el acceso a otros derechos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, entonces corresponde al Estado, como principal garante, promover el acceso universal.*

*Por las razones expuestas, coincidimos con la teleología de la iniciativa sujeta a opinión, pues lo que busca es asegurar el acceso efectivo al derecho a la internet para cualquier persona como una manifestación de igualdad y un medio que facilite el ejercicio de los derechos humanos a la libre expresión de ideas y acceso a la información, así como para el fortalecimiento del debate y pluralismo ideológico, entre otros.*

*En virtud de ello, las acciones positivas que garantizan el acceso universal y progresivo del derecho humano al internet se traducen en la necesaria intervención por parte del Estado -federación y entidades federativas, que haga posible su cumplimiento material. Al respecto, resulta ilustrativa la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet emitida por la Organización de los Estados Americanos, de manera particular en el punto 6 relativo al Acceso al Internet, incisos a, e y f, en los que se desarrollan acciones en concreto por parte de los Estados para asegurar el ejercicio pleno a este derecho.*

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado manifestó que:

*(…) se advierte que en la exposición de motivos se transcriben los argumentos esgrimidos en el ensayo académico intitulado: El acceso a internet como derecho fundamental, elaborado por el doctor Haideer Miranda Bonilla, Coordinador de la Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Letrado de la Sala Constitucional de dicho país, quien a grandes rasgos expone los avances jurisprudenciales y legislativos en la materia, ocurridos en distintos lugares del mundo.*

*Al respecto, debe mencionarse que existen básicamente dos grandes posturas respecto al tema.*

*La que señala el acceso al internet como un derecho humano autónomo y la que considera que es una herramienta potencializadora que facilita el ejercicio de otros derechos, tales como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, el acceso a la información pública, los derechos políticos y participación ciudadana, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, por mencionar solo algunos de ellos, pero que no se posiciona a favor de que sea un derecho humano.*

El Poder Judicial del Estado de Guanajuato manifestó que:

*(…) desde el año de 2013, el derecho de acceso al internet se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 6º, cuartó párrafo de nuestra Carta Magna, en el que se dispone que "El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios".*

*En ese sentido, el acceso al internet, forma parte del bloque de derechos fundamentales que deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.*

*El derecho humano al accedo al internet, es interdependiente con los otros derechos, tales como la libertad de expresión e información, privacidad, educación, seguridad, justicia, salud, movilidad, inclusión, y también con los derechos económicos, entre los que se encuentra el derecho al trabajo; de tal forma que muchos de estos derechos son actualmente posibles de ejercerse precisamente por la existencia de herramientas como el internet, que se ha convertido en una especie de fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, incluido el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.*

*Es un hecho, el que hoy en día, la mayoría de las sociedades actuales no pueden concebirse sin el uso de las tecnologías de la Información y de la Comunicación, en particular, el uso y disfrute del internet, que visto en su aspecto positivo, contribuye al crecimiento económico, propicia la inclusión social, además de constituirse como una herramienta que fomenta la participación ciudadana y de la sociedad civil. De ahí que se deba aplicar un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso al internet, debiendo las autoridades hacer lo posible por cerrar las múltiples formas de la denominada brecha digital.*

**II.3.** En reunión de la comisión legislativa del 11 de mayo de 2022, se determinó a efecto de dar continuidad y seguimiento puntual a las metodologías de estudio y dictamen aprobadas por unanimidad en su momento por la comisión, la fecha para la celebración de las respectivas mesas de trabajo, por un lado, en *materia de internet para todos y por el otro, el de la adición del principio de gobierno digital.*

II.4. Se celebraron dos mesas de trabajo en modalidad híbrida, en el caso de *internet para todos,* el 27 de mayo de 2022 para desahogar los comentarios y observaciones a la iniciativa, estando presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Briseida Anabel Magdaleno González y el diputado Gerardo Fernández González integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como servidores públicos representantes de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Estuvieron presentes también asesores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y la secretaria técnica de la comisión.

Con respecto al tema de *gobierno digital,* el 1 de junio de 2022 se desahogaron los comentarios y observaciones a la iniciativa, estando presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Laura Cristina Márquez Alcalá, Yulma Rocha Aguilar y los diputados Rolando Fortino Alcántar Rojas y Gerardo Fernández González integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como servidores públicos representantes del Ayuntamiento de León, Guanajuato y de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado. Estuvieron presentes también asesores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y la secretaria técnica de la comisión.

**II.5.** La presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó a la Secretaría Técnica para que elaborara el proyecto de dictamen en sentido positivo que conjuntara ambas iniciativas y, atendiendo a lo vertido en las mesas de trabajo y, conforme con lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mismo que fue materia de revisión por los diputados y las diputadas integrantes de esta comisión dictaminadora.

**III. Contenido de las iniciativas y consideraciones generales de las y los dictaminadores sobre los objetivos perseguidos con las propuestas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato *sobre internet para todos y gobierno digital***

El objeto de la primera iniciativa es reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a fin incluir como un principio el *gobierno digital* implementando dicho modelo en la administración pública de forma moderna, eficiente, eficaz y transparente, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de Guanajuato mediante el uso estratégico de las tecnologías.

Las y los iniciantes dispusieron en su exposición de motivos que:

*«[...]Nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece que el Gobierno Digital es un principio de actuación de la autoridad para mejorar los servicios públicos, propiciar la modernización administrativa, contribuir al buen manejo del erario, así como facilitar la rendición y transparencia de cuentas, incluyendo en todo momento a la ciudadanía como eje central en la gestión.*

*Actualmente, en México solo cuatro entidades federativas establecen en su Constitución Política local el principio de Gobierno Digital, dichos Estados son: Chiapas, Jalisco, Puebla y Tamaulipas. Con la aprobación de la presente propuesta, Guanajuato se convertiría en el quinto Estado a nivel nacional en sumarse a un sistema de gobierno moderno con la capacidad evolucionar a la par de los avances científicos y tecnológicos.*

*Es así que en la presente iniciativa comprendemos al "Gobierno Digital" como la utilización las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para que la autoridad realice una mejor gestión, planificación y administración, así como la difusión, atención y gestión de trámites y servicios de las diferentes dependencias a través de portales de internet con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, esta política pública permite mejorar la relación Ciudadano -Estado.*

*Para lo anterior, los Ayuntamientos incorporarán el Gobierno Digital por medio de uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación a los trámites y servicios gubernamentales, se procurará que aquellos que tengan mayor demanda sean presenciales y no esenciales no previstos a través de las tecnologías, es importante señalar que la pandemia no ha terminado, sino que nos encontramos en un proceso de adaptación, una nueva normalidad y en este proceso de adaptación es importante implementar el Gobierno Digital para el funcionamiento del servicio público ante cualquier contingencia actual o futura.*

*En conclusión, implementar el Gobierno digital en Guanajuato permitirá conducir la administración pública de forma moderna, eficiente, eficaz y transparente en todas las instituciones del sector público, contribuirá al crecimiento y desarrollo de Guanajuato mediante el uso estratégico de las tecnologías.*

*Así pues, una vez definidos los ejes del Gobierno Digital, se busca que los Ayuntamientos cuenten con la facultad de implementar el Gobierno Digital en trámites gubernamentales por medio de las TIC, procurando que aquellos con mayor demanda sean accesibles para la población a través de la o las plataformas desarrolladas para su gestión, además de facilitar el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia y participación ciudadana.*

*Por todo lo anterior, se destaca que este proyecto normativo pretende reformar el artículo 36 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato referente a los principios del Poder Público del Estado, incluyendo el principio de Gobierno Digital, así como el uso de las tecnologías de la información y Comunicaciones. En consecuencia, se contempla reformar el último párrafo del artículo 117 para que en los Ayuntamientos también se guíen bajo el mismo principio.*

*(…)*

*Por último, se señala que la presente iniciativa comulga con la agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible formulada por la Organización de Naciones Unidas en su objetivo 9 Industrias, Innovación e Infraestructura; construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.*

*Por otra parte, de acuerdo con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos tendrá, de ser aprobada, el siguiente:*

*l. Impacto jurídico: El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.*

*A su vez, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en su artículo 56 fracción IV establece la facultad de los Ayuntamientos de proponer iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar el marco jurídico de nuestro estado. En el caso que nos ocupa, se propone la regulación y, posterior implementación, del principio denominado «Gobierno Digital», a través de los dispositivos y los ordenamientos legales citados en los artículos explicativos que integra la propuesta.*

*II. Impacto administrativo: La presente iniciativa no trae consigo la creación de estructuras administrativas, sin embargo, cada autoridad deberá ajustar sus parámetros de actuación para dar cumplimiento al principio de «Gobierno Digital» por lo que deberá actualizar sus políticas y herramientas para la gestión gubernamental, en aras de dar cumplimiento a la presente propuesta.*

*III. Impacto presupuestario: La presente propuesta contiene un impacto presupuestal para la implementación del «Gobierno Digital», sin embargo, cada unidad administrativa tendrá su programación individual, atendiendo las características tecnológicas con las que ya cuenten y con los trámites o servicios que deberán adecuarse en la modalidad virtual. De requerir un análisis más profundo se solicita el apoyo a efecto de que las Comisiones Legislativas competente se apoyen en la Unidad administrativa competente en el Estudio de las Finanzas Públicas, siendo que en términos de la Ley Orgánica del Poder de las Legislativo le atribuciones corresponde del Congreso realizar aquellos estudios que* *coadyuven en el ejercicio de las atribuciones del Congreso del Estado.*

*IV. Impacto social: Implementar un «Gobierno Digital» representa posicionar al Estado y los Municipios como un gobierno moderno de administración con capacitad de adaptarse a un mundo y globalizado, dejando a un lado las practicas obsoletas de atención, interacción y participación entre los ciudadanos y el Estado; lo cual, posicionará a Guanajuato como uno de los Estados referentes a nivel nacional en innovación normativa y desarrollo tecnológico, colocándonos como unos de los Estados pioneros en implementación de dicha política pública.»*

El objeto de la segunda iniciativa es adicionar un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a fin incluir como derecho humano el internet.

Las y los iniciantes dispusieron en su exposición de motivos que:

*(…) Las nuevas tecnologías y los avances científicos han influido en el ámbito de los derechos fundamentales cuya tutela jurisdiccional se caracteriza por un constitucionalismo multinivel.*

*En este sentido, existe una tendencia en el ámbito constitucional y convencional que ha reconocido el acceso a internet como un derecho fundamental, lo cual responde a un cambio de paradigma que han potenciado las tecnologías de la información y comunicación.*

*Los avances científicos y tecnológicos presentes en un mundo globalizado como el que caracteriza nuestra sociedad ha tenido un impacto en los derechos fundamentales. El surgimiento de nuevas tecnologías como internet que han permitido la utilización del correo electrónico, las redes sociales y la firma digital son manifestaciones que han influido en los derechos fundamentales pues han cambiado el ejercicio de derechos como acceso a la información, libertad de asociación, libertad de expresión y pensamiento, el derecho a la educación, la salud, pero a la vez han incidido o hecho más vulnerable el derecho a la intimidad o privacidad de las personas. Las tecnologías representan o continúan a representar, un desarrollo de las libertades; más bien, las libertades han podido crecer y ampliarse significativamente hacia nuevas fronteras de la actuación humana propia gracias al progreso tecnológico. Efectivamente, las nuevas tecnologías no solo producen libertad, por así decirlo: la tecnología puede estar al servicio del hombre bueno o malo, del gobernante iluminado o déspota; en un Estado Constitucional liberal, pero la dirección política debería siempre dirigirse a intervenciones que valoricen y acrecienten la libertad del individuo, y la utilización de las nuevas tecnologías no puede ser instrumental a este objetivo.*

*La expresión «nuovo diritto» o «nuovi diritti umani» es de uso reciente y denota sea más allá de una taxonomía rigurosa, los derechos individuales y los derechos colectivos que durante las últimas décadas del siglo XX fueron social y políticamente reivindicados y que obtuvieron, en diferentes formas, el reconocimiento público en el ámbito de las estructuras políticas occidentales.*

*Con esta expresión se pretende hacer referencia a uno de los más relevantes fenómenos destacados por el ordenamiento jurídico en las últimas décadas, como manifestación del principio pluralista. Este fenómeno consiste en el reconocimiento y tutela que se lleva a cabo en los ordenamientos de situaciones jurídicas subjetivas no codificadas en el derecho positivo, en estrecho ligamen con las exigencias de responder a los nuevos “desafíos universales”, o sea, los nuevos grupos de interés que asumen de hecho relevancia, marcan la evolución de la conciencia social, del progreso científico y tecnológico y de las propias transformaciones culturales.*

*En este sentido, son derechos que están relacionados con intereses difusos o colectivos de la sociedad como por ejemplo el derecho a la paz, la protección del medio ambiente, los derechos del consumidor, así como con temas relacionados como los avances científicos.*

*El concepto de nuevo derecho aparece ciertamente sugestivo, evocando inmediatamente aquella característica típica de los derechos constitucionales de ser al centro de un progreso histórico evolutivo, sin una solución de continuidad, que lleva a una constante actualización y una continua redefinición de su catálogo y del contenido de cada uno de ellos.*

*De hecho, la naturaleza cambiante de la materia hace que en relación a la incorporación de los derechos no se puede decir que llegó a un punto definitivo, más bien, la aparición constante de nuevos y diferentes casos requieren una actualización en curso del catálogo constitucional. Se trata de fenómenos evolutivos que contradicen la idea de que los derechos humanos sean un complejo normativo cumplido, estático e universal.*

*(…)*

*En efecto cada usuario es libre de aportar su propia contribución en el espacio virtual, participando en su ampliación e intensificando así el intercambio de conocimiento e informaciones. En el ámbito de doctrina el internet puede ser analizado (al menos) desde tres planos: el primero de ellos es el acceso a la red, que constituye un prius lógico respecto de los otros dos: el ejercicio de las libertades y derechos en la red y la governance de internet.*

*La presente iniciativa se centra sobre el derecho de acceso a internet, el cual debe considerarse un derecho social, o más bien una pretensión subjetiva que debe ser satisfecha con prestaciones públicas, al igual que el derecho a la educación, de la salud y providencia social. Un servicio universal que las instituciones nacionales deben garantizar a sus ciudadanos a través de inversiones estatales, políticas, sociales y educativas, elecciones de gasto público.*

*Lo anterior, toda vez que el acceso a la red de internet y el desarrollo de esa actividad constituye el modo en el cual el sujeto se relaciona con los poderes públicos, y por lo tanto, ejerce sus derechos. El uso de internet se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para la*

*libertad de expresión y para el acceso a la información. Más que una posibilidad de comunicación se está convirtiendo en una necesidad debido al periodo de globalización que hoy se vive.*

*En este sentido, los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres. En el ámbito normativo encontramos una serie de antecedentes normativos que Al respecto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el artículo 21 inciso c) dispone: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan: c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso.*

*Por otra parte, en el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo en la resolución del 18 de abril del 2008 determinó que: Internet es una vasta plataforma para la expresión cultural, el acceso al conocimiento y a la participación democrática en la creatividad europea, que crea puentes entre generaciones en la sociedad de la información, y consecuentemente, es importante evitar la adopción de medidas contrarias con los derechos civiles, los derechos humanos y con los principios de proporcionalidad, eficacia y disuasión, como la interrupción del acceso a internet, reconocieron la influencia del internet en el ámbito de los derechos fundamentales.*

*Además, encontramos una serie de sentencias que han reconocido una especial protección al acceso a internet a través de un “activism”, en particular por giurisdizioni costituzionali que han sido pioneras en la materia. Al respecto, el Consejo Constitucional Francés en la histórica sentencia No. 2009- 580 DC de 10 de junio de 2009 reconoció como un derecho básico el acceso a internet, al desprenderlo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que tutela la libre comunicación de pensamientos y opiniones.*

*Posteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en la sentencia número 12790- 2010 fue más allá, reconociendo el acceso a internet como un derecho fundamental. En el ámbito legal encontramos como en Finlandia se aprobó una ley que entró en vigor el 1 de julio del 2010 que reconoció el acceso a internet como un derecho.*

*En el mismo sentido, nuestra Constitución Federal en el párrafo cuarto del artículo 6to reconoce el derecho de acceso al internet de la siguiente manera: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Así, el acceso al derecho fundamental al internet tiene una serie de principios orientadores dentro de los que se destaca: 1. Acceso; 2. Pluralismo; 3. No discriminación. 4. Privacidad. La accesibilidad impone cuanto menos tres tipos de medidas: las medidas positivas de inclusión, o cierre de la brecha digital; los esfuerzos de desarrollar planes para asegurar que la infraestructura y los servicios tiendan a garantizar, progresivamente, el acceso universal; así como medidas para prohibir el bloqueo o la limitación al acceso de internet o a parte de esta.*

*La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2011 declaró el acceso a internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. En este sentido, en el informe denominado tendencias claves y los desafíos que enfrenta el acceso a internet como derecho universal, el relator especial en la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas lo anterior, al considerarse que el Internet es uno de los instrumentos más poderosos del siglo XXI para exigir más transparencia en la conducta a quienes ejercen el poder, acceder a información y facilitar la participación ciudadana activa en la forja de sociedades democráticas.*

*Pocas apariciones de nuevas tecnologías de la información, por no decir ninguna, han tenido un efecto tan revolucionario como la creación de Internet. A diferencia de cualquier otro medio de comunicación, como la radio, la televisión y la imprenta, todos ellos basados en una transmisión unidireccional de información, Internet representa un gran avance como medio interactivo. De hecho, con la llegada de los servicios Web 2.0, integrados por plataformas de intermediación que facilitan el intercambio participativo de información y la colaboración en la creación de contenidos, los usuarios han dejado de ser receptores pasivos para convertirse en generadores activos de información.*

*En un plano más general, al permitir el intercambio instantáneo de información e ideas a bajo costo a través de las fronteras nacionales, Internet facilita el acceso a información y conocimientos que antes no se podían obtener, lo cual, a su vez contribuye al descubrimiento de la verdad y al progreso de la sociedad en su conjunto. De hecho, Internet ha pasado a ser un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.*

*Los enormes beneficios y posibilidades de Internet se fundan en sus características singulares, como su velocidad, su alcance mundial y su relativo anonimato. A la vez, estos rasgos distintivos de Internet, que permiten a las personas difundir información "en tiempo real" y movilizar a las personas, también han suscitado temor en los gobiernos y los poderosos, con lo cual han aumentado las restricciones impuestas a Internet mediante el uso de tecnologías cada vez más avanzadas para bloquear contenidos, vigilar y detectar a activistas y críticos, tipificar como delito la expresión legítima de opiniones y adoptar legislación restrictiva para justificar esas medidas.*

*En vista de que Internet se ha convertido en un instrumento indispensable para ejercer diversos derechos humanos, luchar contra la desigualdad y acelerar el desarrollo y el progreso humano, la meta del acceso universal a Internet ha de ser prioritaria para todos los Estados.*

*(…)*

*De ser aprobada, la presente iniciativa tendrá los siguientes impactos de*

*conformidad con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato:*

*I. Impacto jurídico: Se adiciona un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en materia del reconocimiento del derecho fundamental de acceso al internet.*

*II. Impacto administrativo: Tocante a este aspecto, el impacto administrativo que se observa, habrá de impactar en las políticas públicas que una vez que se reconozca el derecho fundamental de acceso al internet en la Constitución Local del Estado de Guanajuato, se tengan que implementar por parte de todas las autoridades de este Estado.*

*III. Impacto presupuestario: A primera vista, el reconocimiento del derecho fundamental de acceso al internet no tiene un impacto presupuestario, sin embargo, una vez que se lleve a cabo el referido reconocimiento habrá de impactar en las políticas públicas que al efecto las autoridades estatales deban establecer para garantizar su efectividad, todo ello a la luz del principio de progresividad de los derechos, es decir, bajo la utilización del máximo de los recursos disponibles.*

*IV. Impacto social: Se contribuye a dar acceso a toda la población del Estado de Guanajuato a las herramientas tecnológicas que se han vuelto indispensables y que han impregnado todas las actividades que se desarrollan.»*

Quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, consideramos oportuno realizar un análisis general de los tópicos propuestos, y emitir los comentarios de carácter general al respecto, a efecto de hacer una valorización y considerar la viabilidad de las propuestas contenidas en las iniciativas que se dictaminan.

En ese sentido, por un lado, con respecto a la primera propuesta es importante referir que implementar el *Gobierno Digital en Guanajuato* como lo aluden los iniciantes, dentro del alcance al cual consideran impactar permitirá conducir la administración pública de forma moderna, eficiente, eficaz y transparente en todas las instituciones del sector público, y contribuir al crecimiento y desarrollo del Estado, mediante el uso estratégico de las tecnologías.

Las y los iniciantes buscan *con la propuesta* dar respuesta a las demandas ciudadanas que exigen más y mejores servicios a un ritmo más rápido, es por ello que esta propuesta se centra en beneficiar a la ciudadanía, generando un gobierno más cercano, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No dejamos de lado el hecho de que este ejercicio se fundamenta en el principio de *Parlamento Abierto*.

Con respecto al segundo tema, que refiere a incorporar como *derecho humano al internet*, consideramos que la aparición constante de nuevos y diferentes casos requieren una actualización en curso del catálogo constitucional. Se trata de fenómenos evolutivos que contradicen la idea de que los derechos humanos sean un complejo normativo cumplido, estático e universal.

En este sentido, coincidimos con las y los iniciantes en que el surgimiento de nuevos derechos se debe a varios factores: el fenómeno de la globalización económica y política; los avances científicos y tecnológicos; la internacionalización de los derechos humanos y de garantías para su tutela, lo cual ha dejado de ser un asunto de competencia exclusiva de los Estados y, la existencia de problemáticas comunes.

En esa clasificación, coincidimos de igual manera en que el acceso a internet se puede enmarcar dentro de la segunda categoría, pues si bien ha obtenido un reconocimiento normativo a nivel constitucional y convencional cada vez mayor- presenta grandes retos en cuanto a su accesibilidad e universalidad. Entre los instrumentos que han contribuido a la evolución de nuestra sociedad, el internet ha sido uno de los principales: ha revolucionado la modalidad de comunicación y ha influenciado la economía, la política y el derecho. Es considerado como un *open network*, siempre actualizado y carente de medicaciones u obstáculos espaciales o temporales, y sobre todo, no sujeto a formas de propiedad.

III.1. El internet como derecho humano y gobierno digital como principio

Sabemos que la *Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet emitida por la Organización de los Estados Americanos[[70]](#footnote-70)*, de manera particular en el punto 6 relativo al Acceso al Internet, incisos a, e y f, en los que se desarrollan acciones en concreto por parte de los Estados para asegurar el ejercicio pleno a este derecho, la cual señala:

*a. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.*

*e. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet Como mínimo, los Estados deberían:*

*f. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.*

La *Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet emitida por la Organización de los Estados Americanos* establece que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, estipula que el acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres. El plexo fue adoptado el 1 de junio de 2011 por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).

Lo anterior resulta necesario observar para las autoridades, como un punto de partida para que el Estado garantice el acceso universal del derecho. Estamos conscientes que la primera acción relativa a mecanismos regulatorios, prevista en el inciso e, numeral i, del apartado 6, de esa declaración escapa a la competencia de las entidades federativas; sin embargo, por lo que hace a las demás acciones previstas en los numerales subsecuentes ii, iii y iv, consideramos son acordes al Sistema Jurídico Mexicano al no existir disposición que determine la exclusividad por parte de la federación, por lo que pueden ser adoptadas como herramientas de política pública en el estado de Guanajuato.

Coincidimos en que los avances tecnológicos plantean retos en el ámbito del derecho constitucional, por lo que no es posible circunscribir la competencia únicamente a una esfera de gobierno, de ahí que el Estado Mexicano como autoridad garante, deberá realizar acciones en el ámbito federal y de manera coordinada con las entidades federativas. Ello queda patente en el *Informe Anual de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos de 2013, que contiene el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión*[[71]](#footnote-71) y de manera particular en lo establecido en el punto 39, que señala:

*La Relatoría Especial considera importante que las autoridades realicen esfuerzos para cerrar progresivamente la brecha digital, ampliamente reconocida por los Estados, ya sea en función de la riqueza, el género, las demarcaciones geográficas o grupos sociales, entre Estados y dentro de los mismos*. Asimismo, el concepto de *brecha digital* no solamente está relacionada con la disponibilidad del acceso a Internet, sino también con la calidad, la información y los conocimientos técnicos necesarios para que el acceso a Internet sea útil y provechoso para los usuarios. De esta manera, para alcanzar efectivamente el objetivo mencionado, la Relatoría Especial considera importante que los Estados adopten políticas y estrategias eficaces y concretas, elaboradas en consulta con personas y organizaciones de todos los sectores de la sociedad.

Así también en lo previsto en el punto 45 del mismo instrumento, que refiere: *Ahora bien, un segundo tipo de medidas que se deriva del derecho universal de acceso se refiere a la necesidad de adoptar planes de acción detallados de varios años de duración a fin de que Internet resulte ampliamente disponible, accesible y asequible. En este sentido, los Estados deben adoptar y promover las políticas públicas necesarias para generar la infraestructura de acceso universal que permita la construcción de una sociedad del conocimiento, evitando, como se ha mencionado, situaciones arbitrarias de exclusión social.* *Como se ha indicado en varios foros multilaterales, esto incluye la elaboración de planes nacionales de banda ancha y la promoción de la incorporación.*

En este apartado es importante referir a otros instrumentos normativos y documentos que han abordado la cuestión sobre el acceso al internet como derecho y su relación con los derechos humanos, es la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*[[72]](#footnote-72), señala: *Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados Parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia v cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiado.*

El *Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*[[73]](#footnote-73) (Protocolo de San Salvador), dispone: *Artículo 14. Derecho a los beneficios de la cultura. Los Estados Parte en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: participar en la vida cultural y artística de la comunidad; Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico: Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que Je correspondan por razón de las producciones científicas. literarias o artísticas de que sea autora.*

Entre las medidas que los Estados Parte en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte, y se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

Por otro lado, en la *Declaración Conjunta: Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década*[[74]](#footnote-74), se señala en el apartado 2: Consolidar una Internet libre. abierta e inclusiva. El ejercicio de la libertad de expresión requiere de una infraestructura digital que sea robusta, universal y cuya regulación garantice que permanezca siendo un espacio libre, accesible y abierto para todas las partes interesadas. Y, en los próximos años, los Estados y otros actores deben reconocer el derecho al acceso v el uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

De igual manera, los artículos 9.2 y 21 de la *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*[[75]](#footnote-75), disponen que los Estados parte adoptarán las medidas apropiadas para promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, en particular Internet. En el año 2013, México reconoció el derecho de acceso a Internet en el artículo sexto constitucional.

Sabemos que la adición al tercer párrafo fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013*[[76]](#footnote-76), y en el artículo décimo cuarto transitorio se atribuyó al Poder Ejecutivo Federal la política de inclusión digital universal, la cual debe incluir: *los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales*.

Por otro lado, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las Entidades federativas cuentan con la facultad para regular derechos humanos en sus normas constitucionales locales, toda vez que es congruente con los fines del federalismo; es decir, los derechos humanos son una responsabilidad compartida entre todos los poderes públicos del país, por ser una materia de materias, por lo que las normas fundamentales a nivel local se basan en la pretensión de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lo cual se logra entre otras cosas, mediante la ampliación del régimen de derechos de las personas que viven en su territorio, para hacer que respondan a las particularidades de cada entidad federativa, satisfagan necesidades particulares de sus colectividades y faciliten sus condiciones de ejercicio, situación con la cual coincidimos plenamente.

Por tal motivo, por referir un ejemplo de esa progresividad en otras normas con igual jerarquía en los estados está el contenido en la resolución del 6 de septiembre de 2018, donde se validó la constitucionalidad del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en el que se establece el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, entre lo que se menciona al internet.

Con los argumentos esgrimidos hasta este punto, se considera que el acceso al internet además de garantizar el ejercicio de múltiples derechos fundamentales también puede válidamente considerarse un derecho en sí mismo, por ello autónomo y susceptible de ser reconocido en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.

Por lo anterior, compartimos *como dictaminadores el hecho de generar* propuestas que busquen fortalecer el marco constitucional y legal relacionado con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, máxime si el derecho humano al internet ya se contempla como tal en la Constitución Federal del Estado de Guanajuato.

En consecuencia, las diputadas y los diputados consideramos que el Estado debe elaborar una política eficaz y concreta a fin de que *Internet* resulte ampliamente disponible, accesible y asequible para todos los sectores de la población. Y, en cumplimiento a ese mandato constitucional de respeto, protección y garantía del derecho fundamental al internet por parte de este Poder Legislativo, dentro de nuestra función principal es llevar a cabo su reconocimiento en nuestro Código Político Local, el cual, tiene la posibilidad de establecer un parámetro de constitucionalidad local que incluya no solo los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales, sino establecer el reconocimiento de nuevos derechos, como lo es el acceso al internet, pues dicho reconocimiento se realiza bajo la armonización y respeto del alcance de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a todo lo anterior, podemos afirmar que resulta necesario la pertinencia de la reforma que se dictamina *mediante una adición al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato* a efecto de reconocer el derecho fundamental de acceso al internet, pues es aquí donde se encuentran reconocidos por nuestro Estado, de manera interdependiente, los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales.

Es importante resaltar que, evidentemente, el reconocer un nuevo derecho, implica la obligación del Estado de hacerlo efectivo, y al tratarse de un derecho de vital importancia para la sociedad guanajuatense, el derecho de acceso al internet, podrá ser cumplido a la luz del principio de progresividad de los derechos, es decir, de conformidad con los recursos disponibles en favor de las y los guanajuatenses.

Consideramos pues que el *Internet* se ha convertido en un instrumento indispensable para ejercer diversos derechos humanos, luchar contra la desigualdad y acelerar el desarrollo y el progreso humanos, la meta del acceso universal a *Internet* debe ser prioritaria para todos los Estados. En consecuencia, se debe elaborar una política eficaz y concreta en consulta con personas de todos los sectores de la sociedad, a fin de que éste resulte ampliamente disponible, accesible y asequible para todos los sectores de la población.

Con respecto a la propuesta de incluir al *Gobierno Digital* como un principio dentro de nuestra Constitución Política Local, es menester referir que la estrategia del *Gobierno Digital* tiene como objetivo aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas.

En los últimos años, la modernización de la administración pública se ha apoyado de manera importante en la incorporación de tecnologías de la información y comunicación *TIC’s* a los procesos y servicios gubernamentales. En México la estrategia para el desarrollo del *e-gobierno* ha evolucionado hasta convertirse en un pilar importante para la reforma administrativa del gobierno.

El *Gobierno Digital,* conocido como *e-Gobierno*, es un componente del Sistema Nacional *e-México*, que promueve el uso intensivo de sistemas digitales, en especial de Internet, como la herramienta principal de trabajo de las unidades que conforman la Administración Pública Federal, a través de líneas de acción, entre las que destacan: Instalación y aprovechamiento de *infraestructura tecnológica gubernamental*[[77]](#footnote-77), uso intensivo de redes de intranet gubernamental e Internet, para mantener integrada la actividad del sector público en todas las dependencias y entidades de la administración pública, e imprimir mayor precisión y oportunidad a la gestión de los servidores públicos. Promoción y aplicación de la administración del conocimiento y la colaboración digital, mediante sistemas y esquemas tecnológicos para adquirir, organizar y comunicar el conocimiento en la Administración Pública Federal en sus distintas etapas, tales como aprendizaje, colaboración, evaluación y toma de decisiones. Mejora y rediseño de procesos con tecnologías de información, para desarrollar, actualizar y consolidar los sistemas informáticos, así como para facilitar la actualización informática de los procesos que operan las tareas adjetivas y sustantivas de las instituciones públicas.

De igual forma, se engloba dentro de este ejercicio la mayor cobertura de los servicios y trámites electrónicos *e-Servicios* del Gobierno Federal, para ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder a éstos a través de medios electrónicos con seguridad y rapidez. Consolidación del Portal Ciudadano del Gobierno Federal, el cual se ha convertido en el eslabón para la creación de cadenas de valor y en un medio eficiente para la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Con este portal la ciudadanía puede consultar a través de Internet toda la información sobre productos, servicios y trámites; el portal representa a su vez un vínculo de comunicación e interacción entre el gobierno y la ciudadanía, las empresas del sector privado y entre las distintas instancias gubernamentales.

Ampliación de mecanismos como *e-Democracia* y participación ciudadana, para continuar aplicando y desarrollando esquemas tecnológicos de planeación, participación y atención a la población, así como espacios en línea que identifiquen y recojan los planteamientos, problemas, necesidades y propuestas de la ciudadanía, facilitando su seguimiento mediante sistemas de administración de las relaciones con ciudadanos y coordinar las tareas para el desarrollo y consolidación de las acciones del *Gobierno Digital* en México.

En la actualidad existe un gran número de definiciones de gobierno electrónico. El espectro va desde conceptualizaciones que presentan al gobierno electrónico únicamente como la provisión de servicios públicos mediante aplicaciones en Internet hasta definiciones que caracterizan al gobierno electrónico como el uso de cualquier tecnología de información o comunicación en el gobierno -*Gil-García & Luna-Reyes, 2003-*.

En los términos más simples, *e-gobierno* *es gobierno electrónico, o el uso de tecnología digital en la administración y prestación de servicios públicos, predominantemente a través de Internet* -Edmiston, 2003/20-. Definimos *e-gobierno* *simplemente como la prestación de servicios e información gubernamental de forma electrónica, 24 horas al día, los siete días de las semana* -Holden, Norris, & Fletcher, 2003/327-. En otro concepto *E-gobierno*, *es una palabra que se refiere al uso de Internet por el gobierno para la provisión de servicios, recolección de datos y la mejora de procesos democráticos, se ha convertido en la innovación tecnológica del momento* -Bretschneider, 2003:738-.

Partiendo del análisis de las definiciones y componentes encontrados en la literatura existente, en este apartado se argumenta que el fenómeno *gobierno electrónico* es multidimensional y por tanto es necesario conceptualizarlo como una amalgama de elementos y aplicaciones interrelacionados, los cuales no necesariamente tienen los mismos objetivos, prioridades. Basados en la revisión y de forma similar a Gil-García y Luna-Reyes (2006), se sugiere que los componentes principales de esta definición multidimensional deben ser: servicios electrónicos *e-services*, gerencia electrónica *e-management*, democracia electrónica *e-democracy*, y políticas públicas electrónicas *e-policy*. Por tanto, una definición de gobierno electrónico que pueda ser utilizada para entender y medir este fenómeno de forma clara y sistemática debe considerar al menos los cuatro elementos mencionados anteriormente. De forma adicional, para que una definición de gobierno electrónico sea realmente útil debe tener bases teóricas sólidas, pero al mismo tiempo debe tener relevancia práctica.

No podemos dejar de referir la importancia de este principio a nivel nacional, pues los avances en la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones en el *Gobierno Digital* de México se han reflejado en una mejor posición de éste en el contexto internacional. En diciembre de 2005 los resultados del *Reporte Global sobre Aptitud de e-Gobierno 2005*, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas, ubicó a México en el sitio 31 de entre 191 países evaluados. Este Reporte colocó a México en el décimo primer lugar en materia de sofisticación y madurez de servicios gubernamentales en línea; en el sexto lugar en *e-participación*, y reconoció a nuestro país como una de las 10 naciones que ha progresado de manera más efectiva y rápida en sus estrategias de *e-Gobierno*.

En ese sentido, uno de los principales resultados potenciales del gobierno electrónico o digital *y que coincidimos es la base de este dictamen, es* que se ha identificado en estudios el mejoramiento de la calidad en los servicios públicos[[78]](#footnote-78). Esto no sólo se refiere a la conveniencia de tener acceso a información y servicios gubernamentales veinticuatro horas del día los siete días de la semana, sino también al mejoramiento substancial de los productos, procesos y atención a los ciudadanos.

Coincidimos con las y los proponentes en que el *e-gobierno*[[79]](#footnote-79) tiene como objetivo incrementar la eficiencia, la transparencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos y organizaciones, así como lograr un gobierno competitivo que contribuya a alcanzar las metas de crecimiento económico y desarrollo social. El uso de las *TIC´s* en el gobierno también tiene el potencial de transformar sus relaciones con los ciudadanos, las empresas y otras áreas del mismo gobierno[[80]](#footnote-80)

Sin embargo, la transformación del gobierno mediante el uso de *TIC’s* [[81]](#footnote-81)requiere de cambios institucionales y organizacionales complejos y no simplemente de la adquisición de hardware y software. En la construcción del *e- gobierno* se deben considerar diversos niveles y elementos. Una implementación exitosa del gobierno electrónico o digital debe asegurar el acceso de toda la población, a la información, uso y aprovechamiento de los diversos servicios públicos que ofrece el gobierno[[82]](#footnote-82). Los verdaderos beneficios del *e-gobierno* no están únicamente en el uso de la tecnología, sino en su correcta aplicación a los procesos gubernamentales y a la generación de valor para los ciudadanos, las empresas y otros grupos de la sociedad.[[83]](#footnote-83)

En México, la implementación de proyectos de *e-gobierno* como parte de los procesos de reforma y modernización de la administración pública se intensificó desde hace ya diversas administraciones y la estrategia ha requerido tanto la construcción y adquisición de infraestructura física como la creación y modificación de estructuras institucionales y organizacionales.[[84]](#footnote-84)

Actualmente, con distintos niveles de avance, la población puede acceder a información y servicios en línea tales como la declaración fiscal, solicitud de permisos y licencias, pasaportes, búsqueda de empleo y solicitud de una cita médica, entre otros. La computadora, propia o situada en lugares públicos *gubernamentales o privados*, se está convirtiendo en una ventanilla más de atención a los ciudadanos.

Sin embargo, muchas de estas acciones se refieren a servicios en línea y falta avanzar en otros temas de gran importancia, entre los que destacan una mayor interacción con los usuarios y la cooperación entre dependencias y niveles de gobierno para brindar servicios más integrados, de ahí la necesidad de ir avanzando en este principio desde nuestra Constitución Política Local, este ejercicio de inclusión busca además de armonizar con los principios constitucionales a nivel federal, generar el piso constitucional que será la base de las reformas legales que den lugar a una implementación de manera gradual y acorde a las necesidades y recursos de cada poder del Estado y los municipios tengan a su alcance, sin dejar de lado la previsión presupuestal de manera progresiva y la planeación como acciones principales en beneficio de las y los guanajuatenses.

La estrategia de gobierno electrónico o digital incluye los ámbitos locales y estatales pues se considera un medio para que todos los mexicanos y en especial las y los guanajuatenses ejerzan su derecho a estar informados y acceder a los servicios que ofrece el gobierno en todos sus niveles, federal, regional, estatal y municipal.

Quienes dictaminamos, consideramos que la estrategia a mediano y largo plazo será fundamental en el éxito de esta reforma, al incluir como un derecho el acceso al internet y como un principio al Gobierno abierto en beneficio de los ciudadanos fortaleciendo las funciones y servicios de la Administración Pública estatal y municipal, principalmente.

III.2. Análisis de las propuestas *y su inclusión de manera expresa en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato*

Tenemos claro quienes dictaminamos y coincidimos con el autor *Miguel Carbonell en que el* Internet es el tejido de nuestras vidas. Si la tecnología de información es el equivalente histórico de lo que supuso la electricidad en la era industrial, en nuestra era podríamos comparar Internet con la red eléctrica y el motor eléctrico, dada su capacidad para distribuir el poder de la información por todos los ámbitos de la actividad humana. Es más, al igual que las nuevas tecnologías de generación y distribución de energía permitieron que la fábrica y la gran empresa se establecieran como las bases organizativas de la sociedad industrial, Internet constituye actualmente la base de la tecnología de forma organizativa que caracteriza la era de la información.[[85]](#footnote-85)

De ahí que el acceso a Internet permite el ejercicio de las libertades de forma mucho más asequible. A través de los múltiples sistemas de comunicación que coexisten en su seno –como podrían ser las redes sociales, los blogs, los foros virtuales de discusión-, facilita la libertad de expresión; y de asociación; permite compartir el conocimiento y el aprendizaje; potencia la colaboración entre personas, universidades o empresas de todo el mundo, e impulsa el desarrollo social y económico.

El uso de Internet además implica que se facilite notablemente el ejercicio de diversos derechos reconocidos en la propia Constitución Política de nuestro país, entre ellos el de la educación, la cultura, el acceso a la información pública o la libertad de expresión.[[86]](#footnote-86)

Es fundamental tener como punto de partida en todo este análisis que el derecho al acceso de internet se ha señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

*Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será…*

*(…)*

*El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.*

*LO RESALTADO ES NUESTRO.*

La teleología del legislador federal al reformar el artículo 6 Constitucional, en materia de radiodifusión y telecomunicación fue en su momento que el Estado como ente rector tenga la obligación de vigilar, y más aún, la de garantizar una política para satisfacer las necesidades de información y conocimiento, con perspectiva a largo plazo, a fin de que toda la población de nuestra nación se encuentre inmersa en la era digital. Esa reforma constitucional, obliga al Estado a garantizar a sus ciudadanos la integración a la sociedad de la información y el conocimiento, con la posibilidad de llegar a más personas, propiciando las condiciones para que se les brinden los servicios de calidad a bajo costo.

Quienes conformamos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estamos ciertos en que la propuesta de adición del derecho al internet, se pretende dar, con la intención de armonizar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato con la reforma en materia de telecomunicación que ha realizado el Congreso Constituyente, en la cual se puede afirmar que el derecho de acceso a internet es interdependiente con el derecho humano a la información, a la privacidad, protección de datos personales y libertad de expresión y con lo cual coincidimos.

El Internet ha pasado a ser una herramienta fundamental para las personas y el Estado está obligado a asegurar todas las medidas necesarias para que los particulares tengan acceso a esta y puedan allegarse de todo el vasto conocimiento con el que cuenta la red y así traer progreso a la sociedad.

Con este alcance, quienes dictaminamos creemos que en la actualidad los programas presupuestarios de la federación y de las entidades federativas deben estar diseñados para responder a las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos, razón por la que las autoridades en el ciclo presupuestal y el ejercicio del gasto deberán incorporar de manera progresiva y secuencial a favor de una visión de derechos humanos como eje y objetivo final de la acción gubernamental para protegerlos y garantizarlos.

En lo correspondiente al tema de Gobierno digital, podemos manifestar que, la globalización se ha desarrollado a través de cuatro grandes vías que se relacionan entre sí: la industria, el comercio, la banca y la informática. Precisamente, esta última, la revolución de las tecnologías de la información y comunicación ha dado paso a una sociedad que se organiza y trabaja en red, lo que está obligando a las instituciones y a los demás sectores de la economía a transformarse.

Por lo anterior, hoy más que nunca los gobiernos dependen de la capacidad de acceder, compartir y actuar con base en información vital, que debe llegar a todas las funciones, organismos y áreas geográficas. Los gobiernos requieren fomentar soluciones que brinden un acceso seguro y sin fisuras a la información y a las aplicaciones a fin de responder eficazmente en la prestación de los servicios socialmente necesarios.[[87]](#footnote-87)

El 25 de septiembre del año 2015, con motivo de la *Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible*[[88]](#footnote-88) celebrada en la ciudad de Nueva York, más de 190 países, entre ellos México, aprobaron el documento que lleva por Título *Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.* En él, se incluyen diecisiete objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuya finalidad es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia, educación de calidad, industria, innovación e infraestructura, mediante metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 de la Agenda 2030, está centrado en *construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación* e incluye entre sus metas *aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a internet en los países menos adelantados de aquí a 2020*.

Por lo anterior, el servicio público debe conducirse de acuerdo a políticas tendientes a eficientar y simplificar la administración gubernamental, tomando en consideración que, los cambios originados por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones han tenido un impacto en diversos aspectos de nuestra sociedad. Así, el gobierno electrónico es un servicio digital que presta el Estado a la ciudadanía con el propósito de mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en el ejercicio gubernamental, renovando sus procesos y procedimientos con respecto a la calidad de los servicios públicos, facilitando la armonía y la coordinación entre las distintas instancias de gobierno.

Con esas acciones, las y los ciudadanos son los principales beneficiarios de los servicios electrónicos y de los contenidos en los sitios de Internet de las instituciones de gobierno electrónico, pues hacen posible realizar trámites a través de herramientas informáticas *computadoras, redes, Internet, móviles, dispositivos portátiles, etcétera* en el correcto ejercicio de sus derechos y obligaciones. También, se da un mejoramiento de la calidad y atención a los ciudadanos, a quienes se provee de servicios y acceso a la información gubernamental, definiendo estrategias de transparencia y eficiencia en la gestión; además, de incrementar la eficacia y la eficiencia en dichos procesos, haciéndolos más ágiles, accesibles y transparentes.

Destacar en este análisis que, de conformidad con la *Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del INEGI*[[89]](#footnote-89), se identificó que a nivel nacional, el 32.4% de la población mayor de 18 años tuvo al menos una interacción con el gobierno a través de Internet y que dentro de los problemas para realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, del total de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos realizados por los usuarios, en 48.1% de ellos se presentó algún tipo de problema para realizarlo, de estos problemas, el más frecuente fue el de barreras al trámite con 85.1 por ciento y el más bajo fue por problemas con las TIC con un 5.9%.

En ese sentido, uno de los retos es mejorar la cobertura de los servicios a la ciudadanía, e incentivar el uso de las tecnologías de la información, en aras de tornar más funcional, dinámica y eficiente, la interacción con los ciudadanos conforme a los modelos de administración pública modernos, con una amplia garantía de calidad en la atención a las demandas ciudadanas.

La importancia de esta propuesta también viene a reforzar las estrategias de Gobierno del Estado, tal como lo prevé la actualización del *Programa de Gobierno 2018-2024*[[90]](#footnote-90) en su Estrategia 5.5.2: *Fortalecimiento de la infraestructura para la conectividad digital del estado,* cuyas líneas de acción son: *1. Implementar el modelo de infraestructura de conectividad digital estatal. 2. Ampliar la infraestructura de conectividad para llevar internet a comunidades rurales en el estado. 3. Promover el uso compartido de infraestructura de conectividad digital instalada en el estado para su mejor aprovechamiento. 4. Impulsar la gestión y el desarrollo de la conectividad digital en el estado.*

A su vez el *Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040[[91]](#footnote-91),* en la dimensión economía, establece: *Estrategia 2.5.1.6. Incremento de la cobertura y la accesibilidad de los servicios de internet, para incrementar la inclusión digital. Líneas de acción 1. Impulsar la participación de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento. 2. Intensificar la enseñanza de informativa educativa a lo largo de los niveles educativos, de manera que los estudiantes desarrollen capacidades de aprender mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 3. Equipar la infraestructura de tecnologías de información y comunicación en los centros poblacionales. 4. Incrementar la calidad de infraestructura y acceso a servicios de internet*.

En ese apartado, consideramos importante que la entidad cuente con las disposiciones generales para la consolidación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a fin de fomentar la inclusión digital en el estado, mejorar la experiencia del ciudadano en su relación con el Gobierno e incrementar la eficiencia, eficacia y transparencia en el desenvolvimiento de la gestión pública.

IV. Modificaciones a las iniciativas

Las y los legisladores que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, estimamos necesario hacer ajustes a una de las propuestas para atender las observaciones de las mesas de trabajo, así como a las aportaciones de las diputadas y los diputados, que conforman la Sexagésima Quinta Legislatura y de quienes participaron activamente en el análisis como los representantes del Poder Ejecutivo, de los organismos autónomos reconocidos constitucionalmente y por ley, del Ayuntamiento de León, Guanajuato, así como las áreas institucionales del Congreso del Estado.

Con respecto a la iniciativa referente al derecho humano del internet, se proponía la siguiente porción normativa: *Toda persona tiene derecho a disfrutar del acceso al internet. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.*

Sin embargo, acordamos eliminar el alcance del siguiente supuesto: *La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.* Lo anterior a efecto de atender lo establecido en el artículo 73, fracción XVll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, *incluida la banda ancha e Internet*, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. Por lo cual, de considerar esta porción normativa en el dictamen se estaría legislando bajo una competencia que no le corresponde a este Poder Legislativo, a través de su Asamblea conforme lo establece el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, dado el reconocimiento del derecho humano de acceso al internet y presupuestario directo por los efectos de esta reforma, toda vez que la obligación prestacional ya la tienen los Estados y municipios, desde el año de 2013, es decir, el derecho de acceso al internet se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 6º, cuarto párrafo en el que se dispone que *el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet*. En ese sentido, el acceso al internet forma parte del bloque de derechos fundamentales que deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad por todas las entidades federativas. Sin embargo, una vez que se lleve a cabo el referido reconocimiento local habrá de impactar en las políticas públicas del ejercicio vertical y horizontal del poder público, que a la fecha están en proceso de cumplimiento.

Por ello, las autoridades estatales y municipales, que deban continuar con acciones para garantizar su efectividad de los particulares y de igual forma el principio de Gobierno digital, todo ello, como todos los derechos prestacionales, incorporar que se realice a la luz del principio de progresividad, pues, las realidades de los sujetos obligados son diferentes, es decir, bajo la utilización del máximo de los recursos disponibles. Se propuso la incorporación de un segundo artículo transitorio en los siguientes términos:

*Artículo segundo. Los poderes públicos del estado y los municipios deberán destinar, de manera progresiva y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, los recursos que permitan cumplir con las disposiciones del presente decreto.*

Importante comentar el tema presupuestario de esta reforma, sabemos que una vez que se lleve a cabo el reconocimiento y desarrollo de la misma habrá de impactar en las políticas públicas que al efecto las autoridades estatales y municipales deban establecer para garantizar su efectividad, a la luz del principio de progresividad de los derechos, y a mediano y largo plazo es decir, bajo la utilización del máximo de los recursos disponibles y atendiendo a una planeación organizada, tomando como punto de partida los recursos y tecnologías que actualmente se consideran para esa política pública.

Es decir, en consonancia también con el artículo *Décimo Cuarto del Decreto* por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, establece que las entidades federativas realizarán acciones tendientes a garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios e instalaciones de sus dependencias y entidades.

*DÉCIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal…*

*Dicha política tendrá…*

*El Instituto Federal…*

*Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia.*

Luego entonces, en armonía con dicha disposición, las autoridades del estado y de los municipios implementarán las acciones para el establecimiento de áreas de libre acceso a la señal de internet, atendiendo a sus recursos presupuestarios y de manera paulatina hasta lograr el objetivo planteado en esta reforma constitucional.

Para el caso del impacto presupuestal en la implementación del *Gobierno digital*, como un principio será cada unidad administrativa quien tendrá su programación individual, atendiendo las características tecnológicas con las que ya cuenten y con los trámites o servicios que deberán adecuarse en la modalidad virtual de manera paulatina y conforme a las necesidades de cada municipio.

Quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales enfatizamos una vez más, en la importancia fundamental de la libertad de expresión —incluidos los principios de independencia y diversidad— tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo; destacando el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información; y atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros derechos y la participación pública, así como para facilitar el acceso a bienes y servicios; celebramos este ejercicio legislativo por el notable crecimiento que traerá con respecto al acceso a Internet y acceso a este de mejor calidad.

De ahí la importancia de construir este engranaje constitucional, pues como legisladoras y legisladores es esenciales dotar de las herramientas jurídicas para construir un gobierno inteligente, capaz de utilizar los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para evitar el dispendio de recursos y promover la eficacia de su función, un gobierno ágil y flexible capaz de captar las oportunidades, atender los problemas y adecuarse a las circunstancias rápida y eficazmente, un gobierno abierto y transparente, un gobierno global, que se inserte en el contexto nacional y mundial.

Es fundamental seguir promoviendo la participación ciudadana a través del uso de Internet, eliminando así obstáculos tradicionales como la distancia geográfica y el tiempo. Apoyar las prácticas democráticas que vinculan al Estado con la sociedad mediante el establecimiento de nuevas formas de comunicación, la innovación y la generación de servicios, los cuales representarán una alternativa más de espacios de participación ciudadana, lograr una mayor rendición de cuentas por parte del gobierno, y mayor acceso a la información pública.

La tecnología es un aliado imprescindible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Agenda 2030. Ésta ofrece un gran potencial para acelerar su cumplimiento y reducir el coste de sus procesos de implementación. De ahí la importancia de hacer mención que este dictamen encuentra su aporte en esos objetivos de la siguiente manera. El Objetivo 9, por cuanto ayuda a crear una infraestructura resiliente, fomenta la industrialización inclusiva y sostenible y promueve la innovación. La infraestructura y los servicios de Tecnología de la Información y Comunicación eficientes y asequibles permiten a los países participar en la economía digital y aumentar su bienestar económico general y su competitividad. Es decir, este cumplimiento de objetivos de agenda 2030 constituyen los medios para suministrar bienes y servicios de gran calidad en ámbitos esenciales como la atención sanitaria, la educación, las finanzas, el comercio, la gobernanza y la agricultura. Pueden contribuir a reducir la pobreza y el hambre, mejorar la sanidad, crear nuevos puestos de trabajo, mitigar el cambio climático, mejorar la eficiencia energética y a hacer más sostenibles las ciudades y las comunidades.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente:

**DECRETO**

**Único.** Se **reforman** los artículos 36, segundo párrafo y 117, octavo párrafo y se **adiciona** un párrafo décimo sexto al artículo 1 de la **Constitución Política para el Estado de Guanajuato**, para quedar como sigue:

**Artículo 1.** En el Estado…

Las normas relativas...

Todas las autoridades...

Para los efectos ...

Queda prohibida toda...

Esta Constitución reconoce...

Son pueblos indígenas, ...

Son comunidades integrantes...

Esta Constitución reconoce...

La ley protegerá...

Las niñas, los...

Toda persona tiene...

Toda persona tiene...

Toda persona tiene...

Toda persona tiene...

Toda persona tiene derecho a disfrutar del acceso al internet.

**Artículo 36.** El Poder Público...

Los poderes del Estado deberán regirse bajo los principios de Parlamento abierto, Gobierno abierto, Gobierno digital y Justicia abierta, respectivamente, mismos que estarán orientados a la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el uso de tecnologías de la información y comunicaciones en los términos de sus respectivas leyes orgánicas.

**Artículo 117.** A los Ayuntamientos ...

**I** a **XVII.** ...

La justicia administrativa...

Los reglamentos y...

Además de los...

Dentro de los...

Salvo en el...

Si el resultado...

Los Ayuntamientos se regirán por los principios de Gobierno Abierto y Gobierno Digital, en términos de su Ley Orgánica.»

**TRANSITORIOS**

**Artículo Primero.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Artículo Segundo.Los poderes públicos del estado y los municipios deberán destinar, de manera progresiva y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, los recursos que permitan cumplir con las disposiciones del presente decreto.

**GUANAJUATO, GTO., A 21 DE JUNIO DE 2022**

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES**

**Dip. Susana Bermúdez Cano**

**Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Dip. Briseida Anabel Magdaleno González**

**Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

**Dip. Yulma Rocha Aguilar**

**Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas**

**Dip. Gerardo Fernández González**

**Dip. Gerardo Fernández González**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO A EFECTO DE REFORMAR EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.**

**C. Dip. Irma Leticia González Sánchez**

**Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A estas Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de reformar el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022.

De conformidad con los artículos 89, fracción V; 111, fracción XVI y último párrafo; 112, fracción II y último párrafo; y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Proceso legislativo.**

**I.1.** En la sesión ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2022 ingresó la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de reformar el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022.

La iniciativa se turnó por la presidencia del Congreso a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen, con fundamento en los artículos 111, fracción XVI y último párrafo; 112, fracción II y último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

**I.2.** En términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción II del citado ordenamiento constitucional, el Congreso del Estado resulta competente para conocer y dictaminar la citada iniciativa.

**I.3.** Estas Comisiones Unidas dimos cuenta y radicamos la iniciativa de referencia el 26 de abril de 2022.

**I.4.** La presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en los términos propuestos en la iniciativa, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, dicho proyecto fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras.

**II.** **Consideraciones del iniciante.**

La iniciativa refiere en su exposición de motivos:

*«En el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, número 261, Segunda Parte, del 31 de diciembre de 2021, se publicaron, en primer lugar, el Decreto Legislativo número 56, a través del cual se adicionó el artículo 31 fracción 1, con un inciso m) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, para conferir a la Secretaría de Seguridad Pública las atribuciones para expedir las licencias y permisos para conducir en el Estado y operar el registro estatal de licencias y de infracciones que, hasta antes de la entrada en vigor de dicho Decreto, le correspondían a la Secretaría de Gobierno. En segundo lugar, en el citado medio de difusión oficial se publicó el Decreto Legislativo número 57, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.*

*Ahora bien, el sistema de vacatio legis previsto en ambos Decretos Legislativos para su respectiva entrada en vigor se dispuso en los artículos Primero de cada uno de ellos, en los siguientes términos:*

***Decreto Legislativo número 56:***

***Artículo Primero.*** *El presente Decreto entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las reformas a las leyes de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios y del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, respectivamente, que expida el Congreso del Estado por virtud de la reforma a que se refiere el presente Decreto, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.*

***Decreto Legislativo número 57:***

***Inicio de vigencia***

***Artículo Primero.*** *El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.*

*En estos términos, la vigencia de ambos decretos comenzó a partir del 1 de enero del presente año.*

*Por su parte, la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022[[92]](#footnote-92) regula en el Título Cuarto, correspondiente a los Derechos, en el Capítulo V, denominado «Servicios que presta la Secretaría de Gobierno», de* *manera particular, los artículos 24, que se refiere a los derechos por expedición de licencias y permisos para conducir vehículos; 25, atinente a los derechos por permisos para circular y el numeral 26, relativo a los derechos por la expedición de constancias de movilidad y reconocimiento en materia de tránsito. Conceptos de derechos que están relacionados con el objeto de los Decretos Legislativos números 56 y 57 y con la materia de la presente Iniciativa.*

*En sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2021, esa Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Decreto Legislativo número 58, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022. Dicho Decreto se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 261, Segunda Parte, del 31 de diciembre del mismo año y, de conformidad con su Artículo Primero Transitorio, esta Ley entró en vigor el 1 de enero de 2022.*

*Así, tomando en consideración la entrada en vigor, durante el ejercicio fiscal de 2022, tanto de las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, y de las leyes de Movilidad y del Sistema de Seguridad Pública estatales, contenidas en los citados Decretos Legislativos 56 y 57, a través de los cuales de trasladan las atribuciones relativas a expedir las licencias y permisos para conducir en el Estado y operar el registro estatal de licencias e infracciones, de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública -que a la fecha de la celebración de la sesión del Pleno en que se aprobó la Ley de Ingresos del Estado, aún no cobraban vigencia-, es que el H. Congreso del Estado determinó conveniente incorporar en la Ley de Ingresos* *del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022, el artículo sexto transitorio, en los siguientes términos:*

***«Transferencia de supuestos de cobro y tarifa***

***Artículo Sexto.*** *Una vez que entre en vigencia las reformas, en las que se transfieren las atribuciones en materia de expedición de licencias, permisos para conducir y la expedición de constancias de movilidad y reconocimiento en materia de tránsito, de las secretarías de Gobierno a la de Seguridad Pública del Estado, y se concluya el proceso de entrega recepción, los cobros de los derechos previstos en los artículos 24, 25 y 26 de la presente Ley se entenderán conferidos a la Secretaría de Seguridad Pública.»*

*Es así como el transitorio de previa cita, menciona que los cobros relativos a los derechos por expedición de licencias y permisos para conducir vehículos -artículo 24-, derechos por permisos para circular -artículo 25- y derechos por la expedición de constancias de movilidad y reconocimiento en materia de tránsito -artículo 26- se entenderán conferidos a la Secretaría de Seguridad Pública.*

*Si bien es cierto que resulta necesario contar con una disposición transitoria en la Ley de Ingresos que contemple el supuesto de la asunción, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, de las atribuciones relativas a expedir las licencias y permisos para conducir en el Estado y operar el registro estatal de licencias y de infracciones, se considera que los derechos contemplados en el artículo 25 no corresponden al ámbito de competencia de la atribución que se traslada a dicha dependencia.*

*Dado que como se ha mencionado, dicho numeral se refiere a cobros por la expedición de permisos para circular, de manera particular: a) provisional para circular sin placas, por día del servicio de transporte privado y público, y b) para circular con exceso de carga o dimensiones, por mes o fracción. En atención a lo cual, se observa que la prestación de dichos servicios se encuentra dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de Gobierno, como rectora en materia de los servicios público y especial de transporte, en términos de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, por lo cual se estima necesaria la modificación del citado artículo sexto transitorio, a fin de eliminar la referencia al artículo 25, puesto que la prestación de dichos servicios continuará estando a cargo de la Secretaría de Gobierno.*

*La presente iniciativa se encuentra alineada con la Actualización del Programa de Gobierno 2018-2024[[93]](#footnote-93), de manera particular en el «Eje Gobierno Humano y Eficaz el cual busca impulsar la consolidación de servicios gubernamentales confiables, eficientes e innovadores para la población en el estado; en el «Objetivo 6.3. Fortalecer la gestión pública con enfoque de gobernabilidad, calidad e innovación» y la «Estrategia 6.3.1 Generación de experiencias de calidad en los servicios gubernamentales», teniendo como líneas* *de acción: mejorar la accesibilidad en la gestión de los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía, facilitar el intercambio de buenas prácticas que impacten la calidad de los servicios gubernamentales y mejorar la calidad en la prestación de trámites y servicios tanto internos como externos.*

***Contenido de la iniciativa***

*Con base en lo anteriormente mencionado, se considera necesario reformar el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022, con el objetivo de eliminar la referencia al artículo 25 de la misma ley, dado que los servicios referentes a la expedición de los permisos provisional para circular, ya sea sin placas del servicio de transporte privado y público; o con exceso de carga o dimensiones, no forman parte de las atribuciones que se trasladaron de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública.*

***Evaluación ex ante***

*Finalmente, si bien la evaluación legislativa no pertenece expresamente al rubro de la técnica legislativa (y más bien a la de ciencia de la legislación), existe una relación sumamente estrecha entre ambos; los resultados arrojados por la evaluación legislativa respecto a los productos donde una norma tiene incidencia directa no sólo en el contenido sustantivo de la legislación -qué se legisla- sino también en la plasmación lingüística de la norma -con qué palabras se legisla-, por ello, atendiendo la previsión del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la evaluación ex ante de la norma, a partir de la evaluación del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social, se manifiesta:*

* *Impacto jurídico: este se traducirá en el ejercicio de la facultad de lniciante consignada en el artículo 56 fracción I de la Constitución Política Local, mediante la propuesta de Iniciativa a efecto de reformar el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022;*
* *Impacto administrativo: debido a los alcances y naturaleza de la adecuación que se propone, no se actualizan impactos de corte administrativo;*
* *Impacto presupuestario: acorde a lo establecido además en el artículo 37 bis de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no se actualizan impactos de corte presupuestario en el gasto, ya que no implican costos en la propuesta de reforma; y*
* *Impacto social: permitirá otorgar una mayor certeza a las personas solicitantes de los permisos para circular sin placas del servicio de transporte privado y público, o con exceso de carga o dimensiones.»*

**III. Valoración de la iniciativa.**

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto reformar los alcances del Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado del presente ejercicio fiscal, para eliminar la referencia al artículo 25 de la misma ley, en razón de que los servicios correspondientes a la expedición de los permisos provisional para circular, ya sea sin placas del servicio de transporte privado y público; o con exceso de carga o dimensiones, no forman parte de las atribuciones que se trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública, como se había previsto de origen y será la Secretaría de Gobierno quien las conserve, dada la naturaleza de esos derechos.

Coincidimos en que la modificación al Artículo Sexto Transitorio busca dar claridad y certeza jurídica al servicio al cual hace uso el contribuyente de estos servicios que corresponden a la expedición de permisos provisional para circular, ya sea sin placas del servicio de transporte privado y público; o con exceso de carga o dimensiones, al ser estos derechos que deba seguir prestando la Secretaría de Gobierno, de esta manera de igual forma atendemos puntualmente a las reformas que transfieren las atribuciones en materia de expedición de licencias, permisos para conducir y la expedición de constancias de movilidad y reconocimiento en materia de tránsito, de las secretarías de Gobierno a la de Seguridad Pública del Estado.

Las diputadas y los diputados que integramos estas comisiones dictaminadoras, dentro de nuestra principal función legislar, sabemos que con la aprobación de esta reforma a la Ley de ingresos se da sustento jurídico y certeza jurídica a la función recaudatoria del Estado, que le permite allegarse de recursos suficientes a fin de sufragar los gastos públicos, hacerles frente, satisfacer las necesidades la colectividad y, propiciar de manera autónoma y sustentable los recursos como ya lo manifestamos para atender las prioridades de los guanajuatenses.

Finalmente comentar que la visión de la Agenda 2030 fue considerada en el presente dictamen que contiene la reforma al Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022, pues incide directa o indirectamente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la integran, al ser el mecanismo por el cual el Estado se allega de recursos para al cumplimiento de sus planes y programas, que son los instrumentos de planeación en los que se coordinan las acciones del gobierno y que contribuyen al desarrollo sostenible e incluyente en beneficio de la población, con un enfoque económico, social, medioambiental y de sustentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, quienes integramos las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**D e c r e t o**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se **reforma** el artículo Sexto Transitorio de la **Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022**, para quedar en los siguientes términos:

***«Transferencia de supuestos…***

**Artículo Sexto.** Una vez que entren en vigencia las reformas, en las que se transfieren las atribuciones en materia de expedición de licencias y permisos para conducir y la expedición de constancias de movilidad y reconocimiento en materia de tránsito, de las secretarías de Gobierno a la de Seguridad Pública del Estado, y se concluya el proceso de entrega recepción, los cobros de los derechos previstos en los artículos 24 y 26 de la presente Ley se entenderán conferidos a la Secretaría de Seguridad Pública.»

**T r a n s i t o r i o**

**Artículo Primero.** El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de**

**Gobernación y Puntos Constitucionales**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Susana Bermúdez Cano**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

**Diputada Briseida Anabel Magdaleno González**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputada Yulma Rocha Aguilar**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputado Gerardo Fernández González**

**Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A LA INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PRESENTADA POR DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

**DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVO A LA INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PRESENTADA POR DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

A la Comisión de Justicia de esta Sexagésima Quinta Legislatura le fue turnada la iniciativa a efecto de reformar el artículo 139 del Código Penal del Estado de Guanajuato, presentada por diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su estudio y dictamen.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 fracción II y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se formula dictamen en atención a las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

**I. Presentación de la iniciativa.**

**I.1. Facultad para la presentación de iniciativas.**

La diputada y los diputados iniciantes en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 56 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 167 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, presentaron ante la Secretaría General de este Congreso del Estado, la iniciativa que se describe en el preámbulo del presente dictamen.

**I.2. Objeto de la iniciativa.**

La iniciativa tiene por objeto incrementar la pena mínima de prisión de diez a quince años en el delito de homicidio simple doloso, a efecto de que los sentenciados por este delito no obtengan su libertad condicionada en cinco años, aun cuando se les aplica la pena mínima, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

**II.** **Turno de la iniciativa.**

De acuerdo con la materia de la propuesta, la presidencia de la mesa directiva turnó a esta Comisión de Justicia la iniciativa, en sesión plenaria de fecha 17 de febrero de 2022, para su estudio y dictamen, con fundamento en el artículo 113, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Guanajuato.

**III. Estudio de la iniciativa.**

Esta Comisión de Justicia radicó la iniciativa el 22 de febrero de 2022, fecha misma en que se aprobó por unanimidad de votos la metodología de trabajo para estudio y dictamen de la iniciativa, en los siguientes términos: *1. Remisión de la iniciativa para solicitar opinión, por medio de correo electrónico, a: Supremo Tribunal de Justicia; Fiscalía General del Estado; Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado; y diputadas y diputados integrantes de esta Legislatura. Señalando como plazo para la remisión de las opiniones, 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la solicitud. 2. Subir la iniciativa al portal del Congreso para consulta y participación ciudadana, por el término de 10 días hábiles. 3. Elaboración, por parte de la secretaría técnica, de un comparativo y concentrado de observaciones que se formulen a la iniciativa. 4. Elaboración, por parte de la secretaría técnica, de una tarjeta informativa de seguimiento a la metodología de trabajo. 5. Reunión de la Comisión de Justicia para seguimiento de la metodología de trabajo y, en su caso, acuerdos.*

Derivado de la consulta tanto a las autoridades mencionadas como a la ciudadanía, se recibió por escrito la opinión del Supremo Tribunal de Justicia, misma que transcribimos enseguida, en virtud de que no sólo el Poder Judicial, sino que la Fiscalía General y la Coordinación General Jurídica al externar sus opiniones en la reunión de análisis, coincidieron en la necesidad de reflexionar sobre la modificación propuesta por la y los iniciantes.

*Opinión del Supremo Tribunal de Justicia.*

[…]

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

En la exposición de motivos de dicha iniciativa se expone, medularmente, que ***“mediante la actividad legislativa debemos apoyar a las autoridades de procuración y administración de justicia…para incrementar la pena mínima del delito de homicidio simple o básico doloso, para que los homicidas no obtengan su libertad en cinco años cuando les es aplicada la sanción mínima de diez años de prisión, que se impone por este delito…Quien priva de la vida a otra persona debe ser castigada en forma proporcional a la severidad de la lesión jurídica que causa…”***

Luego de hacer referencia a aspectos muy generales y de forma lacónica de la evolución de las ideas penales, así como de las teorías sobre el fin de las penas y los principios rectores de penas, aludiendo al principio de legalidad, proporcionalidad, dignidad de la persona y humanidad de las penas, así como de reinserción social del delincuente y, hacer referencia, además, a la idea de la intervención mínima del derecho penal, los iniciantes aluden a los requisitos para la obtención de la libertad condicionada a que se refiere el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente el contenido en la fracción VII de dicho numeral referido a **que se hayan cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos.**

Con base en ello la exposición de motivos de la iniciativa aduce que “…***los sentenciados por homicidio simple doloso, a quienes se les imponga la pena mínima de diez años, al compurgar cinco, pueden obtener su libertad condicionada, cubriendo los requisitos establecidos en el numeral ya transcrito*** (se refiere al artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal), ***lo cual resulta por demás oprobioso para la sociedad, puesto que al privar de la vida a una persona obtenga su libertad pasados tan sólo cinco años”.***

Con base en aquellas razones se propone la reforma.

**CUADRO COMPARATIVO**

[…]

**ANÁLISIS DE LA PROPUESTA.**

**El aumento en la punibilidad de los supuestos de hecho penales ha sido una tentación y constante en la labor del legislador con la finalidad de proteger los intereses de la sociedad, salvaguardándolos de los ataques más arteros por parte de algunos de sus integrantes.**

**Sin demeritar lo valioso de dicha finalidad, es de sobra conocido que el aumento en las punibilidades no surte el resultado esperado. El aumento de las sanciones penales no evita o disminuye las conductas tipificadas como delitos.**

**Las razones de prevención general y prevención especial que sustentan las teorías relativas de la pena no son la solución de evitación de tales conductas.**

**Por otro lado, la única razón válida para decidir aumentar la punibilidad de un delito debe tener su base en el análisis de la proporcionalidad abstracta; lo que se realiza en el momento de la creación de los tipos penales. O bien, en el caso del aumento propuesto se deberá tomar en cuenta la gravedad de la conducta tipificada como delito considerando el bien jurídico protegido por la norma, así como el grado en que éste resulta lesionado o puesto en peligro por aquella.**

**Si en la exposición de motivos se indica que la razón de agravación del mínimo de la punibilidad para el delito de homicidio simple doloso es para evitar que el sentenciado no obtenga el beneficio de la libertad condicionada establecida en el artículo 139 de la Ley Nacional de ejecución Penal, a los cinco años de prisión cumplidos, a nuestro entender la propuesta carece del fundamento válido suficiente para llevar a cabo dicha reforma, porque no se ajusta al principio de proporcionalidad abstracta ya citado.**

**Además, no debe soslayarse que a pesar de que en la exposición de motivos se hace alusión a doctrinas y principios garantistas en favor de los sentenciados, los iniciantes se apartan de tales principios e incluso pasan por encima de ellos porque los derechos ganados a través del tiempo se ven menoscabados con el aumento propuesto. Tal es el caso de los derechos del sentenciado a su reinserción social porque habrá casos de homicidas que requieran de un tiempo menor a cinco años para su reinserción. Lo cual significa que serán los estudios técnicos y científicos que durante la etapa de ejecución de la pena se realice al penado, los que sirvan de base para la decisión de la concesión del beneficio de que se habla en la iniciativa, porque no debe perderse de vista que dicho beneficio no exige solamente el transcurso del tiempo de privación de libertad para su concesión, sino otras condiciones que permiten sostener la viabilidad de ese beneficio.**

**Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la reforma propuesta se considera inviable.**

En seguimiento a la metodología de trabajo aprobada, esta Comisión de Justicia acordó reunión de asesores de los grupos y representación parlamentarios con la secretaría técnica para el análisis técnico de la iniciativa, lo que aconteció el 10 de junio; así como reunión de análisis en la Comisión con las autoridades consultadas, una vez que la Junta de Gobierno y Coordinación Política otorgara la respectiva anuencia.

El análisis en la Comisión de Justicia se realizó el 14 del mes y año en curso, reunión en la que participaron: por parte, del Poder Judicial, el maestro Plácido Álvarez Cárdenas, Magistrado de la Novena Sala Penal; de la Fiscalía General, la maestra Bernardina Elizabeth Durán Isais y el licenciado Jonathan Hazael Becerra González; y por la Coordinación General Jurídica los licenciados José Federico Ruiz Chávez y Carlos Torres Yáñez.

Al concluir el análisis, la presidencia hizo un recuento de las observaciones expresadas, por lo que propuso la elaboración de un dictamen en sentido negativo, en atención a las siguientes consideraciones, lo que fue aprobado por mayoría de votos.

**IV. Consideraciones.**

Quienes integramos esta Comisión de Justicia no desestimamos el problema que, como punto de partida, exponen la y los iniciantes en la exposición de motivos de su iniciativa sobre la inseguridad y, particularmente, sobre la incidencia del delito de homicidio.

Sin embargo, destacamos que la finalidad que persigue la iniciativa es el aumento de la pena de prisión mínima -de diez a quince años- establecida para el delito de homicidio simple, a efecto de evitar que los sentenciados por este delito obtengan el beneficio de libertad condicionada en cinco años, cumpliendo los requisitos del artículo 137, en particular el establecido en la fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El análisis de la propuesta que llevamos a cabo con la participación de las autoridades ya señaladas anteriormente fue a partir de dos aspectos de suma trascendencia.

El primero que tiene que ver con el tema de aumento de penas, en donde existió coincidencia en que esta acción legislativa ameritaría una base sólida para justificar, en una necesidad de política criminal, dicho incremento y, con base en el principio de proporcionalidad que establece el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que considere la naturaleza del delito, el bien jurídico protegido, el daño que se causa al mismo, el grado de responsabilidad. Es así como, de acuerdo con este principio, la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido, a fin de que la pena no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano.

Quienes dictaminamos estimamos que la intención de aumentar penas en ciertos supuestos jurídicos con el propósito de prevención no ha dado el resultado esperado, acción que además debe ser el resultado de un estudio profundo de proporcionalidad abstracta a través del análisis -reiteramos- de las conductas, la gravedad de las mismas, el bien jurídico afectado y la consecuencia social, para considerar y justificar el aumento en la punibilidad.

El otro aspecto tiene que ver, precisamente, con la finalidad que persigue los iniciantes con el aumento de la punibilidad mínima que es la de evitar que los sentenciados por el delito de homicidio simple obtenga el beneficio de la libertad condicionada en cinco años.

Al respecto consideramos que el aumento de la punibilidad no debe obedecer a este fin, esto es evitar que se alcance algunos de los beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que ello representa un contrasentido con la finalidad de la reinserción social.

Cabe destacar que el beneficio de la libertad condicionada exige el cumplimiento de otros requisitos -no sólo el citado por los iniciantes- de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de tal forma que la persona sentenciada, además de cumplir la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos, deberá cumplir con las otras condiciones señaladas en dicho dispositivo, los que se van ganando a través del tiempo.

**Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada**

Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos:

1. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme;

II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad;

III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento;

IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud;

V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley;

VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y

VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos.

La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo.

La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación.

No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.

La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra.

Por ello estimamos que, al estar enfocada la iniciativa en la restricción del beneficio de la libertad condicionada en el caso del delito de homicidio simple -con el incremento de la pena mínima de prisión- y no a partir del principio de proporcionalidad de la pena resulta inviable la propuesta.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 113 fracción II y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone a la Asamblea el siguiente:

**ACUERDO**

**Único**. No resulta procedente la propuesta a efecto de reformar el artículo 139 del Código Penal del Estado de Guanajuato, contenida en la iniciativa presentada por diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. De tal forma se instruye su archivo definitivo.

**Guanajuato, Gto., 21 de junio de 2022**

**La Comisión de Justicia**

**Laura Cristina Márquez Alcalá**

**Diputada presidenta**

**Susana Bermúdez Cano**

**Diputada vocal**

**Bricio Balderas Álvarez**

**Diputado vocal**

**Gustavo Adolfo Alfaro Reyes**

**Diputado vocal**

**Cuauhtémoc Becerra González**

**Diputado secretario**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE APASEO EL GRANDE, GTO., A EFECTO DE QUE SE LE AUTORICE LA CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS PARA DESTINARLOS A 13 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA.**

**Diputada Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., a efecto de que se le autorice la contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a 13 proyectos de inversión pública productiva.

Analizada la iniciativa de referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción VI y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el presente dictamen con base en las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

**I. Antecedentes**

El ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., en la sesión ordinaria número 11 celebrada el 13 de diciembre de 2021, aprobó por unanimidad realizar las gestiones ante el Congreso del Estado para solicitar la autorización de contratación de uno o varios financiamientos hasta por un monto de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 m.n.), sin incluir en dicho monto accesorios financiaros y comisiones, pagaderos en moneda y territorio nacionales, cuyos recursos se destinarán precisa y exclusivamente a los siguientes proyectos de inversión pública productiva: a) Construcción de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en Colonia El Guadalupano 1ra. sección (1era. etapa) en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; b) Rehabilitación de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en colonia El Pedregal, en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; c) Construcción de parque público y adquisición de bienes asociados al equipamiento en colonia El Molino de arriba (2da. etapa) en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; d) Rehabilitación de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la colonia El Cerrito, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; e) Construcción de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la colonia La Villita (1er. etapa) en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; f) Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la colonia La Fundación, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; g) Rehabilitación de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en Casa de la Cultura Antonio Plaza, cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; h) Construcción de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la comunidad de La Labor, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; i) Construcción de cancha de bateo y dugouts para campo de beisbol de prácticas, en la localidad de Punta de Obrajuelo, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; j) Construcción de 40 parabuses en cabecera municipal y varias comunidades, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; k) Construcción de descanso y cubierta metálica en el panteón municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; l) Interconexión de la red de drenaje sanitario calle constituyentes (tramo Unideg­Ignacio Allende y tramo Casas Blancas-Rancho la Concepción), en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; y m) Rehabilitación de calle Prolongación San Luis Montañez a base de carpeta asfáltica, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

También, se acordaron los términos y condiciones de los endeudamientos, que se cubrirán en un plazo máximo de hasta 10 años, contados a partir de la primera disposición y con una vigencia de autorización para su contratación hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022; autorizándose como fuente o garantía de pago de las obligaciones derivadas de la contratación de los financiamientos, la afectación del porcentaje necesario y suficiente de los recursos presentes o futuros o aquellos que tenga derecho a percibir el municipio de Apaseo el Grande, Gto., por concepto de Fondo General de Participaciones, aportaciones federales susceptibles de afectación o ingresos propios en términos de los ordenamientos aplicables, estableciendo el mecanismo legal que sea conveniente para ello.

En dicha sesión también se aprobó el Programa Financiero Anual 2022 para el municipio de Apaseo el Grande, Gto.

Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 26 de enero de 2022 para efectos de su estudio y dictamen, siendo radicada el 1 de febrero del año en curso.

A la iniciativa se anexó la siguiente documentación:

1. Copia certificada del acta número once de la sesión ordinaria celebrada por el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., el 13 de diciembre de 2021, en la que consta la autorización para la contratación de uno o varios financiamientos hasta por un monto de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 m.n.), sin incluir en dicho monto accesorios financiaros y comisiones, pagaderos en moneda y territorio nacionales, cuyos recursos se destinarán precisa y exclusivamente a los 13 proyectos de inversión pública productiva referidos previamente.
2. Copia del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 74, segunda parte, de fecha 14 de abril de 2021, en el que se publicó el pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.
3. Copia del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 108, segunda parte, de fecha 1 de junio de 2021, en el que se publicó el acuerdo mediante el cual se aprobó la segunda modificación de ingresos y presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021 del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato; así como las Disposiciones Administrativas de Cobro del Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2021.
4. Programa Financiero Anual para el Ejercicio 2022.
5. Corrida financiera proyectada a 120 meses.
6. Criterios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2021 para la Administración Pública Municipal de Apaseo el Grande, Gto.
7. Los proyectos de las obras a realizar con los recursos de los financiamientos.
8. Formatos 7 a, que contiene las proyecciones de ingresos y 7 c, referido a los resultados de ingresos, previstos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
9. Copia del oficio suscrito por el presidente municipal y la secretaria del ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., por el que le informaron al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Estado que el Ayuntamiento acordó la contratación de financiamientos hasta por la cantidad de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.) para destinarlos a proyectos de inversión en obra pública con un plazo a 10 años, otorgando en garantía los recursos del Fondo General de Participaciones; solicitándole la afectación de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio, para garantizar el pago total del crédito o créditos hasta su vencimiento y, en su caso, las demás obligaciones contraídas por el Municipio bajo ese mismo concepto.
10. Copia del oficio mediante el cual el presidente municipal de Apaseo el Grande, Gto., le solicita al Auditor Superior del Estado la opinión técnica en los términos del artículo 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en relación a la publicación de la información financiera del Municipio de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

De igual forma, mediante oficio número PM/195/2022, de fecha 26 de abril de 2022, el presidente municipal de Apaseo el Grande, Gto., remitió información adicional, consistente en los 13 expedientes técnicos de cada una de las obras que se pretenden realizar con los recursos que se obtengan de los financiamientos.

En cuanto a la justificación de los proyectos a realizar con los recursos de los financiamientos se refiere que se tiene la finalidad de fortalecer el equipamiento del Municipio y crear espacios públicos con áreas verdes para la convivencia social, recreativa, cultural y deportiva para el beneficio de los colonos y de sus alrededores; dar mayor atención y servicio a los habitantes del Municipio y sus alrededores, además de brindar un espacio digno de descanso en el panteón municipal; conectar las aguas grises, directamente a la planta tratadora del Municipio; incrementar el equipamiento urbano y solventar los servicios públicos y de transporte; y fortalecer e incentivar el deporte.

**II. Metodología para el análisis y discusión**

Se acordó como metodología de trabajo para el análisis de la iniciativa la siguiente:

1. Remitir a la titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de este Congreso, copia del expediente de la iniciativa, solicitando el análisis técnico-financiero, considerando, entre otros aspectos:
2. Monto.
3. Periodo o plazo de vigencia de los financiamientos.
4. Tasa de interés.
5. Garantías y avales.
6. Costo financiero total.
7. Programa de amortización.
8. Fuente de repago de los financiamientos.
9. Destino y tipo de inversión.
10. Necesidad de la inversión y su impacto en la población.
11. Situación financiera.
12. Estado de la situación de la deuda pública.
13. Techo financiero.
14. Política presupuestal.
15. El 8 de junio de 2022, la titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado expuso a esta Comisión, el análisis técnico-financiero efectuado respecto a la iniciativa que nos ocupa.
16. Analizada la información remitida por el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., así como el dictamen técnico-financiero elaborado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de este Congreso, el diputado presidente instruyó a la secretaría técnica de la Comisión para que elaborara el proyecto de dictamen, conforme lo dispuesto en el artículo 272, fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mismo que fue materia de revisión por parte de esta Comisión.

**III. Análisis Jurídico - Financiero**

**1. Análisis jurídico**

Para proceder al análisis que nos ocupa, resulta necesario que previamente determinemos la competencia del Congreso del Estado en la materia, y, por consiguiente, la del iniciante.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; el artículo 63, fracción XIV de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como los artículos 6, 11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Congreso del Estado resulta competente para conocer y dictaminar sobre la iniciativa planteada.

Cabe apuntar que el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, señala que tanto el Poder Ejecutivo del Estado, como los ayuntamientos, previa autorización del Congreso del Estado, podrán contratar deuda pública, hasta los siguientes techos de financiamiento neto de acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas: I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un techo de financiamiento neto de hasta el equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición; II. Un endeudamiento en observación tendrá como techo de financiamiento neto el equivalente al 5% de sus Ingresos de libre disposición; y III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un techo de financiamiento neto igual a cero.

En caso de que exista un balance presupuestario de recursos disponible negativo, se autorizará financiamiento neto adicional al techo de financiamiento neto contemplado en dicho artículo, hasta por el monto de financiamiento neto necesario para solventar las causas que generaron el balance presupuestario de recursos disponible negativo.

Por su parte, el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., en términos de lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII de la Constitución Política Federal, en relación con los artículos 56, fracción IV de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 11, fracción III, 15 fracciones II, III y VIII y 24 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 76, fracciones I, inciso a y IV, incisos a y d de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato resulta facultado para formular iniciativas de decreto en la materia.

De igual forma, de acuerdo a lo establecido por los artículos 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117, fracción III de la Constitución Política Local y 76, fracciones III, incisos a y b de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento está obligado a la prestación de los servicios públicos a los habitantes del Municipio, instrumentando mecanismos para ampliar la cobertura y mejorar su prestación, dentro de los que encontramos calles, transporte público urbano y suburbano en ruta fija, parques, jardines, áreas ecológicas y recreativas y su equipamiento, drenaje y panteones.

Asimismo, con base en el artículo 76, fracciones III, incisos a y b y IV, inciso a de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato le corresponde al Ayuntamiento prestar servicios públicos a los habitantes del Municipio e instrumentar los mecanismos para ampliar la cobertura y mejorar la prestación de dichos servicios; así como promover el desarrollo económico, social, educativo, científico, tecnológico, cultural y recreativo del Municipio.

Respecto de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, ésta resulta competente por materia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Derivado de lo anterior, podemos concluir que el ejercicio de contratación de empréstitos o financiamientos está supeditado a las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, fracción VIII y la Constitución Política para el estado de Guanajuato en el artículo 63 fracción XIV confieren a este Poder Legislativo, además de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, teniéndose que agotar un análisis de las finanzas públicas del ente público solicitante, y resolver considerando la normatividad en la materia.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado pronunciamientos, pudiéndose citar las siguientes tesis de Jurisprudencia:

***DEUDA PÚBLICA LOCAL. CONDICIONES CONSTITUCIONALES QUE DEBEN RESPETAR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ADQUIRIRLA, TRATÁNDOSE DEL FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.***

*Los contenidos normativos de dicho precepto constitucional pueden desdoblarse en los siguientes segmentos:* ***1. La prohibición de obtener endeudamiento externo, que imposibilita a los Estados y Municipios a recibir financiamiento de entidades o personas extranjeras (acreedor o acreditante); en moneda extranjera (independientemente de quién funja como acreditante); o cuyo lugar de pago sea el extranjero (con independencia de la nacionalidad de las partes o la moneda en que se pacte la operación); 2. La exigencia de destino necesario del financiamiento exclusivamente para inversiones públicas productivas; 3. El principio de unidad o concentración de las finanzas estatales, conforme al cual el régimen atinente a la deuda adquirida por el Estado comprende también a la administración descentralizada; y, 4.******Un esquema de coparticipación legislativo-ejecutivo en materia de endeudamiento, conforme al cual se definen facultades, tanto de ejercicio potestativo como obligatorio para ambos, y procesos de necesaria colaboración y corresponsabilidad, como manifestación de los pesos y contrapesos que exige el principio de división de poderes.***

Asimismo, resulta aplicable:

***DEUDA PÚBLICA LOCAL. A PARTIR DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN OBTENER CRÉDITOS DESTINADOS A OBRAS QUE LES GENEREN DIRECTA O INDIRECTAMENTE INGRESOS.***

*De la interpretación histórica y del análisis de las reformas a dicho precepto constitucional de 1942, 1946 y 1981,* ***se advierte que su objeto fue fortalecer las haciendas públicas locales y promover el desarrollo regional, despojando al crédito público local de las limitaciones que hasta ese momento imperaban, por estar delimitada dicha operación a obras que "directamente" generaran rentas, ampliándose la posibilidad de acceder al crédito cuando fuera para el más amplio concepto de "inversiones públicas productivas", permitiendo así que los créditos pudieran destinarse no sólo a obras que generaran directamente ingresos, sino también a otras que en forma indirecta lograran dicho objetivo****. Además, a la par de este mayor margen de poder de ejercicio del crédito que la reforma dio a los gobiernos locales, y con el objeto de hacer más razonado el ejercicio de esta facultad a fin de disminuir la posibilidad de actuaciones arbitrarias por parte de los Ejecutivos Locales,* ***se incluyó la previsión de una necesaria intervención y colaboración del Poder Legislativo Local en el tema del crédito público****;* ***y, se fijaron los deberes expresos sobre los Ejecutivos Estatales y los Municipios****.*

**2. Análisis financiero**

Acreditada la competencia de esta Comisión Dictaminadora, corresponde iniciar el estudio del expediente bajo las condiciones y requisitos constitucionales y legales que le aplican.

De la identificación del marco jurídico aplicable a la materia de deuda pública, ubicamos las bases a las que debe sujetarse la autorización del Congreso del Estado, y por consiguiente, para el iniciante se traducen en requisitos y condiciones que debe satisfacer, tales como:

1. Acuerdo del Ayuntamiento;
2. Se trate de acreditante que opere en territorio nacional;
3. Pagaderos en moneda y territorio nacionales;
4. Destino a inversión pública productiva;
5. Planeación en el presupuesto de egresos;
6. Especificar el monto, destino y condiciones del empréstito;
7. Capacidad financiera.

Del análisis realizado de la documentación remitida por el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., se constata que se cumple con la documentación que comprueba el acuerdo del Ayuntamiento; se trata de acreditante nacional; pagadero en moneda y territorio nacionales; el destino a inversión pública productiva; previsión en el programa financiero anual; y, se especifica el monto, y condiciones del empréstito.

Asimismo, de acuerdo al análisis efectuado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de este Congreso, el municipio de Apaseo el Grande, Gto., cuenta con la capacidad económica y financiera para hacer frente al compromiso financiero que se adquirirá con la contratación de la deuda.

Al respecto, cabe señalar que el análisis técnico realizado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas de este Congreso, para el análisis de la solicitud contempló los siguientes aspectos:

* 1. **. Situación de las finanzas públicas del Municipio de Apaseo el Grande**

**2.1.1. Perfil económico del municipio de Apaseo el Grande**

La superficie territorial del Municipio es de 420.4 kilómetros cuadrados, equivalentes al 1.37% de la superficie total del estado. Limita al norte con los municipios de [Comonfort](http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11009a.html) y [San Miguel de Allende](http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11003a.html); hacia el este con el estado de [Querétaro de Arteaga](http://www.e-local.gob.mx/enciclo/queretaro/index.html); al sur con el municipio de [Apaseo el Alto](http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11004a.html) y hacia el oeste con el municipio de [Celaya](http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11007a.html). En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabilizó un total de 117,883 habitantes en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

De acuerdo con el tamaño de su población, el Municipio se clasifica como un municipio urbano[[94]](#footnote-94), ocupando la posición número catorce con mayor cantidad de habitantes en el Estado de Guanajuato, lo que equivale al 1.9% del total. Respecto al índice de rezago social, en el que se resumen carencias sociales como son la educación, salud, servicios básicos y espacios de vivienda, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL lo clasifica con datos de 2020, con un grado «*Muy Bajo*». Este indicador es relevante para conocer el perfil socioeconómico del Municipio y se toma como referencia para la asignación de recursos de programas sociales y transferencias federales.

Gráfico

Descripción generada automáticamente

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2020 del INEGI.

En el Censo Económico 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se observa que la producción bruta del municipio de Apaseo el Grande es de $36,798.93 millones de pesos, siendo el séptimo municipio con mayor producción en el Estado, representando el 2.7% del total. Destaca además que el Municipio cuenta con 2,629 unidades económicas, siendo sus principales actividades económicas la industria manufacturera, comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y otros servicios, excepto actividades gubernamentales. Las unidades económicas cuya actividad económica corresponde a industrias manufactureras generan una producción bruta de $34,433.08 millones de pesos, lo que representa el 93.6% de la producción bruta total del Municipio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apaseo el Grande** | | |
| **Producción bruta total (millones de pesos)** | | |
|  |  |  |
| **Actividad económica** | **Unidades económicas** | **Producción bruta total** |
| Sector 31-33 Industrias manufactureras | 311 | $34,433.08 |
| Sector 46 Comercio al por menor | 1,353 | $894.38 |
| Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas | 312 | $127.43 |
| Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 320 | $97.31 |
| Otros Sectores | 333 | $1,141.12 |
| **Total municipal** | **2,629** | **$36,693.31** |

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2018 del INEGI.

**2.1.2. Contexto económico**

En 2021 la economía mundial tuvo una recuperación económica que permitió enfrentar los efectos provocados por la pandemia de COVID-19, sin embargo, aún persisten riesgos que pueden limitar la recuperación de los países, regiones y sectores económicos. De acuerdo con el informe trimestral del Banco de México del primer trimestre de 2022, el entorno de elevada inflación a nivel global como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19, se ha deteriorado aún más derivado del conflicto geopolítico en Ucrania, lo que generó incremento en los precios de energéticos y alimentos y nuevas disrupciones en las cadenas de suministro. En este marco, los bancos centrales han aplicado una política monetaria cada vez más restrictiva al retirar estímulos ante los persistentes elevados niveles de inflación. De acuerdo con el escenario macroeconómico previsto, el Banco de México prevé para el 2022 un crecimiento del Producto Interno Bruto PIB de entre 1.6% y 2.8% con una estimación central de 2.2%. En el informe anterior, el banco central estimaba para 2022 un crecimiento de entre 1.6% a 3.2%.

Para los próximos meses, la recuperación de la economía mundial dependerá de la evolución de la pandemia, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, de las sanciones económicas impuestas a Rusia, la afectación en las cadenas globales de suministro, así como del aumento en las tasas de interés por parte de los bancos centrales del mundo.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Fuente: Informe trimestral, enero-marzo 2022. Banxico

El Fondo Monetario Internacional a través del Informe de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook) de abril 2022[[95]](#footnote-95), prevé que el crecimiento mundial se desacelere significativamente en 2022, en gran medida como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Los costos económicos de la guerra se propagarán a través de los mercados de materias primas, el comercio internacional y en menor medida, los mercados financieros. El incremento en los precios de los combustibles y de los alimentos afectará a las poblaciones vulnerables, sobre todo las de los países de bajo ingreso. La proyección para el crecimiento mundial se desacelera del 6.1% para 2021 a 3.6% en 2022. En el mediano plazo, el crecimiento mundial disminuirá alrededor de 3.3%.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2022. FMI

En los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2023 (PCGPE 2023)[[96]](#footnote-96), el gobierno federal señala que las perspectivas de crecimiento económico en 2022 serán menores a las anticipadas, tanto para economías avanzadas, emergentes y de ingresos bajos. De esta manera, se prevé que la economía mexicana tenga un crecimiento menor a lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica 2022, al considerar que el Producto Interno Bruto PIB tenga un crecimiento anual real de 3.4% para 2022 y de 3.5% para el 2023.

El pronóstico de crecimiento para el 2023 considera un incremento en la inversión pública derivado de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en la región sur-sureste de México. También se incorporan las inversiones anunciadas por parte del sector privado que buscan aprovechar la ventaja comparativa de México, la ubicación estratégica del país, así como de los diversos tratados comerciales con los que cuenta.

El gobierno federal prevé además un incremento en los flujos financieros hacia México como resultado de una mayor demanda de insumos y manufactura mexicana derivado del aumento de la comercialización en Norteamérica, que desde 2022 comenzará a sustituir una parte de la producción de Europa del Este y Asia. De forma simultánea, el consumo privado avanzará con el apoyo de programas sociales, el flujo de remesas y de las recientes reformas en materia laboral.

**2.1.3. Situación financiera**

De acuerdo con la iniciativa formulada por el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., los recursos que se obtengan de uno o varios financiamientos se destinarán para la ejecución de los proyectos de inversión pública productiva enlistados en el expediente de iniciativa, cuyo monto asciende a la cantidad de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 m.n.).

Con la finalidad de realizar el análisis del destino de los recursos que se obtengan y de la capacidad de pago del Municipio, se tomará como referencia la información presentada por el Municipio en la que se incluye lo relacionado con los ingresos, el presupuesto de egresos y la deuda pública y otros pasivos conforme a los formatos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De la información referida se interpreta lo siguiente:

**2.1.4. Destino de los recursos**

Los proyectos incluidos en la iniciativa materia del presente dictamen están enfocados principalmente en la construcción y rehabilitación de parques recreativos ubicados en el Municipio; conexión de la red de drenaje sanitario, construcción de parabuses, construcción y rehabilitación de espacios deportivos, así como la rehabilitación de calles. El total de los recursos que se destinarán para estas obras suman la cantidad de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 m.n.). en los que se busca beneficiar a la población del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | | **Monto** | **Beneficiarios** |
| 1 | Construcción del parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en colonia el Guadalupano 1era sección (1era etapa) en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’200,000.00 | 5,000 |
| 2 | Rehabilitación de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en colonia el Pedregal en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $500,000.00 | 3,500 |
| 3 | Construcción del parque público y adquisición de bienes asociados al equipamiento en colonia Molino de Arriba (2da. Etapa), en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’130,000.00 | 10,000 |
| 4 | Rehabilitación de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la colonia el Cerrito, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’150,000.00 | 5,000 |
| 5 | Construcción del parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento la colonia la Villita (1er. Etapa), en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $2’500,000.00 | 12,000 |
| 6 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la colonia la Fundación, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $874,351.29 | 1,050 |
| 7 | Rehabilitación de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en casa de la cultura Antonio Plaza, en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’050,000.00 | 31,264 |
| 8 | Construcción del parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la comunidad de la Labor, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $600,000.00 | 1,441 |
| 9 | Construcción de concha de bateo y dugouts para campo de beisbol de prácticas, en la localidad de Punta de Obrajuelo, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $127,760.31 | 375 |
| 10 | Construcción de 40 parabuses en cabecera municipal y varias comunidades, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’500,000.00 | 50,000 |
| 11 | Construcción de descanso y cubierta metálica en el Panteón Municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’074,046.30 | 26,500 |
| 12 | Interconexión de la red de drenaje sanitario calle Constituyente (tramo UNIDEG-Ignacio Allende y tramo Casas Blancas-Rancho la Concepción), en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’509,842.10 | 25,000 |
| 13 | Rehabilitación de calle prolongación San Luis Montañez a base de carpeta asfáltica, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’784,000.00 | 35,000 |
|  | **Total** | **$15’000,000** |  |

**2.1.5. Ingresos**

En los últimos 5 años, los ingresos totales del Municipio presentan un crecimiento promedio del 10% derivado de un comportamiento favorable en los ingresos de libre disposición y de los ingresos provenientes de transferencias federales etiquetadas. Los ingresos de libre disposición muestran un crecimiento en promedio de 10% y las transferencias federales etiquetadas de 8%. Lo anterior puede derivarse de una mayor eficiencia recaudatoria por parte del Municipio, así como de la aplicación de estrategias recaudatorias que incentivan el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la población.

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

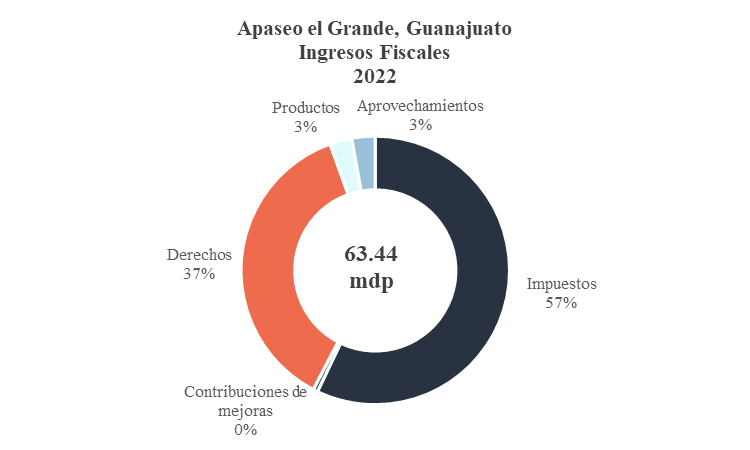
Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

Para el ejercicio fiscal 2022, los ingresos del municipio de Apaseo el Grande se estiman en 305.73 millones de pesos sin considerar recursos provenientes de financiamiento, de los cuales 196.90 millones de pesos corresponden a ingresos de libre disposición, lo que representa el 64.4% del total y 108.83 millones de pesos corresponden a transferencias federales etiquetadas que equivale al 35.6% de los ingresos totales estimados. En caso de considerarse para el ejercicio fiscal 2022 ingresos derivados de financiamiento, el monto total de ingresos estimados asciende a 320.73 millones de pesos.



Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

De los conceptos que integran los ingresos fiscales del municipio para el ejercicio fiscal 2022, los impuestos representan el 57%, seguido de los derechos con 37% y el 6% restante, se distribuye entre contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos.



Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

Con respecto a los ingresos federales, el ramo 28 Participaciones representa el 53% del total de recursos federales, el Ramo General 33 Aportaciones representa el 45% y el 2% restante corresponde a incentivos derivados de la colaboración fiscal.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

Con la finalidad de identificar el comportamiento de los ingresos de libre disposición en los últimos años, se considera conveniente identificar de manera particular el comportamiento de los ingresos fiscales y de los recursos federales provenientes del Ramo 28 Participaciones, incentivos derivados de la coordinación fiscal, así como de otros conceptos que no tienen un fin específico de gasto (no etiquetado).

Respecto al comportamiento que muestran los principales ingresos fiscales del Municipio, se identifica que los impuestos y derechos han tenido un crecimiento constante en los últimos años lo que permite fortalecer e incrementar la eficiencia recaudatoria del Municipio.

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

Por su parte, para los recursos federales no etiquetados, se identifica que los ingresos derivados del Ramo 28 Participaciones muestran un comportamiento positivo año con año.

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

En lo que se refiere al comportamiento futuro de los ingresos municipales, el Municipio proyecta un crecimiento del 4% anual bajo un horizonte de 10 años, tiempo que corresponde al plazo de o los créditos que pretende contratar. De esta manera para el año 2032, el Municipio estima ingresos totales por un monto de 450.38 millones de pesos, de los cuales 290.06 millones de pesos corresponderán a ingresos de libre disposición y 160.32 millones de pesos a transferencias federales etiquetadas.

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

**2.1.6. Egresos**

Para el ejercicio fiscal 2022, el municipio de Apaseo el Grande, Gto., aprobó un gasto de 315.73 millones de pesos en equilibrio con el ingreso estimado para el mismo ejercicio, de los cuales, el 61% corresponde a gasto no etiquetado con un monto de 196.90 millones de pesos y el 39% restante se distribuye en gasto etiquetado que equivale a un monto de 123.93 millones de pesos. Al incorporar los recursos derivados de financiamiento de hasta la cantidad de 15 millones de pesos, el gasto total queda con un monto de 320.73 millones, ya que se incrementan los recursos del gasto etiquetado para inversión pública.



Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

De acuerdo con el destino del gasto, el Presupuesto de Egresos 2022 se distribuirá de la siguiente manera:

Gráfico

Descripción generada automáticamente

Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

Tomando como referencia los resultados de ejercicios anteriores, así como las proyecciones para el gasto de inversión, se identifica que en el ejercicio fiscal 2022 dicho gasto tendrá un incremento del 69.5% respecto a lo ejercido en el año 2021, para el 2023 se prevé una reducción del 36.2% y para los años siguientes un crecimiento del 3.95% anual.

Gráfico

Descripción generada automáticamente con confianza media

Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

El gasto financiado con recursos de libre disposición, identificado como gasto no etiquetado, muestra un comportamiento ascendente lo que se traduce en una menor dependencia de recursos federales etiquetados para financiar el gasto municipal, de esta manera se identifica que para el ejercicio fiscal 2022, el 59% del gasto municipal corresponderá a gasto no etiquetado y de acuerdo con las proyecciones, para el año 2032 el gasto no etiquetado será del 81% del gasto total.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Fuente: Elaboración propia con información financiera del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato

**2.1.7. Deuda pública**

Con información al 31 de marzo de 2021 y publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda pública del municipio de Apaseo el Grande, Gto., es de $0.00 derivado de que no existe registro de obligaciones por financiamientos a cargo del municipio cuya fuente o garantía de pago son ingresos de libre disposición.

El antecedente inmediato sobre una obligación financiera a cargo del Municipio se deriva de un crédito simple contratado con Banobras en mayo de 2011 con un monto dispuesto de 12.60 millones de pesos y una tasa de interés TIIE + 2.53. El crédito se formalizó con un plazo de 10 años y su vencimiento fue en agosto de 2021.

De acuerdo con el Registro Estatal de la Deuda Pública y Obligaciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato, la obligación antes señalada quedó registrada con el folio estatal 207/11 y con número de inscripción 226/2011 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

**2.1.8. Calificaciones crediticias**

El municipio de Apaseo el Grande no cuenta actualmente con una calificación crediticia emitida por alguna calificadora crediticia del mercado financiero.

Resulta importante señalar que las calificaciones crediticias son opiniones sobre el riesgo crediticio, sobre la capacidad y voluntad de un deudor, que puede ser una empresa, institución financiera, estado o municipio, para cumplir con sus obligaciones financieras en tiempo y forma; por otro lado, como las calificaciones reflejan el grado de riesgo de incumplimiento, pueden ayudar a las entidades y municipios a tener acceso al crédito y a conseguir mejores condiciones financieras con instituciones bancarias.

Debido a que las calificaciones son opiniones independientes y que incorporan el análisis de la situación financiera, así como de las prácticas de administración y gobierno de los municipios, uno de los principales beneficios es que brindan una mayor transparencia a los inversionistas, la banca y la población en general.

Entre las ventajas de contar con calificaciones de riesgo crediticio se pueden destacar las siguientes: En materia de transparencia, brindan certeza sobre los resultados obtenidos por el Municipio, ya que son entes evaluadores ajenos al gobierno que emiten opiniones objetivas; sirven como herramienta de negociación ante las instituciones financieras para la obtención de financiamiento público; al elevar las calificaciones, la calidad crediticia del Municipio mejora y por consiguiente se pueden obtener condiciones financieras más favorables, lo que se traduce en un menor costo financiero de las obligaciones contratadas por el Municipio y por lo tanto un ahorro de recursos que pueden destinarse a proyectos de inversión.

**2.1.9. Sistema de alertas**

El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los entes públicos estatales y municipales que tengan contratados financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único (RPU). Esta medición es relevante ya que determina el Techo de Financiamiento Neto al que tendrán acceso los entes públicos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir del ejercicio fiscal 2017, comenzó con la aplicación del Sistema de Alertas el cual tiene por objeto realizar una evaluación de los entes públicos de acuerdo a su nivel de endeudamiento, para ello analiza a aquellos que tengan contratados financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones a cargo de las Entidades Federativas y Municipios, cuya fuente o garantía de pago sea de ingresos de libre disposición.

La medición del Sistema de Alertas se realiza conforme a los siguientes tres indicadores:

1. **Indicador de deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición**, vinculado con la sostenibilidad de la deuda de un ente público;
2. **Indicador de servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición**, el cual está vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, intereses, anualidades y costos financieros atados a cada Financiamiento; y
3. **Indicador de obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas**, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre ingresos totales, el cual muestra la disponibilidad financiera del ente público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 meses en relación con los ingresos totales.

De los resultados obtenidos de acuerdo con la medición de los indicadores señalados, estos son publicados en el Sistema de Alertas, el cual clasifica a cada uno de los entes públicos de acuerdo con los siguientes niveles:

► Endeudamiento sostenible;

► Endeudamiento en observación; y

► Endeudamiento elevado.

Posteriormente y de acuerdo con la clasificación del Sistema de Alertas, cada ente público tendrá los siguientes techos de financiamiento neto:

* **Endeudamiento sostenible**, corresponderá un techo de financiamiento neto de hasta el equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición;
* **Endeudamiento en observación** tendrá como techo de financiamiento neto el equivalente al 5% de sus ingresos de libre disposición; y
* **Endeudamiento elevado** tendrá un techo de financiamiento neto igual a cero.

Con base en lo anterior, el 30 de julio de 2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el cálculo de los resultados del Sistema de Alertas para los municipios correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020[[97]](#footnote-97), los cuales servirán para determinar los techos de financiamiento neto al que tendrán acceso los municipios durante el ejercicio fiscal 2022.



Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Alertas de la SHCP.

Con base al resultado publicado, el municipio de Apaseo el Grande, Gto., se ubica con un nivel de endeudamiento sostenible lo que le permite acceder a un techo de financiamiento neto hasta por el 15% de sus ingresos de libre disposición.

**2.1.10. Determinación del Techo de Financiamiento Neto**

Con el resultado obtenido en el Sistema de Alertas que permite obtener un techo de financiamiento neto con base al 15% de los ingresos de libre disposición, se determina que para el ejercicio fiscal 2022, el municipio de Apaseo el Grande, Gto., tendrá como máximo un techo de financiamiento neto de:



Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Ingresos 2022 del Municipio.

**2.1.11. Resultado del análisis financiero**

Con la finalidad de identificar el impacto financiero y presupuestal de la solicitud de endeudamiento en las finanzas públicas del Municipio, se realizó un análisis financiero considerando los siguientes supuestos:

Monto: Hasta 15 millones de pesos;

Plazo: 10 años a partir de la primera disposición;

Tasa: TIIE de 28 días más 200 puntos base (pb);

Sin comisiones;

Sin fondos de reserva;

Sin periodos de gracia para capital ni intereses;

Perfil de amortizaciones de capital: Amortizaciones mensuales iguales de capital;

Periodicidad de pago de los intereses: Mensual sobre saldos insolutos;

Sin gastos adicionales;

Sin gastos adicionales contingentes; y

Sin instrumentos derivados.

Para efectos del presente análisis, se proyecta hacer uso de la autorización en una sola disposición, para lo cual bajo estas circunstancias se realiza la siguiente corrida financiera para determinar el servicio de la deuda correspondiente del monto a autorizar. Es importante señalar que el objetivo de este ejercicio consiste en determinar de manera adicional una proyección distinta a la realizada por el Municipio, pero considerando un escenario que pudiera ser adverso a las condiciones económicas y financieras actuales.



Con base en la determinación de los montos del servicio de la deuda y de los datos proyectados del ingreso y gasto hasta el ejercicio 2032, se presentan las siguientes proyecciones donde se refleja el efecto presupuestal de la disposición del crédito bajo las condiciones señaladas anteriormente en el plazo de vigencia del crédito:





Los saldos estimados de cierre para la deuda pública de los ejercicios 2022 al 2032 se representan de la siguiente manera, se puede apreciar que el saldo más alto es en el ejercicio 2022 por ser el año en donde se estima la contratación de la deuda para posteriormente iniciar con un descenso conforme se amorticen cada uno de los pagos:

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los indicadores 1 y 2 del Sistema de Alertas y tomando en cuenta las proyecciones de ingresos de libre disposición de los ejercicios 2022 al 2032, podemos observar que el nivel de endeudamiento del municipio de Apaseo el Grande, Gto., continuará siendo sostenible.





Del análisis financiero realizado se determina que el municipio de Apaseo el Grande, Gto., mantendría niveles favorables acorde a indicadores en materia de deuda pública, reflejando la disciplina financiera, sostenibilidad y capacidad de pago de la deuda en el largo plazo.

Un fortalecimiento en la recaudación de ingresos propios, sumado a la aplicación de políticas de contención del gasto corriente le permitirían al municipio mejorar su flexibilidad financiera, con lo que se podrían destinar mayores recursos al gasto en inversión.





**3) Perspectiva de Endeudamiento**

De acuerdo a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los ayuntamientos previa autorización del Congreso del Estado, podrán contratar deuda pública en los términos de dicha ley y hasta los siguientes techos de financiamiento neto, de acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas: a) Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un techo de financiamiento neto de hasta el equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición; b) Un endeudamiento en observación tendrá como techo de financiamiento neto el equivalente al 5% de sus Ingresos de libre disposición; y c) Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un techo de financiamiento neto igual a cero.

Es así que cuando se incurra en un balance presupuestario de recursos disponible negativo, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se autorizará financiamiento neto adicional al techo de financiamiento neto contemplado en el referido artículo 6, hasta por el monto de financiamiento neto necesario para solventar las causas que generaron el balance presupuestario de recursos disponible negativo.

En el presente caso y considerando lo que prevé el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, resulta viable la contratación de los financiamientos por parte del ayuntamiento Apaseo el Grande, Gto.

Asimismo, es recomendable que el Municipio documente su estrategia de fortalecimiento a la hacienda pública, soportada por lineamientos orientados a incrementar los ingresos de libre disposición y a reducir el gasto de operación mediante políticas de austeridad y racionalidad.

**IV. Consideraciones de la Comisión**

**1) Aspectos Generales**

Resulta evidente que los mecanismos ordinarios para la obtención de recursos, en algunas ocasiones, se ven superados por el acelerado crecimiento del gasto público, lo que genera que se busquen esquemas de financiamiento alterno para hacer frente a las funciones y a la prestación de los servicios públicos que los municipios están obligados a prestar.

Un mecanismo extraordinario y excepcional para afrontar el gasto público es la deuda pública, misma que a pesar de considerarse como una fuente adicional de ingresos, no se traduce únicamente en incremento patrimonial, sino que tiene la dualidad de constituirse en pasivo para la administración pública; un pasivo que mal administrado puede producir más afectaciones que beneficios respecto de la prestación de servicios públicos y el ejercicio de la función pública.

Por esta razón, el Congreso del Estado debe ser cuidadoso de que la deuda, en principio, se constituya como la opción última de financiamiento, una vez que los mecanismos ordinarios han sido explorados y aun así resulten insuficientes para atender demandas prioritarias y urgentes en el Municipio.

Es decir, el Poder Legislativo debe coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas públicas, a través de instrumentos legales que eficienticen los recursos y los mecanismos de recaudación, racionalicen el gasto y se genere una disciplina presupuestal, como medios ordinarios de financiación, y sólo en última instancia autorizar deuda pública.

Pero, insistimos, una vez que esos mecanismos ordinarios de financiamiento encuentran sus límites y se decide acudir al endeudamiento, se hace necesario asumir con responsabilidad el manejo de los empréstitos, por lo que el Congreso del Estado debe procurar que se garantice la continuidad en la prestación de los servicios públicos y el ejercicio pleno de la función pública por las futuras administraciones, sin que el servicio de la deuda se constituya en un impedimento para ello.

**2) Valoración del Expediente**

Partiendo del esquema anterior, y previa valoración de la documentación e información proporcionada, el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., cumple con los requisitos constitucionales y legales en la materia.

De conformidad con el análisis financiero realizado, se acredita la capacidad financiera del Municipio, sin perjuicio de la continuidad de la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de las funciones públicas.

Cabe señalar que los 13 proyectos a desarrollar con los recursos de los financiamientos que se solicitan encuadran en el concepto de inversión pública productiva.

Al respecto, los artículos 2, fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 2, fracción XVI de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, definen el concepto de inversión pública productiva como «*toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.»*

De acuerdo a lo anterior, los proyectos que se pretenden desarrollar con los recursos que se obtengan de los financiamientos encuadran en el concepto de inversión pública productiva, considerando que, se encuentran vinculados de manera directa a las funciones y servicios públicos, que como obligación tiene a cargo el Ayuntamiento. De lo anterior, podemos desprender que, los proyectos provocarán directamente un beneficio social. Lo anterior, se justifica con la documentación y soporte técnico que el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., acompañó a la iniciativa materia del presente dictamen, misma que fue analizada y revisada con el objeto de identificar las características y alcances de los proyectos.

Como se había apuntado en el apartado correspondiente, el artículo 76, fracciones III, incisos a y b y IV, inciso a de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato el Ayuntamiento está obligado a la prestación de los servicios públicos a los habitantes del Municipio, instrumentando mecanismos para ampliar la cobertura y mejorar su prestación, dentro de los que encontramos calles, transporte público urbano y suburbano en ruta fija, parques, jardines, áreas ecológicas y recreativas y su equipamiento, drenaje y panteones, razón por la cual el fin primordial de los proyectos que se pretenden desarrollar es la prestación de servicios públicos a cargo del Municipio.

La documentación integrada a la iniciativa permite identificar con claridad cuáles son las condiciones de contratación y sobre las que debe construir el modelo financiero para determinar el comportamiento de la deuda y, por otra parte, los puntos sobre los que deberá versar en consecuencia, la autorización que otorgue este Congreso del Estado.

Asimismo, el acuerdo del Ayuntamiento respecto a las condiciones propuestas para la contratación de los financiamientos puede ser atendido con las condiciones financieras que actualmente prevalecen en el Municipio, existiendo capacidad para realizar la contratación en los términos propuestos, sin afectar su capacidad de pago.

Es así que, del análisis realizado a la capacidad de pago, se considera viable otorgar la autorización de endeudamiento al ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., hasta por la cantidad de $15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N), que tendrá como destino el financiamiento de 13 proyectos de inversión pública productiva, monto que se encuentra dentro del techo de financiamiento aplicable para el presente ejercicio; lo anterior como resultado del nivel de endeudamiento sostenible del sistema de alertas. Dicha autorización no deberá exceder de un plazo de 10 años contados a partir de la primera disposición y deberá contratarse bajo las mejores condiciones de mercado como fecha máxima el 31 de diciembre de 2023.

Por otra parte, los datos financieros del municipio de Apaseo el Grande, Gto., presentados en la iniciativa materia del presente dictamen demuestran que la contratación de los financiamientos no afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo, en razón de que la capacidad financiera se encuentra apegada a la normatividad en materia de disciplina financiera vigente.

En razón de que la contratación de los financiamientos deberá hacerse bajo las mejores condiciones de mercado, es conveniente que el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., solicite el apoyo a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a fin de que les permita utilizar el mecanismo de subasta electrónica inversa para que pueda contratar con las mejores condiciones de mercado, cumpliendo con lo establecido en los artículos 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 25 fracción I, inciso e, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, así como lo señalado en la Sección II de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos[[98]](#footnote-98), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2016.

Respecto a los compromisos de pago para el plazo que se propone, estos deberán estar amparados en el fortalecimiento de los ingresos fiscales del Municipio, debiendo realizar esfuerzos para incrementar y diversificar sus ingresos que permitan un crecimiento sostenible incluso por arriba de las estimaciones analizadas previamente; asimismo, deberá buscar que su gasto operativo se mantenga bajo un esquema que garantice la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos públicos y sus resultados, para que a través de un programa basado en la responsabilidad y uso eficiente de los recursos públicos, la administración municipal de Apaseo el Grande, Gto., pueda cumplir las disposiciones de disciplina financiera y presupuestal que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En razón de lo anteriormente señalado, quienes integramos esta Comisión determinamos procedente autorizar el endeudamiento que se solicita, considerando que la finalidad del mismo será para cumplir de manera eficiente con las funciones y servicios que tiene a su cargo el Municipio, generando con ello un beneficio social para la población. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, fracción V de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se autoriza la afectación de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al municipio de Apaseo el Grande, Gto., en garantía primaria del cumplimiento de las obligaciones derivadas del endeudamiento a contraer, estableciendo el mecanismo legal que sea conveniente para ello.

Es preciso señalar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., deberá destinar los recursos de los financiamientos, exclusivamente para los fines establecidos en el presente dictamen, quedando impedido para financiar el gasto corriente de la administración municipal.

Finalmente, es de destacar que la vinculación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide en el Objetivo 6 denominadoAgua Limpia y Saneamiento, respecto a las metas 6.2 y 6.3; en el Objetivo 11 denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles respecto a las metas 11.2, 11.3 y 11.7; así como en el Objetivo 16 denominadoPaz, Justicia e Instituciones Sólidas, en sus metas 16.6 y 16.7.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 63, fracción XIV de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**D E C R E T O**

***Autorización y monto de los financiamientos***

**Artículo Primero.** Previo análisis del destino y capacidad de pago, se autoriza al ayuntamiento del municipio de Apaseo el Grande, Gto., para que contrate con instituciones nacionales de banca múltiple o de desarrollo, uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de $15’000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 m.n.), pagaderos en moneda y territorio nacionales, mediante procesos competitivos; asimismo, para que pacte las condiciones y modalidades que resulten más convenientes.

***Destino de los financiamientos***

**Artículo Segundo.** Los recursos monetarios que se obtengan de los financiamientos a que se refiere el artículo primero del presente decreto se destinarán precisa y exclusivamente a los siguientes proyectos de inversión pública productiva y conforme a los montos que se refieren a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyectos** | **Montos** |
| 1. Construcción de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la colonia El Guadalupano 1ra. sección (1er. etapa) en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’200,000.00 |
| **II.** Rehabilitación de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la colonia El Pedregal, en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $500’000.00 |
| 1. Construcción de parque público y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la colonia El Molino de arriba (2da. etapa) en cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’130,000.00 |
| 1. Rehabilitación de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la colonia El Cerrito, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’150,000.00 |
| 1. Construcción de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en la colonia La Villita (1er etapa), en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $2’500,000.00 |
| 1. Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la colonia La Fundación, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $874,351.29 |
| 1. Rehabilitación de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamiento en Casa de la Cultura Antonio Plaza, cabecera municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’050,000.00 |
| 1. Construcción de parque recreativo y adquisición de bienes asociados al equipamientoen la comunidad de La Labor, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $600,000.00 |
| 1. Construcción de cancha de bateo y dugouts para el campo de beisbol de prácticas, en la localidad de Punta de Obrajuelo, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $127,760.31 |
| 1. Construcción de 40 parabuses en cabecera municipal y varias comunidades en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’500,000.00 |
| 1. Construcción de descanso y cubierta metálica en el panteón municipal, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’074,046.30 |
| 1. Interconexión de la red de drenaje sanitario calle Constituyentes (tramo Unideg-Ignacio Allende y tramo Casas Blancas - Rancho La Concepción), en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’509,842.10 |
| 1. Rehabilitación de calle Prolongación San Luis Montañez a base de carpeta asfáltica, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | $1’784,000.00 |
| **Total** | **$15’000,000.00** |

***Plazo de los financiamientos***

**Artículo Tercero.** El importe de las obligaciones que deriven a su cargo, conforme a las operaciones de financiamiento que realice en términos del presente Decreto, serán pagadas por el ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., a la correspondiente institución financiera nacional, a través del esquema jurídico y financiero que se elija y en un plazo que no excederá de 10 años, contados a partir de la primera disposición.

***Garantía y registros***

**Artículo Cuarto.** Previo análisis del destino y capacidad de pago, se autoriza al ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., para que en garantía o fuente de pago de las obligaciones a su cargo, derivadas de los financiamientos materia del presente decreto, afecte las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Municipio del Fondo General o Fondo de Fomento Municipal, las aportaciones federales susceptibles de afectación o ingresos propios en términos de la legislación aplicable, sin perjuicio de afectaciones anteriores, o la modalidad que sea más conveniente a las finanzas municipales, garantía que se inscribirá en el Registro Estatal de la Deuda Pública y Obligaciones, a cargo de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, así como en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

***Obligación de remitir información***

**Artículo Quinto.** El ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., remitirá al Congreso del Estado, dentro de los treinta días siguientes a la suscripción del contrato de apertura de crédito, copia certificada del mismo, incluyendo sus anexos.

***Plazo para ejercer la autorización***

**Artículo Sexto.** El ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., contará con un término hasta el 31 de diciembre de 2023 para suscribir los contratos correspondientes, de lo contrario la autorización quedará sin efecto.

***Recomendación de restringir el gasto corriente***

**Artículo Séptimo.** Se recomienda al ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., restringir las partidas de gasto corriente, a fin de que se cubran sin contratiempos los compromisos que se adquieran con la contratación del financiamiento.

***Obligación de informar en la cuenta pública***

**Artículo Octavo.** El ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., deberá informar en un apartado especial de los informes financieros trimestrales y de la cuenta pública anual sobre el avance físico y financiero de las obras y acciones a ejecutar con los recursos del financiamiento materia de la presente autorización.

**T R A N S I T O R I O S**

***Inicio de vigencia***

**Artículo Primero.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

***Publicación de información***

**Artículo Segundo.** El ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., en un plazo de treinta días contados a partir de la suscripción del contrato, deberá publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, las condiciones del contrato, que deberán incluir: Banco acreditante, monto, destino, tasas de interés, plazo de vigencia y programa de amortización.

***Notificaciones***

**Artículo Tercero.** Comuníquese el presente decreto al ayuntamiento de Apaseo el Grande, Gto., para los efectos conducentes.

Asimismo, comuníquese el presente decreto al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para los efectos del artículo 56 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Igualmente, remítase a la Auditoría Superior del Estado, para los fines que dispone el artículo 64 del citado ordenamiento.

**Guanajuato, Gto., 14 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA MAGDALENA ROSALES CRUZ Y LOS DIPUTADOS ENRIQUE ALBA MARTÍNEZ Y RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ ALBO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA ANTE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CIUDADANO JAVIER PÉREZ SALAZAR, PARA QUE LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO QUE EVALÚE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la pasada Legislatura le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el ciudadano Javier Pérez Salazar, para que lleve a cabo una auditoría específica de desempeño que evalúe las políticas públicas de desarrollo social y humano llevadas a cabo por el Gobierno del Estado, misma que se recibió como un pendiente legislativo.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

# D i c t a m e n

1. **Antecedentes**

La diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2021 presentaron la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que lleve a cabo la auditoría referida en el proemio del presente dictamen.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que la radicó el 21 de junio de 2021.

En reunión celebrada el 26 de octubre de 2021 esta Comisión acordó requerir al Auditor Superior del Estado la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que dicho funcionario expuso en la reunión celebrada el 14 de junio del año en curso.

1. **Consideraciones de la y los proponentes**

En las consideraciones de la propuesta materia del presente dictamen se refiere lo siguiente:

*El Estado de Guanajuato lleva casi 30 años gobernado por camarillas emanadas del mismo partido político. En este periodo, fue implementado un modelo de desarrollo neoliberal favorecido por las élites cleptómanas que se apropiaban de las instituciones para obtener beneficios privados con cargo al erario.*

*De esta manera, el modelo neoliberal dio una importancia preponderante al crecimiento económico, a la extracción de presupuesto mediante colaboraciones público-privadas o intereses pagados por deuda con la banca privada, así como a la supuesta eficiencia del libre mercado autorregulado como solución a todos los problemas, desplazando cuestiones* *como la pobreza o la desigualdad a un segundo plano.[[99]](#footnote-99) Más que reducir el Estado, el modelo neoliberal supuso su ampliación y utilización para promoción y beneficio del mercado.*

*Este modelo se tradujo en un auténtico drama social inducido que hasta hoy se mantiene, pues las soluciones de mercado a todos los problemas sociales y económicos no logran generar las supuestas condiciones de eficiencia y competitividad que se debieron traducir en bienestar social, sino que sólo propician una concentración acelerada de la propiedad y de la riqueza mediante mecanismos institucionales del poder público.*

*Al mismo tiempo, a pesar de los esfuerzos del actual gobierno federal, la pobreza, la desigualdad, los salarios precarios y la exclusión de los servicios públicos, siguen siendo un problema para la gran mayoría de la población.*

*Estos problemas, hasta el momento, no han establecido una respuesta efectiva por parte de los gobiernos panistas, incluso cuando el mismo marco jurídico de la entidad recoge la necesidad de que el poder público combata dichas problemáticas. Ejemplo de esto es que, pese a que desde 2009 la Ley de Desarrollo Social y Humano de nuestra entidad señala que las políticas públicas en la materia deben tener como objetivo promover un desarrollo económico con sentido social que propicie la elevación del nivel de ingreso,[[100]](#footnote-100) en el estado de Guanajuato este objetivo no se ha alcanzado.*

*Lo anterior puede verificarse cuando se observa que entre 2008 y 2018 la población vulnerable por ingresos pasó del 4.6% al 7.5%; es decir, se dio un aumento de casi 3 puntos porcentuales[[101]](#footnote-101) de guanajuatenses que contaban con un nivel de ingresos por debajo de lo mínimo requerido para el bienestar.*

*Asimismo, la propia ley señala que dichas políticas públicas de desarrollo social y humano deben incluir vertientes para la superación de la pobreza, para la seguridad social, el desarrollo regional, la infraestructura social básica, el desarrollo sustentable, la atención a grupos vulnerables y la igualdad de género.[[102]](#footnote-102)* *Sin embargo, igualmente existen muchos indicios que generan dudas sobre la eficacia que estas políticas han tenido.*

*Esto puede verificarse cuando nos remitimos a los datos: primeramente, entre 2008 y 2018, la población guanajuatense en situación de pobreza pasó de un 44.1% a un 43.4%, es decir, tuvo una disminución relativa de apenas 0.7%, lo cual de hecho significó un aumento absoluto de 184 mil 300 personas en esta situación. Este dato coloca a Guanajuato por debajo de la media nacional, que en el mismo periodo de tiempo redujo la pobreza 2.4%.[[103]](#footnote-103)*

*Del mismo modo, los salarios de los empleos que la política neoliberal de Guanajuato ha generado son paupérrimos. Ejemplo de esto es que a 2020, el nivel de pobreza laboral se encontró en 35.5%; es decir, más de 1 de cada 3 guanajuatenses tiene ingresos laborales insuficientes para adquirir la canasta básica.[[104]](#footnote-104)* *A esto se suma que, a inicios de 2021, el promedio de salario diario de los trabajadores asegurados en el IMSS es de 367.8 pesos, muy por debajo de la media nacional que alcanza 428 pesos.[[105]](#footnote-105)*

*Con respecto a la igualdad de género, los datos de violencia son otra muestra de la probable ineficacia de las políticas en su dimensión de género, pues para 2019 hubo un total de 340 muertes violentas de mujeres, de las cuales solo 18 casos fueron investigados y catalogados como feminicidios.[[106]](#footnote-106)*

*Ahora bien, vale la pena señalar que estos pobres resultados en materia de política de desarrollo social y humano no son atribuibles a la falta de presupuesto, pues en el mismo periodo de 2008-2018, el gobierno estatal ejerció 20 mil 327 millones 507 mil 553 pesos en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU),[[107]](#footnote-107)* *situación que ha continuado, pues con lo ejercicio en 2019 y 2020, así como lo proyectado para este 2021, se estarían añadiendo 5 mil 73 millones 315 mil 819 pesos más.[[108]](#footnote-108) A este ritmo, reducir cada punto porcentual de la población en situación de pobreza, podría estar costando al Estado de Guanajuato más de 29 mil millones de pesos.*

*Esta cifra puede ser incluso mayor cuando consideramos que no sólo la SEDESHU debe abonar a los objetivos del Desarrollo Social y Humano, pues una revisión de los presupuestos de egresos del periodo 2018-2021, permite observar que los programas de inversión social de los ejes en la materia incluyeron intermitentemente al Instituto de la Juventud Guanajuatense, al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, al Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, e incluso a la Secretaría de Gobierno.*

*Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que es prioritario que las políticas públicas de desarrollo social y humano sean eficaces, basadas en evidencia y orientadas a combatir la pobreza, pues sólo así estaremos en condiciones de alcanzar un desarrollo pleno para todas y todos los guanajuatenses.*

*Por esto, estamos convencidos de que se requiere una evaluación integral de las políticas públicas de desarrollo social y humano llevadas a cabo por el Gobierno del Estado.*

*Dado el amplio presupuesto erogado en las mismas, creemos que dicha evaluación debe contemplar una revisión de su integralidad en términos de evaluar la coherencia interna y externa de las intervenciones que conforman las políticas públicas materia de evaluación; es decir, un análisis de la forma en que los diferentes programas y acciones son capaces o no de complementarse, así como su orientación hacia la consecución del desarrollo social y humano.*

*Asimismo, dado el interés plasmado en las leyes respecto al fomento, organización y participación ciudadana[[109]](#footnote-109), es pertinente que la evaluación analice la capacidad de las intervenciones que conforman las políticas públicas en la materia para garantizar el derecho a la ciudadanía a participar en su formulación, ejecución y evaluación.*

*Por su parte, existe consenso en la evidencia científica acerca de la importancia de la cobertura y alcance que tienen las políticas sociales como uno de los principales factores de incidencia para su efectividad.[[110]](#footnote-110) Por esto, la evaluación necesita analizar el alcance planificado y efectivo que tuvieron las intervenciones que conforman las políticas públicas materia de evaluación.*

*Asimismo, la situación política de predominio electoral de la misma fuerza política durante décadas es un factor de riesgo para que se presenten fenómenos relacionados con la corrupción como el clientelismo, el patrimonialismo, el uso político de la pobreza o la falta de transparencia y rendición de cuentas. Por esto, también es relevante para una evaluación como la que se propone analizar los mecanismos disponibles y utilizados para garantizar un uso adecuado de los recursos asignados a las políticas de desarrollo social y humano. Específicamente de la capacidad de las políticas públicas en la materia para prevenir e identificar su uso político-electoral y otras formas de corrupción.*

*Por último, la incidencia que tienen las políticas de desarrollo social y humano es un eje imprescindible en una evaluación de éstas, por lo cual se deben analizar los efectos que las políticas públicas materia de evaluación tuvieron sobre los niveles de desarrollo social y humano, así como si la información disponible permite inferir si dichos efectos son razonablemente atribuibles a éstas.*

*La competencia de la evaluación en mención correspondería a la ASEG, en función del alcance de las auditorías de desempeño normadas en la Ley de Fiscalización local13. Igualmente, debido al año base de cambio de gobierno, se propone un periodo de análisis del 2018 al 2021, con lo cual se espera que la evaluación sea presentada a más tardar en noviembre de 2022.*

Asimismo, se propone que la materia de evaluación sean las políticas públicas de desarrollo social y humano, según el análisis que para sus efectos realice el ente evaluador, considerando, al menos, los siguientes criterios de inclusión: Incluir todos los programas del ámbito estatal vinculados a los objetivos marcados por el artículo 10 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de manera directa e indirecta, que se contemplaran en los presupuestos de egresos del Estado de Guanajuato para los ejercicios fiscales de 2018 al 2021; e incluir las acciones estratégicas impulsadas por la administración pública estatal entre 2018 y 2021 que no necesariamente forman parte de la estructura programática, a partir de la revisión de informes de trabajo oficiales de las instancias vinculadas al Sistema Estatal para el Desarrollo Social y Humano, así como del propio Sistema. Que la evaluación incluya, al menos, los elementos de integralidad, participación social, cobertura y alcance, rendición de cuentas y prevención de la corrupción e incidencia en el desarrollo social y humano. Así como incluir en la evaluación un dictamen general en el que se emita una opinión fundamentada acerca de calidad de la política de desarrollo social y humano del Gobierno del Estado.

1. **Consideraciones de la Comisión**

Como podemos desprender de la propuesta de punto de acuerdo que se dictamina el objeto de la misma es la realización de una auditoría específica de desempeño que evalúe las políticas públicas de desarrollo social y humano efectuadas por el Gobierno del Estado.

En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos encomendados a los sujetos de fiscalización es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

También debemos destacar dentro del tema de fiscalización la revisión del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía; así como la evaluación de las políticas públicas.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.

El Poder Ejecutivo del Estado, así como las dependencias y entidades de la administración pública estatal son sujetos de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XVIII y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracciones I y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo antes señalado, coincidimos con la y los proponentes en la necesidad en evaluar la eficacia de las políticas públicas en materia de desarrollo social y humano.

Al respecto, es de señalar que las cifras al 2020 refieren que el porcentaje de la población guanajuatense en situación de pobreza pasó de 41.5%, en 2018, a un 42.7%, en 2020, lo que significó un incremento de 1.3 puntos porcentuales. Dicha cifra se encuentra por debajo del promedio nacional cuyo valor fue equiparable a un incremento de 2 puntos porcentuales, como se detalla en el gráfico siguiente:

**Variación en el porcentaje de la población en situación de pobreza, 2018 - 2020**

Fuente: Elaborado por la ASEG, con información del Resumen Ejecutivo de Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020, emitido por el CONEVAL. La variación, o diferencia, se obtiene como resultado de la resta de los porcentajes de la población en situación de pobreza del periodo actual (2020), menos el porcentaje del periodo anterior (2018). La cifra puede variar por decimales.

En términos generales, de las 32 entidades federativas, 13 (40.6%) mostraron una disminución de los porcentajes de población en situación de pobreza, cuyos rangos de decremento oscilaron entre los 5.3 puntos porcentuales, en el caso de Nayarit, y de 0.1 en el caso de Durango. Caso contrario, para las 19 (59.4%) entidades federativas restantes, el incremento osciló entre el 0.1, en el caso de Coahuila, y el 17.3 puntos porcentuales en el de Quintana Roo.

En el grupo de entidades federativas que presentaron un incremento del porcentaje de población en situación de pobreza, el estado de Guanajuato fue el quinto con menor diferencia, con un incremento de 1.3 puntos porcentuales, respecto del año base (2018).

Por lo que hace a los indicadores de las carencias sociales, entendiendo éstos como aquellos que miden el enfoque de los derechos sociales incorporados en la medición multidimensional de la pobreza en México, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL), se tienen 6 indicadores señalados en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social que se consideran para la medición multidimensional de la pobreza en México, los cuales son: a) Rezago educativo; b) Acceso a los servicios de salud; c) Acceso a la seguridad social; d) Calidad y espacios de la vivienda; e) Acceso a los servicios básicos en la vivienda; y f) Acceso a la alimentación.

El comportamiento de dichos indicadores se resume a que las condiciones de vulnerabilidad, ocasionadas por la carencia de los derechos sociales, han presentado una evolución favorable para el contexto local, en razón de que, para 2020, el porcentaje de personas que presentaron dichas condiciones fueron menores a los del periodo base de comparación (2008). Tal como se detalla en la tabla siguiente:

**Medición de la pobreza en Guanajuato, serie 2008 - 2020**



Fuente: Elaborado por la ASEG, con base en los anexos estadísticos de la medición de la pobreza por entidad federativa, emitido por el CONEVAL.

(\*) Las cifras corresponden a la serie 2018-2020, las cuales fueron trabajadas mediante la tercera edición de la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, la cual sufrió adecuaciones respecto de las ediciones anteriores. El resto de las cifras corresponden a la serie de pobreza 2008-2018, cumpliendo un periodo de 10 años en los que la metodología de pobreza multidimensional se mantuvo sin modificaciones, en concordancia con lo aprobado por su Comité Directivo en 2010.

De la tabla anterior, podemos desprender que los seis indicadores de carencias sociales presentaron cambios favorables. De acuerdo con el orden listado, el indicador de rezago educativo tuvo una disminución de 2.6 puntos porcentuales, al pasar de 25.8% en 2008 a un 23.2% en 2020.

Por su parte, el indicador de carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 36.2% en 2008 a 24.8% en 2020, lo que significó una disminución de 11.3 puntos porcentuales. De la misma forma, el indicador de carencia por acceso a la seguridad social fue el que presentó la variación más amplia, equivalente a 14.8 puntos porcentuales, como resultado de pasar de 66.7% en el periodo base, a 51.9% en 2020.

En el indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda, se observó una disminución de 7.3 puntos porcentuales, seguida de los 5.8 puntos del indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y, finalmente, la carencia por acceso a la alimentación con una disminución de 2.4 puntos porcentuales, respectivamente.

Adicionalmente, se identificó que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL), aun cuando el número de personas en situación de pobreza en Guanajuato aumentó 0.7% en promedio anual —al pasar de 2,403.6 miles de personas, en 2008, a 2,587.8 miles, en 2018—, la proporción de personas que se encontraron en dicha condición, considerando el crecimiento poblacional del Estado, registró una disminución de 0.7 puntos porcentuales, la cual pasó de 44.1% a 43.4% en el periodo referido, lo que evidencia que, en dicho periodo, el porcentaje de la población con al menos una carencia social y con ingreso inferior a la línea de bienestar (valor total de la canasta alimentaria y no alimentaria al mes) se ha reducido.

También resulta relevante señalar que la pobreza extrema en el estado de Guanajuato decreció 3.7 puntos porcentuales de 2008 a 2018, al pasar de 7.9% a 4.2%, lo que denota una disminución en el número de personas con tres o más carencias sociales. No obstante, la pobreza moderada (definida como aquella que, a pesar de estar en situación de pobreza, no cae en la categoría de ser extrema) registró un aumento de 2.9 puntos porcentuales, al pasar de 36.2% a 39.1%, en esos años.

De las cifras antes referidas, podemos desprender que la realidad social en el Estado de Guanajuato cambió en los últimos años, ya que si bien, no se ha abatido la pobreza, se ha reducido el porcentaje de la población en condición de pobreza extrema, lo que a su vez ha disminuido la vulnerabilidad de los y las guanajuatenses.

Lo anterior no es significado de que la política pública deba mantenerse como está, sino que resulta pertinente valorar, a partir de un diagnóstico completo, qué aspectos se requieren modificar, reorientar o adecuar para atender el fenómeno problemático actual, a fin de identificar cómo dinamizar una estrategia que incentive mejores resultados. Ello, sobrepasa el alcance de las auditorías de desempeño, debido a la convergencia de múltiples programas presupuestarios[[111]](#footnote-111), así como a la necesidad de evaluar periodos más largos de tiempo, que no se circunscriban a la caducidad definida para el proceso de fiscalización mandatado para las *«auditorías»* en el artículo 34, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

1. **Cobertura de revisiones previas a los programas de desarrollo social**

Desde el año 2015 y hasta el 2020, la Auditoría Superior del Estado ha diseñado, ejecutado e informado cerca de 296 auditorías con enfoque de desempeño, de las cuales 72 (24.3%) se han dirigido al Poder Ejecutivo del Estado. En ese contexto, se tiene que parte de la cobertura de las auditorías de desempeño realizadas ha enfocado esfuerzos en la revisión de programas y proyectos que componen la política social del Estado, por lo que llevar a cabo una nueva revisión, bajo el formato de auditoría de desempeño, pudiera arrojar resultados similares a lo ya conocido.

En ese supuesto, se encuentran al menos 12 programas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, otros 13 asociados al sector educativo, 12 sobre el eje económico y 4 más del sector salud, por mencionar algunos. Lo anterior, adicional a los trabajos que actualmente se llevan a cabo y que forman parte del Programa General de Fiscalización 2022.

Por lo anterior, se sugiere reconsiderar el planteamiento realizado en el exhorto, relativo a la práctica de «una auditoría específica de desempeño» que evalúe las políticas públicas de desarrollo social y humano ejecutadas por el Gobierno del Estado, y que el mismo se reoriente a la definición de una estrategia de evaluación de política pública, en los términos siguientes:

1. **Consideraciones metodológicas de la evaluación de políticas públicas**

Dentro de los compromisos asumidos por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, así como por los retos plasmados en la configuración del plan estratégico institucional con visión al 2027, se encuentra la puesta en marcha de un área especializada en la práctica de análisis, investigación y evaluación de políticas públicas (Unidad de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas), con el propósito de favorecer el uso racional y la optimización de los recursos públicos, generar información para que los entes públicos realicen un mejor diseño e implementación de sus políticas públicas y promover la cultura de la evaluación y de calidad de las mismas en la Entidad, complementando con ello a los objetivos específicos de la auditoría de desempeño[[112]](#footnote-112).

Para tal efecto, actualmente la Auditoría Superior del Estado se encuentra en proceso de elaboración de una propuesta para definir los aspectos institucionales, orgánicos y profesionales del área especializada, la cual formará parte de la Auditoría Especial de Evaluación y Desempeño, con la debida diferenciación de la Dirección de Auditorías de Desempeño, por su orientación hacia la investigación, análisis y evaluación de políticas públicas.

En la actualidad la Auditoría Especial de Evaluación y Desempeño realiza auditorías de desempeño que tienen como finalidad fiscalizar si las acciones, programas y actividades del gobierno operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia, con base en un marco normativo establecido, a fin de verificar si existen áreas de mejora. Estas se realizan con información del año inmediato anterior, pudiendo incorporar datos históricos de cuentas públicas de hasta cinco años de antigüedad, sin estar sujetas al proceso de fiscalización.

Por aspectos metodológicos, en las evaluaciones de políticas públicas se requiere ampliar el alcance temporal y temático, ya que, a diferencia de una auditoría de desempeño, la evaluación de políticas públicas no se ciñe al análisis de una cuenta pública determinada sino que, dado que uno de sus objetivos es analizar las partes de una estrategia pública, su alcance temporal abarca el lapso de la estrategia en revisión; además, una estrategia estatal puede partir de varios programas presupuestarios a cargo de más de una entidad responsable, lo que amplía el alcance institucional-programático de la evaluación.

Ampliando los detalles metodológicos previstos por la Auditoría Superior del Estado, las evaluaciones de políticas públicas comprenderán tanto la identificación como la evaluación del problema público que originó la intervención del Estado; el diseño de la política pública —el cual se integra por la estructura normativa, institucional, programática, presupuestal, metodológica y de evaluación, principalmente—; la implementación, para conocer el cumplimiento de las atribuciones conferidas a los entes responsables de operar la política pública; los efectos y los resultados de las estrategias, y un posicionamiento sobre la consistencia, eficiencia y eficacia de la política, así como un análisis prospectivo que permita estimar el comportamiento de las variables en estudio, en caso que la política pública continúe operando de la misma forma.

Cabe señalar que, derivado del proceso de fiscalización, en las evaluaciones de políticas públicas no se dictaminan cumplimientos, ni se emiten recomendaciones al desempeño, sino que se emite una opinión sobre el grado de atención del problema público; se identifican los aspectos susceptibles de mejora (en su aproximación a las recomendaciones de desempeño), considerando el diseño de la política para determinar, entre otras cosas, si el marco normativo es adecuado, si las atribuciones son suficientes, si las estrategias y líneas de acción son congruentes y consistentes con lo que el Estado pretende resolver, si los recursos son suficientes, si existe una óptima rendición de cuentas, y si se incorporaron medios de verificación y evaluación continuos; por lo que, las sugerencias no conllevan un proceso de seguimiento.

Lo anterior, implica un proceso de trabajo previo, tanto en aspectos metodológicos, normativos y del sistema de gestión de calidad, a efecto de que el proyecto de evaluación arranque sobre bases firmes desde su inicio. Trabajo que se encuentra en proceso y pretende concretarse en el presente ejercicio fiscal.

Por otra parte, en lo que respecta a la política de Desarrollo Social local, se identificó que, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la política incluye, entre otras, las vertientes siguientes: a) Superación de la pobreza; b) Educación; c) Salud; d) Alimentación; e) Generación de empleo y capacitación; f) Infraestructura social básica; g) Fomento del sector social de la economía; h) Desarrollo sustentable; i) Atención a grupos vulnerables; e j) Igualdad de género.

En su conjunto, dichas políticas públicas tienen, entre otros objetivos, propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos individuales y sociales; promover un desarrollo económico con sentido social que fomente el empleo y eleve el ingreso de las personas; impulsar el desarrollo social equilibrado; y garantizar la participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.

Hecho el análisis correspondiente, atendiendo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, para realizar una evaluación de las políticas públicas se requiere ampliar el alcance temporal y temático ya que uno de sus objetivos es analizar las partes de la estrategia pública, su alcance temporal abarca el lapso de la estrategia en revisión; además, una estrategia estatal puede partir de varios programas presupuestarios a cargo de más de una entidad responsable, lo que amplía el alcance institucional-programático de la evaluación, por lo que no se ciñe al análisis de una cuenta pública determinada, lo que implica un proceso de trabajo previo, tanto en aspectos metodológicos, normativos y del sistema de gestión de calidad, a efecto de que el proyecto de evaluación tenga bases firmes, lo cual de acuerdo al plan estratégico institucional con visión al 2027 de la Auditoría Superior del Estado se encuentra en proceso y pretende concretarse en el presente ejercicio fiscal.

Por otra parte, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que la Auditoría Superior del Estado actualmente está trabajando en la creación de un área especializada que se enfocará a la investigación, análisis y evaluación de políticas públicas, para lo cual se están analizando los aspectos metodológicos, normativos y del sistema de gestión de calidad, para que el proceso de evaluación de políticas públicas cuente con bases sólidas, lo cual se pretende que opere a partir del ejercicio fiscal 2023.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

A c u e r d o

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el ciudadano Javier Pérez Salazar, para que lleve a cabo una auditoría específica de desempeño que evalúe las políticas públicas de desarrollo social y humano llevadas a cabo por el Gobierno del Estado. Por lo tanto, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Bora Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE SOLICITAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO INFORME SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA VALE GRANDEZA – COMPRA LOCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021 Y HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA QUE INVESTIGUE Y AUDITE LA FALTA DE INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS EN EL PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS DE DICHO PROGRAMA.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato informe sobre presuntas irregularidades y violación a las Reglas de Operación del Programa *Vale Grandeza – Compra Local* para el ejercicio fiscal de 2021 y hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado para que investigue y audite la falta de información de beneficiarios de diversos municipios en el Padrón Estatal de Beneficiarios de dicho Programa.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 14 de octubre de 2021 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, informe sobre la irregularidad y violación a las Reglas de Operación del Programa *Vale Grandeza – Compra Local* para el ejercicio fiscal de 2021, al haberse ampliado injustificadamente el número de beneficiarios, pasando de 12,400, conforme al artículo 11 de las Reglas de Operación que pudieron recibir el apoyo sustancial de hasta $6,000.00 (doce ocasiones de $500.00), a un total reportado en el Padrón Estatal de Beneficiarios de 54,483 personas, que se reporta han recibido un apoyo por única ocasión de $500.00, con el que evidentemente no se cumple con la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con que deben administrarse los recursos públicos. Asimismo, informe sobre la falta de información de beneficiarios en los doce municipios que no aparecen al consultarse por Municipio, el Padrón Estatal de Beneficiarios en lo referente al Programa *Vale Grandeza – compra local*, ejercido en el año 2021; así como hacer de conocimiento a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la irregularidad y violación a las Reglas de Operación del Programa *Vale Grandeza – Compra Local* para el ejercicio fiscal de 2021, en que ha incurrido la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, al haberse ampliado injustificadamente el número de beneficiarios, pasando de 12,400 conforme al artículo 11 de las Reglas de Operación que pudieron recibir el apoyo sustancial de hasta $6,000.00 (doce ocasiones de $500.00), a un total reportado en el Padrón Estatal de Beneficiarios de 54,483 personas, que se reporta han recibido un apoyo por única ocasión de $500.00, con el que evidentemente no se cumple con la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con que deben administrarse los recursos públicos. Asimismo, para que investigue y audite la falta de información de beneficiarios en los doce municipios que no aparecen al consultarse por Municipio, el Padrón Estatal de Beneficiarios en lo referente al programa Vale *Grandeza – compra local*, ejercido en el año 2021.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó en la reunión celebrada el 19 de octubre de 2021. En dicha reunión se acordó requerir al Auditor Superior del Estado la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que dicho funcionario expuso a esta Comisión en la reunión celebrada el 14 de junio del año en curso.

1. **Consideraciones del proponente**

En las consideraciones expuestas por el proponente se refiere:

*El artículo 134 de la Constitución Federal establece que los recursos económicos de que dispongan las entidades federativas deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.*

*El Gobierno del Estado de Guanajuato creó en el año 2020 el programa “Vale Grandeza – compra local”, al que dio continuidad para el ejercicio 2021, publicándose el 31 de diciembre del 2020, en el periódico oficial las “Reglas de operación del Programa Vale Grandeza – Compra Local para el Ejercicio Fiscal de 2021” (sic).*

*En las consideraciones expuestas al emitirse las Reglas de operación, en el párrafo cuarto se reconoce que con base en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS), que emitió CONEVAL en el 2018, se tenía un 4.2% de la población en pobreza extrema. Esta cantidad significa un aproximado de 240,000 personas guanajuatenses.*

*Como “Contexto del Programa” se estableció en esas Reglas de operación que el programa “Vale Grandeza – compra local” servía para complementar la Estrategia impulso económico Gto, que a su vez era parte del Plan de Acción GTO, exponiendo que se implementó “para salir adelante ante la contingencia de salud provocada por el virus SARS-COV-2 o COVID-19, apoyando a los guanajuatenses que se encuentran en situación de vulnerabilidad por falta de ingresos, de forma oportuna, rápida y eficaz, mediante el otorgamiento de vales económicos, para adquirir productos de primera necesidad, que permitan satisfacer sus necesidades básicas, coadyuvando al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias y de la comunidad…”*

*Por otra parte, se tiene que el artículo 11 de las Reglas de operación establece a la letra:*

*Artículo 11. El programa tiene como meta beneficiar a 12,400 doce mil cuatrocientos personas con el otorgamiento de apoyos Vales Grandeza.*

*A su vez, el artículo 10 de las Reglas de operación especifica que el tipo de apoyo es el consistente en la entrega de 10 Vales Grandeza con un valor de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.), los que suman un total de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), que se entregan a la persona beneficiaria, hasta por doce ocasiones.*

*Artículo 10. El Programa oferta los siguientes tipos de apoyos:*

*La entrega de 10 Vales Grandeza con un valor equivalente cada uno de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N), siendo la suma total de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) que se entrega a la persona beneficiaria, hasta por doce ocasiones, canjeables por productos básicos en los comercios locales participantes del Programa.*

*Bajo la regla de recibir el apoyo hasta por doce ocasiones, se tiene que los beneficiarios llegarían a recibir hasta $6,000.00 seis mil pesos en total.*

*Con los datos citados, bajo un análisis sencillo, se advierten claras inconsistencias.*

*Considerando que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de Guanajuato tiene 6´166,934 seis millones ciento sesenta y seis mil novecientos treinta y cuatro habitantes.[[113]](#footnote-113)*

*Primeramente podemos establecer que un programa social como el descrito, cuya meta establecida fue beneficiar 12,400 doce mil cuatrocientos ciudadanos, representa solo el 0.20% del total de población, lo que es un porcentaje muy mínimo.*

*A su vez, de acuerdo con el Informe de pobreza y evaluación 2020 Guanajuato2 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), se tiene como información lo siguiente, en la página 14 de este informe:*

*“En 2018, el 80.3% de la población en #Guanajuato estaba en situación de #pobreza o de #vulnerabilidad por carencias o ingresos.*

*De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2018, el 43.4% de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir, 2,587,800 personas, aproximadamente. De este universo, el 39.1% (cerca de 2,334,600 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 4.2% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor de 253,300 personas).* ***El porcentaje de pobreza en Guanajuato es 1.5 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (41.9%).***

*En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Guanajuato fue de 29.4%, es decir, 1,755,000 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo,* ***7.5% de la población era vulnerable por ingresos****, lo que significa que alrededor de 445,600 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.”*

*(El resaltado en negrita y subrayado es propio).*

*…*

*Considerando la información anterior del CONEVAL, la población vulnerable por carencias sociales en Guanajuato es de 1´755,000 un millón setecientas cincuenta y cinco mil personas, que representan un 29.4% de la población total, de las que a su vez 445,600 cuatrocientas cuarenta y cinco mil seiscientas personas, son población vulnerable por ingresos.*

*Bajo esta línea de análisis, los 12,400 doce mil cuatrocientos beneficiarios como meta del programa social “Vale Grandeza – compra local” solo representan un 2.78% del total de la población reconocida en estado de vulnerabilidad.*

*Sin embargo, al día de hoy, al consultarse el Padrón Estatal de Beneficiarios (PEB), en la página oficial siguiente:*

[*https://peb.guanajuato.gob.mx/Busquedas/Programas*](https://peb.guanajuato.gob.mx/Busquedas/Programas)

*Al buscar información sobre el programa “Vale Grandeza – Compra local” en dicho padrón estatal, arroja como total de registro de beneficiarios, la cantidad de 54,483 cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres personas, y todos ellos con un reporte de “Apoyo/Servicio/Acciones” de $500.00 quinientos pesos, es decir, un apoyo por una sola ocasión.*

*Esta información evidencia una aplicación irregular del programa, porque de acuerdo a sus Reglas de operación estaba destinado a beneficiar a 12,400 doce mil cuatrocientas personas hasta en doce ocasiones, y violentando las reglas previstas, se tiene que en el ejercicio del año 2021 de este programa se entregó por única ocasión un apoyo de $500.00 quinientos pesos a 54,483 cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres personas.*

*Bien podría en principio pensarse que beneficiar a más personas es positivo, sin embargo no es correcta tal conclusión, porque si atendemos al “Contexto del Programa” expuesto en las Reglas de operación, así como el Objetivo general del Programa (artículo 4), Objetivos específicos del programa (artículo 5); Población potencial (artículo 6); Población objetivo (artículo 7), y; Población beneficiada (artículo 8), resulta evidente conocer que este programa estaba dirigido a personas “que se encuentran en situación de vulnerabilidad por falta de ingresos económicos provocados por la contingencia sanitaria generada por el COVID-19”.*

*Como ya se ha expuesto supra líneas, en tal situación existen en el Estado de Guanajuato 1´755,000 un millón setecientas cincuenta y cinco mil personas, que representan un 29.4% de la* *población total, de las que a su vez 445,600 cuatrocientas cuarenta y cinco mil seiscientas personas, son población vulnerable por ingresos.*

*Aunque fuera limitado el alcance establecido en las Reglas de operación, con una cantidad de 12,400 doce mil cuatrocientos beneficiarios, la característica de otorgar hasta en doce ocasiones el apoyo, significaba atender con algún grado de eficacia el objetivo, pero contrario a ello, al violentarse las Reglas de operación y haber injustificadamente entregado por única ocasión un apoyo de $500.00 quinientos pesos a un total que hasta este momento reporta la Secretaría de Desarrollo Social y Humano es de 54,483 cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres personas, ha hecho ineficaz el programa, lo que hace necesario que esta Asamblea en ejercicio de sus facultades de fiscalización, investigue los motivos de violación evidente de las Reglas de operación del programa “Vale Grandeza – compra local”; además para* ***verificar que los beneficiarios reportados sean personas con las características de vulnerabilidad económica, a quienes se dirigió el programa****.*

*Por otra parte, la información visible en el Padrón Estatal de Beneficiarios, hoy en día es incompleta y evidencia posibles irregularidades que deben ser aclaradas. Tiene la opción de mostrar el total de beneficiarios, y también en forma particular por municipios, utilizando para identificar estos, las claves asignadas por el INEGI.*

*Al revisar las claves que aparecen, no existe información de 12 municipios, lo que hace suponer que ahí no se aplicó el programa, lo que en todo caso debe ser de interés para este Pleno conocer, por tratarse de recursos públicos, que en todo caso deben aplicarse en forma equitativa.*

*…*

*Haciendo un análisis de lo anterior se tiene el siguiente reporte de municipios en que sí hay información de beneficiarios y en los que no, atendiendo al número de clave de cada municipio asignado por INEGI:*

*…*

*Lo anterior, sin demérito de hacer de conocimiento de la Auditoría Superior del Estado, la irregularidad que se configura de la información que tiene disponible la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sobre el programa social “Vale Grandeza – compra local”, aplicado en este ejercicio fiscal 2021.*

*Debiendo así mismo conocerse el convenio firmado entre el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), porque es a través de esa institución que se ha pagado y canjeado los vales, además de los comercios locales autorizados que a su vez son pagados por el mismo ISSEG.*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de investigar y auditar la falta de información relativa a la operación del Programa *Vale Grandeza – Compra Local, el padrón de beneficiarios y sus reglas de operación.*

En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos encomendados a los sujetos de fiscalización es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

También debemos destacar dentro del tema de fiscalización la revisión del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía; así como la evaluación de las políticas públicas.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.

El Poder Ejecutivo del Estado, así como las dependencias y entidades de la administración pública estatal son sujetos de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XVIII y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracciones I y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo antes señalado, coincidimos con el proponente en la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos.

De la propuesta podemos desprender la pretensión de solicitar al Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado un informe sobre presuntas irregularidades y violación a las Reglas de Operación del Programa *Vale Grandeza – Compra Local* para el ejercicio fiscal de 2021 y hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior del Estado para que investigue y audite la falta de información de beneficiarios de diversos municipios en el Padrón Estatal de Beneficiarios de dicho Programa.

En la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, se señala que en los ejercicios 2021 y 2022 se incluyeron las siguientes revisiones y auditorías vinculadas con el Programa referido en la propuesta de punto de acuerdo que nos ocupa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Materia** | **Objetivo** | **Hitos** |
| 2021 | Programa Vale Grandeza - Compra Local (Q3391) | Fiscalizar la contribución de la entrega y canje de los Vales Grandeza como programa emergente para reducir los riesgos económicos provocados por la contingencia sanitaria del COVID-19 a la población vulnerable por ingresos y los comercios locales. | Se emitieron 6 recomendaciones, mismas que fueron valoradas bajo el estatus de *«Realizará»*.  Al respecto, el Poder Ejecutivo diseñó un plan de acción para mejorar el desempeño del programa. |
| 2022 | Revisión de la cuenta pública 2021 del Poder Ejecutivo. | Los trabajos corresponden al Programa General de Fiscalización 2022 se encuentran en fase de planificación.  Entre los trabajos por realizar se considerará la revisión al cumplimiento de diversos artículos de las Reglas de Operación del Programa Vale Grandeza – Compra Local (Q3450). | No aplica. |

Fuente: Elaboración propia.

Aunado a lo anterior, de la auditoría de desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado, con enfoque de resultados del Programa *Q3391 Vale Grandeza-Compra Local*, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020, incluida en el Programa General de Fiscalización del ejercicio 2021, cuyo informe de resultados se aprobó por el Pleno el Congreso en la sesión ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2022, se generaron las siguientes conclusiones en el citado informe de resultados:

**Respecto de la integración del padrón de beneficiarios**

* *Se identificaron deficiencias en la integración de la información de las fechas de aprobación y entrega de los vales, por lo que se considera que la información generada por el sujeto fiscalizado careció de los controles para garantizar la calidad de los datos.*

*Con base en la información analizada durante la auditoría, se evidenciaron* ***deficiencias en los mecanismos de control utilizados para*** *garantizar que los sistemas de información de la SEDESHU, como responsable de* ***la******integración del padrón de beneficiarios*** *del programa, estuvieran integrados por información clara, relevante y confiable de los datos de los beneficiarios que fueron autorizados para recibir el apoyo otorgado por el programa, las fechas en las que se recibió, analizó y autorizó su solicitud, así como los datos de las fechas en las que fueron entregados los vales correspondientes, por lo que se considera que no dispuso de los elementos necesarios para administrar y mitigar cualquier riesgo relacionado con la selección y entrega de los apoyos ofertados por el programa «Vale Grandeza-Compra Local*».

**Respecto de la entrega de los vales**

* *Con base en los registros del padrón de beneficiarios, se constató que* ***el 94.3% (97,649)*** *de los casos los apoyos* ***se entregaron dentro de la vigencia*** *de las reglas de operación; no obstante, en el caso del 5.7% (5.929) los vales se entregaron hasta enero de 2021.*
* *En cuanto a la distribución y entrega de los apoyos otorgados por el programa «Vale Grandeza-Compra Local», se constató que éste benefició a 103,578 personas* ***distribuidas en los 46 municipios*** *que conforman el Estado de Guanajuato, como se muestra en el siguiente mapa:*



Fuente: Informe de Resultados de la Auditoría de Desempeño al Programa Q3391 Vale Grandeza – Compra Local, correspondiente a la cuenta pública 2020.

De manera general, se puso a consideración de las autoridades competentes que, en caso de optar por mantener el programa en operación una vez superados los efectos de la pandemia por Covid-19, se estima conveniente realizar un análisis para verificar si hay fragmentaciones,[[114]](#footnote-114) superposiciones[[115]](#footnote-115) o duplicaciones[[116]](#footnote-116) en los programas ofertados por el Estado que buscan atender la seguridad alimentaria desde una perspectiva de acceso.

Es así, que de la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado podemos desprender que, en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de 2021, se considerará la revisión al cumplimiento de diversos artículos de las Reglas de Operación del Programa *Vale Grandeza – Compra Local (Q3450*). Asimismo, en su momento, se sancionó por este Poder Legislativo el informe de resultados de la auditoría de desempeño practicada al Poder Ejecutivo del Estado, con enfoque de resultados del Programa *Q3391 Vale Grandeza-Compra Local*, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020 en el que se formularon diversas recomendaciones en relación al padrón de beneficiarios.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio 2021 se considerará la revisión al cumplimiento de diversos artículos de las Reglas de Operación del Programa *Vale Grandeza – Compra Local (Q3450*), en la que podrán considerarse los hechos planteados por el proponente.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo a efecto de solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, informe sobre la irregularidad y violación a las Reglas de Operación del Programa *Vale Grandeza – Compra Local* para el ejercicio fiscal de 2021, al haberse ampliado injustificadamente el número de beneficiarios, pasando de 12,400, conforme al artículo 11 de las Reglas de Operación que pudieron recibir el apoyo sustancial de hasta $6,000.00 (doce ocasiones de $500.00), a un total reportado en el Padrón Estatal de Beneficiarios de 54,483 personas, que se reporta han recibido un apoyo por única ocasión de $500.00, con el que evidentemente no se cumple con la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con que deben administrarse los recursos públicos. Asimismo, informe sobre la falta de información de beneficiarios en los doce municipios que no aparecen al consultarse por Municipio, el Padrón Estatal de Beneficiarios en lo referente al Programa *Vale Grandeza – compra local*, ejercido en el año 2021; así como hacer de conocimiento a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la irregularidad y violación a las Reglas de Operación del Programa *Vale Grandeza – Compra Local* para el ejercicio fiscal de 2021, en que ha incurrido la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, al haberse ampliado injustificadamente el número de beneficiarios, pasando de 12,400 conforme al artículo 11 de las Reglas de Operación que pudieron recibir el apoyo sustancial de hasta $6,000.00 (doce ocasiones de $500.00), a un total reportado en el Padrón Estatal de Beneficiarios de 54,483 personas, que se reporta han recibido un apoyo por única ocasión de $500.00, con el que evidentemente no se cumple con la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con que deben administrarse los recursos públicos. Asimismo, para que investigue y audite la falta de información de beneficiarios en los doce municipios que no aparecen al consultarse por Municipio, el Padrón Estatal de Beneficiarios en lo referente al programa Vale *Grandeza – compra local*, ejercido en el año 2021. Por lo tanto, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE QUE SE ORDENE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA ESPECÍFICA RESPECTO DE TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2015 AL 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la realización de una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense, correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2021 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a que realice a la brevedad posible una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 9 de diciembre de 2021. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones de la proponente**

En las consideraciones expuestas por la proponente se refiere lo siguiente:

*En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 114, de fecha 17 de julio del año 2007, se publicó el Decreto Gubernativo número 36, mediante el cual se creó el Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato, como un órgano desconcentrado de la Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud, con el fin de promover y tutelar los derechos de los jóvenes.*

*Posteriormente, la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado emitió el Decreto número 266 mediante el cual se expidió la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 142, Segunda Parte, del 4 de septiembre de 2009.*

*Con base en dicha ley, el 28 de diciembre del año 2009 fue decretada la extinción del Órgano Desconcentrado denominado Instituto Estatal de la Juventud de* *Guanajuato, mismo que fue sustituido por el Instituto de la Juventud Guanajuatense, que fue creado mediante el mismo decreto Gubernativo número 130.*

*El Instituto de la Juventud Guanajuatense es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, encargado de la ejecución, promoción e impulso de las acciones en materia de juventud del Gobierno del Estado. Posteriormente, el 16 de diciembre del año 2014, mediante el Decreto Número 205 fue expedida la Ley para la juventud del Estado de Guanajuato.*

*Dicho Instituto, conocido como Guanajuve, tuvo entre sus objetivos el coadyuvar a la reconstrucción del tejido social a fin de garantizar la seguridad, la justicia y la paz social del Estado, mediante el empoderamiento de la sociedad y la creación de oportunidades para que los grupos vulnerables tengan una juventud sana.*

*En el año 2015, el entonces gobernador Constitucional del Estado Miguel Márquez Márquez, nombró a Jorge Romero Vázquez como director del Instituto de la Juventud Guanajuatense y el actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo ratificó en dicho cargo; por lo que Jorge Romero continuó ocupando la dirección del Guanajuve hasta el año 2020.*

*Durante los 5 años en que Jorge Romero se mantuvo en el cargo, tuvo bajo su responsabilidad el manejo de cuantiosas sumas de recursos públicos destinados a la creación y seguimiento de políticas públicas destinadas a lograr el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes guanajuatenses, garantizando con ello un desarrollo integral que les permita cumplir su proyecto de vida.*

*Para poner solo algunos ejemplos, para el ejercicio fiscal del año 2020 en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado fueron etiquetados recursos por un total de $29’069,077.67, en el ejercicio fiscal del año 2019 fueron $29’956,899.25 y en 2018 se asignaron $29’390,909.25*

*Durante el ejercicio 2020 el presupuesto contempló asignaciones para el proyecto denominado “Q0300 Desafío Joven”, mismo que estuvo a cargo del Instituto y que tuvo como objetivo contribuir a la participación activa de los jóvenes en los ámbitos de desarrollo, buscando que lo hagan ser más competitivo en su entorno.*

*Asimismo, buscaba contribuir a elevar el nivel de competitividad de la juventud, considerando las condiciones y habilidades particulares de cada aspirante para poder generar un mayor impacto en su crecimiento profesional[[117]](#footnote-117). A través de este programa se entregaban apoyos directamente a los beneficiarios a través de becas, premios y proyectos.*

*Igualmente, en el año 2020 el Guanajuve implementó el “Programa Q0302 Sé Jóven, Sé Tú”[[118]](#footnote-118); cuyo objetivo fue posicionar la atención de los jóvenes a través de acciones ejecutadas por las instancias de juventud dependientes de los gobiernos municipales, considerando las condiciones particulares y el contexto específico de la comunidad, mediante acciones que contribuyan a la prevención de riesgos psicosociales, al fortalecimiento de su identidad y valores, a la generación de proyectos de vida para la población joven del Estado.*

*En el mismo sentido, en el ejercicio 2020 fue ejecutado por el Instituto el programa “Q0401 Juventud de Grandeza”[[119]](#footnote-119), con la finalidad de fortalecer la formación de los Jóvenes, su integración y participación en la sociedad, mediante la realización de acciones que contribuyan a la prevención de riesgos psicosociales, al fortalecimiento de su identidad y valores, así como a la generación de proyectos de vida para la población Joven del Estado.*

*Asimismo, a lo largo de su existencia, el Guanajuve celebró diversos convenios de coordinación y alianzas con otras instituciones del estado y de la Federación, que le permitieron implementar acciones, programas y manejar recursos para llevar a cabo sus funciones y ampliar sus áreas de atención.*

*Siendo de tal magnitud el ámbito de acción del Instituto que dirigía Jorge Romero Vázquez y la cantidad de recursos públicos de carácter estatal y federal que él tenía a su cargo, es que resulta necesario que la Auditoría Superior del Estado realice una revisión a las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense durante su gestión.*

*Lo anterior en virtud de que durante las últimas semanas el entonces Director del Instituto y ahora Diputado Federal electo, ha sido acusado de cometer cuando menos dos delitos de violación; acusaciones que sin lugar a dudas ponen en entredicho su honorabilidad, objetividad y probidad para desempeñar cualquier cargo público; máxime uno que le permitía amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de programas, acciones y recursos.*

*Al respecto, es importante destacar que además de las denuncias formalmente interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, hay otras víctimas que han manifestado haber sido coaccionadas a realizar actividades en contra de su voluntad a cambio de obtener becas o programas del Instituto de la Juventud Guanajuatense.*

*Sin lugar a dudas, todas esas acusaciones ponen en tela de juicio el manejo que se dio a Guanajuve durante el tiempo que duró la titularidad de Jorge Romero y permiten suponer la existencia de tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos y el uso indebido de atribuciones y facultades por parte del funcionario. Si bien es cierto que el multicitado Instituto ya no existe, pues con la aprobación de la Ley de las Juventudes del Estado de Guanajuato en septiembre de 2020, se creó el organismo denominado Instituto de Atención y Desarrollo de las Juventudes de Guanajuato o Juventudes Gto; mismo que fusionó al Instituto de Financiamiento e Información para la Educación con el Instituto de la Juventud Guanajuatense. Este nuevo instituto absorbió las funciones, programas y proyectos de Educafin y Guanajoven, intentando optimizar los recursos públicos, aumentar la cobertura y potencializar el impacto social que pudieran generar. También lo es, que el Instituto de la Juventud Guanajuatense tuvo durante muchos años un amplio presupuesto, sin* *que hasta el momento se cuente con una revisión integral de la aplicación de los recursos y los resultados obtenidos.*

*Al respecto, una auditoría como la que se pretende se lleve a cabo, permitiría conocer a este Congreso cuál fue el manejo que durante todos esos años se le dio a los recursos públicos encomendados para el funcionamiento del Instituto y en su caso si el ex funcionario responsable de ese manejo actuó de acuerdo con los valores que exige el servicio público.*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de fiscalizar los recursos asignados en su momento al Instituto de la Juventud Guanajuatense para los diversos programas destinados a la atención de las y los jóvenes del Estado.

En razón de lo anterior, se propone la práctica de una auditoría específica respecto a las operaciones realizadas por dicho Instituto, correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020.

En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos encomendados a los sujetos de fiscalización es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal son sujetos de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XVIII y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo antes señalado, coincidimos con la proponente en la necesidad de fiscalizar los recursos públicos para verificar que los mismos se apliquen de conformidad con la legislación aplicable.

De la propuesta podemos desprender la pretensión de la realización de una auditoría específica con enfoque financiero y de cumplimiento al entonces denominado Instituto de la Juventud Guanajuatense, por los ejercicios fiscales de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

En la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, se señala que durante los ejercicios fiscales de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020, el Instituto de la Juventud Guanajuatense no fue sujeto a revisión bajo procedimientos sustantivos por parte de dicho órgano técnico, en razón de la selección y revisión de los riesgos aplicados; refiriendo que los análisis realizados en planeación están vinculados con la generalidad del sujeto fiscalizado, los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por Órganos Internos de Control, auditorías externas y por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (Tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, procesamiento de CFDI (XML). La realización de dichos análisis contempla la generalidad de las diversas unidades responsables en el Poder Ejecutivo, incluyendo al propio Instituto de la Juventud Guanajuatense.

Por lo que respecta al ejercicio fiscal de 2019, se incluyó en la revisión de la cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado al Instituto de la Juventud Guanajuatense con el siguiente alcance:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Auditoría** | **Porcentaje revisado de ingresos** | **Porcentaje revisado de egresos** |
| 2019 | Revisión de cuenta pública | 100\* | 70\* |

\**El detalle de los alcances se muestran en el Anexo 13\_Alcances\_Paraestatal\_INJUVE del Informe de Resultados de la Revisión de Cuenta Pública 2019 del Poder Ejecutivo*

Entre otros conceptos, se seleccionaron erogaciones de la cuenta 5241441000 denominada «*Ayudas Sociales a Personas*» del Programa *Q0300 «Desafío Joven»*, en el que se encuentran las siguientes vertientes: I. Impulso Joven; II. Hecho Joven; III. Espacios de Participación Juvenil; y IV. Premio Estatal de la Juventud.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, no pueden fiscalizarse los conceptos de las cuentas públicas o realizarse auditorías, cuando excedan los cinco años previos al inicio de su revisión o práctica y que el proceso de fiscalización caduca en un plazo de cinco años, contados a partir del día siguiente de la fecha señalada para su inicio, por lo que resulta improcedente una auditoría a los ejercicio fiscales de 2015, 2016 y 2017; y respecto al ejercicio 2019 en la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado se revisó el 100% de los ingresos del referido Instituto, entre otras erogaciones.

Derivado de lo anterior y atendiendo a que en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio 2021 la Auditoría Superior del Estado podrá incluir los hechos que correspondan a dicho ejercicio planteados por la proponente en la planeación y ejecución de dicha revisión, lo cual se contendrá en el informe de resultados de la revisión de la citada cuenta pública.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a que realice a la brevedad posible una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense correspondientes al periodo comprendido entre los años 2015 al 2020. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A DOS PROPUESTAS DE PUNTOS DE ACUERDO FORMULADAS, LA PRIMERA, POR LA DIPUTADA Y EL DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; Y LA SEGUNDA, POR LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, AMBAS A EFECTO DE QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO., LA PRIMERA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE DE 2018 A OCTUBRE DE 2021; Y LA SEGUNDA, POR LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2019, 2020 Y 2021.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fueron turnadas para efectos de su estudio y dictamen, dos propuestas de puntos de acuerdo formuladas, la primera, por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y la segunda, por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, ambas a efecto de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato lleve a cabo una auditoría integral a la administración pública municipal de León, Gto., la primera, por el periodo comprendido de octubre de 2018 a octubre de 2021; y la segunda, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.

Analizadas las propuestas de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

En la sesión ordinaria celebrada el 15 de febrero de 2022, se presentaron las siguientes propuestas de puntos de acuerdo:

1. Formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a efecto de ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la práctica de una auditoría integral a la administración pública de León, Gto., por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2018, por los ejercicios fiscales de los años 2019 y 2020, así como por el periodo comprendido de enero a octubre del ejercicio fiscal del año 2021, en la que se comprenda, la revisión legal, económica, financiera, administrativa y contable del ingreso y gasto público, abarcando todos los aspectos relativos a la situación financiera, presupuestal, patrimonial y programática de la administración municipal; así como a la deuda pública, la obra pública, el manejo de fondos y valores, la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la administración de los recursos humanos; y
2. Formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo a la brevedad posible una auditoría financiera integral al municipio de León, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas, la que deberá incluir al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.

Las referidas propuestas se turnaron por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, mismas que se radicaron el 16 de febrero de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de fichas técnicas respecto a dichas propuestas, mismas que se expusieron a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones de las propuestas**
2. En las consideraciones expuestas por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se refiere lo siguiente:

*… es importante y vital emprender acciones fiscalizadoras por órganos competentes y confiables a la administraciones municipales y en este caso nos referimos a la administración pública municipal de León, Gto., sabemos que este municipio se ha distinguido por las funciones y servicios hacia la ciudadanía, llegando a ser ejemplo nacional y de experiencias exitosas; sin embargo, el crecimiento trae consigo una gran responsabilidad de operación en todos los sentidos, y en los últimos años su prestigio, desempeño, honorabilidad y diligencia han sido puestos en tela de juicio.*

*Concretamente hablamos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018-2021 SIENDO PRESIDENTE MUNICIPAL HÉCTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA, administración que ha sido manchada por acciones y decisiones que, a la luz de las denuncias públicas se puede presumir corrupción, egos, ideologías, conflictos internos y muchas otras circunstancias que han afectado su efectividad, eficiencia y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.*

*No podemos pasar por alto, las notas periodísticas en donde se publican y destacan entre muchos otros, los siguientes acontecimientos:*

*• Faltante de 97 mil 327 pesos en la Dirección General de Desarrollo Institucional, por un posible caso de corrupción, donde se presume que se entregaba dinero de forma ilegal de proveedores, como parte de un acuerdo de contratación presuntamente legalizando los moches a través[[120]](#footnote-120) del nombre de "reciprocidades".*

• Despojo de mil metros cuadrados al Jardín de Niños Juan Aldama, para venta y beneficio de una propiedad residencial de un empresario y que presuntamente fue operado por el Tesorero de Héctor López[[121]](#footnote-121).

* Condonación de 2 millones de pesos en predial del Club Campestre de León[[122]](#footnote-122).

*Así podemos ir sumando una serie de acontecimientos y decisiones en los que indudablemente se pone en tela de juicio el uso y destino de recursos públicos de la administración pública municipal 2018-2021.*

*Es por ello que, la diputada y el diputado que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos necesario solicitar la intervención inmediata de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, cuya trayectoria, precedentes de auditoría y el cumplimiento de la observancia de los principios de objetividad, definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo lo respaldan para que de verdad practique una AUDITORÍA INTEGRAL a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA MUNICIPAL 2018-2021 SIENDO PRESIDENTE MUNICIPAL HÉCTOR GERMÁN RENÉ LÓPEZ SANTILLANA, es momento de hacer un alto, reflexionar, investigar y en su caso sancionar los posibles actos de corrupción.*

*La auditoría integral comprende la revisión legal, económica, financiera,* *administrativa y contable del ingreso y gasto público, abarcando todos los* *aspectos relativos a la situación financiera, presupuestal, patrimonial y* *programática de la administración municipal; así como a la deuda pública, la* *obra pública, el manejo de fondos y valores, la adquisición de bienes, la* *contratación de servicios y la administración de los recursos humanos.*

*Una vez concluida la auditoría, la ASEG en su momento y en su caso, emita lo siguiente:*

*• Las observaciones correspondientes.*

*• El tipo de responsabilidad ya sea administrativa, civil, penal o fiscal.*

*• Los presuntos responsables.*

*• Motivación y fundamento de las acciones que deberán promoverse.*

*Y una vez que el Pleno del Congreso del Estado apruebe los informes de resultados derivado del procedimiento de fiscalización que nos ocupa, la Auditoría Superior del Estado emprenda las acciones de responsabilidad conducentes en los términos de las leyes aplicables, y promueva el seguimiento a observaciones y recomendaciones, informando a esta Asamblea en el momento oportuno lo siguiente:*

*• El estatus de la imposición de responsabilidades administrativas, así como el seguimiento de las presuntas responsabilidades civiles, penales y fiscales.*

*• El estatus que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas.*

*• La cuantía de daños y perjuicios derivada de los procedimientos respectivos por parte de las autoridades competentes.*

*• Las acciones correctivas realizadas por el órgano de control interno del Ayuntamiento de León, Gto.*

*• Las acciones que se han implementado para solventar las recomendaciones derivadas de los procedimientos de fiscalización.*

1. En las consideraciones expuestas por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández se refiere:

*El municipio de León es uno de los que más presupuesto ejerce en todo el estado de Guanajuato. Tan sólo durante la segunda administración de Héctor López Santillana, el presupuesto ejercido ascendió a más de 19 mil millones de pesos[[123]](#footnote-123), es decir, alrededor de 6 mil 339 millones de pesos por año.*

*Sin embargo, lejos de que el ejercicio de dichos recursos haya sido pulcro, existen casos de corrupción tan evidentes que la Contraloría de la actual administración del Ayuntamiento no ha tenido más opción que llamar la atención sobre algunos de los sucedidos durante el periodo de López Santillana.*

*Ejemplo de lo anterior es el caso del despojo al jardín de niños Juan Aldama por parte de un empresario cercano a las cúpulas panistas, mismo que Morena ha denunciado tanto desde esta tribuna, como desde el Ayuntamiento del propio municipio.*

*Otro ejemplo lo constituyen los moches que varias empresas entregaban a funcionarios de la dirección general de desarrollo institucional para firmar contratos de prestación de servicios o venta de bienes para los más de 7 mil empleados del ayuntamiento. En este caso, incluso se estableció denuncia penal con número 131271/2021 que ahora debe resolver la Fiscalía.*

*Un ejemplo más es la condonación de 2.5 millones de pesos de impuesto predial que la administración panista intentó condonar al campo de golf Club Campestre, haciéndolo pasar por predio de uso agrícola.*

*Pese a que los anteriores ejemplos están lejos de constituir un listado exhaustivo, sirven para ilustrar la duda razonable que tiene la ciudadanía sobre la legalidad del ejercicio presupuestal de toda la administración de López Santillana. Al respecto, incluso a Diego Sinhue no le ha quedado más remedio que aceptar que, pese a su confianza en Santillana, “todas las acciones de gobierno deben ser auditadas, haya o no denuncias o sospechas; para eso están las contralorías, la gestión pública y la Auditoría Superior del Estado”[[124]](#footnote-124).*

*Lamentablemente, la capacidad de rendición de cuentas respecto recursos públicos en el ámbito del control interno del propio municipio es limitada. Por un lado, porque existe una campaña publicitaria permanente acerca de la autoproclamada pulcritud de las autoridades leonesas, tal como se demuestra cuando observamos que, durante el periodo 2019-2021, se destinaron más de 259 millones de pesos a servicios de comunicación social y publicidad, esto es, 236 mil 935 pesos diarios. Este recurso, con la discrecionalidad que supone su ejercicio, se ha orientado durante años para tratar de construir una imagen que debilita la legitimidad de la fiscalización, limitando así el alcance que pudieran tener algunas acciones correctivas del municipio.*

*Por otro lado, las capacidades con las que cuenta la Contraloría Municipal para detectar la corrupción son escasos. Esto debido a que no se ha dado la alternancia partidista en la presidencia, con lo cual se compromete la total independencia que requiere la fiscalización; al mismo tiempo, y sin contar sus limitaciones presupuestales, su diseño organizacional pone en duda sus capacidades correctivas pues, tal como señala su propia descripción, se trata de “un órgano fiscalizador preventivo más que correctivo”[[125]](#footnote-125).*

*De esta manera, reconociendo la importancia que tiene el combate a la corrupción para la transformación de la vida pública de nuestro estado, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos pertinente que la organización que debe funcionar como el brazo técnico del Poder Legislativo para llevar a cabo sus labores de fiscalización, intervenga para contribuir a fiscalizar los recursos públicos ejercidos durante la última administración de Héctor López Santillana.*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en las propuestas que se dictamina se señala la necesidad de verificar el uso y destino de recursos públicos de la administración pública municipal de León, Gto., 2018-2021.

Al respecto quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo; mientras que la fracción IV del mismo precepto establece que la Auditoría Superior del Estado podrá acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de la propia Constitución Local.

El ayuntamiento de León, Gto., es sujeto de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XIX y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En este orden de ideas, de acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, durante los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 se efectuaron las siguientes revisiones y auditorías a la administración pública de León, Gto.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Auditoría** | **Porcentaje revisado de ingresos** | **Porcentaje revisado de egresos** |
| **2018** | **Revisión de cuenta pública** |  |  |
|  | Sector Central | 37 | 34 |
|  | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato (SAPAL) | 79 | 24 |
|  | Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico | 26 | NA |
|  | **Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública** | 100\* | 32 |
| **2019** | **Revisión de cuenta pública** |  |  |
|  | Sector Central | 65 | 47 |
|  | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato (SAPAL) | 15 | NA |
| **2019-2020** | **Auditoría Específica al organismo descentralizado del municipio de León, Gto., Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), respecto a los procedimientos de planeación, programación, presupuestación y adjudicación, que derivó en el contrato SAPAL 760-340/2019, relativo a la obra civil «*INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZANO*»** | N/A | N/A |
|  | **Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública** | 100\* | 39 |
| **2020** | **Revisión de cuenta pública**  (En proceso: Informe de resultados) |  |  |
|  | Sector Central | 62 | 38 |
|  | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato (SAPAL) | N/A | 9 |
|  | **Auditoría a la infraestructura pública municipal** | 0\* | 32 |
| **2021** | **Revisión de cuenta pública** |  |  |
|  | En etapa de análisis de información financiera del periodo de enero a junio de 2021 y julio a diciembre 2021 | Proceso | Proceso |
|  | **Auditoría específica (En proceso: En etapa de ejecución)** |  |  |
|  | Ejecución y control del contrato de prestación de servicios, sus respectivos modificatorios y anexos relacionados con la concesión otorgada por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, a la empresa *ECOSYS III, S.A. de C.V.,* para la prestación del servicio público de tratamiento de aguas residuales provenientes del drenaje y alcantarillado de la ciudad de León, Guanajuato, hasta la fecha de conclusión de su vigencia | Proceso | Proceso |

**Notas:**

1. Los alcances se determinaron considerando los registros contables de cada periodo reportado.

De acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado para la realización de los procesos de fiscalización se determinan con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación. Los análisis realizados en la planeación están vinculados con la generalidad del sujeto de fiscalización, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por órganos internos de control, auditorías externas y realizadas por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles y procesamiento de CFDI (XML).

El alcance y procedimientos referidos forman parte de los análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado para efecto de determinar la materialidad y la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución, situación por la cual, los alcances establecidos en los respectivos informes de resultados se complementan con los procedimientos de planeación específica, mismos que forman parte integral del análisis que realiza dicho ente auditor.

Por lo que hace a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* Activo: Adquisiciones de terrenos, vehículos y equipo terrestre, equipo de cómputo y de tecnologías de la información, entre otros.
* Ingresos: Impuesto predial, rezagos de impuesto predial, multas de tránsito municipal, entre otros.
* Egresos: Transferencias a entidades, otros arrendamientos, difusión por radio, televisión y otros medios, donativos a instituciones sin fines de lucro, servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información y otros arrendamientos, entre otros.

**\****Se revisó la subasta pública de 254 vehículos propiedad municipal, las alteraciones en cuentas de predial y multas perdonadas, diversas desafectaciones, así como el proceso para retirar dos inmuebles donados a la asociación Voluntariado del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.*

**SAPAL:**

* Pasivo: Cuentas de proveedores y de contratistas.
* Ingresos: Ingresos por servicios de agua potable, convenios aportaciones SAPAL, Convenios municipio de León.
* Egresos: Servicios integrales y otros servicios.

*\*Se investigó la falta de coordinación de las paramunicipales porque vuelven a empedrar una vía después de arreglo de drenaje, a pesar de que el año previo los industriales entregaron sus aportaciones para que la pavimentaran.*

**PATRONATO DE LA FERIA:**

* Egresos: Gastos de orden social y cultural.

*\*Se investigó el destino de 60 millones del presupuesto para contratar los espectáculos internacionales,*

De la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 se revisaron los siguientes apartados:

**Sector Central:**

* Activo: Adquisición de vehículos y equipo terrestre, equipo de comunicación y telecomunicación, licencias informáticas e intelectuales, equipo de cómputo y tecnologías de la información y terrenos.
* Ingresos: Participaciones, aportaciones, rezagos y recargos de impuesto predial.
* Egresos: Servicios personales, indemnizaciones, transferencias a entidades, seguro de bienes patrimoniales y becas y otras ayudas para programas de capacitación, entre otros.

*\*Se revisaron liquidaciones a funcionarios de la Administración Municipal de León, Gto., durante el ejercicio fiscal 2019*.

**SAPAL:**

* Egresos: Otros productos químicos, así como mantenimiento de edificios y construcciones.

*\* Revisión pagos y soporte documental relacionado con los contratos, empresa* ECOSYS III, S.A. de C.V*, presuntas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) publicados por el Sistema de Administración Tributaria.*

En la Auditoría específica al organismo descentralizado del municipio de León, Gto., denominado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), respecto a los procedimientos de planeación, programación, presupuestación y adjudicación, que derivó en el contrato SAPAL 760-340/2019, relativo a la obra civil *«INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZANO*», se fiscalizaron los procedimientos de planeación, programación, presupuestación y adjudicación, que derivó en el contrato SAPAL 760-340/2019, relativo a la obra civil *«INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZANO*», correspondiente al periodo comprendido por los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

Por lo que hace a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* Activo: Anticipos a proveedores, alta de terrenos recibidos en donación, así como las adquisiciones de vehículos y equipo de transporte, equipo de comunicación y telecomunicación, licencias informáticas e intelectuales y equipo de cómputo y tecnologías de la información, entre otros.
* Ingresos: Participaciones y aportaciones, entre otros.
* Egresos: Servicios personales, indemnizaciones, servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, vestuario y uniformes destinados a actividades operativas, entre otros.

*\***Se revisaron diversas liquidaciones a ex-empleados de seguridad pública, así como la subasta de diversos bienes inmuebles.*

**SAPAL:**

* Activo: IVA por acreditar y construcciones en proceso.

*\*Se reviso lo relacionado con el Contrato SAPAL 760-340/2019 «INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZANO*»*, derivado de la su inclusión en el programa.*

Al respecto, se establece que la selección de las cuentas a revisar durante los referidos ejercicios se realizó con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación.

En tal sentido, en la planeación de los periodos revisados se consideró entre otros, a) Identificar a los contratistas con mayor número de obras adjudicadas, y en su caso verificar si cuentan con la capacidad suficiente para la ejecución de estas; b) Identificar los contratos de mayor importe y verificar el proceso de adjudicación; c) Verificar si los contratistas que ejecutaron obras o servicios en el Municipio han sido observados anteriormente; d) Revisar obras de urbanización y edificación de mayor importe, que, por la complejidad, magnitud y volumetría de los trabajos ejecutados, origina un alto riesgo relacionado a la ejecución y supervisión de estos, pudiendo derivar en observaciones ligadas a calidad de obra, precios unitarios, cantidades de obra, soporte documental, cierre administrativo, etc; e) Revisar los servicios de supervisión externa ligados a cada una de las obras que integran la muestra de auditoría; f) Realizar análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado. (a partir de la revisión del ejercicio fiscal 2018 en adelante; y g) Revisar la información contable para identificar saldos pendientes por amortizar de anticipos otorgados en ejercicios anteriores.

Adicionalmente, se informó que se llevaron a cabo diversas revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación[[126]](#footnote-126), las cuales se detallan a continuación:



De acuerdo a la información antes señalada, la Auditoría Superior del Estado ha realizado 3 revisiones de cuenta pública, 3 auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal y 2 auditorías especiales. Asimismo, se realizaron 12 auditorías y revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

En esta parte también cabe apuntar que los hechos referidos al faltante de recursos -7 mil 327 pesos- en la Dirección General de Desarrollo Institucional, así como al Jardín de Niños Juan Aldama y la condonación del impuesto predial del Club Campestre de León, los mismos son materia de investigación por el Órgano Interno de Control del municipio de Léon, Gto.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que ya se realizaron diversos actos de fiscalización a la administración municipal de León, Gto., por parte tanto de la Auditoría Superior del Estado como de la Auditoría Superior de la Federación a los ejercicios fiscales que se propone auditar.

No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados en las propuestas materia del presente dictamen en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determinan improcedentes las siguientes propuestas de puntos de acuerdo:

1. Formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a efecto de ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la práctica de una auditoría integral a la administración pública de León, Gto., por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2018, por los ejercicios fiscales de los años 2019 y 2020, así como por el periodo comprendido de enero a octubre del ejercicio fiscal del año 2021, en la que se comprenda, la revisión legal, económica, financiera, administrativa y contable del ingreso y gasto público, abarcando todos los aspectos relativos a la situación financiera, presupuestal, patrimonial y programática de la administración municipal; así como a la deuda pública, la obra pública, el manejo de fondos y valores, la adquisición de bienes, la contratación de servicios y la administración de los recursos humanos; y
2. Formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo a la brevedad posible una auditoría financiera integral al municipio de León, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas, la que deberá incluir al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.

En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA FINANCIERA INTEGRAL AL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, POR LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2019, 2020 Y 2021 Y CONCOMITANTE A 2022.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Guanajuato, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y concomitante a 2022.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en la sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2022 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo a la brevedad posible una auditoría financiera integral al municipio de Guanajuato, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas, en cuya planeación se considere la verificación de posibles conflictos de interés, que incluya al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, y privilegie las inspecciones físicas para validar la inspección documental, en los casos que sea viable hacerlo, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y concomitante a 2022.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 22 de febrero de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones de la proponente**

En las consideraciones expuestas por la proponente se refiere lo siguiente:

*En la historia reciente, la capital del estado de Guanajuato ha sido escenario de múltiples casos de corrupción. Sin embargo, durante la pasada administración de Navarro, que lamentablemente gobernará un segundo periodo, los casos de corrupción se dispararon de una forma escandalosa.*

*Ejemplo de lo anterior puede encontrarse al revisar algunas de las auditorías más recientes, realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que se han difundido sobre el municipio.*

*Una de estas auditorías fue la realizada al ramo general 33 y obra pública del municipio para el ejercicio fiscal de 2019, cuando encontramos que, con una revisión de apenas el 31% de los egresos, se observaron $382,087.02 (trescientos ochenta y dos mil ochenta y siete pesos) de recursos mal ejercidos. Dichos recursos se observaron debido a obra pública que se pagó y no se ejerció, así como a la bajísima calidad de la obra de pavimentación de calles aledañas al Centro de Estudios de Bachillerato 86 del municipio.*

*Otra de las auditorías en mención es la revisión a la Cuenta Pública 2019, cuando con un 58% de revisión se encontraron malas prácticas de pago de prestaciones a algunos trabajadores, así como la exhibición ilegal de momias.*

*Sin embargo, los casos de corrupción no investigada y perseguida con diligencia en el municipio son muchos más. Tan sólo por recordar algunas de las denuncias que se han realizado por diferentes faltas cometidas en la administración panista de Alejandro Navarro, conviene mencionar las siguientes derivadas en carpetas de investigación estancadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción:*

*• Ejercicio ilícito del servicio público por no proteger el patrimonio público, derivada en la carpeta de investigación 69065/2020.*

*• Tráfico de influencias por promover incrementos al costo de museos públicos con el fin de obtener ventajas comerciales para empresas de la familia política de Navarro, derivada en la carpeta de investigación 99470/2020.*

*• Abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones por acaparar facultades plenipotenciarias contra la normativa en el manejo de bienes patrimoniales del municipio, derivada en la carpeta de investigación 116870/2020.*

*Estos son sólo ejemplos, pues en realidad el todavía alcalde acumula 18 denuncias por conductas relacionadas con violaciones al marco legal, actos de corrupción, violencia de género, actos anticipados de campaña y violaciones a derechos humanos.*

*Pese a lo anterior, todas estas denuncias no son producto de instituciones fiscalizadoras y de rendición de cuentas eficaces; sino de una ciudadanía incapaz de ignorar la corrupción desbordada de la administración pública municipal que encabeza Alejandro Navarro.*

*Adicionalmente a la experiencia acumulada de la probable corrupción panista de la capital del estado, se acumula el hecho de que el suegro de Alejandro Navarro es un importante empresario que en los últimos años se ha acostumbrado a hacer negocios al amparo del poder público. Ejemplo de esto se encuentra en el caso de Quinta Marfil, cuando la zona fue deforestada para abrir un camino sin permisos, beneficiando a dueños de terrenos como el suegro de Navarro.*

*De esta manera, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que, en un ejercicio de contribución al combate a la corrupción, es imprescindible que elevemos el alcance de las auditorías que la Auditoría Superior del Estado ha realizado a la administración de la capital del estado.*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de fiscalizar el uso y destino de recursos públicos de la administración pública municipal de Guanajuato, Gto., 2018-2021 y concomitante a 2022; aludiendo a 3 denuncias presentadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como la existencia de casos de corrupción no investigada con relación a diversos hechos.

Al respecto quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo; mientras que la fracción IV del mismo precepto establece que la Auditoría Superior del Estado podrá acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de la propia Constitución Local.

El ayuntamiento de Guanajuato, Gto., es sujeto de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XIX y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En este orden de ideas, de acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se efectuaron las siguientes revisiones y auditorías a la administración pública de Guanajuato, Gto.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Auditoría** | **Porcentaje revisado de ingresos** | **Porcentaje revisado de egresos** |
| **2019** | **Revisión de cuenta pública** |  |  |
|  | Sector Central | 55 | 58 |
|  | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato | N/A | A |
|  | Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Guanajuato, Gto | N/A | B |
|  | **Auditoría al Ramo General 33 y Obra Púbica** |  |  |
|  | Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública | 100 (1) | 31 (2) |
| **2020** | **Revisión de cuenta pública** |  |  |
|  | Sector Central | 53 | 60 |
|  | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato | N/A | C |
|  | **Auditoría a la infraestructura púbica municipal** |  |  |
|  | Auditoría a la infraestructura pública municipal | 100 (1) | 45 (2) |
| **2021** | **Revisión de cuenta pública y auditoría a la infraestructura pública municipal** |  |  |
|  | En etapa de análisis de la información financiera del periodo de enero a junio de 2021 | Proceso | Proceso |

**Notas:**

1. Se revisó el 30% de la cuenta 513603611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales.
2. Se revisó el 78% de la cuenta 513303321 Servicios de diseño arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.
3. Se revisó el 26% de la cuenta 513603611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales.
4. De los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
5. De los recursos devengados en obra pública.

De acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado para la realización de los procesos de fiscalización se determinan con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación. Los análisis realizados en la planeación están vinculados con la generalidad del sujeto de fiscalización, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por órganos internos de control, auditorías externas y realizadas por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles y procesamiento de CFDI (XML).

El alcance y procedimientos referidos forman parte de los análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado para efecto de determinar la materialidad y la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución, situación por la cual, los alcances establecidos en los respectivos informes de resultados se complementan con los procedimientos de planeación específica, mismos que forman parte integral del análisis que realiza dicho ente auditor.

Por lo que hace a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* **Activo:** Anticipos de nómina, adquisiciones de: equipo de cómputo y tecnologías de la información; automóviles y camiones; carrocerías y remolques, maquinaria y equipo agropecuario, así como bienes intangibles (software).
* **Ingresos:** Participaciones y aportaciones.
* **Egresos:** Servicios personales como sueldos, honorarios, remuneraciones de eventuales, liquidaciones por indemnización, capacitación, entre otros más. Servicios generales como alumbrado público, otros arrendamientos\*, gastos de orden social y cultural\*, fletes y maniobras\*, servicios de consultoría, auditoría, comunicación y publicidad\*\*entre otros, transferencias internas al sector público y ayudas sociales.

*\** Se investigaron los hechos relacionados con la Denuncia de Investigación de Situación Excepcional ASEG/DGAJ/DISE/01/2020, respecto de las posibles irregularidades de las momias de Guanajuato que incluyó la verificación física de 117 momias y la revisión de varias cuentas de gasto relacionadas, mismas que se consideran en el detalle del rubro de egresos*.*

*\*\**Se investigaron los contratos de servicios de publicidad de 3 proveedores*,* en relación con la denuncia de investigación de situación excepcional con número de expediente ASEG/DGAJ/DISE/11/2019*.*

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato:**

* **Egresos**: Servicios de comunicación social y publicidad*\**.

*\**Se investigaron los contratos de servicios de publicidad de dos proveedorescon el organismo operador del agua, en relación con la denuncia de investigación de situación excepcional con número de expediente ASEG/DGAJ/DISE/11/2019*.*

**Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Guanajuato, Gto.:**

* **Egresos**: Servicios profesionales, científicos y técnicos\*.

*\**Se investigaron los hechos de la denuncia de investigación de situación excepcional con número de expediente ASEG/DGAJ/DISE/08/2020, respecto a que el Instituto Municipal de Planeación en 2019 gastó más de 5 millones de pesos en diversos estudios de supuesta prefactibilidad técnica y pre inversión para cinco proyectos de tercerización referentes a la construcción del nuevo Museo de las Momias y su estacionamiento, recolección de basura, instalación de parquímetros, alumbrado público y el nuevo edificio de Presidencia Municipal*.*

De la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se revisaron los siguientes apartados:

**Sector Central:**

* **Activo:** Otros deudores (pagos de las cuotas obrero-patronales del seguro social del COMUDAJ), adquisiciones de: equipo de cómputo y tecnologías de la información; automóviles y camiones; equipo de comunicación y telecomunicación.

* **Ingresos:** Participaciones, aportaciones e incentivos derivados de la colaboración fiscal.
* **Egresos:** Servicios personales\* como sueldos, honorarios, remuneraciones de eventuales, liquidaciones por indemnización, capacitación, entre otros. Servicios generales como alumbrado público, servicios legales, servicios de contabilidad, seguros de bienes patrimoniales, servicios de comunicación y publicidad\*\*, entre otros. Transferencias, subsidios y ayudas.

*\*\**Se investigaron los contratos de servicios de publicidad de dos proveedores*,* como seguimiento a la denuncia de investigación de situación excepcional con número de expediente ASEG/DGAJ/DISE/11/2019 relacionada con el tema de publicidad.

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato:**

* Egresos: Servicios de comunicación social y publicidad*\**.

*\** Se investigaron los contratos de servicios de publicidad de 3 proveedores, como seguimiento a la denuncia de investigación de situación excepcional con número de expediente ASEG/DGAJ/DISE/11/2019*.*

Al respecto, se establece que la selección de las cuentas a revisar durante los referidos ejercicios se realizó con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación.

Asimismo, en la auditoría practicada al Ramo General 33 y Obra Pública del ejercicio fiscal 2019 se revisaron 7 obras y en la auditoría realizada a la infraestructura pública municipal del ejercicio fiscal 2020 se revisaron 11 obras, en las que se verificó que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad con las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan; que los presupuestos considerados para la ejecución de las obras se hayan aplicado correctamente, y que las modificaciones ocurridas se justifiquen mediante los convenios correspondientes; que la adjudicación y contratación de la obra pública, se hayan realizado con estricto apego a lo dispuesto en la legislación vigente y que no existiera conflicto de interés entre los contratistas y los funcionarios públicos que decidieron las adjudicaciones; que los sistemas de control interno, operativo y contable que regulan la función, aseguren la protección de los recursos y su efectiva utilización, la calidad de los trabajos, la razonabilidad de los costos y la confiabilidad de la información en la ejecución de la obra pública; que los contratistas hayan cumplido con las cláusulas contractuales, las especificaciones de obra, los procedimientos de construcción y la calendarización de los trabajos; en una obra de la muestra que así lo requería, se verificó el cumplimiento de la calidad de los materiales empleados y de los procedimientos constructivos en la ejecución de la obra pública, a través de la práctica de pruebas de laboratorio en observancia de las normas, estándares, procedimientos técnicos y de fiscalización aplicables y se emitieron los dictámenes respectivos con apoyo de la Unidad de Laboratorio de Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; y se revisó un contrato administrado por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, ejecutado en el mismo lugar en el que se ejecutó una obra administrada por la administración central.

Adicionalmente, se informó que se llevaron a cabo diversas revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación[[127]](#footnote-127), las cuales se detallan a continuación:

Tabla

Descripción generada automáticamente

De acuerdo a la información antes señalada, la Auditoría Superior del Estado ha realizado 2 revisiones de cuenta pública y 2 auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal. Asimismo, se realizaron 3 revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que ya se realizaron diversos actos de fiscalización a la administración municipal de Guanajuato, Gto., por parte tanto de la Auditoría Superior del Estado como de la Auditoría Superior de la Federación a los ejercicios fiscales que se propone auditar. Aunado a lo anterior, respecto a algunos hechos referidos en la propuesta existen denuncias ya presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por ser el órgano competente para tal efecto.

No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados por la proponente en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo a la brevedad posible una auditoría financiera integral al municipio de Guanajuato, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas, en cuya planeación se considere la verificación de posibles conflictos de interés, que incluya al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, y privilegie las inspecciones físicas para validar la inspección documental, en los casos que sea viable hacerlo, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y concomitante a 2022. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA FINANCIERA INTEGRAL AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., POR LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2019, 2020 Y 2021.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de San Miguel de Allende, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en la sesión ordinaria celebrada el 3 de marzo de 2022 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que inicie a la brevedad una auditoría financiera integral al municipio de San Miguel de Allende, Gto., que incluya al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 8 de marzo de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones de la proponente**

En las consideraciones expuestas por la proponente se refiere lo siguiente:

*El municipio de San Miguel de Allende es uno de los principales paradores turísticos del Estado de Guanajuato, por lo cual la efectividad, transparencia y honradez de su administración pública es una pieza clave para el desarrollo de la entidad.*

*Aquí radica precisamente el problema, pues desde 1991 han venido ganando fuerza administraciones encabezadas por el partido político dominante en el Estado desde hace justamente 30 años. En este periodo, el municipio ha quedado por un lapso intermitente de 9 años, a merced de la familia Villarreal García: de 2003 a 2006, de 2015 a 2018, y de 2018 a 2021, periodos en que la presidencia municipal se alternó entre los hermanos Luis Alberto y Ricardo Villarreal.*

*Y si bien en cada trienio se han dado casos de corrupción evidente, durante la última administración de Luis Alberto Villareal (2018 a 2021) San Miguel se vio especialmente envuelto en una serie de actos que apuntan hacia una descarada trama de corrupción y realización de negocios al amparo del poder público.*

*De igual forma, durante el periodo de la administración de Luis Alberto Villareal, el alcance de los procesos de revisión de Cuenta Pública ha tenido alcances muy limitados: en el periodo 2018, el alcance fue de apenas 15% de los ingresos y 31% de los egresos, es decir, quedó el 75% de los ingresos y el 69% de los egresos sin revisarse. Para el ejercicio 2019, por su parte,* *el alcance de la revisión se elevó hacia el 33% de los ingresos y el 40% de los egresos, quedando pendientes de revisión el 67% de los ingresos y el 60% de los egresos[[128]](#footnote-128).*

*Pese al escaso alcance de las revisiones de Cuenta Pública en mención, las irregularidades fueron tantas, que no todas pudieron escapar al ojo auditor. En 2018, por ejemplo, se realizaron adquisiciones de vehículos por 3.9 millones de pesos sin que las adquisiciones se consolidaran y se llevara a cabo una licitación pública, tal como marca la Ley; se realizaron modificaciones a contratos para ampliar los pagos a empresas sin justificación de por medio; se llevaron a cabo contratos con proveedores que no se encontraban en el padrón oficial; se hizo un mal ejercicio de recursos FORTASEG; se dieron irregularidades en procedimientos de venta de inmuebles, entre otros.*

*En 2019, como hemos señalado en ocasiones anteriores, se hicieron negocios al amparo del poder público mediante semáforos fantasma que arrendaron por montos millonarios y que nunca funcionaron, causando una afectación de 5.7 millones de pesos que, en la revisión de cuenta pública 2020, pudiera determinarse un daño aún mayor.*

*Si estas irregularidades salieron a la luz con un alcance tan limitado, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que una ampliación del alcance pudiera revelar nuevos desfalcos que, de momento, la ASEG ha sido incapaz de detectar, pero que no por eso dejarían de ser afectaciones a la hacienda pública sanmiguelense.*

*En tal supuesto puede estar el caso de corrupción generado por los antiguos miembros del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable, que condonaron pagos hasta por 15 millones de pesos sin informar al Ayuntamiento, con la finalidad de beneficiar a desarrolladores inmobiliarios que especulan con el derecho a la vivienda y únicamente terminan inflando los costos de la vida en San Miguel de Allende.*

*En el mismo caso se encuentra la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente dada durante la misma administración del panista Luis Alberto Villarreal, lo cual ha sido denunciado desde la sociedad civil.*

*Existen múltiples procedimientos a revisar: desde la posible condonación de impuestos como favor político-electoral a las cúpulas empresariales afines al panismo, hasta la probable venta ilegal de bienes inmuebles del municipio que fueran donados o enajenados con avalúos deficientes o a precios inferiores a los de mercado, pasando por el posible desvío de fondos mediante mecanismos similares al arrendamiento de los semáforos fantasma.*

*Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos necesario que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato intervenga para fiscalizar los recursos públicos ingresados y ejercidos durante la administración de Villarreal, uno de los referentes políticos y morales del PAN.*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de fiscalizar el uso y destino de recursos públicos de la administración pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., con relación a diversos hechos referidos en la propuesta.

Al respecto quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo; mientras que la fracción IV del mismo precepto establece que la Auditoría Superior del Estado podrá acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de la propia Constitución Local.

El ayuntamiento de San Miguel de Allende, Gto., es sujeto de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XIX y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En este orden de ideas, de acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se efectuaron las siguientes revisiones y auditorías a la administración pública de San Miguel de Allende, Gto.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Auditoría** | **Porcentaje revisado de ingresos** | **Porcentaje revisado de egresos** |
| 2019 | Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública | 100 (1) | 33 (2) |
| 2019 | Revisión de cuenta pública |  |  |
|  | Sector central | 33 | 40 |
| 2020 | Auditoría a la infraestructura pública municipal | 100 (1) | 33 (2) |
| 2020 | Revisión de cuenta pública |  |  |
|  | Sector central | 36 | 33 |
|  | Revisión de cuenta pública y auditoría de infraestructura Pública |  |  |
| 2021 | En etapa de análisis de información financiera del periodo de enero a junio y julio a diciembre del ejercicio fiscal 2021. | Proceso | Proceso |

**Notas:**

1. De los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
2. De los recursos devengados en obra pública.

De acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado para la realización de los procesos de fiscalización se determinan con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación. Los análisis realizados en la planeación están vinculados con la generalidad del sujeto de fiscalización, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por órganos internos de control, auditorías externas y realizadas por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles y procesamiento de CFDI (XML).

El alcance y procedimientos referidos forman parte de los análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado para efecto de determinar la materialidad y la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución, situación por la cual, los alcances establecidos en los respectivos informes de resultados se complementan con los procedimientos de planeación específica, mismos que forman parte integral del análisis que realiza dicho ente auditor.

En cuanto a las auditorías practicadas al Ramo General 33 y obra pública y a la infraestructura pública municipal de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se revisaron 12 obras del ejercicio fiscal 2019; y 13 obras del ejercicio fiscal 2020; verificándose que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad con las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan; que los presupuestos considerados para la ejecución de las obras se hayan aplicado correctamente, y que las modificaciones ocurridas se justifiquen mediante los convenios correspondientes; que la adjudicación y contratación de la obra pública se hayan realizado con estricto apego a lo dispuesto en la legislación vigente y que no existiera conflicto de interés entre los contratistas y los funcionarios públicos que decidieron las adjudicaciones; que los sistemas de control interno, operativo y contable que regulan la función, aseguren la protección de los recursos y su efectiva utilización, la calidad de los trabajos, la razonabilidad de los costos y la confiabilidad de la información en la ejecución de la obra pública; y que los contratistas hayan cumplido con las cláusulas contractuales, las especificaciones de obra, los procedimientos de construcción y la calendarización de los trabajos.

Destacando que en las referidas auditorías se contempló la revisión de una muestra de las obras y acciones ejercidas por la administración municipal en los periodos auditados, las cuales se determinaron con base en una planeación basada en riesgos, entre cuyos análisis se contemplan los temas de interés de la sociedad reflejados en notas periodísticas y el interés parlamentario, entre otros. De igual forma, a las obras de la muestra de auditoría se les aplicaron los procedimientos señalados previamente y derivado de las consideraciones de la proponente no se identificaron riesgos específicos relacionados a obra pública.

Por lo que hace a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* **Activo:** Cuentas bancarias relacionadas con servicios personales, adquisiciones de maquinaria y equipo de construcción (motoniveladora, excavadora hidráulica, retroexcavadoras, compactador de rodillos, etc.). De la adquisición de los bienes señalados se verificó el proceso de adjudicación, análisis de contratos y verificaciones físicas de bienes.
* **Pasivo:** Adquisiciones de bienes realizadas en el ejercicio 2018 y cuyo pago se realizó en el ejercicio 2019 (compra de motocicletas), así como amortizaciones de deuda pública.
* **Ingresos:** Seguimiento a créditos fiscales determinados por el Municipio para el cobro de rezago del impuesto predial urbano y rústico; incluyéndose en el pliego de observaciones y recomendaciones del ejercicio 2019 la recomendación correspondiente, así como participaciones y aportaciones.
* **Egresos:** Servicios personales como sueldos, prima vacacional, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, liquidaciones por indemnización y sueldos y salarios caídos, servicio de alumbrado público, arrendamiento de vehículos de servicios administrativos, otros arrendamientos, servicios profesionales científicos y tecnológicos integrales, servicios de limpieza y manejo de desechos, otros gastos por responsabilidades, transferencias internas y asignaciones al sector público (servicios personales, materiales y suministros, servicios básicos, subsidios y otras ayudas y bienes inmuebles e intangibles).

Asimismo, se dio seguimiento a los siguientes títulos de concesión en cuanto a pagos realizados y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, aplicable al periodo 2019.

1. Título concesión para la prestación de servicio público de limpieza mecánica y servicio de recolección y traslado al relleno sanitario ubicado en la comunidad de Palo Colorado, de los residuos sólidos urbanos del municipio de San Miguel de Allende.
2. Títulos concesión para la prestación de servicio público de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos del municipio de San Miguel de Allende.

También se revisaron los siguientes puntos:

1. Contrato número ADQ-DSPyCV-001-03-2019 y su adendum, derivado de la Licitación Pública Nacional número LPN/DRM-009/2018 para la adquisición e instalación de 11,974 luminarias para la Dirección de Servicios Públicos del municipio de San Miguel de Allende, Gto., así como los pagos correspondientes.
2. Contrato *DIOP-ADQ/011/082019* derivado de la Licitación Pública Nacional Presencial número LPN/DRM-010/2019, «Adquisición de maquinaria pesada usada para la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas del municipio de San Miguel de Allende. Guanajuato», así como los pagos correspondientes.
3. Procedimiento de adjudicación y el contrato puro SSP-001-07-2019 entre el Municipio y las personas morales Bercale Services, S.A. de C.V. y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. SOFOM. ENR.*, derivado de la Licitación LPN/DRM-006/2019 «Contratación de Servicio Integral de Arrendamiento puro, Suministro, Mantenimiento y Puesta en Operación de Equipos de Alta Tecnología en Materia de Movilidad y Seguridad Pública por 27 meses» para el municipio de San Miguel de Allende, Gto.
4. Procedimiento de adjudicación y el contrato SSP-001-07-2019, derivado de la Licitación LPN-DRM-006-2019 «Contratación de Servicio de Arrendamiento Puro por 29 meses, de 65 vehículos para las diferentes direcciones de la Administración Pública Municipal».

De la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se revisaron los siguientes apartados:

**Sector Central:**

* **Activo:** Terrenos (donación de bienes inmuebles), adquisiciones de (otros mobiliarios y equipos de construcción, automóviles, camiones y carrocerías y remolques) así como, adquisición de software.
* **Pasivo:** Pagos derivados del contrato de arrendamiento puro con las empresas *Bercale Services, S.A. de C.V.* y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V.*, número SSP-001-07-2019 del 22 de julio de 2019 y su modificatorio del 5 de agosto del mismo año.
* **Ingresos:** Servicio de alumbrado público y participaciones y aportaciones.

* **Egresos:** Servicios personales como sueldos, prima vacacional, gratificación de fin de año, remuneraciones por horas extraordinarias, servicio de alumbrado público, arrendamiento de vehículos de servicios administrativos, otros arrendamientos, servicios de procesos técnica y en tecnologías de información, servicios de recaudación traslado y custodia de valores, gastos de orden social y cultural, ayudas a personas, ayudas a instituciones sin fines de lucro, jubilaciones y otras pensiones y jubilaciones.

También se dio seguimiento a los pagos derivados del contrato puro SSP-001-07-2019 entre el Municipio y las personas morales *Bercale Services, S.A. de C.V.* y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. SOFOM. ENR.,* así como el cumplimiento del mismo.

De igual forma, se dio seguimiento a los pagos derivados del contrato SSP-001-07-2019, respecto de la Licitación LPN-DRM-006-2019 «Contratación de Servicio de Arrendamiento Puro por 29 meses, de 65 vehículos para las diferentes direcciones de la administración pública municipal», así como el cumplimiento de mismo.

Adicionalmente, se informó que se llevaron a cabo diversas revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación[[129]](#footnote-129), las cuales se detallan a continuación:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

Es así, que de acuerdo a la información antes señalada, la Auditoría Superior del Estado ha realizado 2 revisiones de cuenta pública y 2 auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal. Asimismo, se realizaron 3 revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que ya se realizaron diversos actos de fiscalización a la administración municipal de San Miguel de Allende, Gto., por parte tanto de la Auditoría Superior del Estado como de la Auditoría Superior de la Federación a los ejercicios fiscales que se propone auditar.

No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados por la proponente en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que inicie a la brevedad una auditoría financiera integral al municipio de San Miguel de Allende, Gto., que incluya al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA FINANCIAR OBRAS, INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y ACCIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD PÚBLICA (FIDESSEG), LA CUAL DEBERÁ ABARCAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LOS EJERCICIOS FISCALES 2020, 2021 Y CONCOMITANTE A 2022.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la totalidad de los recursos ejercidos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 3 de marzo de 2022 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que a más tardar el 16 de junio de 2022 inicie una auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la totalidad de los recursos ejercidos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 8 de marzo de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones de la proponente**

En las consideraciones expuestas por la proponente se refiere lo siguiente:

*El Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública, también conocido como FIDESSEG, es un fideicomiso que se encuentra sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.*

*El sustento jurídico que tiene el FIDESSEG es un decreto[[130]](#footnote-130) emitido por el Gobernador del Estado en 2019. Dicho decreto surgió explícitamente como un acuerdo entre las cúpulas de un sector empresarial muy concreto (el Consejo Coordinador Empresarial) y el gobierno panista, para aceptar una subida al Impuesto Sobre Nóminas que en ese momento modificó su tasa de un 2% a un 2.3%.*

*Ese incremento de 0.3% al Impuesto sobre Nóminas, se aceptó con la condición de que todo lo recaudado por el incremento se ejerciera mediante un fideicomiso creado específicamente para eso: el FIDESSEG, cuyo patrimonio termina estando constituido por el 13.04% de lo recaudado por dicho impuesto.*

*De esta manera, para 2020, luego de modificaciones presupuestales el FIDESSEG tuvo asignado un presupuesto de 539.9 millones de pesos[[131]](#footnote-131), de los cuales se ejercieron 443.1 millones[[132]](#footnote-132), es decir, el 82%.*

*Para 2021, el presupuesto modificado ascendió hasta los 607.2 millones[[133]](#footnote-133), de los cuales únicamente se ejercieron 162.8 millones de pesos[[134]](#footnote-134), es decir, apenas el 26.8%. Así, hasta el momento se han ejercido 606 millones de pesos[[135]](#footnote-135) mediante el FIDESSEG, sin que la Cuenta Pública especifique qué obras, programas o acciones se llevaron a cabo, con qué resultados, con qué contratistas, ni con qué intereses de por medio.*

*Del mismo modo, al cierre de 2021 en el FIDESSEG quedó un saldo de 444.4 millones de pesos[[136]](#footnote-136), a lo cual se sumarán por lo menos 615.8 millones[[137]](#footnote-137) adicionales mediante el proyecto Q3081, con lo cual este año se estaría llegando a 1,060.2 millones de pesos[[138]](#footnote-138) manejados al amparo del FIDESSEG.*

*Uno de los problemas fundamentales de operar los recursos públicos mediante fideicomisos se encuentra en su carácter contractual que implica la carencia de personalidad jurídica del instrumento financiero[[139]](#footnote-139), por lo cual la mayor parte de reglamentación jurídica que se le aplican son normas de derecho mercantil, y puesto que en el derecho privado todo lo que no está expresamente prohibido se asume permitido, se genera un riesgo de deficiencias en la rendición de cuentas[[140]](#footnote-140).*

*En el caso particular de la estructura institucional que se construyó para el funcionamiento del FIDESSEG, se presentan grandes espacios de oportunidad para el mal ejercicio de recursos públicos.*

*Primero, la máxima autoridad del fideicomiso es un comité técnico conformado de la siguiente manera:*

*• 5 titulares de Secretarías de Estado (Finanzas, Gobierno, Desarrollo Social, Rendición de Cuentas, y Seguridad Pública).*

*• La persona titular del DIF estatal.*

*• 5 miembros de la sociedad civil que específicamente son designados por los representantes de las sedes del Consejo Coordinador Empresarial de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende.*

*En segundo término, las reglas de operación (que permanecen sin cambio alguno desde su generación en 2019) otorgan al Comité Técnico la facultad amplia, exclusiva e inmediata de aprobar la liberación de recursos y la celebración de actos, contratos y convenios del Fideicomiso, e incluso ampliar los calendarios y montos de ejecución de los proyectos aprobados[[141]](#footnote-141), por lo cual hay un espacio muy importante de discrecionalidad.*

*En tercer lugar, es necesario señalar que a ese espacio de discrecionalidad se le suma una carencia de mecanismos adecuados de control interno: la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas forma parte del Comité Técnico, pero también nombra al comisario propietario y suplente encargados del control y vigilancia del FIDESSEG.*

*Por otro lado, sumado al ejercicio presupuestario y a la cuestionable estructura institucional del fideicomiso, es pertinente señalar que existen deficiencias y desapego a la normativa dignas de investigarse.*

*Primero, el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que los fideicomisos que constituya el Gobernador deben contar con un estudio previo que justifique su creación; sin embargo, la realidad es que el FIDESSEG no contó con dicho estudio previo a su constitución.*

*De hecho, el propio gobierno del estado ha señalado que “la justificación de creación del fideicomiso se expuso en el apartado de considerandos del decreto gubernativo número 21”[[142]](#footnote-142). No obstante, dicha justificación se da al mismo tiempo de su creación, incumpliendo la característica de anterioridad a la creación del mismo; además, el* *apartado referido del decreto de creación consta de escasos 7 párrafos que están lejos de constituir un estudio.*

*Además, lo cierto es que en dicho apartado jamás se contempla un apartado de análisis de alternativas, ni se da cuenta acerca de las razones técnicas que acrediten que era necesario constituir un fideicomiso en vez de hacer un ejercicio directo del presupuesto para los fines descritos en el decreto.*

*Por su parte, pese a que el artículo 13 fracción I del decreto de creación del FIDESSEG otorga al Comité Técnico la facultad de aprobar el programa anual de trabajo, el gobierno del estado ha referido que no se ha elaborado ningún documento que estrictamente corresponda a un programa anual de trabajo[[143]](#footnote-143). Con esto, se confirma el carácter discrecional de la actuación del Comité Técnico gobernado, en los hechos, por el sector privado.*

*Adicionalmente, pese a que el artículo 11 del decreto de creación se abre la posibilidad de que el Comité Técnico invite a participar en sus sesiones a representantes de los órdenes de gobierno federal, académicos o miembros de la sociedad civil organizada, entre otros, que puedan contribuir a enriquecer el objeto del FIDESSEG, lo cierto es que el gobierno del estado ha manifestado[[144]](#footnote-144) que no se ha dado la participación de ningún invitado, lo cual vulnera la pretensión de incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones más allá de la cúpula empresarial cercana al gobernador.*

*Todo lo anterior se suma al problema de origen de este fideicomiso: no es legítimo regresar a los empresarios los impuestos que se les cobran para que ellos mismos administren lo recaudado. Evidentemente, esto vulnera el carácter unilateral de las contribuciones sin que necesariamente se acredite que dichos recursos se están ejerciendo en favor del interés público más allá del coto empresarial que decide cómo ejercerlos. Es un privilegio fiscal que el resto de la ciudadanía no tiene.*

*Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos pertinente que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato lleve a cabo una revisión a los recursos públicos ingresados y ejercidos mediante el FIDESSEG.*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de fiscalizar una auditoría específica los recursos ejercidos por el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG) por los ejercicios fiscales 2020 y 2021 y concomitante a 2022.

En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos encomendados a los sujetos de fiscalización son primordiales para el Poder Legislativo como responsable originario de la función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal son sujetos de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XVIII y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

De la propuesta podemos desprender la pretensión de la realización de una auditoría específica con enfoque financiero y de cumplimiento al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), por los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 y concomitante por lo que respecta al ejercicio fiscal de 2022.

Al respecto, cabe mencionar que a través del decreto gubernativo número 21 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 75, tercera parte, de fecha 15 de abril de 2019, se autorizó la constitución del *«Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en Materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato»* (FIDESSEG). El 17 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 251, tercera parte se publicaron las Reglas de Operación de dicho fideicomiso.

El 9 de agosto de 2019 se firmó el contrato de fideicomiso público identificado con el número 23425.

Respecto al Objeto del Fideicomiso, se establece: El *«Fideicomitente»* establece que el «*FIDESSEG»* tiene como objeto el constituir y administrar un patrimonio autónomo destinado a financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública para el Estado de Guanajuato.[[145]](#footnote-145)

Por lo que hace al tipo de apoyo que otorgará dicho fideicomiso, se apoyará a las asociaciones civiles legalmente constituidas y registradas, fundaciones con modelo de responsabilidad social compartida, así como dependencias y entidades de la administración pública estatal con una aportación económica no recuperable (recursos líquidos), pudiendo ser el 100% de los recursos requeridos para el proyecto o bajo el esquema de coinversión, según lo determine el Comité Técnico.[[146]](#footnote-146)

En la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, se señala que en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de 2019 se realizaron procedimientos analíticos preliminares de planeación; por lo que hace al ejercicio fiscal de 2020 se realizaron procedimientos analíticos respecto a las aportaciones al Fideicomiso; y en el avance para 2021, se han realizado procedimientos analíticos preliminares de planeación.

Derivado de lo anterior y atendiendo a que en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio 2021 la Auditoría Superior del Estado podrá incluir los hechos que correspondan a dicho ejercicio planteados por la proponente en la planeación y ejecución de dicha revisión, lo cual se contendrá en el informe de resultados de la revisión de la citada cuenta pública.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que a más tardar el 16 de junio de 2022 inicie una auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la totalidad de los recursos ejercidos por los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE INCORPORE AL PROGRAMA GENERAL DE FISCALIZACIÓN 2022 LA EVALUACIÓN A LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LA CUAL EL SUJETO DE FISCALIZACIÓN SERÁ EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y LA MATERIA LOS PROYECTOS *Q3189 ACCIONES PARA REDUCIR LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN CONTRA DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES Y Q3128 REFUGIO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA*.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que incorpore al Programa General de Fiscalización 2022 la evaluación a las intervenciones públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres en la cual el sujeto de fiscalización será el Poder Ejecutivo del Estado y la materia los proyectos *Q3189 Acciones para reducir las manifestaciones de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres* y *Q3128 Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia*.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2022 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que incorpore al Programa General de Fiscalización 2022 la evaluación a las intervenciones públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres en la cual el sujeto de fiscalización será el Poder Ejecutivo del Estado y la materia los proyectos *Q3189 Acciones para reducir las manifestaciones de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres* y *Q3128 Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia*.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 15 de marzo de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones de la proponente**

En las consideraciones expuestas en la propuesta de punto de acuerdo materia del presente dictamen se refiere lo siguiente:

*Los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres se han dado gracias al impulso del movimiento feminista en todo el mundo, incluyendo a quienes, surgidas de este movimiento, han ocupado cargos estratégicos en las administraciones y en los diferentes espacios del poder público.*

*Pese a lo anterior, quienes suscribimos esta propuesta estamos conscientes de que el proceso hacia la garantía y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres sigue siendo un camino que aún estamos transitando, y está lejos de concluir.*

*En nuestro país, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres se ha traducido en una serie de garantías encaminadas a la consecución de la igualdad sustantiva, así como al combate de obstáculos estructurales que impiden el disfrute de las libertades de las mujeres, tales como la violencia de género.*

*De esta manera, por ejemplo, tenemos un marco jurídico compuesto por instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, o la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de las cuales se desprenden instrumentos jurídicos en el ámbito local que concretan los mandatos generales en la esfera de competencias de las entidades.*

*Evidentemente, la mera existencia de estos ordenamientos no garantiza su efectivo cumplimiento. Para su correcta ejecución, son necesarias políticas públicas eficaces que se traduzcan en intervenciones públicas que, mediante bienes y servicios otorgados por el Estado, atiendan y resuelvan los problemas públicos que se interponen entre las mujeres y la garantía de sus derechos.*

*En este sentido, en el estado de Guanajuato, desde hace varios años se cuenta con el programa E045 denominado Acceso Equitativo y Oportunidades de Desarrollo para Mujeres y Hombres, a cargo del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG). El propósito dicho programa, según su propio diseño, es lograr que disminuya la desigualdad, la discriminación y la violencia ejercida hacia las niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Guanajuato[[147]](#footnote-147).*

*Lamentablemente, el propósito del programa parece estar lejos de lograrse cuando recordamos que, del 2017 al 2021 la cifra de denuncias por violencia contra la mujer se disparó, incrementando un 331%. Todo esto, sin que existiera una variación muy baja en la cifra negra, es decir, en los delitos no denunciados, al mantenerse por encima del 92%.*

*Según información de la propia Fiscalía General del Estado de Guanajuato, tan sólo en 2021, 1,484 mujeres denunciaron algún tipo de violencia[[148]](#footnote-148).* *Tomando en cuenta el nivel de cifra negra de 92%[[149]](#footnote-149) que prevalece en nuestro estado, es posible estimar que adicionalmente vivieron violencia no denunciada aproximadamente 17,066 mujeres durante 2021, esto es, un estimado total de 18,550 mujeres vivieron algún tipo de violencia en nuestra entidad a lo largo del año.*

*Esto representa un incremento notable, pues cuando vemos que en 2017 las mujeres que denunciaron algún tipo de violencia fueron apenas 448, con un nivel de cifra negra de 92.4%, podemos observar un estimado de 5,894 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia durante 2017. El incremento es claro: en 5 años se pasó de 5,894 a 18,550 mujeres viviendo violencia en Guanajuato, un incremento de 12,656 mujeres víctimas de violencia, 314.7% más mujeres a quienes su derecho a una vida libre de violencia les ha sido negado en el estado de Guanajuato.*

*De este modo, con el convencimiento de que lo que se mide se puede mejorar, las y los iniciantes consideramos pertinente llevar a cabo una evaluación del programa Acceso Equitativo y Oportunidades de Desarrollo para Mujeres y Hombres que se está llevando a cabo en nuestro estado.*

*Esta preocupación no es exclusivamente nuestra, pues como puede verificarse en el Programa General de Fiscalización 2022, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, orientada por la sociedad civil, tiene contemplado evaluar el proyecto Q3195 denominado Acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad, mismo que forma parte del programa presupuestario E045 en mención.*

*Sin embargo, existen otros proyectos dentro del mismo programa presupuestario que, si desde este Congreso no incorporamos, quedarán fuera del alcance de la evaluación que ya se plantea realizar la ASEG. En este sentido, dentro del propio E045 se encuentran el proyecto Acciones para reducir las manifestaciones de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, con clave Q3189, así como el proyecto Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, con clave Q3128.*

*Evidentemente, los proyectos mencionados son imprescindibles para atender el grave problema de violencia que viven las mujeres en nuestra entidad, por lo cual todas y todos quienes nos preocupamos por un mundo más igualitario debemos reconocer el interés público intrínseco a evaluar el funcionamiento de dichos proyectos.*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de evaluar otros proyectos del programa E045, *Acceso Equitativo y Oportunidades de Desarrollo para Mujeres y Hombres*, como lo son los proyectos *Q3189 Acciones para reducir las manifestaciones de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres* y *Q3128 Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia,* a fin de evaluar las políticas públicas enfocadas a garantizar los derechos de las mujeres.

En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos encomendados a los sujetos de fiscalización es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

También debemos destacar dentro del tema de fiscalización la revisión del cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía; así como la evaluación de las políticas públicas.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.

El Poder Ejecutivo del Estado, así como las dependencias y entidades de la administración pública estatal son sujetos de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XVIII y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracciones I y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo antes señalado, coincidimos con la proponente en evaluar la eficacia de las políticas públicas enfocadas a garantizar los derechos de las mujeres.

De la propuesta podemos desprender la pretensión de la realización de auditorías al desempeño a los proyectos *Q3189 Acciones para reducir las manifestaciones de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres* y *Q3128 Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, que forman parte del Programa* E045, *Acceso Equitativo y Oportunidades de Desarrollo para Mujeres y Hombres* a cargo del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses

En la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, se señala que se han realizado las siguientes auditorías que es encuentran relacionadas con la materia propuesta, de conformidad con la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Materia** | **Objetivo** | **Hitos** |
| 2017 | Acceso equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres (E045) | Verificar el desempeño del IMUG en cuanto a la implementación de acciones de prevención de la violencia contra las mujeres en las fases primaria y secundaria, mediante la eficiencia en el desarrollo de sus procesos y la eficacia en la cobertura de estas, así como el resultado de su implementación en la población participante. | Se emitieron 15 recomendaciones, de las cuales 14 fueron valoradas bajo la categoría de «persiste», mientras que una restante se dio por atendida (realizó). |
| 2021 | E045 Acceso Equitativo y Oportunidades de Desarrollo para Mujeres y Hombres (E045). | Sin definir. Los trabajos corresponden al Programa General de Fiscalización 2022 y se encuentran en fase de planificación. | No aplica. |

Fuente: Elaboración propia.

En este orden de ideas, para la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la perspectiva de género es la *«metodología que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y los hombres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género*»[[150]](#footnote-150).

Razón por la cual, la auditoría al desempeño tiene un gran potencial de desarrollo, pues además de observar la eficiencia, la economía, la eficacia y la calidad de los planes y programas, su campo de actuación se ha ampliado a nuevos horizontes (según se reconoce en el Plan Estratégico 2021-2027 de la Auditoría Superior del Estado) como la revisión de temas transversales, la sustentabilidad (desarrollo sostenible), la gobernanza, el medio ambiente, los derechos humanos y la igualdad de género.

En particular, sobre el objetivo de las auditorías de desempeño que integran la perspectiva de género en su proceso fiscalizador, se distinguirá por su orientación a determinar el grado de cumplimiento con los compromisos en materia de igualdad, en efecto, las auditorías de desempeño con perspectiva de género son una herramienta para el monitoreo y control de los programas, proyectos y acciones públicas, mediante las cuales se busca fortalecer los cambios institucionales que se requieren para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas durante las fases de planeación, programación, presupuestación y evaluación. Al igual que con el resto de los enfoques de las auditorías de desempeño, se emitirán las recomendaciones que conduzcan a mejoras en el diseño, la implementación y los resultados de las políticas y programas gubernamentales, lo que contribuye a mejores resultados en materia de igualdad de género.

1. **Perspectiva de género en las labores de fiscalización**

Conscientes de la trascendencia de incorporar la perspectiva de género en las labores de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en su filosofía institucional estableció, entre otros, el valor de la equidad (entendido como el compromiso institucional por garantizar que tanto mujeres como hombres accedan a las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades.) y, la igualdad y no discriminación (que nos compromete a actuar sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia alguna), mismos que se encuentran reconocidos en el Plan Estratégico de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 2021-2027.

A efecto de materializar los valores mencionados, la Auditoría Superior del Estado en su Plan Estratégico desdobla una serie de estrategias que tienen por objetivo generar «*Resultados de Valor*», por lo que se pretende implementar prácticas institucionales de fiscalización disruptiva de alto impacto y generar las capacidades ciudadanas para su participación e incidencia para la integridad pública. Es así que, para lograr tales resultados se estructuraron estrategias operativas, destacando la estrategia *«EO8 - fiscalizar con un enfoque de DD.HH. y Género»,* las cuales buscan posicionar las prácticas institucionales en materia de derechos humanos y género.

Para la materialización de la estrategia operativa estrategia *«EO8 - fiscalizar con un enfoque de DD.HH. y Género»,* se consideraron, entre otras, dos líneas de acción:

1. Desarrollar metodologías innovadoras que permitan incorporar perspectivas de derechos humanos y género en las labores de fiscalización.
2. Impulsar progresivamente mecanismos de colaboración para el desarrollo de labores de fiscalización con perspectiva de género y de derechos humanos.

De lo anterior, podemos desprender la importancia y el valor que tienen para la Auditoría Superior del Estado las auditorías de desempeño con perspectiva de género, ya que a través de las mismas se contribuye, en una acción proactiva, en el avance constante de la construcción de la equidad de género en el Estado.

1. **Programa General de Fiscalización para el ejercicio 2022**

En congruencia con los valores institucionales y el Plan Estratégico 2021-2027, la Auditoría Superior del Estado dispuso de los elementos normativos y materiales a fin de que la ciudadanía tuviera un espacio accesible para realizar propuestas de temas para la co-construcción del Programa General de Fiscalización con carácter ciudadano, siendo el del año 2022 el primer programa en considerar los intereses ciudadanos como un insumo para la programación de los actos de fiscalización.

En tal sentido, una de las temáticas incluidas al Programa General de Fiscalización 2022 sugerida por la ciudadanía, es la auditoría de desempeño al programa presupuestario *E045 de «Acceso a las Mujeres a Oportunidades de Desarrollo en Condiciones de Igualdad»*. De manera particular, con alcance al proyecto *Q3195 denominado: «Acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad»,* que tiene como objetivos específicos mejorar las condiciones económicas de vida y el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres en situación de alta vulnerabilidad y/o violencia, a través del otorgamiento de apoyos de tipo económico, e impulsar el acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo, mediante la entrega de medidas compensatorias que les permita solventar los gastos emergentes en rubros en los que presenten algún rezago social».

1. **Estrategia de la incorporación de la perspectiva de género en las auditorías de desempeño**

Dada la relevancia de la incorporación de la perspectiva de género en las auditorías de desempeño, y la trascendencia de que dicha incorporación sea aplicable a cualquier política, programa o proyecto, aportando con ello elementos y conocimiento que permita mejorar la inclusividad y la equidad de las políticas públicas en favor de la población, la Auditoría Superior del Estado se ha propuesto realizar una estrategia que conlleve la realización de una serie de acciones complementarias durante el ejercicio 2022 que permitan incorporar, definitivamente, la perspectiva de género en los trabajos de fiscalización, de acuerdo a lo que se establece a continuación:

**Estrategia operativa 2022, sobre la incorporación de la Perspectiva de Género**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acciones** | **Justificación** |
| Desarrollo de capacidades profesionales en materia de género | Consolidar un equipo especializado en materia de elaboración de auditorías de género. |
| Auditoría de Desempeño con Perspectiva de Género al Programa Q3195 *«Acceso de las Mujeres a Oportunidades de Desarrollo en Condiciones de Igualdad»,* del ejercicio 2021 | Comenzar a explorar metodologías de auditoría con perspectiva de género que atiendan a los valores, objetivos y estrategias del Plan Estratégico 2021-2027. |
| Elaboración de Lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género en las labores de fiscalización | Sistematizar la primera experiencia institucional sobre la perspectiva de género, a efecto de determinar principios generales y procesales para replicar la perspectiva de género en futuros ejercicios de auditoría. |
| Espacios de colaboración y participación sobre la fiscalización con rostro de mujer | Sensibilización sobre la fiscalización con perspectiva de género, dirigida tanto a los actores internos y externos, de manera que se contribuya a su institucionalización. |

Fuente: Elaboración propia.

Lo antes señalado implica que los trabajos programados para el ejercicio 2022, en materia de igualdad (perspectiva de género), no se limitan a la realización de la auditoría de desempeño al proyecto Q3195 *«Acceso de las Mujeres a Oportunidades de Desarrollo en Condiciones de Igualdad»*, sino que, el compromiso institucional es tener un mayor alcance, a partir del desarrollo de las actividades complementarias relativas a la profesionalización, sistematización (documentación) de las experiencias, así como a su difusión e institucionalización.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que de acuerdo a lo informado por la Auditoría Superior del Estado, las acciones de fiscalización en materia de perspectiva de género no se limitan a la realización de la auditoría de desempeño programada para este ejercicio, sino que, se buscará tener un mayor alcance, a partir del desarrollo de actividades complementarias tendientes a desarrollar metodologías que permitan incorporar perspectivas de derechos humanos y género en las labores de fiscalización e impulsar progresivamente mecanismos de colaboración para el desarrollo de labores de fiscalización con perspectiva de género y de derechos humanos, lo cual se irá dando de manera progresiva y sostenible, lo cual implicará que en los Programas Generales de Fiscalización de los años 2023 a 2027 será observará la progresividad de actos de fiscalización con perspectiva de género, principalmente mediante auditorías de desempeño, sin limitar a otros tipos de auditoría en los que también se adopte dicha perspectiva.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que incorpore al Programa General de Fiscalización 2022 la evaluación a las intervenciones públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres en la cual el sujeto de fiscalización será el Poder Ejecutivo del Estado y la materia los proyectos *Q3189 Acciones para reducir las manifestaciones de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres* y *Q3128 Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia*. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO., A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 DE DICHO MUNICIPIO.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta formulada por el ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., a efecto de que se lleve a cabo una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021 de dicho Municipio.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

El ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., en sesión extraordinaria celebrada el 15 de febrero de 2022 aprobó por unanimidad de votos solicitar al Congreso del Estado llevar a cabo una auditoría integral a la Administración Pública Municipal 2018-2021, con base en el artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

El 17 de marzo de 2022, la referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

En la reunión de esta Comisión celebrada el 24 de marzo de 2022, se dio cuenta y se radicó la propuesta y se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso.

1. **Consideraciones**

Del contenido del acta de la sesión extraordinaria del ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., celebrada el 15 de febrero de 2022, se desprende que la propuesta materia del presente dictamen tiene por objeto solicitar la realización de una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021.

Al respecto quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo; mientras que la fracción IV del mismo precepto establece que la Auditoría Superior del Estado podrá acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de la propia Constitución Local.

El ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., es sujeto de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XIX y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En este orden de ideas, de acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, durante los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 se efectuaron las siguientes revisiones y auditorías a la administración pública de San José Iturbide, Gto.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Auditoría** | **Porcentaje revisado de ingresos** | **Porcentaje revisado de egresos** |
| **2018** | **Revisión de Cuenta Pública** |  |  |
|  | Sector Central | 48 | 56 |
|  | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San José Iturbide, Gto. | 55 | 26 |
|  | Patronato de Feria, Fiestas Patrias y Tradicionales del Municipio de San José Iturbide, Gto. | 100 | 98 |
|  | **Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública** | 100 | 63 |
| **2019** | **Revisión de Cuenta Pública** |  |  |
|  | Sector Central | 76 | 53 |
|  | **Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública** | 100 | 49 |
| **2020** | **Revisión de Cuenta Pública** |  |  |
|  | Sector Central | 64 | 62 |
|  | **Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal** | 100 | 39 |
| **2021** | **Revisión de Cuenta Pública** |  |  |
|  | En etapa de análisis de información financiera del periodo de enero a junio y julio a diciembre 2021 | Proceso | Proceso |

De acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado para la realización de los procesos de fiscalización se determinan con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación. Los análisis realizados en la planeación están vinculados con la generalidad del sujeto de fiscalización, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por órganos internos de control, auditorías externas y realizadas por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles y procesamiento de CFDI (XML).

El alcance y procedimientos referidos forman parte de los análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado para efecto de determinar la materialidad y la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución, situación por la cual, los alcances establecidos en los respectivos informes de resultados se complementan con los procedimientos de planeación específica, mismos que forman parte integral del análisis que realiza dicho ente auditor.

En el caso de la administración municipal de San José Iturbide, Gto., en cuanto a las auditorías practicadas al Ramo General 33 y obra pública y a la infraestructura pública municipal de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 se revisaron obras y servicios relacionados con la misma; verificándose que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad con las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan; que los presupuestos considerados para la ejecución de las obras se hayan aplicado correctamente, y que las modificaciones ocurridas se justifiquen mediante los convenios correspondientes; que la adjudicación y contratación de la obra pública se hayan realizado con estricto apego a lo dispuesto en la legislación vigente y que no existiera conflicto de interés entre los contratistas y los funcionarios públicos que decidieron las adjudicaciones; que los sistemas de control interno, operativo y contable que regulan la función, aseguren la protección de los recursos y su efectiva utilización, la calidad de los trabajos, la razonabilidad de los costos y la confiabilidad de la información en la ejecución de la obra pública; y que los contratistas hayan cumplido con las cláusulas contractuales, las especificaciones de obra, los procedimientos de construcción y la calendarización de los trabajos.

Destacando que en las referidas auditorías se contempló la revisión de una muestra de las obras y acciones ejercidas por la administración municipal en los periodos auditados, las cuales se determinaron con base en una planeación basada en riesgos, entre cuyos análisis se contemplan los temas de interés de la sociedad reflejados en notas periodísticas y el interés parlamentario, entre otros.

Por lo que hace a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* Activo: Computadoras y equipo periférico, automóviles y camiones.
* Ingresos: Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, expedición de permisos eventuales para bebidas alcohólicas, servicios de limpia y recolección de basura, participaciones y aportaciones.
* Egresos: Sueldos base, antigüedad, liquidación por indemnización y sueldos y salarios caídos, material eléctrico y electrónico, vestuarios y uniformes, prendas de protección para seguridad pública, servicios integrales, servicios de capacitación, difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, subsidios a la prestación de servicios públicos.

**DIF:**

* Ingresos: Transferencias de Tesorería Municipal.
* Egresos: Medicinas y productos farmacéuticos.

**Patronato de Feria:**

* Ingresos: Transferencias y asignaciones.
* Egresos: Gastos de orden social y cultural.

De la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 se revisaron los siguientes apartados:

**Sector Central:**

* Activo: Banorte 0860648972 Nómina, cuentas por cobrar, computadoras, otros mobiliarios, automóviles y camiones, equipo de defensa y seguridad, maquinaria y equipo de construcción y equipo de comunicación.
* Ingresos: Impuestos sobre diversiones y espectáculos, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, impuesto predial, participaciones y aportaciones.
* Egresos: Dietas, sueldos base, prima quinquenal, prima vacacional, gratificaciones de fin de año, compensaciones por servicios, seguros, liquidaciones por indemnizaciones, prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo, material eléctrico, vestuario y uniformes, servicios legales, servicios de consultoría administrativa, difusión de actividad gubernamental, viáticos al extranjero, transferencias y asignaciones, ayudas sociales a instituciones de enseñanza y jubilaciones.

Por lo que hace a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* Activo: Computadoras y equipo periférico, otro mobiliario y equipos de administración, automóviles y camiones, equipo de defensa y seguridad.
* Ingresos: Participaciones y aportaciones,
* Egresos: Dietas, sueldos base, prima quinquenal, prima vacacional, gratificaciones de fin de año, compensaciones por servicios, seguros, liquidaciones por indemnizaciones, sueldos y salarios caídos, prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo, material para el registro e identificación de personas, material eléctrico, servicios de consultoría administrativa, difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales, gastos de orden social y cultural, otros gastos por responsabilidades, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, transferencias para inversión pública, gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayudas, ayudas por desastres naturales y otros siniestros y jubilaciones.

Es así, que de acuerdo a la información antes señalada, la Auditoría Superior del Estado ha realizado 3 revisiones de cuenta pública y 3 auditorías practicadas al Ramo General 33 y obra pública y a la infraestructura pública municipal.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que ya se realizaron diversos actos de fiscalización a la administración municipal de San José Iturbide, Gto., por parte de la Auditoría Superior del Estado a los ejercicios fiscales que se propone auditar.

No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados por el ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio. Asimismo, el informe general del proceso de entrega-recepción correspondiente a dicha administración pública municipal, en el que se establecen las observaciones derivadas de dicho proceso será considerado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de revisión de la cuenta pública municipal y se hará del conocimiento de la Contraloría Municipal de San José Iturbide, Gto., para los efectos del artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta formulada por el ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., a efecto de que se lleve a cabo una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021 de dicho Municipio, con base en el artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Por lo tanto, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al ayuntamiento de San José Iturbide, Gto., junto con su dictamen para su conocimiento; así como al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR EL DIPUTADO ERNESTO MILLÁN SOBERANES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA FINANCIERA INTEGRAL AL MUNICIPIO DE SILAO, GTO., POR LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2019, 2020 Y 2021; Y REALICE LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS E INFORME A LA BREVEDAD AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SI LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO INICIÓ PROCESO ALGUNO CONTRA QUIEN RESULTARA RESPONSABLE POR LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 DE DICHO MUNICIPIO.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Silao, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; y realice las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría del municipio de Silao inició proceso alguno contra quien resultara responsable por las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

El diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en la sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2022 presentó la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Silao, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas, la que deberá incluir al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría del municipio de Silao inició proceso alguno contra quien resultara responsable por las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 24 de marzo de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones del proponente**

En las consideraciones expuestas por el proponente se refiere lo siguiente:

*Gracias a las últimas dos administraciones públicas municipales que, consecutivamente, fueron emanadas del PAN, el municipio de Silao entró en un proceso de degradación de la vida pública que se ha traducido en una fuerte limitación de las capacidades institucionales del propio municipio, generando así servicios públicos deficientes y un halo de corrupción que por años ha impactado negativamente la vida de todas y todos los ciudadanos.*

*Los ejemplos abundan. Uno de ellos es el antiguo director de protección civil, Eduardo Maldonado Galván, quien puso a su nombre una motobomba, una ambulancia y equipo de rescate donados para el beneficio de Silao por migrantes de los clubes de Migrantes Bajío de Bonillas y Bajío Nueva Era, luego de lo cual el exfuncionario se adueñó de las donaciones.*

*Otro ejemplo es que el 52% de los camiones de transporte público están en malas condiciones, pues la actual administración encontró que de los 137 en circulación, sólo 65 cumplieron con la revisión mecánica, sin que en la administración panista se hubiese hecho algo por cumplir con las obligaciones de inspección y protección a la ciudadanía por parte del poder público.*

*Un ejemplo más está en la plena irregularidad con la que operaba el rastro municipal, pues en la inspección realizada el 7 de octubre de 2021, la Secretaría de Salud estatal realizó más de 30 observaciones por deficiencias normativas a la adecuada higiene que, a la fecha, y gracias al esfuerzo y trabajo que ha realizado la administración actual, se han podido solventar 80% de las mismas.*

*Asimismo, los informes de auditoría llevados a cabo durante la última administración encabezada por el panista José Antonio Trejo Valdepeña, dan cuenta del nivel de degradación y corrupción que se generó en las instituciones durante su gestión.*

*En 2019, la revisión de cuenta pública de Silao tuvo un alcance del 49% de los egresos, y pese a ser menos de la mitad del gasto, se encontraron pagos a empleados municipales por encima de lo marcado por el tabulador respectivo, modificaciones ilegales de las bases de concurso para la adjudicación de chalecos balísticos para beneficiar con un contrato de un millón trescientos sesenta y seis mil pesos a un proveedor amigo, así como irregularidades en la extinción del Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), en existen las actas de Ayuntamiento que lo extinguieran ni los documentos que acreditaran que había pasado por los bienes muebles e inmuebles del mismo.*

*Por su parte, la auditoría a obra pública y recursos del ramo 33 para el propio ejercicio fiscal de 2019, con un alcance del 46% de los egresos, arrojó múltiples irregularidades en obras como la pavimentación del camino rural a Santa Fe de Guadalupe, la fallida rehabilitación del Cine Montes, con la compra de las butacas que no están en posesión del municipio, pero fueron pagadas en su totalidad al proveedor, o la construcción del drenaje sanitario en Comanjilla, entre otras, observaciones que en suma dan la cantidad de más de dos millones de pesos, que no fueron comprobados por el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Toño Trejo.*

*En el mismo sentido, en la revisión de cuenta pública 2020 del propio municipio de Silao, con un alcance del 53% de los egresos, se encontró que la administración panista contrató servicios de consultoría de forma irregular, para la elaboración de un diagnóstico de comunicación institucional por más de 400 mil pesos. Sin embargo, el supuesto prestador de servicios manifestó no conocer ni la prestación del servicio, ni las firmas plasmadas en el contrato espurio, estando en este tema la comisión de un probable delito por falsificación de documentos.*

*Y claro que no podemos olvidar otros actos ocurridos en la administración panista que son la “pérdida” de veintiocho mil balas y el robo a las arcas de Presidencia Municipal, dinero que quien sabe a los bolsillos de quien fueron a parar, ambos asuntos que ya han sido expuestos en esta tribuna.*

*Como puede observarse en el alcance de las revisiones llevadas a cabo hasta el momento, pese a los múltiples casos de corrupción evidenciados hasta el momento, aún existe un espacio susceptible de investigación muy amplio, en el que pudieron desarrollarse desvíos de recursos, uso patrimonial de las instituciones, y diversas afectaciones a la Hacienda Pública municipal de Silao.*

*Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos pertinente la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que lleve a cabo una auditoría de todas aquellas partidas no revisadas mediante los procesos de fiscalización llevados a cabo para los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y realice las investigaciones necesarias para conocer si se iniciaron los procesos pertinentes por las observaciones no solventadas por el Municipio de Silao en el periodo 2019, 2021 y 2021.*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de fiscalizar el uso y destino de recursos públicos de la administración pública municipal de Silao de la Victoria, Gto., con relación a diversos hechos referidos en dicha propuesta.

Al respecto quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo; mientras que la fracción IV del mismo precepto establece que la Auditoría Superior del Estado podrá acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de la propia Constitución local.

El ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., es sujeto de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XIX y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En este orden de ideas, de acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se efectuaron las siguientes revisiones y auditorías a la administración pública de Silao de la Victoria, Gto.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Auditoría** | **Porcentaje revisado de ingresos** | **Porcentaje revisado de egresos** |
| 2019 | Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública | 100\* | 46 |
| 2019 | Revisión de cuenta pública  Sector central | 66 | 49 |
| 2020 | Auditoría a la infraestructura pública municipal | 100\* | 52 |
| 2020 | Revisión de cuenta pública  Sector central | 61 | 53 |
| 2021 | Revisión de cuenta pública y auditoría de infraestructura pública |  |  |
|  | En etapa de análisis de información financiera del periodo de enero a junio y julio a diciembre de 2021 | Proceso | Proceso |

\* FAISMDF

De acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado para la realización de los procesos de fiscalización se determinan con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación. Los análisis realizados en la planeación están vinculados con la generalidad del sujeto de fiscalización, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por órganos internos de control, auditorías externas y realizadas por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles y procesamiento de CFDI (XML).

El alcance y procedimientos referidos forman parte de los análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado para efecto de determinar la materialidad y la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución, situación por la cual, los alcances establecidos en los respectivos informes de resultados se complementan con los procedimientos de planeación específica, mismos que forman parte integral del análisis que realiza dicho ente auditor.

Respecto a los procedimientos aplicados, en las planeaciones de los ejercicios fiscales revisados se consideró lo siguiente: Identificar a los contratistas con mayor número de obras adjudicadas, y en su caso verificar si cuentan con la capacidad suficiente para la ejecución de las mismas; identificar los contratos de mayor importe y verificar el proceso de adjudicación; verificar si los contratistas que ejecutaron obras o servicios en el Municipio han sido observados anteriormente; revisar obras de urbanización y edificación de mayor importe que, por la complejidad, magnitud y volumetría de los trabajos ejecutados, origina un alto riesgo relacionado a la ejecución y supervisión de los mismos, pudiendo derivar en observaciones ligadas a calidad de obra, precios unitarios, cantidades de obra, soporte documental, cierre administrativo, etc; revisar los servicios de supervisión externa ligados a cada una de las obras que integran la muestra de auditoría; realizar análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado; y revisar la información contable para identificar saldos pendientes por amortizar de anticipos otorgados en ejercicios anteriores.

Destacando que en las referidas auditorías se contempló la revisión de una muestra de las obras y acciones ejercidas por la administración municipal en los periodos auditados, las cuales se determinaron con base en una planeación basada en riesgos, entre cuyos análisis se contemplan los temas de interés de la sociedad reflejados en notas periodísticas y el interés parlamentario, entre otros.

De igual forma, a las obras de la muestra de auditoría se les aplicaron los procedimientos señalados previamente y derivado de las consideraciones del proponente no se identificaron riesgos específicos relacionados a obra pública.

Por lo que hace a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* **Activo:** Pagos de nómina, adquisiciones de automóviles y camiones y equipo de cómputo.
* **Ingresos:** Participaciones y aportaciones.
* **Egresos:** Servicios personales: Sueldos, remuneraciones de eventuales, asignaciones adicionales al sueldo, gratificación de fin de año, dietas, otras prestaciones y jubilaciones, liquidaciones por indemnización, entre otros.

Materiales y suministros: Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicación, vestuario y uniformes, prendas de protección para seguridad pública.

Servicios generales: Arrendamiento vehículos servicios administrativos, servicios de consultoría administrativa, servicios profesionales científicos y técnicos integrales, gastos de orden social y cultural.

Subsidios y subvenciones: Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas, gastos relacionados con actividades culturales deportivas y ayudas.

Adicionalmente, se investigó sobre la existencia del acta de aprobación de la extinción del Instituto Municipal de Vivienda de Silao, así como los términos de liquidación.

De la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se revisaron los siguientes apartados:

**Sector Central:**

* **Activo:** Adquisiciones de: Muebles de oficina y estantería, aautomóviles y camiones, sistemas de aire acondicionado calefacción y refrigeración, software.
* **Ingresos:** Participaciones y aportaciones.
* **Egresos:** Servicios personales: Sueldos, remuneraciones de eventuales, asignaciones adicionales al sueldo, gratificación de fin de año, dietas, otras prestaciones y jubilaciones, liquidaciones por indemnización, entre otros más.

Materiales y suministros: Equipos menores de oficina, vestuario y uniformes, prendas de protección para seguridad pública.

Servicios generales: Arrendamiento de edificios y locales, servicios de consultoría administrativa, servicios de capacitación, seguro de bienes patrimoniales.

Transferencias internas y asignaciones al sector público: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Ayudas Sociales: Gastos relacionados con actividades culturales deportivas y ayudas, ayudas por desastres naturales y otros siniestros, otras pensiones y jubilaciones.

En relación a la pérdida de veintiocho mil balas y el robo a las arcas de Presidencia Municipal, el Órgano Interno de Control del Municipio se encuentra realizando las investigaciones al respecto, en la tramitación de los expedientes, PERO/69/2021-2024 y PRA/AS/02/2021, respectivamente.

Finalmente se precisa que la selección de las cuentas a revisar durante los ejercicios señalados se realizó con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación.

Adicionalmente, se informó que se llevaron a cabo diversas revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación[[151]](#footnote-151), las cuales se detallan a continuación:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

De conformidad a la información antes señalada, la Auditoría Superior del Estado ha realizado 2 revisiones de cuenta pública y 2 auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal, adicionales a las que a la fecha se encuentran en ejecución. Asimismo, se realizaron 3 revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica y propuestas ciudadanas, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que ya se realizaron diversos actos de fiscalización a la administración municipal de Silao de Victoria, Gto., por parte tanto de la Auditoría Superior del Estado como de la Auditoría Superior de la Federación a los ejercicios fiscales que se propone auditar. Aunado a lo anterior, respecto a algunos hechos referidos en la propuesta existen denuncias ya presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por ser el órgano competente para tal efecto.

No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados por la proponente en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por el diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Silao, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas, la que deberá incluir al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría del municipio de Silao inició proceso alguno contra quien resultara responsable por las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA QUE LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA FINANCIERA INTEGRAL AL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., POR LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2019, 2020 Y 2021; Y REALICE LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS E INFORME A LA BREVEDAD AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SI LA CONTRALORÍA MUNICIPAL INICIÓ ALGÚN PROCESO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 DE DICHO MUNICIPIO.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Cortazar, Gto., por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; y realice las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría Municipal inició algún proceso derivado de las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en la sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2022 presentaron la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Cortazar, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas, la que deberá incluir al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría del municipio de Cortazar inició proceso alguno derivado de las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 5 de abril de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones de las y los proponentes**

En las consideraciones expuestas en la propuesta materia del presente dictamen se refiere lo siguiente:

*En esta legislatura nos hemos percatado de la gran cantidad de observaciones que se han realizado a las cuentas públicas de los municipios, por tal motivo desde esta tribuna se han solicitado Auditorías Integrales, pero aún falta mucho por hacer, mucho por encontrar y mucho por castigar.*

*Bajo el cobijo del gobierno estatal, varios Presidentes Municipales, se han dado a la tarea de hacer por decirlo de una manera gentil, movimientos extraños de las finanzas de sus municipios, han dado apoyos ilegales a amigos, han beneficiado a empresarios y han realizado actos de corrupción.*

*El grupo Parlamentario de Morena en esta Legislatura, ha votado reiteradamente en contra de los dictámenes que aprueban las auditorias a las cuentas públicas de los municipios, y no es solo por querer votar en contra, es por la falta de información de las auditorias, el bajo porcentaje de revisión, la falta de solicitudes de castigos a quienes hayan cometido actos ilícitos con el dinero del pueblo.*

*El año 2021, Ariel Corona, ganó la reelección como alcalde de Cortazar, es un panista allegado a lo más altos puestos en el Gobierno Estatal, que se les ha mantenido leal y que esto le ha dado protección para hacer y deshacer en el municipio, ha realizado, según las auditorías de la ASEG, múltiples anomalías que han afectado a las arcas municipales y por ende a la de los bolsillos de todos los cortazarenses.*

*Un ejemplo de ello, es la compra directa sin licitación de vehículos por un monto de un millón doscientos setenta y cinco mil peso, compra que se hizo de manera ilegal y favoreciendo a una empresa con apenas un año de haberse constituido, esta compra es a todas luces mal intencionada, ya que hacen la compra en la segunda quincena de diciembre con presupuesto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y sabedores que de no hacer uso del dinero hay que reintegrarlo, pues se sacan de la manga una compra urgente de 5 unidades, unidades que en todo el año no fueron necesarias.*

*Otra acción igual de grave que se realizó en el año 2019, fue la simulación de la elaboración de varios manuales para la Unidad de Transparencia del municipio, se pagaron cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos a un particular para la realización de estos, sin embargo, el titular de la unidad de transparencia en el momento de la auditoría dijo que no conocía ni reconocía la personalidad de la prestadora del servicio, pero la mentira y corrupción no termina ahí, quien en su momento era titular de la unidad administrativa de transparencia, a pregunta expresa sobre si ella elaboró el Manual de procedimientos y organización 2019, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, mediante oficio contesto lo siguiente:*

*Dicho manual fue elaborado por la suscrita, y dicho manual fue aprobado por el Presidente Municipal.*

*Es decir, el alcalde Panista Ariel Corona, sabía que existían los manuales y aun así, aprobó que se pagaran a una persona la supuesta elaboración de los manuales para beneficiarse de ese dinero.*

*Estos son solo dos ejemplos de cuestiones administrativas en las que la administración panista hizo uso indebido del dinero de los ciudadanos de Cortazar, por que en el área de obra pública y ramo 33 la cosa esta aún peor, la auditoría para el ejercicio fiscal 2019 encontró 62 anomalías por más de 13 millones de pesos.*

*Y como no van a existir anomalías, si podemos empezar con la empresa que realizó la remodelación de la oficina del Presidente Municipal, que presentó un domicilio fiscal que no existe, quedando a deber dinero al municipio y pues no hay donde localizarlo.*

*Las anomalías en obras como la electrificación de UMAPS en Cañada de Caracheo, la construcción del drenaje en la Colonia Santa Fe, la pavimentación de la calle Ave, entre otras muchas más son ejemplos de que el dinero no esta siendo bien aplicado en el municipio. El alcalde se quiere safar diciendo que varias son obras del Gobierno anterior, sin embargo, es su obligación revisar que se cumplan con los contratos y que si se hagan las obras, por que al final quien acepta que se concluyó y da el visto bueno a la obra, fue la administración 2018-2021 y si hay evidencia de que en su gobierno se siguieron pagando las obras, por lo que ya no lo exime de solventar las irregularidades.*

*La opacidad con la que se ha manejado la actual administración va desde que el actual Secretario de Ayuntamiento el Ing. Alejandro Perea Castro, se ha negado a expedir copias certificadas, oculta la información de sesiones ordinarias del Ayuntamiento, así como la obstaculización del trabajo que pretenden realizar las regidoras de oposición, se suman a este ocultamiento de información la negativa* *del Alcalde Ariel Corona a presentar de manera concreta y con sustento temas específicos que se revisan en sesiones, intentonas por que se aprueben movimientos en cuentas públicas sin antes pasar por la Comisión de Hacienda, la existencia de aviadores comprobados en Sesiones de Ayuntamiento, negativa de dar a conocer las plantillas de trabajadores, decisiones unilaterales de uso de recursos públicos, la inexistencia del procedimiento de la entrega recepción de la administración 2018-2021 a la actual que por que a dichos del Presidente Municipal, son los mismos entonces no se necesita, entre otras muchas cosas más…*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de fiscalizar el uso y destino de recursos públicos de la administración pública municipal de Cortazar, Gto., con relación a diversos hechos referidos en dicha propuesta.

Al respecto quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo; mientras que la fracción IV del mismo precepto establece que la Auditoría Superior del Estado podrá acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de la propia Constitución Local.

El ayuntamiento de Cortazar, Gto., es sujeto de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XIX y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En este orden de ideas, de acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se efectuaron las siguientes revisiones y auditorías a la administración pública de Cortazar, Gto.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Auditoría** | **Porcentaje revisado de ingresos** | **Porcentaje revisado de egresos** |
| 2019 | Auditoría del Ramo General 33 y Obra Pública | 100(1) | 65(2) |
| 2019 | Revisión de cuenta pública |  |  |
|  | Sector central | 76 | 58 |
| 2020 | Auditoria a la infraestructura pública municipal | 100(1) | 44(2) |
| 2020 | Revisión de cuenta pública |  |  |
|  | Sector central | 67 | 62 |
| 2021 | Auditoria a la infraestructura pública municipal | Por iniciar | Por iniciar |
| 2021 | Revisión de cuenta pública y auditoría de infraestructura pública |  |  |
|  | En etapa de análisis de información financiera del periodo de enero a junio y julio a diciembre de 2021 | En Proceso | En Proceso |

**Notas:**

1. De los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
2. De los recursos devengados en obra pública.

De acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado para la realización de los procesos de fiscalización se determinan con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación. Los análisis realizados en la planeación están vinculados con la generalidad del sujeto de fiscalización, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por órganos internos de control, auditorías externas y realizadas por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles y procesamiento de CFDI (XML).

El alcance y procedimientos referidos forman parte de los análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado para efecto de determinar la materialidad y la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución, situación por la cual, los alcances establecidos en los respectivos informes de resultados se complementan con los procedimientos de planeación específica, mismos que forman parte integral del análisis que realiza dicho ente auditor.

En la auditoría practicada al Ramo General 33 y Obra Pública del ejercicio fiscal 2019 se revisaron 25 obras y en la auditoría realizada a la infraestructura pública municipal del ejercicio fiscal 2020 se revisaron 20 obras, en las que se verificó que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad con las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan; que los presupuestos considerados para la ejecución de las obras se hayan aplicado correctamente, y que las modificaciones ocurridas se justifiquen mediante los convenios correspondientes; que la adjudicación y contratación de la obra pública, se hayan realizado con estricto apego a lo dispuesto en la legislación vigente y que no existiera conflicto de interés entre los contratistas y los funcionarios públicos que decidieron las adjudicaciones; que los sistemas de control interno, operativo y contable que regulan la función, aseguren la protección de los recursos y su efectiva utilización, la calidad de los trabajos, la razonabilidad de los costos y la confiabilidad de la información en la ejecución de la obra pública; y que los contratistas hayan cumplido con las cláusulas contractuales, las especificaciones de obra, los procedimientos de construcción y la calendarización de los trabajos.

Destacando que en las referidas auditorías se contempló la revisión de una muestra de las obras y acciones ejercidas por la administración municipal en los periodos auditados, las cuales se determinaron con base en una planeación basada en riesgos, entre cuyos análisis se contemplan los temas de interés de la sociedad reflejados en notas periodísticas y el interés parlamentario, entre otros. De igual forma, a las obras de la muestra de auditoría se les aplicaron los procedimientos señalados previamente y derivado de las consideraciones de las y los proponentes no se identificaron riesgos específicos relacionados a obra pública.

Por lo que hace a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* **Activo:** Gastos por comprobar, adquisiciones de automóviles y camiones\*, computadoras y equipo periférico y muebles de oficina.

\*Se reviso la compra directa de cinco vehículos con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

* **Pasivo:** Amortización de la deuda pública.
* **Ingresos:** Participaciones y aportaciones y otros productos.
* **Egresos:** Servicios personales: Sueldos, dietas, remuneraciones de eventuales, remuneraciones adicionales al sueldo (gratificación de fin de año, prima vacacional, compensaciones, entre otras) otras prestaciones, entre otras más.

Materiales y suministros: Medicinas y productos farmacéuticos y vestuario y uniformes.

Servicios generales: Alumbrado público, otros arrendamientos, servicios de consultoría administrativa, servicios profesionales científicos y tecnológicos integrales\*, seguros de bienes patrimoniales, gastos de orden social y cultural**,** entre otros.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Transferencias para servicios personales, gastos relacionados con actividades culturales deportivas y ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro.

\*Se reviso la elaboración de manuales y guías de acceso a la información y protección de datos personales.

De la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se revisaron los siguientes apartados:

**Sector Central:**

* **Activo:** Adquisiciones de: Muebles de oficina y estantería, computadoras y equipo periférico, automóviles y camiones, accesorios de iluminación, entre otros.
* **Ingresos:** Participaciones y aportaciones.
* **Egresos:** Servicios personales: Sueldos, dietas, remuneraciones de eventuales, remuneraciones adicionales al sueldo (gratificación de fin de año, prima vacacional, compensaciones, entre otras) otras prestaciones, entre otras.

Materiales y suministros: Vestuario y uniformes y prendas de protección para seguridad pública.

Servicios generales: Alumbrado público, servicios de consultoría administrativa, servicios profesionales científicos y tecnológicos integrales, gastos de orden social y cultural**,** entre otros.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas, gastos relacionados con actividades culturales deportivas y ayudas y pensiones.

Al respecto, la selección de las cuentas a revisar durante los citados ejercicios se realizó con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación.

Es así, que, de acuerdo a la información antes señalada, la Auditoría Superior del Estado ha realizado 2 revisiones de cuenta pública y 2 auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que ya se realizaron diversos actos de fiscalización a la administración municipal de Cortazar, Gto., por parte de la Auditoría Superior del Estado a los ejercicios fiscales que se propone auditar.

No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados por la proponente en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría financiera integral al municipio de Cortazar, que incluya todas las partidas no revisadas en auditorías previas, la que deberá incluir al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; asimismo, para que lleve a cabo las investigaciones necesarias e informe a la brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, si la Contraloría del municipio de Cortazar inició proceso alguno derivado de las observaciones no solventadas de las auditorías practicadas a la administración 2018-2021 de dicho Municipio. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A FIN DE INSTRUIR AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO A INCLUIR EN EL PROGRAMA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL AÑO 2022, LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA ESPECÍFICA AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO CON LAS EMPRESAS *BERCALE SERVICES, S.A. DE C. V.,* Y *LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C. V.,* NÚMERO SSP-001-07-2019 Y SU MODIFICATORIO.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de instruir al Auditor Superior del Estado a incluir en el Programa General de Fiscalización del año 2022, la realización de una auditoría específica al municipio de San Miguel de Allende, Gto., a la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento puro con las empresas *Bercale Services, S.A. de C. V.,* y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C. V.,* número SSP-001-07-2019 y su modificatorio.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria celebrada el 7 de abril de 2022 presentaron la propuesta de punto de acuerdo a fin de instruir al Auditor Superior del Estado a incluir en el Programa General de Fiscalización del año 2022, la realización de una auditoría específica al municipio de San Miguel de Allende, Gto., a la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento puro con las empresas *Bercale Services, S.A. de C. V.,* y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C. V.,* número SSP-001-07-2019, de fecha 22 de julio de 2019 y su modificatorio del 5 de agosto del mismo año.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 19 de abril de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones de las y los proponentes**

En las consideraciones expuestas en la propuesta de punto de acuerdo materia del presente dictamen se refiere lo siguiente:

*La rendición de cuentas y la fiscalización superior se han convertido en un tema recurrente para los interesados en la construcción de una democracia moderna. Efectivamente, si los gobernantes no responden de sus acciones a la sociedad; si el uso de los recursos públicos no es transparente, económico, eficaz y eficiente; si se perpetua una visión patrimonialista y abusiva de los cargos públicos, se reducen de manera sustancial las posibilidades de un ejercicio democrático de los asuntos públicos.*

*Los pesos y contrapesos para el equilibrio entre poderes; la división y sistematización de las distintas funciones públicas; el principio de legalidad en la acción del gobierno; las garantías individuales y sociales contenidas en la Constitución y sus leyes reglamentarias, entre otros elementos, forman parte de la estructura legal y administrativa de un buen gobierno.*

*La rendición de cuentas y la fiscalización superior, cuando son efectivas, representan un factor adicional invaluable para la gobernabilidad, la gobernanza y el desarrollo de las sociedades.*

*El ejercicio fiscalizador es, sin duda, un tema sensible y fundamental para todos los servidores públicos.*

*Sin embargo, también constituye un instrumento de gran utilidad para que cualquier gobierno haga un mejor uso de los recursos a su disposición y que, de ello, se deriven ganancias de orden político, al generar una mejor imagen ante una sociedad que valora cada vez más aspectos como la transparencia y la rendición de cuentas. La fiscalización sirve a todos: es una inversión con alto rendimiento social que coadyuva a erradicar la corrupción, detonada principalmente por la discrecionalidad en el ejercicio público.*

*La gran diversidad de las sociedades y sus diferentes tradiciones legales y administrativas se refleja en las distintas clases de órganos encargados de la fiscalización superior que existen en la actualidad.*

*Las naciones, en su mayoría, consideran necesario contar con un instrumento que les permita auditar la actuación gubernamental.*

*De esta pluralidad también se desprenden preocupaciones comunes, valores universales, características deseables y marcos de actuación considerados como prácticas favorables; uno de los más recurrentes es la necesidad de que la entidad encargada de la fiscalización superior sea independiente de aquellos que debe auditar.*

*La gran cuestión es determinar el modo en que esta situación pueda ser emulada, alcanzada y conservada por los países que aún tienen un camino por recorrer para alcanzar un mejor ejercicio democrático.*

*Entre los principales debates teóricos sobre las democracias contemporáneas se encuentran la vigilancia y el control entre los poderes públicos y sus instituciones, con miras a que estos funcionen correcta y eficazmente, así como las relaciones entre tales poderes e instituciones con la sociedad.*

*El concepto de rendición de cuentas alcanza un protagonismo incuestionable. Sin entrar en el debate conceptual, dicha noción nos remite a la obligación de los gobernantes y la administración pública de informarse entre sí (rendición de cuentas horizontal) y de informar a los ciudadanos y sociedad en general (rendición de cuentas vertical).*

*Aunque la rendición de cuentas tiene la voluntad política como uno de sus principales elementos, es mediante el ordenamiento jurídico que se consigue el aseguramiento, al menos de iure, de que aquella sea efectiva.*

*Por lo tanto, el diseño jurídico que se hace de las instituciones públicas -organización, funciones y limitaciones- cobra una importancia mayúscula en el sistema de rendición de cuentas de cualquier Estado democrático que pretenda regirse bajo el imperio de la ley, es decir, un auténtico y eficaz Estado de derecho. En la mayoría de los estados contemporáneos podemos encontrar un sistema de rendición de cuentas y sus correspondientes instituciones y ordenamiento jurídico, el cual puede clasificarse en tres subsistemas:*

*a) Controles de unos poderes públicos frente a otros (candados, frenos, contrapesos y vigilancia).*

*b) Información pública (transparencia y el derecho de información que gozan los ciudadanos).*

*c) Responsabilidades y sanciones para los funcionarios públicos derivadas del incumplimiento de deberes y obligaciones y que se descubren a través de los controles y la información pública.*

*En este contexto, la rendición de cuentas sobre la gestión financiera pública y sus resultados es, tal vez, la columna vertebral de todo el funcionamiento de una sociedad organizada como Estado democrático, ya que implica una seguridad tanto para las instituciones como para los individuos y un bienestar social en general, además de las repercusiones económicas.*

*El diseño jurídico de las instituciones encargadas del control y la vigilancia de los recursos públicos estatales permite observar el grado de desarrollo de las democracias y la salvaguarda del Estado de derecho.*

*En un Estado con división tripartita de poderes públicos corresponde al Poder Legislativo (parlamento o congreso), como órgano que representa la soberanía popular, aprobar el presupuesto público (ingresos) y controlar su ejercicio (gasto) a través del deber público de fiscalización superior y al Poder Ejecutivo y su administración pública, la ejecución de tal presupuesto (gestión financiera) y el informe de sus resultados.*

*El Poder Judicial actúa sólo -con base en el estricto apego a las disposiciones constitucionales (control constitucional)- si hay conflictos sobre la aplicación e interpretación de las normas que rigen esta relación de control y vigilancia entre los otros dos poderes.*

*Aunque es indudable la importancia del control interno que establece el propio Poder Ejecutivo, el control externo a éste -a cargo por lo general del Poder Legislativo- está en la lupa de las instituciones públicas y de los actores políticos de un país.*

*Por ello, en las democracias vigentes, los nuevos diseños institucionales han optado por garantizar que este control, denominado técnica e internacionalmente auditoría superior, se realice de un modo legítimo e incuestionable a través de la formación de órganos independientes que, aun cuando estén vinculados al Poder Legislativo, realicen esta auditoría superior a las instituciones gubernamentales con imparcialidad y alejados de cualquier influencia externa, en especial que sean "inmunes" a los intereses políticos o partidistas, al menos en su diseño y regulación jurídica.*

*La importancia de las entidades de fiscalización superior para los Poderes Legislativos radica en la información sobre el uso gubernamental de los recursos públicos, sin la cual éste sería incapaz de ejercer el poder de control y la vigilancia del Poder Ejecutivo, para, en su momento, aplicar los procedimientos e instrumentos de control, como comparecencias, votos de censura y sanciones en caso de responsabilidades.*

*En consecuencia, el principal interesado en fiscalizar al Poder Ejecutivo es el Legislativo y las entidades de fiscalización vinculadas a éste, en mayor o menor medida según su grado de independencia. Luego entonces, el Poder Legislativo y las entidades de fiscalización trabajan para un mismo fin y rigen sus relaciones de acuerdo con el principio de la confianza mutua.*

*Con base en estas premisas, consideramos que la vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo.*

*El artículo 116, fracción 11, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán­ carácter público.*

*Con base en esta previsión constitucional, en nuestro orden jurídico local se contemplan las bases normativas conforme a las cuales el Congreso del Estado de Guanajuato ejerce sus facultades de fiscalización. El artículo 63, fracción XXVIII párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, dispone que es facultad del Congreso del Estado acordar con el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello.*

*La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política Local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo; mientras que la fracción IV del mismo precepto establece que la Auditoría Superior del Estado podrá acordar y practicar auditorias conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 antes citado.*

*De acuerdo con lo antes señalado, concluimos que es necesario transparentar el ejercicio de los recursos públicos y vigilar la correcta aplicación del gasto público, que nos permita tener certeza de dicho ejercicio.*

*Por ello, lo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, comprometidos con la eficacia de la fiscalización superior y con los trabajos de nuestra Auditoría Superior, así como con la transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos emanados de este instituto político, consideramos que es necesario revisar a detalle y de manera integral las operaciones y actos jurídicos que se realizaron para instalar el sistema de semaforización del Municipio de San Miguel de Allende, a efecto de permitir a la ciudadanía y a toda persona interesada, conocer la forma en que se operó el contrato de arrendamiento puro número SSP- 001-07-2019 del 22 de julio de 2019 y su modificatorio del 5 de agosto del mismo.*

*La operación que nos ocupa implicó la instalación de 91 semáforos inteligentes que permiten, además del control del tránsito vehicular, el monitoreo de seguridad mediante cámaras conectadas con el C4 (Centro de Comando, Control y Comunicaciones) del Municipio de San Miguel de Allende.*

*Así, gracias a esta propuesta, la población de San Miguel de Allende, Guanajuato, conocerá de forma exhaustiva el uso y destino de los recursos públicos utilizados para fortalecer su infraestructura urbana, de forma tal que se garantice el acceso a la información financiera y ejecutiva de ese proyecto. Por ello, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, el punto de acuerdo que nos ocupa.*

*Por ello, y con la finalidad de ser exhaustivos en la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de los gobiernos municipales, principalmente de aquéllos que fueron ejercidos por personas postuladas por nuestro instituto político y bajo la premisa de que es fundamental que se examine detalladamente cómo fueron ejercidos los recursos en cuestión, me permito proponer el siguiente.*

Finalmente, se refiere que es fundamental que los hechos sean esclarecidos y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de revisar a detalle y de manera integral las operaciones y actos jurídicos que se realizaron para instalar el sistema de semaforización del municipio de San Miguel de Allende, Gto., a efecto de determinar la forma en que se operó el contrato de arrendamiento puro celebrado por dicho Municipio con las empresas *Bercale Services, S.A. de C. V.,* y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C. V.,* número SSP-001-07-2019 el 22 de julio de 2019 y su modificatorio del 5 de agosto del mismo año.

En razón de lo anterior, se propone la práctica de una auditoría específica respecto a la ejecución y cumplimiento del referido contrato de arrendamiento y su modificatorio.

Al respecto quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.

El ayuntamiento de San Miguel de Allende, Gto., es sujeto de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XIX y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo antes señalado, coincidimos con las y los proponentes en la necesidad de ser exhaustivos en la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos de los gobiernos municipales.

De la propuesta podemos desprender la pretensión de incluir en el Programa General de Fiscalización del año 2022, la realización de una auditoría específica a la administración municipal de San Miguel de Allende, Gto., a la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento puro con las empresas *Bercale Services, S.A. de C. V.,* y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C. V.,* número SSP-001-07-2019 celebrado el 22 de julio de 2019 y su modificatorio del 5 de agosto del mismo año.

En este orden de ideas, de acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se efectuaron las siguientes revisiones y auditorías a la administración pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., mismas que incluyen la revisión al contrato de arrendamiento puro con las empresas *Bercale Services, S.A. de C.V*. y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V.,* número SSP-001-07-2019 de fecha 22 de julio de 2019 y su modificatorio del 5 de agosto del mismo año:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Cuenta contable** | **Revisado de egresos** | **Nota** |
| 2019 | **Revisión de cuenta pública** |  |  |
|  | Sector central |  |  |
|  | 513203291 «Otros Arrendamientos» | $9’529,400.00 | A |
| 2020 | **Revisión de cuenta pública** |  |  |
|  | Sector central |  |  |
|  | 211200193 «Pasivos Capitulo 3000 al Cierre 2019» | $3’811,760.00 | B |
|  | 513203291 «Otros Arrendamientos» | $15’247,040.00 |  |
| 2021 | **Revisión de cuenta pública** |  |  |
| . | En etapa de análisis de información financiera del periodo de enero a junio y julio a diciembre del ejercicio fiscal 2021 | Proceso |  |

**Notas:**

1. El importe registrado incluye dos mensualidades por $3’811,760.00 que fueron pagadas hasta marzo 2020.
2. El importe de esta cuenta corresponde al pago de las dos mensualidades que se registraron en la cuenta 513203291 Otros Arrendamientos del ejercicio fiscal 2019.

De acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado para la realización de los procesos de fiscalización se determinan con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación. Los análisis realizados en la planeación están vinculados con la generalidad del sujeto de fiscalización, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por órganos internos de control, auditorías externas y realizadas por la propia por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles y procesamiento de CFDI (XML).

El alcance y procedimientos referidos forman parte de los análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado para efecto de determinar la materialidad y la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución, situación por la cual, los alcances establecidos en los respectivos informes de resultados se complementan con los procedimientos de planeación específica, mismos que forman parte integral del análisis que realiza dicho ente auditor.

Por lo que hace a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019 se revisó lo siguiente:

1. La Licitación LPN/DRM-006/2019 «Contratación de Servicio Integral de Arrendamiento puro, Suministro, Mantenimiento y Puesta en Operación de Equipos de Alta Tecnología en Materia de Movilidad y Seguridad Pública por 27 meses» para el municipio de San Miguel de Allende, Gto., adjudicando el contrato a las empresas *Bercale Service S.A. de C.V.* y *Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM. ENR.* Dichas empresas celebraron un convenio privado de participación conjunta de fecha 5 de julio de 2019 en el que convinieron presentar una oferta conjunta en el citado proceso de Licitación Pública Nacional.
2. El contrato de arrendamiento puro SSP-001-07-2019 entre el Municipio y las personas morales *Bercale Service S.A. de C.V.* y *Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM. ENR.*, suscrito el 22 de julio de 2019 cuyo objeto fue: *«OBJETO DEL CONTRATO. - "EL ARRENDADOR" SE OBLIGA CON EL "MUNICIPIO" PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO PURO, SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD PÚBLICA POR 27 MESES PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO." OTORGANDO EL USO DE LOS BIENES DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN EL* ***ANEXO 2.»***

El monto del contrato fue por $44’361,000.00 más IVA $7’097,760.00, dando un total de $51’458,760.00.

1. El convenio modificatorio al contrato de origen SSP-001-07-2019 de fecha 22 de julio de 2019, suscrito el 5 de agosto de 2019, el cual tuvo por objeto modificar las cláusulas primera y quinta. En la cláusula primera, objeto del contrato, se modificó el anexo que relacionaba los bienes que se otorgaban en uso, nombrándola «*La Relación*».
2. El segundo convenio modificatorio al contrato de origen SSP-001-07-2019 de fecha 22 de julio de 2019, suscrito el 16 de noviembre de 2020, el cual tuvo por objeto adicionar la cláusula trigésima octava la cual establecía: El municipio podrá optar por adquirir la totalidad del equipo arrendado detallado en «*La Relación*».
3. Las erogaciones por $5’717,640.00 correspondientes a las mensualidades 1 a la 3 del contrato SSP-001-07-2019, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

De la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se revisaron las erogaciones por $19’058,800.00 correspondientes a las mensualidades 4 a la 13 del contrato SSP-001-07-2019 y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Como parte de los procedimientos aplicados durante la revisión de la cuenta pública de los ejercicios fiscales 2019 y 2020, se realizaron las siguientes inspecciones físicas:

* El 30 de septiembre de 2020 se realizó inspección física de los bienes (Subpartidas 5, 6, 8, 10 y 11).
* El 1 de octubre de 2020 se realizó inspección física de los bienes (Subpartidas 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 13).
* El 7 de enero de 2021.
* El 12 de agosto de 2021 se realizó inspección física de los bienes, derivado de la ejecución de la revisión de cuenta pública 2020.

Respecto al análisis de la información financiera trimestral del ejercicio fiscal 2021 se informó que actualmente se están desarrollando actividades de planeación de dicho ejercicio, en las cuales se tiene contemplado el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de arrendamiento puro SSP-001-07-2019 entre el Municipio de San Miguel de Allende, Gto., y las personas morales *Bercale Service S.A. de C.V.* y *Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM. ENR.*, durante el ejercicio fiscal 2021 hasta su conclusión.

De conformidad a la información proporcionada, la Auditoría Superior del Estado ha realizado 2 revisiones de cuenta pública y 2 auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal, adicionales a las que a la fecha se encuentran en ejecución. Asimismo, en la revisión de la cuenta pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., a través de diversos actos ha dado seguimiento al contrato de arrendamiento puro con las empresas Bercale Services, S.A. de C.V. y Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., número SSP-001-07-2019 de fecha 22 de julio de 2019 y su modificatorio del 5 de agosto del mismo año.

Por otra parte, debemos considerar que en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que en la revisión de la cuenta municipal de San Miguel de Allende, Gto., del ejercicio 2021 la Auditoría Superior del Estado podrá incluir los hechos que correspondan a dicho ejercicio planteados por las y los proponentes en la planeación y ejecución de dicha revisión, lo cual se contendrá en el informe de resultados de la revisión de la citada cuenta pública.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a fin de instruir al Auditor Superior del Estado a incluir en el Programa General de Fiscalización del año 2022, la realización de una auditoría especifica al municipio de San Miguel de Allende, Gto., a la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento puro con las empresas *Bercale Services, S.A. de C. V.*, y *Lumo Financiera del Centro, S.A. de C. V.,* número SSP-001-07-2019 del 22 de julio de 2019 y su modificatorio del 5 de agosto del mismo año. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE EXHORTAR AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE REALICE DOS AUDITORÍAS, LA PRIMERA, A FIN DE REVISAR EL EJERCICIO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS HASTA EL MOMENTO A LA ACADEMIA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, LLEVADA A CABO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2019 Y, EN SU CASO, SUBSIGUIENTES; Y LA SEGUNDA, A FIN DE REVISAR QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO AVALADO POR EL CONGRESO EN SEPTIEMBRE DE 2021, SE DESTINEN A PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y CERTEZA JURÍDICA LLEVADOS A CABO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE DE MANERA CONCOMITANTE A PARTIR DE LA PROGRAMACIÓN DE DICHOS RECURSOS, ABARCANDO LOS EJERCICIOS FISCALES NECESARIOS HASTA QUE SE COMPLETEN LOS PROYECTOS QUE SE LLEVEN A CABO EN TAL RUBRO.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta de punto de acuerdo formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de Guanajuato para que realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales de 2019 y, en su caso, subsiguientes; y la segunda, a fin de revisar que los recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021, se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 7 de abril de 2022 presentaron la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de Guanajuato para que realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales de 2019 y, en su caso, subsiguientes, la cual deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2022 y llevar a cabo, al menos, procedimientos para la verificación de que se hayan realizado todos los conceptos de obra pagados, así como de comprobación de posibles sobreprecios; y la segunda, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021, que se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro.

La referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, misma que se radicó el 19 de abril de 2022. En dicha fecha se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso, por dicho funcionario.

1. **Consideraciones de las y los proponentes**

En las consideraciones expuestas en la propuesta de punto de acuerdo materia del presente dictamen se refiere lo siguiente:

*El proyecto de transformación de la vida pública que inició en 2018 tiene como uno de sus puntos medulares el desarrollo de infraestructura pública de calidad. De esta manera, se ha reconocido que la inversión pública productiva forma parte de la política social necesaria para generar una sociedad más igualitaria.*

*En este sentido, el pasado 21 de marzo, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construido en tiempo récord, a la par de que continúan los trabajos para concluir obras como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.*

*Pese a esto, varios integrantes de partidos opositores al gobierno federal, muchos de ellos desde el ejercicio del poder público en diferentes niveles y ámbitos, han atacado sistemáticamente la generación de infraestructura pública con distintos argumentos. Sin embargo, dichos ataques tienen varias deficiencias que les imposibilita ser útiles para mejorar la vigilancia del ejercicio del poder público federal.*

*Una de estas deficiencias es la incongruencia con la cual se lanzan los ataques. Mientras la obra pública del proyecto de transformación federal va dando resultados tangibles, partidos como Acción Nacional buscan establecer críticas superficiales, olvidando cómo los gobiernos emanados de dicho partido tienen por costumbre gastar el presupuesto público entregando resultados pobres o francamente nulos.*

*Ejemplo de lo anterior es cómo en marzo de 2008, con motivo del 70 aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, el entonces presidente Felipe Calderón anunció con bombo y platillo la construcción de una nueva refinería que tendría una inversión inicial de 12 mil millones de pesos.*

*En aquel entonces, Calderón describió un escenario de bienestar derivado del fortalecimiento de Pemex que buscaba impulsar. Lamentablemente, todo eso se quedó en promesas incumplidas: el presidente espurio terminó su gobierno y jamás se construyó la refinería que prometió. Lo único que se edificó fue una barda perimetral que costó 500 millones de pesos, alrededor del terreno de 700 hectáreas que el estado de Hidalgo compró a campesinos para entregárselo a Pemex, mediante un endeudamiento de más de 1,500 millones de pesos pagaderos en 20 años.*

*Desde aquella falsa promesa han pasado más de 14 años, sin que se haya edificado algo sustantivo más allá de una barda. Sin embargo, hasta el momento se han pagado más de 1,800 millones de pesos por los créditos contraídos en 2009 para dicha construcción. Tan sólo en el ejercicio fiscal de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó el pago de 195.4 millones de pesos erogados por el compromiso financiero que se contrató para la construcción de la refinería fantasma, y que seguiremos pagando todos los mexicanos hasta 2027.*

*Por esto, en su auditoría 446-DE, la ASF emitió una recomendación[[152]](#footnote-152) para que Pemex desarrollara un proyecto en el predio, pues su actual inutilidad puede convertirse en una vulneración al patrimonio del Estado. En otras palabras, recomendó al gobierno de López Obrador arreglar el desastre producido por el gobierno panista de Calderón mediante deuda pública. En este sentido, en febrero pasado, el presidente López Obrador anunció la construcción de un hospital del IMSS-Bienestar que será terminado a finales de 2023.*

*Lamentablemente, aquél no fue un caso aislado, sino que se trató de una muestra del modus operandi del Partido Acción Nacional cuando se encuentra en el ejercicio del poder público.*

*En el estado de Guanajuato podemos verificar esto de forma directa. No sólo porque en 2009 el exgobernador Juan Manuel Oliva incurriera en múltiples irregularidades para comprar 900 hectáreas de terrenos en Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas, buscando ganar el proyecto de lo que se convertiría en la refinería fantasma de Calderón, sino porque hace aproximadamente 3 años el gobierno estatal que ya encabezaba Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, prometió construir una academia de policía en Villagrán. Dicha academia pertenecería al Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), y fue anunciada como parte de la política Golpe de Timón, mediante la cual Rodríguez Vallejo prometió recuperar la seguridad y paz social de nuestra entidad.*

*Dicha academia es más que necesaria, pues como hemos denunciado[[153]](#footnote-153) desde el Grupo Parlamentario de Morena, nuestro estado tiene un importante déficit de policías estatales, al sólo contar con 0.67 policías estatales por cada mil habitantes[[154]](#footnote-154), por debajo de la media nacional de 0.96, y mucho menos de la mitad del estándar mínimo requerido de 1.8 por cada mil habitantes.*

*Por esto, el problema no radica en la construcción de la academia. Por el contrario, radica en que la promesa hecha por el Gobernador no se ha* *materializado. Pese a haber colocado la primera piedra de lo que debería ser la academia del INFOSPE en mayo de 2019, así como haber invertido 104 millones de pesos hasta el momento, lo único que hoy en día puede encontrarse en el sitio es una barda perimetral y algunos postes de luz.*

*Lo anterior sólo empeora cuando recordamos que el titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) encargada del proyecto, es José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, antiguo secretario particular de Felipe Calderón, coincidentemente responsable de la refinería fantasma.*

*Luego de que todo lo anterior saliera a la luz, el gobierno estatal respondió rápidamente para señalar que la culpable de haber detenido el proyecto fue la pandemia de COVID-19 pues, según argumentó la Secretaria de Gobierno, se tuvo que reorientar el gasto hacia salud y reactivación económica.*

*Pese a ello, dicha explicación no concuerda con los datos, pues lejos de que la SICOM tuviera alguna afectación presupuestal en 2020, lo cierto es que dicha dependencia incluso tuvo ampliaciones del 218%: mientras se aprobaron más de 1,036 millones de pesos, se dieron ampliaciones de más de 2,268 millones adicionales, llegando a un presupuesto modificado de 3,305 millones de pesos durante el ejercicio[[155]](#footnote-155). Incluso, para el final del año, dicha dependencia tuvo subejercicios de más de 1,500 millones de pesos.*

*Por su parte, para el ejercicio 2021, las ampliaciones de la SICOM llegaron al 130%, pues mientras se aprobaron 1,743 millones, durante el año se dieron ampliaciones por 2,272 millones más, para llegar a un presupuesto modificado de más de 4 mil millones de pesos[[156]](#footnote-156). Por esto, la explicación brindada por el gobierno estatal levanta dudas razonables acerca del adecuado ejercicio de los recursos públicos en lo que respecta a esta obra.*

*Adicionalmente, hace unos días el gobierno estatal fue orillado a señalar que la construcción de la academia fantasma sería retomada este 2022, aunque no detalló la fecha exacta. Lo que sí detalló, fue que se destinarán aproximadamente 300 millones de pesos adicionales a los 104 millones ya gastados, e incluso se especificó que este recurso provendría del crédito que este Congreso autorizó en septiembre de 2021 por hasta 2 mil millones de pesos.*

*Al respecto, conviene recordar que hace algunos meses la ASF ya manifestaba[[157]](#footnote-157) su preocupación por el incremento exponencial de la deuda que, en menos de 1 año, alcanzó el 11.1% de crecimiento. Este tipo de incrementos, según señaló la ASF, comprometen los ingresos de que podría disponer el gobierno estatal, reportando un riesgo para sus finanzas públicas que estarán más restringidas y con mayores costos por intereses.*

*La preocupación de la ASF incrementará, considerando que fue emitida en marzo, cuando la deuda pública era de 8,803 millones de pesos. Esto, toda vez que, al cierre del 2021, el total de la deuda ya ascendía a 10,159 millones de pesos, mientras que el costo anual en intereses llegó a 410 millones de pesos durante el propio 2021. Evidentemente, esto empeorará todavía más con el endeudamiento de hasta 2 mil millones de pesos adicionales que el gobierno estatal anunció estar próximo a contratar para terminar una academia fantasma que interrumpió con una excusa alejada de la realidad.*

*Ahora bien, en la última autorización del financiamiento al que se refiere el gobierno estatal, se señaló que hasta 480 millones de pesos de la deuda contratada deberán ser destinados a proyectos de fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica.*

*Todo lo anterior, indica una estrecha relación entre los gobiernos panistas, la obra pública inconclusa y la deuda pública. El lazo definitorio de dicha relación no es una novedad, de hecho, es un fenómeno bastante común en el ejercicio del poder público que se realiza desde el asidero político neoliberal: el uso y abuso de lo público para beneficio privado, independientemente de si dichos intereses privados coinciden o no con el bienestar público.*

*En este sentido, tomando en cuenta que una de las principales responsabilidades que tiene el Poder Legislativo está en garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos, las y los iniciantes consideramos urgente que se realice una auditoría en dos sentidos.*

*Primero, al ejercicio de recursos públicos realizado hasta el momento en la inconclusa academia del INFOSPE; y segundo, al ejercicio de recursos públicos provenientes de financiamientos que se destinen al fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica.*

1. **Consideraciones de la Comisión**

En las consideraciones expuestas en la propuesta que se dictamina se señala la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos.

En razón de lo anterior, se propone auditar los recursos públicos destinados a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado; así como el ejercicio de recursos públicos provenientes de financiamientos con destino al fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica.

En tal sentido, quienes integramos esta Comisión consideramos que la vigilancia y el control del ejercicio de los recursos públicos encomendados a los sujetos de fiscalización es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos deben destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo.

El Poder Ejecutivo del Estado, así como las dependencias y entidades de la administración pública estatal son sujetos de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XVIII y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracciones I y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

De acuerdo a lo antes señalado, coincidimos con las y los proponentes en la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos.

De la propuesta podemos desprender la pretensión de la realización de dos auditorías al Poder Ejecutivo del Estado: Una específica, con enfoque financiero y de cumplimiento a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado por los ejercicios fiscales de 2019 y subsecuentes; así como una auditoría específica, con enfoque financiero y de cumplimiento, concomitante para revisar que los recursos públicos derivados del financiamiento autorizado por el Congreso del Estado en septiembre de 2021, se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica, a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro.

En la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, se señala que para al ejercicio fiscal de 2019 se incluyó en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado, la adquisición de los terrenos para la construcción del nuevo complejo para el Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (INFOSPE), ubicado en el Municipio de Celaya, Gto., cerca de Santa Rosa de Lima en Villagrán, Gto., con el siguiente alcance:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periodo** | **Tipo de revisión** | **Importe** | | **Alcance** |
| De la adquisición | Revisado |
| 2019 | Revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo | $143´022,972.00 | $143´022,972.00 | 100% |

Los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión de la adquisición de los terrenos para la construcción del nuevo complejo para el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE), fueron los siguientes:

1. Se inspeccionó la evidencia de la justificación de la adquisición del bien inmueble.
2. Se inspeccionaron las autorizaciones de la adquisición del bien inmueble y se corroboró que se encontraran autorizadas por personal facultado de acuerdo a la normativa.
3. Se inspeccionó que en la adquisición de los inmuebles se considere el valor de un avalúo para determinar el precio máximo de adquisición del objeto de la operación.
4. Se inspeccionó que los bienes inmuebles adquiridos se encuentren libres de gravamen.
5. Se inspeccionó que el contrato de compraventa se suscribiera conforme a los requisitos establecidos en la normativa y que se encontrara debidamente firmado por las personas legalmente facultadas y dentro de los plazos establecidos.
6. Se inspeccionó que los importes pagados por el bien inmueble correspondieran a los autorizados por el personal facultado, considerando los avalúos practicados, así como con lo establecido en el contrato de compraventa y lo especificado en la evidencia del pago.​​
7. Se realizó confirmación con los vendedores, a fin de corroborar que el importe recibido por la venta de su bien inmueble correspondiera con el monto establecido en el contrato y lo erogado por el Gobierno del Estado.
8. Se verificó que el pago contenga los documentos que acrediten la posesión o propiedad del bien inmueble afectado con el mismo nombre al que se realizó el pago.
9. Se verificó que las escrituras públicas del bien inmueble se otorgaran a favor del Estado de Guanajuato.
10. Se verificó que el bien inmueble adquirido se diera de alta en el Registro Público de la Propiedad y en el Padrón de la Propiedad Inmobiliaria Estatal.
11. Se confirmó con el municipio de Celaya, Gto., el valor fiscal previo a la compra-venta de los bienes inmuebles.
12. Se confirmó con la institución bancaria los datos del anverso y reverso de los cheques expedidos a favor de los vendedores.
13. Se verificó que los bienes inmuebles se hayan adquirido a personas sin conflicto de interés con el sujeto fiscalizado.
14. Se verificó que el valor unitario por metro cuadrado pagado considerado en los avalúos inmobiliarios se encontrara dentro del mercado, a través de la elaboración de una investigación de mercado.

También se informó por parte de la Auditoría Superior del Estado que en el periodo de revisión, en el INFOSPE no se identificaron operaciones con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

Asimismo, en el ejercicio fiscal de 2020 el referido Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato fue sujeto a revisión bajo procedimientos analíticos de planeación por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Los análisis realizados en planeación están vinculados con la generalidad del sujeto fiscalizado, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de Órgano de Gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por Órganos Internos de Control, auditorías externas y por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (Tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, procesamiento de CFDI (XML). La realización de dichos análisis contempla la generalidad de las diversas unidades responsables en el Poder Ejecutivo, incluyendo al propio Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

En cuanto al ejercicio fiscal 2021, de la información proporcionada por el Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, la Auditoría Superior del Estado visualiza la siguiente información relacionada con obra pública:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Word

Descripción generada automáticamente

De igual forma, de la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado podemos desprender que los importes ejercidos por el Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato durante el ejercicio 2021 por concepto de obra y servicios relacionados, representan un impacto económico menor con respecto a obras de otras dependencias y unidades del Gobierno del Estado, por lo que tanto cuantitativamente (importancia relativa), como cualitativamente (identificación de riesgos), existen otros rubros de cuenta pública que acorde con la metodología presentan mayores elementos de selección para su revisión.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio 2019 la Auditoría Superior del Estado revisó la adquisición de los terrenos para la construcción del nuevo complejo para el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado. Asimismo, en lo correspondiente a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio fiscal 2021 se proporcionó diversa información por parte del Instituto de Formación de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, misma que será materia de dicha revisión por parte del ente fiscalizador, lo cual se contendrá en el informe de resultados de la revisión de la citada cuenta pública.

No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados por las y los proponentes en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta de punto de acuerdo formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en sesión ordinaria celebrada el 7 de abril de 2022 presentaron la propuesta de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Auditor Superior del Estado de Guanajuato para que realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato en los ejercicios fiscales de 2019 y, en su caso, subsiguientes, la cual deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2022 y llevar a cabo, al menos, procedimientos para la verificación de que se hayan realizado todos los conceptos de obra pagados, así como de comprobación de posibles sobreprecios; y la segunda, a fin de revisar el ejercicio de recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021, que se destinen a proyectos para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y certeza jurídica llevados a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá realizarse de manera concomitante a partir de la programación de dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales necesarios hasta que se completen los proyectos que se lleven a cabo en tal rubro. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE APASEO EL ALTO, GTO., A EFECTO DE QUE SE ORDENE UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta formulada por el ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., a efecto de que se ordene una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

El ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., en la quinta sesión ordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2021 aprobó por unanimidad de votos el informe de la entrega recepción de la administración municipal, ordenando su remisión al Congreso del Estado y solicitar que se ordene una auditoría integral a la Administración 2018-2021.

El 28 de abril de 2022, la referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

En la reunión de esta Comisión celebrada el 5 de mayo de 2022, se dio cuenta y se radicó la propuesta y se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso.

1. **Consideraciones**

Del contenido del acta de la sesión ordinaria del ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., celebrada el 27 de diciembre de 2021, se desprende que la propuesta materia del presente dictamen tiene por objeto solicitar la realización de una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021, derivado de la aprobación del informe de la entrega recepción de la administración municipal.

Al respecto quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo; mientras que la fracción IV del mismo precepto establece que la Auditoría Superior del Estado podrá acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de la propia Constitución Local.

El ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., es sujeto de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XIX y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En este orden de ideas, de acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, durante los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 se efectuaron las siguientes revisiones y auditorías a la administración pública de Apaseo el Alto, Gto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Auditoría** | **Porcentaje revisado de ingresos** | **Porcentaje revisado de egresos** |
| 2018 | Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública | 100**(1)** | 42**(2)** |
| 2018 | Revisión de cuenta pública |  |  |
|  | Sector Central | 43 | 31 |
| 2019 | Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública | 100**(1)** | 58**(2)** |
| 2019 | Revisión de cuenta pública |  |  |
|  | Sector Central | 43 | 60 |
| 2020 | Auditoría a la infraestructura pública municipal | 100**(1)** | 78**(2)** |
| 2020 | Revisión de cuenta pública |  |  |
|  | Sector Central | 79 | 60 |
| 2021 | Auditoría a la infraestructura pública municipal | Proceso | Proceso |
|  | En etapa de análisis de información financiera del periodo de enero a junio y julio a diciembre del ejercicio fiscal 2021. |  |  |
| 2021 | Revisión de cuenta pública y auditoría de infraestructura pública |  |  |
|  | En etapa de análisis de información financiera del periodo de enero a junio y julio a diciembre del ejercicio fiscal 2021. | Proceso | Proceso |

**Notas:**

1. De los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
2. De los recursos devengados en obra pública.

De acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado para la realización de los procesos de fiscalización se determinan con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación. Los análisis realizados en la planeación están vinculados con la generalidad del sujeto de fiscalización, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por órganos internos de control, auditorías externas y realizadas por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles y procesamiento de CFDI (XML).

El alcance y procedimientos referidos forman parte de los análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado para efecto de determinar la materialidad y la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución, situación por la cual, los alcances establecidos en los respectivos informes de resultados se complementan con los procedimientos de planeación específica, mismos que forman parte integral del análisis que realiza dicho ente auditor.

En el caso de la administración municipal de Apaseo el Alto, Gto., en cuanto a las auditorías practicadas al Ramo General 33 y obra pública y a la infraestructura pública municipal de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 se revisaron 12 obras del ejercicio fiscal 2018; 8 obras del ejercicio fiscal 2019; y 14 obras y 5 servicios relacionados con la misma del ejercicio fiscal 2020; verificándose que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad con las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan; que los presupuestos considerados para la ejecución de las obras se hayan aplicado correctamente, y que las modificaciones ocurridas se justifiquen mediante los convenios correspondientes; que la adjudicación y contratación de la obra pública se hayan realizado con estricto apego a lo dispuesto en la legislación vigente y que no existiera conflicto de interés entre los contratistas y los funcionarios públicos que decidieron las adjudicaciones; que los sistemas de control interno, operativo y contable que regulan la función, aseguren la protección de los recursos y su efectiva utilización, la calidad de los trabajos, la razonabilidad de los costos y la confiabilidad de la información en la ejecución de la obra pública; y que los contratistas hayan cumplido con las cláusulas contractuales, las especificaciones de obra, los procedimientos de construcción y la calendarización de los trabajos.

Destacando que en las referidas auditorías se contempló la revisión de una muestra de las obras y acciones ejercidas por la administración municipal en los periodos auditados, las cuales se determinaron con base en una planeación basada en riesgos, entre cuyos análisis se contemplan los temas de interés de la sociedad reflejados en notas periodísticas y el interés parlamentario, entre otros.

Por lo que hace a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018 se revisaron los siguientes rubros:

* Activo: Adquisiciones de computadoras y equipo periférico, equipo de audio y video, automóviles y camiones, otro equipo de transporte, así como activos intangibles (licencias informáticas e intelectuales). De dichas adquisiciones se verificó el proceso de adjudicación, análisis de contratos y verificaciones físicas de bienes.
* Ingresos: Participaciones y aportaciones.
* Egresos: Servicios personales como sueldos y gratificación de fin de año (se verificó que el pago se efectuara con apego a los montos autorizados y a las condiciones específicas para su otorgamiento), liquidaciones por indemnización por sueldos y salarios caídos, arrendamiento de maquinaria y equipo, servicios profesionales científicos y tecnológicos integrales, gastos de orden social y cultural, así como transferencias para servicios personales.

De la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 se revisaron los siguientes apartados:

* Activo: Adquisiciones de computadoras y equipo periférico, equipo de audio y video, cámaras fotográficas y de video, automóviles y camiones, maquinaria y equipo de construcción, así como la adquisición del sistema de aire acondicionado y refrigeración. De la adquisición de los bienes señalados, se verificó el proceso de adjudicación, análisis de contratos y se efectuaron verificaciones físicas de los bienes.
* Ingresos: Participaciones y aportaciones.
* Egresos: Servicios personales como sueldos, honorarios, prima vacacional, gratificación de fin de año y compensaciones por servicios (se verificó que el pago se efectuara con apego a los montos autorizados y a las condiciones específicas para su otorgamiento) Ahorro para el retiro, cuotas para el fondo de ahorro, liquidaciones por indemnización por sueldos y salarios caídos, vestuarios y uniformes, arrendamiento de maquinaria y equipo, servicios de capacitación, servicios profesionales científicos y tecnológicos integrales, gastos de orden social y cultural, transferencias de subsidios y otras ayudas así como, gastos relacionados con actividades culturales deportivas y ayudas.

Por lo que hace a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se revisaron los siguientes rubros:

* Activo: Adquisiciones de computadoras y equipo periférico, automóviles y camiones y software. De la adquisición de los bienes señalados, se verificó el proceso de adjudicación, análisis de contratos y se efectuaron verificaciones físicas de los bienes.
* Ingresos: Participaciones y aportaciones.
* Egresos: Servicios personales como: sueldos base y de confianza, honorarios, prima vacacional, gratificación de fin de año y compensaciones por servicios (se verificó que el pago se efectuara con apego a los montos autorizados y a las condiciones específicas para su otorgamiento) cuotas para el fondo de ahorro, liquidaciones por indemnización por sueldos y salarios caídos.

Materiales y suministros como: Vestuarios y uniformes, arrendamiento de maquinaria y equipo.

Servicios Generales como: Servicios de capacitación, servicios profesionales científicos y tecnológicos integrales, gastos de orden social y cultural.

Transferencias, Asignaciones y subsidios como: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como subsidios a la producción y ayudas sociales.

De acuerdo a la información antes señalada, la Auditoría Superior del Estado ha realizado 2 revisiones de cuenta pública y 2 auditorías practicadas al Ramo General 33 y obra pública y a la infraestructura pública municipal.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que ya se realizaron diversos actos de fiscalización a la administración municipal de Apaseo el Alto, Gto., por parte de la Auditoría Superior del Estado a los ejercicios fiscales que se propone auditar.

No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados por el ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio. Asimismo, el informe general del proceso de entrega-recepción correspondiente a dicha administración pública municipal, en el que se establecen las observaciones derivadas de dicho proceso será considerado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de revisión de la cuenta pública municipal y se hará del conocimiento de la Contraloría Municipal de Apaseo el Alto, Gto., para los efectos del artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta formulada por el ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., a efecto de que se ordene una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021. Por lo tanto, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al ayuntamiento de Apaseo el Alto, Gto., junto con su dictamen para su conocimiento; así como al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA PROPUESTA FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO., A EFECTO DE QUE SE ORDENE UNA AUDITORÍA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado.**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la propuesta formulada por el ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., a efecto de que se ordene una auditoría a la administración municipal 2018-2021.

Analizada la propuesta de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracción XV y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

1. **Antecedentes**

El ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., en la novena sesión ordinaria celebrada el 13 de enero de 2022 aprobó por unanimidad de votos el informe sobre la revisión del expediente de entrega­recepción correspondiente a la Administración Municipal 2018-2021 presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato, acordando que el mismo se remitiera al Congreso del Estado de Guanajuato acompañado de los anexos correspondientes; y este en caso de considerarlo, solicitara a la Auditoria Superior del Estado realizar una auditoría a fin de determinar las responsabilidades legales correspondientes.

El 26 de mayo de 2022, la referida propuesta se turnó por la presidencia a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, con fundamento en la fracción XV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

En la reunión de esta Comisión celebrada el 2 de junio de 2022, se dio cuenta y se radicó la propuesta y se requirió al Auditor Superior del Estado, la elaboración de una ficha técnica respecto a dicha propuesta, misma que se expuso a esta Comisión el 14 de junio del año en curso.

1. **Consideraciones**

Del contenido del acta de la sesión ordinaria del ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., celebrada el 13 de enero de 2022, se desprende que la propuesta materia del presente dictamen tiene por objeto solicitar la realización de una auditoría integral a la administración municipal 2018-2021, con la finalidad de determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Al respecto quienes integramos esta Comisión consideramos que la función de control es uno de los mecanismos que preservan el equilibrio entre los poderes públicos y asegura la vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad y preserva las garantías y derechos de los ciudadanos. La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos encomendados a las autoridades es una de las funciones primordiales que tiene el Poder Legislativo como responsable originario de esa función de control.

La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y cuando tales objetivos no son observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables.

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos. También lleva a cabo esta función indispensable para el Estado de Derecho, cuando fiscaliza y audita la aplicación de los caudales públicos.

El artículo 116, fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: *«Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.»*

La Auditoría Superior del Estado, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Local, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley; señalando además que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo; mientras que la fracción IV del mismo precepto establece que la Auditoría Superior del Estado podrá acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de la propia Constitución local.

El ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., es sujeto de la función de fiscalización del Congreso del Estado, según se desprende de los artículos 63 fracciones XIX y XXVIII; y 66 de la Constitución Política local y 2, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

En este orden de ideas, de acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado, durante los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 se efectuaron las siguientes revisiones y auditorías a la administración pública de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Tipo de Revisión**  **/Auditoría** | **Porcentaje revisado de ingresos** | **Porcentaje revisado de egresos** |
| **2018** | **Revisión de Cuenta Pública** |  |  |
|  | Sector Central | 62 | 35 |
|  | Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. | \_ | 21 |
|  | **Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública** | 100(1) | 61 |
| **2019** | **Revisión de Cuenta Pública** |  |  |
|  | Sector Central | 75 | 53 |
|  | Comisión Municipal del Deporte de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. | \_ | 4 |
|  | **Auditoría al Ramo General 33 y Obra Pública** | 100(1) | 40 |
| **2020** | **Revisión de Cuenta Pública** |  |  |
|  | Sector Central | 65 | 37 |
|  | **Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal** | 100(1) | 44 |
| **2021** | **Revisión de Cuenta Pública** |  |  |
|  | En etapa de análisis de información financiera del periodo de enero a junio y julio a diciembre 2021 | Proceso | Proceso |

**Notas:**

1. FISMDF.

De acuerdo a la información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado para la realización de los procesos de fiscalización se determinan con base en los riesgos identificados durante la etapa de planeación. Los análisis realizados en la planeación están vinculados con la generalidad del sujeto de fiscalización, con los sistemas transaccionales, de control interno, de materialidad presupuestal, de visibilidad y relevancia, así como de posibles riesgos asociados, entre los que destacan: Actas de órgano de gobierno y adquisiciones, notas periodísticas, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, análisis de demandas, informes de auditoría emitidos por órganos internos de control, auditorías externas y realizadas por la propia Auditoría Superior del Estado, sistemas transaccionales (tesorería, ingresos, bienes muebles e inmuebles, servicios personales, ayudas y subsidios, deuda, entre otros); variaciones presupuestales, saldos de cuenta de balance y resultados, bancos, proveedores y contratistas, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles y procesamiento de CFDI (XML).

El alcance y procedimientos referidos forman parte de los análisis que realiza la Auditoría Superior del Estado para efecto de determinar la materialidad y la extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar en la etapa de ejecución, situación por la cual, los alcances establecidos en los respectivos informes de resultados se complementan con los procedimientos de planeación específica, mismos que forman parte integral del análisis que realiza dicho ente auditor.

En cuanto a las auditorías practicadas al Ramo General 33 y obra pública y a la infraestructura pública municipal de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 se revisaron 52 obras y 3 acciones del ejercicio fiscal 2018; 14 obras del ejercicio fiscal 2019; y 11 obras del ejercicio fiscal 2020; verificándose que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad con las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan; que los presupuestos considerados para la ejecución de las obras se hayan aplicado correctamente, y que las modificaciones ocurridas se justifiquen mediante los convenios correspondientes; que la adjudicación y contratación de la obra pública se hayan realizado con estricto apego a lo dispuesto en la legislación vigente y que no existiera conflicto de interés entre los contratistas y los funcionarios públicos que decidieron las adjudicaciones; que los sistemas de control interno, operativo y contable que regulan la función, aseguren la protección de los recursos y su efectiva utilización, la calidad de los trabajos, la razonabilidad de los costos y la confiabilidad de la información en la ejecución de la obra pública; y que los contratistas hayan cumplido con las cláusulas contractuales, las especificaciones de obra, los procedimientos de construcción y la calendarización de los trabajos.

Destacando que en las referidas auditorías se contempló la revisión de una muestra de las obras y acciones ejercidas por la administración municipal en los periodos auditados, las cuales se determinaron con base en una planeación basada en riesgos, entre cuyos análisis se contemplan los temas de interés de la sociedad reflejados en notas periodísticas y el interés parlamentario, entre otros. Asimismo, a las obras de la muestra de auditoría se aplicaron los procedimientos señalados previamente y en las consideraciones del ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., no se identifican riesgos específicos relacionados a obra pública.

Por lo que hace a la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* Activo: Automóviles y camiones, maquinaria y equipo de construcción.
* Ingresos: Impuesto predial urbano, participaciones y aportaciones.
* Egresos: Sueldos base, liquidación por indemnización y sueldos y salarios caídos, servicios legales, difusión actividades gubernamentales, impresión publicaciones oficiales, gastos de orden social, gasto actividades culturales, ayudas sociales a actividades científicas o académicas, donativos a instituciones sin fines de lucro.

**CMAPAJ:**

* Egresos: Sueldos base, prima vacacional y gratificación de fin de año.

De la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 se revisaron los siguientes apartados:

**Sector Central:**

* Activo: Bancomer 044697 1695 Cta. Pub.,1888 F1/13, Banamex 752-1930742 Cuenta Pública, Bajío 3178 FAIMS 14,1789 PISBCC 14, 36435 PISBCC 16, Bancomer 94840 PIDH 18, Ing PIESCM, Ing PISBCC, Ing PISBCC, Ing PIDH (Techo), fondo fijo, otros deudores, anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles e inmuebles a corto plazo, computadoras y equipo periférico, cámaras fotográficas y de video, equipo para uso médico, dental y para laboratorio, automóviles y camiones, maquinaria y equipo de construcción, equipo de comunicación y telecomunicación, software.
* Ingresos: Participaciones, aportaciones, impuesto predial urbano e impuesto predial rústico.
* Egresos: Servicios personales, liquidación por indemnización y sueldos y salarios caídos, asignaciones adicionales al sueldo, estímulos por productividad y eficiencia, vestuario y uniformes, alumbrado público, servicios legales, mantenimiento y conservación vehículos terrestres aéreos marítimos, sentencias y resoluciones judiciales, penas multas accesorios y actualizaciones, ayudas sociales a actividades científicas o académicas, jubilaciones.

**CMDTP:**

* Egresos: Automóviles y camiones, y otros equipos.

Por lo que hace a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se revisaron los siguientes rubros:

**Sector Central:**

* Activo: Terrenos, bienes muebles, computadoras y equipo periférico, mobiliario y equipo para comercio y servicios, equipo de audio y de video, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, automóviles y camiones.
* Ingresos: Transporte público urbano, participaciones y aportaciones.
* Egresos: Servicios personales, servicio de telefonía tradicional, servicios de telefonía celular, servicios de contabilidad, sentencias y resoluciones judiciales, donativos a instituciones sin fines de lucro, ayudas por desastres naturales y otros siniestros, jubilaciones.

Es así, que de conformidad con la información antes señalada, la Auditoría Superior del Estado ha realizado 2 revisiones de cuenta pública y 2 auditorías practicadas al Ramo General 33 y obra pública y a la infraestructura pública municipal.

Aunado a lo anterior, en el Programa General de Fiscalización 2022 se contemplan 272 actos de fiscalización, por lo que, de acuerdo a dicho Programa, así como al Programa Operativo Anual y la capacidad institucional instalada, la incorporación de actos de fiscalización adicionales a los ya programados, incidiría directamente en la cobertura, calidad y tiempos de la fiscalización, en detrimento del citado programa y de los actos de fiscalización previamente planificados.

En razón a lo antes señalado y privilegiando la realización de los actos de fiscalización ya contemplados en el Programa General de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado para el presente ejercicio fiscal, mismo que consideró una planeación estratégica y propuestas ciudadanas, así como al cumplimiento de dicho programa en tiempo y calidad de los actos programados, así como a la capacidad institucional instalada de dicho Órgano Técnico, determinamos no autorizar la realización de la auditoría propuesta, atendiendo además a que ya se realizaron diversos actos de fiscalización a la administración municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., por parte de la Auditoría Superior del Estado a los ejercicios fiscales que se propone auditar.

No obstante, la Auditoría Superior del Estado podrá considerar los hechos que correspondan al ejercicio 2021 planteados por el ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., en la planeación y ejecución de la revisión de la cuenta pública de dicho ejercicio. Asimismo, el informe general del proceso de entrega-recepción correspondiente a dicha administración pública municipal, en el que se establecen las observaciones derivadas de dicho proceso será considerado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de revisión de la cuenta pública municipal y se hará del conocimiento de la Contraloría Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., para los efectos del artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Se determina improcedente la propuesta formulada por el ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., a efecto de que se ordene una auditoría a la administración municipal 2018-2021. Por lo tanto, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo al ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., junto con su dictamen para su conocimiento; así como al Secretario General del Congreso de Estado, para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO FORMULADA POR LA DIPUTADA Y EL DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura le fue turnada para efecto de estudio y dictamen, la iniciativa de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Estado de Guanajuato formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 89, fracción V; 112, fracción XV; y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa referida, presentando a la consideración de la Asamblea el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Proceso legislativo.**

**I.1.** En sesión ordinaria celebrada el 11 de marzo de 2019 se presentó la iniciativa de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Estado de Guanajuato formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La presidencia del Congreso turnó la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, misma que la radicó el 26 de marzo de 2019.

**I.2.** En la reunión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización que tuvo verificativo el 4 de junio de 2019 se aprobó como metodología para el análisis y dictaminación de la iniciativa, que la misma se remitiera a las diputadas y a los diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura; al Poder Judicial del Estado, a los organismos autónomos, a los 46 ayuntamientos, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Auditoría Superior del Estado y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, quienes contaron con un plazo de 30 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimaran pertinentes. Se estableció además un link en la página web del Congreso del Estado, para que la iniciativa pudiera ser consultada y emitir observaciones en un plazo de 30 días hábiles.

Al respecto, se recibieron opiniones, observaciones, propuestas y comentarios de: la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, así como los ayuntamientos de Celaya y León, Gto., y la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado.

Por su parte, los ayuntamientos de Coroneo, Doctor Mora, Jaral del Progreso, Moroleón, Romita, Santiago Maravatío y Uriangato, acordaron estar de acuerdo, no tener observaciones o comentarios o se dieron por enterados de la iniciativa.

Se elaboró un documento con formato de comparativo, mismo que se circuló a la Comisión.

En la metodología aprobada también se acordó la realización de mesas de trabajo para el análisis de la iniciativa. No obstante, atendiendo a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tema planteado en la iniciativa, se consideró innecesario llevarlas a cabo las citadas mesas de trabajo.

**1.3.** La presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, dicho proyecto fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora.

**II.** **Consideraciones de la diputada y el diputado iniciantes.**

En la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente dictamen, se refiere:

*«La publicidad institucional se ha vuelto indispensable para observar todas aquellas acciones y actividades que realizan los ente públicos, si bien la publicidad Institucional es definida por Ulises Prieto Mora como aquella que a través de contratos de publicidad, difusión publicitaria, creación o patrocinio, emanadas de la consignación presupuestaria de alguna de las distintas administraciones públicas, la cual busca informar sobre la existencia, composición y funcionamiento de las mismas e informar a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones.*

*Por su parte la UNESCO menciona que el papel de los medios de comunicación en la promoción del buen gobierno es claro. Todos los aspectos del buen gobierno se ven facilitados por la existencia de medios de comunicación sólidos e independientes en una sociedad. Para la consolidación del buen gobierno es indispensable que los periodistas tengan la libertad de supervisar, investigar y criticar las políticas y acciones de la administración pública. Los medios independientes son una señal que se debe seguir cuando no se tiene nada que esconder, pero sí mucho por mejorar.*

*De ahí la necesidad de que todas las acciones, programas, objetivos y logros de los entes de gobierno sean publicados de forma clara, objetiva, imparcial y transparente,*

*En noviembre del año pasado el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Presentamos un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo del Estado un informe detallado de las acciones que implementaría para remediar los excesos reportados en el Informe Especial Sobre asignación y Contratación de publicidad oficial que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encontrando así diversas áreas de oportunidad que deben ser atendidas y corregidas para transparentar de mejor manera la contratación y asignación de Publicidad Oficial.*

*La Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato ha quedado rebasada en esta materia, siendo los gastos en comunicación un tema que debe ser desarrollado de forma que expliquen objetivos, reglas y estrategias, respecto a la publicidad y comunicación institucional, para que posteriormente estas estrategias y programas sean auditados, y al momento de que sean seleccionados los medios de comunicación exista máxima transparencia.*

*Los años pasan y en Guanajuato no se han tomado, y se han detectado diversas áreas de oportunidad que pueden atenderse de forma paulatina, ya que se que se pueden optar que en los entes de gobierno exista un área que funja de forma autónoma y objetiva los temas de comunicación.*

*Por lo que los entes de gobierno deben de ser cien por ciento institucionales, no deben de existir publicidad que pueda malinterpretar que se esta posicionando a personas en particular, sino que, a la institución como tal, debiendo ser reconocido el trabajo de la totalidad de quienes hicieron posible las acciones realizadas.*

*Ahora bien, actualmente en nuestro Estado no existe reglamentación en esta materia, sin embargo a nivel federal en mayo del 2018 de publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Comunicación Social, misma que tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.*

*En ese mismo orden, el artículo primero transitorio establece que dicha Ley entro en vigencia el primero de enero del presente año. Y que por otra parte en su artículo tercero transitorio se establece un plazo no mayor de 90 días para que los congresos locales armonicen la legislación, a partir de la publicación de la Ley en mención.*

*Es importante señalar que el pasado el 29 de enero el Ejecutivo Federal emitió los lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el ejercicio fiscal 2019, mismos que se desprenden de la citada Ley General.*

*Asimismo, en la sesión ordinaria del pasado 06 de marzo del presente año, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentamos un punto de acuerdo para que la auditoría Superior del Estado de Guanajuato realizará una auditoría específica a la aplicación de los recursos públicos asignados al gasto de programas de comunicación social y de promoción y publicidad del gobierno del Estado de Guanajuato en los ejercicios de 2012 a 2018, acción que sienta las bases para corregir y sancionar las practicas que actualmente se han venido realizando.*

*Ahora bien, con la presente iniciativa se sentarán las bases para, que existan lineamientos acordes a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales.*

*Por lo antes mencionado debe de atender lo que la ciudadanía demanda, el gasto en publicidad y comunicación tiene que ser llevado a cabo de forma ordenada estratégicamente, sin exceder topes y que por ende implique reducir presupuesto de otras partidas y afecte en la realización de programas.*

*…*

*En consecuencia, con la presente iniciativa de Ley, se garantiza que el uso de la publicidad y comunicación institucional no sea utilizado para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en atención a su postura editorial, respetando en todo momento lo que establece nuestra Constitución Federal en sus artículos 6 y 7.*

*Y finalmente la presente iniciativa, en atención a lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Guanajuato y para dar cumplimiento, se establece lo siguiente.*

1. ***Impacto Jurídico.*** *En atención a la facultad que estable el artículo 56 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para que el Congreso del Estado proponga iniciativas, se expide la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Estado de Guanajuato, así como dando cumplimiento a lo que establece el articulo tercero transitorio de la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del 2018.*
2. ***Impacto Administrativo****. En este sentido se establecen en las atribuciones de las autoridades encargadas de aplicar la Ley, si bien se crea la figura de una Coordinación General la cual en el estricto sentido únicamente sería cambio de denominación ya que las actividades de esté, son las que actualmente las lleva a cabo las áreas encargas de la Comunicación Social.*
3. ***Impacto Presupuestario.*** *En atención a que las Coordinaciones o sus equivalentes de Comunicación Social en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos se organizaran como Coordinaciones Generales, se solicita que durante el análisis y estudio de la presente iniciativa, sea solicitada a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado el impacto presupuestal.*
4. ***Impacto Social.*** *La presente iniciativa impactará directamente en los guanajuatenses ya que contaremos con un ordenamiento en donde se establezcan las bases para que no existan incrementos o modificaciones en cuanto a medios de comunicación, y publicidad respectivamente, evitando así acciones que de forma discrecional afecten a medios de comunicación que fijen postura imparcial.»*

**III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora**

Como podemos observar del contenido de la iniciativa materia del presente dictamen su objetivo en términos generales es establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos para garantizar que el gasto en publicidad y comunicación institucional cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos, conforme a la Ley General de Comunicación Social.

En las disposiciones planteadas en la iniciativa materia del presente dictamen se retoma el contenido de los preceptos regulados en la Ley General de Comunicación Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018.

A través del juicio de amparo en revisión tramitado bajo el número de expediente 308/2020, promovido por *Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, Asociación Civil,* se reclamó, sustancialmente, que la citada Ley General de Comunicación Social carece de reglas claras y transparentes para asignar el gasto de comunicación social en las distintas ramas del gobierno mexicano, contraviniendo los principios previstos en la materia por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2021 emitió la resolución correspondiente, concediéndole el amparo a la quejosa para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla cabalmente con la obligación establecida en el artículo Tercero Transitorio del decreto de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 y, en consecuencia, proceda a subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año 2021.

No obstante, a la fecha, el Congreso de la Unión no ha dado cumplimiento a dicha resolución, razón por la cual y al estar fundada la iniciativa materia del presente dictamen en la Ley General de Comunicación Social, de la cual se ha declarado la inconstitucionalidad de diversos preceptos por nuestro Máximo Tribunal es que determinamos su improcedencia. Por tal motivo procede su archivo definitivo.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, quienes integramos la Comisión de Hacienda y Fiscalización, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Artículo Único.** Se considera improcedente la iniciativa de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Estado de Guanajuato formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Congreso del Estado para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

*Voto en contra*

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR LA DIPUTADA Y EL DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO A EFECTO DE REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DE LOS ORDENAMIENTOS.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura le fue turnada para efecto de estudio y dictamen, la iniciativa formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente al segundo de los ordenamientos.

Con fundamento en los artículos 89, fracción V; 112, fracción XV; y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa referida, presentando a la consideración de la Asamblea el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Proceso legislativo.**

**I.1.** En sesión ordinaria celebrada el 3 de junio de 2021 se presentó la iniciativa formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente a reformar la fracción IV del artículo 13 y las fracciones VIII y IX del artículo 22 y adicionar una fracción X al artículo 22 del segundo de los ordenamientos.

La presidencia del Congreso turnó la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, misma que la radicó el 14 de junio de 2021.

**I.2.** En la reunión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización que tuvo verificativo el 2 de agosto de 2021 se aprobó como metodología para el análisis y dictaminación de la iniciativa, que la misma se remitiera a las diputadas y a los diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura; al Poder Judicial del Estado, a los organismos autónomos, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a la Auditoría Superior del Estado y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, quienes contaron con un plazo de 15 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimaran pertinentes. Se estableció además un link en la página web del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana por un plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, se recibieron opiniones, observaciones, propuestas y comentarios de: el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la Universidad de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado.

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato manifestó que, a la luz del marco normativo electoral previsto en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se advierte que el contenido de la iniciativa no incide en materia electoral.

Se elaboró un documento con formato de comparativo, mismo que se circuló a la Comisión.

El 8 de junio de 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo, en la que participamos las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, integrantes de esta Comisión, asesores de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, funcionarios de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado y la secretaría técnica, en la que analizamos la iniciativa.

**1.3.** La presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, dicho proyecto fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora.

**II.** **Consideraciones de la diputada y el diputado iniciantes.**

En la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente dictamen, se refiere:

*…Por lo que respecta a Guanajuato, se encuentra dentro de los primeros 10 Estados en generación de residuos, ya que se estima que diariamente se generan entre 4 y 5 mil toneladas al día, de las cuales derivado a su mala disposición únicamente el 10% es reciclado.*

*La generación de residuos es responsabilidad de todas y todos, sin embargo, del total de los residuos que se producen no tenemos datos precisos de cuanto es lo que producen los entes de Gobierno.*

*Si bien, durante esta pandemia los productos de un solo uso fueron aliados para que la economía de los establecimientos que ofrecen servicios de alimentos no cerraran y pudieran operar mediante la modalidad de servicio a domicilio.*

*Y por lo que respecta a los entes de gobierno, 2020 fue un año donde las circunstancias los obligó a limitarse a realizar eventos institucionales, convenciones o congresos presenciales.*

*Pero años atrás en estos eventos era muy común observar como para su realización se contrataban servicios donde los alimentos son entregados en recipientes de un solo uso, que por el material que generalmente están compuestos no son susceptibles a ser reciclados, llegando directamente a los centros de disposición final de residuos.*

*Es por eso que la diputada y su servidor presentamos esta iniciativa con el propósito de que los entes de Gobierno realicen adquisiciones y contraten servicios que sean amigables con el Medio Ambiente.*

*...*

*Ahora bien, respecto a las modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato proponemos que tenga una verdadera coordinación con lo dispuesto en la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, para que las adquisiciones se realicen tomando en consideración el Sistema de Manejo Ambiental.*

*El cual contempla una cultura de responsabilidad ambiental, eficiencia administrativa por medio del consumo racional de los recursos materiales y la disminución de impacto ambiental que son generadas por las actividades realizadas por las dependencias y entes de gobierno.*

*Respecto a los insumos que por la operatividad y requerimientos propios que las áreas administrativas necesitan, los entes de Gobierno preparan su programa anual de adquisiciones, es por eso, que en la presente iniciativa se contempla que en dicho programa se tomen en cuenta aspectos que no afecten a nuestro Medio Ambiente.*

*Si bien los Comités y Subcomités determinan, cumpliendo con principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, honradez, concurrencia, igualdad, publicidad, oposición y transparencia, y buscando siempre que la oferta o postura sea la mejor para los entes de gobierno, en cuanto a precio, calidad y financiamiento, ya es momento que contemplemos aspectos que beneficien nuestro Medio Ambiente, puesto que algo que hoy podría considerarse barato, en algunos años podría costarnos MUY CARO.*

*Con esta iniciativa, estaríamos contribuyendo al cumplimiento de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de la Organización de las Naciones Unidas, buscando alcanzar las metas de los objetivos “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, “Agua Limpia y Saneamiento”, “Acción por el Clima” y “Vida de Ecosistemas Terrestres”. La presente iniciativa crea los mecanismos necesarios para proteger el medio ambiente y garantizar las disposiciones constitucionales de un medio ambiente adecuado para las personas a través de un desarrollo sustentable y bienestar en cada una de nuestras comunidades.*

*Finalmente, a efecto de satisfacer lo establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la evaluación del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social, se manifiesta que como se ha expuesto hasta aquí en las consideraciones de la exposición de motivos, por lo que hace al:*

*a) impacto jurídico, consistente en reformas y adiciones a diversos artículos del Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato y Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato;*

*b) impacto administrativo, por lo que respecta al presente impacto, no representa ni requiere la creación de una nueva área administrativa;*

*c) impacto presupuestario, La presenta impactara de forma mínima en el presupuesto derivado a que los productos considerados amigables con el Medio Ambiente, tiene un costo mínimo superior a los ofertados en el mercado.*

*d) impacto social, Con la presente propuesta los impactos en la sociedad se verán reflejados a largo plazo, lo anterior por tratarse de medidas que de forma inmediata los entes públicos deben atender para que, ante los efectos del cambio climático, estos se lleven de forma paulatina permitiendo así mayor capacidad de resiliencia de las personas; y*

*e) Impacto Ambiental, La presente propuesta contiene un impacto que beneficiara directamente a nuestro Medio Ambiente, lo anterior teniendo como beneficios contribuir a que los entes de gobierno adquieran bienes y contraten servicios que su daño al ambiente sea mínimo. Considerando que por su composición sean valorizables, pudiendo reutilizarse, reusarse y reciclarse.*

**III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora**

En términos generales el objeto de la iniciativa materia del presente dictamen es emprender acciones que contribuyan a reducir el impacto ambiental en el Estado, señalando a través del uso racional de los bienes adquiridos, arrendados o asignados; y la vigilancia a efecto de que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados, considerando lo dispuesto en su Sistema de Manejo Ambiental.

Al respecto, el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece que la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas será el órgano técnico encargado de apoyar a las comisiones legislativas y a los integrantes del Congreso del Estado, así como colaborar con el Centro de Estudios Parlamentarios en el ejercicio de las funciones e investigaciones legislativas en materia de finanzas públicas; de igual manera en su numeral 276 fracción V, alude, que una de sus atribuciones será la de analizar las iniciativas de Ley o Decreto cuya materia incida en las actividades financieras. Hecho el análisis correspondiente, dicha unidad concluyó que las incorporaciones propuestas en la iniciativa provocarían un impacto presupuestal en el costo que se tiene que invertir en la adquisición de bienes compuestos total o parcialmente de materiales valorizables dado que por estar sujetos a procesos previos para contar con dichas características o tratarse de otros materiales con menos disponibilidad en la industria, el costo unitario de los mismos normalmente supera a los ordinarios por ser estos últimos los más económicos de producir entre el veintinueve al treinta y nueve por ciento en promedio.

Con relación a la propuesta a fin de reformar el artículo 13, fracción IV de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato se desprende que el numeral 4, fracción XVII de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato define el concepto de «*Sistema de manejo ambiental: Conjunto de medidas adoptadas a través de las cuales se incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas de los entes públicos, con el objetivo de minimizar su impacto negativo al ambiente, mediante el ahorro y consumo eficiente de agua, energía y materiales, y que alienta con sus políticas de adquisiciones la prevención de la generación de residuos, su aprovechamiento y su manejo integral*.»

De dicho precepto legal, se advierte que actualmente ya se prevé la obligación para que los sujetos de ley se apeguen al sistema de manejo ambiental, siendo este el conjunto de medidas y criterios ambientales, incluidas sus políticas de adquisiciones, que los entes públicos deben adoptar.

En tal sentido, la reforma propuesta a la fracción IV del artículo 13 de la ley que nos ocupa, guarda en términos generales, la misma prevención ya establecida en el artículo 4 fracción XVII de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, razón por la que se considera innecesario efectuar dicha reforma, pues se estaría replicando una disposición actualmente regulada y obligatoria para todos los sujetos de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en conexión con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, que precisa que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los ayuntamientos, así como los organismos autónomos, implementarán sistemas de manejo ambiental en todas sus dependencias y entidades, promoviendo que en sus procesos de adquisiciones de bienes para la prestación de sus servicios y cumplimiento de sus funciones, se opte por la utilización y el consumo de productos compuestos total o parcialmente de materiales valorizables.

Por otra parte, respecto a la propuesta de adición de la fracción X del artículo 22 de la Ley materia del presente dictamen, se observa que dicha Ley, en su artículo 21, fracción V señala:

*«Artículo 21. En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen los sujetos de esta ley se atenderá a:*

*V. Al uso sustentable de los recursos naturales para la protección y preservación del medio ambiente, en los términos que dicten las leyes aplicables;»*

Razón por la cual, si bien es cierto que la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato no indica de manera expresa el término: *«sistema de manejo ambiental»,* también lo es que el citado numeral vigente, ya contiene una obligación para los entes públicos, a fin de que durante la planeación de sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios se atienda la protección y preservación al ambiente de conformidad con las leyes de la materia, como lo es la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato. Ante ello, debido al objeto de las modificaciones propuestas en la iniciativa, se estiman innecesarias, atendiendo a que el marco jurídico ya lo contempla.

Adicional a lo anterior, en la iniciativa no se precisan los elementos técnicos y legales para poder detectar qué bienes no afectan el medio ambiente, ni los instrumentos para determinar y evaluar tal condición. Lo anterior, debido a que el texto propuesto denota una obligatoriedad que impactaría desfavorablemente en los procesos de contratación, específicamente en lo relativo a determinar qué bienes y servicios no afectan el ambiente, y si los procesos para su elaboración o prestación, respectivamente, afectan o no el medio ambiente.

También debemos considerar el principio constitucional de respetar la igualdad de condiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones, toda vez que se estaría frente a una desigualdad de condiciones con respecto a aquellos proveedores que no demuestren que sus productos o servicios no afectan el medio ambiente, lo que conllevaría a que solamente ciertos proveedores pudieran suministrar ciertos productos o servicios en los procesos de contratación, lo cual se aleja del principio constitucional antes referido.

No se omite considerar el eventual impacto económico motivado por establecer un mecanismo, o bien, disponer de las personas integrantes de la estructura administrativa actual, a fin de realizar funciones inherentes a acreditar qué bienes y servicios, así como los procesos para su elaboración o prestación, afectan o no el medio ambiente, lo cual además de los costos para su implementación, podría extender el plazo para efectuar los procesos de licitación en materia de adquisiciones, contrataciones y arrendamientos.

Es en atención a los argumentos vertidos, que determinamos improcedentes las modificaciones propuestas

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, quienes integramos la Comisión de Hacienda y Fiscalización, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Artículo Único.** Se considera improcedente la iniciativa formulada por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en la parte correspondiente a reformar la fracción IV del artículo 13 y las fracciones VIII y IX del artículo 22 y adicionar una fracción X al artículo 22 del segundo de los ordenamientos. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Congreso del Estado para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

*Voto en contra*

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA A EFECTO DE REFORMAR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 62 Y ADICIONAR UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 61 TER 1 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; Y DEROGAR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efecto de estudio y dictamen, la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el primer párrafo del artículo 62 y adicionar un cuarto párrafo al artículo 61 ter 1 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y derogar la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Con fundamento en los artículos 89, fracción V; 112, fracción XV; y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa referida, presentando a la consideración de la Asamblea el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Proceso legislativo.**

**I.1.** En sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2022 se presentó la iniciativa formulada por diputadas diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el primer párrafo del artículo 62 y adicionar un cuarto párrafo al artículo 61 ter 1 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y derogar la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

La presidencia del Congreso turnó la referida iniciativa a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, misma que la radicó el 1 de marzo de 2022.

**I.2.** En la reunión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización que tuvo verificativo el 19 de abril de 2022 se aprobó como metodología para el análisis y dictaminación de la iniciativa, que la misma se remitiera a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, quienes contaron con un plazo de 10 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimaran pertinentes. Se estableció además un link en la página web del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana por un término de 10 días hábiles.

Al respecto, se recibió la opinión de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado; así como la opinión consolidada de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Se elaboró un documento con formato de comparativo, mismo que se circuló a quienes integran esta Comisión.

El 8 de junio de 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo, en la que participamos las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, integrantes de esta Comisión, así como la diputada Martha Edith Moreno Valencia, asesores de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, funcionarios de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado y la secretaría técnica, en la que analizamos la iniciativa.

**1.3.** La presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en sentido negativo, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, dicho proyecto fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora.

**II.** **Consideraciones de las diputadas y los diputados iniciantes.**

En la exposición de motivos de la iniciativa materia del presente dictamen, se refiere:

*En el Poder Legislativo se cristaliza la voluntad popular mediante la representación política. Por esto, todas las constituciones que surgieron al calor de movimientos populares igualitaristas asignaron a los Congresos una amplia atribución de vigilancia sobre la cosa pública, incluyendo el patrimonio y presupuesto públicos.*

*En nuestro país, como parte de esa atribución, desde su origen la Constitución asignó al Poder Legislativo la facultad de aprobar anualmente el presupuesto de egresos federal, exclusiva y específicamente a la Cámara de Diputados.[[158]](#footnote-158) Por su parte, en el ámbito subnacional esta facultad se traslada también exclusivamente a las Legislaturas locales[[159]](#footnote-159), de las que nuestra entidad no es la excepción.[[160]](#footnote-160)*

*Este diseño institucional de control político sobre la asignación de los recursos públicos busca filtrar las decisiones del gasto por el tamiz de la democracia, así como limitar la discrecionalidad en materia por parte de quien ejerza dichos recursos. Sin embargo, como toda creación humana, este diseño institucional es susceptible de complementarse, actualizarse o corregirse de acuerdo con los retos y demandas sociales que nos exija la propia democracia.*

*En este sentido, desde Morena hemos luchado por reducir los márgenes de discrecionalidad sobre las asignaciones del presupuesto público en todos los poderes y niveles de gobierno, consiguiendo avances institucionales como la prohibición constitucional de partidas secretas en el presupuesto de egresos de la federación.*

*Sin embargo, en el estado de Guanajuato la situación ha sido más compleja, pues luego de 30 años ininterrumpidos de gobiernos emanados del mismo partido político, la capacidad de mejora continua de los mecanismos de control político sobre los recursos públicos ha ido decayendo. Así, existen múltiples ámbitos del gasto que requieren una revisión exhaustiva para la reducción de los márgenes de discrecionalidad que escapan al control democrático encargado a este Congreso. Uno de estos ámbitos son los gastos realizados por concepto de comunicación social y publicidad.*

*Durante los últimos años, el Gobierno del Estado de Guanajuato ha sobrepasado los gastos en comunicación social aprobados en el presupuesto de egresos del estado para los ejercicios fiscales respectivos. Año con año, el gasto en comunicación social del gobierno estatal tiende a tener ampliaciones presupuestales que incrementan, hasta en 277%, el monto aprobado para dicho rubro por el Poder Legislativo en la Ley del Presupuesto General de Egresos, sin que exista una deliberación y aprobación por parte de la ciudadanía o sus representantes.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Presupuesto de servicios de comunicación social y publicidad* | | | |
| *Ejercicio* | *Aprobado* | *Modificado* | *Incremento* |
| *2017* | *$174,336,818.56* | *$400,724,166.82* | *130%* |
| *2018* | *$166,202,335.65* | *$350,234,476.64* | *111%* |
| *2019* | *$165,667,539.22* | *$415,390,673.29* | *151%* |
| *2020* | *$203,549,013.38* | *$507,272,597.46* | *149%* |
| *2021* | *$136,984,057.59* | *$516,947,995.00* | *277%* |

*Fuente:* *elaboración propia con base en datos de la Cuenta Pública estatal.*

*De igual manera, de 2017 a 2021, los gobiernos de Acción Nacional han ejercido $2,016,372,453.26 en el concepto de servicios de comunicación social y publicidad; esto es, más de 1 millón de pesos diarios[[161]](#footnote-161). Lo anterior empeora si se observa únicamente el ejercicio 2021, cuando el gasto ascendió a $486,389,045.00, lo cual supone un gasto de $1,332,572.73 por día.*

*Estas ampliaciones reflejan un grado de discrecionalidad intolerable para cualquier democracia, toda vez que se vulneran los mecanismos institucionales de control político sobre el ejercicio de los recursos públicos y, con ello, la posibilidad de discutir pública y democráticamente el destino que deben tener dichos recursos.*

*Quienes suscribimos la presente iniciativa consideramos que, como representantes populares, no debemos renunciar a nuestra responsabilidad de control político sobre la hacienda pública, en este caso particular sobre los gastos en propaganda realizados con presupuesto público.*

*En este sentido, con la finalidad de reducir los márgenes de discrecionalidad sobre el gasto en comunicación social y publicidad proponemos modificar la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato con la finalidad de eliminar la discrecionalidad de ampliar los gastos en este concepto.*

*Hoy en día, las disposiciones sobre programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto público vigentes en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos le han permitido al Gobierno del Estado hacer ampliaciones de este tipo. Por esto, quienes suscribimos esta iniciativa creemos pertinente añadir la exclusión de los gastos en servicios de comunicación social y publicidad a la posibilidad de hacer ampliaciones o traspasos sin consultarlo al Congreso.*

*Lo anterior en el entendido de que ampliaciones de dicha magnitud suponen, en los hechos, una modificación al Presupuesto de Egresos del Estado que no pasa por el filtro democrático de la deliberación y aprobación por parte de este Poder Legislativo.*

*Adicionalmente, proponemos modificar la Ley de Contrataciones Públicas de nuestra entidad, misma que tiene como objeto regular, controlar y vigilar los actos y contratos llevados a cabo y celebrados por las autoridades del ámbito estatal en materia de prestación de servicios, entre otras.*

*Actualmente, el artículo 7 de la Ley de Contrataciones excluye de su aplicación a los servicios de comunicación y publicidad, así como gastos ceremoniales, de representación, congresos y exposiciones, exclusión que no existe en otras entidades como CDMX o Puebla.*

*De ser aprobada, la presente iniciativa tendría los siguientes impactos:*

*I. Jurídico: Se reforman los artículos 61 ter 1 y 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; se deroga la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes.*

*II. Administrativo: La presente iniciativa no incluye impactos administrativos.*

*III. Presupuestal: La presente iniciativa no incluye impactos presupuestales.*

*IV. Social: Con la presente iniciativa se contribuye a reducir los márgenes de discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto, con lo cual se abona a fortalecer la democracia y la gobernanza presupuestal.*

**III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora**

Como podemos observar del contenido de la iniciativa materia del presente dictamen su objetivo en términos generales es que todas las ampliaciones líquidas y traspasos presupuestales del Poder Ejecutivo del Estado destinados a gastos de comunicación social y publicidad se autoricen por el Poder Legislativo; y eliminar la excepción que establece la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato respecto a los servicios de comunicación y publicidad, así como los relacionados a gastos de ceremonial, de orden social, cultural y de representación, congresos, convenciones y exposiciones.

Un principio rector del Presupuesto es el de especialidad, que, de acuerdo a Sergio Francisco de la Garza, citando a Gabino Fraga, consiste en que «…las autorizaciones presupuestales no deben darse por partidas globales, sino detallando para cada caso el monto autorizado»[[162]](#footnote-162), esto es, que los recursos sean aplicados conforme al texto de las partidas señaladas en el mismo.

La práctica presupuestaria ha llevado a una interpretación flexible de este principio, considerando adecuado recurrir a las transferencias entre distintas partidas, siempre y cuando se atengan a normas de procedimiento que garanticen un mínimo de racionalidad y de cumplimiento de mandato parlamentario contenido en el presupuesto[[163]](#footnote-163).

Dicho principio se encuentra previsto en nuestra legislación local, en el artículo 57 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establece:

***Artículo******57.*** *Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto de egresos que lo autorice se determine por ley posterior o se realice con cargo a ingresos excedentes. Para que proceda una erogación y ésta sea lícita, deberá sujetarse al texto y suficiencia de la partida. Tampoco podrán utilizarse las partidas para cubrir necesidades distintas a aquéllas que comprenden su definición, salvo lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.*

Por su parte, la fracción I del artículo 3 de la referida Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos establece:

***Adecuaciones presupuestarias:*** *Las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al presupuesto de egresos o a los flujos de efectivo correspondientes;*

Dentro de dicho concepto encuadran las ampliaciones líquidas.

De igual forma, la fracción LXIII del citado artículo 3 define la figura de traspaso en los siguientes términos:

***LXIII.******Traspaso:*** *Los movimientos que consisten en trasladar el importe total o parcial de la asignación de una clave presupuestaria a otra, previa autorización de la autoridad facultada de conformidad con las leyes y reglamentos en la materia;*

En tal sentido la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato en sus artículos 61 ter, 61 ter 1, 62 y 63 de la citada ley regulan las figuras de ampliaciones líquidas y los traspasos presupuestales, las cuales en ambos casos podrán realizarse siempre y cuando no superen el 6.5% en el primer caso de los ingresos proyectados; y en el segundo, cuando en su conjunto no rebasen un monto equivalente al referido porcentaje de los presupuestos anuales de quien los otorga y de quien los recibe, respectivamente. En caso de superar dicho porcentaje se requeriría autorización del Poder Legislativo para poder realizarlos.

Como podemos observar, el principio de especialidad del presupuesto tiene excepciones regladas, como lo es el traspaso, acotado por la propia ley a movimientos de recursos públicos presupuestales para satisfacer necesidades propias de la función pública, supeditado a la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y al tope porcentual fijado del 6.5%, los cuales además existe la obligación de ser informados al Poder Legislativo en la cuenta pública. Es así que, el traspaso presupuestal cumple con los principios de legalidad al estar previsto en la ley; y orientación de gasto público, al destinarse a actividades propias de la función pública. Para su realización se requiere autorización expresa del órgano hacendario estatal -Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración-; y está limitado al 6.5% de los montos presupuestarios de las dependencias y entidades -no del total del presupuesto anual aprobado-.

En el caso de las ampliaciones líquidas, de conformidad con el artículo 61 ter, estas solamente podrán realizarse en casos debidamente justificados y previa autorización Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, siempre y cuando, se garantice el cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los sujetos de la ley. El citado artículo previene que dichas adecuaciones presupuestarias que impliquen recursos de origen estatal deben ser mínimas, privilegiando la eficacia y la eficiencia en el ejercicio del gasto público.

Por otra parte, podemos desprender del contenido de los artículos 15, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 67, fracción I de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, identifican los gastos de comunicación social como no prioritarios y sobre los cuales en caso de disminución de ingresos se deben realizar ajustes de reducción, y aun cuando la realización de estos gastos no se realicen bajo las disposiciones que marca la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, no implica que no estén regulados o no deban transparentarse, ya que como ya se apuntó anteriormente, se informan en la cuenta pública.

Asimismo, la pretensión contenida en la iniciativa materia del presente dictamen es que el Congreso autorice todos los traspasos y ampliaciones líquidas destinados a gastos de comunicación social y publicidad sin importar el porcentaje que representen del presupuesto, lo cual implicaría someter al proceso legislativo el otorgamiento de la autorización correspondiente, no resultando operativo y contraviniendo la propia naturaleza del artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato que se pretende reformar, ya que las ampliaciones líquidas y los traspasos presupuestales son realizados una vez que se analizan las distintas circunstancias que representa el hacer o no la adecuación, aunado a que- el hacerlos no vulnera la trasparencia-.

De igual forma, debemos considerar que en el transcurso del año, el ejercicio fiscal se encuentra en una dinámica de administración y operación constante, por lo que los datos que se consideran para tomar este tipo de determinaciones, corresponden a la realidad presupuestal que prevalece que en el momento que se realiza, razón por la cual el uso de esta facultad no es arbitrario o irresponsable, siendo de importancia también dar a conocer los alcances que hace el gobierno en los distintos programas públicos que ejecuta, aunado a que la excepción que marca la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato está considerada con el objeto de facilitar los procesos que se requieren para realizar este tipo de gastos, sin que exima la obligación de su trasparencia o de responsabilidades a los servidores públicos.

De igual forma, el que dichos gastos se excluyan de la regulación de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato no implica que puedan llevarse a cabo de manera arbitraria, pues el propio artículo 7 de dicha ley, consigna en su apartado final que dichos actos y contratos se llevarán a cabo en apego a lo establecido en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual los sujetos de la ley deberán prever las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, financiamiento, calidad, oportunidad y demás circunstancias que contribuyan a preservar la hacienda pública estatal.

En este sentido, el primer párrafo del artículo 134 de nuestra Carta Magna establece:

*Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

Por lo anterior, los servicios de comunicación y publicidad, así como los relacionados a gastos de ceremonial, de orden social, cultural y de representación, congresos, convenciones y exposiciones deberán cumplir en todo momento los principios aplicables al gasto público, mismos que también serán objeto de la función de fiscalización a cargo de este poder Legislativo.

Es conveniente señalar, que a nivel federal, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria[[164]](#footnote-164) también contempla la posibilidad de realizar adecuaciones presupuestales sin que tenga que mediar autorización del Congreso de la Unión, lo cual se señala en el artículo 58 al indicar que *«las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán: I. Modificaciones a las estructuras: a) Administrativa; b) Funcional y programática; c) Económica; y d) Geográfica II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes…»;* asimismo señala que «*las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento. Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.».* Dicha facultad para el Ejecutivo Federal en realidad no se encuentra limitada por tema o por porcentaje alguno en monto, sino que sólo se establece uno de referencia para condicionar que cuando se exceda el porcentaje, debe reportarse en los informes trimestrales a efecto del posicionamiento que hará en su momento la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sin que esta actividad sea vinculatoria para el Ejecutivo Federal.

De igual forma, los gastos que se tienen actualmente considerados a nivel estatal para este rubro, fueron sujetos al proceso de análisis y dictaminación que se agotó para aprobar el paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2022. Aunado a que este tipo de gastos están acotados por la propia ley y deben difundirse como parte de la información presupuestal y en consecuencia con el seguimiento de su aplicación como lo señala el artículo 37 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y como parte de las obligaciones comunes que marca el artículo 26 fracción XXIII, de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, al señalar *«Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.»*

Cabe señalar que el presupuesto asignado en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para este ejercicio fiscal 2022[[165]](#footnote-165) en gastos de comunicación social de la administración pública estatal, de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos, ascienden a la cantidad de $151’231,414.24 mismos que se detallan en el Anexo 6 de dicha Ley, la cual representa el 0.16% del presupuesto total para el Estado de Guanajuato.

También, es importante mencionar que los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato o campaña, en atención a las obligaciones comunes que marca el artículo 26 fracción XXIII de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, se encuentran publicados de manera trimestral en la página oficial del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato[[166]](#footnote-166), lo que permite tener un seguimiento a estos gastos.

En atención a los argumentos vertidos, determinamos improcedentes las reformas, adiciones y derogación propuestas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, quienes integramos la Comisión de Hacienda y Fiscalización, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Artículo Único.** Se considera improcedente la iniciativa la iniciativa formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a efecto de reformar el primer párrafo del artículo 62 y adicionar un cuarto párrafo al artículo 61 ter 1 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y derogar la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato. En consecuencia, se ordena su archivo definitivo.

Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría General del Congreso del Estado para los efectos conducentes.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

Voto en contra

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A DOS INICIATIVAS FORMULADAS POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A EFECTO DE REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fueron turnadas para efecto de estudio y dictamen, dos iniciativas formuladas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Con fundamento en los artículos 89, fracción V; 112, fracción XV; y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, analizamos la iniciativa referida, presentando a la consideración de la Asamblea el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Proceso legislativo.**

**I.1.** En las sesiones ordinarias celebradas los días 28 de abril y 5 de mayo de 2022, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron las siguientes iniciativas:

1. A efecto de adicionar la fracción VI al artículo 36, recorriendo en su orden la subsecuente de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; y
2. A fin de reformar los artículos 42, fracción III; 84; 86; y 127; y adicionar un segundo párrafo al artículo 41; un artículo 52 BIS; las fracciones VIII y IX al artículo 125; y un segundo párrafo al artículo 130; y derogar las fracciones I y II del artículo 40; la fracción II del artículo 42; y el segundo párrafo del artículo 85 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

La presidencia del Congreso turnó las referidas iniciativas a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen, misma que las radicó en fechas 5 y 12 de mayo de 2022.

**I.2.** En la reunión de esta Comisión que tuvo verificativo el 12 de mayo de 2022 se aprobó como metodología para el análisis y dictaminación de las referidas iniciativas, que las mismas se remitieran a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, quienes contaron con un plazo de 10 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimaran pertinentes. Se estableció además un link en la página web del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana por un término de 10 días hábiles.

Al respecto, se recibieron las opiniones de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado; así como las opiniones consolidadas de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Se elaboró un documento con formato de comparativo, mismo que se circuló a quienes integran esta Comisión.

El 8 de junio de 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo, en la que participamos las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, integrantes de esta Comisión, asesores de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, funcionarios de la Coordinación General Jurídica, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado y la secretaría técnica, en la que analizamos la iniciativa.

**I.3.** La presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del proyecto de dictamen en sentido positivo, conforme lo dispuesto en los artículos 94, fracción VII y 272 fracción VIII inciso e de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, considerando las propuestas vertidas en la mesa de trabajo. Dicho proyecto fue materia de revisión por las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora.

**II.** **Consideraciones de las diputadas y los diputados iniciantes.**

**II.1.** En la exposición de motivos de la iniciativa a efecto de adicionar la fracción VI al artículo 36 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, se refiere:

*«En una sociedad en constante evolución, y sin duda en donde los avances tecnológicos son una constante, ya que en cada momento nos proporciona herramientas para poder realizar nuestras actividades con mayor facilidad.*

*La pandemia de SARS- COV2, irrumpió en nuestras vidas, cambiando nuestros hábitos y formas de trabajo. Ahora el home office y el uso de plataformas digitales, es una tarea habitual, para cubrir nuestras necesidades que van desde la alimentación, transporte, y adquisición de productos comerciales.*

*Las expresiones como son: Geolocalización y Georreferenciación, cada vez son más comunes en nuestra vida diaria, al usarlas desde un teléfono móvil o en nuestros aparatos electrónicos, de tal manera que hemos adoptado la frase normalizada, "mandarme tu ubicación o la ubicación de un determinado lugar' por ejemplo, es algo común y que encontramos en el Internet o en el ciber espacio, la definición y formas de aplicación de dichos conceptos. Por ello, la geolocalización es una tecnología que utiliza datos obtenidos de la computadora o dispositivo móvil de un individuo para identificar o describir su ubicación física real.*

*Un sistema de geolocalización es una solución de la tecnología de la información que determina la ubicación de un objeto en un entorno físico (geoespacial) o virtual (Internet). A menudo, el objeto es una persona que quiere utilizar un servicio basado en la ubicación, mientras mantiene su privacidad.*

*Por otra parte, la georreferenciación es la ubicación de un punto concreto sobre la superficie terrestre. Es una técnica de procesamiento espacial que utiliza las coordenadas de mapa para determinar una localización geográfica única en el espacio y, así, poder facilitar esta información a las diferentes entidades cartográficas de forma digitalizada.*

*La georreferenciación es propia de los sistemas de información geográfica y se trata de un valor fundamental para el análisis de los datos, lo que permite es que se combine información de diferentes sistemas de coordenadas con el fin de conseguir una ubicación lo más precisa posible.*

*Además, con la georreferenciación se obtienen datos con diferentes capas de información. De esta forma, una misma base de datos georreferenciados, con la configuración adecuada, puede adaptarse a las distintas necesidades de quien requiera la información.*

*Con la georreferenciación, tenemos una reducción de los errores o distorsiones geométricas que ello implica, sirve para ofrecer ubicaciones lo más preciso posible. Es decir que la georreferenciación, puede dar respuesta tanto para empresas privadas, ciudadanos y la administración pública para tener información de calidad sobre una zona determinada.*

*En nuestro País, la georreferenciación, se ha utilizado en el sector público para identificar parcelas o infraestructura hidráulica, y el tener datos sobre que producen y que acciones de sanidad o climáticas se deben aplicar.*

*Dicho concepto lo podemos ubicar en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en su artículo 2 en su fracción VI; Información Geográfica: al conjunto organizado de datos espaciales georreferenciados, que mediante símbolos y códigos genera el conocimiento acerca de las condiciones físico-ambientales, de los recursos naturales y de las obras de naturaleza antrópica del territorio nacional.*

*El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es un autoridad técnica y legal sobre la aplicación de padrones o capas de datos georreferenciados y por ello aplica una norma técnica para el Sistema Geodésico Nacional, en su artículo 3 (cita) señala que Georreferenciación. - el conjunto de actividades u operaciones,* *destinadas a establecer la ubicación de puntos, conjuntos de puntos o de información geográfica en general, con relación a un determinado sistema de referencia terrestre.*

*Además, con las reformas recientes al Código Fiscal de la Federación el año pasado, en el artículo 27, en materia del Registro Federal de Contribuyentes, incluyó:*

*C. Facultades de la autoridad fiscal:*

*l. Llevar a cabo verificaciones conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de este Código, sin que por ello se considere que inician sus facultades de comprobación, para constatar los siguientes datos:*

*En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades fiscales podrán utilizar servicios, medios tecnológicos o cualquier otra herramienta tecnológica que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales, cuya información también podrá ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco geográfico fiscal, así como para la actualización de la información en el Registro Federal de Contribuyentes referente al domicilio fiscal de los contribuyentes.*

*Por lo que el uso de los datos o base de datos georreferenciados, permite reducir los errores de ubicación y una precisión fidedigna y poco viable de poder tener alternaciones.*

*Por tal motivo si dichas herramientas resultaron indispensables para no dejar de comunicarnos e incluso tener actividades económicas esenciales como en los años que tuvimos el inicio de la pandemia, son ahora herramientas de gran utilidad para* *contar con padrones transparentes que ayuden a inhibir cualquier intento de simulación o conductas lesivas por quienes lo integran o quienes proporcionan sus datos.*

*Estas conductas se pueden contrarrestar si al padrón se le puede incorporar dicha herramienta, al que podemos integrar el requisito de una georreferenciación, con el objetivo de fortalecer la transparencia proactiva; esto es el Padrón de Proveedores del Gobierno Estatal, así como en los demás poderes, organismos autónomos; que sin lugar a duda, será un modelo a implementar por los municipios.*

*Por lo anterior, se propone que, en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, se modifiquen en los actuales requisitos establecidos en el artículo 36 para agregar la georreferenciación de los domicilios de las sociedades o asociaciones o personas físicas solicitantes, así como elementos por medios de fotografías o cualquier otro medio que permita identificar el interior, exterior de la empresa, negociación o establecimiento en donde lleve a cabo sus activades.*

*Dicho concepto en la aplicación de padrones de productores agrícolas, contribuyentes e incluso se han usado para los vehículos es el aspecto de la seguridad. Que incluso servirá de modelo para otros padrones en la administración pública en el estado.*

*Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Guanajuato, manifestamos que de ser aprobada la presente iniciativa de reformas la Ley, se tendrían los siguientes impactos:*

*l. Impacto jurídico. Se modifican diversas disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.*

*II. Impacto administrativo. La iniciativa que se plantea fortalece las* *disposiciones por lo que se incorporan nuevas obligaciones para los proveedores de los poderes y organismos autónomos.*

*III. Impacto presupuestal. La presente iniciativa no tiene impacto* *presupuestal al no traer consigo la generación de nuevas plazas o cambios en la estructura administrativa.*

*IV. Impacto social. La presente propuesta de reforma permite tener una certeza y transparencia en el padrón de proveedores en el estado...»*

**II.2.** En la exposición de motivos de la iniciativa a efecto de reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, se señala:

*«… a fin de garantizar en la entidad la observancia estricta de las disposiciones consignadas en nuestra Carta Magna, se expidió por parte de la Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, mediante Decreto Legislativo número 262, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 206, décima quinta parte, del 26 de diciembre de 2014, en vigor desde el 01 de febrero de 2015, en atención a lo dispuesto por el artículo primero transitorio.*

*Dicha Ley, de conformidad con el artículo 1, es de orden público e interés general y tiene por objeto regular, controlar y vigilar los actos y contratos que lleven a cabo y celebren los sujetos[[167]](#footnote-167) de la misma, en materia de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y de prestación de servicios.*

*Ahora bien, resulta importante tener en consideración que los ordenamientos jurídicos que rigen a nuestra sociedad pueden ser objeto de modificaciones que les permitan tener un alcance sobre supuestos de hechos no contemplados y que emergen del proceso constante de cambio en las actividades cotidianas de la ciudadanía, a fin de que la norma jurídica se encuentre actualizada con las exigencias que la sociedad demanda.*

*En dicho tenor, las disposiciones normativas relativas a los procesos de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza, con cargo al erario público, representan instrumentos fundamentales para la protección de la hacienda pública y el ejercicio eficiente y transparente de las finanzas.*

*Por tanto, son estas normas en materia de adquisiciones y contrataciones las que permiten identificar con transparencia a las personas proveedoras que ofertan bienes y servicios para dotar los requerimientos de los entes públicos; así como los procedimientos que regulan las compras y contrataciones que garantizan los procesos competitivos que deben realizarse con estricto apego al derecho y con ello atender las exigencias de cuidado que exige la norma constitucional sobre el uso de recursos públicos.*

*Al efecto, derivado de un ejercicio de verificación respecto de la pertinencia de la norma, se ha determinado la necesidad de modificar diversas disposiciones de la Ley de Contrataciones para el Estado de Guanajuato, a fin de· dotar a nuestra entidad de un marco jurídico que le permita hacer frente, de manera eficaz a las situaciones que se suscitan en la materia.*

*Contenido de la iniciativa*

*La iniciativa que se pone a consideración de esta Honorable Asamblea, se concentra en tres componentes principales, los cuales se propone integrar en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en atención a lo siguiente:*

*El primero se refiere a la adecuación del esquema sancionatorio, contenido en los Capítulos I y II del Título Noveno, a fin de armonizarlo con las disposiciones previstas por la legislación federal.*

*La segunda propuesta está enfocada en reconocer de forma detallada las notificaciones electrónicas que practican las áreas que llevan a cabo los diferentes procesos de contrataciones. Finalmente, el tercer componente de la iniciativa, propone ajustar las disposiciones a fin de cohesionar las hipótesis relativas a la enajenación de bienes muebles para maximizar su aprovechamiento.*

*i. Esquema sancionatorio*

*El padrón de proveedores es un registro ordenado y sistematizado de las personas con capacidad para contratar, que desean enajenar o arrendar bienes muebles o prestar servicios, lo cual permite su identificación, por lo que facilita los procedimientos de contratación que llevan a cabo los entes en el sector público.*

*El padrón es por tanto, una herramienta relevante en los procesos de contratación al proveer una base de datos oportuna sobre las personas que tienen la capacidad de ofrecer productos y/o servicios conforme a la ley, para atender los requerimientos de las. dependencias y entidades de la administración pública estatal, en el cumplimiento de sus funciones. En razón de la relevancia de este instrumento, es menester precisar que las omisiones o actuaciones que se efectúen con dolo o mala fe por parte de las personas proveedores inscritas en el mismo, están sujetos a las sanciones que se establezcan en la norma.*

*La norma vigente prevé supuestos respecto a la cancelación del registro de proveedores en el padrón. Sin embargo, es oportuno que hipótesis previstas en materia de cancelación se trasladen a los rubros relativos a las infracciones previstas en la Ley, es decir, contemplarlas como parte de las disposiciones aplicables en materia de multa e inhabilitación.*

*En ese sentido, se propone eliminar la actual disposición señalada en la fracción I del artículo 40, para reubicarla, junto con las hipótesis de que prevén cualquier otra actuación con dolo o mala fe por parte de los particulares que participen en los procesos de contratación, como supuestos de infracción a la Ley dentro de su artículo 125, y que de actualizarse, ameriten sanción en términos de lo previsto en el numeral 127, con sujeción a las reglas para la aplicación de sanciones referidas en el arábigo 130 del citado cuerpo normativo, homologándolo así con las previstas en la legislación federal.*

*De igual manera, a fin de adecuar con lo dispuesto por el texto de la Ley que rige en materia federal, se estima necesario eliminar la hipótesis contenida en la fracción II del vigente artículo 40, para que una de las consecuencias de la rescisión contractual sea la inhabilitación temporal, y no así la cancelación del padrón, este último efecto sobre el cual, el Tribunal Local en materia de Justicia Administrativa se ha pronunciado respecto de su inconstitucionalidad, por tener un efecto perpetuo que resulta contrario a los principios del derecho sancionador. Es de mencionarse que el artículo 56 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala respecto al registro de proveedores, lo siguiente:*

*“Artículo 56 Bis. El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.*

*Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado…”*

*En consonancia con este tratamiento, la legislación federal prevé en el Título Quinto, "De las Infracciones y Sanciones", un Capítulo Único relacionado con Infracciones y Sanciones, con elementos cuya naturaleza se comparte y se busca reflejar en la propuesta de reforma que se somete a consideración de esa Asamblea Legislativa, a fin de homologar su tratamiento para las disposiciones aplicables a esta entidad federativa.*

*Asimismo, al artículo 41 se adiciona un segundo párrafo, para establecer que el procedimiento para decretar la cancelación del registro, solo será instaurado en el caso de actualizarse el supuesto de haya transcurrido un año a partir de haberse decretado la suspensión del registro, sin que se lleve a cabo la actualización de la información por parte del proveedor; de igual manera se deroga la fracción II y se reforma la fracción III, ambas del numeral 42.*

*ii. Uso de medios electrónicos*

*Asimismo, es preciso continuar con los esfuerzos del uso de medios remotos para el desarrollo de procesos administrativos y legales en materia de contrataciones. Ello permitirá no sólo facilitar los procesos de interlocución* *entre el gobierno y la ciudadanía, sino también ayuda a la disminución de costos entre las diversas partes relacionadas con los procesos.*

*Por tanto, se estima necesario adicionar el artículo 52 Bis, a fin de legitimar el uso de medios electrónicos para que las notificaciones que practiquen el personal de las áreas contratantes como parte de la ejecución de los contratos, así como de los diversos procedimientos administrativos que la ley contempla, se simplifiquen. Con la práctica de notificaciones electrónicas, se permitirá por un lado, reducir el número de impugnaciones de proveedores contra formalidades de los actos de notificación, contemplando además que gran parte de los proveedores adjudicados tienen domicilio fuera del estado de Guanajuato, lo que eventualmente deja sujeto a controversias las notificaciones personales que la parte contratante desahoga fuera de la circunscripción territorial del Estado.*

*Adicionalmente, es preciso resaltar que para el sector público coadyuva en disminuir los costos operativos que implican las citadas notificaciones.*

*iii. Enajenación de bienes muebles*

*La administración de bienes muebles del sector público, exige por un lado, procurar el debido cuidado de los mismos para que conserven su valor en términos de su uso a través del tiempo, y por otro, que se potencialice su aprovechamiento al ser destinados a fines que conlleven un beneficio para la sociedad. Para ello resulta necesario regular los supuestos de enajenación y baja de muebles, que permitan preservar el patrimonio estatal, lo cual permea en su utilidad a la sociedad.*

*Así, se proponen reformas a los artículos 84, 85 y 86 de la Ley, puesto que las disposiciones actuales contienen previsiones que es oportuno cohesionar, a fin de proveer de mayor orden a la norma aplicable y considerar precisiones, para dar claridad y mayor certeza a las excepciones que se encuentran consideradas, favoreciendo con ello de manera sustancial su aplicación, y por ende lograr un impacto positivo en la sociedad a través de las operaciones en materia de enajenaciones mobiliarias.*

*…*

*Evaluación ex ante*

*A fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, relativo a la evaluación ex ante de la norma, a partir de la evaluación del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social, se indica lo siguiente:*

*l. Impacto jurídico: Con la presente iniciativa se fortalece el marco jurídico del Estado, a fin de dotarlo de eficiencia y transparencia en materia de contrataciones, a través del uso de la facultad contenida en el artículo 56 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato;*

*II. Impacto administrativo: En razón de las disposiciones previstas, se tendrán impactos en el instrumento reglamentario de la ley de la materia, por lo que en su momento se deberán realizar las modificaciones correspondientes;*

*III. Impacto presupuestario: La presente propuesta no implica ningún impacto presupuestario, ya que no se requieren recursos presupuestales adicionales a los ya ejercidos en la actualidad, por virtud de las reformas propuestas.*

*IV. Impacto social: Las normas en materia de adquisiciones pretenden mejorar los instrumentos de regulación en los procesos que al efecto llevan a cabo los sujetos obligados. Ello con el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia en el ejercicio de la hacienda y de la función pública.»*

**III. Consideraciones de la Comisión Dictaminadora**

Como podemos observar del contenido de las iniciativas materia del presente dictamen, la primera tiene por objeto incorporar en la ley georreferenciación como una herramienta que será de gran utilidad para fortalecer la transparencia en los padrones de proveedores de los sujetos de la ley, dando certeza a la ubicación de los proveedores; y en el caso de la segunda, su objetivo es la adecuación del esquema sancionatorio, a fin de armonizarlo a la legislación federal; regular de forma detallada las notificaciones electrónicas dentro de los diferentes procesos de contrataciones; y adecuar diversas disposiciones a fin de cohesionar las hipótesis relativas a la enajenación de bienes muebles para maximizar su aprovechamiento.

Al respecto, coincidimos con las y los iniciantes en la necesidad de actualizar el marco normativo que regula el régimen contractual del Estado, con la finalidad de incrementar la efectividad de los procedimientos relacionados con este y permitir el aprovechamiento de los avances tecnológicos, propiciando condiciones que garanticen la observancia a los principios previstos en el párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y doten de mayor certeza a los particulares.

En este orden de ideas, el artículo 134 de nuestra Carta Magna prevé que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En la tesis 1a. CXLV/2009[[168]](#footnote-168), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el alcance de los referidos principios.

El de legalidad se traduce en que el gasto público debe estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o en una ley, lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. El de honradez implica que el gasto no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado. El de eficiencia significa que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó.

Además, conforme al principio de eficacia es indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. El principio de economía se traduce en que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, buscando las mejores condiciones de contratación para el Estado. Finalmente, el principio de transparencia tiene por objeto permitir que el ejercicio del gasto sea del conocimiento público.

En la tesis 1a. CCXXXVIII/2015 (10a.)[[169]](#footnote-169), la referida Sala señaló que el citado artículo 134 constitucional tiene un contenido normativo complejo, al contener distintas reglas y principios en materia de ejercicio de recursos por parte del Estado que tienen aplicación en todos los niveles de gobierno. Además, confiere una facultad reglamentaria en favor del legislador secundario para reglamentar todo el régimen contractual del Estado, regulando los procedimientos, bases, reglas, requisitos y demás elementos para lograr la realización de los principios que lo informan.

En la tesis 1a. CCXXXIX/2015 (10a.)[[170]](#footnote-170), el órgano judicial señaló que el citado artículo 134 establece los contenidos materiales rectores del régimen contractual del Estado y una cláusula competencial en la forma de un mandato al legislador para reglamentar los procesos tanto de contratación del Estado, como aquellos destinados a controlar su debido cumplimiento. Lo anterior, implica que resulte aplicable el principio de reserva de ley, según el cual dicha materia debe reglamentarse en la ley y no en otras fuentes de inferior rango. Además, todos estos niveles de gobierno, mediante sus órganos legislativos, deben reglamentar la norma constitucional.

En la jurisprudencia P./J. 106/2010[[171]](#footnote-171), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que para cumplir lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, es necesario que las leyes expedidas en torno al uso de recursos públicos recojan y desarrollen los principios y mandatos constitucionales, así como que permitan que puedan ser efectivamente realizados.

A través de la reforma que se propone se dotará de una herramienta tecnológica que dará certeza de la ubicación de los proveedores, lo que permitirá contar con un padrón actualizado y vinculado con los domicilios, evitando el riesgo de tener en la base de datos, ubicaciones inexistentes o desactualizadas, aunado a que la verificación que se realice de forma personal en los domicilios de los proveedores locales y foráneos, permitirá validar su existencia accediendo a su ubicación sin inconveniente, implicando menos traslados para atender estas diligencias.

Asimismo, en materia fiscal es un dato que solicita la autoridad, estableciéndolo como la ubicación geográfica del domicilio fiscal; esto a nivel federal, se encuentra normado en el Código Fiscal de la Federación[[172]](#footnote-172) en su artículo 27, Letra C, fracción I, último párrafo, al indicar que *«En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades fiscales podrán utilizar servicios, medios tecnológicos o cualquier otra herramienta tecnológica que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales, cuya información también podrá ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco geográfico fiscal, así como para la actualización de la información en el Registro Federal de Contribuyentes referente al domicilio fiscal de los contribuyentes.»*, esta adición se dio en el mes de noviembre del año 2021 y fue armonizada en el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato[[173]](#footnote-173) en su artículo 50, fracción XIX párrafo noveno, inciso a, numeral 2, segundo párrafo que señala *«En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades fiscales podrán utilizar servicios o medios tecnológicos que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales, cuya información también podrá ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco geográfico fiscal.»*, la anterior reforma obedeció a la necesidad de actualizar datos físicos mediante el aprovechamiento de las distintas herramientas tecnológicas, para facilitar la ubicación real de los contribuyentes y actualizar los supuestos para implementar acciones en caso de que en una verificación física, la ubicación demuestre ser falsa, lo que daría origen a una responsabilidad para el sujeto obligado, ya que este ejercicio otorga un previo consentimiento de ser ese el lugar del principal asiento de sus negocios, por al considerar dicha herramienta en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato dará certeza de los domicilios de los proveedores.

En el caso de la segunda iniciativa en estudio, la misma tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con el objeto de trasladar los supuestos en que procederá la cancelación del registro en el padrón de proveedores a las disposiciones que prevén las infracciones a dicho ordenamiento legal; establecer que una de las consecuencias de la rescisión contractual será la inhabilitación temporal y no la cancelación en el padrón; incorporar el uso de medios electrónicos para la práctica de notificaciones; y reformar disposiciones relativas a la enajenación de bienes muebles.

Las reformas, adiciones y derogaciones propuestas no generan nuevos procesos o procedimientos que impliquen un impacto presupuestal para los sujetos de la ley, por el contrario, en el caso de la incorporación de la opción de la notificación electrónica permitirá ahorros dado que se obviará el procedimiento que actualmente se realiza de forma personal en los domicilios de los proveedores, implicando traslados y la disposición del personal para atender estas diligencias.

Asimismo, el esquema sancionatorio que se propone permitirá contar con sanciones proporcionales a la conducta que las origina, lo que consideramos es un mecanismo equitativo y no excesivo en la imposición de sanciones a que obliga el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[[174]](#footnote-174), principio que además de considerarse en el ámbito penal, aplica para faltas e ilícitos administrativos y fiscales.

Es de precisar que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público[[175]](#footnote-175)reglamenta a nivel federal los alcances del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al tema de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, con la finalidad de buscar la transparencia de los procesos. En este sentido, en el apartado de sanciones, se busca armonizar la ley a dicho ordenamiento contemplando diversas disposiciones contenidas en el Título Quinto denominado *De las infracciones y Sanciones*, a fin de tener disposiciones homologadas. Asimismo, tendrá alcances a nivel municipal en lo no previsto en esta materia en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato[[176]](#footnote-176), caso en la que aplica de manera supletoria la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Con relación a la regulación de los supuestos de enajenación y baja de muebles, se tiene por objetivo la transparencia de los procesos y dar certeza al precisar los supuestos para llevarlos a cabo, clarificando además el trámite para el patrimonio mobiliario inútil, incosteable u obsoleto y como consecuencia se transparentan las enajenaciones a título gratuito, como un acto que debe ser considerado como excepción a la subasta pública y no a la baja de los bienes.

Asimismo, de la evaluación del impacto presupuestario realizado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas a las iniciativas materia del presente dictamen se desprende que el alcance de las reformas está perfilado al fortalecimiento de los procesos *«en materia de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y de prestación de servicios.»,* advirtiéndose que no genera una afectación presupuestal, pues al contrario, disminuirá gastos vinculados a los actuales procedimientos de verificación de domicilios y mitigar la existencia de proveedores con datos incorrectos o falsos. de la opción de la notificación electrónica, disminuyendo además los gastos vinculados a los actuales procedimientos de notificación.

**IV.** **Modificaciones a la iniciativa**

Derivado de la mesa de trabajo llevada a cabo para el análisis de la iniciativa realizamos las siguientes adecuaciones al decreto contenido en el presente dictamen:

1. En el artículo 36, con la finalidad de abonar a la brevedad y claridad del texto de la fracción VI, realizamos ajustes de forma en su redacción. Asimismo, por técnica legislativa y atendiendo a la estructura actual del artículo incluimos la reforma de la fracción V para omitir la conjunción *«y»*.
2. En el segundo párrafo del artículo 41, se corrigió el reenvío a la fracción V del artículo 40, pues la fracción III prevista en la iniciativa se refiere al supuesto de fallecimiento en el caso de las personas físicas.
3. En el artículo 86, así como en el último párrafo del artículo 130, para mejorar la sintaxis y claridad del texto se hicieron adecuaciones de forma en su redacción.
4. Respecto al artículo 125 también en aras de abonar a la claridad del texto se reestructuró el contenido de la fracción VIII; y por técnica legislativa, atendiendo a la estructura actual del artículo incluimos la reforma de las fracciones VI y VII para ajustar su contenido a la nueva estructura.
5. En el artículo 127 su contenido se reestructuró para que en lugar de integrarse por párrafos se establezcan fracciones, lo cual también incidirá en la claridad del texto de la ley.
6. Se incluyó un artículo segundo transitorio a fin de establecer un término máximo de 90 días hábiles para que los sujetos de la ley armonicen los reglamentos y disposiciones administrativas derivadas de la mismas a las disposiciones del decreto contenido en el presente dictamen.

Es así, que consideramos que las modificaciones propuestas buscan el fortalecimiento de los procesos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, por lo que sus alcances son favorables para la transparencia y adecuado manejo de los recursos públicos vinculados a adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y de prestación de servicios, razón por la cual las consideramos procedentes.

Asimismo, consideramos procedente armonizar el esquema sancionatorio previsto en la ley con la legislación federal, el uso de los medios electrónicos para la notificación de actos administrativos, así como el brindar cohesión a las disposiciones relativas a la enajenación del patrimonio mobiliario.

Finalmente, se destaca que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, respecto a las metas 16.5, 16.6 y 16.10.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 171 y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, quienes integramos la Comisión de Hacienda y Fiscalización, sometemos a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**D e c r e t o**

**Artículo Único.** Se **reforman** los artículos 36, fracción V; 42, fracción III; 84; 85, primer párrafo; 86 primer párrafo y fracciones V y VII; 125, fracciones VI y VII; y 127; se **adicionan** la fracción VI al artículo 36, quedando la actual fracción VI como fracción VII; un segundo párrafo al artículo 41; un artículo 52 Bis; las fracciones VIII y IX al artículo 125; y un segundo párrafo al artículo 130; y se **derogan** las fracciones I y II del artículo 40; la fracción II del artículo 42; y el segundo párrafo del artículo 85 de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, para quedar en los siguientes términos:

«***Requisitos para inscripción…***

**Artículo 36.** Para la inscripción…

**I** a **IV.** ...

**V.** Demostrar su solvencia económica y capacidad para la producción o suministro de bienes muebles y en su caso para el arrendamiento de estos o la prestación de servicios;

**VI.** Proporcionar la georreferenciación del domicilio de la persona solicitante, así como fotografías o cualquier otro medio que permita identificar el interior y exterior del inmueble en que lleve a cabo sus actividades; y

**VII.** Proporcionar la información complementaria que se les solicite, en términos de la presente ley.

***Cancelación de registro***

**Artículo 40.** Se cancelará el…

**I.** Derogada;

**II.** Derogada;

**III a V.** …

***Alegatos y pruebas…***

**Artículo 41.** Previamente a decretar …

El procedimiento para decretar la cancelación del registro sólo será instaurado cuando se actualice el supuesto previsto en el artículo 40, fracción V de esta ley.

***Impedimentos para participar…***

**Artículo 42.** Están impedidos para…

1. …

**II.** **Derogada;**

**III.** Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento para la adjudicación de un contrato;

**IV** a **XIV.** …

***Notificaciones electrónicas***

**Artículo 52 Bis.** Las notificaciones de los actos derivados de la ejecución de los contratos celebrados al amparo de esta ley, así como aquellos que deriven de los procedimientos sancionatorios, rescisorios, y de cancelación y suspensión del Padrón-de Proveedores, podrán realizarse a través de medios electrónicos en armonía con lo señalado en el artículo anterior, con base a lo que al efecto normen los sujetos de esta ley en los correspondientes Reglamentos.

Las notificaciones que se practiquen por esta vía, se desahogarán en días y horas hábiles, y se tendrán por realizadas con el acuse de recibo electrónico que genere el correspondiente sistema electrónico. El acuse de recibo electrónico deberá certificarse y agregarse al expediente, y la certificación hará las veces de notificación.

***Enajenación de bienes muebles***

**Artículo 84.** Corresponde a los comités, en los términos de esta ley, la enajenación a título oneroso o gratuito de los bienes del patrimonio mobiliario.

La enajenación podrá realizarse cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Los bienes ya no sean adecuados para la prestación del servicio o resulte incosteable seguirlos utilizando;
2. Previo dictamen que determine que no es recomendable la rehabilitación de los bienes o sea más costeable su enajenación por el estado en que se encuentren;
3. Se actualice alguna de las hipótesis previstas en las fracciones V y VII del artículo 86 de esta ley.

***Baja de bienes muebles***

**Artículo 85.** Los bienes del patrimonio mobiliario que resulten inútiles, incosteables u obsoletos, deberán ser dados de baja a través del dictamen formulado por la Secretaría u órgano de administración correspondiente.

***Excepciones a la subasta pública***

**Artículo 86.** En los casos que se determine la enajenación de los bienes del patrimonio mobiliario, se procederá a su venta a través de subasta pública, con excepción de que se actualice alguno de los siguientes supuestos:

**I** a **IV.** …

**V.** Cuando el destino de los bienes del patrimonio mobiliario sea su enajenación a título gratuito a favor de particulares en situación de vulnerabilidad o cuando se trate de programas sociales estatales, o a favor de municipios, instituciones educativas, de beneficencia, de la Federación o de otras entidades federativas, mediante acuerdo del sujeto de esta ley que corresponda, observando las demás disposiciones legales que resulten aplicables;

**VI.** Cuando se pacte…

**VII.** Cuando se autorice la venta de bienes del patrimonio mobiliario a los servidores públicos que los tengan bajo su resguardo, considerando su naturaleza, valor comercial o utilidad, así como la responsabilidad que haya tenido el servidor público solicitante en el cuidado de los mismos durante su resguardo, de conformidad con lo que se establezca en los reglamentos de esta ley.

En los supuestos…

***Infracciones***

**Artículo 125.** Son infracciones cometidas…

**I** a **V.** …

**VI.** Omitir presentar las garantías en los términos de ley y contrato;

**VII.** Negarse a reponer las mercancías que no reúnan los requisitos de calidad o a responder por los vicios ocultos de las mismas durante el periodo establecido en el contrato;

**VIII.** Proporcionar información falsa o actuar con dolo o mala fe:

1. En el registro o actualización del padrón de proveedores;
2. En alguna etapa del procedimiento para la adjudicación de un contrato;
3. En la celebración de un contrato;
4. Durante la vigencia de un contrato; o
5. En la presentación o desahogo de algún medio de defensa; y

**IX.** Haber sido sujeto de determinación de rescisión administrativa conforme a lo previsto en el artículo 117 de esta ley.

***Multa e inhabilitación***

**Artículo 127.** Los licitantes, postores o proveedores que cometan las infracciones contenidas en el artículo 125 de esta Ley, serán sancionados conforme a lo siguiente:

1. Las infracciones contenidas en las fracciones I, II, III, V, VI y VII del artículo 125 de esta ley, serán sancionadas con una multa por un importe equivalente de veinte a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria elevada al mes, vigente al momento de la infracción, e inhabilitación temporal para participar en los procedimientos de contratación y celebrar contratos por el periodo de tres meses a cinco años;
2. La infracción contenida en la fracción IV será sancionada con una multa por un importe equivalente de veinte a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria elevada al mes, vigente al momento de la infracción, e inhabilitación temporal para participar en los procedimientos de contratación y celebrar contratos, la cual no será menor de un año ni mayor de dos.

Cuando los licitantes, postores o proveedores, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización diaria elevada al mes, serán sancionados con una multa por un importe equivalente de diez hasta cuarenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización diaria elevada al mes vigente al momento de la infracción, lo anterior, sin demérito de la inhabilitación temporal señalada en el párrafo anterior;

1. La infracción contenida en la fracción VIII será sancionada con una multa por un importe equivalente de veinte a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria elevada al mes, vigente al momento de la infracción, e inhabilitación temporal para participar en los procedimientos de contratación y celebrar contratos, la cual no será menor de tres años y hasta cinco años;
2. La infracción contenida en la fracción IX será sancionada únicamente con inhabilitación temporal, la cual no será menor de tres años y hasta cinco.

Las sanciones que se impongan deberán ser proporcionales al costo de la prestación contratada.

Tratándose de reincidencia se impondrá una multa por un monto de hasta el doble de la impuesta con anterioridad, sin perjuicio de la inhabilitación antes referida.

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refieren las fracciones anteriores, el sancionado no ha pagado la multa que hubiera sido impuesta, la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

***Reglas para la…***

**Artículo 130.** En el procedimiento…

**I** a **IV.** …

En el caso de la infracción prevista en la fracción IX del artículo 125 de esta ley, la sanción de inhabilitación se impondrá en la resolución del procedimiento de rescisión administrativa.»

**T R A N S I T O R I O S**

***Entrada en vigor***

**Artículo Primero.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

***Término para armonizar la reglamentación***

**Artículo Segundo.** Los sujetos de esta ley en un término no mayor de 90 días hábiles deberán armonizar los reglamentos y disposiciones administrativas derivadas de la ley a las disposiciones contenidas en el presente decreto.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO A EFECTO DE QUE SE LE AUTORICE, PREVIA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO, LA ENAJENACIÓN MEDIANTE LA FIGURA DE DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE UN BIEN INMUEBLE EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., PARA DESTINARLO A LA CASA DE LA CULTURA.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado a efecto de que se le autorice, previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación mediante la figura de donación de una fracción de un bien inmueble en favor del municipio de Cortazar, Gto., para destinarlo a la Casa de la Cultura.

Analizada la iniciativa de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracciones IV y V y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

El Gobernador del Estado, mediante iniciativa de decreto de fecha 28 de marzo de 2022, solicitó al Congreso del Estado se le autorice, previa desafectación del dominio público, la enajenación mediante la figura de donación de una fracción de un bien inmueble ubicado en Calzada Ángel León Torres número 601, zona centro, del municipio de Cortazar, Gto., en favor de dicho Municipio, para destinarlo a la Casa de la Cultura*.*

Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 31 de marzo de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicada el 5 de abril del año en curso. En dicha fecha también se acordó llevar a cabo una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado y de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado a fin de que expusieran lo relativo al contenido de la iniciativa.

La propiedad de la fracción del bien inmueble materia de la donación se acredita mediante copia certificada de la escritura pública número 1,686, de fecha 9 de mayo de 1978, levantada bajo la fe del licenciado José Belmonte Moreno, titular de la Notaría Pública número 30, en legal ejercicio en el Partido Judicial de Celaya, Gto., y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 17 de mayo de 1978, mediante la que se formalizaron las diligencias de información Ad-perpetuam a fin de acreditar la propiedad de un bien inmueble, al haber operado la prescripción positiva a favor del Gobierno del Estado.

Se integraron al expediente de la iniciativa, el plano de localización que establece la superficie, medidas y colindancias de la fracción del bien inmueble que se pretende donar; así como los certificados de gravámenes y de historia registral de la misma.

Obra además en el expediente de la iniciativa, copia certificada del oficio número P.M./1092/2021, de fecha 5 de marzo de 2021, mediante el cual el presidente municipal de Cortazar, Gto., solicitó al Gobernador del Estado la donación de la fracción del bien inmueble materia del presente dictamen para el uso de la Casa de la Cultura, señalando que la población de Cortazar, antiguo San José de los Amoles, es un pueblo que guarda una historia muy particular y conserva muchas tradiciones seculares; el cual está en un proceso de desarrollo urbano, económico, cultural y deportivo por lo que la atención a los niños y jóvenes es de suma importancia.

También se integró al expediente, copia certificada del oficio número DGCL.- 022/2022, de fecha 17 de enero de 2022, por el cual el director general de Consejería Legal de la Secretaría de Educación del Estado le informa al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración que dicha Secretaría no tiene inconveniente, en que se acuerde la donación de la fracción del bien inmueble que nos ocupa, con la finalidad de establecer una Casa de la Cultura, la cual beneficiará a la comunidad educativa como a la población en general de la ciudad de Cortazar, Gto.

En la mesa de trabajo celebrada el 13 de junio del año en curso, funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado expusieron a quienes integramos esta Comisión lo referente al contenido de la iniciativa.

En la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, se establece que:

*«Con la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024[[177]](#footnote-177) se busca tener una visión que contemple las nuevas realidades y proponga acciones que den pauta a la recuperación y el desarrollo sostenible de los sectores productivos y de la sociedad en general. Parte de nuestra misión es ser un Gobierno que trabaja para impulsar el desarrollo integral de la población con políticas públicas sostenibles, incluyentes e innovadoras que proyectan el liderazgo de Guanajuato y su gente a nivel nacional e internacional.*

*En tal sentido, se busca generar las condiciones que contribuyan al desarrollo integral del Estado, mediante el fortalecimiento del tejido social y las instituciones; la implementación de políticas públicas innovadoras e incluyentes; el desempeño de excelencia en un marco de transparencia y honestidad para los habitantes del estado; contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo sostenible, en un marco de Estado de Derecho, paz social y corresponsabilidad global. Además, el «Eje Gobierno Humano y Eficaz», está enfocado al actuar del Gobierno Estatal, con el fin de que este sea lo más asertivo y eficiente posible, pero sin olvidar lo más importante, lo que le da realmente su esencia y misión principal, es decir, servir a la ciudadanía con un enfoque eminentemente humano.*

*…*

*Así, en razón de que la solicitud realizada por el municipio de Cortazar, Gto., se inscribe en el marco de los objetivos y metas previstos en los instrumentos de planeación que orientan la actuación de la administración pública estatal, el Ejecutivo del Estado estima pertinente transmitir a favor de dicho municipio, la propiedad de una fracción del inmueble anteriormente enunciado, para destinarla a la Casa de Cultura, para lo cual se requiere la previa desafectación de la fracción del bien inmueble citado con antelación, para que éste ingrese al dominio privado del Estado y se autorice su enajenación por esa Soberanía.*

*Finalmente, si bien la evaluación legislativa no pertenece expresamente al rubro de la técnica legislativa (y más bien a la de ciencia de la legislación), existe una relación sumamente estrecha entre ambos; los resultados arrojados por la evaluación legislativa respecto a los productos donde una norma tiene incidencia directa no sólo en el contenido sustantivo de la legislación -qué se legisla- sino también en la plasmación lingüística de la norma -con qué palabras se legisla-, por ello, atendiendo la previsión del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, relativo a la evaluación ex ante de la norma, a partir de la evaluación del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social, se manifiesta:*

1. ***Impacto jurídico:*** *se traduce en la autorización de ese Congreso para que el Ejecutivo del Estado pueda realizar la donación del inmueble materia de la presente iniciativa, misma que es requerida con fundamento en lo establecido en los artículos 63 fracciones XVI y XVII y 77 fracción XVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como 7, fracción IV, 48, 49 fracción IV y 50 de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado;*
2. ***Impacto administrativo:*** *en razón de los alcances y naturaleza de la Iniciativa que se propone, no se actualizan impactos de orden administrativo;*
3. ***Impacto presupuestario:*** *en razón de los alcances y naturaleza de la Iniciativa que se propone, no se actualizan impactos de orden presupuestario; y*
4. ***Impacto social:*** *con la instalación de la Casa de Cultur, se beneficia a la población de Cortazar, Gto., toda vez que, al apoyar al municipio, a través de la donación de una fracción del bien inmueble, permitirá que éste cuente con la infraestructura adecuada, que le permita llevar a cabo de manera óptima la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.»*

Al respecto, cabe señalar que el artículo 49, fracción IV de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado señala que la donación de los bienes inmuebles de dominio privado del Estado podrá realizarse en favor de los municipios u organismos autónomos por Ley, para que los destinen a la prestación de servicios públicos de su competencia, o bien, en fines educativos o de asistencia social.

En atención a los argumentos antes señalados, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión determinamos procedente autorizar la donación que se solicita, considerando que se cumplen los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. De igual manera, debemos señalar que con la donación que se propone se apoyará al municipio de Cortazar, Gto., para la prestación de los servicios públicos a su cargo, de manera específica el de casas de la cultura.

Por otra parte, es preciso señalar que la fracción del bien inmueble que se pretende donar pertenece al dominio público del Estado, de conformidad con lo establecido por los artículos 13, 14, fracción II y 19, fracción II de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado, en virtud de lo cual, para estar en posibilidad de transmitir la propiedad de la misma, se requiere previamente decretar su desafectación.

Para garantizar que se cumplan las condiciones de la donación, se establece que si el municipio de Cortazar, Gto., le diera un uso o destino distinto al autorizado en el decreto operaría la reversión de la fracción del bien inmueble.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide en el objetivo 4, denominado Educación de Calidad, respecto a la meta 4.7, referido a la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Lo anterior, en atención a que el bien inmueble que se pretende donar se destinará a la prestación del servicio público correspondiente a la Casa de la Cultura.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracciones XVI y XVII de la Constitución Política Local, 7 fracciones II, IV y V y 49, fracción IV de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado, así como 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea la aprobación del siguiente proyecto de:

**D e c r e t o**

***Desafectación del dominio público del Estado***

**Artículo Primero.** Se desafecta del dominio público del Estado una fracción del bien inmueble ubicado en Calzada Ángel León Torres número 601, zona centro del municipio de Cortazar, Gto., la cual cuenta con una superficie de 3,349.02 m² tres mil trescientos cuarenta y nueve punto cero dos metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias, conforme a plano topográfico: Al norte, en línea quebrada de cinco tramos, el primero de 3.01 tres punto cero un metros, el segundo de 2.99 dos punto noventa y nueve metros, el tercero de 2.90 dos punto noventa metros, el cuarto de 34.25 treinta y cuatro punto veinticinco metros y el quinto de 3.13 tres punto trece metros con calle Rosales; al sur, en 45.10 cuarenta y cinco punto diez metros con Gobierno del Estado; al oriente, en trece tramos, tres tramos en línea quebrada de 8.98 ocho punto noventa y ocho metros, 9.64 nueve punto sesenta y cuatro metros y 2.27 dos punto veintisiete metros; tres tramos en línea curva de 3.25 tres punto veinticinco metros, 3.01 tres punto cero un metros y 4.92 cuatro punto noventa y dos metros; y siete tramos en línea quebrada de 0.80 cero punto ochenta metros, 7.21 siete punto veintiún metros, 3.08 tres punto cero ocho metros, 11.76 once punto setenta y seis metros, 6.96 seis punto noventa y seis metros, 11.38 once punto treinta y ocho metros y 3.98 tres punto noventa y ocho metros con Gobierno del Estado; y al poniente, en línea quebrada de nueve tramos, el primero de 15.33 quince punto treinta y tres metros, el segundo de 2.73 dos punto setenta y tres metros, el tercero de 6.38 seis punto treinta y ocho metros, el cuarto de 14.22 catorce punto veintidós metros, el quinto de 8.01 ocho punto cero un metros, el sexto de 9.98 nueve punto noventa y ocho metros, el séptimo de 3.19 tres punto diecinueve metros, el octavo de 2.87 dos punto ochenta y siete metros y el noveno de 3.25 tres punto veinticinco metros con Calzada Ángel León Torres.

***Autorización para la enajenación***

**Artículo Segundo.** Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a enajenar la fracción del bien inmueble descrita en el artículo anterior, mediante la figura de donación al municipio de Cortazar, Gto., para que este la destine a la Casa de la Cultura.

***Reversión***

**Artículo Tercero.** La fracción del bien inmueble donada revertirá al patrimonio del Estado, con todas las accesiones y edificaciones que en la misma se encuentren o se construyan, si el donatario le diere un uso o destino distinto al señalado en el artículo anterior; haciendo la notificación correspondiente al Congreso del Estado que se realizó la reversión.

En caso de ejercer la reversión de la fracción del bien inmueble, quedaría sin efecto la desafectación prevista en el artículo primero del presente Decreto.

***Información al Congreso del Estado***

**Artículo Cuarto.** El titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, deberá informar al Congreso del Estado sobre la donación que se autoriza mediante el presente Decreto, en un término de treinta días hábiles siguientes a su celebración y una vez realizada la inscripción correspondiente en el Registro Público de la Propiedad, independientemente de la información que deberá integrarse a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado.

***Baja del padrón***

**Artículo Quinto.** Una vez realizada la donación procédase a dar de baja la fracción del bien inmueble materia de la misma, del Padrón de la Propiedad Inmobiliaria Estatal y de alta en el padrón inmobiliario del municipio de Cortazar, Gto.

**T r a n s i t o r i o**

***Inicio de vigencia***

**Artículo Único.** El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO A EFECTO DE QUE SE LE AUTORICE PREVIA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO LA ENAJENACIÓN DE TRES BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL EN FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA *TOYOTA MOTOR MANUFACTURING DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V*.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnada para efectos de su estudio y dictamen, la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado, a efecto de que se le autorice, previa desafectación del dominio público del Estado la enajenación de tres bienes inmuebles de propiedad estatal en favor de la persona moral denominada *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.*

Analizada la iniciativa de referencia, con fundamento en los artículos 75, 89, fracción V, 112, fracciones IV y V y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

El Gobernador del Estado, mediante iniciativa de decreto de fecha 28 de marzo de 2022, solicitó al Congreso del Estado se le autorice, previa desafectación del dominio público, la enajenación de tres bienes inmuebles de propiedad estatal ubicados en el Ejido Caleras de Ameche del municipio de Apaseo el Grande, Gto., en favor de la persona moral denominada *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.*

Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 31 de marzo de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicada el 5 de abril del año en curso. En dicha fecha también se acordó llevar a cabo una mesa de trabajo con funcionarios de las Secretarías de Finanzas, Inversión y Administración y de Desarrollo Económico Sustentable, así como de la Coordinación General Jurídica a fin de que expusieran lo relativo al contenido de la iniciativa.

La propiedad de los bienes inmuebles materia de la enajenación se acredita mediante los siguientes instrumentos que se anexaron a la iniciativa:

1. Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número 14,750, de fecha 16 de octubre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado Marcelo Gay Guerra, titular de la Notaría Pública número 85, en legal ejercicio en el Partido Judicial de León, Gto., y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 27 de mayo de 2020, bajo el folio real R5\*56570, por la que se formalizó el contrato de compraventa de la fracción de la parcela identificada como 23 Z 1 P 1/2, ubicada en el Ejido Caleras de Ameche del municipio de Apaseo el Grande, Gto., en favor del estado de Guanajuato, con una superficie de 16,112.88 m².
2. Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número 1,911, de fecha 22 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del licenciado José Carlos Guerra Aguilera, titular de la Notaría Pública número 12, en legal ejercicio en el Partido Judicial de Celaya, Gto., y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 25 de febrero de 2020, bajo el folio real R5\*58615, por la que se formalizó el contrato de compraventa de la fracción de la parcela identificada como 29 Z 1 P 1/2, ubicada en el Ejido Caleras de Ameche del municipio de Apaseo el Grande, Gto., en favor del estado de Guanajuato, con una superficie de 15,355.59 m².
3. Declaratoria de expropiación por causa de utilidad pública emitida por el titular del Ejecutivo del Estado el 29 de noviembre de 2018, dentro del expediente SOP-07/18, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 19 de febrero de 2019, bajo el folio real R5\*54283 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 157, segunda parte, de fecha 7 de agosto de 2019, mediante la cual se afectó una fracción de terreno con una superficie de 33,171.112 m² que forma parte de un predio de mayor extensión, identificado como parcela número 35 Z 1 P ½, respecto del cual se adquirió el dominio pleno, ubicado en el Ejido Caleras de Ameche del municipio de Apaseo el Grande, Gto., con la finalidad de destinarla al proyecto denominado *«Acceso Ferroviario al Parque Automotriz, en Apaseo el Grande, Guanajuato»,* que tiene como principal objetivo dar mayor movilidad en la región impulsando la economía basada en la conectividad regional, fortaleciendo la infraestructura para brindar mayor dinamismo al desarrollo económico y logístico del Estado.

De acuerdo a la información que se integró al expediente, la persona moral denominada *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.,* se encuentra legalmente constituida a través de la escritura pública número 70,534, de fecha 18 de noviembre de 2015, otorgada bajo la fe del licenciado Erik Namur Campesino, titular de la Notaría Pública número 94 del Partido Judicial del Distrito Federal, debidamente inscrita en el Registro Público Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil electrónico número 547275.

De igual forma, se integró al expediente de la iniciativa copia del convenio de apoyos complementarios y transmisión de tierra celebrado el 30 de noviembre de 2015, por el Gobierno del Estado de Guanajuato y Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V., contando con la participación en calidad de testigo de la persona moral denominada Toyota Motors de México S. de R.L. de C.V., el cual tuvo por objeto: Establecer las bases y mecanismos mediante los cuales el Gobierno del Estado transmitiría a la empresa *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.,* la propiedad del polígono de 607 hectáreas, para ser destinado a la implementación, desarrollo y ejecución del proyecto de un complejo de manufactura de vehículos en la entidad; definir las bases bajo las cuales la empresa recibiría los incentivos pagados por el Gobierno Federal y complementariamente los apoyos estatales; y la realización de las acciones tendientes a la generación de infraestructura que permitiera la adecuada operación del proyecto, conforme a los calendarios que las partes estipulasen.

En la Cláusula Tercera se pactó por las partes que el Gobierno del Estado se comprometió a transferir a la empresa la totalidad del polígono a cambio de una contraprestación total de un dólar americano por metro cuadrado, como contraprestación; y que, la diferencia que resultase entre el valor de adquisición del Gobierno y el valor de la contraprestación referida, constituiría un incentivo otorgado a la empresa.

De igual forma, en el numeral IV del capítulo de Declaraciones de este instrumento consensual, se estableció que:

*«El Gobierno Federal no es parte de ese convenio ni de la carta de intención, pero existen compromisos de apoyo asumidos por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía, Proméexico y otras secretarías y dependencias de estado, los cuales* ***constituyen condiciones esenciales para el desarrollo e implementación del proyecto».***

En el Anexo A de dicho convenio identificado como «Incentivos Federales e Incentivos Estatales», se hizo mención a II. Apoyo a la Infraestructura (pagado por el Gobierno Federal), consistente en: vías de acceso, puentes (Pasos elevados), infraestructura ferroviaria, líneas eléctricas, proyecto ejecutivo, estudios técnicos, permisos y derechos de paso.

También se anexó a la iniciativa copia de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 186, tercera parte, de fecha 20 de noviembre de 2015 del Decreto número 9 expedido por la Sexagésima Tercera Legislatura, mediante el cual se desafectaron del dominio público del Estado los bienes inmuebles adquiridos y los que se adquirieran para la constitución de una reserva territorial de aproximadamente 607-00-00 seiscientas siete hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Gto., autorizando en lo general al titular del Poder Ejecutivo del Estado para realizar los actos necesarios para su enajenación, para destinarlos a la conformación de un polo de desarrollo industrial en el citado Municipio por el que se fortalezca el clúster automotriz del Estado y se fomente el desarrollo integral de la región Laja–Bajío, a fin de generar mejores condiciones de vida para los guanajuatenses.

Además, obra en el expediente copia del oficio número DGRMSGC/DCP/5316/2020, de fecha 16 de diciembre de 2020, mediante el cual el Director de Control Patrimonial de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración le informó al Director General de Infraestructura Industrial de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable que la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, solicitó gestionar la autorización del titular del Poder Ejecutivo del Estado, para llevar a cabo los trámites correspondientes de desafectación y autorización del Congreso del Estado, con el objeto de transmitir a favor de *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.,* tres inmuebles de propiedad estatal que conforman el polígono denominado «*Espuela Ferroviaria»*, en seguimiento a los acuerdos establecidos en el convenio de cesión parcial de derechos posesorios, celebrado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, con la referida sociedad mercantil el 27 de mayo de 2019, en el que se consignó que para el desarrollo del proyecto, era necesaria la instrumentación de infraestructura ferroviaria, habiéndose determinado un polígono con una superficie de alrededor de 7.8 hectáreas conformado por cinco predios; concluyendo que con los elementos con los que se cuenta no es posible determinar que el polígono para la «*Espuela Ferroviaria»*, forme parte del referido Decreto número 9, por lo que solicitó se informe si es posible identificar si la solicitud formulada por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, forma parte del referido Decreto, y tener la certeza de que la superficie sobre la que versa la petición ya se encuentra desafectada y con autorización de enajenación.

En este orden de ideas, mediante oficios DGII 119/2020 y DGII 002/2021, de fechas 18 de diciembre de 2020 y 15 de enero de 2021, respectivamente, el Director General de Infraestructura Industrial de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable informó al Director de Control Patrimonial de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración que dicha Secretaría está en la mejor disposición de participar en mesas interinstitucionales a efecto de analizar de manera integral el tema materia de la consulta; remitiéndole copia certificada del oficio suscrito por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en el que informó al Congreso del Estado haber adquirido la totalidad del polígono destinado para la consolidación de la reserva territorial, donde se erigirá el complejo industrial para la instalación de la empresa *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato S.A. de C.V.,* dando cumplimiento al Decreto número 9 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato fecha 20 de noviembre de 2015, tercera parte.

Se integraron al expediente de la iniciativa, los planos de localización que establecen la superficie, medidas y colindancias de los bienes inmuebles materia de la enajenación; así como los certificados de gravámenes y de historia registral de los mismos.

Posteriormente, mediante oficio número CGJ/DALR-2142/2022, de fecha 3 de mayo de 2022, la Coordinadora General Jurídica de Gobierno del Estado remitió los avalúos inmobiliarios de fecha 26 de abril de 2022, elaborados por la Dirección de Catastro adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado para determinar el valor comercial de las parcelas números 35 Z-1 P1/2, 23 Z- 1 P1/2 y 29 Z- 1 P1/2 del Ejido Caleras de Ameche.

En la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, se establece que:

*Con la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024[[178]](#footnote-178) se busca tener una visión que contemple las nuevas realidades y proponga acciones que den pauta a la recuperación y el desarrollo sostenible de los sectores productivos y de la sociedad en general. Parte de nuestra misión es ser un Gobierno que trabaja para impulsar el desarrollo integral de la población con políticas públicas sostenibles, incluyentes e innovadoras que proyectan el liderazgo de Guanajuato y su gente a nivel nacional e internacional.*

*En tal sentido, el «Eje Economía para todos» prevé como línea estratégica el impulso a la reactivación de la economía para generar más y mejores oportunidades de empleo e ingreso para la población y entre su principales objetivos se encuentran el 4.1 «Fortalecer la generación de empleo en el estado de Guanajuato a través de la atracción de inversiones, la formación y desarrollo del capital humano», 4.2 «Fortalecer la creación, desarrollo, permanencia e internacionalización de las unidades económicas en la entidad» y 4.6 «Fortalecer la infraestructura logística e industrial para la competitividad del estado».*

*Aunado a lo anterior, el Estado enfrenta actualmente grandes retos, entre ellos, la alta concentración o dependencia de las exportaciones en el sector automotriz, generadas por las empresas armadoras ubicadas en esta entidad federativa. En este sentido, el progreso tecnológico, de infraestructura, de comunicaciones y del capital humano, entre otros, permiten que países en desarrollo sean capaces de manufacturar los productos con las calidades requeridas y a costos competitivos, conforme a lo cual Guanajuato se sitúa con el cuarenta y ocho por ciento de las exportaciones que se realizan por ferrocarril, así como con el trece por ciento respecto de las importaciones que se efectúan por el mismo medio.*

*Como resultado de las acciones del gobierno estatal, mediante Decreto número 9, publicado en el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 186, Tercera Parte, de fecha 20 de noviembre de 2015, se autorizó la desafectación del dominio público del Estado, de los bienes inmuebles adquiridos y los que se adquieran para la constitución de una reserva territorial de aproximadamente 607-00-00 seiscientas siete hectáreas, ubicadas en el municipio de Apaseo el Grande, Gto., y se facultó al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se realizaran los actos necesarios para su enajenación, a efecto de que se destinen a la conformación de un polo de desarrollo industrial por el que se fortalezca el clúster automotriz del Estado y se fomente el desarrollo integral de la región Laja-Bajío, siendo que derivado de lo anterior, se enajenaron diversos bienes a favor de la empresa denominada Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato S.A. de C.V.*

*En razón de lo anterior, y toda vez que para el desarrollo del proyecto citado en el párrafo que antecede, es necesaria la instrumentación de la infraestructura ferroviaria, se determinó un polígono con una superficie aproximada de 7.80 siete punto ochenta hectáreas, conformado por cinco predios, ubicados en el municipio de Apaseo el Grande, Gto., esto mediante convenio de cesión parcial de derechos posesorios, de fecha 27 de mayo de 2019, celebrado entre el Gobierno del Estado de Guanajuato y la supracitada sociedad, a fin de transmitir la posesión, y posteriormente la propiedad del polígono «Espuela Ferroviaria».*

*Actualmente, se ha consolidado la propiedad a favor del estado de Guanajuato, de tres inmuebles localizados en el municipio de Apaseo el Grande, Gto., y comprendidos en el polígono aludido, los cuales se detallan a continuación:*

*…*

*Así, y en razón de que se han celebrado los instrumentos bajo los cuales se establecen los términos y condiciones por las que el Gobierno del Estado de Guanajuato transmitirá a la empresa la propiedad de los aludidos inmuebles a fin de que sean destinados a la implementación, desarrollo y ejecución del complejo de manufactura de vehículos, lo cual se inscribe en el marco de los objetivos y metas previstos en los instrumentos de planeación que orientan la actuación de la administración pública estatal, es que el Ejecutivo del Estado a mi cargo, estima pertinente transmitir a favor de dicha sociedad mercantil, la propiedad de los inmuebles anteriormente enunciados, con base en los plazos y condiciones acordadas con la empresa armadora, para que estos ingresen al dominio privado del Estado y se autorice su enajenación por esa Soberanía.*

*Finalmente, si bien la evaluación legislativa no pertenece expresamente al rubro de la técnica legislativa (y más bien a la de ciencia de la legislación), existe una relación sumamente estrecha entre ambos; los resultados arrojados por la evaluación legislativa respecto a los productos donde una norma tiene incidencia directa no sólo en el contenido sustantivo de la legislación -qué se legisla- sino también en la plasmación lingüística de la norma -con qué palabras se legisla-, por ello, atendiendo la previsión del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, relativo a la evaluación ex ante de la norma, a partir de la evaluación del impacto jurídico, administrativo, presupuestario y social, se manifiesta:*

1. *Impacto jurídico: se traduce en la autorización de ese Congreso para que el Ejecutivo del Estado realice los actos necesarios para la enajenación de los bienes inmuebles materia de la presente iniciativa, misma que es requerida con fundamento en lo establecido en los artículos 63 fracciones XVI y XVII, 77 fracción XVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como 7 fracciones 11 y IV, 48, 49 fracción III y 55 de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado;*
2. *Impacto administrativo: en razón de los alcances y naturaleza de la Iniciativa que se propone, no se actualizan impactos de orden administrativo;*
3. *Impacto presupuestario: la presente iniciativa no implica un incremento del gasto presupuestal, ya que los recursos financieros, materiales y humanos con los que cuenta la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, son suficientes para realizar la enajenación cuya autorización se solicita; y*
4. *Impacto social: con la instrumentación de la infraestructura ferroviaria se contribuye a la reactivación de la economía con la consecuente generación de mejoras en las condiciones sociales, económicas y de desarrollo de la población guanajuatense.*

En la mesa de trabajo celebrada el 13 de junio del año en curso, funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado expusieron a quienes integramos esta Comisión lo referente al contenido de la iniciativa.

En tal sentido, se informó que el mayor porcentaje de producción de la planta ensambladora Toyota que se ubica en el municipio de Apaseo el Grande, Gto., es para exportación, para lo cual, actualmente la operación logística se lleva a cabo por medio de Kansas City Southern México.

En su momento, la empresa *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.,* se comprometió a realizar una inversión de al menos 947.8 millones de dólares americanos y a la creación de 2,000 empleos directos, en un período de 5 años; contando actualmente con una inversión acumulada a finales de 2021 de aproximadamente 856 millones de dólares americanos (cerca del 90% de lo pactado con Gobierno del Estado); generando 2,176 empleos directos y a través de sus proveedores otros 2,719 empleos, llegando a un total de 4,895. El 80% de los empleados provienen de Celaya, el 10% de las comunidades aledañas al complejo productivo y el 10% restante de la zona conurbada de Querétaro.

Por otra parte, se informó que la empresa también ha realizado diversas actividades de responsabilidad social como las siguientes: Limpieza anual del Río Apaseo, beneficiando a la comunidad de Caleras de Ameche; una planta de tratamiento de agua en la comunidad «El Castillo»; mejoras en la infraestructura de algunas escuelas y jardines de niños de la zona; reforestación de 20,891 árboles y plantas endémicas en diferentes comunidades, del municipio de Apaseo el Grande; apoyo a la Secretaría de Salud, Jurisdicción III durante las jornadas de vacunación con la renta de espacios para que la población pudiera vacunarse contra el COVID-19 (Centro de Negocios Celaya); donaciones de material -caretas, mascarillas, gel antibacterial y material de limpieza a escuelas, DIF municipales (Celaya/Apaseo el Grande y Protección Civil; pláticas a sus asociados en el CECYTEG Apaseo el Grande para un regreso seguro al trabajo; donaciones de juguetes para el día del niño en AMANC Guanajuato y DIF Apaseo el Grande); donaciones de alimentos y pañales para el Asilo de Ancianos A.C. de Celaya, Gto.; donaciones y mejoras durante el 2021 fueron por más de $5’000,000.00; proyecto de construcción de un albergue para los familiares de los niños que reciben tratamiento de cáncer con la asociación AMANC Guanajuato, para lo cual realizó un torneo de Golf entre los socios, logrando recaudar $3.9 millones de pesos; trabajo en conjunto con la Secretaría de Educación para ser parte del programa «Territorios de Aprendizaje», en el cual se tiene contemplado recibir al primer grupo durante el segundo semestre de 2022; y jornadas de salud.

Asimismo, se ha recaudado una importante suma de recursos por parte del Estado, por concepto de impuestos y derechos a cargo de la empresa *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.* y de algunos de sus proveedores.

Cabe apuntar que en el mes de febrero de 2017, se informó al Gobierno del Estado que el Gobierno Federal no estaba en posibilidad de cumplir los compromisos asumidos con la persona moral denominada *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A., de C.V.,* relacionados con la infraestructura ferroviaria y el suministro eléctrico, por lo cual los directivos de dicha empresa solicitaron el apoyo al Gobierno del Estado para que se realizara la liberación del derecho de vía donde más tarde se desarrollaría el proyecto de Espuela Ferroviaria. En razón de lo cual y considerando los beneficios generados por la citada empresa, el Gobierno del Estado atendió los compromisos asumidos por el Gobierno Federal que no estuvieron en posibilidad de cumplir. Es así que el 27 de mayo de 2019 se firmó el convenio de cesión parcial de derechos posesorios entre la empresa y el Gobierno del Estado, con el objeto de precisar los términos y condiciones estipulados previamente en el Convenio de Apoyos para establecer las bases y mecanismos mediante los cuales el Gobierno del Estado transmitirá a la empresa a la firma del convenio, la posesión del Polígono Espuela Ferroviaria; y posteriormente, la propiedad del Polígono Espuela Ferroviaria, en la medida en la que el Gobierno del Estado perfeccionara la adquisición de la propiedad de los predios que conforman el mismo, se destinara a la implementación, desarrollo y ejecución del proyecto ferroviario, siempre y cuando se solicitara la autorización correspondiente al Congreso del Estado.

En la cláusula primera, segundo párrafo del citado convenio, se estableció lo siguiente:

*«Sin perjuicio a lo anterior, salvo que se establezca lo contrario en el presente convenio, “LAS PARTES” acuerdan que la transmisión de la POSESIÓN y la PROPIEDAD a la “EMPRESA” del Polígono Espuela Ferroviaria y el desarrollo del Proyecto Ferroviario se sujetarán a lo establecido en el* ***Convenio de Apoyos****, y a la culminación de los procesos correspondientes en términos de la normatividad aplicable».*

En este orden de ideas, en primer término es necesario referir que, por enajenación, en términos jurídicos, se entiende la *«transmisión legalmente autorizada de una cosa o derecho, de la persona que tiene su propiedad a otra que la adquiere en virtud de este acto»*[[179]](#footnote-179).

Doctrinalmente, una enajenación a título oneroso lo es cuando las partes contratantes estipulan provechos y gravámenes recíprocos y una enajenación a título gratuito lo es cuando el provecho es solamente para una de las partes contratantes. Desde un punto de vista económico, en todo contrato oneroso debe haber reciprocidad de beneficios, de tal suerte que el patrimonio de cada contratante permanece fundamentalmente idéntico, ya que al mismo tiempo que sufre una disminución por la carga o gravamen que reporte en beneficio de la otra parte, recibe simultáneamente un provecho como prestación correlativa y, por lo tanto, se mantiene un cierto equilibrio patrimonial. En cambio, en los contratos gratuitos, solo una de las partes se beneficia a costa de la otra, quien necesariamente sufre la disminución patrimonial consiguiente[[180]](#footnote-180).

En tal sentido, el artículo 1324 del Código Civil para el Estado de Guanajuato señala:

***Art. 1324.*** *Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos; y gratuito aquél en que el provecho es solamente de una de las partes.*

Al respecto, cabe señalar que el artículo 49, fracción III de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado señala que la enajenación de los bienes inmuebles del dominio privado del Estado se podrá realizar bajo el acto jurídico de venta, cuando el producto de la misma represente un incremento al patrimonio del Estado o, en su caso, se realice en favor de personas físicas o morales que requieran disponer de dichos inmuebles para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad.

Una vez realizado el análisis de la documentación integrada al expediente de la iniciativa y atendiendo a los argumentos expuestos en la mesa de trabajo, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión determinamos procedente autorizar la enajenación que se solicita, considerando que se cumplen los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

Como podemos desprender de lo antes señalado, la enajenación materia del presente dictamen tiene por objeto el desarrollo de infraestructura ferroviaria para la operación de la empresa *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V., Para tal efecto dicha* empresa tendrá que pagar un dólar por metro cuadrado al Estado, por la totalidad de las 6-46-39.580 hectáreas del terreno donde va montada su espuela ferroviaria, y que actualmente son propiedad del Estado.

Si bien la iniciativa no precisa si la enajenación será a título oneroso o bien, gratuito, el carácter de aquella se desprende del expediente integrado a la misma. Es así, que, en la Cláusula Tercera inciso a del Convenio de Apoyos Complementarios y Transmisión de Tierra celebrado el 30 de noviembre de 2015 se estipuló que el Gobierno del Estado se comprometió a transferir a la empresa *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.,* la totalidad del polígono de alrededor de 607 hectáreas ubicado en el municipio de Apaseo el Grande, Gto., a cambio de una contraprestación total de un dólar americano por metro cuadrado (la contraprestación) y que la diferencia que resulte entre el valor de adquisición del Gobierno del Estado y el valor de la contraprestación referida constituye un incentivo otorgado a la empresa, conforme a la autorización otorgada por la Comisión para la Atracción de Inversiones del Estado de Guanajuato. Razón por la cual la autorización de este Poder Legislativo es para la realización de la enajenación de los bienes inmuebles que se solicita a título oneroso, al existir reciprocidad de provechos y gravámenes entre las partes.

Esta enajenación de tipo onerosa será a título de compraventa pues, de acuerdo con el artículo 1741 del Código Civil para el Estado de Guanajuato[[181]](#footnote-181), la compraventa «…*es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho obligándose ésta última a pagarle por ella un precio cierto y en dinero*».

De acuerdo a los avalúos que se integraron al expediente y considerando el valor de adquisición previsto en la Cláusula Tercera inciso a del Convenio de Apoyos Complementarios y Transmisión de Tierra, no existiría una correspondencia entre el valor comercial de los bienes inmuebles propiedad del Estado con el precio previamente pactado para su venta con la empresa *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.,* por lo tanto, no operaría el primer supuesto previsto en la fracción III del artículo 49 de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado que alude a la procedencia de la compraventa cuando el producto de la misma represente un incremento al patrimonio del Estado.

No obstante, en el caso que nos ocupa sería aplicable el segundo supuesto consistente en la factibilidad de realizar la venta en favor de personas físicas o morales que requieran disponer de dichos inmuebles para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad, independientemente de que el producto de la misma represente un incremento al patrimonio del Estado.

Como ya se apuntó previamente, la enajenación solicitada tiene por objeto la construcción de una obra de infraestructura ferroviaria (espuela ferroviaria) necesaria para las operaciones de la empresa *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.* Esta obra formaba parte de los apoyos ofrecidos por el Gobierno Federal para la atracción de esta empresa a nuestro Estado, pero al no otorgarse dichos apoyos, el Gobierno del Estado asumió este compromiso, con la finalidad de que la empresa continuara con su intención de ubicar su planta ensambladora en la Entidad. De lo contrario, en términos de las Cláusulas Sexta[[182]](#footnote-182) y Novena[[183]](#footnote-183) del Convenio de Apoyos Complementarios y Transmisión de Tierra, el incumplimiento del compromiso del Gobierno Federal motivaría la terminación del referido convenio.

Asimismo, consideramos que la referida empresa representa un beneficio a la población de los municipios circundantes a través de la generación de fuentes de empleo directas e indirectas a través de sus proveedores. Aunado a los ingresos que por concepto de contribuciones genera para el Estado, que se destinan a obras y acciones en beneficio de la ciudadanía y a las diversas actividades de responsabilidad social que realiza la persona moral.

Por otra parte, es preciso señalar que el bien inmueble que se pretende enajenar pertenece al dominio público del Estado, de conformidad con lo establecido por los artículos 14, fracción V de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado, en virtud de lo cual, para estar en posibilidad de transmitir la propiedad del mismo, se requiere previamente decretar su desafectación.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide en los Objetivos 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico y 9 Industria, Innovación e Infraestructura. Lo anterior, en atención a que los bienes inmuebles materia de la enajenación se destinarán a una empresa cuya operación beneficia a la colectividad a través de la generación de fuentes de empleos.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracciones XVI y XVII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 7 fracciones II, IV y V y 49, fracción III de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado, así como 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea la aprobación del siguiente proyecto de:

**D e c r e t o**

***Desafectación del dominio público del Estado***

**Artículo Primero.** Se desafectan del dominio público del Estado tres bienes inmuebles ubicados en el municipio de Apaseo el Grande, Gto., los cuales cuentan con las siguientes superficies, medidas y colindancias:

1. Fracción de la parcela número 35 Z-1 P1-/2 del Ejido Caleras de Ameche, la que conforme a plano topográfico cuenta con una superficie de 33,171.11 m² treinta y tres mil ciento setenta y uno punto once metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: Al este, en 58.80 cincuenta y ocho punto ochenta metros con regadera; al sureste, en línea quebrada de dos tramos de suroeste a noreste, el primero de 165.58 ciento sesenta y cinco punto cincuenta y ocho metros y el segundo de 450.80 cuatrocientos cincuenta punto ochenta metros con el resto del predio; al noroeste, en línea quebrada de dos tramos de suroeste a noreste, el primero de 50.68 cincuenta punto sesenta y ocho metros y el segundo de 592.88 quinientos noventa y dos punto ochenta y ocho metros con brecha;
2. Parcela número 23 Z-1 P1-/2 del Ejido Caleras de Ameche, la cual conforme a plano topográfico cuenta con una superficie de 16,112.88 m² dieciséis mil ciento doce punto ochenta y ocho metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al este, en 63.82 sesenta y tres punto ochenta y dos metros con brecha; al oeste, en 62.22 sesenta y dos punto veintidós metros con brecha; al noroeste, en 266.65 doscientos sesenta y seis punto sesenta y cinco metros con brecha; y al sureste, en 264.14 doscientos sesenta y cuatro punto catorce metros con resto de la propiedad; y
3. Parcela número 29 Z-1 P1/2 del Ejido Caleras de Ameche, la cual conforme a plano topográfico cuenta con una superficie de 15,355.59 m² quince mil trescientos cincuenta y cinco punto cincuenta y nueve metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias: al este, en 59.71 cincuenta y nueve punto setenta y un metros con brecha; al oeste, en 58.06 cincuenta y ocho punto cero seis metros con regadera; al noroeste, en 270.53 doscientos setenta punto cincuenta y tres metros con brecha; y al sureste, en 268.87 doscientos sesenta y ocho punto ochenta y siete metros con resto de la propiedad.

***Autorización para la enajenación de los bienes inmuebles***

**Artículo Segundo.** Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado a enajenar a título oneroso los bienes inmuebles descritos en el artículo primero del presente Decreto, en favor de la persona moral denominada «*Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.»*

***Condiciones de la compra-venta***

**Artículo Tercero.** El precio que se fije para la compra-venta de los bienes inmuebles descritos en el artículo primero del presente Decreto, será determinado conforme a lo estipulado en la Cláusula Tercera inciso a del Convenio de Apoyos Complementarios y Transmisión de Tierra celebrado el 30 de noviembre de 2015, por el Gobierno del Estado de Guanajuato con la empresa *Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V*.

***Plazo para ejercer la autorización***

**Artículo Cuarto.** La presente autorización deberá ser ejercida en un plazo máximo de veinticuatro meses, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de lo contrario quedará sin efecto.

***Información al Congreso del Estado***

**Artículo Quinto.** El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, deberá informar al Congreso del Estado sobre la enajenación que se autoriza mediante el presente Decreto, en un término de treinta días hábiles siguientes a su celebración y una vez realizada la inscripción correspondiente en el Registro Público de la Propiedad, independientemente de la información que deberá integrarse a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado.

***Baja del padrón***

**Artículo Sexto.** Una vez realizada la enajenación, procédase a dar de baja los bienes inmuebles materia de la misma, del Padrón de la Propiedad Inmobiliaria Estatal.

**T r a n s i t o r i o**

***Inicio de vigencia***

**Artículo Único.** El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

*Voto en contra*

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN FORMULADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal establece la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones federales, en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Dicho artículo también señala que cuando las entidades de fiscalización de los poderes legislativos locales detecten que los recursos de los fondos de aportaciones no se han destinado a los fines establecidos en dicha Ley, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de nuestro Ordenamiento Constitucional Local establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

El artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece como atribución del Auditor Superior, rendir al Congreso, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente del aspecto que la propia Ley señala y por el cual podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

De conformidad con los artículos 66, fracción IV de la Constitución Política Local y 82, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de dicha Constitución.

Asimismo, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. En dicho Programa se contempló la práctica de una auditoría a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.

La auditoría practicada conforme a lo expresado en los párrafos anteriores concluyó con la elaboración del informe de resultados que se remitió al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 24 de marzo de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicado en la misma fecha.

**III. Procedimiento de Auditoría:**

La auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la auditoría también se encuentra el de verificar que los recursos se registraron, administraron, ejercieron, y destinaron, de conformidad con la normativa aplicable, y verificar que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad a las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan; comprendiendo además la revisión legal, financiera, técnica, administrativa y contable de las obras, abarcando todas su etapas tales como: planeación, presupuestación, programación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, control, liquidación y entrega-recepción.

Por otra parte, la auditoría se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la auditoría también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

De igual forma, en la auditoría se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de los procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programáticos, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la auditoría. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material, considerando el control interno, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 18 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., la orden de inicio del procedimiento de auditoría.

Posteriormente, en fechas 13 y 14 de enero de 2022, se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por dicha administración municipal, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta el 2 de febrero de 2022 por parte del presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.

El 9 de febrero de 2022, el informe de resultados se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 16 de febrero de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la auditoría practicada a la infraestructura pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, siendo admitido dicho recurso, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior el 8 de marzo de 2022 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, misma que se notificó al presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., el 14 de marzo de 2022.

.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la auditoría; el alcance de la auditoría respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la auditoría se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del sujeto fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos», emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales y/o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales y/o contractuales con el sujeto fiscalizado.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la administración pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados con observaciones y recomendaciones contenidos en el informe de resultados. También se precisa que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 14 observaciones, mismas que no fueron solventadas.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de las observaciones plasmadas en los numerales 007, 008, 009, 010, 012, 013 y 014, existen importes no solventados por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas y/o morales con las que la administración pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como no solventadas las observaciones plasmadas en los numerales: 001, referente a contrato de arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción. Contrato MDH/DIC/FIBIR/R33/2020/TG-03. (1 de 3); 002, correspondiente a contrato de arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción. Contrato MDH/DIC/FIBIR/R33/2020/TG-04. (2 de 3); 003, relativo a adjudicación de contratos de arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción. Contratos MDH/DIC/FIBIR/R33/2020/TG-03 y MDH/DIC/FIBIR/R33/2020/TG-04. (3 de 3); 004, referido a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/R33/2020/5D-01; 005, referente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/R33/2020/5D-03; 006, correspondiente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/R33/2020/5D-04; 007, relativo a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/R33/2020/5D-07. (1 de 2); 008, referido a especificación de concepto de obra. Contrato MDH/DIC/R33/2020/5D-07. (2 de 2); 009, referente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/R33/2020/SE-10; 010, correspondiente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/SEDESHU/PSBGTO/2020/SD-04. (1 de 2); 011, relativo a operatividad de la obra. Contrato MDH/DIC/SEDESHU/PSBGTO/2020/SD-04. (2 de 2); 012, referido a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/CONV-SFA/2020/S5-02; 013, referente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/SEDESHU/PEMC/2020/SE-23; y 014, correspondiente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/SEDESHU/PEMC/2020/SE-17.

En el apartado de Recomendaciones Generales, se establece que del proceso de fiscalización efectuado no se desprendieron recomendaciones.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que en atención a los resultados de la auditoría, es procedente hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., y de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, del Estado, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas detectadas durante la auditoría, precisando los contratistas y las observaciones de las que se desprende su intervención.

1. **Recurso de Reconsideración.**

El 16 de febrero de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por dicha administración municipal, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, concretamente en contra de las observaciones establecidas en los numerales 007, relativo a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/R33/2020/5D-07. (1 de 2); 008, referido a especificación de concepto de obra. Contrato MDH/DIC/R33/2020/5D-07. (2 de 2); 009, referente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/R33/2020/SE-10; 010, correspondiente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/SEDESHU/PSBGTO/2020/SD-04. (1 de 2); 011, relativo a operatividad de la obra. Contrato MDH/DIC/SEDESHU/PSBGTO/2020/SD-04. (2 de 2); 012, referido a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/CONV-SFA/2020/S5-02; 013, referente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/SEDESHU/PEMC/2020/SE-23; y 014, correspondiente a cantidades de obra. Contrato MDH/DIC/SEDESHU/PEMC/2020/SE-17, mismos que se encuentran relacionados con el Capítulo II, denominado Observaciones y Recomendaciones; Respuesta Emitida por el Sujeto Fiscalizado y Valoración Correspondiente del informe de resultados materia del presente dictamen.

En tal sentido, mediante acuerdo de fecha 17 de febrero de 2022, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se admitió el recurso de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, instruyendo la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente. Asimismo, mediante dicho acuerdo se admitieron los medios de prueba aportados por el recurrente, al tener el carácter de supervenientes. También a través de dicho acuerdo se suspendió el plazo establecido en el artículo 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato por un término de hasta 20 días hábiles, con la finalidad de realizar la debida valoración de las pruebas documentales presentadas.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior del Estado, el 8 de marzo de 2022 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a las observaciones establecidas en los numerales 007, 008, 010, 012, 013 y 014, que las pruebas documentales aportadas por el recurrente resultaron insuficientes para aclarar, atender o solventar las observaciones y, en su caso, modificar el complemento de la valoración, por los argumentos señalados en el considerando séptimo de la resolución. Derivado de lo anterior, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones como no solventadas, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

Finalmente, en cuanto a las observaciones plasmadas en los numerales 009 y 011, se resolvió que las probanzas aportadas resultaron improcedentes e ineficaces para aclararlas, atenderlas o solventarlas, de acuerdo a lo expresado en el considerando séptimo de la resolución. En razón de lo cual, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones como no solventadas, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

La referida resolución se notificó al presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., el 14 de marzo de 2022.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la auditoría.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría al presidente y al ex-presidente municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, el presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., presentó la información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó al presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de auditoría dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A C U E R D O**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 37, fracciones V y VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Del proceso de fiscalización no se desprendieron recomendaciones.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 14 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN, GTO., CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal establece la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones federales, en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Dicho artículo también señala que cuando las entidades de fiscalización de los poderes legislativos locales detecten que los recursos de los fondos de aportaciones no se han destinado a los fines establecidos en dicha Ley, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de nuestro Ordenamiento Constitucional Local establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

El artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece como atribución del Auditor Superior, rendir al Congreso, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente del aspecto que la propia Ley señala y por el cual podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

De conformidad con los artículos 66, fracción IV de la Constitución Política Local y 82, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de dicha Constitución.

Asimismo, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. En dicho Programa se contempló la práctica de una auditoría a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.

La auditoría practicada conforme a lo expresado en los párrafos anteriores concluyó con la elaboración del informe de resultados que se remitió al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 24 de marzo de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicado en la misma fecha.

**III. Procedimiento de Auditoría:**

La auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la auditoría también se encuentra el de verificar que los recursos se registraron, administraron, ejercieron, y destinaron, de conformidad con la normativa aplicable, y verificar que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad a las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan; comprendiendo además la revisión legal, financiera, técnica, administrativa y contable de las obras, abarcando todas su etapas tales como: planeación, presupuestación, programación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, control, liquidación y entrega-recepción.

Por otra parte, la auditoría se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la auditoría también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

De igual forma, en la auditoría se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de los procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programáticos, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la auditoría. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material, considerando el control interno, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

El 18 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., la orden de inicio del procedimiento de auditoría.

El 1 de diciembre de 2021, se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Suspensión de Plazos publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 19 de noviembre de 2021.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2022 se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por dicha administración municipal, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta en fechas 24 y 28 de febrero de 2022 por parte del referido funcionario municipal.

El 4 de marzo de 2022, el informe de resultados se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., para que, en su caso, hiciera valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndole saber que contaba con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

Este término transcurrió sin que, dentro del mismo, se hubiere promovido el recurso de reconsideración, como consta en la razón levantada por el Auditor Superior del Estado el 14 de marzo de 2022, en la que se realiza el cómputo del término para la interposición del recurso, contado a partir del día hábil siguiente de la notificación del informe de resultados.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la auditoría; el alcance de la auditoría respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la auditoría se consigna en el Anexo 02 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del sujeto fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos», emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales y/o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales y/o contractuales con el sujeto fiscalizado.

También se verificó las características y calidad de los materiales en apego a las especificaciones contractuales relacionadas a la estructura metálica que compone el techado de una cancha, así como su seguridad y estabilidad estructural, a través de la práctica de la observancia de las normas, estándares, procedimientos técnicos y de fiscalización aplicables y se emitieron los dictámenes respectivos con apoyo de un especialista en estructuras externo, de lo cual se obtuvo el resultado de la observación plasmada en el numeral 004.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la administración pública municipal de Villagrán, Gto., no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, de conformidad con lo señalado en el informe de resultados.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 15 observaciones, las cuales no fueron solventadas.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones, precisando que, en el caso de las observaciones plasmadas en los numerales 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012 y 013 existen importes no solventados por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas y/o morales con las que la administración pública municipal de Villagrán, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que el análisis e identificación de empresas clasificadas como EFOS, se incluyó en el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal de 2020.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como no solventadas las observaciones plasmadas en los numerales: 001, referente a cantidades de obra. Contrato PMV/CODE/2018-41; 002, correspondiente a cantidades de obra. Contrato PMV/SDIFEG/2018-64. (1 de 4); 003, relativo a especificación convenida. Contrato PMV/SDIFEG/2018-64. (2 de 4); 004, referido a calidad de estructura. Contrato PMV/SDIFEG/2018-64. (3 de 4); 005, referente a calidad en acabado. Contrato PMV/SDIFEG/2018-64. (4 de 4); 006, correspondiente a precio unitario. Contrato PMV/SEDESHU-GTO-PSBGTO-44/2020-10; 007, relativo a reconocimiento contable. Contrato PMV/SEDESHU-GTO-ITS-44/2018-63 (1 de 3); 008, referido a cantidades de obra. Contrato PMV/SEDESHU-GTO-ITS-44/2018-63 (2 de 3); 009, referente a calidad de obra. Contrato PMV/SEDESHU-GTO-ITS-44/2018-63 (3 de 3); 010, correspondiente a cantidades de obra. Contrato PMV/FAIS/2019-27; 011, relativo a cantidades de obra. Contrato PMV/SEDESHU-GTO-ITS-44/2018-39. (1 de 2); 012, referido a calidad de obra. Contrato PMV/SEDESHU-GTO-ITS-44/2018-39. (2 de 2); 013, referente a cantidades de obra. Contrato PMV/CODE/2018-36-A. (1 de 2); 014, correspondiente a documentación soporte. Contrato PMV/CODE/2018-36-A (2 de 2); y 015, relativo a cuentas de anticipo.

En el apartado de Recomendaciones Generales, se establece que del proceso de fiscalización efectuado no se desprendieron recomendaciones.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que se desprenden posibles incumplimientos de los contribuyentes a las disposiciones fiscales aplicables, por lo que es procedente la promoción del inicio de facultades de comprobación fiscal, precisando que las presuntas irregularidades o incumplimientos se desprenden de las observaciones plasmadas en los numerales 001, 002, 011 y 013, estableciendo los contratistas que incurrieron en irregularidades, siendo la autoridad fiscal competente el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que en atención a los resultados de la auditoría, es procedente hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control de Villagrán, Gto., y de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, del Estado, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas detectadas durante la auditoría, precisando los contratistas y las observaciones de las que se desprende su intervención.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la auditoría.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría al presidente municipal de Villagrán, Gto., concediéndole el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, el referido funcionario municipal presentó la información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., concediéndole el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hiciera valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; no habiéndose presentado en este plazo el referido medio de impugnación, tal y como se desprende de la razón levantada por el Auditor Superior y que obra en el informe de resultados. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de auditoría dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A C U E R D O**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 37, fracciones V y VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Del proceso de fiscalización no se desprendieron recomendaciones.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 14 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

*Voto en contra*

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE IRAPUATO, GTO., CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de fiscalización de las cuentas públicas tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XVIII, XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Estos dispositivos establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paraestatal, las del Poder Judicial y de los organismos autónomos; así como las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas. De igual manera, puede acordar la práctica de auditorías a los sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello, auxiliándose para el cumplimiento de dichas facultades por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal establece la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones federales, en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Dicho artículo también señala que cuando las entidades de fiscalización de los poderes legislativos locales detecten que los recursos de los fondos de aportaciones no se han destinado a los fines establecidos en dicha Ley, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de nuestro Ordenamiento Constitucional Local establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

El artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece como atribución del Auditor Superior, rendir al Congreso, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente del aspecto que la propia Ley señala y por el cual podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

De conformidad con los artículos 66, fracción IV de la Constitución Política Local y 82, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, acordar y practicar auditorías conforme a su programa anual y ejecutar las que acuerde el Congreso del Estado en los términos de la fracción XXVIII del artículo 63 de dicha Constitución.

Asimismo, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. En dicho Programa se contempló la práctica de una auditoría a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.

La auditoría practicada conforme a lo expresado en los párrafos anteriores concluyó con la elaboración del informe de resultados que se remitió al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización el 19 de mayo de 2022 para su estudio y dictamen,siendo radicado el 26 de mayo del año en curso.

**III. Procedimiento de Auditoría:**

La auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la auditoría también se encuentra el de verificar que los recursos se registraron, administraron, ejercieron, y destinaron, de conformidad con la normativa aplicable, y verificar que las inversiones en obra pública se hayan realizado de conformidad a las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que la regulan; comprendiendo además la revisión legal, financiera, técnica, administrativa y contable de las obras, abarcando todas su etapas tales como: planeación, presupuestación, programación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, control, liquidación y entrega-recepción.

Por otra parte, la auditoría se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la auditoría también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

De igual forma, en la auditoría se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de los procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programáticos, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la auditoría. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material, considerando el control interno, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 23 de junio de 2021 se notificó al presidente municipal de Irapuato, Gto., la orden de inicio del procedimiento de auditoría.

Posteriormente, en fechas 1 de diciembre de 2021 y 28 de marzo de 2022 se notificó a la presidenta municipal de Irapuato, Gto., la suspensión del plazo de la auditoría materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre de 2021 y 21 de febrero de 2022.

El 4 de marzo de 2022 se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Irapuato, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por dicha administración municipal, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta los días 25 y 28 de marzo, así como 18 de abril de 2022 por parte del ex-presidente, el tesorero y la presidenta municipales de Irapuato, Gto., respectivamente.

El 22 de abril 2022, el informe de resultados se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Irapuato, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 29 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el tesorero municipal de Irapuato, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020, siendo admitido dicho recurso, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior el 11 de mayo de 2022 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, misma que se notificó al tesorero municipal de Irapuato, Gto., en la misma fecha.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la auditoría; el alcance de la auditoría respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la auditoría se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del sujeto fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos», emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales y/o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales y/o contractuales con el sujeto fiscalizado.

Adicionalmente se verificó el cumplimiento de la calidad de los materiales empleados y de los procedimientos constructivos en la ejecución de la obra pública, a través de la revisión estructural en observancia de las normas, estándares, procedimientos técnicos y de fiscalización aplicables y se emitió el dictamen respectivo con apoyo del especialista en estructuras externo SINESCO, Servicios de Ingeniería Especializada y Consultoría, de lo cual se obtuvo el resultado citado en la observación plasmada en el numeral 025.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la administración pública municipal de Irapuato, Gto., no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, de conformidad con lo señalado en el informe de resultados.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 25 observaciones, mismas que no fueron solventadas. Asimismo, se formularon 12 recomendaciones, de las cuales 4 se atendieron y 8 no se atendieron.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones, precisando que, en el caso de las observaciones plasmadas en los numerales 001, 002, 003, 004, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024 y 025, existen importes no solventados por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas y/o morales con las que la administración pública municipal de Irapuato, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones y recomendaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como no solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 001, referente a cantidades de obra. Contrato EMC-SE-0368-19-032. (1 de 2); 002, correspondiente a precio unitario. Contrato EMC-SE-0368-19-032. (2 de 2); 003, relativo a cantidades de obra. Contrato EMC-SE-2806-19-044. (1 de 2); 004, referido a precio unitario. Contrato EMC-SE-2806-19-044. (2 de 2); 005, referente a precio unitario. Contrato EMC-SE-0050-19-045; 006, correspondiente a cantidades de obra. Contrato EMC-SE-2806-20-007; 007, relativo a cantidades de obra. Contrato EMC-SE-1466-20-012. (1 de 2); 008, referido a precio unitario. Contrato EMC-SE-1466-20-012. (2 de 2); 009, referente a cantidades de obra. Contrato EMC-SE-0771-20-015; 010, correspondiente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0685-20-017; 011, relativo a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0685-20-018. (1 de 2); 012, referido a precio unitario. Contrato RM-EG-0685-20-018. (2 de 2); 013, referente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0685-20-019. (1 de 2); 014, correspondiente a precio unitario. Contrato RM-EG-0685-20-019. (2 de 2); 015, relativo a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0050-20-023. (1 de 2); 016, referido a precio unitario. Contrato RM-EG-0050-20-023. (2 de 2); 017, referente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0050-20-024. (1 de 2); 018, correspondiente a precio unitario. Contrato RM-EG-0050-20-024. (2 de 2); 019, relativo a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0050-20-025; 020, referido a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0050-20-026; 021, referente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-1323-20-027; 022, correspondiente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-1323-20-028; 023, relativo a costos indirectos. Contrato RM-EG-0685-20-042; 024, referido a precio unitario. Contrato RM-EG-1323-20-043. (1 de 2); y 025, referente a planeación y ejecución de obra. Contrato RM-EG-1323-20-043. (2 de 2).

En el apartado de Recomendaciones Generales, se atendieron los numerales 001, correspondiente a cantidades de obra. Contrato EMC-SE-3216-20-005. (1 de 2); 002, relativo a precio unitario. Contrato EMC-SE-3216-20-005. (2 de 2); 003, referido a precio unitario. Contrato EMC-SE-1466-20-012; y 009, referente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-1323-20-027; y no se atendieron los numerales 004, correspondiente a precio unitario. Contrato ISM-SE-0002-20-018; 005, relativo a cantidades de obra. Contrato EMC-SE-0771-20-015; 006, referido a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0685-20-018; 007, referente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0685-20-019; 008, correspondiente a precio unitario. Contrato RM-EG-0050-20-024; 010, relativo a cantidades de obra. Contrato RM-EG-1323-20-028; 011, referido a costos indirectos. Contrato RM-EG-0685-20-042; y 012, referente a contrato de usufructo.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que en atención a los resultados de la auditoría, es procedente hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control de Irapuato, Gto., y de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, del Estado, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas detectadas durante la auditoría, precisando los contratistas y las observaciones de las que se desprende su intervención.

1. **Recurso de Reconsideración.**

El 29 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el tesorero municipal de Irapuato, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020, concretamente en contra de las observaciones contenidas en los numerales 010, correspondiente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0685-20-017; 015, relativo a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0050-20-023. (1 de 2); 017, referido a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0050-20-024. (1 de 2); 020, referente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-0050-20-026; 022, correspondiente a cantidades de obra. Contrato RM-EG-1323-20-028; y 024, relativo a precio unitario. Contrato RM-EG-1323-20-043. (1 de 2); así como de la recomendación establecida en el numeral 012, referido a contrato de usufructo, mismos que se encuentran relacionados con el Capítulo II, denominado Observaciones y Recomendaciones; Respuesta Emitida por el Sujeto Fiscalizado y Valoración Correspondiente del informe de resultados materia del presente dictamen.

En tal sentido, mediante acuerdo de fecha 6 de mayo de 2022, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se admitió el recurso de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, instruyendo la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente. Asimismo, mediante dicho acuerdo se admitieron los medios de prueba ofrecidos por el recurrente, al tratarse de pruebas novedosas y supervenientes.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior del Estado, el 11 de mayo de 2022 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a las observaciones plasmadas en los numerales 010, 015, 017, 020 y 022, que los argumentos hechos valer por el recurrente resultaron infundados e inoperantes, de acuerdo a lo expresado en el considerando séptimo de la resolución. En consecuencia, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones como no solventadas, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

En cuanto a la observación establecida en el numeral 024, se resolvió que el agravio hecho valer por el recurrente resultó inoperante, por las razones expresadas en el considerando séptimo de la resolución. En tal sentido, se confirmó el sentido de la valoración de la observación como no solventada, con acciones correctivas y de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

Finalmente, por lo que hace a la recomendación establecida en el numeral 012, se determinó que la documental aportada por el recurrente resultó insuficiente para modificar el sentido de su valoración, por los argumentos referidos en el considerando séptimo de la resolución. En razón de lo anterior se confirmó el sentido de la valoración de la recomendación como no atendida.

La referida resolución se notificó al tesorero municipal de Irapuato, Gto., el 11 de mayo de 2022.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la auditoría.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría a la presidenta y al ex-presidente municipales de Irapuato, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, el ex-presidente, el tesorero y la presidenta municipales de Irapuato Gto., presentaron la información y documentación que consideraron suficiente para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Irapuato, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó al tesorero municipal de Irapuato, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de auditoría dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las recomendaciones no atendidas y a las observaciones no solventadas, contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A C U E R D O**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracción XIX de la Constitución Política para el Estado, en relación con el artículo 37, fracciones V y VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se aprueba el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, relativo a la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Irapuato, Gto., correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las recomendaciones no atendidas y a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Irapuato, Gto., a efecto de que se atiendan las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 14 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

Voto en contra

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 21 de abril de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 26 de abril del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 18 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de Tierra Blanca, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, en fechas 30 de noviembre de 2021, 6 y 10 de enero de 2022, se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Tierra Blanca, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

El 19 de enero de 2022, se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Tierra Blanca, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta en fechas 8, 18 y 24 de febrero de 2022 por parte del presidente y ex-presidente municipales, así como del secretario de Ayuntamiento y del tesorero municipal.

El 29 de marzo de 2022, el informe de resultados se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Tierra Blanca, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

Este término transcurrió sin que, dentro del mismo, se hubiere promovido el recurso de reconsideración, como consta en la razón levantada por el Auditor Superior del Estado el 18 de abril de 2022, en la que se realiza el cómputo del término para la interposición del recurso, contado a partir del día hábil siguiente de la notificación del informe de resultados.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2018, 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de Tierra Blanca, Gto., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados precisados en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes al alcance que se refiere a la aplicación de los procedimientos de inspecciones físicas de bienes adquiridos y confirmación de apoyos. También se refiere que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 6 observaciones, de las cuales 2 se solventaron y 4 no fueron solventadas. Asimismo, se formuló 1 recomendación que no se atendió.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de la observación plasmada en el numeral 005, existe un importe no solventado por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de Tierra Blanca, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 001, referente a equipo de cómputo; y 004, referido a pago de servicios profesionales.

No se solventaron las observaciones establecidas en los numerales 002, correspondiente a procedimiento de adquisición de computadoras; 003, relativo a investigación de mercado; 005, referido a servicios publicitarios; y 006, referente a procedimiento de contratación de servicios de mantenimiento a pozo.

En el apartado de Recomendaciones Generales, no se atendió el numeral 001, correspondiente a disposiciones administrativas en materia de control de bienes muebles.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que en atención a los resultados de la revisión, es procedente hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control y de la Tesorería Municipal de Tierra Blanca, Gto., las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas detectadas durante la revisión, precisando el proveedor y la observación de la que se desprende su intervención.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión al presidente y al ex-presidente municipales de Tierra Blanca, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto el presidente y el ex-presidente municipales, así como del secretario de Ayuntamiento y del tesorero municipal de Tierra Blanca, Gto., presentaron información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Tierra Blanca, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; no habiéndose presentado en este plazo el referido medio de impugnación, tal y como se desprende de la razón levantada por el Auditor Superior y que obra en el informe de resultados. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a la recomendación no atendida y a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a la recomendación no atendida y a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Tierra Blanca, Gto., a efecto de que se atienda la recomendación contenida en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 14 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 3 de marzo de 2022 para su estudio y dictamen,siendo radicado el 8 de marzo del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 22 de junio de 2021 se notificó al presidente municipal interino de San Miguel de Allende, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, el 4 de octubre de 2021, se notificó al presidente municipal de San Miguel de Allende, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta en fechas 18 de octubre y 23 de noviembre de 2021 por parte del tesorero y ex-tesorero municipales de San Miguel de Allende, Gto., respectivamente.

En fechas 30 de noviembre y 3 de diciembre de 2021, 6 y 7 de enero de 2022 se notificó al ex-presidente y al presidente municipales de San Miguel de Allende, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

En fechas 20 y 21 de enero de 2022, el informe de resultados se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de San Miguel de Allende, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 27 de enero de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente municipal de San Miguel de Allende, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, siendo admitido dicho recurso, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior el 14 de febrero de 2022 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, misma que se notificó al ex-presidente municipal de San Miguel de Allende, Gto., el 18 de febrero de 2022.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2018, 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, de acuerdo a lo que se precisa en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes al alcance que se refiere a la aplicación del procedimiento de confirmaciones con beneficiarios de apoyos y ayudas sociales. También se precisa que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 2 observaciones, las cuales no fueron solventadas. Asimismo, se formularon 2 recomendaciones que se atendieron.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de la observación plasmada en el numeral 001, existe un importe no solventado por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que se identificaron tres empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como no solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 001, referente a contrato de arrendamiento de semáforos; y 002, correspondiente a registro contable de licenciamiento.

En el apartado de Recomendaciones Generales, se atendieron los numerales 001, relativo a pena convencional; y 002, referido a opción de compra.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que en atención a los resultados de la revisión, es procedente hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control, de la Tesorería Municipal y de la Oficialía Mayor de San Miguel de Allende, Gto., las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas detectadas durante la revisión, precisando los proveedores y las observaciones de las que se desprende su intervención.

1. **Recurso de Reconsideración.**

El 27 de enero de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente municipal de San Miguel de Allende, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, concretamente en contra de las observaciones establecidas en los numerales 001, referente a contrato de arrendamiento de semáforos; y 002, correspondiente a registro contable de licenciamiento, mismos que se encuentran relacionados con el Capítulo II, denominado Observaciones y Recomendaciones; Respuesta Emitida por el Sujeto Fiscalizado y Valoración Correspondiente.

En tal sentido, mediante acuerdo de fecha 1 de febrero de 2022, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se admitió el recurso de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, instruyendo la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente. Asimismo, mediante dicho acuerdo se admitió el medio de prueba ofrecido por el recurrente consistente en la instrumental de actuaciones.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior del Estado, el 14 de febrero de 2022 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a la observación establecida en el numeral 001, que los agravios hechos valer por el recurrente resultaron infundados e inoperantes, por los argumentos referidos en el considerando séptimo de la resolución. En razón de lo cual, se confirmó el sentido de la valoración de la observación como no solventada, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

En cuanto a la observación plasmada en el numeral 002, se resolvió que el agravio formulado por el recurrente resultó inatendible, por las razones expresadas en el considerando séptimo de la resolución. Derivado de lo anterior, se confirmó el sentido de la valoración de la observación como no solventada, con acciones correctivas pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

La referida resolución se notificó al ex-presidente municipal de San Miguel de Allende, Gto., el 18 de febrero de 2022.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión al presidente municipal de San Miguel de Allende, Gto., concediéndole el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, el tesorero y el ex-tesorero municipales de San Miguel de Allende, Gto., presentaron información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de San Miguel de Allende, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó al ex-presidente municipal de San Miguel de Allende, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de San Miguel de Allende, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Se tienen por atendidas las recomendaciones contenidas en el informe de resultados.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 28 de abril de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 5 de mayo del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Salamanca, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 23 de junio de 2021 se notificó a la presidenta municipal de Salamanca, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, en fechas 2 de diciembre de 2021 y 10 de enero de 2022, se notificó al presidente y a la ex-presidenta municipales de Salamanca, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

Los días 6 y 7 de diciembre de 2021, se notificó al presidente y a la ex-presidenta municipales de Salamanca, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta en fechas 17 de diciembre de 2021 y 10 de enero de 2022 por parte de la ex-presidenta, del presidente y de la tesorera municipales de Salamanca, Gto.

El 28 de febrero de 2022, el informe de resultados se notificó al presidente y a la ex-presidenta municipales de Salamanca, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 4 de marzo de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, la ex-presidenta municipal de Salamanca, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, siendo admitido dicho recurso, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior el 1 de abril de 2022 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, misma que se notificó a la ex-presidenta municipal de Salamanca, Gto., el 7 de abril de 2022.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2018 y 2019); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

En este orden de ideas, cabe precisar que, a fin de fomentar la participación ciudadana, la Auditoría Superior del Estado cuenta con diversos mecanismos para recibir solicitudes, denuncias y sugerencias, relacionados con hechos presuntamente irregulares en la captación, manejo y utilización de los recursos públicos, desvío de recursos hacia fines distintos a lo autorizado, entre otros supuestos de procedencia. Derivado de lo cual se recibió una solicitud ciudadana que fue remitida formalmente, de la que, una vez aplicados los procedimientos de auditoría inherentes, no se obtuvieron observaciones o recomendaciones para integrarlas al informe de resultados.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de Salamanca, Gto., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados referidos en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes al alcance que se refiere a la aplicación del procedimiento de confirmaciones con beneficiarios, respecto de la recepción de apoyos otorgados por la administración municipal. También se precisa que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones formuladas, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 8 observaciones, mismas que no fueron solventadas.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de Salamanca, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como no solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 001, referente a gastos por comprobar; 002, correspondiente a montos máximos de adquisiciones con recursos federales; 003, relativo a investigación de mercado; 004, referido a Complejo Integral de Seguridad Pública, Salamanca, Gto. (C4); 005, referente a vestuario y uniformes; 006, correspondiente a registro contable chalecos y trajes antimotines; 007, relativo a arrendamiento vehículo blindado; y 008, referido a autorización para el arrendamiento de maquinaria.

En el apartado de Recomendaciones Generales, se establece que del proceso de fiscalización realizado no se desprendieron recomendaciones.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que no se identificaron presuntas irregularidades o incumplimientos de proveedores y contratistas que se tengan que hacer de conocimiento a órganos de control y autoridades que administran padrones.

1. **Recurso de Reconsideración.**

El 4 de marzo de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, la ex-presidenta municipal de Salamanca, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, concretamente en contra de las observaciones establecidas en los numerales 001, referente a gastos por comprobar; 002, correspondiente a montos máximos de adquisiciones con recursos federales; 003, relativo a investigación de mercado; 004, referido a Complejo Integral de Seguridad Pública, Salamanca, Gto. (C4); 005, referente a vestuario y uniformes; 006, correspondiente a registro contable chalecos y trajes antimotines; 007, relativo a arrendamiento vehículo blindado; y 008, referido a autorización para el arrendamiento de maquinaria, mismos que se encuentran relacionados con el Capítulo II, denominado Observaciones y Recomendaciones; Respuesta Emitida por el Sujeto Fiscalizado y Valoración Correspondiente.

En tal sentido, mediante acuerdo de fecha 18 de marzo de 2022, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se admitió el recurso de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, instruyendo la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior del Estado, el 1 de abril de 2022 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a las observaciones establecidas en los numerales 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 y 008, que los argumentos hechos valer por la recurrente resultaron inatendibles, por las razones expresadas en el considerando séptimo de la resolución. En razón de lo cual se confirmó el sentido de su valoración como no solventadas, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado; excepto en el caso de la observación contenida en el numeral 006, en la que se determinaron acciones correctivas pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

La referida resolución se notificó a la ex-presidenta municipal de Salamanca, Gto., el 7 de abril de 2022.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión al presidente y a la ex-presidenta municipales de Salamanca, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, la ex-presidenta, el presidente y la tesorera municipales de Salamanca, Gto., presentaron información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó al presidente y a la ex-presidenta municipales de Salamanca, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó a la ex-presidenta municipal de Salamanca, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de Salamanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Del proceso de fiscalización realizado no se desprendieron recomendaciones.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE ABASOLO, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 5 de mayo de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 12 de mayo del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Abasolo, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 19 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de Abasolo, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, los días 2 y 3 de diciembre de 2021 y 10 de enero de 2022 se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Abasolo, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

El 11 de enero de 2022, se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Abasolo, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta el 1 de febrero de 2022 por parte de la presidenta municipal de Abasolo, Gto.

El 29 de marzo de 2022, el informe de resultados se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Abasolo, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 1 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, la presidenta municipal de Abasolo, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, siendo admitido dicho recurso, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior el 22 de abril de 2022 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, misma que se notificó a la presidenta municipal de Abasolo, Gto., el 26 de abril de 2022.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2018, 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de Abasolo, Gto., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados referidos en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes al alcance que se refiere a la aplicación de los procedimientos de confirmaciones con beneficiarios de vestuarios y uniformes y confirmaciones con los beneficiarios de apoyos. También se precisa que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 4 observaciones, de las cuales 1 se solventó y 3 no fueron solventadas. Asimismo, se formuló 1 recomendación que fue atendida.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de la observación plasmada en el numeral 001, existe un importe no solventado por la cuantía que ahí se refiere. No obstante, en virtud de la resolución recaída al recurso de reconsideración promovido en contra del informe de resultados se modificó el complemento de dicha observación, para quedar sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de Abasolo, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como solventada la observación plasmada en el numeral 003, relativo a autorización de compra de obsequios para personal.

No se solventaron las observaciones establecidas en los numerales 001, referente a entrega de botas a personal; 002, correspondiente a informes mensuales de prestación de servicios; y 004, referido a pago de recargos.

En el apartado de Recomendaciones Generales, se atendió el numeral 001, relativo a participaciones y aportaciones federales.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que en atención a los resultados de la revisión, es procedente hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control y de la Tesorería Municipal de Abasolo, Gto., las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas detectadas durante la revisión, precisando la proveedora y la observación de la que se desprende su intervención.

1. **Recurso de Reconsideración.**

El 1 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, la presidenta municipal de Abasolo, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, concretamente en contra de las observaciones establecidas en los numerales 001, referente a entrega de botas a personal; y 002, correspondiente a informes mensuales de prestación de servicios, mismos que se encuentran relacionados con el Capítulo II, denominado Observaciones y Recomendaciones; Respuesta Emitida por el Sujeto Fiscalizado y Valoración Correspondiente.

En tal sentido, mediante acuerdo de fecha 22 de abril de 2022, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se admitió el recurso de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, instruyendo la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente. Asimismo, mediante dicho acuerdo se admitieron solamente los medios de prueba aportados por la recurrente, que resultaron novedosos y supervenientes.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior del Estado, el 22 de abril de 2022 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a la observación plasmada en el numeral 001, que las pruebas documentales aportadas por la recurrente resultaron suficientes para acreditar el reintegro del importe observado, de acuerdo a lo expresado en el considerando séptimo de la resolución. En consecuencia, aun cuando se confirmó el sentido de la valoración de la observación como no solventada, se modificó su complemento, para quedar sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

En cuanto a la observación establecida en el numeral 002, se resolvió que los agravios formulados por la recurrente resultaron inoperantes, por los argumentos señalados en el considerando séptimo de la resolución. Derivado de lo anterior, se confirmó el sentido de la valoración de la observación como no solventada, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

La referida resolución se notificó a la presidenta municipal de Abasolo, Gto., el 26 de abril de 2022.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a la presidenta y al ex-presidente municipales de Abasolo, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, la presidenta municipal de Abasolo, Gto., presentó información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Abasolo, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó a la presidenta municipal de Abasolo, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de Abasolo, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Se tiene por atendida la recomendación contenida en el informe de resultados.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 5 de mayo de 2022 para su estudio y dictamen,siendo radicado el 12 de mayo del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 18 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de Apaseo el Grande, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, los días 3 de diciembre de 2021, 10 y 11 de enero de 2022, se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Apaseo el Grande, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

El 8 de marzo de 2022, se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Apaseo el Grande, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta en fechas 28 y 29 de marzo de 2022 por parte del presidente y el ex-presidente municipales de Apaseo el Grande, Gto.

El 7 de abril de 2022, el informe de resultados se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Apaseo el Grande, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 19 de abril de 2022, el presidente municipal de Apaseo el Grande, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados materia del presente dictamen, mismo que se tuvo por no interpuesto a través del acuerdo del Auditor Superior del Estado de fecha 26 de abril de 2022, al no expresar los agravios que le causa el acto recurrido, de conformidad con lo previsto en el artículo 51, fracción V y último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Dicho acuerdo se notificó al presidente municipal de Apaseo el Grande, Gto., el 29 de abril de 2022.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicio 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

En este orden de ideas, cabe precisar que, a fin de fomentar la participación ciudadana, la Auditoría Superior del Estado cuenta con diversos mecanismos para recibir solicitudes, denuncias y sugerencias, relacionados con hechos presuntamente irregulares en la captación, manejo y utilización de los recursos públicos, desvío de recursos hacia fines distintos a lo autorizado, entre otros supuestos de procedencia. Derivado de lo cual se recibió una solicitud ciudadana, que fue remitida formalmente, de la que, una vez aplicados los procedimientos de auditoría inherentes, no se obtuvieron observaciones o recomendaciones.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, de acuerdo a lo que se precisa en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones formuladas, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 11 observaciones, de las cuales 1 se solventó y 10 no fueron solventadas.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de las observaciones plasmadas en los numerales 001, 002, 003, 004, 005, 008, 009 y 011, existen importes no solventados por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como solventada la observación establecida en el numeral 006, relativo a pagos mayores.

No se solventaron las observaciones plasmadas en los numerales 001, referente a bienes no localizados; 002, correspondiente a precio adquisición de bienes; 003, relativo a pagos sueldos base; 004, referido a honorarios asimilados; 005, referente a pagos posteriores a la baja; 007, correspondiente a procedimiento de adjudicación directa, con cotización de tres proveedores; 008, relativo a destino final de prendas de seguridad; 009, referido a soporte duplicado prendas de seguridad; 010, referente a evidencia investigación de mercado; y 011, correspondiente a otorgamiento de apoyos.

En el apartado de Recomendaciones Generales, se establece que del proceso de fiscalización realizado no se desprendieron recomendaciones.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que en atención a los resultados de la revisión, es procedente hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control y de la Tesorería Municipal de Apaseo el Grande, Gto., las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas detectadas durante la revisión, precisando los proveedores y las observaciones de las que se desprende su intervención.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión al presidente y al ex-presidente municipales de Apaseo el Grande, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, el presidente y el ex-presidente municipales de Apaseo el Grande, Gto., presentaron información para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Apaseo el Grande, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual se tuvo por no interpuesto al no expresar los agravios que causa el acto recurrido, de conformidad con lo previsto en el artículo 51, fracción V de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Lo cual se notificó al presidente municipal de Apaseo el Grande, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de Apaseo el Grande, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Del proceso de fiscalización realizado no se desprendieron recomendaciones.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 16 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 5 de mayo de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 12 de mayo del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 18 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, en fechas 1 y 8 de diciembre de 2021 y 7 de enero de 2022 se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

Los días 31 de enero y 1 de febrero de 2022, se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta el 18 de febrero de 2022 por parte del presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.

En fechas 6 y 7 de abril de 2022, el informe de resultados se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

Este término transcurrió sin que, dentro del mismo, se hubiere promovido el recurso de reconsideración, como consta en la razón levantada por el Auditor Superior del Estado el 25 de abril de 2022, en la que se realiza el cómputo del término para la interposición del recurso, contado a partir del día hábil siguiente de la notificación del informe de resultados.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2018, 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados referidos en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes al alcance que se refiere a la aplicación de los procedimientos de verificaciones físicas de bienes muebles y confirmaciones con beneficiarios de apoyos. También se precisa que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 7 observaciones, de las cuales 1 se solventó y 6 no fueron solventadas. Asimismo, se formuló 1 recomendación que fue atendida.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como solventada la observación plasmada en el numeral 002, correspondiente a computadora portátil.

No se solventaron las observaciones establecidas en los numerales 001, referente a autorización de adquisición de computadoras portátiles; 003, relativo a adquisición y asignación de equipo de telefonía celular; 004, referido a investigación de mercado terminales digitales móviles (radios); 005, referente a procesos de adquisición de horno incinerador; 006, correspondiente a informes mensuales de prestación de servicios; y 007, relativo a estados analíticos presupuestarios.

En el apartado de Recomendaciones Generales, se atendió el numeral 001, referido a predial, cobro menor a cuota mínima.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que en atención a los resultados de la revisión, es procedente hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control y de la Tesorería Municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas detectadas durante la revisión, precisando la proveedora y la observación de la que se desprende su intervención.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión al presidente y al ex-presidente municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, el presidente municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., presentó información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; no habiéndose presentado en este plazo el referido medio de impugnación, tal y como se desprende de la razón levantada por el Auditor Superior y que obra en el informe de resultados. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Se tiene por atendida la recomendación contenida en el informe de resultados.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

*Voto en contra*

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 5 de mayo de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 12 de mayo del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de San José Iturbide, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 18 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de San José Iturbide, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, en fechas 3 y 6 de diciembre de 2021, 5 y 10 de enero de 2022, se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de San José Iturbide, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

Los días 1 y 3 de febrero de 2022, se notificó al ex-presidente y a la presidenta municipales de San José Iturbide, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta el 22 de febrero de 2022 por parte del ex-presidente municipal de San José Iturbide, Gto.

El 29 de marzo de 2022, el informe de resultados se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de San José Iturbide, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 4 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente municipal de San José Iturbide, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, siendo admitido dicho recurso, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior el 22 de abril de 2022 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, misma que se notificó al ex-presidente municipal de San José Iturbide, Gto., el 28 de abril de 2022.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de San José Iturbide, Gto., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados precisados en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes al alcance que se refiere a la aplicación de los procedimientos de inspecciones físicas de bienes muebles adquiridos, confirmaciones con beneficiarios de apoyos y/o ayudas y actas circunstanciadas de hechos. También se refiere que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 3 observaciones, mismas que no fueron solventadas. Asimismo, se formularon 2 recomendaciones que no se atendieron.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de las observaciones plasmadas en los numerales 001 y 002, existen importes no solventados por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de San José Iturbide, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como no solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 001, referente a días pendientes de pago; 002, correspondiente a pago de vacaciones; y 003, relativo a adquisición de multifuncional.

En el apartado de Recomendaciones Generales, no se atendieron los numerales 001, referido a reparación de multifuncional; y 002, referente a comprobantes fiscales.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que no se identificaron presuntas irregularidades o incumplimientos de proveedores y contratistas que se tengan que hacer de conocimiento a órganos de control y autoridades que administran padrones.

1. **Recurso de Reconsideración.**

El 4 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente municipal de San José Iturbide, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, concretamente en contra de las observaciones establecidas en los numerales 001, referente a días pendientes de pago; 002, correspondiente a pago de vacaciones; y 003, relativo a adquisición de multifuncional, mismos que se encuentran relacionados con el Capítulo II, denominado Observaciones y Recomendaciones; Respuesta Emitida por el Sujeto Fiscalizado y Valoración Correspondiente.

En tal sentido, mediante acuerdo de fecha 21 de abril de 2022, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se admitió el recurso de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, instruyendo la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente. Asimismo, mediante dicho acuerdo se admitieron los medios de prueba aportados por el recurrente, al ser novedosos y supervenientes.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior del Estado, el 22 de abril de 2022 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a las observaciones plasmadas en los numerales 001 y 002, que en la primera, las pruebas documentales aportadas en el recurso resultaron insuficientes para solventar la observación; y en el caso de la segunda, lo manifestado por el recurrente resultó inatendible, de acuerdo a lo expresado en el considerando séptimo de la resolución. En consecuencia, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones como no solventadas, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

En cuanto a la observación establecida en el numeral 003, se resolvió que el agravio formulado por el recurrente resultó infundado, por los argumentos señalados en el considerando séptimo de la resolución. Derivado de lo anterior, se confirmó el sentido de la valoración de la observación como no solventada, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

La referida resolución se notificó al ex-presidente municipal de San José Iturbide, Gto., el 28 de abril de 2022.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a la presidenta y al ex-presidente municipales de San José Iturbide, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto el ex-presidente municipal de San José Iturbide, Gto., presentó información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de San José Iturbide, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó al ex-presidente municipal de San José Iturbide, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las recomendaciones no atendidas y a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de San José Iturbide, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las recomendaciones no atendidas y a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de San José Iturbide, Gto., a efecto de que se atiendan las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

*Voto en contra*

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 5 de mayo de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 12 de mayo del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 19 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, en fechas 2 de diciembre de 2021, 7 y 10 de enero de 2022, se notificó al ex-presidente y presidente municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

El 10 de diciembre de 2021 se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta el 14 de enero de 2022 por parte del tesorero y ex-presidente municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.

En fechas 4 y 8 de marzo de 2022, el informe de resultados se notificó al ex-presidente y al presidente municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 11 de marzo de 2022, el ex-presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., presentó recurso de reconsideración en contra del informe de resultados materia del presente dictamen, mismo que se tuvo por no interpuesto a través del acuerdo del Auditor Superior del Estado de fecha 21 de abril de 2022, al no estar suscrito por el promovente, pues fue firmado electrónicamente por el tesorero municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 51, fracción I y último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Dicho acuerdo se notificó al ex-presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., el 25 de abril de 2022.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados precisados en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes al alcance que se refiere a la aplicación de los procedimientos de inspecciones físicas de bienes muebles adquiridos, confirmaciones con beneficiarios de apoyos y/o ayudas y actas circunstanciadas de hechos. También se refiere que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 3 observaciones, que no fueron solventadas. Asimismo, se formuló 1 recomendación que no se atendió.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de las observaciones plasmadas en los numerales 002 y 003, existen importes no solventados por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como no solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 001, referente a baja de bienes muebles; 002, correspondiente a prima de antigüedad; y 003, relativo a equipos de telefonía celular.

En el apartado de Recomendaciones Generales, no se atendió el numeral 001, referido a extinción del Instituto Municipal de Vivienda.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que no se identificaron presuntas irregularidades o incumplimientos de proveedores y contratistas que se tengan que hacer de conocimiento a órganos de control y autoridades que administran padrones.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión al presidente y al ex-presidente municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto el tesorero y el ex-presidente municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., presentaron información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó al presidente y al ex-presidente municipales de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual se tuvo por no interpuesto al no estar suscrito por el titular del sujeto de fiscalización, de conformidad con lo previsto en el artículo 51, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Lo cual se notificó al ex-presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a la recomendación no atendida y a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a la recomendación no atendida y a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., a efecto de que se atienda la recomendación contenida en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

Voto en contra

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 5 de mayo de 2022 para su estudio y dictamen, siendo radicado el 12 de mayo del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Villagrán, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 18 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, en fechas 30 de noviembre de 2021 y 6 de enero de 2022, se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

El 9 de marzo de 2022 se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta el 30 de marzo de 2022 por parte del referido funcionario municipal.

El 6 de abril de 2022, el informe de resultados se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., para que, en su caso, hiciera valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndole saber que contaba con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 20 de abril de 2022, el tesorero municipal de Villagrán, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados materia del presente dictamen, mismo que se tuvo por no interpuesto a través del acuerdo del Auditor Superior del Estado de fecha 25 de abril de 2022, al no estar suscrito por el titular del sujeto de fiscalización, ni demostrarse de alguna manera que se le haya delegado la atribución correspondiente al recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 51, fracción I y último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; aunado a que no se advierte que el citado funcionario hubiera tenido intervención previa en la revisión que nos ocupa. Dicho acuerdo se notificó al tesorero municipal de Villagrán, Gto., el 28 de abril de 2022.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2018, 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de Villagrán, Gto., no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, de acuerdo a lo que se precisa en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes al alcance que se refiere a la aplicación de los procedimientos de inspecciones físicas de bienes adquiridos y confirmación de apoyos. También se refiere que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 11 observaciones, mismas que no fueron solventadas. Asimismo, se formuló 1 recomendación que no se atendió.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de las observaciones plasmadas en los numerales 001, 002, 005, 006 y 008, existen importes no solventados por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de Villagrán, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como no solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 001, referente a pago de pena convencional por laudo; 002, correspondiente a materiales de construcción; 003, relativo a comprobante fiscal de protección metálica; 004, referido a procedimiento de arrendamiento de maquinaria; 005, referente a servicio de arrendamiento de maquinaria; 006, correspondiente a conservación y mantenimiento de inmuebles; 007, relativo a cantidades de obra. Contrato PMV/PROYECTO/2020-15; 008, referido a cantidades de obra. Contrato PMV/PROYECTO/2020-12; 009, referente a contenido de contrato. Varios contratos; 010, correspondiente a soporte documental. Varios contratos; y 011, relativo a inscripción Padrón Único de Contratistas. Varios contratos.

En el apartado de Recomendaciones Generales, no se atendió el numeral 001, referido a procedimientos de contratación.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que se desprenden posibles incumplimientos de los contribuyentes a las disposiciones fiscales aplicables, por lo que es procedente la promoción del inicio de facultades de comprobación fiscal, precisando que las presuntas irregularidades o incumplimientos se desprenden de las observaciones plasmadas en los numerales 002, 003, 005, 006, 007, 008 y 010, estableciendo el proveedor y el contratista que incurrieron en irregularidades, siendo la autoridad fiscal competente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que en atención a los resultados de la auditoría, es procedente hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control y de la Tesorería Municipal de Villagrán, Gto., así como de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, del Estado, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas detectadas durante la auditoría, precisando los contratistas y las observaciones de las que se desprende su intervención.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión al presidente municipal de Villagrán, Gto., concediéndole el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, dicho funcionario presentó información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó al presidente municipal de Villagrán, Gto., concediéndole el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hiciera valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual se tuvo por no interpuesto al no estar suscrito por el titular del sujeto de fiscalización, ni demostrarse de alguna manera que se le haya delegado la atribución correspondiente al recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 51, fracción I y último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; aunado a que no se advierte que el citado funcionario hubiera tenido intervención previa en la revisión que nos ocupa, lo cual se notificó al tesorero municipal de Villagrán, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a la recomendación no atendida y a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de Villagrán, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a la recomendación no atendida y a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Se ordena dar vista del informe de resultados al ayuntamiento del municipio de Villagrán, Gto., a efecto de que se atienda la recomendación contenida en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, informando a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de las acciones realizadas para ello, con objeto de que esta última realice el seguimiento correspondiente.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

Voto en contra

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 19 de mayo de 2022 para su estudio y dictamen,siendo radicado el 26 de mayo del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Yuriria, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 18 de agosto de 2021 se notificó al presidente municipal de Yuriria, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, en fechas 3 y 6 de diciembre de 2021 y 10 de enero de 2022 se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Yuriria, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

El 11 de marzo de 2022, se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Yuriria, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta los días 28 de marzo y 4 de abril de 2022 respectivamente, por parte de la presidenta y el ex-presidente municipales de Yuriria, Gto.

El 19 de abril de 2022, el informe de resultados se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Yuriria, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

El 26 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente municipal de Yuriria, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, siendo admitido dicho recurso, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior el 11 de mayo de 2022 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, misma que se notificó al ex-presidente municipal de Yuriria, Gto., el 13 de mayo de 2022.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2018, 2019 y 2020); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

Cabe precisar que, a fin de fomentar la participación ciudadana, la Auditoría Superior del Estado cuenta con diversos mecanismos para recibir solicitudes, denuncias y sugerencias, relacionados con hechos presuntamente irregulares en la captación, manejo y utilización de los recursos públicos, así como desvío de recursos hacia fines distintos a lo autorizado, entre otros supuestos de procedencia. Derivado de lo cual se recibieron tres solicitudes ciudadanas que fueron remitidas formalmente, de las que, una vez aplicados los procedimientos de auditoría inherentes, se obtuvo el resultado establecido en las observaciones contenidas en los numerales 001, 002, 003, 004 y 005.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de Yuriria, Gto., no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, de acuerdo a lo que se precisa en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones y recomendaciones, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 7 observaciones, las cuales no fueron solventadas. Asimismo, se formuló 1 recomendación que se atendió.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de las observaciones plasmadas en los numerales 001, 002, 003, 004, 006 y 007, existen importes no solventados por la cuantía que ahí se refiere. No obstante, mediante la resolución recaída al recurso de reconsideración promovido en contra del informe de resultados se modificó el complemento de la valoración de la observación contenida en el numeral 007, para quedar sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de Yuriria, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que no se identificaron empresas clasificadas como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como no solventadas las observaciones plasmadas en los numerales 001, referente a pago de sueldos; 002, correspondiente a pago de honorarios; 003, relativo a honorarios promotores; 004, referido a contrato de honorarios asimilables a sueldos y salarios RHY/2020/136; 005, referente a apoyo gastos médicos mayores; 006, correspondiente a prima de antigüedad; y 007, relativo a publicaciones.

En el apartado de Recomendaciones Generales, se atendió el numeral 001, referido a registro de vehículos propiedad del Municipio.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que no se identificaron presuntas irregularidades o incumplimientos de proveedores y contratistas que se tengan que hacer de conocimiento a órganos de control y autoridades que administran padrones.

1. **Recurso de Reconsideración.**

El 26 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente municipal de Yuriria, Gto., interpuso recurso de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, concretamente en contra de las observaciones establecidas en los numerales 001, referente a pago de sueldos; 004, correspondiente a contrato de honorarios asimilables a sueldos y salarios RHY/2020/136; 005, relativo a apoyo gastos médicos mayores; 006, referido a prima de antigüedad; y 007, referente a publicaciones, mismos que se encuentran relacionados con el Capítulo II, denominado Observaciones y Recomendaciones; Respuesta Emitida por el Sujeto Fiscalizado y Valoración Correspondiente.

En tal sentido, mediante acuerdo de fecha 28 de abril de 2022, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se admitió el recurso de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, instruyendo la integración del expediente respectivo y el registro correspondiente. Asimismo, mediante dicho acuerdo se admitieron los medios de prueba ofrecidos por el recurrente al tratarse de pruebas novedosas y supervenientes. También a través de dicho acuerdo se suspendió el plazo establecido en el artículo 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato por un término de hasta 10 días hábiles, con la finalidad de realizar la debida valoración de las documentales exhibidas.

Una vez tramitado el recurso, el Auditor Superior del Estado, el 11 de mayo de 2022 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a las observaciones establecidas en los numerales 001, 004 y 006, que los agravios hechos valer por el recurrente resultaron inoperantes e infundados y las pruebas aportadas fueron insuficientes, por los argumentos referidos en el considerando séptimo de la resolución. En razón de lo cual, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones como no solventadas, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

En cuanto a la observación plasmada en el numeral 005, se resolvió que el agravio formulado por el recurrente resultó infundado, por las razones expresadas en el considerando séptimo de la resolución. Derivado de lo anterior, se confirmó el sentido de la valoración de la observación como no solventada, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

Finalmente, por lo que hace a la observación contenida en el numeral 007, se concluyó que el agravio hecho valer por el recurrente resultó parcialmente fundado, de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo de la resolución. En tal sentido, aun cuando se confirmó el sentido de la valoración de la observación como no solventada, se modificó el complemento de su valoración para quedar sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

La referida resolución se notificó al ex-presidente municipal de Yuriria, Gto., el 13 de mayo de 2022.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones y recomendaciones derivadas de la revisión a la presidenta y al ex-presidente municipales de Yuriria, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, la presidenta y el ex-presidente municipales de Yuriria, Gto., presentaron información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas y atender las recomendaciones efectuadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de Yuriria, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó al ex-presidente municipal de Yuriria, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de Yuriria, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Se tiene por atendida la recomendación contenida en el informe de resultados.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

Voto en contra

* **DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO AL INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.**

**C. Presidenta del Congreso del Estado**

**P r e s e n t e.**

A esta Comisión de Hacienda y Fiscalización, le fue turnado para su estudio y dictamen, el informe de resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Una vez analizado el referido informe de resultados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, fracción XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos rendir el siguiente:

**D i c t a m e n**

**I. Competencia:**

Las facultades de la legislatura local en materia de revisión de las cuentas públicas municipales tienen su fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, las que establecen que el Congreso del Estado tiene la facultad de fiscalizar las cuentas públicas municipales, incluyendo las de las entidades y organismos de la administración pública paramunicipal; y verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas; así como declarar la revisión de cuentas públicas en los términos del informe de resultados, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de dicho informe y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, auxiliándose para el cumplimiento de dicha facultad por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, refiere que los poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos en la presentación de los informes financieros trimestrales y la cuenta pública informarán al Congreso de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio.

El artículo 66 fracción I de la Constitución Política Local establece como atribución de la Auditoría Superior del Estado analizar, evaluar y comprobar las cuentas públicas, de conformidad con los programas que para el efecto se aprueben por dicha Auditoría, señalando que si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.

Asimismo, el artículo 66 fracción VIII de dicho Ordenamiento Constitucional establece que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato deberá informar al Congreso del Estado del resultado de la revisión de la cuenta pública y demás asuntos derivados de la fiscalización, incluyendo los dictámenes, informes de resultados, comentarios y observaciones de las auditorías, constituyendo una de las fases del proceso de fiscalización.

De igual forma, el artículo 82, fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato consigna como atribución del Auditor Superior rendir al Congreso del Estado, los informes derivados del ejercicio de la función de fiscalización.

En razón de lo cual, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que la Auditoría Superior debe remitir los informes de resultados al Congreso del Estado, a efecto de que este realice la declaratoria correspondiente, señalándose en el artículo 38 que el informe de resultados únicamente podrá ser observado por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

Con la finalidad de que el Congreso dé cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece en su artículo 112, fracción XII, primer párrafo que, a esta Comisión de Hacienda y Fiscalización le compete el conocimiento y dictamen de los asuntos relativos a los informes de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado.

A efecto de cumplir con las atribuciones conferidas a esta Comisión, y en observancia a lo que establece el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el presente dictamen se ocupará exclusivamente de los aspectos que la propia Ley señala y por los cuales podría ser observado o no, el informe de resultados.

**II. Antecedentes:**

El artículo 117, fracción VII de la Constitución Política Local establece como obligación de los ayuntamientos presentar al Congreso del Estado, la información financiera y la cuenta pública del Municipio, con la periodicidad, forma y términos que establezcan las disposiciones aplicables y la Ley.

Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Política Local, establece que los sujetos de fiscalización presentarán al Congreso del Estado los informes financieros y su cuenta pública con la periodicidad, forma y términos que establezca la Ley.

La fracción III del artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la Auditoría Superior del Estado será competente para fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas.

En cuanto a la presentación, el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato refiere que la cuenta pública deberá presentarse al Congreso, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que concluya el ejercicio fiscal respectivo. Señalando además que la cuenta pública y la información financiera deberán estar debidamente integradas y disponibles a través de las páginas de internet de los sujetos de fiscalización.

No será impedimento para que la Auditoría Superior del Estado realice la función de fiscalización, si la cuenta pública no está presentada y disponible en los plazos y requisitos señalados en la ley.

Por otra parte, el artículo 130 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece como atribución del tesorero municipal, remitir al Congreso del Estado, la cuenta pública municipal, misma que deberá ser firmada preferentemente por un integrante de la primera minoría de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en el Ayuntamiento.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Los sujetos de fiscalización no podrán modificar el contenido de las cuentas públicas ni de la información financiera trimestral que hayan presentado; y en el supuesto de adecuaciones o ajustes, estos deberán expresarse en la cuenta pública o en la información financiera del trimestre en que se hayan detectado.

El artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece que el Congreso establecerá los lineamientos para integrar la cuenta pública del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los Organismos Autónomos y de los municipios.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la información financiera y la cuenta pública deberá organizarse, integrarse, sistematizarse publicarse y difundirse en el tiempo y con la forma que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las decisiones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los lineamientos que para tal efecto emita el Congreso.

Por su parte, el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Integración de la Cuenta Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato emitidos por este Poder Legislativo, señala que una vez integrada la cuenta pública del Estado, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración la remitirá al Poder Legislativo del Estado. Dicha Secretaría publicará la cuenta pública en su página de Internet, de manera inmediata a su presentación.

En cuanto a la presentación de la cuenta pública, el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato señala que la misma se remitirá por los sujetos fiscalizados al Congreso del Estado a través de medios electrónicos, haciendo uso del sistema informático que instrumente y difunda la Auditoría Superior.

El citado artículo también refiere que la cuenta pública e informes trimestrales podrán presentarse por los sujetos obligados mediante firma electrónica, siempre que así se solicite previamente por escrito al Congreso o a la Auditoría Superior. También podrán presentarse de forma impresa, cuando exista causa justificada para ello y no se haya suscrito el convenio respectivo.

En términos del numeral 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, para efecto de la revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior podrá considerar el contenido de las cédulas de resultados que se dieron a conocer a los sujetos de fiscalización en el análisis de la información financiera trimestral y la evidencia que las sustenta.

Por lo que hace a la integración de la cuenta pública por parte de los sujetos fiscalizados, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Para tal efecto, los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la citada Ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. En tal sentido, dicho artículo también señala que los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo.

En cumplimiento a los citados preceptos, en su oportunidad se remitió a este Congreso del Estado, la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, turnándose a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que la Auditoría Superior establecerá un Programa General de Fiscalización, señalando los actos y sujetos de fiscalización, los que serán objeto de auditoría o revisión conforme a los criterios y normas que se establezcan en el Reglamento.

En ejercicio de esta función, el Auditor Superior del Estado aprobó el Programa General de Fiscalización 2021. En dicho Programa se contempló la revisión de la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

La revisión concluyó con la elaboración del informe de resultados materia del presente dictamen, remitiéndose al Congreso, el cual se turnó a esta Comisión el 26 de mayo de 2022 para su estudio y dictamen,siendo radicado el 2 de junio del año en curso.

**III. Procedimiento de Revisión:**

La revisión de la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, tuvo por objetivo, de acuerdo a los principios, conceptos y directrices de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en su tercer nivel, evaluar si los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos, con las disposiciones legales y normativas que rigen al ente público auditado.

Asimismo, dentro del objetivo de la revisión también se encuentra el de comprobar que la gestión financiera del sujeto fiscalizado fue realizada con transparencia y atendiendo a criterios de economía, eficiencia y eficacia, propiciando su óptimo aprovechamiento, en cumplimiento a lo dispuesto en las normas relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la cuenta pública, conforme a las disposiciones aplicables.

Por otra parte, la revisión se efectuó observando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en el Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fechas 25 de enero y 28 de febrero de 2017 respectivamente.

En la revisión también se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y que son congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que son aplicables al sector público, los cuales exigen que el auditor cumpla los requerimientos de ética y que la auditoría sea planeada, realizada y supervisada para obtener una seguridad razonable de que las cifras presentadas en la información contable y presupuestal revisada, no contienen errores importantes y que están integradas de acuerdo con las bases contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El informe de resultados establece que se practicó la revisión de la cuenta pública respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de León, Gto., correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en lo referente a los apartados de ingresos y egresos; así como a las operaciones realizadas por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, en el rubro de egresos.

De igual forma, en la revisión se realizaron los procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarias para obtener evidencia suficiente y adecuada, respecto a si las cifras y revelaciones de la cuenta pública, atienden a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en las normas aplicables relativas a ingresos y egresos y en las demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el periodo de la revisión. Los procedimientos seleccionados fueron aplicados por el auditor, con base en la evaluación de los riesgos de incorrección material. Al realizar las evaluaciones de riesgo, se consideró el control interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoría, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del mismo.

También se evaluó el registro y presentación de la información contable, las variaciones presupuestales, la razonabilidad de las estimaciones y revelaciones significativas hechas por la administración, los resultados de la gestión financiera y la incidencia de sus operaciones en la hacienda pública del ente fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por los ordenamientos aplicables en la materia, incluyendo las políticas contables aplicables a la institución, utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; concluyendo que la evidencia de auditoría obtenida fue suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar el dictamen de la auditoría, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

El 23 de junio de 2021 se notificó al presidente municipal de León, Gto., la orden de inicio del procedimiento de revisión de la cuenta pública.

Posteriormente, en fechas 1 de diciembre de 2021 y 7 de enero de 2022 se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de León, Gto., la suspensión del plazo de la revisión materia del presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Suspensión de Plazos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato los días 19 de noviembre y 17 de diciembre de 2021.

El 7 de marzo de 2022, se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de León, Gto., el pliego de observaciones y recomendaciones derivado de la revisión practicada a la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, al cual se dio respuesta el 30 de marzo por parte de la tesorera municipal de León, Gto.

El 20 de abril de 2022, el informe de resultados se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de León, Gto., para que, en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración previsto por los artículos del 48 al 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, haciéndoles saber que contaban con un término de cinco días hábiles para tal efecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a la fracción IV del artículo 37 de la citada Ley.

En fechas 26 y 27 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente y la presidenta municipales de León, Gto., interpusieron recursos de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, siendo admitidos dichos recursos, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Una vez tramitados los recursos, el Auditor Superior el 17 de mayo de 2022 emitió la resolución correspondiente, a la cual haremos referencia en un apartado posterior, misma que se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de León, Gto., el 18 de mayo de 2022.

**IV. Contenido del Informe de Resultados:**

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 37, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el informe de resultados contiene los siguientes apartados:

1. **Introducción.**

Por lo que se refiere a este punto, se establecen los criterios de selección; el objetivo de la revisión; el alcance de la revisión respecto a los apartados de ingresos y egresos; así como al rubro de egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, precisando que el detalle de los alcances de la revisión se consigna en el Anexo 01 del informe de resultados.

También en este apartado se precisan los procedimientos de auditoría aplicados, siendo estos: inspección, observación, confirmación externa, recálculo, procedimientos analíticos, re ejecución e indagación.

Cabe apuntar que en el Programa General de Fiscalización 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el apartado de seguimiento a mejores prácticas de fiscalización ejecutadas durante el ejercicio 2020 y prospectiva estratégica para la programación 2021, se estableció:

*«…En atención al acuerdo asumido el 24 de febrero de 2020 por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, a partir del programa 2020 se consideraron para efectos de la planeación de los actos de fiscalización, el listado de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) publicada con el carácter de «Definitivos» por el Sistema de Administración Tributaria en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como un elemento relevante en la determinación de los contratos a revisar.*

*Dicho listado de empresas, acorde a las normas técnicas que rigen la función de fiscalización, forma parte de la planeación específica, ejecución de procedimientos de auditoría y de los Informes de Resultados, resaltando que, en estos últimos, se expresan las conclusiones en un apartado específico.*

*Con ello, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato asume plenamente el compromiso del Congreso del Estado, para transparentar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos por los entes gubernamentales y la rendición de cuentas a la ciudadanía».*

Derivado de lo anterior, en el proceso de auditoría se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, empresas que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de *«Definitivos»,* emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.

Por otra parte, en el apartado correspondiente a los análisis previos de planeación relativos a la facturación electrónica, así como de personas físicas y morales que tuvieron relaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado se establecen las siguientes acciones realizadas: Se inspeccionó que los comprobantes fiscales que soportan las erogaciones del ente fiscalizado, no correspondan a contribuyentes que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incumplidos o no localizados, determinados por el Servicio de Administración Tributaria; se inspeccionó que la facturación recibida por el sujeto fiscalizado de contribuyentes personas morales no correspondiese a empresas cuya fecha de creación fuese reciente (ejercicios 2018 y 2019); se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan el carácter de servidores públicos en el sujeto fiscalizado u otros sujetos; se inspeccionó que la facturación emitida al sujeto fiscalizado por contribuyentes personas físicas, no tengan una relación de parentesco con servidores públicos clave identificados, que intervienen en los procesos de adjudicación y contratación en el sujeto fiscalizado; se inspeccionó que los comprobantes fiscales emitidos al sujeto fiscalizado no hayan sido cancelados posteriormente o que el efecto de compensación se haya realizado a través de la emisión de comprobantes tipo egresos nota de crédito; y se inspeccionó que los proveedores y contratistas del Padrón Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Guanajuato no se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, contribuyentes que facturan operaciones simuladas o inexistentes con el carácter de «Definitivos» emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, con independencia que hayan celebrado o no, operaciones comerciales o contractuales con el sujeto fiscalizado.

De manera particular y acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas en las siguientes plataformas: Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía del gobierno federal de determinados socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado; Registro Civil de la Secretaría de Gobierno del Estado y Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.

Asimismo, se establece el dictamen de la revisión, mismo que contiene los rubros de opinión, cuestiones clave de la auditoría en contexto de la pandemia del virus SARS-CoV2, fundamento de la opinión, obligaciones de la administración y obligación del auditor. En el primero, se refiere que en términos generales y respecto de la muestra auditada la administración pública municipal de León, Gto., cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados precisados en el informe de resultados; señalando además que se presentaron limitantes al alcance que se refiere a la aplicación de los procedimientos de confirmaciones con beneficiarios de apoyos y/o ayudas y actas circunstanciadas de hechos. También se precisa que se presentaron limitantes en la aplicación de los procedimientos de auditoría, derivado de la contingencia por la pandemia del virus SARS-CoV2.

En cuanto al rubro de resultados de la fiscalización efectuada, se establece el estatus que guardan las observaciones formuladas, las cuales se agrupan bajo su respectivo tipo y rubro, señalando que se determinaron 8 observaciones, de las cuales 1 se solventó y 7 no fueron solventadas.

También en dicho apartado se establece el impacto de las irregularidades detectadas que persistieron después de la valoración de la respuesta al pliego de observaciones y recomendaciones, destacando la cuantificación monetaria de las observaciones y recomendaciones, precisando que, en el caso de las observaciones plasmadas en los numerales 005 y 006, existen importes no solventados por la cuantía que ahí se refiere.

En lo referente al rubro de identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes se refiere que como parte de la planeación de la auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las personas físicas o morales con las que la administración pública municipal de León, Gto., y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León celebraron operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que estas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «*Definitivos»* publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que se identificó y analizó una empresa clasificada como EFOS.

1. **Observaciones y recomendaciones, la respuesta emitida por el sujeto fiscalizado y la valoración correspondiente.**

En esta parte se desglosa la valoración de las observaciones formuladas por el Órgano Técnico, considerando como solventada la observación establecida en el numeral 008, referente entrega de uniformes

No se solventaron las observaciones plasmadas en los numerales 001, correspondiente a enajenación de áreas de donación; 002, relativo a etiquetado y resguardo de bienes; 003, referido a devengo contable de bienes muebles; 004, referente a Licitación Pública Nacional Patrullas; 005, correspondiente a sueldos; 006, relativo a cumplimientos de sentencias; y 007, referido a excepción a la licitación pública de uniformes.

En el caso de la Administración Pública Descentralizada se establece que del proceso de fiscalización no se desprendieron observaciones.

Asimismo, en el apartado de Recomendaciones Generales, se refiere que del proceso de fiscalización no se desprendieron recomendaciones a la Administración Pública Centralizada y a la Administración Pública Descentralizada.

1. **Promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.**

En esta parte se establece que de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracción XXXIV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, primer párrafo del Reglamento de dicha Ley, y toda vez que del proceso de fiscalización pudieran actualizarse presuntos incumplimientos a las disposiciones fiscales o bien respecto a ingresos, adquisiciones o facturaciones que por su monto, origen o instrumentación pudieran derivar de aquellos, la Auditoría Superior del Estado realizó el análisis correspondiente, del cual se concluyó que no es procedente la promoción del ejercicio de facultades de comprobación fiscal.

1. **Comunicado ante órganos de control y autoridades que administran padrones de proveedores y contratistas.**

En este punto se señala que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y 23, segundo párrafo del Reglamento de dicha Ley, una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, la Auditoría Superior del Estado pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos en contrataciones públicas, concluyendo que no se identificaron presuntas irregularidades o incumplimientos de proveedores y contratistas que se tengan que hacer de conocimiento a órganos de control y autoridades que administran padrones.

1. **Recurso de Reconsideración.**

En fechas 26 y 27 de abril de 2022, dentro del plazo que prevé la fracción IV del artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el ex-presidente y la presidenta municipales de León, Gto., interpusieron recursos de reconsideración en contra del informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de dicho Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, concretamente en contra de las observaciones establecidas en los numerales 001, correspondiente a enajenación de áreas de donación; 002, relativo a etiquetado y resguardo de bienes; 003, referido a devengo contable de bienes muebles; 004, referente a Licitación Pública Nacional Patrullas; 005, correspondiente a sueldos; 006, relativo a cumplimientos de sentencias; y 007, referido a excepción a la licitación pública de uniformes, mismos que se encuentran relacionados con el Capítulo II, denominado Observaciones y Recomendaciones; Respuesta Emitida por el Sujeto Fiscalizado y Valoración Correspondiente.

En tal sentido, mediante acuerdos de fecha 29 de abril de 2022, emitidos por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se admitieron los recursos de reconsideración, al colmarse los requisitos de procedibilidad previstos por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, instruyendo la integración de los expedientes respectivos y el registro correspondiente. Asimismo, mediante dichos acuerdos se admitieron diversos medios de prueba ofrecidos por la recurrente al tratarse de pruebas novedosas y supervenientes; mientras que otros se desecharon al no tener tal carácter. También a través de dicho acuerdo se suspendió el plazo establecido en el artículo 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato por un término de hasta 15 días hábiles, con la finalidad de realizar la debida valoración de los argumentos en concatenación con la información recabada durante el proceso de fiscalización.

Mediante acuerdo de fecha 29 de abril de 2022 emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato se ordenó la acumulación de los expedientes integrados con motivo de los recursos de reconsideración interpuestos al vincularse de manera directa.

Una vez tramitados los recursos, el Auditor Superior del Estado, el 17 de mayo de 2022 emitió la resolución correspondiente, determinándose respecto a las observaciones establecidas en los numerales 001, 003, 004 y 007, que los agravios hechos valer por los recurrentes resultaron inoperantes e infundados, por los argumentos referidos en el considerando séptimo de la resolución. En razón de lo cual, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones como no solventadas, sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

En cuanto a la observación plasmada en el numeral 002, se resolvió que las probanzas aportadas resultaron suficientes para acreditar que el sujeto fiscalizado atendió la acción correctiva indicada en el informe de resultados. En razón de lo cual, aun cuando se confirmó el sentido de la valoración de la observación como no solventada, se modificó su complemento para quedar sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

Por lo que hace a las observaciones contenidas en los numerales 005 y 006, se concluyó que los agravios formulados por los recurrentes resultaron infundados e inoperantes y la documental aportada insuficiente, de acuerdo a lo expresado en el considerando séptimo de la resolución. En virtud de lo cual, se confirmó el sentido de la valoración de las observaciones como no solventadas, con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

La referida resolución se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de León, Gto., el 18 de mayo de 2022.

1. **Anexos.**

En esta parte, se adjuntan los anexos técnicos derivados de la revisión practicada.

**V. Conclusiones:**

Como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores, el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece que los informes de resultados únicamente podrán ser observados por las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso, cuando no se observen las formalidades esenciales del proceso de fiscalización.

En este sentido, quienes integramos esta Comisión analizamos el informe de resultados materia del presente dictamen, considerando la hipótesis referida en el precepto anteriormente señalado.

Como se desprende del informe de resultados, el Órgano Técnico dio cumplimiento al artículo 37, fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, al haberse notificado las observaciones derivadas de la revisión a la presidenta y al ex-presidente municipales de León, Gto., concediéndoles el plazo que establece la Ley para aclarar, atender o solventar documentalmente las observaciones determinadas por el Órgano Técnico. Al respecto, la tesorera municipal de León, Gto., presentó información y documentación para aclarar y en su caso, solventar las observaciones determinadas.

De igual manera, existe en el informe de resultados la constancia de que este se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de León, Gto., concediéndoles el término señalado en el artículo 37, fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a efecto de que en su caso, hicieran valer el recurso de reconsideración que prevén los artículos del 48 al 55 de dicho ordenamiento legal; presentándose el referido medio de impugnación, el cual fue tramitado por el Órgano Técnico, emitiéndose por parte del Auditor Superior del Estado la resolución correspondiente, misma que consideramos se encuentra suficientemente fundada y motivada y que en su oportunidad se notificó a la presidenta y al ex-presidente municipales de León, Gto. En tal virtud, se considera que fue respetado el derecho de audiencia o defensa por parte del Órgano Técnico.

Por otra parte, del informe de resultados podemos inferir que el Órgano Técnico en el desarrollo del procedimiento de revisión dio cumplimiento a las formalidades esenciales que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece para el proceso de fiscalización, al haberse practicado conforme a las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector público, atendiendo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores y adoptadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

También se dio cumplimiento de manera puntual a las fases que se establecen para los procesos de fiscalización, previstas en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, concluyendo con la elaboración del informe de resultados, cuyo contenido es acorde con lo que establece la fracción III del citado artículo 37.

Cabe señalar que una vez que el informe de resultados sea sancionado por el Pleno del Congreso, el mismo se remitirá a la Auditoría Superior del Estado, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VII, 65 y 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en los términos dispuestos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, en términos de la referida Ley, deberá realizar el seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Finalmente, es de destacar que el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 está presente en el dictamen puesto a su consideración, pues el mismo incide de manera directa en el Objetivo 16 denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respecto a la meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes, al abonar a la transparencia y rendición de cuentas.

En razón de lo anteriormente señalado, concluimos que el informe de resultados de la revisión practicada a la cuenta pública de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, debe sancionarse por el Congreso en los términos presentados por la Auditoría Superior del Estado y proceder a su aprobación, considerando que no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, razón por la cual no podría ser observado por el Pleno del Congreso.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, la aprobación del siguiente:

**A c u e r d o**

**Único.** Con fundamento en el artículo 63 fracciones XIX y XXVIII de la Constitución Política para el Estado, en relación con los artículos 3, fracción III, 35, 37, fracciones III, V, VI y VII, 65 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se declara revisada la cuenta pública municipal de León, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020, con base en el informe de resultados formulado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Se ordena dar vista del informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que inicie las acciones de responsabilidad conducentes por la existencia de presuntas faltas administrativas, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Asimismo, dará seguimiento a las observaciones no solventadas contenidas en el informe de resultados.

Del proceso de fiscalización realizado no se desprendieron recomendaciones.

Remítase el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

De conformidad con el artículo 37, fracción VI de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, remítase el presente acuerdo junto con su dictamen y el informe de resultados a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su notificación.

**Guanajuato, Gto., 20 de junio de 2022**

**La Comisión de Hacienda y Fiscalización**

*Firma electrónica*

**Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta**

**Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia**

**Diputado Miguel Ángel Salim Alle**

**Diputado José Alfonso Borja Pimentel**

**Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández**

*Voto en contra*

* **ASUNTOS GENERALES.**

**- La Presidencia.-** Muchas gracias y en virtud de que el cuórum de asistencia a la presente sesión se ha mantenido hasta el momento, no, procede a instruir a un nuevo pase de lista, dando las gracias a mi diputada Secretaria Yulma, muchas gracias.

- Se levanta la sesión siendo las ( ) y se comunica a las diputadas y a los diputados que se le citara para la siguiente por conducto de la Secretaría General.

- Que tengan un excelente y un excelente fin de semana. [[184]](#footnote-184)

Dip. Luis Ernesto Ayala Torres

**Dip. Ernesto Millán Soberanes**

**Dip. Alejandro Arias Ávila**

**Dip. Gerardo Fernández González**

**Dip. Dessire Angel Rocha**

**Secretario General del**

**H. Congreso del Estado**

**Mtro. Cristhian Javier Cruz Villegas**

**El Director del Diario de los Debates y**

**Archivo General**

**Lic. Alberto Macías Páez**

**Transcripción y Corrección de Estilo**

**C. Marysol Vizguerra Olmos**



**Junta de Gobierno y Coordinación Política**

1. https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden\_archivo/archivo/25940/02\_Acta\_nu\_mero\_35\_sesio\_n\_ordinaria\_del\_23\_junio\_2022.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden\_archivo/archivo/25716/03\_Comunicaciones\_y\_Correspondencias\_23-JUNIO-2022.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. Berlín Valenzuela, Francisco, Derecho Parlamentario, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, Pág, 123. [↑](#footnote-ref-3)
4. Vid, Nomografía o el arte de redactar leyes, Ed. Senado de la República, LX Legislatura, 2009, Mex. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alfonzo Jiménez, Armando y otros, Tópicos de derecho parlamentario, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Mex. 2007, Pág.,2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Berlín Valenzuela, Francisco, Derecho Parlamentario, Fondo de cultura económica, Mex. 2006, Pag, 68. [↑](#footnote-ref-6)
7. Béjar Algasi,Luisa, El Proceso legislativo en México, Ed. Biblioteca arte y Letras, UNAM, 2017, Mex. Pág, 19, [↑](#footnote-ref-7)
8. Carbonell, Miguel, Elementos de Técnica Legislativa, ed. Porrúa, 2010, Mex. Pág, 287. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rodríguez Mondragón, Reyes, en Elementos de Técnica Legislativa, coordinado por Miguel Carbonell y Susana Pedroza, Ed, Porrúa, 2010, Pág., 152, Méx, [↑](#footnote-ref-9)
10. Sugerimos revisar: Herrera, Diego. 2020. *Instrumentos de financiamiento para las micro, pequeñas y*

    *medianas empresas en América Latina y el Caribe durante el COVID-19,* BID. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ferro, Cario, 2011. Eliminando barreras: El financiamiento a las pymes en América Latina, CEPAL. [↑](#footnote-ref-11)
12. Reportes sobre las condiciones de competencia en los mercados financieros:

    h ttps://www .b anx lco.o rg.mx/publicac lones•y•prensa/evolucion- trimes tral-del-financi ami ento-a-lasempr/%

    7B 11DF9F43·BD67-6C3D-66EO-A2C6A8352888%7D.pdf [↑](#footnote-ref-12)
13. Periódico Oficial, 13 de noviembre de 2020, pág. 96. [↑](#footnote-ref-13)
14. En análisis de las tendencias del sector y la brecha de financiamiento, el Banco Mundial indica (Women,

    Business and the Law}: "Women entrepreneurs are also more likely to cite access to finance as the first or

    second barrier to developlng and growing their businesses. In addltlon, relative to men, women tend to have

    less access to finance and other resources, along with issues of rights and voice'', [↑](#footnote-ref-14)
15. Sobre la relevancia de los instrumentos regulatorios en el sector se sugiere revisar. INTERNATIONAL FINAN CE

    CORPORATION 2011, *SME Finance Policy Guide.* [↑](#footnote-ref-15)
16. https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm [↑](#footnote-ref-16)
17. Ídem. [↑](#footnote-ref-17)
18. https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/worstforms/lang--es/index.htm [↑](#footnote-ref-18)
19. En el caso del trabajo infantil la Convención sobre los Derechos del Niño señala que:

    **Artículo 32:**

    **1.** Los Estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación

    económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su

    educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o

    social.

    **2.** Los Estados parte adoptarán medidas legislativas administrativas, sociales y educacionales

    para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las

    disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados parte, en particular,

    a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; b) Dispondrán la reglamentación apropiada

    de los horarios y condiciones de trabajo; c) Estipularán las penalidades u otras sanciones

    apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.

    **Artículo 34:** Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de

    explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán en particular, todas las

    medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir.

    a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

    b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; y

    c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

    Cfr. CDN (un.org) consultado el 17 de junio de 2022 a las 12:19 horas. [↑](#footnote-ref-19)
20. INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO

    CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. Registro digital: 2012592 Instancia: Pleno Décima Época

    Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 7/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la

    Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia. Consultada el

    14 de junio de 2022 a las 11:00 horas. [↑](#footnote-ref-20)
21. Cfr. Fracción IV del artículo 22 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

    Estado de Guanajuato. LDNNYAEG (congresogto.s3.amazonaws.com) consultado a las 11:11

    horas del 17 de junio de 2022. [↑](#footnote-ref-21)
22. [↑](#footnote-ref-22)
23. https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/12/excesivos-horarios-y-labores-peligrosas-mas-de-tres-millones-de-menores-engrosan-el-trabajo-infantil-en-mexico/ [↑](#footnote-ref-23)
24. Artículo 1, *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Naciones Unidas, disponible en:

    https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf [↑](#footnote-ref-24)
25. CNDH. (2018). *Los principales derechos de las personas con discapacidad.* México: CNDH. Pág. 9. [↑](#footnote-ref-25)
26. INEGI. (2020). *Censo de Población y Vivienda.* Datos disponibles en:

    https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/#Informacion\_general [↑](#footnote-ref-26)
27. Artículo 4, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Negritas propias. [↑](#footnote-ref-27)
28. Barba, Carlos. (2021). *El régimen de bienestar mexicano. Inercias, transformaciones y desafíos.* CEPAL: Santiago

    de Chile. [↑](#footnote-ref-28)
29. Artículo 11, fracción III, Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato. [↑](#footnote-ref-29)
30. Artículo 11, fracción IV, Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato [↑](#footnote-ref-30)
31. https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden\_archivo/archivo/25724/10\_\_ELD\_279\_LXV-I\_Iniciativa\_Dip\_Hades\_B\_Aguilar\_-art\_35\_Ley\_de\_Bu\_squeda\_de\_Personas\_\_23\_JUN\_22\_.pdf [↑](#footnote-ref-31)
32. Banco Mundial. Consultable en https:llwww.bancomundlal.orqlesltopiclurbsndevelopmentloverview [↑](#footnote-ref-32)
33. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Consultable en <https://onuhabitath.org.mx/index.php/tendancias-del-desarrollo-urbano-en-mexico> [↑](#footnote-ref-33)
34. ldem 2. [↑](#footnote-ref-34)
35. Congreso del Estado de Guanajuato. Compilación legislativa. Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, artículo 10. Consultable en https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/reformalpdf/3050/20181010.pdf. [↑](#footnote-ref-35)
36. Congreso del Estado de Guanajuato. Compilación legislativa. Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, artículo quinto transitorio. Consultable en <https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3050/20181010.pdf>. [↑](#footnote-ref-36)
37. Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, artículo 1. [↑](#footnote-ref-37)
38. Gobierno del Estado de Guanajuato. 4to Informe de Gobierno. Pág. 66. Consultable en <https://4toinformeds.guanajuato.gob.mx> [↑](#footnote-ref-38)
39. https **:ijwww** .20ml nutos .com .mx/not icia /2 6903 7 /0/cron istas-co n ta ran-histo ria•de-estados-del·no restemexicaJlQ

    L [↑](#footnote-ref-39)
40. http://www.gua na i ua tocapíta l .go b. mx/comu n lcado/con me moraran-sexto-a n ive rsa rlo-luctuoso-de-donisa

    u ro-riond,g [↑](#footnote-ref-40)
41. https://www.congresogto.gob.mx/ [↑](#footnote-ref-41)
42. https ://boletines. gua na juato.gob. mx/2021/06/25/ con me moran-el-prime r-dla-es ta tal-de 1-cro n lsta-engua

    naju a to/ [↑](#footnote-ref-42)
43. Artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato [↑](#footnote-ref-43)
44. Artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. [↑](#footnote-ref-44)
45. Artículo 8, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. [↑](#footnote-ref-45)
46. <https://www.youtube.com/watch?v=L0hkFQjA-eg> [↑](#footnote-ref-46)
47. Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCFI-1994, instrumentos de medición-instrumentos para pesar de funcionamiento no automático-requisitos técnicos y metrológicos [↑](#footnote-ref-47)
48. LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA Y LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MÉXICO: FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES. Consultable en: https://www.ceenl.mx/archivos/20210908/MecanismosdeParticipacion. [↑](#footnote-ref-48)
49. Téllez, 2015, p. 14; Olvera, 2009, p. 8. [↑](#footnote-ref-49)
50. Dahl, 1993; Schnell, 2020. Consultable en: https://revista.cgu.gov.br/Revista\_da\_CGU/article/view/384 [↑](#footnote-ref-50)
51. Sobre este problema ver por favor el esclarecedor artículo de Lorusso, Fabrizio (2021). Una discusión sobre el concepto de fosa clandestina y el contexto mexicano: el caso de Guanajuato. *Revista Historiografía*. Núm. 56 (2021): La fisura y la ausencia. Ibero Cd. De México – Conacyt. [↑](#footnote-ref-51)
52. Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020). https://fosas-guanajuato.datacivica.org/ [↑](#footnote-ref-52)
53. Similar respuesta se había dado el 11 de febrero de 2019, en respuesta a la solicitud 35477. [↑](#footnote-ref-53)
54. Análisis completo en la organización Poplab. [↑](#footnote-ref-54)
55. http://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/PersonasDesaparecidas/Hallazgos/index.aspx [↑](#footnote-ref-55)
56. <https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/PersonasDesaparecidas/Hallazgos/index.aspx>. Consultable el 15 de junio de 2022. [↑](#footnote-ref-56)
57. <https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Transparencia/respuestas/respuestas.aspx>. Consultable el 15 de junio de 2022. [↑](#footnote-ref-57)
58. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2004). *El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*. Informe del Secretario General. Recuperado de: *https://undocs.org/es/S/2004/616* (16/11/2021) [↑](#footnote-ref-58)
59. Montesquieu, Del espíritu de las leyes, 9a. ed. México, Porrúa, 1992, libro XI, capítulo VI, p. 104. [↑](#footnote-ref-59)
60. Garita et al. Proceso legislativo y reforma constitucional. Senado de la República. p. 24 [↑](#footnote-ref-60)
61. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios [Infoem], El ABC la Rendición de Cuentas, p. 7.

    Consultable en: https://www.infoem.org.mx/doc/publicaciones/ABC\_rendicionCuentas.pdf (23/11/2021) [↑](#footnote-ref-61)
62. ONU. Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Misión a México, párr.16. [↑](#footnote-ref-62)
63. Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia). Informe sobre las normas europeas relativas a la independencia del sistema judicial: Parte II- el Ministerio Público. Adoptado por la Comisión de Venecia en su 85a. reunión plenaria (Venecia, 17-18 de diciembre de 2010), Estrasburgo, 3 de enero de 2011, párr. 73. [↑](#footnote-ref-63)
64. CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, 5 diciembre 2013, párr. 25. [↑](#footnote-ref-64)
65. ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, A/ HRC/14/26, 9 de abril de 2010, párr. 17. [↑](#footnote-ref-65)
66. Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 30 de junio de 2009, serie C, núm. 197, párr. 67. [↑](#footnote-ref-66)
67. ONU. Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/GC/32, párr. 19. [↑](#footnote-ref-67)
68. López Olvera, M y otros. Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República. Poderes y Órganos Constitucionales Tradicionales Autónomos. UNAM. México. Páginas 79 a 99. [↑](#footnote-ref-68)
69. ONU, Directrices sobre la Función de los Fiscales, Aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Directriz 10. [↑](#footnote-ref-69)
70. https://cdh.defensoria.org.ar/normativa/declaracion-conjunta-sobre-libertad-de-expresion [↑](#footnote-ref-70)
71. <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/2014_04_22_ia_2013_esp_final_web.pdf>. *Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 21 de junio de 2013. Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión.* [↑](#footnote-ref-71)
72. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion\_ADH.pdf [↑](#footnote-ref-72)
73. <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-> 52.html#:~:text=Los%20Estados%20partes%20en%20el,disponibles%20y%20t [↑](#footnote-ref-73)
74. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos\_basicos/declaraciones.asp [↑](#footnote-ref-74)
75. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf [↑](#footnote-ref-75)
76. https://www.dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013#gsc.tab=0 [↑](#footnote-ref-76)
77. Se refiere a una red de tecnología de información y comunicaciones sustentada en el establecimiento de lo más avanzado en hardware, software, sistemas, redes, conectividad a internet, bases de datos, infraestructura para capacitación en línea (e-Learning) y recursos humanos especializados. http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic [↑](#footnote-ref-77)
78. Mary M. Brown & Brudney, 2004; Dawes & Prefontaine, 2003; Gant, Gant, & Johnson, 2002; OECD, 2003; West, 2004a. [↑](#footnote-ref-78)
79. Definición de E-Gobierno. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EXTEGOVERNMENT/0,,menuPK:702592~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:702586,00.html [7 de febrero de 2008] [↑](#footnote-ref-79)
80. Banco Mundial, 2008; Gil-García y Helbig, 2006. [↑](#footnote-ref-80)
81. Beltrán y Asociados (BCG) (2008a), Percepción sobre el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. E-Gobierno. [↑](#footnote-ref-81)
82. INEGI (2014), La Medición del Gobierno Electrónico. Caso Práctico de México, Presentación en el Tercer Taller Regional sobre la Medición de la Sociedad de la Información, Panamá, 2006. <http://www.itu.int/ITUD/

    ict/conferences/panama06/material/23\_Mexico\_Presentation\_Government\_s.pdf> [9 de diciembre de 2007] [↑](#footnote-ref-82)
83. Dawes & Pardo, 2002; Gant, 2003; Garson, 2004; Kraemer, K. L., & King, 2003; Pardo and Jiang, 2007. [↑](#footnote-ref-83)
84. Luna-Reyes, Gil-García & Cruz, 2007; Luna-Reyes, Gil-García & Estrada-Marroquín, 2008. [↑](#footnote-ref-84)
85. El acceso a internet como derecho humano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 19-20. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37483.pdf. [↑](#footnote-ref-85)
86. Carbonell, Miguel y Carbonell, José, op.cit., p. 20. [↑](#footnote-ref-86)
87. Velázquez Ríos, Korina. (México) Construcción de un gobierno electrónico en México. Camino hacia la sociedad del conocimiento., p. 17. Consultable en: *http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/GOB\_ELEC\_MEXICO.pdf.* [↑](#footnote-ref-87)
88. Consultable en: https://www.un.org/es/conferences/environment/newyork2015. [↑](#footnote-ref-88)
89. Consultable en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSegPub/encig2019\_05.pdf* (30 de

    mayo de 2022). [↑](#footnote-ref-89)
90. Consultable en: http://programagto2018-2024.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/REVISTA\_PG2021.pdf [↑](#footnote-ref-90)
91. Consultable en: http://plangto2040.iplaneg.net/ [↑](#footnote-ref-91)
92. Expedida mediante el Decreto Legislativo número 58, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 261, Segundo Parte, del 31 de diciembre de 2021. [↑](#footnote-ref-92)
93. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato Número 134, Segunda y Tercera Parte, de fecha 07 de julio de 2021. [↑](#footnote-ref-93)
94. Municipio urbano: municipio con una población entre 50 mil y 300 mil habitantes. (Panorama de inclusión financiera 2020 SHCP-CNBV) [↑](#footnote-ref-94)
95. Disponible en https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022#Overview [↑](#footnote-ref-95)
96. Disponible en https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas\_Publicas/docs/paquete\_economico/precgpe/precgpe\_2023.pdf [↑](#footnote-ref-96)
97. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sistema de Alertas. Sitio Web: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA\_FINANCIERA/Municipios\_2020 [↑](#footnote-ref-97)
98. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo de Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus entes públicos. 17 de enero de 2020, de Secretaría de Hacienda y Crédito Público Sitio web: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA\_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf [↑](#footnote-ref-98)
99. Calvento, M. (2006). “Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina”. En Convergencia, núm. 41. México: Universidad Autónoma del Estado de México. [↑](#footnote-ref-99)
100. Artículo 10, fracción II, Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. [↑](#footnote-ref-100)
101. CONEVAL. (2018). Monitoreo y Estados, Pobreza 2018 en Guanajuato. CONEVAL: CDMX. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guanajuato/Paginas/Pobreza\_2018.aspx [↑](#footnote-ref-101)
102. Artículo 11, Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. [↑](#footnote-ref-102)
103. CONEVAL. (2020). Informe de pobreza y evaluación 2020: Guanajuato. CONEVAL: CDMX. Disponible en: https://www.coneval.org.mxcoordinacionentidadesDocumentsInformes\_de\_pobreza\_y\_evaluacion\_2020\_DocumentosInforme\_Guanajuato\_2020.pdf.xlsx [↑](#footnote-ref-103)
104. CONEVAL. (2020). Informe de pobreza y evaluación 2020: Guanajuato. CONEVAL: CDMX. Disponible en: https://www.coneval.org.mxcoordinacionentidadesDocumentsInformes\_de\_pobreza\_y\_evaluacion\_2020\_DocumentosInforme\_Guanajuato\_2020.pdf.xlsx [↑](#footnote-ref-104)
105. Información laboral del estado de Guanajuato, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Marzo 2021. [↑](#footnote-ref-105)
106. Lecuona Zepeda, G., Jiménez Rodríguez, P. (2020). Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020. Impunidad Cero. [↑](#footnote-ref-106)
107. Información obtenida del presupuesto ejercido, datos obtenidos de la Cuenta Pública estatal. [↑](#footnote-ref-107)
108. Ídem. [↑](#footnote-ref-108)
109. Artículo 1, fracción IX; artículo 9, fracción V; y artículo 10, fracción IV, Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato. [↑](#footnote-ref-109)
110. Fernández Arroyo, N. & Schejtman, L. (2012). Planificación de políticas, programas y proyectos sociales. Buenos Aires: CIPPEC y UNICEF. [↑](#footnote-ref-110)
111. En una búsqueda de información inicial, se cuantificó la existencia de 106 programas y proyectos de carácter social en 2019; mientras que, en 2020, la cifra del inventario fue aproximadamente de 114 proyectos, de los cuales se reconoce que 50 siguen en operación en 2021 (los programas presupuestarios se encuentran listados en el **Anexo 1**, ello a partir de la intervención de al menos 16 dependencias, en su mayoría, en coordinación con los 46 municipios del Estado. [↑](#footnote-ref-111)
112. El detalle de las diversas estrategias de control se encuentra listado en el **Anexo 2** de la presente. [↑](#footnote-ref-112)
113. Total de habitantes que resulta de sumar la población de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, en la tabla que puede consultarse en la página de internet: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gto/territorio/div\_municipal.aspx?tema=me&e=11 [↑](#footnote-ref-113)
114. La fragmentación ocurre cuando más de una institución gubernamental -o más de una unidad dentro de una institución gubernamental- está involucrada y actuando en la misma área y hay oportunidades para mejorar la prestación de servicios. [↑](#footnote-ref-114)
115. La superposición ocurre cuando varias instituciones gubernamentales o programas poseen objetivos semejantes, actúan en actividades o estrategias semejantes para alcanzar sus objetivos, o poseen el mismo público objeto. [↑](#footnote-ref-115)
116. La duplicación ocurre cuando dos o más instituciones o programas gubernamentales están realizando las mismas actividades o prestando los mismos servicios a los mismos beneficiarios. [↑](#footnote-ref-116)
117. Reglas de Operación del Programa Q0300 DESAFÍO JOVEN para el ejercicio fiscal 2020. Periódico Oficial del 31 de diciembre de 2019. Consultado en:

     https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/programas\_sociales/reglas\_operacion/2020\_INJUG\_Programa\_desafio\_joven\_reglas\_operacion..pdf [↑](#footnote-ref-117)
118. Reglas de Operación del Programa Q0302 Sé Joven, Sé Tú para el ejercicio fiscal 2020, Periódico Oficial del 31 de diciembre de 2019. Consultado en:

     https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/programas\_sociales/reglas\_operacion/2020\_INJUG\_Programa\_se\_joven\_se\_tu\_reglas\_operaci%C3%B3n..pdf [↑](#footnote-ref-118)
119. Reglas de Operación para el Programa Q0401 JUVENTU DE GRANDEZA para el ejercicio fiscal 2020. Periódico Oficial del 31 de diciembre de 2019. Consultado en: PO\_261\_17va\_Parte\_\_20191230\_1326\_1.pdf (guanajuato.gob.mx) [↑](#footnote-ref-119)
120. Caso de corrupción. Posible desvío de recursos en la administración de Héctor López Santillana – Políticamente Incorrecto (ojo-3.com) [↑](#footnote-ref-120)
121. Crítica Botello Santibáñez corrupción por descuento de predial en administración de Santillana - Zona Franca [↑](#footnote-ref-121)
122. La Jornada - Investigan condonación de 2 mdp en predial de Club Campestre de León [↑](#footnote-ref-122)
123. $19,018,350,076.00 devengados en los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021. Datos obtenidos de la Cuenta Pública Municipal. [↑](#footnote-ref-123)
124. AM. (2022). “Diego Sinhue confía… pero pide investigar denuncia durante administración de Héctor López”. Nota del 11 de febrero, disponible en: https://www.am.com.mx/guanajuato/Diego-Sinhue-confia...-pero-pide-investigar-denuncia-durante-administracion-de-Hector-Lopez-20220211-0032.html [↑](#footnote-ref-124)
125. Sitio web del Gobierno Municipal de León. Disponible en: https://www.leon.gob.mx/dependencias.php. [↑](#footnote-ref-125)
126. https://www.asf.gob.mx/Section/58\_Informes\_de\_auditoria [↑](#footnote-ref-126)
127. https://www.asf.gob.mx/Section/58\_Informes\_de\_auditoria [↑](#footnote-ref-127)
128. Datos obtenidos de la revisión de Cuenta Pública 2018 y 2019, Auditoría Superior del Estado de Guanajuato: https://www.aseg.gob.mx/documentacion/4597\_I.pdf y <https://www.aseg.gob.mx/documentacion/4530_I.pdf>

     [↑](#footnote-ref-128)
129. https://www.asf.gob.mx/Section/58\_Informes\_de\_auditoria [↑](#footnote-ref-129)
130. Decreto gubernativo número 21, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato núm. 75, 15 de abril del 2019. [↑](#footnote-ref-130)
131. $539,916,026.00 (quinientos treinta y nueve millones novecientos dieciséis mil veintiséis pesos). [↑](#footnote-ref-131)
132. $443,163,038.00 (cuatrocientos cuarenta y tres millones ciento sesenta y tres mil treinta y ocho pesos). [↑](#footnote-ref-132)
133. $607,282,691.00 (seiscientos siete millones doscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y un pesos). [↑](#footnote-ref-133)
134. $162,851,617.00 (ciento sesenta y dos millones ochocientos cincuenta y un mil seiscientos diecisiete pesos). [↑](#footnote-ref-134)
135. $606,014,655.00 (seiscientos seis millones catorce mil seiscientos cincuenta y cinco pesos). [↑](#footnote-ref-135)
136. $444,431,074.00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y un mil setenta y cuatro pesos). [↑](#footnote-ref-136)
137. $615,830,635.00 (seiscientos quince millones ochocientos treinta mil seiscientos treinta y cinco pesos). [↑](#footnote-ref-137)
138. $1,060,261,709.00 [↑](#footnote-ref-138)
139. Amparo directo núm. 5567/74, 15 de junio de 1979, Suprema Corte de Justicia de la Nación. [↑](#footnote-ref-139)
140. Sandoval, I. (2007). Rendición de Cuentas y Fideicomisos: el reto de la opacidad financiera. Auditoría Superior de la Federación. [↑](#footnote-ref-140)
141. Artículo 8, Reglas de Operación proporcionadas mediante oficio con número de folio 111100500008722 de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, del día 21 de enero de 2022. [↑](#footnote-ref-141)
142. Respuesta proporcionada mediante oficio con folio 111100500008622 de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo [↑](#footnote-ref-142)
143. Respuesta proporcionada mediante oficio con número de folio 111100500008722 de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, del día 21 de enero de 2022. [↑](#footnote-ref-143)
144. Respuesta proporcionada mediante oficio con número de folio 111100500008722 de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, del día 21 de enero de 2022. [↑](#footnote-ref-144)
145. Artículo 4 del DECRETO Gubernativo número 21, mediante el cual se autoriza la constitución del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (FIDESSEG), publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de 15 de abril de 2019 (Tercera parte). [↑](#footnote-ref-145)
146. Base SEGUNDA de la CONVOCATORIA que emite el Comité Técnico del “Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el estado de Guanajuato (FIDESSEG)”, a las asociaciones civiles legalmente constituidas, fundadas con modelo de responsabilidad social compartida, así como dependencias y entidades de la administración pública estatal a elaborar proyectos para acceder a los apoyos del “FIDESSEG”, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de 27 de enero de 2020 (Segunda parte). [↑](#footnote-ref-146)
147. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa E045, para el ejercicio fiscal de 2021. [↑](#footnote-ref-147)
148. Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres. [↑](#footnote-ref-148)
149. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI. [↑](#footnote-ref-149)
150. Concepto de Perspectiva de Género establecido en el artículo 5, fracción X de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato. [↑](#footnote-ref-150)
151. https://www.asf.gob.mx/Section/58\_Informes\_de\_auditoria [↑](#footnote-ref-151)
152. Recomendación 2020-6-90T9N-19-0446-01-002 emitida por la Auditoría Superior de la Federación [↑](#footnote-ref-152)
153. Punto de acuerdo de obvia resolución formulada por el Grupo Parlamentario de MORENA a efecto de exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y al Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Alvar Cabeza de Vaca, para que lleven a cabo las labores de presupuestación, reclutamiento, selección, evaluación, formación inicial, equipamiento e infraestructura necesarios para incrementar el estado de la fuerza a los estándares mínimos de 1.8 elementos por cada mil habitantes y, en su caso, aprobación de la misma. Presentado en noviembre 2021. Clave 652032. [↑](#footnote-ref-153)
154. Información proporcionada mediante comparecencia privada del Secretario de Seguridad Pública Alvar Cabeza de Vaca, 5 de noviembre de 2021. [↑](#footnote-ref-154)
155. Cuenta Pública 2020. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación administrativa [↑](#footnote-ref-155)
156. Cuenta Pública 2021. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación administrativa. [↑](#footnote-ref-156)
157. Auditoría Superior de la Federación. (2021). Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2021. [↑](#footnote-ref-157)
158. Artículo 74, fracción IV. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [↑](#footnote-ref-158)
159. Artículo 116, fracción II, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [↑](#footnote-ref-159)
160. Artículo 63, fracción XIII, Constitución Política para el Estado de Guanajuato. [↑](#footnote-ref-160)
161. $1,104,861.62 por día. Datos disponibles en el reporte de Clasificación por Objeto del Gasto de cada ejercicio fiscal. [↑](#footnote-ref-161)
162. DE LA GARZA, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, Porrúa, México, 1994, p. 137. [↑](#footnote-ref-162)
163. Op. Cit. CORONA, Juan F. y DÍAZ, Amelia, pp. 79 y 80. [↑](#footnote-ref-163)
164. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 02 de noviembre de 2021, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH\_200521.pdf [↑](#footnote-ref-164)
165. Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022. Sitio Web: https://www.congresogto.gob.mx/leyes/ley-del-presupuesto-general-de-egresos-del-estado-de-guanajuato-para-el-ejercicio-fiscal-de-2022 [↑](#footnote-ref-165)
166. Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Gastos de comunicación social y publicidad. Sito Web: <https://iacip-gto.org.mx/wn/gastos-de-comunicacion-social-y-publicidad/> [↑](#footnote-ref-166)
167. Artículo 2. Son sujetos de esta ley, las siguientes autoridades:

     l. El Poder Ejecutivo, a través de las dependencias;

     II. El Poder Judicial;

     III. El Poder Legislativo;

     IV. Los organismos autónomos; y

     V. Las entidades paraestatales. [↑](#footnote-ref-167)
168. Tesis de rubro: *«GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA»*. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, septiembre de 2009, página 2712. [↑](#footnote-ref-168)
169. Tesis de rubro: *«RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ESTADO. DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DERIVA UNA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL LEGISLADOR SECUNDARIO QUE ABARCA TODO EL ÁMBITO MATERIAL DE AQUÉL».* Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, página 477. [↑](#footnote-ref-169)
170. Tesis de rubro: *«RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ESTADO. LA FACULTAD REGLAMENTARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PRINCIPIO DE RESERVA DE CÓDIGO O DE ORDENAMIENTOS, POR LO QUE PUEDEN COEXISTIR DIVERSAS LEYES REGLAMENTARIAS».* Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, página 479. [↑](#footnote-ref-170)
171. Jurisprudencia de rubro: «RECURSOS PÚBLICOS. LA LEGISLACIÓN QUE SE EXPIDA EN TORNO A SU EJERCICIO Y APLICACIÓN, DEBE PERMITIR QUE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ QUE ESTATUYE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDAN SER EFECTIVAMENTE REALIZADOS». Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre de 2010, página 1211. [↑](#footnote-ref-171)
172. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Código Fiscal de la Federación. 24 de mayo de 2022, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CFF.pdf [↑](#footnote-ref-172)
173. H. Congreso del Estado de Guanajuato. (2019). Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. 24 de mayo de 2022, de H. Congreso del Estado de Guanajuato Sitio web: https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/2756/CODIGO\_FISCAL\_PARA\_EL\_ESTADO\_DE\_GUANAJUATO\_ORIG\_30\_12\_2019.pdf [↑](#footnote-ref-173)
174. Cámara de Diputados del Ha, Congreso de la Unión. (2021). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 23 de mayo de 2022, de Cámara de Diputados del Ha, Congreso de la Unión Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf [↑](#footnote-ref-174)
175. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 23 de mayo de 2022, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14\_200521.pdf [↑](#footnote-ref-175)
176. H. Congreso del Estado de Guanajuato. (2021). Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 24 de mayo de 2022, de H. Congreso del Estado de Guanajuato Sitio web: https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3341/Ley\_Organica\_Municipal\_del\_Estado\_de\_Guanajuato\_DTO\_LEG\_PO\_22Dic2021.pdf [↑](#footnote-ref-176)
177. Acuerdo del C. Gobernador del Estado por el cual se aprueba la actualización del Programa de Gobierno2018-2024, y su anexo contenido en el documento denominado «Actualización del Programa de Gobierno 2018-2024», publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 134, segunda y tercera partes, del 7 de julio de 2021. [↑](#footnote-ref-177)
178. Acuerdo del C. Gobernador del Estado por el cual se aprueba la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024, y su anexo contenido en el documento denominado «Actualización del Programa de Gobierno 2018- 2024». Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 134, Segunda y Tercera Partes, del 07 de julio de 2021. [↑](#footnote-ref-178)
179. *Diccionario de Derecho.* Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara. Editorial Porrúa, México, 2003. Pág. 266. [↑](#footnote-ref-179)
180. *Compendio de Derecho Civil. Contratos.* Rafael Rojina Villegas. Editorial Porrúa, México, 2014. Pág. 12. [↑](#footnote-ref-180)
181. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado, el Código Civil para el Estado de Guanajuato es de aplicación supletoria a la primera, en todo lo no previsto por esta, en lo relativo a la enajenación de los bienes inmuebles del dominio privado del Estado. [↑](#footnote-ref-181)
182. «**Sexta. Fuerza Mayor.**

     Ninguna de las partes estará obligada a cumplir con sus obligaciones bajo el presente Convenio en tanto exista una causa de fuerza mayor que impida dicho cumplimiento. En este supuesto, únicamente las obligaciones afectadas por dicha causa de fuerza mayor quedarán en suspenso hasta que dicha causa de fuerza mayor desaparezca. Las partes convienen en buscar de buena fe la solución de las causas de fuerza mayor que en su caso se presenten. De manera enunciativa, pero no limitativa, se entenderá como una causa de fuerza mayor el incumplimiento por parte del Gobierno Federal en la entrega oportuna de los recursos correspondientes a los Incentivos Federales. En este supuesto, el Gobierno (del Estado) no estará́ obligado a continuar con la ejecución de los Incentivos Federales y la Empresa no estará́ obligada a continuar con la ejecución del Proyecto en tanto el Gobierno Federal no reanude la entrega de los recursos correspondientes.» [↑](#footnote-ref-182)
183. «**Novena. Suspensión o Cancelación del Proyecto.**

     Sin perjuicio de los dispuesto en las cláusulas quinta y sexta anteriores, cualquier acción u omisión directa o indirecta a cargo de la Empresa, el Gobierno (del Estado) o el Gobierno Federal, que tenga un impacto negativo en las operaciones de la Empresa en México o en la instrumentación del Proyecto, otorgará el derecho a cancelar o suspender el Proyecto sin responsabilidad para la parte que se encuentre en cumplimiento.

     (…)» [↑](#footnote-ref-183)
184. (Duración de la sesión) minutos. [↑](#footnote-ref-184)